ESTUDIOS PÚBLICOS

Nº 97 *VERANO* *2005*

Nicolás Eyzaguirre, Mario Marcel, Jorge Rodríguez C. y Marcelo Tokman
Hacia la economía del conocimiento: El camino para crecer con equidad en el largo plazo

Harald Beyer
Productividad, desigualdad y capital humano: Los complejos desafíos de Chile

Raúl O'Ryan, Manuel Díaz y Andrés Ulloa
Algunas aplicaciones de economía ambiental en Chile

Loreto Lira
Cambios en la industria de los supermercados

Alejandro San Francisco
La convocatoria a la intervención militar en Chile en la guerra civil de 1891

Jorge Peña Vial
Escisión de la ética en privada y pública

Thomas Nagel
Rawls y el liberalismo

Roger Scruton
Hegel como pensador conservador

Enrico Mario Santí
Retrato de Octavio Paz

Arturo Fontaine Talavera
Gallagherías

Documentos

Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y respuestas institucionales

Impacto de las ideologías en el respeto de los derechos humanos en el siglo XX

CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS

HACIA LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: EL CAMINO PARA CRECER CON EQUIDAD EN EL LARGO PLAZO*

Nicolás Eyzaguirre, Mario Marcel, Jorge Rodríguez y Marcelo Tokman

Chile comenzó a experimentar un crecimiento alto y sostenido desde que, abandonando la estrategia de desarrollo hacia adentro, sentó las bases de una estrategia de desarrollo compatible con sus ventajas comparativas y ordenó sus políticas macroeconómicas —lo que ocurrió alrededor de 1985. Cuando lo anterior se reforzó y complementó —a partir de 1990— con un Estado no ingenuo ni prescindente, corrector de fallas de mercado, proveedor de bienes e infraestructura pública y protección social, también se comenzaron a evidenciar avances en términos de equidad, principalmente en lo referido a reducción de la pobreza. Sin embargo, de la observación de la evidencia internacional se desprende que, a pesar de los éxitos de los últimos veinte años, existen limitantes en el modelo de desarrollo vigente en Chile que deben ser enfrentadas de manera proactiva. En

NICOLÁS EYZAGUIRRE. Ministro de Hacienda.

MARIO MARCEL. Director de Presupuesto, Ministerio de Hacienda.

JORGE RODRÍGUEZ C. Asesor del Ministerio de Hacienda.

MARCELO TOKMAN. Coordinador de Política Económica, Ministerio de Hacienda.

* Este documento está basado en el Capítulo IV de la Exposición Sobre el Estado de la Hacienda Pública, presentada ante el Congreso Nacional en octubre de 2004.

Los autores agradecen la colaboración de José Miguel Benavente, Stephen Blackburn, Rodrigo Morales y Carla Tokman.

efecto, la señal de alerta aparece al verificar que nuestro país es claramente más dependiente de sus recursos naturales y presenta una distribución del ingreso mucho menos equitativa que los países en el próximo nivel de desarrollo.

En este contexto, el presente estudio postula el imperativo de transitar gradualmente desde el modelo primario exportador hacia la economía del conocimiento como requisito indispensable para continuar creciendo y lograr la equidad en el largo plazo. En contraste con la concepción tradicional de agregar valor a las exportaciones en un proceso de encadenamiento hacia adelante, la estrategia aquí delineada acepta la centralidad de los "commodities" donde el país tiene ventajas comparativas en el menú exportador, pero postula su mayor articulación con el resto de la economía en encadenamientos laterales y hacia atrás donde el capital humano y el avance tecnológico jueguen un rol cada vez más preponderante. En particular, plantea que esta estrategia se construye sobre tres pilares: (i) un régimen institucional y de incentivos económicos claro, coherente y estable; (ii) una fuerte capacidad de innovación, orientada a desarrollar encadenamientos productivos en torno a ventajas comparativas; y (iii) un capital humano de calidad. Se diagnostica que Chile está en buen pie en el primero de estos pilares, pero presenta importantes rezagos en los dos últimos, no obstante los importantes avances logrados en materia educacional desde 1990. Se argumenta que en ambos pilares —capacidad de innovación y capital humano— existen espacios para un mayor y mejor rol del Estado, y se plantean lineamientos de políticas públicas para cerrar las brechas que nos separan de aquellos países que han logrado desarrollarse en base a la economía del conocimiento en torno a los recursos naturales.

1. La estrategia de crecimiento chilena y su sustentabilidad

1.1. Reseña histórica[1]

Luego de la Gran Depresión de los años 30, y hasta estos días, Chile ha ensayado dos grandes modelos de desarrollo, opuestos entre sí. El primer modelo, la "estrategia de desarrollo hacia adentro" (1934-1973, aproximadamente), se frustró al no lograr consolidar una industrialización basada en la sustitución de importaciones para abastecer el mercado inter-

[1] Para mayores antecedentes históricos, véase Ffrench-Davis (2003), Meller (1998) y Sunkel (1991).

www.cepchile.cl

no y, eventualmente, el latinoamericano. Si bien en una primera etapa este proceso fue motivado por señales de mercado —la Gran Depresión implicó una escasez de productos importados que incentivó su producción interna—, en una segunda y prolongada etapa fue el Estado el que jugó un papel activo y deliberado en el intento de alcanzar una mayor independencia económica del resto del mundo extra-regional. Esta estrategia, por ser inconsistente con las ventajas comparativas naturales del país, resultó en cuantiosas ineficiencias. Dichas ineficiencias se hicieron evidentes en la protección de "industrias nacientes" —principalmente mediante trabas arancelarias y créditos subsidiados— que raramente llegaron a la madurez[2]. Adicionalmente, el énfasis en la sustitución de importaciones generó el estancamiento de la agricultura y desincentivó el desarrollo de las exportaciones. Estos problemas se vieron acentuados por la estrechez del mercado interno, la integración de los mercados latinoamericanos que no se materializó ni en la profundidad ni a la velocidad esperada, y la persistente dependencia de los bienes de capital importados necesarios para sustentar la industrialización. Todo esto a la larga generó recurrentes crisis de balanza de pagos[3].

Si bien esta estrategia generó un cierto crecimiento, lo hizo a tasas insuficientes (véase Gráfico N° 1) que no permitieron cerrar las brechas con los países más desarrollados. Así, en el período 1934-1973 el PIB por habitante creció a un promedio anual de sólo 2,1%[4].

El segundo modelo, la "estrategia de crecimiento hacia afuera" (1974-), puede separarse en tres etapas. Durante la primera (hasta 1985, aproximadamente) se establecieron las bases para explotar las ventajas comparativas del país, con una activa y casi exclusiva participación del sector privado en la producción de bienes y servicios y, en particular, en la exportación de recursos naturales. Ello se logró a través de la eliminación de los controles de precios y subsidios, la liberalización unilateral del sector externo y la liberalización del mercado financiero. En todos estos ámbi-

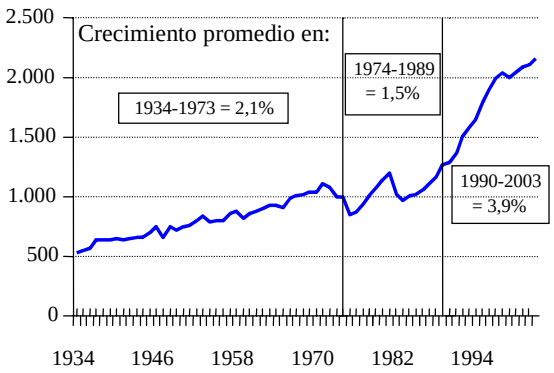
[2] El concepto de "industria naciente" asumía que las empresas por el solo hecho de envejecer y aumentar de tamaño se harían más productivas, lo que no tiene fundamento empírico (Bruton, 1998).

[3] Aun si la integración regional hubiere procedido con mayor celeridad, esta estrategia tenía escasa probabilidad de éxito, debido a que el país no tenía, ni tiene, ventajas comparativas en la elaboración de manufacturas. Por una parte, estamos alejados de los centros más dinámicos de consumo de bienes manufacturados y, por otra, no tenemos la abundancia de mano de obra semi-calificada requerida para aprovechar economías de escala en su producción.

[4] En igual período, el PIB por habitante de Japón creció a un promedio anual de 4,3%, el de EE.UU. a 3,2%, y el de Francia a 2,9%. Para mayores detalles, véase Braun *et al*. (2000).

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 1: EVOLUCIÓN DEL PIB POR HABITANTE, CHILE 1934-2003
(Pesos de 1995)



Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de Braun *et al*. (2000), Banco Central y Boletín Demográfico INE-Celade.

tos, así como en el impulso privatizador de la producción, Chile fue un reformador pionero.

Sin embargo, esta etapa no generó un crecimiento alto y sostenido debido, fundamentalmente, a un muy inadecuado manejo macroeconómico y a una regulación insuficiente del mercado financiero. Estas deficiencias produjeron la exacerbación de las crisis internacionales de 1975 y 1982, con caídas en el producto doméstico de más de 13% y 15%, respectivamente. Asimismo, durante esta etapa se verificó un marcado deterioro de las condiciones sociales y de la infraestructura física y social, debido a que el Estado fue minimizado a tal nivel que simplemente se ignoraron las fallas de mercado, deficiencias que son particularmente críticas en las economías en desarrollo. Así, los monopolios de servicios públicos privatizados no fueron debidamente regulados y los bienes de infraestructura pública y social no fueron adecuadamente provistos. Además, la población más carente no contó con una red de protección social suficiente, puesto que se esperaba que ésta se beneficiase automáticamente del crecimiento económico, lo que ciertamente no ocurrió.

Una vez superada la crisis de 1982 se vivió una segunda etapa del modelo aperturista (1985-1989) en la que se corrigieron las deficiencias más evidentes del manejo macroeconómico y de regulación del sistema financiero. Ello permitió reducir la volatilidad macroeconómica y sentar las bases para volver a crecer. En efecto, en el período 1985-1990 el PIB por

www.cepchile.cl

habitante creció a una tasa promedio anual de 4,6% —mientras que entre 1974 y 1984 el crecimiento anual fue de sólo 0,1%— expansión que se vio favorecida por el mejor ambiente externo y la capacidad ociosa heredada de la crisis. No obstante este resultado, hasta 1990 persistió un Estado ingenuo —o más bien prescindente— en términos de regulación de monopolios y pasivo en la provisión de infraestructura y protección e inversión social. De hecho se siguió minimizando el tamaño del Estado, lo que se manifiesta en la caída de 6,6 puntos porcentuales de la carga tributaria como porcentaje del PIB entre 1984 y 1989.

Considerando las dos primeras etapas como un todo (1974-1989), los resultados de la aplicación del "modelo de crecimiento hacia fuera" con un Estado "ingenuo-prescindente" y, en la mayor parte, con un marco macroeconómico inadecuado, fueron mediocres: un bajo y volátil crecimiento del PIB por habitante, que en promedio alcanzó a un magro 1,5% anual (véase Gráfico N° 1). Las consecuencias del período en materia de equidad fueron incluso peores: las asignaciones familiares, las remuneraciones y el gasto social en educación y salud se redujeron fuertemente[5]; el desempleo y la pobreza aumentaron significativamente[6]; y la distribución del ingreso se hizo mucho más desigual[7].

1.2. Estrategia vigente desde 1990

A partir de 1990 los gobiernos democráticos se plantearon el desafío de lograr un crecimiento económico dinámico y sostenido que beneficiase de manera más equitativa a los distintos estratos de la sociedad. Ciertamente este era un desafío mayor, considerando las enormes frustraciones acumuladas tanto por el modelo de economía cerrada, como por una década y media de apertura económica con magros resultados. Esta frustración, aunque con estrategias económicas diferentes, recorría también al resto de Latinoamérica[8].

[5] En términos reales, la asignación familiar alcanzó en 1989 un valor equivalente a sólo el 28,4% del valor de 1970. Por su parte, las remuneraciones reales cayeron en promedio cerca de un 9% en igual período; mientras que el gasto social lo hizo en más de un 16%, con una caída cercana al 38% en educación (Ffrench-Davis, 2003).

[6] La primera medición de la pobreza, efectuada en 1987 a través de la encuesta CASEN, muestra que la población en dicha condición era al menos un 45,1%. En cuanto a la tasa de desocupación, ésta se elevó a 17,6% en 1975 y a 31,3% en 1983 (considerando a las personas en programas de emergencia como desempleados). Sólo a partir de 1989 se retornó a una tasa de un dígito (Ffrench-Davis, 2003).

[7] Las Encuestas de Presupuestos Familiares efectuadas por el INE en el Gran Santiago muestran que la razón entre el gasto del quintil más rico y el del quintil más pobre aumentó de 5,86 en 1969, a 12,48 en 1988 (Ffrench-Davis, 2003).

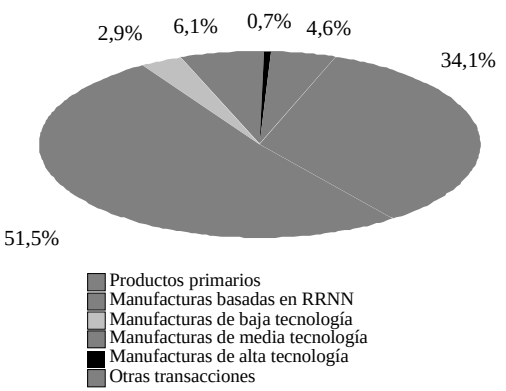
[8] Fajnzylber (1990).

www.cepchile.cl

La estrategia base de esta tercera etapa del "modelo de crecimiento hacia fuera" ha consistido en combinar las ganancias de eficiencia de una economía abierta y orientada al mercado, con un Estado no ingenuo ni prescindente, capaz de corregir las fallas de mercado, proveer infraestructura y bienes públicos, materializar inversión social y brindar una red de protección social focalizada en la población más carente. Asimismo, se ha profundizado el ordenamiento del marco macroeconómico, la regulación de los monopolios naturales, la preservación de la fe pública y la supervisión y desarrollo del mercado de capitales, lo que ha permitido disminuir aún más la volatilidad y potenciar la eficiencia de la economía.

En particular, la estrategia de crecimiento ha profundizado la orientación de la capacidad productiva hacia las exportaciones, expandiendo la apertura de las fronteras económicas, fomentando la competencia y una asignación eficiente de los recursos a través de mecanismos de mercado y estableciendo reglas económicas claras y parejas. Ello ha posibilitado que el sector exportador se haya consolidado como el principal motor de crecimiento y aumento de productividad, con un énfasis en el desarrollo y aprovechamiento de nuestras ventajas comparativas en recursos naturales (véase Gráfico N° 2). En años recientes este enfoque de apertura se ha seguido fortaleciendo a través de la suscripción de tratados de libre comercio con los principales socios comerciales de Chile y la negociación de diversos acuerdos de doble tributación, entre otras iniciativas.

GRÁFICO N° 2: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CHILE, 2002
(% del total de exportaciones)



Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de estadísticas CEPAL.

www.cepchile.cl

Para reforzar el compromiso con la equidad ha sido clave complementar los beneficios del crecimiento económico general con la construcción de una sólida red de protección social. En este ámbito destacan el aumento de los subsidios monetarios y las pensiones, la creación del seguro de cesantía, el programa Chile Solidario y la reforma a la salud. Para financiar esta red se debió detener la tendencia decreciente de la carga tributaria promovida por la estrategia del período 1974-1989 —en especial a partir de 1984—, cuyo compromiso con la equidad se reducía casi exclusivamente a su fe en la "teoría del chorreo". En cuanto a los logros de la estrategia vigente, el tiempo transcurrido evidencia avances importantes, tanto en términos de crecimiento económico como en términos de equidad. No obstante, persiste el desafío de mejorar la distribución del ingreso autónomo y continuar con la reducción de la pobreza.

1.3. Sustentabilidad de la estrategia vigente: Una nota de alerta

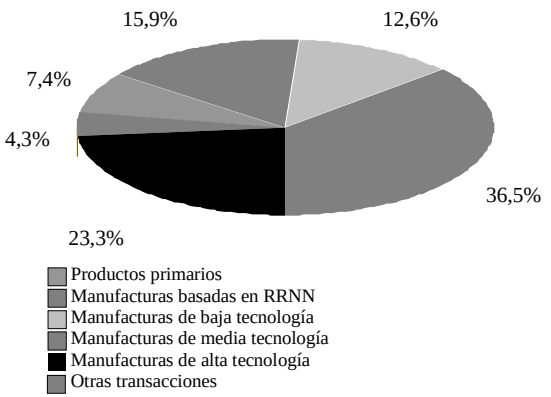
A pesar que Chile se ha inscrito entre las economías más dinámicas del mundo en los últimos 20 años, una señal de alerta aparece al comparar la estrategia vigente en Chile con la implementada por los países más desarrollados —esto es, con las políticas implementadas en aquellas naciones con un PIB por habitante medido a PPC mayor a US$20.000 por año. En particular se verifica que estos países son en promedio mucho menos dependientes de sus recursos naturales (contrastar Gráficos N° 2 y N° 3). En efecto, en Chile el 85% de las exportaciones corresponde a productos primarios o manufacturas basadas en recursos naturales, mientras que en los países más desarrollados estos productos representan menos del 25% de sus exportaciones.

Otra diferencia notoria con estos países más desarrollados es nuestra muy deficiente distribución del ingreso. Por ejemplo, la relación entre el ingreso captado por el 10% más rico de la población y el 10% más pobre es 4 veces mayor en Chile que en el promedio de los países desarrollados. Incluso, es al menos 2 veces mayor que el país con la peor distribución de ingreso de dicho grupo.

Todo lo anterior lleva a reflexionar respecto a si la estrategia chilena permitirá alcanzar dicho nivel de desarrollo y equidad, o si por el contrario, ya se podría estar alcanzando un techo de inferior nivel. Esto pone de manifiesto la importancia de analizar la sustentabilidad de la estrategia de crecimiento vigente. En particular, dado que el objetivo explícito de la estrategia aplicada desde 1990 consiste en crecer más y distribuir mejor,

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 3: COMPOSICIÓN DE EXPORTACIONES DE PAÍSES CON PIB POR HABITANTE PPC MAYOR A US$ 20.000 POR AÑO, 2002
(% total de exportaciones)



Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de estadísticas CEPAL.

debe haber preocupación por la sustentabilidad de estos dos elementos. Así, por una parte deben evaluarse las limitantes al crecimiento propiamente tal, mientras que, por otra, deben considerarse las limitantes a que tal crecimiento, en el caso de materializarse, beneficie equitativamente a los distintos estratos de la sociedad. Entre las primeras debe considerarse que:

— *Las ventajas comparativas estáticas son vulnerables.* Existen países a) con abundantes dotaciones de los mismos recursos que Chile, y/o b) que tienen mayor escala y mano de obra semi-calificada más abundante y barata, y/o c) que están más cerca de los centros de consumo. Estos países pueden quitarle a Chile una parte importante de sus mercados. Esta amenaza se hace más real a medida que dichos países van abriendo su economía al exterior y van realizando las reformas pro-mercado que Chile ya efectuó.

— *Las ventajas comparativas en recursos naturales son vulnerables.* En primer lugar, existe el riesgo de agotamiento paulatino de aquellos recursos no renovables. Adicionalmente, los avances en biotecnología potencialmente relativizan las ventajas comparativas dadas por la abundancia de recursos naturales.

— *El impulso de crecimiento de las reformas pro-mercado tiende a agotarse*. Las reformas del tipo “Consenso de Washington” en Latinoamérica, de las cuales Chile fue un pionero, han generado creci-

www.cepchile.cl

miento. Sin embargo, en general éste ha sido menor al esperado, tanto en tamaño como en duración, evidenciándose una pérdida de impulso de las reformas[9]. Así, hay numerosos ejemplos, como los casos de México y El Salvador, donde se observa que la macroeconomía en orden es condición necesaria, pero no suficiente, para un crecimiento sostenido.

— *Existe convergencia condicional en tasas de crecimiento.* La evidencia muestra que a medida que un país se desarrolla aceleradamente, su tasa de crecimiento tiende a converger a aquella más lenta de los países avanzados. Esta convergencia es empero condicional, entre otras cosas, al cambio tecnológico experimentado por el país en comparación al experimentado por los países líderes[10]. Así, dada esta condicionalidad, si Chile presenta rezagos en innovación convergerá hacia tasas de crecimiento más bajas.

En cuanto a las limitantes para avanzar en términos de equidad, se distinguen principalmente dos: a) la eventual ausencia de crecimiento, y b) una modalidad de crecimiento en el cual no haya consistencia entre oferta y demanda por capital humano.

La eventual ausencia de crecimiento, que puede ocurrir por cualquiera de los límites al crecimiento antes mencionados, desafía el logro de la equidad por dos vías. Primero, un menor crecimiento disminuye las oportunidades de desarrollo que los individuos pueden aprovechar en forma autónoma. Y segundo, limita la capacidad del Estado para mejorar la distribución del ingreso a través del financiamiento de una red de protección social adecuada para los segmentos más carentes de la población y de la provisión de los bienes públicos necesarios para aumentar su capacidad productiva —como justicia, infraestructura, seguridad, educación, salud, y capacidad innovadora. Esto último, por cuanto el gasto público está acotado en el corto plazo por la capacidad de recaudación tributaria, que a su vez depende de la carga tributaria y del nivel de producto. Considerando que en Chile la carga tributaria ya se encuentra alineada con su nivel de ingreso (y en ningún caso puede ser calificada de excesiva, ya que como muestra el Gráfico N° 4 no existen países que tengan a la vez un ingreso mayor y una carga tributaria menor que el nuestro), es el nivel de producto el que determina la capacidad de gasto público[11].

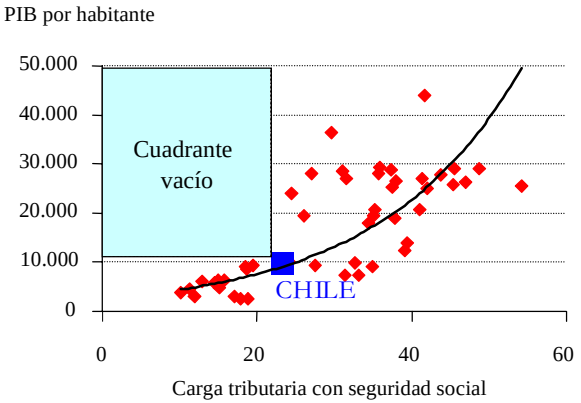
[9] Para un mayor detalle, véase Lora y Panizza (2002).

[10] Para un mayor detalle, véase Bloom *et al.* (2002).

[11] Con todo, en el corto plazo se requiere continuar mejorando la eficiencia y la focalización del gasto público. Y, a la vez, reforzar las medidas para disminuir la elusión y la evasión tributaria, condición necesaria para que en el mediano y largo plazo la carga tributaria aumente como efecto del mismo crecimiento.

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 4: CARGA TRIBUTARIA SEGÚN PIB POR HABITANTE PPC, COMPARACIÓN INTERNACIONAL, 2000 (1)
(US$ PPC; % del PIB [eje horizontal])



(1) Considera carga tributaria de todo el sector público (para hacer las cifras comparables, para los casos de Argentina, Chile y Singapur se agregan las cotizaciones obligatorias para seguridad social administradas por el sector privado).

Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de información del Banco Mundial y el FMI.

La segunda gran amenaza a poder seguir avanzando en equidad no se refiere a la ausencia de crecimiento, sino que al tipo de crecimiento que el país es capaz de generar. En particular, una estrategia de crecimiento que no procura explícitamente avanzar en el nivel y consistencia de la oferta y demanda por capital humano, corre el riesgo de no avanzar en equidad. Concretamente, dado que la principal causa de las desigualdades de ingreso autónomo es la desigual distribución del capital humano, se hace imprescindible mejorar esta última distribución mediante inversiones en capital humano. Sin embargo, si no existe una demanda por este capital humano de mayor calidad por parte del sector productivo nacional, puede ser más rentable ofrecer las habilidades laborales en el exterior (“fuga de cerebros”) desaprovechando el país la inversión realizada y no provocando mejoras en la distribución de ingresos interna. Incluso, puede generarse “cesantía ilustrada”, desaprovechando social e individualmente la inversión, lo que eventualmente puede desalentar el esfuerzo individual de invertir en educación. En este sentido, la evidencia muestra que los países que no han sincronizado sus esfuerzos en cerrar sus brechas en educación y en tecnología —esta última como motor de la demanda privada por capital

www.cepchile.cl

humano— no han experimentado crecimientos significativos de productividad ni mejoras de equidad. Incluso, si el país presenta una desigual distribución de capital humano inicial, como es el caso de Chile, y se avanza sólo en progreso tecnológico, se corre el riesgo de exacerbar las desigualdades de ingreso al aumentar el premio por capital humano.

2. Superando los límites: La economía del conocimiento en torno a los recursos naturales

2.1. Los recursos naturales como oportunidad

Ante las amenazas a la sustentabilidad de la estrategia de crecimiento chilena, cabe preguntarse si existe tal cosa como una "maldición" de los recursos naturales que impida crecer sostenidamente a tasas altas. La pregunta no es baladí, pues existe evidencia en ese sentido. Por ejemplo, Sachs y Warner (1995) encuentran una relación negativa entre crecimiento económico y exportaciones de recursos naturales como porcentaje del PIB. En particular, estiman que un incremento de diez puntos porcentuales en las exportaciones de recursos naturales como porcentaje del PIB implica una menor tasa de crecimiento de alrededor de 0,7 puntos porcentuales por año. Este efecto de desaceleración del crecimiento puede deberse, según estos autores, a tres fenómenos diferentes, aunque potencialmente simultáneos. En primer lugar, a un fenómeno social, mediante el cual la abundancia llevaría a la pereza de la población. En segundo lugar, a un fenómeno de economía política, mediante el cual esta abundancia generaría ineficiencias por incentivar el desvío de esfuerzos y recursos a la búsqueda de rentas[12]. Y en tercer lugar, a un fenómeno económico conocido como la "enfermedad holandesa", a través del cual la abundancia de recursos naturales tendería a apreciar la moneda local, disminuyendo la competitividad de las manufacturas, desviando recursos desde el sector industrial hacia el de recursos naturales[13].

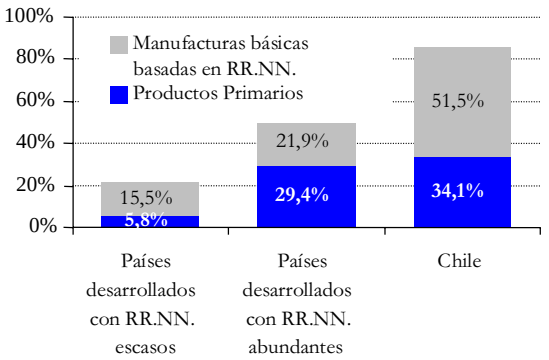
[12] La constante presión por un "dólar alto", así como por reducir ulteriormente la ya moderada carga tributaria, es sin duda una clara manifestación de este fenómeno en nuestro país.

[13] Con todo, el fenómeno de la "enfermedad holandesa" sólo se traduciría en un menor crecimiento si la productividad en el sector manufacturero fuese mayor que en el resto de la economía. Este puede ser el caso si a) el sector manufacturero genera mayores encadenamientos productivos que la explotación de recursos naturales (modelo presentado por Hirschman, 1958); y/o b) el sector manufacturero genera mayores economías dinámicas, por ejemplo, mediante un mayor "learning-by-doing" (modelo presentado por Matsuyama, 1992).

www.cepchile.cl

Sobre la base de la evidencia agregada presentada por Sachs y Warner (1995) y observando la composición actual de las exportaciones de los países más desarrollados (Gráfico N° 3) podría concluirse, equivocadamente, que la estrategia de desarrollo a seguir debiese ser una industrialización forzada. Sin embargo, alejarnos de nuestras ventajas comparativas en recursos naturales equivaldría a volver a cometer errores pasados de desarrollo frustrado. En este sentido son iluminadores los casos de países ricos en recursos naturales, entre ellos Finlandia, Suecia, Australia y Nueva Zelanda, que sí han logrado desarrollarse en forma permanente y acelerada, justamente aprovechando esta condición de abundancia. Como se aprecia en el Gráfico N° 5, existe un subconjunto de países desarrollados, con abundancia de recursos naturales, para los cuales las materias primas y las manufacturas basadas en éstas siguen teniendo una participación significativa en su economía —aunque de todas maneras mucho menor que la que tienen en Chile. Asimismo, también existen casos de sectores primarios que han evidenciado aumentos acelerados de productividad, incluso por sobre el sector manufacturero[14]. Lo importante es entonces entender cómo

GRÁFICO N° 5: PARTICIPACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EXPORTACIONES, CHILE Y PAÍSES DESARROLLADOS (CON PIB POR HABITANTE PPC MAYOR A US$20.000), 2002
(% total de exportaciones)



Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de estadísticas CEPAL.

[14] Por ejemplo, Martin y Mitra (2001) muestran que el crecimiento de la productividad total de factores del sector agrícola en el período 1967-1992 fue superior a la del sector industrial, tanto para los países en desarrollo, como para los industrializados. Por su parte, De Ferranti *et al.* (2002) proveen evidencia de este fenómeno en otros sectores primarios, como el minero, el frutícola y el forestal.

www.cepchile.cl

estos países —o sectores específicos, según el caso— transformaron la supuesta "maldición" de los recursos naturales en una oportunidad o "bendición" y, por lo tanto, qué es lo que puede y debe hacer Chile para seguir este camino.

Un punto de partida para este análisis es examinar el rol del capital humano y su interacción con la disponibilidad de recursos naturales (De Ferranti *et al.*, 2003). En este sentido, Bravo-Ortega y De Gregorio (2004) muestran que la abundancia de recursos naturales afecta negativamente el crecimiento económico, pero sólo en aquellos países con bajos niveles de capital humano. Así, aquellos países con abundante capital humano podrían desarrollar conjuntamente sus sectores primarios y manufactureros y crecer a tasas aceleradas. Esto último es lo que explicaría la diferencia en crecimiento experimentada en el siglo XX por los países escandinavos en contraste con los latinoamericanos, ambos con niveles similares tanto de PIB por habitante como en intensidad en recursos naturales hace un siglo[15], pero con dramáticas diferencias de capital humano "inicial" en favor de los primeros[16].

Construyendo sobre su disponibilidad de capital humano, un segundo elemento que se destaca en la estrategia de los países ricos en recursos naturales que han logrado desarrollarse es ciertamente su capacidad de innovación, definida en términos amplios como el proceso colectivo continuo, complejo e incierto, mediante el cual las empresas crean, adaptan o adoptan tecnologías con el fin de cimentar sus ventajas competitivas[17]. En este sentido debe destacarse la importancia de adaptar y adoptar, pues puede ser una fuente más eficiente de innovación, especialmente para países rezagados respecto a la frontera del conocimiento[18]. De todas maneras, en los sectores en que Chile es líder mundial, sí se hace necesario invertir en expandir la frontera del conocimiento, pues puede no haber alguien a quien copiarle.

El proceso de innovación es colectivo, por cuanto las innovaciones surgen tanto de las relaciones intra-empresa, como extra-empresa con

[15] A modo de ejemplo, en 1870 el PIB por habitante de Finlandia era 0,96 veces el de Chile, mientras que en 1990 equivalía a 2,60 veces éste (cifras presentadas por Bravo-Ortega y De Gregorio, 2004).

[16] A fines del siglo XIX la tasa de alfabetización en los países escandinavos era de al menos 89%, mientras que en Latinoamérica la mayor era la de Argentina con un 46%, seguida por la de Chile con un 30% (cifras presentadas en Bravo-Ortega y De Gregorio, 2004). Diferencias significativas se mantienen hoy cuando se analizan indicadores de calidad educacional (véase sección 4).

[17] Definición basada en Georghiou *et al.* (2003).

[18] Adaptar y adoptar es también clave en los países desarrollados. Por ejemplo, se estima que el 86% del progreso tecnológico en Francia se basa en tecnologías extranjeras, mientras que en EE.UU. los recursos destinados a adoptar tecnologías externas son 30 veces los dedicados a innovar en la frontera del conocimiento (De Ferranti *et al.*, 2003).

www.cepchile.cl

agentes externos, tales como universidades, centros de investigación, agencias públicas, consumidores, proveedores, e incluso competidores. Es continuo, por cuanto las innovaciones suelen basarse en sucesivas retroalimentaciones entre los diferentes agentes, a través de las cuales las capacidades y habilidades para innovar se desarrollan de manera acumulativa —más aún, la principal fuente de innovación no suele ser la investigación pura, sino que la práctica cotidiana que identifica oportunidades de mejoras. Es complejo, por cuanto el proceso implica la interacción de agentes internos y externos, que difieren, al menos, en capacidades e información disponible, lo que aumenta los costos de transacción. Y es incierto, pues por definición los resultados del proceso innovador pueden no ser exitosos.

El esfuerzo innovador de los países bajo análisis queda de manifiesto, por ejemplo, en el gasto en Investigación y Desarrollo —que alcanza a 3,4% del PIB en Finlandia y 4,3% en Suecia, versus sólo 0,7% en Chile—, y en el número de patentes producidas al año —que alcanza a 180 por cada millón de habitantes en Finlandia y 195 en Suecia, versus sólo 1 en Chile.

Este esfuerzo innovador se ha focalizado en estos países precisamente alrededor de sus recursos naturales abundantes. Esto contrasta con lo que sucedió en Chile —y en Latinoamérica en general— hasta mediados de la década del 70; mientras en Chile se intentaba una industrialización forzada inconsistente con nuestras ventajas comparativas, en países como los escandinavos y también en Australia, Nueva Zelanda y Canadá, entre otros, el crecimiento se basaba en ellas, desarrollándose encadenamientos productivos hacia atrás, adelante y los costados (Blomstrom y Meller, 1991). De esta manera, en los países ricos en recursos naturales hoy desarrollados, han surgido complejos productivos o "clusters" en torno a ellos[19]. Por "cluster" se entiende "una concentración sectorial y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas —tanto hacia atrás, hacia los proveedores de insumos y equipos, como hacia adelante y hacia los lados, hacia industrias procesadoras y usuarias así como a servicios y actividades estrechamente relacionadas— con importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración y de especialización, y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva"[20].

[19] Son relevantes, entre muchos otros, el cluster en torno a la actividad marítima en Noruega, en torno a la producción y comercialización de flores en Holanda, en torno al sector lácteo-ganadero en Dinamarca, y los clusters mineros en Australia, Canadá y Finlandia —caso particularmente interesante, puesto que el sector sobrevive de manera activa a pesar que la extracción minera propiamente tal es ya poco importante.

[20] Definición dada por Ramos (1999). Otros autores, como Alternburg y Meyer-Stamer (1999) y Schmitz (1995), resaltan que si bien la definición básica de "cluster" está

www.cepchile.cl

Estos "clusters" han surgido principalmente de la evolución natural de las fuerzas del mercado[21], con el fin de aprovechar lo que en la literatura se conoce como "externalidades locales específicas a la industria"[22]. Con todo, el Estado sí ha contribuido a solucionar las fallas de mercado que dificultan o hacen más lenta su evolución a la madurez, principalmente aquellas asociadas a las asimetrías de información y costos de transacción. Para ello ha provisto infraestructura y ha construido capital social (dado por la confianza basada en instituciones, tanto formales como informales), ambos necesarios para la interacción eficiente de los agentes económicos. Otro aporte fundamental del Estado ha sido su rol en la formación del capital humano requerido para innovar en torno a los "clusters".

Finalmente, un tercer elemento presente en los países intensivos en recursos naturales que han sido exitosos en desarrollarse, es el marco dado por su régimen institucional y de incentivos económicos. Éste considera, en primer lugar, la estabilidad macroeconómica necesaria para estimular las inversiones, reduciendo la volatilidad de precios relativos. En segundo lugar, claridad en las reglas del juego, principalmente en lo referido a los derechos de propiedad y primacía de contratos, claves para incentivar el proceso innovador y su difusión. Y en tercer lugar, el adecuado funcionamiento y desarrollo del mercado de capitales, necesario para el financiamiento del emprendimiento innovador[23]. En todos estos aspectos, países como los escandinavos se han destacado históricamente[24].

---

dada por la mera aglomeración geográfica de ciertas actividades económicas, su atractivo en términos de políticas públicas se refiere a la posibilidad de alcanzar eficiencia colectiva en ellos.

[21] En la literatura se identifican distintas etapas en la evolución de los complejos productivos exitosos. El caso del cluster forestal en Finlandia (descrito en Ramos (1999) y Palmberg (2004)) las ejemplifica claramente. Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, se extraía y exportaba principalmente productos primarios y algunos con poca elaboración, importándose la mayoría de los insumos, maquinaria e ingeniería. A partir de 1920 surgió el procesamiento y exportación de pulpa, cartón y papel, sustituyéndose además localmente algunos insumos, equipos y servicios de ingeniería. A partir de 1960 se comenzó a exportar maquinaria a la Unión Soviética, los servicios de ingeniería se volvieron completamente locales y se profundizó la exportación de productos más sofisticados, como papeles finos. Finalmente, a partir de 1970 comenzaron las exportaciones de productos químicos y servicios de ingeniería, se profundizó la exportación de maquinaria a mercados más exigentes, e incluso las empresas locales comenzaron a invertir en estos rubros en el exterior.

[22] Para mayores detalles, véase Krugman (1991) y Rodríguez-Clare (2004).

[23] Indicadores del Banco Mundial (http://info.worldbank.org.etools/kam2004) sitúan a Finlandia y Suecia entre los cinco países con mayor disponibilidad de capital de riesgo.

[24] En el Índice 2004 de Competitividad para el Crecimiento del World Economic Forum, Finlandia, Dinamarca y Noruega están entre los cinco primeros lugares, tanto en el componente de "ambiente macroeconómico", como en el componente de "instituciones públicas".

www.cepchile.cl

En resumen, la experiencia de países exitosos indica que los recursos naturales están lejos de ser una maldición. Por cierto, países escasos en ellos, como Japón y Corea del Sur, han optado por una estrategia de exportaciones de manufacturas, primero intensivas en mano de obra y luego más sofisticadas. Sin embargo, los países exitosos abundantes en recursos naturales han optado por una industrialización en torno a estos recursos, demostrando que existen caminos alternativos para lograr el éxito. Para ello han enfatizado tres elementos: (i) un régimen institucional y de incentivos económicos claro, coherente y estable; (ii) una fuerte capacidad de innovación, orientada a desarrollar encadenamientos productivos en torno a ventajas comparativas; y (iii) un capital humano de calidad.

Así, un buen o mal desempeño de los países con abundantes materias primas, como lo es Chile, depende crucialmente de la congruencia de su política de desarrollo y no del hecho mismo de tener recursos primarios. Por lo tanto, importa más el cómo se produce, y no tanto el sector donde se haga, siempre y cuando existan ventajas comparativas para sustentarlo[25].

En el caso de Chile, una política de desarrollo que se construya sobre la base de sus ventajas comparativas en recursos naturales; que sea capaz de construir pilares sólidos de capacidad innovativa y capital humano en un marco institucional y económico estable; y que aproveche las potencialidades de los clusters que incipientemente están surgiendo en torno a los sectores primarios, aparece como la alternativa más viable para superar las limitaciones del modelo vigente. Esta alternativa, como muestra la experiencia internacional, es además realizable en un período relativamente corto[26].

2.2. Fortalezas y debilidades de Chile para implementar la estrategia

Ciertamente, los tres elementos identificados como claves para implementar la economía del conocimiento están interrelacionados unos con otros. Este es un punto crucial, pues la ausencia de uno de ellos basta para

[25] Es razonable argumentar que existe una competencia significativa de países que sí tienen ventajas comparativas en el desarrollo de manufacturas no intensivas en recursos naturales, incluyendo a China e India, contra los cuales es poco probable que Chile pueda salir airoso.

[26] Por ejemplo, Finlandia pasó de invertir sólo el 1,6% de su PIB en investigación y desarrollo en 1985, a 3,4% quince años más tarde. Asimismo, en similar período sus exportaciones tecnológicas como porcentaje de sus exportaciones totales pasaron de representar menos del 6% a representar más del 25%.

www.cepchile.cl

que el conjunto no funcione[27]. En efecto, en ausencia de un régimen institucional claro, coherente y estable, es improbable que existan incentivos fuertes para invertir en el sector productivo, en actividades innovativas y en capital humano. Por otra parte, sin una demanda por capital humano de mayor calidad por parte del sector productivo no resulta rentable invertir en la oferta del mismo; y viceversa, sin una oferta de capital humano calificado la capacidad innovativa del sector productivo se ve limitada. Finalmente, una industrialización forzada, inconsistente con las ventajas comparativas, haría a la larga insostenibles los esfuerzos en materia de innovación y capital humano.

La necesidad de cerrar las brechas en capital humano y capacidad de innovación de manera sincronizada resulta particularmente crítica[28]. La necesidad de capital humano de calidad para el desarrollo innovador se sustenta en tres elementos. Primero, se requieren trabajadores debidamente capacitados en el sentido de ser flexibles para implementar nuevas tecnologías y adaptarse a los cambios. Segundo, las tecnologías factibles de ser adoptadas y/o adaptadas desde los países desarrollados tienden a ser intensivas en mano de obra calificada, pues éstas generalmente son consistentes con la calidad de la mano de obra en su país de origen. Y tercero, para el proceso mismo de adoptar y adaptar las tecnologías externas se requiere mano de obra calificada. Por su parte, la necesidad de desarrollar la capacidad innovadora del país para sustentar una mejora de su capital humano se basa en que la rentabilidad de la educación es función de las tecnologías disponibles en el país. Así, ante la ausencia de progreso tecnológico puede no ser rentable invertir en educación, o puede ser más rentable ofrecer las habilidades laborales en el exterior, produciéndose una migración de capital humano. La evidencia empírica muestra que los países que no han sincronizado sus esfuerzos en cerrar estas dos brechas no han sido capaces de experimentar crecimientos significativos de productividad[29]. Incluso, si el país presenta una desigual distribución de capital humano y se avanza sólo en progreso tecnológico, se corre el riesgo de exacerbar las desigualdades de ingreso (como muestra Acemoglu, 1998) y, peor aún, estancar el desarrollo por la falta de competencias laborales suficientes para innovar.

Existen diferentes instrumentos para evaluar la posición de Chile en cada uno de los pilares identificados. Una primera aproximación la da el

[27] Por ejemplo, las otrora denominadas economías socialistas fallaban en dos de estos tres pilares, pues si bien enfatizaban el desarrollo de capital humano, carecían de incentivos para la producción eficiente y para la innovación. De otra parte, el mero "Consenso de Washington" también resultó ser incompleto, respecto al desarrollo de capital humano y el fomento a la innovación.

[28] Para mayor detalle, véase De Ferranti *et al*. (2003).

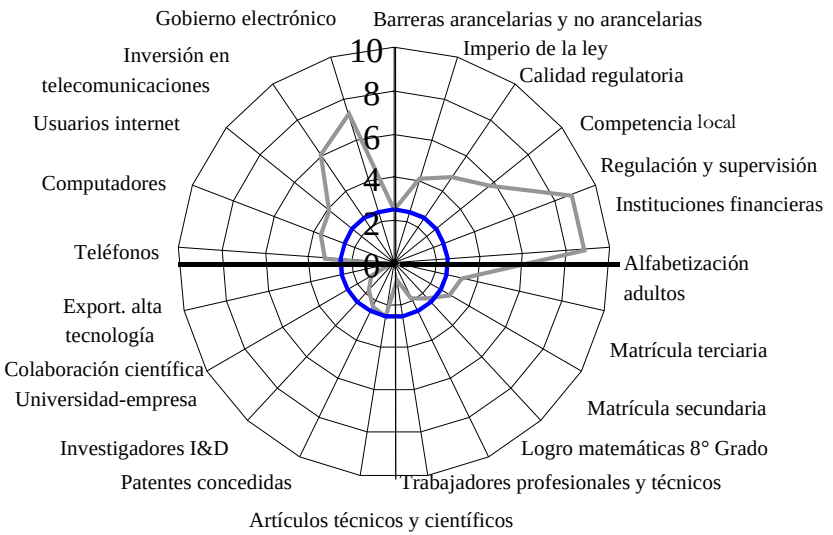
[29] Para mayor detalle sobre esta evidencia, véase Gill (2003).

www.cepchile.cl

Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Economic Forum. Para el índice 2004 Chile se destaca en las áreas de instituciones públicas (lugar 20 en el mundo) y ambiente macroeconómico (lugar 27), estando más rezagado en el ámbito tecnológico (lugar 32), especialmente en lo referido a innovación (lugar 36).

El modelo desarrollado por el Banco Mundial para diagnosticar cuán preparado está cada país para seguir el camino de la economía del conocimiento (World Bank, 2004) genera conclusiones similares. Como se observa en el Gráfico N° 6[30], Chile presenta un rendimiento destacado,

GRÁFICO N° 6: POSICIÓN RELATIVA DE CHILE RESPECTO A PAÍSES EMERGENTES + OCDE EN VARIABLES CLAVES DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. DATOS 2003 O MÁS RECIENTES



Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de los indicadores KAM del Banco Mundial (http://info.worldbank.org.etools/kam2004).

[30] El Gráfico N° 6 presenta la posición relativa de Chile en una serie de variables, respecto al conjunto constituido por los países emergentes más los pertenecientes a la OCDE. Mientras más alejada esté una observación del centro del gráfico, mejor es la posición relativa del país. Como referencia se incluye la posición relativa de Chile en términos de PIB por habitante PPC (indicada por la circunferencia más oscura), la que permite identificar si para una determinada variable el país está rindiendo por sobre o bajo lo esperado dado su nivel de ingreso. Por ejemplo, en el ámbito de "regulación y supervisión de instituciones financieras", nuestro país se ubica en el percentil 88, lo que está muy por encima del percentil en el que se ubica nuestro PIB por habitante (percentil 25).

www.cepchile.cl

muy por sobre lo esperado dado su nivel de ingreso, en todas aquellas dimensiones relacionadas con el "régimen económico y de incentivos" (cuadrante superior derecho). En particular, destacan aspectos como la regulación y supervisión del sector financiero, la intensidad de competencia en los mercados locales, la calidad regulatoria y el imperio de la ley. Para su nivel de ingreso, Chile también presenta un rendimiento destacado en aquellas dimensiones relacionadas con la "infraestructura pro innovación" (cuadrante superior izquierdo), como por ejemplo el desarrollo del *e-government*, la inversión en telecomunicaciones, e incluso, en usuarios de computadores e internet.

En contraste, el país presenta un rendimiento inferior al esperado en todas las dimensiones asociadas a "capacidad innovativa" (cuadrante inferior izquierdo) y en prácticamente todas las variables relacionadas a "capital humano" (cuadrante inferior derecho). En particular, en el primero de estos ámbitos Chile exhibe una bajísima proporción de exportaciones tecnológicas, un bajo grado de colaboración científica entre universidades y empresas, y un bajo esfuerzo en investigación y desarrollo, así como en patentamiento. En este ámbito sólo la publicación de artículos técnicos y científicos está en línea con el nivel de ingreso de Chile. En el ámbito de "capital humano", Chile está particularmente rezagado en disponibilidad de trabajadores profesionales y técnicos, así como en logro en matemáticas en el nivel básico.

En resumen, para seguir el camino de los países que han logrado desarrollarse aplicando la economía del conocimiento a sus recursos naturales, Chile debe concentrar sus esfuerzos, simultáneamente, en incrementar su capacidad de innovación —materia que se analiza en detalle en la Sección 3— y en mejorar la calidad de su capital humano —materia que se desarrolla en la Sección 4. Dadas las interrelaciones que existen entre los distintos pilares de la economía del conocimiento, las estrategias a seguir en estas dos áreas deben ser consistentes con el desarrollo de encadenamientos productivos en torno a las ventajas comparativas del país, y no erosionar su régimen institucional y de incentivos económicos que actualmente constituye la base desde la cual podemos dar los pasos siguientes.

3. Capacidad de innovación

La experiencia de los países líderes en innovación insinúa que ésta, construida sobre la base de un capital humano calificado y en un contexto de incentivos económicos adecuados, ha tenido un efecto positivo en el crecimiento económico. Más allá del estudio de casos puntuales, la evidencia empírica muestra que existe una relación positiva entre el gasto en

www.cepchile.cl

investigación y desarrollo y la productividad total de factores, aunque con rezagos (véase Rouvien, 2002, para el caso de los países de la OCDE). Consistentemente, para el caso de Chile, Benavente (2004b) encuentra que aumentos en el esfuerzo en investigación y desarrollo traerían importantes incrementos en la tasa de crecimiento del producto. Así, dado que el esfuerzo innovador es deseable para el desarrollo, cabe preguntarse si existe un rol para el Estado en el ámbito de las políticas pro innovación.

3.1. La innovación como un ámbito de políticas públicas

Las políticas pro innovación constituyen necesariamente parte del ámbito de políticas públicas, en el sentido que existe un rol para el Estado que no puede ser reemplazado por las fuerzas del mercado. Esto marca una profunda diferencia con otras políticas usualmente propuestas como supuestamente aceleradoras del crecimiento económico, entre las que se cuentan los incentivos para fomentar la inversión extranjera directa[31], promocionar las exportaciones[32], y apoyar la supervivencia de las PYME[33].

La justificación económica de las políticas de promoción de la innovación puede clasificarse en dos áreas[34]: (i) la existencia de fallas de mer-

[31] Se argumenta que la inversión extranjera directa podría generar encadenamientos productivos y transferencias tecnológicas. Sin embargo, la evidencia no es concluyente al respecto, especialmente cuando el país tiene bajo capital humano. Para una revisión de esta evidencia, véase Alfaro y Rodríguez-Clare (2003). Además, si lo que interesa son los encadenamientos y las transferencias tecnológicas, éstos debiesen ser promocionados directamente.

[32] La hipótesis detrás de la promoción de exportaciones es que el acto de exportar aumentaría la productividad de las empresas. Sin embargo, la evidencia muestra que la causalidad es inversa, es decir, son las empresas con mayor crecimiento de productividad las que tienden a exportar (Para mayor detalle, véase Álvarez, 2004 y Rodrik, 1995).

[33] Desde el punto de vista de la productividad total de la economía, el tener políticas generales destinadas a garantizar la supervivencia de las PYME más allá de su viabilidad económica resulta contraproducente. Esto es así por cuanto estas políticas inhiben una fuente clave de crecimiento que es la búsqueda de eficiencia a través de la destrucción creativa que implica la prueba y error en los procesos de formación, muerte y reemplazo de proyectos y empresas. Otro argumento en contra de las políticas generales de apoyo a las PYME es que esta categorización esconde una gran heterogeneidad, incluyendo empresas con potencial de crecimiento, otras para las cuales la escala de operación eficiente es precisamente pequeña, y otras destinadas a desaparecer por su baja productividad (Di Tommaso y Dubbini, 2000). En consecuencia, la racionalidad respecto a las PYME debiese ser corregir las fallas de mercado que las afectan directamente donde éstas ocurren, como por ejemplo en el mercado del crédito y en el mercado de transferencia tecnológica y asociatividad. Para mayores detalles respecto a las fallas de mercado que afectan a las PYME, véase Rodríguez-Clare (2004), Benavente y Crespi (2002), Hallberg (2000) y Stiglitz (1993).

[34] Eventualmente se considera una tercera justificación, referida a la innovación en el contexto de modelos de crecimiento endógeno. En estos modelos se asume que las inversiones en innovaciones tecnológicas presentan rendimientos crecientes y, por lo tanto, aumentan la tasa de crecimiento de estado estacionario (al respecto, véase Romer, 1990). Con todo, la evidencia no es concluyente al respecto.

www.cepchile.cl

cado asociadas al fenómeno innovador, incluyendo aquellas asociadas al financiamiento del emprendimiento innovador; y (ii) la existencia de fallas sistémicas asociadas al proceso innovador.

Dentro de las fallas de mercado asociadas al fenómeno innovador destacan[35]:

— *Insuficiente apropiabilidad de beneficios*. Dado que el conocimiento tiene carácter de bien público, en el sentido de ser su consumo no rival y sólo parcialmente excluible, se produce un desincentivo a invertir en su generación, y un incentivo a esperar aprovechar el conocimiento generado por otros sin incurrir en los altos costos que implica su generación. El grado en que se manifieste esta falla dependerá de cómo se definan y protejan los derechos de propiedad de las innovaciones.

— *Asimetrías de información, altos costos de transacción y de coordinación.* Muchos proyectos innovadores pueden beneficiar a varios agentes, a una industria completa o incluso a varias industrias. Más aún, pueden ser rentables sólo si cuentan con una escala suficiente. El problema surge cuando por asimetrías de información, altos costos de transacción y desconfianzas, no se produce la coordinación necesaria entre los agentes, y se termina por duplicar esfuerzos o simplemente no emprender la innovación.

— *Externalidades de red.* Estas externalidades ocurren cuando el valor de un bien para un agente se incrementa mientras más agentes consuman dicho bien. Esto ocurre con muchas innovaciones tecnológicas, como por ejemplo en telecomunicaciones, donde un nuevo sistema de telefonía sólo tiene valor si es útil para comunicarse con los demás. Los costos de transacción y coordinación pueden dificultar que se alcance la masa crítica requerida para rentabilizar privadamente una innovación con estas características.

— *Alta incertidumbre no cuantificable, intangibilidad de los activos y mercados financieros incompletos.* Muchos proyectos innovadores pueden no alcanzar un desarrollo comercial o pueden llevar a un resultado muy distinto al esperado. Esta incertidumbre suele ser difícil de cuantificar, y por lo mismo, suele no contar con financiamiento privado a través de los mecanismos tradicionales de mercado. Esto resulta aún más complejo si se considera que en general los activos de este tipo de proyectos son intangibles. Adicionalmente, en los proyectos innovadores se generan importantes asimetrías de información, que surgen porque quienes los operan o administran

[35] Para mayor detalle, véase Georghiou *et al.* (2003), y Benavente (2004a).

www.cepchile.cl

manejan un nivel de información muy superior a quienes los financian, lo que puede dar lugar a comportamientos oportunistas que elevan los niveles de riesgo de estas inversiones. Todo esto disminuye aún más las posibilidades de financiamiento privado tradicional[36].

Por su parte, la visión sistémica de la innovación se refiere a que ésta surge de un proceso no lineal, que envuelve no sólo a la investigación, sino que también a un complejo proceso de actividades relacionadas como capacitación, diseño y financiamiento, entre otras. Esta visión reconoce además que las empresas no innovan de manera aislada, sino que lo hacen al relacionarse con universidades, centros de investigación, agencias públicas, proveedores, clientes, y sus propios competidores. Para un resultado exitoso, se requiere entonces una interacción entre las capacidades internas de la empresa, con las de los agentes que la rodean. El espacio para las políticas públicas que surge de esta visión —que en todo caso no se contradice con la visión tradicional de las fallas de mercado—, se refiere en particular a: la provisión de infraestructura para que el sistema opere; la determinación de la institucionalidad para que las transacciones ocurran de manera expedita y eficiente —por ejemplo en lo referido a los derechos de propiedad de innovaciones surgidas de actividades colaborativas—; y la coordinación necesaria para que el sistema como un todo actúe de manera coherente. Adicionalmente, debe existir una preocupación especial por que se desarrolle el mercado en aquellas áreas del sistema que produzcan "cuellos de botella" —como lo puede ser el mercado de capitales—, intentando generar "puentes" que terminen de conectar todos sus componentes.

3.2. El sistema nacional de innovación chileno

El Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Economic Forum y el modelo desarrollado por el Banco Mundial para diagnosticar la posición de cada país en la economía del conocimiento (World Bank, 2004), y el informe de la OCDE (2003) coinciden en que el país presenta un Sistema Nacional de Innovación (SNI) subdesarrollado, insuficientemente preparado para hacer frente al desafío de crecer con equidad. Este rezago se hace evidente cuando se le compara con el conjunto de países en el próximo nivel de desarrollo, esto es, aquellos con un PIB por habitante PPC

[36] Evidencia al respecto se presenta en Hall (1992) y Hao y Jaffe (1993).

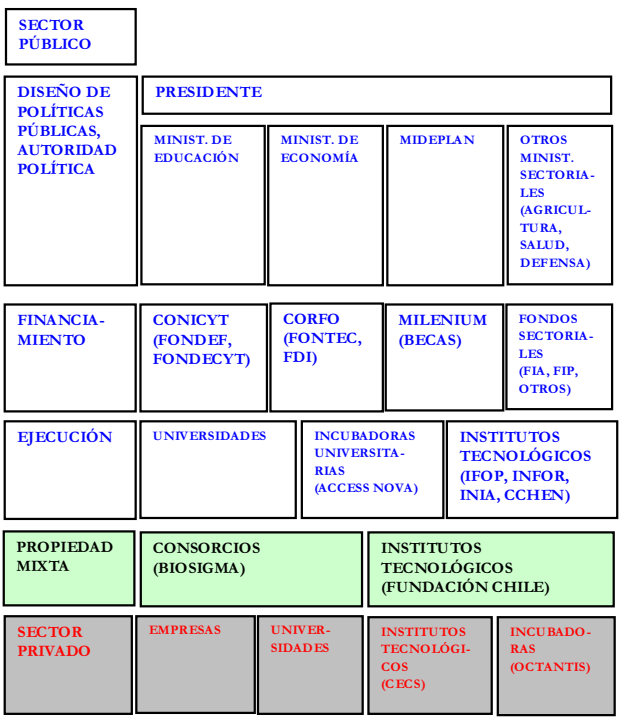
www.cepchile.cl

mayor a US$20.000 por año; y se hace dramático cuando se le compara con el subconjunto de países particularmente innovadores[37].

El punto de partida para analizar estos rezagos es la definición misma del SNI chileno. Este sistema no está necesariamente diseñado ni constituido formalmente como tal, pero sí opera en la práctica. El SNI está integrado por las empresas, universidades, centros de investigación, agencias públicas y, en general, todas las organizaciones, privadas, públicas o mixtas, que contribuyen a acrecentar el nivel global de conocimiento en el país, mediante la creación, adaptación, o adopción de tecnologías. En este sistema se puede diferenciar entre los roles de diseño de políticas, financiamiento, y ejecución de las mismas, e identificar cómo los distintos actores desempeñan dichos roles, e interactúan unos con otros.

El Gráfico N° 7 describe esquemáticamente el SNI chileno. Se aprecia que en este sistema las políticas son diseñadas primordialmente por

GRÁFICO N° 7: SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN CHILENO



Fuente: Elaborado por los autores.

[37] Para efectos de las cifras comentadas en este documento, se considera como países especialmente innovadores a Corea del Sur, Finlandia, Israel, Singapur y Suecia.

www.cepchile.cl

actores públicos. En este sentido, si bien algunos programas particulares cuentan con consejos asesores que consideran la opinión de actores privados, ello no se da al nivel agregado ni forma parte sistemática del diseño de las políticas de innovación como un todo. Esta visión global en teoría reside en la autoridad política del Presidente de la República; sin embargo, en la práctica ella sólo se traduce en prioridades anuales que quedan de manifiesto a través del proceso presupuestario del sector público. Es decir, no existe una instancia pública formal, ni menos mixta, que coordine, dé lineamientos generales, evalúe y vele por la consistencia del SNI. Como se identificó anteriormente, es esperable que esta coordinación no surja espontáneamente —es una de las fallas sistémicas del proceso innovador—, por lo que debe ser el sector público el que la fomente[38].

Entre los actores públicos más relevantes en el diseño de políticas se cuenta el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, el primero orientado a la investigación básica, y el segundo al desarrollo tecnológico y el emprendimiento innovador. Otro actor importante es Mideplan, a cargo del Programa Milenium de becas de investigación. Sin embargo, no hay instancias formales de coordinación entre estas líneas programáticas. Esta ausencia de coordinación se manifiesta también en la existencia de una serie de políticas diseñadas a nivel sectorial por los ministerios respectivos, por ejemplo en agricultura, salud, defensa y otros, así como por traslapes y duplicación de funciones.

En el nivel del financiamiento, destacan dos grandes fuentes. La primera, que primó hasta fines de la década de los 80, consiste en destinar recursos públicos directamente a financiar la oferta, básicamente de universidades e institutos tecnológicos públicos —entre los que se siguen contando el INIA, el INFOR, el CIREN, el INN, el IFOP, la CCHEN, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el Instituto Geográfico Militar y el INACH, entre otros. La segunda, privilegiada a partir de la década de los 90, consiste en la canalización de recursos a través de los Fondos Tecnológicos. Su creación, más allá de los problemas de coordinación identificados en el sistema como un todo y de eventuales problemas operativos, ha sido conceptualmente correcta por apuntar a una mayor participación de las empresas en el proceso innovador, incentivando así la demanda por innovación de manera que se conecte con la oferta y hacerla más pertinente en términos productivos. Otra característica de estos fondos es

[38] En los países innovadores existen distintas institucionalidades que se encargan de esta función. Por ejemplo, en Finlandia existe el Science and Technology Policy Council, el que asesora al Primer Ministro en la labor de dirigir el SNI; mientras que en Israel existe el Office of the Chief Scientist, con similar labor.

www.cepchile.cl

su horizontalidad, en el sentido de procurar seguir a la demanda, sin diferenciar sectores industriales, etapas de desarrollo, ni tecnologías específicas a ser aplicadas.

Con todo, estos fondos distinguen cuatro ámbitos[39]. Primero, el financiamiento de investigación básica no necesariamente aplicada ni comercializable, abarcado por el FONDECYT —bajo CONICYT en el Ministerio de Educación. Segundo, el financiamiento de proyectos tecnológicos con potencial comercial pero con alta incertidumbre, abarcado por el FONTEC —bajo CORFO en el Ministerio de Economía. Tercero, el financiamiento de proyectos innovadores con elevadas externalidades, abarcado por el FDI en su línea de interés público —bajo CORFO. Y cuarto, el financiamiento de proyectos asociativos en torno a innovaciones tecnológicas, abarcado por la línea de apoyo pre-competitivo del FDI y por el FONDEF —bajo CONICYT—, este último incentivando asociaciones entre las instituciones investigadoras y las empresas.

Muchos de estos fondos individuales están bien evaluados[40]; sin embargo, como se mencionó, no están todo lo alineados que debieran en cuanto a sus mecanismos de financiamiento, asesoría, administración, ejecución y evaluación[41]. Esto se debe a la alta dispersión de programas, donde convive el tradicional financiamiento directo a la oferta con los nuevos fondos orientados a la demanda, y que queda manifiesta al poder distinguir al menos 30 programas o agencias públicas en el Sistema Nacional de Innovación[42] (véase detalle en Cuadro N° 1, donde además se indica el presupuesto para el año 2004 de cada una de ellas como señal de dispersión de esfuerzos y posible limitante para lograr masa crítica y aprovechar economías de escala y de ámbito).

Finalmente, a nivel de ejecución, en el SNI chileno se debe destacar el rol de actores privados, como universidades y empresas en sus roles tradicionales y en roles incipientes, como incubadoras de negocios e institutos tecnológicos. También se cuentan los organismos público-privados, donde tradicionalmente se ha destacado la Fundación Chile como instituto tecnológico, y donde están surgiendo formas de colaboración aún en maduración, como los consorcios, donde se puede destacar BioSigma[43].

[39] Para mayor detalle, véase Benavente (2004a).

[40] Véase por ejemplo Universidad de Chile (2004a) y (2004b), Crespi y Muñoz (1998), y Gerens (1996a) y (1996b).

[41] Por ejemplo, Benavente (2004a) resalta que entre fondos como el FDI y el FONDEF existen traslapes respecto a los clientes que atienden y la falla de mercado que buscan corregir.

[42] Sin considerar a las universidades estatales ni a las empresas públicas.

[43] Consorcio en el área de la biotecnología, formado por Codelco, el Gobierno de Chile y Nippon Mining & Metals, con el fin de desarrollar aplicaciones patentables para la minería y la metalurgia.

www.cepchile.cl

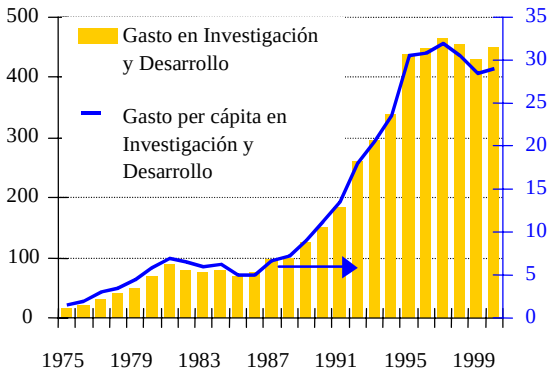
CUADRO N° 1: PROGRAMAS PÚBLICOS DESTINADOS A CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PRESUPUESTO 2004

AGRICULTURA	
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)	3.466
INIA	7.191
INFOR (Subsecretaría Agricultura)	924
CIREN (Subsecretaría Agricultura)	418
Fundación Chile	895
ECONOMÍA	
FONTEC	7.524
Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI CORFO)	8.447
Fondo innovación tecnológica Bío-Bío	504
Programa Desarrollo e Innovación Tecnológica	
Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica	1.644
Subsecretaría de Agricultura (FIA)	569
CONICYT	1.408
Fundación Chile	330
INN	393
Programa de Marcas y Patentes	261
Fondo de Investigación Pesquera (FIP) (Subsecretaría de Pesca)	2.211
IFOP (Subsecretaría de Pesca)	392
Fundación Chile (CORFO)	713
Profo y Fat	13.484
EDUCACIÓN	
FONDECYT (CONICYT)	21.263
FONDEF (CONICYT)	9.900
Becas Nacionales de Postgrado (CONICYT)	3.059
Programa de Ciencia para la Economía del Conocimiento (Banco Mundial)	5.129
Programa Explora (CONICYT)	723
Instituto Astronómico Isaac Newton	55
Fondo Desarrollo Institucional	8.313
Fondo Desarrollo Institucional - Infraestructura	16.375
MIDEPLAN	
Programa Iniciativa Científica Millenium	3.610
Programa de Becas	5.180
MINERÍA	
Comisión Chilena de Energía Nuclear	3.979
SERNEAGEOMIN	4.060
DEFENSA	
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile	2.563
Instituto Geográfico Militar	1.102
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH	407
RELACIONES EXTERIORES	
Instituto Antártico Chileno	1.926
Total	**138.438**
Total (Mill. US$)	**222**

Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de información de la Dirección de Presupuestos.

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 8: GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, CHILE, 1975-2000
(Millones de US$ de 1992)



Fuente: Banco Mundial.

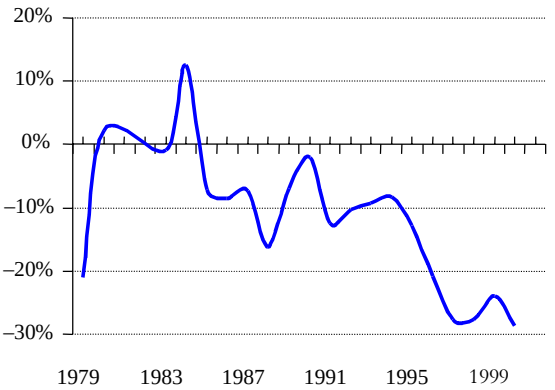
En el contexto descrito del SNI chileno, al problema de descoordinación y falta de directrices generales se suma una seria deficiencia en cuanto al monto del esfuerzo agregado en términos de recursos. Si bien este esfuerzo ha aumentado significativamente en los últimos años, al punto que el gasto en investigación y desarrollo en la década de los 90 más que cuadruplicó el de la década anterior (véase Gráfico N° 8), éste sigue estando muy por debajo del de los países desarrollados y más aún de los innovadores[44]. En efecto, mientras en Chile se destina en total el 0,7% del PIB a estas actividades, en los países desarrollados se destina en promedio el 2,1%, y en los innovadores el 3,1%. Más aún, Lederman y Maloney (2003) muestran que Chile tiene un nivel de esfuerzo crecientemente menor al esperado si se controla por características económicas y poblacionales (véase Gráfico N° 9).

Las comparaciones internacionales muestran que el esfuerzo chileno no es sólo bajo, incluso controlando por su nivel de ingresos y otras características, sino que además está mal distribuido, tanto en términos de quien lo financia, como en términos de su destino. En particular, se constata que en Chile la proporción del gasto en investigación y desarrollo financiada por las empresas privadas es menor al 28%, mientras que el resto es financiado por el gobierno y las universidades. Esto contrasta con lo que ocurre

[44] Si bien la investigación y desarrollo no es el único esfuerzo que los países realizan en términos de innovación, es la medida estándar utilizada en la literatura para realizar comparaciones. Con todo, esta medida debe ser tomada con precaución, por cuanto el esfuerzo del sector privado tiende a estar subdeclarado.

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 9: REZAGO EN GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, CHILE 1979-2000[1]
(% del PIB)



[1] El gráfico muestra la desviación entre gasto efectivo en investigación y desarrollo y el proyectado sobre la base del nivel de ingresos y el tamaño de la fuerza laboral del país. Cifras bajo el eje X corresponden a brechas negativas respecto a lo proyectado.

Fuente: Lederman y Maloney (2003).

en el conjunto de países innovadores, donde las empresas financian más de un 68%. Esta última práctica es fundamental, ya que tiende a asegurar que la investigación sea pertinente a las necesidades del sector productivo y tenga efectos económicos reales. En Chile esto puede no estar ocurriendo en todo su potencial. Este temor se ve incrementado porque ni siquiera la investigación y desarrollo aplicada se realiza en forma mayoritaria en las empresas. En efecto, un muy bajo porcentaje de científicos en el área de la investigación y desarrollo trabaja en ellas —menos del 6%, en contraste con Finlandia, en que lo hace más de un 30%. En este mismo sentido, se verifica que un porcentaje desmedido del esfuerzo en investigación y desarrollo se dedica a investigación básica (en Chile menos de la mitad del esfuerzo total se focaliza en investigación aplicada, mientras que en los países innovadores esta proporción se eleva a más del 80%)[45]. Todo esto resulta en que la investigación en Chile no tienda a transformarse en aplicaciones comerciales (World Bank, 2004).

Lo anterior es señal de un bajo nivel de conexión entre el mundo empresarial y el científico-académico, lo que constituye una de las fallas

[45] En el Cuadro N° 1 esta situación se refleja en la importancia relativa de los recursos ejecutados a través del Ministerio de Educación. Para mayor detalle de las comparaciones internacionales, véase Tokman y Zahler (2004).

www.cepchile.cl

sistémicas clásicas que afectan el esfuerzo innovador. El rezago de Chile en superar esta falla se evidencia en el hecho que la colaboración con fines de investigación entre empresas y universidades en los países innovadores es casi un 60% más frecuente que en Chile. El deficiente nivel de interacción entre los agentes privados del SNI chileno también se manifiesta en que la principal fuente de innovación en las empresas son las personas al interior de las mismas, más que un proceso de aprendizaje por interacción con agentes externos, o al menos por observación de los mismos (Benavente, 2004).

Con todo, un elemento destacable de la acción de los agentes privados en el SNI ha sido la incipiente formación, gracias en parte a apoyos públicos, de clusters en torno a los recursos naturales. En este sentido, el ejemplo más notable es el cluster del salmón, por el nivel de desarrollo alcanzado (analizado en detalle en Montero, 2004, y Ulloa, 2004). Otros clusters dignos de mencionar, aunque con niveles de desarrollo menos maduros, son el minero (analizado en Ramos, 1999, y Ulloa, 2004) y el agro-frutícola (analizado en World Bank, 2004). En el contexto de estos clusters las empresas aprovechan tanto economías pecuniarias —comparten costos, por ejemplo en infraestructura—, como no pecuniarias —aprovechan dinámicas de aprendizaje y de transferencia tecnológica. Se crea además un campo fértil para acciones conjuntas de cooperación, por reducirse los costos de transacción y monitoreo. Todo esto atenúa parte de las fallas de mercado y sistémicas que llevan a que se innove menos que el óptimo social. Así, un buen ejemplo del mayor nivel innovador en los clusters son los encadenamientos hacia atrás para el desarrollo de insumos a la medida y de capital humano específico, sustentados en relaciones de largo plazo con los proveedores.

Este incipiente desarrollo de complejos productivos y su impacto en el esfuerzo innovador en el SNI chileno, si bien es alentador, parece todavía insuficiente. Aún en clusters en vías de madurez persisten fallas de mercado y sistémicas que limitan su esfuerzo innovador; mientras que otros clusters no se desarrollan, precisamente, por la magnitud de estas fallas. Así, puede ser deseable acelerar y fortalecer la creación de estos clusters mediante la acción de políticas públicas. Autores como Ramos (1999) afirman que es deseable acelerar su madurez para lograr incluso en la mitad del tiempo lo alcanzado por los países ricos en recursos naturales actualmente desarrollados. Más aún, De Ferranti *et al.* (2003) sugieren que las políticas de capacitación y de promoción de la investigación y desarrollo pueden ser eficientemente implementadas al nivel de clusters específicos, y ser moldeadas a sus necesidades particulares.

www.cepchile.cl

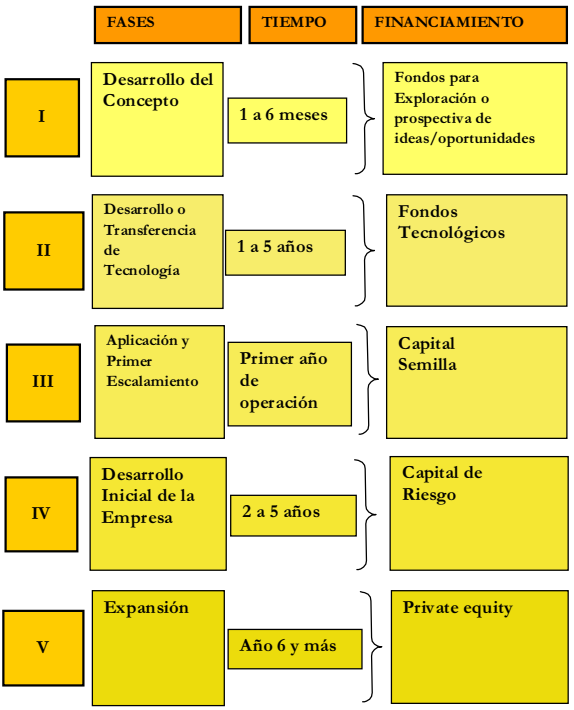
El bajo esfuerzo innovador del sector privado también se debe a las fallas del mercado de capitales que dificultan el financiamiento del emprendimiento innovador. Es así como en los países innovadores los empresarios perciben que existe una disponibilidad de capital de riesgo al menos 50% superior a la existente en Chile. Con todo, debe destacarse que paulatinamente estas fallas de mercado se han ido corrigiendo a través de los proyectos de Ley de Mercado de Capitales I y II, partiendo por los niveles más básicos de funcionamiento del mercado y avanzando hacia niveles de mayor sofisticación. Paralelamente, la disponibilidad de fondos públicos orientados al financiamiento del proceso innovador también ha apuntado a suplir la ausencia de mercado. De esta manera, a la fecha los fondos públicos han apuntado a financiar las etapas de "desarrollo del concepto" y "desarrollo o transferencia de tecnología", mientras que los proyectos de Ley de Mercado de Capitales han apuntado a desarrollar el financiamiento privado de las etapas de "desarrollo inicial de la empresa" y "expansión". Así se estarían cubriendo todas las fases del financiamiento de la innovación. Por una parte, fondos públicos apoyan la generación de ideas y, por otra, se desarrolla el mercado para que fondos privados las transformen en negocios. La excepción en la cobertura de este esquema es la etapa de "aplicación y primer escalamiento", la que estaría quedando rezagada y debiese cubrirse mediante el desarrollo del capital semilla (véase Gráfico N° 10).

Dado los problemas identificados en el SNI chileno, a saber, falta de directrices, descoordinación, duplicidad de funciones, bajo esfuerzo total, dispersión de programas que no alcanzan a crear masa crítica, baja participación del sector privado, sesgo hacia la investigación básica, falta de financiamiento, "cuellos de botella" en materia de capital humano, y desconexión entre el ámbito empresarial y el ámbito investigador-académico, no es de extrañar que el sistema presente además un bajo nivel de eficiencia. Esto, a pesar que se han identificado mejoras en la última década, como la incipiente creación de clusters, el aumento del esfuerzo público en investigación y desarrollo —especialmente a través de la creación de fondos tecnológicos—, y las mejoras en marcha en el mercado de capitales. En efecto, mediciones recientes determinan que la eficiencia del esfuerzo innovador en Chile está por debajo del rendimiento promedio de los países de la OCDE, aún controlando por nivel de esfuerzo[46]. Esta brecha se hace

[46] Esta medición de eficiencia se refiere a la capacidad para transformar la inversión en investigación y desarrollo en innovaciones patentables a nivel comercial. Para mayores detalles, véase Lederman y Maloney (2004) y Bosch, Lederman y Maloney (2004). El patentamiento de innovaciones es la medida más utilizada en la literatura para evaluar el rendimiento del esfuerzo innovador. Una medida alternativa podría ser la diversificación de productos de

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 10: FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y FASES DE DESARROLLO



Fuente: Fundación Chile.

más notoria al compararse con el conjunto de países innovadores. En resumen, se concluye que Chile presenta hoy un SNI en el que el esfuerzo innovador es bajo —especialmente el del sector privado— y además poco eficiente.

4. Capital humano, crecimiento y equidad

Para poder establecer claramente la relación entre políticas educativas, crecimiento y equidad, es necesario dar cuenta de dos eslabones fundamentales. Primero, que el capital humano forma parte de los factores

exportación. Si bien no hay comparaciones internacionales estandarizadas al respecto, para el caso chileno se destaca que mientras en 1975 se exportaban 200 productos, hoy se exportan cerca de 4 mil, aunque este aumento no ha ido emparejado con un incremento equivalente en el número de patentes comercializables.

www.cepchile.cl

claves que permiten generar innovación e ingresos, ya sea al nivel individual, regional o nacional. Y segundo, que existen importantes fallas de mercado asociadas a la inversión en educación que justifican la intervención estatal.

La importancia del capital humano en la generación de innovación e ingresos está presente en todas las teorías recientes de crecimiento y desarrollo económico. Dicho aporte se manifiesta primordialmente a través del aumento en la productividad, al facilitar la adopción de tecnologías y procesos productivos más sofisticados y flexibles. La contribución del capital humano al crecimiento se encuentra respaldada por una extensa investigación empírica (véase World Bank, 1995) que muestra que buena parte del crecimiento económico de los países es explicado por la Productividad Total de Factores (PTF) y que un elemento clave para el crecimiento de ésta corresponde a la calidad de la educación. A este respecto se ha argumentado que si Chile mejorase de una vez y para siempre la calidad de la educación, la productividad aumentaría a medida que las nuevas generaciones se incorporasen a la fuerza de trabajo (Beyer y Vergara, 2002). Empíricamente se ha estimado que un aumento en la calidad de la educación consecuente con el logro de resultados promedio para el nivel de ingreso del país llevaría a aumentos de hasta 0,7 puntos porcentuales en la PTF[47].

Una forma alternativa mediante la cual es posible dimensionar el impacto del capital humano sobre la capacidad de generación de ingresos es a través de las estimaciones de rentabilidad social y privada de la educación. El Cuadro N° 2 muestra estimaciones en las que es posible observar: (i) que la educación es una inversión altamente rentable, tanto para los

CUADRO N° 2: RETORNOS A LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN POR NIVEL E INGRESO POR HABITANTE (%)

Grupo de ingreso por habitante	Social			Privado		
	Básica	Media	Superior	Básica	Media	Superior
Ingresos bajos (US$ 755 o menos)	21,3	15,7	11,2	25,8	19,9	26,0
Ingresos medios (hasta US$ 9.265)	18,8	12,9	11,3	27,4	18,0	19,3
Ingresos altos (US$ 9.266 o más)	13,4	10,3	9,5	25,6	12,2	12,4
Mundo	**18,9**	**13,1**	**10,8**	**26,6**	**17,0**	**19,0**

Fuente: Psacharopoulos y Patrinos (2002).

[47] Para mayores detalles, véase Barro (1999) y Gallego y Loayza (2002).

www.cepchile.cl

gobiernos como para los individuos; (ii) que la rentabilidad privada de la educación es por lo general mayor que la social, debido a que los gobiernos asumen gran parte de los costos en la práctica; (iii) que mientras la mayor rentabilidad social se encuentra en la educación primaria, las tasas de rentabilidad privada son también altas para la educación superior en los países de ingresos medios y altos; y (iv) que la rentabilidad privada y social de la educación tiende a reducirse en los países de mayor desarrollo.

La realidad de prácticamente todos los países del mundo es que la mayor parte de la inversión en educación es realizada por el Estado, generalmente financiando sistemas públicos de enseñanza. La intervención del Estado, que además del financiamiento abarca regulación y producción, se explica principalmente por la presencia de severas fallas de mercado. Entre éstas se pueden citar: (i) el plazo extremadamente largo de maduración que requiere la inversión en educación —especialmente en el nivel primario— lo que maximiza la distorsión que generan los diferenciales de tasas privadas y sociales de descuento intertemporal; (ii) los altos riesgos asociados a la inversión, dada la alta dispersión de ingresos que se produce entre trabajadores de niveles similares de educación; (iii) la imposibilidad de aportar capital humano como colateral para la obtención de financiamiento; y (iv) las externalidades que genera el aumento de los niveles educativos de la población y la formación en determinadas áreas y especialidades.

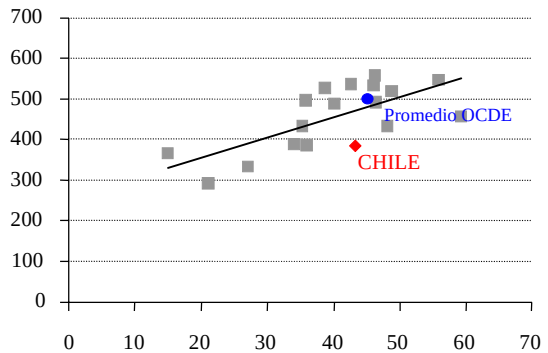
4.1. Capital humano y calidad de la educación escolar

El fuerte esfuerzo en términos de inversión pública en educación en las últimas décadas ha resultado en un significativo y progresivo aumento de cobertura, el que a la vez ha permitido que se incremente sostenidamente la escolaridad de la población en Chile[48]. No obstante estos logros en términos de cobertura, la discusión pública ha estado marcada en los últimos años por una alta y creciente preocupación por la calidad de la educación. La preocupación ha surgido tanto del análisis de la evolución de los resultados de la prueba SIMCE, como de los resultados de instrumentos estandarizados internacionalmente, específicamente: el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS), aplicado a alumnos de 8° grado en 2002; y el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), aplicado a estudiantes de 15 años en el año 2000. En estas dos pruebas los estudiantes chilenos se ubicaron entre los más bajos de las muestras respectivas: en el TIMSS, entre 46 países Chile ocupó el

[48] La escolaridad promedio de la población mayor de 15 años pasó de 7,4 años en 1975 a 8,6 en 1990, y se estima que llegará a 10,8 en 2005.

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 11: PROMEDIO PUNTAJE PISA Y GASTO ANUAL POR ALUMNO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN RELACIÓN AL PIB POR HABITANTE
(Puntaje; gasto/PIB por habitante)



Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de estadísticas OCDE y PISA.

lugar 39 en matemáticas y el lugar 36 en ciencias; y en la prueba PISA el lugar 34 entre 41. Ciertamente, Chile es superado por aquellos países con un mayor nivel de desarrollo, especialmente por los más innovadores[49]. Sin embargo, los estudiantes chilenos muestran rendimientos incluso inferiores a los esperados para el nivel de gasto en educación por estudiante del país, controlando por su nivel de desarrollo (véase Gráfico N° 11 para el caso de la prueba PISA).

Otra señal de alerta respecto a la calidad de la educación escolar en Chile surge de las evaluaciones internacionales de competencias laborales. El estudio sobre alfabetización adulta (IALS) de la OCDE concluyó que en 1998 sólo el 12,9% de los trabajadores chilenos de entre 16 y 65 años mostraba competencias superiores al nivel básico, mientras que en países innovadores como Finlandia este porcentaje llegaba a 63,6%[50].

Todas estas comparaciones internacionales hacen evidente que Chile debe aún recorrer un trecho importante en el mejoramiento de la calidad de su educación. Para ello no basta una mayor inversión pública en educación, pues los mismos estudios internacionales muestran que Chile presenta rendimientos inferiores a los que indicaría su actual nivel de gasto por estudiante. Por lo tanto, para mejorar la calidad es preciso identificar clara-

[49] Por ejemplo, en el TIMSS Singapur presenta un rendimiento 56% superior a Chile en matemáticas y 40% superior en ciencias. Mientras que Corea del Sur nos supera por un 52% y un 35% en matemáticas y ciencias, respectivamente.

[50] Estos preocupantes resultados son especialmente indicativos de la mala calidad de la educación chilena en la década del 80 —debido a que la mayor parte de la fuerza de trabajo en 1998 había pasado por el sistema educacional en ese período.

www.cepchile.cl

mente sus determinantes y focalizar los esfuerzos en ellos. Al respecto, una conclusión esencial de la literatura especializada es el reconocimiento de la complejidad del proceso enseñanza-aprendizaje en un sistema en el cual participan numerosos actores que interactúan en distintos niveles y procesos, afectando positiva o negativamente el logro de resultados. A saber, importan: a) Los estudiantes, sus familias y su preparación para la escuela; b) Los profesores y alumnos en la sala de clase; c) La gestión escolar a nivel de establecimiento; y d) El sistema educacional.

a) Los estudiantes, sus familias y su preparación para la escuela

Diversos estudios han constatado una relación robusta y positiva entre el rendimiento escolar y la condición socioeconómica de los hogares de los niños que participan en el sistema educacional chileno[51]. Concretamente, el nivel socioeconómico de las familias influye sobre el rendimiento escolar a través de los recursos que el hogar proporciona para apoyar el proceso educativo, entre los que se destaca: la educación de la madre, la disponibilidad de útiles y textos, las condiciones materiales que el hogar proporciona para estudiar, y las presiones para que niños y jóvenes trabajen para complementar el ingreso familiar. No sorprende que los hogares más pobres estén desaventajados en estos factores[52], y generen por tanto menores posibilidades de desarrollo psicomotor, de aptitudes y de conductas para los niños, afectando así su capacidad de aprender en el sistema educacional formal.

Una respuesta parcial a las desventajas que enfrentan los menores de hogares pobres puede darla el sistema de educación prebásico. A este respecto, si bien en Chile el acceso al sistema preescolar para los niños de hogares más pobres ha mejorado significativamente desde 1990 (Gráfico N° 12), aún los niveles absolutos de cobertura parecen insuficientes para compensar las desventajas que enfrentan estos niños.

b) Los profesores y alumnos en la sala de clases

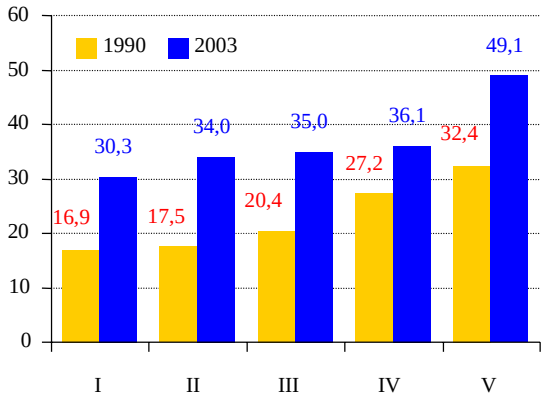
El grueso de las actividades propias del proceso educativo ocurre en la sala de clases, en la interacción regular e intensiva entre el docente y sus

[51] Por ejemplo, Mizala, Romaguera y Farren (1998) demuestran, en base a resultados de la prueba SIMCE por establecimiento, que las variables socioeconómicas se encuentran entre las más importantes para explicar el logro de los alumnos.

[52] Por ejemplo, la Encuesta CASEN 2003 muestra que la educación de la madre crece con el ingreso del hogar (mientras en el primer quintil llega a 8,6 años, en el quinto llega a 14,3); mientras que el nivel de hacinamiento disminuye (mientras en el primer quintil en promedio hay 3,4 personas por dormitorio, en el quinto hay sólo 2,0).

www.cepchile.cl

GRÁFICO N°12: COBERTURA EDUCACIÓN PREESCOLAR POR QUINTIL DE INGRESOS, 1990 Y 2003 (%)



Fuente: Mideplan.

alumnos, y entre estos últimos. Para que este proceso rinda buenos resultados se requiere de tiempo suficiente, contenidos sustantivos, recursos apropiados, metodologías eficaces y profesores preparados y motivados para aplicarlas. En este sentido, la Reforma Educacional iniciada en la década del 90 ha focalizado sus esfuerzos en el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en varias de las dimensiones anotadas. La efectividad de estos cambios, sin embargo, depende en última instancia de la motivación, confianza y calificación que aporten los docentes. La literatura coincide en identificar tres variables claves que definen a un docente efectivo[53]: (i) conocimiento de los contenidos de la enseñanza; (ii) manejo de un repertorio amplio de técnicas pedagógicas; y (iii) motivación. De estas variables, la última es la más compleja de intervenir a través de políticas públicas, aunque normalmente se arguye para mejoramientos salariales y la estructuración de carreras docentes[54]. En el caso de Chile estos mejoramientos han sido muy significativos a partir de los 90[55]. De hecho, actualmente las remuneraciones docentes son superiores al ingreso por habitante del país, situándolos en una posición favorable, especialmente al inicio de sus carreras. Esta posición se atenúa, sin embargo, a medida que los docentes acumulan experiencia y avanzan en su escala salarial. Esto evidencia

[53] Para mayores detalles, véase Lockheed y Verspoor (1991).

[54] En general, existe consenso entre expertos y planificadores educacionales en cuanto a la baja relación costo-efectividad de los mejoramientos salariales docentes. Al respecto, véase Schieffelbein, Wolff y Schieffelbein (1998).

[55] Véase Mizala y Romaguera (2000).

www.cepchile.cl

CUADRO N° 3: SALARIO DOCENTE EN RELACIÓN A PIB POR HABITANTE

	Primaria		
	Inicial	Con 15 años experiencia	Máximo de la escala
Chile	1,1	1,3	1,4
Países con PIB por habitante			
PPC > US$ 20.000	0,9	1,3	1,5
Países innovadores	1,1	1,6	2,3
	Secundaria inferior		
	Inicial	Con 15 años experiencia	Máximo de la escala
Chile	1,1	1,3	1,4
Países con PIB por habitante			
PPC > US$ 20.000	1,0	1,3	1,5
Países innovadores	1,2	1,7	2,3

Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de información OCDE.

una estructura salarial excesivamente comprimida (Cuadro N° 3), con pocos incentivos a la acumulación de experiencia, calificación y desempeño, lo que torna particularmente relevante para Chile la introducción de esquemas de remuneración ligada al desempeño.

c) La gestión escolar a nivel de establecimiento

La evidencia muestra que las escuelas que obtienen un rendimiento sustancialmente superior a lo esperado para sus variables de contexto cuentan con un alto sentido de misión, mayor autonomía, liderazgo directivo, un clima organizacional positivo, una gestión responsable y una alta preocupación por los resultados. Se argumenta que para lograr estas características, la escuela necesariamente requiere autonomía de gestión.

En Chile, la descentralización educativa parece expresarse en aspectos tales como la municipalización de las escuelas públicas, el régimen de subvenciones, la libre elección de establecimientos, el estímulo a la formación de programas de mejoramiento educativo y la flexibilidad para diseñar programas de estudio por establecimiento. El grado de descentralización en el sistema educativo, sin embargo, depende de la real autonomía con que cuenten las escuelas para adoptar decisiones en los planos técnico-pedagó-

www.cepchile.cl

gico y administrativo. El Estatuto Docente ha sido recurrentemente criticado, precisamente, por limitar la autonomía de las escuelas municipales en la adopción de decisiones respecto a los profesores (por ejemplo, en lo referido a su despido y a la determinación de sus remuneraciones). Con todo, las rigideces a la gestión de los establecimientos se extienden mucho más allá de lo establecido en el Estatuto Docente. Es así como sólo 851 de poco más de 3.000 directores cuentan con facultades de administración delegadas por parte del alcalde. Pese a que el Estatuto Docente no impide que el establecimiento participe en la selección de nuevo personal, una encuesta reciente entre directivos de escuelas y liceos municipalizados señaló que un 70% de los directivos de básica y un 30% de los directivos de media no tenía participación en estas decisiones. Del mismo modo, una alta proporción de directores de establecimientos municipales no maneja recurso financiero alguno, debiendo recurrir a la municipalidad para la provisión de los bienes y servicios más elementales para el funcionamiento de la escuela. Esta situación se ve agravada por dos factores: las características y capacidades de los directores, y el grado de integración de la comunidad escolar. La situación de los directores de establecimientos municipales es a este respecto particularmente grave, pues aún se mantienen casi 2.000 directores con carácter de inamovible. Por su parte, la participación de los padres en actividades de la escuela parece estar concentrada exclusivamente en la asistencia a reuniones de apoderados[56]. Por tanto, no parecen registrarse en el sistema grandes presiones por adoptar un estilo de gestión que involucre más activamente a la comunidad.

De este modo, un sistema educacional aparentemente descentralizado en lo orgánico, no lo es tanto desde la perspectiva de la propia escuela, lo que pone en duda que ésta sea efectivamente la unidad básica del sistema. Aunque resulta innegable que el Estatuto Docente introdujo un elemento importante de rigidez administrativa en el sector municipal, no es menos cierto que existe un amplio espacio para el ejercicio de mayor autonomía en las escuelas de este sector que está siendo subutilizado. Con todo, la hipótesis de la flexibilidad administrativa como base de la calidad educacional es puesta en duda por el rendimiento obtenido por los alumnos de los establecimientos con los máximos niveles de autonomía en su gestión. En efecto, el estudio PISA muestra que el rendimiento del 10% mejor de los estudiantes chilenos —que en su mayoría asiste a colegios de elite altamente autónomos— apenas alcanza al puntaje más bajo del 10% superior de los países más avanzados.

[56] Antecedentes citados en Brunner y Elacqua (2003).

www.cepchile.cl

d) El sistema educacional

Un sistema educacional que opere como tal requiere de al menos tres elementos: (i) un sistema de asignación de recursos; (ii) mecanismos de coordinación; y (iii) una instancia de formulación de políticas, programación y evaluación. Estos elementos son esenciales para resolver el dilema de cómo hacer que la educación responda a los requerimientos de la sociedad y sea capaz de aprender de la multiplicidad de experiencias que se dan en su interior.

A este respecto, la reforma de 1980 buscó desarrollar un mecanismo de cuasi-mercado educativo para resolver los requerimientos de coordinación y trasladó las responsabilidades por la programación y evaluación a los sostenedores educacionales y a las familias. Así, Chile estableció uno de los sistemas orgánicamente más descentralizados del mundo, en el que el Ministerio de Educación no cuenta con facultades para intervenir directamente sobre la gestión de ninguno de los 4.142 sostenedores ni sobre el funcionamiento de sus 10.642 escuelas. En un sistema con este grado de dispersión los requerimientos de coordinación y evaluación se vuelven especialmente apremiantes. En el cuasi-mercado educativo chileno estas necesidades se resuelven entregando a las familias no sólo la capacidad de escoger la escuela para sus hijos, sino también la capacidad para aplicar los recursos públicos que pagan por el servicio. En la racionalidad de este sistema, si son las mejores escuelas las que atraen a un mayor número de niños y si éstos traen consigo los recursos financieros correspondientes, la competencia por captar y retener alumnos debiese encargarse no sólo de asignar los recursos con eficiencia, sino de elevar el rendimiento global del sistema.

Una consecuencia inmediata de la reforma de 1980 fue el rápido desarrollo y consolidación de la educación particular subvencionada, que en la actualidad abarca a cerca del 40% de los alumnos del sistema. Esto se ha interpretado como señal inequívoca del éxito de la reforma, sin embargo, la realidad es más matizada. Por una parte, parece bastante claro que el régimen de subvenciones ha contribuido a elevar la eficiencia en la asignación de recursos y a ampliar la cobertura del sistema educacional. Del mismo modo, todo indica que las familias valoran la libertad de elección que este sistema les ofrece. No obstante, no existe evidencia que permita concluir que el régimen de subvenciones haya permitido mejorar la calidad de la educación en Chile, apreciándose en cambio rasgos de selección de estudiantes y segmentación del sistema que atentan contra la pluralidad y equidad que se espera del mismo. En efecto, se verifica que los estableci-

www.cepchile.cl

CUADRO N° 4: PUNTAJE SIMCE POR GRUPO SOCIOECONÓMICO Y DEPENDENCIA, 2001–2003. SEGUNDO MEDIO, PUNTAJE PROMEDIO

	Matemáticas		
	Municipal	Particular subvencionado	Particular pagado
Bajo	215	220	–
Medio bajo	223	235	–
Medio	270	265	–
Medio Alto	347[1]	294	301
Alto	–	–	325
Totales nacionales	**241**	**257**	**301**

	Lenguaje		
	Municipal	Particular subvencionado	Particular pagado
Bajo	226	229	–
Medio bajo	238	245	–
Medio	273	270	–
Medio Alto	317[1]	289	292
Alto	–	–	306
Totales nacionales	**230**	**250**	**317**

[1] Los establecimientos municipales del grupo socioeconómico Medio Alto agruparon a 1% del total de alumnos en 2003. Para el año 2001, en cambio, no se informó de puntajes para esta categoría de establecimientos, porque agrupaban un número muy bajo de alumnos. Por esta razón, las variaciones de los establecimientos Municipales-Medio Alto se calcularon considerando las variaciones de aquellos establecimientos clasificados en esta categoría para la prueba 2003.

Fuente: SIMCE.

mientos particulares subvencionados tienden a mostrar rendimientos superiores a los del sector municipal, pero fundamentalmente por el perfil socioeconómico de sus alumnos. De hecho, cuando las comparaciones de los puntajes SIMCE se hacen para alumnos de similar condición socioeconómica, las diferencias se vuelven virtualmente irrelevantes (Cuadro N° 4)[57].

En buena medida la estructura que se ha generado se deriva de la manera en que las familias han escogido las escuelas de sus hijos. Los resultados de encuestas aplicadas a padres y apoderados indican que mien-

[57] Para mayor detalle sobre la evidencia econométrica al respecto, véase Tokman (2002).

www.cepchile.cl

tras las familias de menores recursos tienden a adoptar criterios esencialmente prácticos, como la cercanía del establecimiento, su costo y la formación en una profesión u oficio, las familias de estratos medios y altos adoptan criterios esencialmente asociados al estatus, como el prestigio del establecimiento y los valores que entrega. En ninguno de estos grupos el puntaje SIMCE incide de manera importante en las decisiones de los padres y sólo los sectores medios y altos asignan alguna ponderación a los resultados de las pruebas de acceso a la educación superior. Estos criterios de decisión están relacionados con un problema fundamental de la educación como inversión, cual es el de las asimetrías de información. Los plazos excesivamente largos entre el proceso educativo y su impacto sobre la inserción laboral o profesional, el desconocimiento de los padres sobre "la función de producción" educacional, y la abundancia de elementos cualitativos, constituyen fallas de información muy profundas que afectan la capacidad de decisión de las familias. Estas fallas son más profundas mientras menos estandarizada y definida es la información sobre desempeño de las escuelas y mientras mayor flexibilidad tienen éstas para formular su proyecto educativo. En particular, la mejor imagen que proyectan los establecimientos particulares subvencionados hace que opere la lógica de un mercado en el que las decisiones de los oferentes se imponen sobre las de los demandantes ("sellers' market"). Estos procesos son los que han ido profundizando la homogeneización social en las escuelas, concentrándose una proporción creciente de la población de mayores ingresos en el sector particular[58].

La dinámica del cuasi-mercado educativo en Chile no sólo ha sido incapaz de elevar el rendimiento global del sistema, sino que además ha sido incapaz de garantizar una educación de excelencia para la elite. A este respecto, como se señaló anteriormente, el estudio PISA muestra que el rendimiento del 10% mejor de los estudiantes chilenos apenas alcanza al puntaje más bajo del 10% superior de los países más avanzados. Estos resultados no sólo ponen en duda la suficiencia de la flexibilidad administrativa como garantía de un buen rendimiento escolar, sino que también la relevancia del gasto por estudiante, pues los establecimientos de elite que producen los resultados señalados corresponden precisamente a aquellos que cuentan con los máximos niveles de autonomía en su gestión y que cobran elevados aranceles a los padres. Paralelamente, la evidencia recogida de la prueba SIMCE permite distinguir a un importante conjunto de

[58] Este fenómeno se aprecia también en el análisis de los resultados del estudio PISA, donde se detecta que prácticamente toda la varianza en condiciones socioeconómicas de los alumnos en Chile se produce entre establecimientos, con variaciones mínimas al interior de cada uno de ellos (Mineduc, 2004).

www.cepchile.cl

escuelas con altos niveles de efectividad pese a atender a niños y niñas de escasos recursos.

Todo lo anterior indica que el cuasi-mercado es un mecanismo insuficiente y potencialmente discriminatorio de coordinación, pero aún así no ha llegado a generar un determinismo social en el proceso educativo. Más bien ha tendido a estructurar un sistema educativo autorreferente que enfrenta pocos incentivos para elevar su rendimiento. El costo de cambiar este sistema mediante programas y subsidios estatales es altísimo y, probablemente, con rendimientos decrecientes mientras las reglas del juego sean relativamente débiles, las evaluaciones sean sin estándares, las subvenciones se entreguen con pocas exigencias, y exista un deficiente sistema de supervisión.

4.2. Educación superior

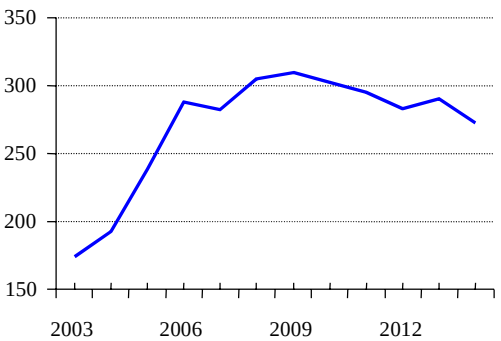
Para enfrentar el desafío de la economía del conocimiento importa también la calidad, cobertura y equidad en acceso a la educación superior. En este sentido, actualmente Chile presenta una cobertura significativamente inferior a la de los países innovadores (37,5% versus 63,6%). Sin embargo, se espera que nuestro país experimente una creciente demanda por educación superior en los próximos años. En efecto, el aumento de cobertura en la educación media, la disminución de las tasas de repetición en todo el sistema, y el remanente de la curva demográfica ascendente para los jóvenes de este tramo de edad determinan que el flujo de egresados de la educación media experimentará un fuerte incremento entre 2004 y 2008 (véase Gráfico N° 13). Esto se refuerza con las altas y crecientes expectativas de estos jóvenes y sus familias por ingresar a la universidad.

La materialización de esta demanda ayudará a reducir la brecha de técnicos y profesionales en la fuerza laboral chilena respecto a la de los países innovadores (estadísticas del Banco Mundial indican que en Chile sólo un 10,2% de la fuerza laboral es técnico-profesional, en contraste con los países innovadores, donde esta cifra se eleva al 29,2%). Eventualmente también ayudará a disminuir la brecha de profesionales con doctorado en la fuerza laboral (Tokman y Zahler, 2004, muestran que en el período 1996-1999 Chile incorporó a su fuerza laboral sólo 3 PhD en ciencia por cada millón de habitantes, mientras que Suecia y Finlandia incorporaron 197 y 177, respectivamente).

Sin embargo, la eficiencia global de la inversión pública y privada en educación superior no depende sólo de la cantidad de egresados, sino que también de su calidad, en el sentido que cuenten con las competencias

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 13: ESTUDIANTES QUE TERMINARON IV MEDIO EL AÑO ANTERIOR
(Miles de estudiantes)



Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de matrículas de enseñanza media y básica 2002.

requeridas por el sistema productivo. Desde esta perspectiva, el desafío para las políticas públicas consiste en asegurar conocimientos y competencias similares para los egresados de una misma carrera, de manera de reducir las asimetrías de información que enfrentan tanto los postulantes al elegir carreras y centros de estudios, como los empleadores al contratar trabajadores titulados. Para estos fines resulta imprescindible la vigencia de un sistema de acreditación para la educación superior, un sistema nacional de certificación de competencias laborales, y mayores exigencias para los organismos que proveen educación para el trabajo.

Con todo, la principal fuente de preocupación respecto a la educación superior es la existencia de diferenciales de rentabilidad excesivamente altos. Éstos no sólo ayudan a explicar la desigualdad distributiva, sino que son indicativos de distorsiones que amenazan con prolongar dicha desigualdad en el tiempo, perjudicando también las posibilidades de crecimiento futuro del país. Lo anterior tiene que ver con la falta de equidad en el acceso a la educación superior. Aunque desde 1990 la proporción de jóvenes del 40% más pobre de la población que accede a la educación superior prácticamente se triplicó —pasó de 4,4% a 14,5% en el primer quintil de ingresos y de 7,8% a 21,2% en el segundo—, la brecha de acceso entre este grupo y el 20% más rico no se ha reducido. A la luz de la alta rentabilidad privada de la educación, esto significa que el desarrollo del sistema de educación superior no está ayudando a generar mayor equidad para el futuro.

La persistencia de amplias brechas sociales en el acceso a la educación superior puede ser en parte reflejo de diferenciales en la calidad de la

www.cepchile.cl

educación recibida por los jóvenes en su paso por el sistema escolar[59] y de presiones para que éstos ingresen directamente al mercado del trabajo una vez egresados de la educación secundaria. Sin embargo, también parece tener incidencia la forma en que se distribuyen los apoyos que entrega el sistema a sus estudiantes. En efecto, los estudiantes universitarios provenientes del 40% más pobre de los hogares captan en la actualidad sólo un 30% de los recursos disponibles de apoyo en la forma de becas y créditos.

5. Lineamientos de política

Chile comenzó a experimentar un crecimiento alto y sostenido desde que sentó las bases de una estrategia de desarrollo compatible con sus ventajas comparativas y ordenó sus políticas macroeconómicas. Cuando lo anterior se complementó con un Estado no prescindente, corrector de fallas de mercado, proveedor de bienes e infraestructura pública, así como de protección social, también se comenzaron a evidenciar avances en términos de equidad, principalmente en lo referido a reducción de la pobreza. Sin embargo, a pesar de los éxitos de los últimos veinte años, existen limitantes e imperfecciones en el modelo de desarrollo que deben ser enfrentadas de manera proactiva.

Siguiendo la experiencia de los países desarrollados que surgieron desde una posición relativamente similar a la chilena —como por ejemplo los escandinavos—, se infiere que el camino a seguir debe ser la economía del conocimiento en torno a los recursos naturales. En este sentido, parece ser ahora el momento correcto para avanzar en esta senda, por cuanto hay precondiciones que Chile ha ido cumpliendo. Primero, se cuenta con una estabilidad macroeconómica e institucional que sustenta un bajo nivel de riesgo país y una baja volatilidad, lo que sumado al imperio de la ley y al respeto a los derechos de propiedad, sirve de marco base para incentivar las inversiones. Segundo, cuenta con un sistema de precios no distorsionado que minimiza las pérdidas de eficiencia. Tercero, ha desarrollado su infraestructura pública de manera de facilitar las labores productivas. Cuarto, cuenta con un SNI, que aunque inmaduro, contiene un grupo de programas y fondos eficientes que sirve de base para mejorar su desempeño como sistema. Quinto, cuenta con un mercado de capitales debidamente regulado

[59] Esto explica en parte las dramáticas diferencias observadas en las pruebas de acceso a la educación superior. Por ejemplo, en el año 2000 el 57,6% de los estudiantes del primer quintil que rindió la PAA obtuvo un puntaje menor a 457,5; mientras que en el quinto quintil este porcentaje fue de sólo 16,3%.

www.cepchile.cl

y con un desarrollo creciente, que sirve como base para avanzar en el financiamiento del emprendimiento innovador. Y sexto, ha evidenciado mejoras notables en la cobertura educacional, debiendo abocarse ahora a mejorar la calidad del sistema y a distribuir más equitativamente las habilidades que surgen de la educación terciaria.

Por lo tanto, Chile se encuentra en una posición expectante, a partir de la cual es menester innovar para crecer y, a la vez, invertir en capital humano para innovar. No obstante, la educación es sólo condición necesaria, porque educar sin innovar no genera crecimiento. Si logramos avanzar simultáneamente en educación e innovación, el crecimiento tendrá un nuevo engranaje con la equidad, pues no sólo proveerá los recursos necesarios para financiar las políticas asistenciales, sino que además conseguirá disminuir las inequidades de capital humano, fuente principal del diferencial de renta en Chile.

Desde esta posición surgen tres lineamientos generales de política:

A. Construir la economía del conocimiento es una tarea público-privada que debe basarse en un enfoque sistémico.

La economía del conocimiento debe sustentarse en tres pilares: (i) un régimen institucional y de incentivos económicos claro, coherente y estable; (ii) una fuerte capacidad de innovación, orientada a desarrollar encadenamientos productivos en torno a ventajas comparativas; y (iii) un capital humano de calidad.

Estos tres pilares están fuertemente interrelacionados entre sí, representando el primero —régimen institucional— el marco para los otros dos —capacidad de innovación y desarrollo del capital humano—, y requiriendo estos últimos de avances en paralelo. Así, sin un régimen institucional claro, coherente y estable, es improbable que existan los incentivos para invertir en el sector productivo, en actividades innovativas, o en capital humano. Por otra parte, sin una demanda por capital humano de mayor calidad por parte del sector productivo, no resulta rentable invertir en educación, o puede ser más rentable ofrecer las habilidades laborales en el exterior. Y viceversa, sin una oferta de capital humano calificado, la capacidad innovativa del sector productivo se ve limitada por su poca adaptabilidad a los cambios y por su deficiente capacidad para usar, adoptar y adaptar las tecnologías externas. Incluso, dada la desigual distribución de capital humano existente en el país, un avance sólo en progreso tecnológico implica el riesgo de exacerbar las desigualdades de ingreso. Esta estrategia de desarrollo basada en estos tres pilares es el polo opuesto de la que el

www.cepchile.cl

país siguiera entre los años 30 y los 70 —esto es, una industrialización forzada inconsistente con sus ventajas comparativas—, pero representa y requiere un salto cualitativo respecto de la situación actual en capacidad de innovación y formación de capital humano.

La institucionalidad es relevante para abordar eficientemente este salto, así como para sumar los esfuerzos públicos y privados. Es necesaria una institucionalidad que dé directrices consistentes y coordine las políticas públicas pro innovación y aquellas destinadas al desarrollo de capital humano, orientando los esfuerzos hacia objetivos estratégicos. Esta institucionalidad debe también crear los incentivos adecuados para movilizar a los distintos actores relevantes —gobierno, empresas, trabajadores, científicos, educadores, instituciones financieras, entre otros—, y desarrollar el capital social y la confianza que permita la colaboración público-privada y entre privados. En definitiva, debe ayudar a alcanzar un acuerdo social amplio en torno a la estrategia de desarrollo.

Para estos propósitos, una solución institucional eficiente pasa necesariamente por asignar claramente la responsabilidad del diseño y la coordinación de las políticas pro economía del conocimiento —responsabilidad diferente a la ejecución de programas específicos, que puede corresponder a organismos diferentes. Complementariamente, quien sea determinado como responsable debe contar también con herramientas suficientes para hacer cumplir sus directrices. En este sentido, un modelo a considerar y adaptar puede ser el seguido por Finlandia —país líder en la economía del conocimiento—, el que cuenta con un consejo ("The Science and Technology Policy Council of Finland")[60] que asesora a los distintos organismos ejecutores de programas en materias de ciencia y tecnología. Este consejo es responsable del desarrollo estratégico y la coordinación de la política nacional de ciencia y tecnología, así como del SNI como un todo. En Chile, una institucionalidad como la descrita debiese reorganizar el SNI, corrigiendo sus actuales problemas, a saber, falta de directrices, descoordinación, duplicidad de funciones, bajo esfuerzo total, dispersión de programas que no alcanzan a crear masa crítica, baja participación del sector privado, sesgo hacia la investigación básica, falta de financiamiento, "cuellos de botella" en materia de capital humano, y desconexión entre el ámbito empresarial y el ámbito investigador-académico.

[60] El consejo es presidido por el Primer Ministro y está compuesto además por siete ministros y diez personalidades destacadas en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Para mayores detalles, véase www.minedu.fi/minedu/research/organisation/sci_tech_council/sci_tech_council.html

www.cepchile.cl

B. Las políticas de fomento a la innovación deben tener justificación económica y orientarse a la competitividad.

Las políticas pro innovación presentan una base conceptual y empírica que justifica que éstas sean un ámbito de políticas públicas. Así, éstas deben abocarse a la corrección de las fallas de mercado y las fallas sistémicas que hacen que se innove menos que lo socialmente óptimo. Entre estas fallas cabe destacar la insuficiente apropiabilidad de los beneficios de las innovaciones; las asimetrías de información, altos costos de transacción y de coordinación que limitan la cooperación; las externalidades de red que impiden alcanzar masas críticas; y la alta incertidumbre no cuantificable, la intangibilidad de los activos y los mercados financieros incompletos, que limitan el financiamiento del emprendimiento innovador. Consistentemente, se debe ser estricto en evitar que las políticas pro innovación encubran intervenciones gubernamentales sin una clara justificación económica. Una aplicación concreta de este principio debe darse en el caso de las políticas de apoyo a las PYME.

En esta misma línea, las políticas pro innovación deben vincularse con ventajas comparativas reales reveladas por el propio mercado, y no pretender forzar al país a competir en sectores con improbables alternativas de éxito. Así, trabajar en torno a clusters dinámicos e innovadores construidos alrededor de recursos naturales abundantes resulta consistente con nuestras ventajas comparativas, en contraste con hacerlo en manufacturas intensivas en mano de obra semi-calificada, donde países como China e India tienen una ventaja evidente. Más aún, en vez de los encadenamientos hacia adelante, parecen más en línea con nuestras ventajas comparativas los encadenamientos hacia atrás y los costados de los sectores exportadores en que Chile ya es líder -como ha ocurrido en el caso de la salmonicultura, donde la industria de alimento de peces ya es también exportadora. Ello, por cuanto los encadenamientos hacia atrás y los costados tienen ventajas de escala y de cercanía geográfica a la demanda que los encadenamientos hacia adelante no tienen. Un claro ejemplo es la demanda por insumos y servicios para la minería del cobre, donde Chile posee más del 35% de las reservas mundiales. Un efecto adicional de esta focalización en clusters construidos en torno a recursos naturales es el desarrollo regional que conlleva, por la misma localización de estos recursos.

El enfoque de la innovación orientada a la competitividad implica también evitar asociar innovación sólo con la generación o creación de nuevas tecnologías. Si bien en los sectores en que Chile es líder puede ser necesario estar en la frontera del conocimiento, debe tenerse presente que la innovación implica principalmente adoptar y adaptar tecnologías exter-

www.cepchile.cl

nas, lo que es relevante por tener un costo significativamente menor. Esto es cierto incluso para los países desarrollados —por ejemplo, en EE.UU. los recursos destinados a adoptar tecnologías externas son 30 veces los dedicados a innovar en la frontera. Esta consideración implica que el esfuerzo innovador del país debe cambiar su foco desde la investigación básica hacia la investigación aplicada en sintonía con las necesidades empresariales. Y las políticas públicas deben ser capaces de generar los incentivos correctos para que ello ocurra.

La orientación de las políticas pro innovación a la competitividad puede requerir también un enfoque pragmático[61] y *ad hoc*[62] para resolver algunas fallas sistémicas y de mercado específicas. Este enfoque pragmático requiere de un Estado confiable, transparente y riguroso en evaluar sus intervenciones, debiendo terminarlas o reformularlas, tanto porque prueben ser ineficientes, como porque queden superadas por el desarrollo del propio mercado. En definitiva, el Estado debe ser capaz de aprender de sus errores, y evitar las "fallas de gobierno", tales como su captura por parte de grupos de interés, o el intervencionismo inconsistente con el mercado, como "la elección de sectores ganadores".

Finalmente, se recalca que el país debe materializar un mayor esfuerzo de movilización de recursos para fomentar la innovación, más allá de las ganancias de eficiencia que puedan lograrse por la racionalización del SNI. En efecto, en el ámbito de la investigación y desarrollo el país presenta un rezago significativo respecto a lo esperado para su nivel de ingreso, siendo éste mucho más dramático que lo observado en ámbitos como el gasto público en educación. En este sentido, se estima que Chile debe cerrar una brecha de al menos 2,4 puntos porcentuales del PIB para alinearse con los países líderes en innovación. En particular, el sector público debiese duplicar su gasto en investigación y desarrollo, pasando de 0,4% del PIB a 0,8%, debiendo el sector privado hacerse cargo del resto de la brecha. Esto implica que el sector público debe aumentar su esfuerzo innovador en una cifra entre US$300 millones y US$400 millones al año.

[61] El enfoque pragmático puede requerirse, por ejemplo, para solucionar las fallas que limitan el financiamiento del emprendimiento innovador. En este mercado se ha avanzado por una parte en proveer fondos públicos para apoyar la generación de ideas y, por otra, en desarrollar el mercado de capital de riesgo para que inversionistas privados puedan transformar estas ideas en negocios. Sin embargo, persiste un rezago en el desarrollo del capital semilla para el financiamiento de los primeros escalamientos de los proyectos innovadores, el que en países como Suecia e Israel —líderes en innovación— se materializa a través de la adquisición de una participación en su propiedad por parte del Estado, pero con un rol debidamente acotado por evaluaciones sistemáticas y condiciones "de salida" objetivas previamente definidas.

[62] El enfoque *ad hoc* puede requerirse, por ejemplo, para apoyar el desarrollo de clusters que enfrentan distintos "cuellos de botella" específicos a su sector.

www.cepchile.cl

C. El sistema educacional debe mejorar su calidad y equidad de acceso, con énfasis en la efectividad y focalización de los apoyos públicos.

El momento para concentrar esfuerzos en el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación es precisamente ahora, cuando los problemas de acceso a la escuela están en buena medida resueltos. Además, hoy existe una ventana de oportunidad que abre la demografía. En efecto, el largo ciclo de expansión de la población en edad escolar se encuentra próximo a terminar, disminuyendo la presión cuantitativa sobre el sistema educacional y sobre los gastos de funcionamiento del mismo. Proyecciones para el período 2005-2020 indican que si el gasto en educación continuase creciendo al ritmo de los últimos 10 años —6,1% promedio anual—, podrían alcanzarse, simultáneamente, niveles de cobertura de educación prebásica y superior equivalentes a los de países avanzados y un gasto por estudiante igual a 2,6 veces el actual.

Lo anterior, sin embargo, no asegura un avance en la calidad y equidad de la educación. Para ello son necesarias dos condiciones adicionales: primero, que los recursos incrementales no sean absorbidos por escalamientos de costos que sólo beneficien a los proveedores del sistema y, segundo, que dichos recursos sean invertidos de manera efectiva y focalizada. Esto hace necesaria una síntesis positiva de las reformas financiera y pedagógica de los últimos 25 años, lo que a su vez requiere que se dejen de lado los prejuicios ideológicos que han marcado la discusión durante muchos años y se realicen intervenciones de naturaleza distinta a las efectuadas hasta ahora.

En primer lugar, es necesario elevar las exigencias para acceder a la subvención estatal. Del mismo modo, un sistema educacional tan descentralizado como el chileno, donde la libertad que una familia tiene para elegir la escuela de sus hijos depende de la disponibilidad real de alternativas y medios para acceder a ellas, requiere de un reforzamiento de los estándares de logros de aprendizaje —entendidos como mínimos absolutos que sean a la vez una exigencia para las escuelas y una garantía para los niños que asisten a ellas. Igualmente válido en este sentido es la aplicación de estándares mínimos sobre las competencias de los docentes, lo que requiere medios de verificación o acreditación independientes y de amplias oportunidades de perfeccionamiento concentradas en la actualización de conocimientos en disciplinas sustantivas. Un sistema de estándares mínimos de logro educativo y de formación y desempeño docente requiere, además, de estímulos y sanciones para ser realmente efectivo.

www.cepchile.cl

Por otra parte, es necesario que el Estado asuma entre sus funciones la de proveer información sustantiva que apoye las decisiones de las familias. Para ello se requiere desarrollar una verdadera ficha escolar que refleje las distintas dimensiones del desempeño de la escuela y el valor que ésta agrega en los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Además, se requiere de un sistema de supervisión eficaz de las escuelas descentralizadas, rediseñando profundamente el sistema vigente.

Finalmente, si el sistema educacional va a ayudar a reducir las inequidades de origen que condicionan las capacidades de los niños para aprender, no es suficiente que se financie con una subvención uniforme. Compensar las desventajas de origen requiere de una atención más personalizada en la escuela y profesores más efectivos, apoyados por profesionales de otras áreas. Para cubrir el mayor costo que esto involucra es necesario que exista una subvención diferenciada para los niños de menores recursos.

Para responder a las demandas de la economía del conocimiento se requieren también mejoras de calidad y equidad de acceso en la educación superior. Para avanzar en esta dirección se requieren dos condiciones: primero, que los recursos liberados por el estancamiento de la población escolar no sean absorbidos por escalamientos de costos de los prestadores y, segundo, que se produzca una adecuada complementación de recursos públicos y privados en el financiamiento de la educación superior. La complementación del esfuerzo estatal con recursos privados tiene directa relación con la constatación de altas tasas de retorno privado para la inversión en educación superior, las que además se materializan en períodos más breves que para los niveles primario y secundario. Esto indica que endeudarse para financiar sus estudios superiores es una decisión altamente rentable para un individuo. Para que ello sea factible, sin embargo, es necesario resolver las fallas de mercado asociadas a la inversión en capital humano. Un efecto secundario de la viabilización de sistemas sostenibles de crédito universitario sería generar el espacio fiscal necesario para concentrar los aportes directos del estado en la aplicación de estímulos para que jóvenes de menores recursos ingresen efectivamente a la educación superior. Con todo, para ello se requiere mejorar significativamente la capacidad de focalización de estos apoyos respecto de lo que se aprecia en la actualidad.

www.cepchile.cl

BIBLIOGRAFÍA

Acemoglu, D.: "Why do New Technologies Complement Skills? Directed Technical Change and Wage Inequality". *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 113, pp. 1055-1089, nov. 1998.

Alfaro, L. y Rodríguez-Clare, A.: "Multinationals and Linkages: An Empirical Investigation". Research Department, Inter-American Development Bank, 2003.

Alternburg, T. y Meyer-Stamer, J.: "How to Promote Clusters: Policy Experiences from Latin America", *World Development*, Vol. 27 N° 9 (1999), pp. 1693-1713.

Alvarez, R.: "Explaining Export Success: Firm Characteristics and Spillover Effects". Mimeo, 2004.

Barro, R.: "Determinants of Economic Growth: Implications of the Global Evidence for Chile", *Cuadernos de Economía*, 36 (107), 1999.

Benavente, J. M.: "Antecedentes para el Diseño de una Política Tecnológica Nacional", Mimeo, 2004a.

Benavente, J. M.: "Innovación Tecnológica en Chile: Dónde Estamos y Qué se Puede Hacer". Documento de Trabajo 295. Banco Central de Chile, 2004b.

Benavente, J. M. y G. Crespi: "The Impact of an Associative Strategy on Small and Medium Enterprises in Chile". Trabajo presentado en 56th European Meeting of the Econometric Society, Lausanne, 2002.

Beyer, H. y Vergara, R.: "Productivity and Economic Growth: the Case of Chile". En N. Loayza y R. Soto (editores), *Economic Growth. Sources, Trends and Cycles.* Series on Central Banking, Analysis and Economic Policies, Banco Central de Chile, 2002.

Blomstrom, M. y Meller, P. (editores): *Diverging Paths: Comparing a Century of Scandinavian and Latin American Economic Development*. Inter-American Development Bank y Johns Hopkins University Press, 1991.

Bloom, D., Canning, D. y Sevilla, J.: "Technological Diffusion, Conditional Convergence, and Economic Growth". NBER Working Paper N° 8713, 2002.

Bosch, M., Lederman, D. y Maloney, W.: "Patenting and Efficiency: A Global View". World Bank Working Paper Nº 3024, 2004.

Braun, J., Braun, M., Briones, I. y Díaz, J.: "Economía Chilena 1810-1995: Estadísticas Históricas". Documento de Trabajo N° 187, Instituto de Economía PUC, 2000.

Bravo-Ortega, C. y De Gregorio, J.: "The Relative Richness of the Poor? Natural Resources, Human Capital and Economic Growth". Banco Central de Chile, Working Paper N° 139, 2004.

Brunner, J. J. y Elacqua, G.: *Informe Capital Humano en Chile*. Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Gobierno, 2003.

Bruton, H.: "A Reconsideration of Import Substitution". *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVI (1998), pp. 903-936.

Crespi, G y Muñoz, G.: "La Contribución del Fondo de Desarrollo e Innovación al Crecimiento Económico", CORFO, 1998.

De Ferranti, D., Perry, G., Gill, I., Guash, J. L., Maloney, W., Sánchez-Páramo, C. y Schady, N.: *Closing the Gap in Education and Technology*. World Bank, 2003.

De Ferranti, D., Perry, G., Lederman, D. y Maloney, W.: *De los Recursos Naturales a la Economía del Conocimiento: Comercio y Calidad del Empleo*. Banco Mundial, 2002.

Di Tommaso, M. y Dubbini, S.: "Towards a Theory of the Small Firm: Theoretical Aspects and some Policy Implications". Serie Desarrollo Productivo Nº 87, CEPAL, 2000.

www.cepchile.cl

Fajnzylber, F.: "Industrialización en América Latina: de la Caja Negra al Casillero Vacío". Cuadernos CEPAL N° 60 (1990).

Ffrench Davis, R.: *Entre el Neo-liberalismo y el Crecimiento con Equidad: Tres Décadas de Política Económica en Chile*. Santiago: Ediciones Dolmen, 2003.

Gallego, F. y Loayza, N.: "La Época Dorada del Crecimiento en Chile: Explicaciones y Proyecciones". *Revista Economía Chilena*, Vol. 5 Nº 1 (2002), Banco Central de Chile.

Georghiou, L., Smith, K., Toivanen, O. y Yla-Anttila, P.: *Evaluation of the Finish Innovation Support System*. Ministry of Trade and Industry of Finland, 2003.

Gerens: "FONTEC-Innovación Tecnológica: Una Evaluación de sus Beneficios Sociales". Mimeo, 1996a.

Gerens: "FONDEF-Innovación Pre-competitiva: Una Estimación de sus Beneficios Sociales". Mimeo, 1996b.

Gill, I.: "An Economic Approach to the Knowledge Economy: Technology-Skill Complementarities and their Implications for Productivity and Policy". Background paper para De Ferranti *et al*. (2003).

Hall, B.: "Investment and Research and Development: Does the Source of Financing Matter?". Working Paper N° 92-194, Department of Economics, University of California at Berkeley, 1992.

Hallberg, K.: "A Market-Oriented Strategy for Small and Médium-Scale Enterprises". IFC Discussion Paper Nº 40, World Bank, 2000.

Hao, K. y Jaffe, A.: "Effect of Liquidity on Firms' R&D Spending". *Economics of Innovation and New Technology*, 2 (1993), pp. 275-282.

Hirschman, A.: *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press, 1958.

Krugman, P.: *Geography and Trade*. MIT Press, 1991.

Lederman, D. y Maloney, W.: "Innovación en Chile: ¿Dónde Estamos?". Serie *En Foco* Nº 18, Corporación Expansiva, 2004.

Lederman, D. y Maloney, W.: "R & D and Development". Mimeo, 2003.

Lockheed, M. E. y Verspoor, A. M.: *Improving Primary Education in Developing Countries*. World Bank, 1991.

Lora, E. y Panizza, U.: "Structural Reforms in Latin America under Scrutiny". BID Working Paper N° 470, 2002.

Martin, W. y Mitra, D.: "Productivity Growth and Convergence in Agriculture and Manufacturing". En *Economic Development and Cultural Change*, 49 (2), 2001.

Matsuyama, K.: "Agricultural Productivity, Comparative Advantage, and Economic Growth". En *Journal of Economic Theory*, N° 58 (1992).

Meller, P.: *Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990)*. Editorial Andrés Bello, 1998.

Mineduc: "Competencias para la Vida: Resultados de los Estudiantes Chilenos en el Estudio PISA 2000". Unidad de Currículum y Evaluación, 2004.

Mizala, A., y Romaguera, P.: "Remuneraciones al Pizarrón". En Revista *Perspectivas en Política, Economía y Gestión*, Vol. 4, N° 1 (2000).

Mizala, A., Romaguera, P. y Farren, D.: "Eficiencia Técnica de los Establecimientos Educacionales en Chile". Documentos de Trabajo, Serie Economía N° 38, Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería Industrial, 1998.

Montero, C.: "Formación y Desarrollo de un Cluster Globalizado: El Caso de la Industria del Salmón en Chile". Serie de Desarrollo Productivo N° 145, CEPAL, 2004.

OCDE: "Estudios Económicos OCDE: Chile". Noviembre 2003.

www.cepchile.cl

Palmberg, C.: "The Transformation of the Forestry-related Industries: A Knowledge Economy Viewpoint". Mimeo, 2004.

Psacharopoulos, G. y Patrinos, H. A.: "Returns to Investment in Education: a Further Update", World Bank Policy Research Working Paper N° 2881, 2002.

Ramos, J.: "Una Estrategia de Desarrollo a Partir de los Complejos Productivos (Clusters) en torno a los Recursos Naturales, ¿Una Estrategia Prometedora?". CEPAL, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 1999.

Rodríguez-Clare, A.: "Microeconomic Interventions after the Washington Consensus". Research Department, Inter-American Development Bank, 2004.

Rodrik, D.: "Trade and Industrial Policy Reform". En *Handbook of Development Economics*, Vol. III, B, North-Holland, 1995.

Romer, P.: "Endogenous Technological Change". En *Journal of Political Economy* N° 98 (1990).

Rouvien, P.: "R&D-Productivity Dynamics: Causality, Lags, and Dry Holes". *Journal of Applied Economics*, Vol. V, N° 1, pp. 123-156, May 2002.

Sachs, J. y Warner, A.: "Natural Resource Abundance and Economic Growth". NBER Working Paper N° 5398, 1995.

Schieffelbein, E., Wolff, L. y Schieffelbein, P.: "Cost-Effectiveness of Education Policies in Latin America: A Survey of Expert Opinion". N-EDUC 109, BID, 1998.

Schmitz, H.: "Collective Efficiency: Growth Path for Small-Scale Industry". En *Journal of Development Studies*, 31 (4), 1995, pp. 529-566.

Stiglitz, J. E.: "The Role of the State in Financial Markets". World Bank Annual Conference on Development Economics, 1993.

Sunkel, O. (compilador): *El Desarrollo desde Dentro: Un Enfoque Neo-estructuralista para América Latina*. Fondo de Cultura Económica, 1991.

Tokman, A.: "Is Private Education Really Better? Evidence from Chile". Working Paper N° 142. Banco Central de Chile, 2002.

Tokman, M. y Zahler, A.: "Innovación para un Crecimiento Sostenido: Siete Lecciones para Chile". Serie En Foco Nº 20, Corporación Expansiva, 2004.

Ulloa, A.: "Clusters de Recursos Naturales en Chile: Una Opción para la Segunda Fase Exportadora". Mimeo, 2004.

Universidad de Chile: "Evaluación de Impacto Fondo de Desarrollo e Innovación". Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, 2004.

Universidad de Chile: "Evaluación de los Resultados Económicos de los Proyectos de Innovación Tecnológica Financiados por el FONTEC". CORFO, 2004b.

World Bank: "Chile, New Economy Study". Report Nº 25666-CL, 2004.

World Bank: *Priorities and Strategies for Education*. World Bank Review, 1995. □

www.cepchile.cl

ENSAYO

PRODUCTIVIDAD, DESIGUALDAD Y CAPITAL HUMANO: LOS COMPLEJOS DESAFÍOS DE CHILE

Harald Beyer

Para llegar a ser un país de alto ingreso per cápita hay que acumular capital tanto físico como humano. Esa acumulación no es automática. Por ejemplo, no se trata sólo de aumentar la escolaridad de la población sino que ésta debe venir acompañada de estándares de calidad (llamémoslos aprendizajes y destrezas) mínimos. Si éstos no se logran, la acumulación de capital humano estará muy por debajo de lo que, por ejemplo, sugiere la escolaridad de la población. Algo análogo se puede decir respecto de la acumulación de capital físico. En la medida que, en alguna proporción, ésta sea el fruto de distorsiones en la economía, su efecto sobre el crecimiento será menor de lo que podría desprenderse del análisis independiente de su magnitud.

Por eso es que una mirada meramente cuantitativa de la inversión o de la educación nos entrega una mirada limitada de la capacidad de un país para, por ejemplo, crecer o reducir los niveles de desigualdad. La acumulación de capital tanto físico y humano sirve de poco si los países no son capaces de desarrollar un conjunto de políticas e instituciones que, por una parte, aseguren fehacientemente que los

HARALD BEYER. Investigador y Coordinador Académico del Centro de Estudios Públicos. Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Ph.D. en Economía, Universidad de California, Los Ángeles.

Estudios Públicos, 97 (verano 2005).

recursos invertidos serán transformados en capital productivo y, por otra, permitan aprovechar eficientemente ese capital. Las diferencias en el grado de desarrollo de los países tienen mucho que ver con las diferencias en esas instituciones y políticas.

Teniendo esos antecedentes a la vista este estudio reflexiona, a la sombra de un marco general, sobre el desarrollo de la economía chilena en las últimas décadas. En particular se analiza el crecimiento de la misma y la elevada desigualdad que hay en Chile. Se hace ver que en los últimos 50 años la economía chilena ha progresado, en términos relativos, de manera aún insuficiente, y se plantea que sigue siendo un desafío acumular capital. Se hace un análisis especial de las deficiencias educacionales por su impacto tanto en la acumulación de capital humano como en la desigualdad de los ingresos.

1. Introducción

La pregunta de por qué algunos países son ricos y otros pobres ha sido central desde, por lo menos, los tiempos de Adam Smith. No podría ser de otra manera porque las diferencias para la población de vivir en un grupo u otro de países son enormes. La pregunta cobra relevancia con el paso del tiempo porque si fijamos como punto de partida el año 1776, año en que se publica "La Investigación en la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones", las diferencias de ingreso per cápita entre países no han hecho más que aumentar. De acuerdo a Maddison (2001), hacia 1820 Europa Occidental tenía un ingreso per cápita promedio de 1.232 dólares (medido en dólares de 1990 ajustados por poder de compra)[1], América Latina de 665 dólares y África de 418. En promedio los países ricos tenían un ingreso per cápita que triplicaba al de los países pobres. Hacia fines del siglo 20 los países europeos tenían un ingreso per cápita que se acercaba a los 18 mil dólares mientras que los latinoamericanos se empinaban a los 4.350 y los africanos sólo a los 1.370 dólares. Ahora en promedio los países más ricos tienen un ingreso per cápita que, excluyendo los extremos, es 20 veces mayor que el de los países pobres.

Estas diferencias, en su gran mayoría, no se produjeron durante el siglo XIX sino que, en gran medida, como veremos en la tercera sección, se amplificaron durante la segunda mitad del siglo pasado. Ese período distinguió claramente entre los países que se quedaron fuera del carro del

[1] La metodología se explica en Maddison (2001), especialmente páginas 170-175.

www.cepchile.cl

desarrollo de aquellos que se subieron. Chile, como veremos, no se subió con propiedad, pero tampoco se quedó abajo, debido en gran parte al desempeño que exhibió en el último cuarto del siglo. El desafío en las próximas décadas es mantener el ritmo de los últimos años más que el promedio de las últimas décadas. Es en este contexto donde parece jugar un papel clave la acumulación de capital humano del país y, especialmente, el crecimiento de la productividad.

Voy a tratar de argumentar, de una manera informal, que ambos fenómenos pueden tener una retroalimentación significativa, especialmente por el freno que puede imponer la falta de capital humano al desarrollo de nuevos procesos productivos y, a través de esta vía, a las ganancias de productividad que puede generar la economía. Éstas, después de todo, provienen en una proporción importante de un mejor uso de los recursos productivos. Para ver esto de una manera simplificada piénsese la economía de una forma muy descentralizada. En ese caso, a nivel de una planta el valor del producto tiene que ser igual al pago a los factores productivos[2]. Para una planta i, por ejemplo, tiene que ser cierto que:

$$P_i * q_i = w_i * L_i + r_i * K_i, \qquad (1)$$

donde P_i y q_i representan el precio y la cantidad de producto, respectivamente. Por otra parte, w_i y r_i representan el precio del trabajo (L) y del capital (K), respectivamente. Sin que ello afecte este planteamiento nos hemos limitado a sólo dos factores productivos. El producto de una economía corresponde a la suma de los valores producidos por todas las plantas existentes. Entonces, la producción de la economía (si se quiere el PIB de ella) se puede representar como sigue:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i y_i = \sum_{i=1}^{n} w_i l_i + \sum_{i=1}^{n} \rho_i k_i \qquad (2)$$

donde n representa el número de plantas existentes en la economía. Es importante recordar que la medida aquí definida no es una de ventas de la empresa sino de valor agregado. Si se quiere introducir algún grado de dinamismo a esta economía simplificada en el contexto de lo que se está planteando y se mantiene el supuesto de que el valor del producto se destina íntegramente al pago de los factores productivos, se puede plantear

[2] Por supuesto, asumiendo que hay retornos constantes a la escala, esto es que el valor del producto se destina íntegramente al pago de los insumos productivos.

www.cepchile.cl

que los cambios totales en el valor del producto tienen que ser compensados por cambios en los pagos a los factores productivos tal como se señala en la expresión siguiente, donde el símbolo Δ representa variación en la variable que lo acompaña (como siempre, son cambios pequeños):

$$\sum_{i=1}^{n} p_i \Delta y_i + \sum_{i=1}^{n} y_i \Delta p_i = \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta l_i + \sum_{i=1}^{n} l_i \Delta w_i + \sum_{i=1}^{n} \rho_i \Delta k_i + \sum_{i=1}^{n} k_i \Delta \rho_i \qquad (3)$$

Para seguir adelante conviene recordar que el crecimiento de la productividad total de los factores es aquella parte del crecimiento de la economía que no es explicada por la acumulación de los factores productivos, esto es, capital y trabajo. Reordenando términos en la expresión anterior, se obtiene una nueva igualdad que se expresa a continuación:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i \Delta y_i - \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta l_i - \sum_{i=1}^{n} \rho_i \Delta k_i = R = \sum_{i=1}^{n} l_i \Delta w_i + \sum_{i=1}^{n} k_i \Delta \rho_i - \sum_{i=1}^{n} y_i \Delta p_i \qquad (4)$$

La expresión del lado izquierdo corresponde, ahora a nivel descentralizado, a lo que habitualmente se estima como el residuo (R) no explicado por la acumulación de los factores o más comúnmente como productividad total de los factores. Si nos detenemos en la expresión de la derecha podremos comprobar que la única forma de que R sea positivo, es decir que exista crecimiento de la productividad, es que haya ganancias en eficiencia. Por ejemplo, ante un aumento equivalente en los precios de los factores productivos habrá un valor positivo de R si el precio del producto aumenta en una menor proporción. Para que ello sea posible y tenga sentido tendrá que ocurrir alguna reasignación de esos recursos productivos que permite "financiar" esa ganancia en eficiencia. En la medida que existan barreras a esa reasignación esas ganancias no podrán concretarse y, por tanto, tampoco podrá materializarse un crecimiento de la productividad total de los factores, dañando el crecimiento de la economía.

Este crecimiento en la productividad es fundamental, además, por su impacto en la acumulación de capital. Para entenderlo piénsese en el modelo tradicional de crecimiento de Solow (1956). Si ocurre por una vez un cambio tecnológico neutral a la Hicks —esto es, un aumento de eficiencia que aumenta el producto en igual proporción para todas las combinaciones posibles de insumos— el stock de capital aumentará también por una vez y el producto será más alto como consecuencia del aumento en la

www.cepchile.cl

productividad y la acumulación de capital. Si se intentase explicar ex post este aumento en el producto a través de un ejercicio contable de crecimiento como el que subyace al lado izquierdo de la ecuación (4) atribuiríamos una parte del mismo a la acumulación de capital, pero ciertamente ésta no se habría concretado de no ocurrir ese cambio tecnológico. Este planteamiento teórico parece tener asidero empírico. Por ejemplo, Grossman y Helpman (1994) demuestran que las tasas de crecimiento de la productividad difieren entre países y que éstas están correlacionadas con la tasa de inversión en una muestra de 22 países en el período 1970-88. Un análisis del sector manufacturero chileno realizado por Beyer (2001) sugiere también que los crecimientos en la productividad incentivan nuevas inversiones y contrataciones adicionales (la medición es empleo ajustado por capital humano).

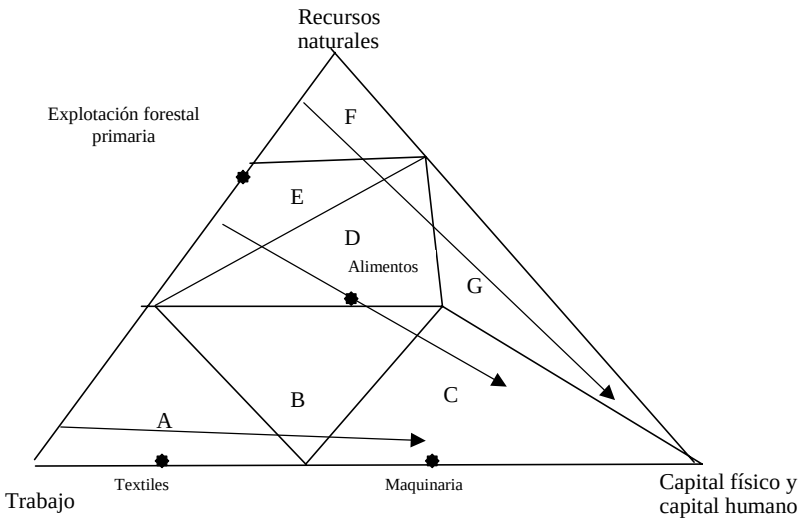
El positivo ciclo de crecimiento de la economía chilena entre 1985 y 1997 posiblemente estuvo marcado por un círculo virtuoso de alto crecimiento en la productividad, documentado en diversos estudios, que alimentó la acumulación de capital. Hasta ahora la relación de lo que hemos planteado con la desigualdad no es evidente, pero en la sección dos intentaremos establecer el nexo. En términos simples, el patrón de desarrollo de la economía chilena (en gran medida de las economías latinoamericanas), como consecuencia de la abundancia relativa de recursos naturales, puede pasar por una etapa de alta desigualdad y mantenerse en esa situación durante un período prolongado si no va acompañado de una acumulación rápida de capital humano. Si ello no ocurre se frena el paso a niveles mayores de desarrollo a través de dos vías potenciales. Por una parte, se frena la posibilidad de pasar a una etapa superior de desarrollo que involucra la producción de bienes más sofisticados de mayor valor agregado y, en segundo lugar, se frena ese círculo virtuoso de alto crecimiento en la productividad —hay tecnologías que no pueden absorberse por falta de capital humano— y acumulaciones posteriores de capital que aceleran el crecimiento. En esas circunstancias se mantiene también un alto premio al capital humano y a los dueños de los recursos naturales y bajos salarios para el trabajo poco calificado. Esto se aborda con más precisión en la sección 2. En la sección tres se hacen algunas reflexiones muy breves sobre el desarrollo chileno de las últimas décadas y las dificultades que existen, desde el punto de vista de los modelos de crecimiento, para explicar el insuficiente nivel de ingreso per cápita del país. La sección cuatro aborda algunos desafíos en educación teniendo en cuenta que se debe dar un gran impulso a la creación de capital humano.

www.cepchile.cl

2. Desarrollo y desigualdad: una visión simplificada

Necesitamos un marco mínimo indispensable para visualizar las interacciones que ocurren entre desigualdad y desarrollo y el papel que cumple el capital humano en este proceso. Para avanzar en la definición de este marco se utiliza la Figura N° 1 que sigue muy de cerca a Leamer (1987) y Leamer *et al.* (1999). La interpretación de la figura puede parecer algo compleja pero no lo es tanto una vez que se aprecian los elementos esenciales de ella.

FIGURA N° 1: SIMULACIÓN DE POSIBLES ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS DE LA ECONOMÍA



Los vértices representan tres factores de producción: trabajo, recursos naturales (ampliamente definidos) y capital (tanto humano como físico[3]). Las disponibilidades de estos tres factores productivos en un determinado país y la intensidad de uso de los mismos se representan en esta figura por un punto. La acumulación de un factor productivo (digamos capital), manteniendo fijos los otros factores productivos, significa un desplazamiento del punto de dotaciones de un país hacia el vértice respectivo (del capital). Esto significa que sobre una línea que pase por el vértice del

[3] Es extensa la literatura que sugiere un alto grado de complementariedad entre ambos tipos de capital. Véase, por ejemplo, Goldin y Katz (1998).

www.cepchile.cl

capital, la relación entre recursos naturales y trabajo se mantiene constante. Esto permite medir en los bordes del triángulo las razones entre los distintos factores productivos. Así a lo largo del borde inferior se representa la relación capital-trabajo. Se desprende de la figura que, por ejemplo, la producción de maquinaria necesita relativamente más capital que la de textiles. Sobre el borde izquierdo se representa la razón entre recursos naturales y trabajo y en el borde derecho la relación entre capital y recursos naturales. El desarrollo consiste, a grandes rasgos, en un proceso de acumulación de capital que lleva a los países a desplazarse desde el borde izquierdo en dirección al vértice del capital.

Las áreas geométricas definidas por las letras A ... F representan conos productivos. El cono productivo en el que se encuentre un país en cada momento de su desarrollo se determina por su dotación de factores, esto es: trabajo, recursos naturales y capital (definido ampliamente como capital físico y humano aprovechando la creciente literatura que evidencia complementariedad entre ambos). En los inicios se puede asumir que la partida es sobre el borde izquierdo de la figura en función de sus dotaciones iniciales de trabajo y recursos naturales. Un país como Corea, por ejemplo, con abundante trabajo y pocos recursos naturales estará posicionado muy cerca del vértice del trabajo. Un país como Australia, de abundantes recursos naturales y poco trabajo, partirá su desarrollo más cerca del vértice de recursos naturales. En cada uno de estos conos productivos se satisface el teorema de la igualación de los precios de los factores productivos porque los países que lo integran tienen similares dotaciones de factores y, posiblemente, acceso a las mismas tecnologías. En estos conos, como el *mix* de producción está fijo, los cambios en la oferta de los factores no afectan sus precios.

En general, un país que es abundante en trabajo y recursos naturales producirá más hacia la izquierda de la Figura Nº 1 (digamos en el punto que une a las áreas geométricas A, B y D). Un país que es relativamente abundante en capital, que en este esquema es desarrollado, estará posicionado más a la derecha en esta figura (digamos en los conos productivos G o C). Mientras más cerca está un país de alguno de los vértices más abundante es ese recurso y, por tanto, menor el precio relativo del factor productivo que aparece en el vértice. Así en A, el salario que obtiene el trabajo es menor que aquel que obtendría en D. En cualquiera de esos conos el premio al capital es elevado (estamos muy alejados del vértice que representa al capital) y, por tanto, cabe esperar un nivel de desigualdad relativamente alto.

www.cepchile.cl

Pensemos en este contexto en el desarrollo chileno. Parece razonable pensar que en sus inicios este parte en el cono E amparado, básicamente, en recursos naturales y trabajo. La abundancia relativa de recursos naturales permite sostener salarios relativamente altos para el trabajo no calificado sobre la base de, por ejemplo, una agricultura primaria, explotación bruta de árboles (tala indiscriminada de bosques) y una minería muy rudimentaria[4].

El paso siguiente es poner algo de capital en este proceso de desarrollo. La acumulación de capital nos desplaza hacia una industria basada en los recursos naturales que es más intensiva en capital y produce a gran escala, economizando en trabajo poco calificado que gradualmente es reemplazado por trabajo más calificado. En términos de la Figura N° 1 esto significa desplazarse desde E a D. Este paso mantiene un alto premio para los dueños del capital físico y humano y eleva los retornos para los dueños de los recursos naturales, al mismo tiempo que hace caer relativamente los salarios de los trabajadores poco capacitados (el patrón de desarrollo nos empuja más cerca del vértice del trabajo)[5]. Esta etapa es ciertamente la de mayor desigualdad relativa y coincide con el hecho de que, en el margen, algunas industrias deben competir con las de países que tienen salarios relativos muy bajos (países que están en el cono productivo B). Para ser competitivos no pueden pagar salarios muy altos a no ser que la economía sea mucho más productiva, pero no es evidente que eso pueda lograrse con facilidad.

Esta realidad se puede contrastar con los patrones de desarrollo de países de pocos recursos naturales que parten en un cono productivo como A. En estos casos no hay recursos naturales que remunerar y los salarios son relativamente muy bajos. Inicialmente los premios al capital son relativamente altos, pero el proceso de desarrollo supone una acumulación gradual de capital físico y humano y, como consecuencia de ello, un alza desde el principio de los salarios relativos de los trabajadores poco calificados y reducción gradual (a medida que nos acercamos al vértice del capital) de los premios al capital. Es, por consiguiente, un patrón de desarrollo que no supone grandes niveles de desigualdad. Ahí están los casos de Corea, Japón, Taiwán y Hong Kong para corroborar este fenómeno. Han

[4] Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de salarios relativamente altos para el trabajo no calificado estamos haciéndolo en el contexto del bajo nivel de desarrollo que tiene el país en esa etapa. En ese sentido pueden ser salarios que apenas o ni siquiera son de subsistencia.

[5] Esto no significa necesariamente una caída de sus salarios reales aunque sí un deterioro relativo.

www.cepchile.cl

tenido un desarrollo acelerado manteniendo un bajo nivel de desigualdad. Pero, ¿tiene este análisis teórico un sustento empírico mayor que estos casos anecdóticos? En Leamer *et al.* (1999) hay interesante evidencia que establece persuasivas correlaciones entre desigualdad y estructura productiva de los países.

Siempre cabe la pregunta de si no es posible cambiar nuestro patrón de desarrollo. Esto es equivalente a preguntarse si podemos alterar nuestras dotaciones de recursos productivos. Podríamos intentar aislarnos del mundo, pero la experiencia sugiere que esa opción tiene un costo enorme en términos de crecimiento y no escapa a las presiones que sobre la distribución de los ingresos tiene la realidad productiva del país. El camino más razonable es intentar salir rápidamente del cono productivo D y desplazarnos a uno como C. Ahí tenemos una economía muy distinta que es compatible con menores premios al capital y mayores salarios relativos para el trabajo no calificado. Los recursos naturales ya no se utilizan tan intensivamente y pierden importancia a estas alturas del desarrollo. Se genera un cuadro, entonces, donde los niveles de desigualdad se han reducido. Además, por haber más capital disponible es una situación de mayor ingreso per cápita. En este sentido si logramos superar el actual estado de las cosas es altamente probable que comencemos a observar reducciones importantes en los actuales niveles de desigualdad.

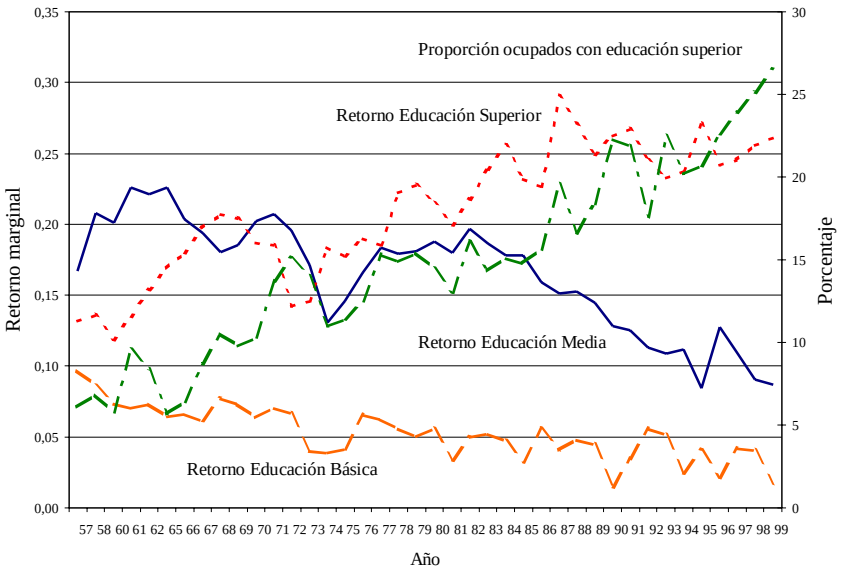
Sin embargo, y aquí nos enfrentamos a una barrera importante, requerimos un buen nivel de capital humano para avanzar en esta dirección. Sin un buen sistema educacional difícilmente se podrá lograr dicho propósito. Una fuerza de trabajo calificada atraerá nuevas tecnologías y más capital. No es casualidad que países como Suecia y Finlandia, que hasta bien avanzado el siglo 20 eran principalmente exportadores de materias primas, exhiban desarrollos tecnológicos significativos y al mismo tiempo obtengan excelentes resultados en diversas pruebas internacionales de educación. Parte del problema de Chile en esta etapa es que hasta aquí no ha sido realmente imprescindible contar con elevados niveles de capital humano. Es ahora donde comienza a importar y es difícil reformular el marco institucional para acoger esos desafíos. La situación es muy distinta de la observada, por ejemplo, en los países asiáticos antes mencionados. En esos casos la necesidad de capital humano se hizo evidente desde los inicios del proceso de desarrollo. Debe haber habido, por consiguiente, una preocupación muy temprana por alcanzar altos estándares educativos.

Una muestra de la escasez de capital humano en el país queda reflejada en el Gráfico Nº 1 que presenta la evolución de los retornos

www.cepchile.cl

marginales de un año de educación para distintos niveles educativos[6]. Se ve con claridad que ha aumentado en forma significativa el retorno de la educación superior, especialmente en las últimas dos décadas mientras que los retornos a la educación primaria y secundaria han caído en forma dramática. Es difícil entender esta evolución en los premios a distintos tipos de educación, más todavía cuando durante el período analizado este fenómeno ha ido acompañado de un aumento significativo en la oferta relativa de ocupados con estudios terciarios.

GRÁFICO N° 1: RETORNOS DE DISTINTOS TIPOS DE EDUCACIÓN Y OFERTA RELATIVA DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS (GRAN SANTIAGO)



Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas de empleo de la Universidad de Chile, junio de cada año.

Estos números son compatibles con la idea de un desplazamiento en el proceso de desarrollo que eleva el precio relativo del capital y reduce los salarios relativos de los trabajadores menos calificados. Para salir de este estado de cosas es imprescindible acumular más capital humano. Los altos

[6] Se estima un modelo de capital humano a la Mincer que acepta que el retorno de un año adicional de educación es distinto en la básica, que en la media o la universitaria. Mayores detalles se pueden encontrar en Beyer (2000).

www.cepchile.cl

premios a la educación terciaria son desde luego un gran incentivo para producir descentralizadamente las inversiones requeridas. De hecho, en Chile se han observado importantes aumentos de cobertura, aunque permanecen obstáculos que tienen que ver con la falta de un sistema adecuado de financiamiento de la educación superior que signifiquen impulsos adicionales a la formación de capital humano. En términos prácticos estas cifras sugieren que el ritmo al que se está formando capital humano es insuficiente para absorber la demanda por el mismo. Este cuadro es compatible, además, con el resultado del teorema de la igualación de los precios de los factores que defiende la idea de que cambios en la oferta relativa de alguno de los factores no afectará el precio de los mismos.

Por cierto, hay explicaciones alternativas para estos altos premios a la educación superior. Éstas parten de la observación de que el alza relativa en el premio a esta modalidad educativa ha ocurrido en un número suficientemente grande de países como para intentar una explicación de carácter más general. Dos parecen ser los principales candidatos: el fuerte ingreso de países de poco desarrollo y bajos salarios a un escenario de intercambio comercial creciente y cambios tecnológicos sesgados en pro de trabajadores calificados. La evidencia no es del todo convincente, especialmente en el caso de aquella que descansa sobre el intercambio comercial. Borjas *et al.* (1997) han estimado que este hecho podría explicar no más del 20 por ciento del alza en el premio salarial de los trabajadores más calificados en Estados Unidos, el país donde el premio relativo para los graduados de la educación superior ha subido más respecto de otros países industrializados. La segunda hipótesis parece tener mayor asidero. Si sube el precio relativo de los trabajadores más calificados cabría esperar que las empresas realizaran en algún grado una sustitución de estos trabajadores[7]. Sin embargo, como demuestran Berman *et al.* (1998) lo que se observa, en países con instituciones del mercado laboral muy distintas, es más bien una mayor contratación relativa de trabajadores calificados y que la proporción más grande de este cambio proviene de cambios al interior de las industrias antes que entre industrias, lo que sugiere un aumento relativamente generalizado de la demanda por trabajadores calificados, que acota de paso la explicación de los flujos comerciales.

Esta tendencia también parece estar presente en Chile. Entre 1979 y 1986, en la industria manufacturera chilena, Pavncik (2003) encuentra que la proporción de empleo calificado subió en un 16,8 por ciento y que el premio a este empleo subió un 10,6 por ciento. Este cambio ocurrió princi-

[7] Existe debate respecto de si se pueden sustituir con efectividad ambos tipos de trabajadores.

www.cepchile.cl

palmente al interior de cada una de las industrias más que entre industrias, corroborando los antecedentes internacionales informados en Berman *et al.* En efecto, un 89 por ciento en el desplazamiento hacia trabajadores calificados se explicaría en esos años por los cambios ocurridos al interior de cada industria. Sin embargo, este estudio no encuentra que este desplazamiento hacia trabajadores más calificados tenga su origen en cambios tecnológicos. Las demandas por trabajadores más calificados parecen tener su origen en incrementos en la inversión de las plantas analizadas. Por cierto, no se puede descartar que detrás de ambos fenómenos, aumentos en empleo calificado e inversión, haya una causa común que es un aumento en la productividad total de los factores. Para un período distinto, 1986-1996, Beyer (2002) estima crecimiento en la productividad total de los factores a nivel de plantas y demuestra que estos crecimientos anticipan aumentos en la inversión y en capital humano[8]. Para alimentar el crecimiento, entonces, es indispensable aumentar la productividad, pero también tener disponible el capital humano para sostener ese proceso y, simultáneamente, avanzar hacia mayores niveles de igualdad.

3. Algunas consideraciones sobre el desempeño económico de Chile

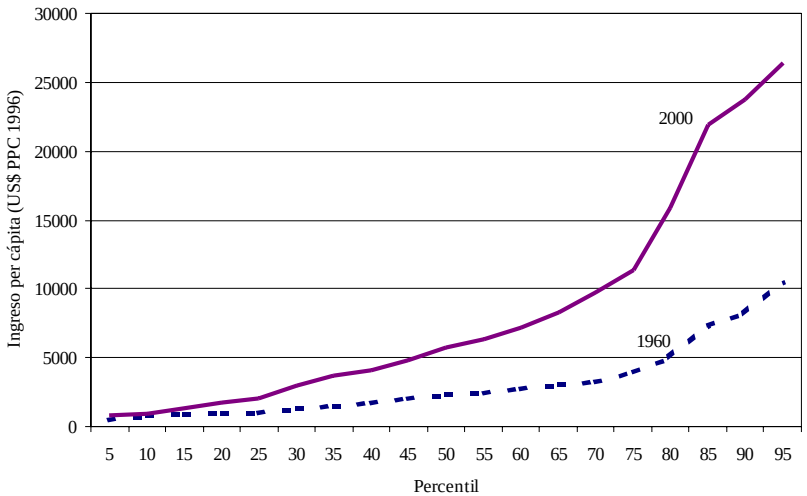
Planteábamos al comienzo que el mundo se ha hecho más desigual en los últimos 200 años. Ese no es el resultado de mayores desigualdades al interior de los países sino que el resultado de diferencias más grandes en los ingresos per cápita entre países. La desigualdad intrapaíses se habría reducido hacia 1950 y luego se habría mantenido relativamente constante con una pequeña subida en los 80. En cambio la desigualdad entre países prácticamente no ha dejado de aumentar desde 1820. Según Bourguignon y Morrison (2002), entre 1820 y 1992 el ingreso medio de los habitantes del mundo se multiplicó por 7,6. Sin embargo, el del decil superior lo hizo en 10 veces mientras que el del quintil inferior lo hizo sólo en 3 veces. Con todo, la pobreza extrema habría caído desde un 84 por ciento en 1820 a un 24 por ciento en 1992.

Esta tendencia hacia una mayor desigualdad en el ingreso per cápita entre países queda de manifiesto en el Gráfico Nº 2 que ordena a los países de menor a mayor ingreso per cápita. Se observa en este lapso de cuatro

[8] En este estudio se utiliza una medida de empleo expresada en términos de unidades básicas de capital humano. Por tanto, los cambios en la contratación se miden en términos de incrementos o decrecimientos en la contratación de esas unidades de capital humano.

www.cepchile.cl

GRÁFICO Nº 2: INGRESO PER CÁPITA DE PAÍSES EN 1960 Y 2000 ORDENADOS DE MENOR A MAYOR



Fuente: Elaboración propia sobre la base de World Penn Tables v. 6.1

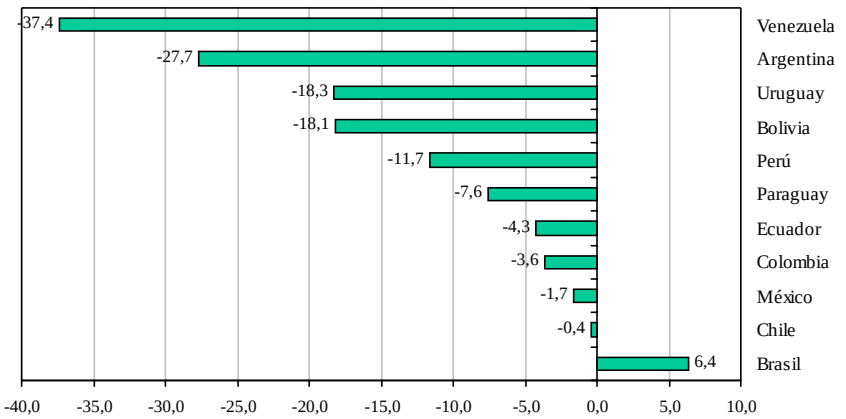
décadas un aumento en la brecha entre países ricos y pobres. Por cierto, hay países que logran avanzar pero otros se estancan, y queda la sensación que en el futuro podría haber dos grupos de países claramente diferenciados: los ricos y los pobres. Esa posibilidad ciertamente llama a la reflexión e invita a estar permanentemente revisando la pregunta que intentaba responder hace más de 200 años Adam Smith.

Viendo este heterogéneo panorama de crecimiento de las economías, parece pertinente indagar por el desempeño relativo de la economía chilena en las últimas décadas. En el Gráfico Nº 3 se estudia si Chile y, en general, las economías latinoamericanas han cerrado la brecha, en términos de ingreso per cápita, respecto de Estados Unidos, o la han aumentado. Este país como un referente central de las economías más ricas. El panorama no es demasiado alentador. Con la excepción de Brasil, que ha acortado distancias con Estados Unidos, los demás países o bien han mantenido las distancias relativas —el caso de Chile y México— o han retrocedido, en algunos casos en forma dramática como Venezuela.

El Gráfico Nº 4 divide este medio siglo en dos subperíodos de igual duración. Se ve con claridad que para el caso de Chile ambos períodos suponen un desempeño muy distinto. En particular, el segundo subperíodo marca un claro contraste con las economías latinoamericanas. Es este des-

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 3: ¿CONVERGENCIA EN INGRESO PER CÁPITA RESPECTO DE ESTADOS UNIDOS? (CAMBIOS EN BRECHA: PUNTOS PORCENTUALES)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de World Penn Tables V. 6.1.

empeño el que permite estar optimista respecto de las potencialidades de la economía chilena. Los últimos 25 años estuvieron marcados por una apertura comercial mayúscula y una serie de reformas que cambiaron drásticamente la calidad de las políticas económicas. La recuperación de la democracia en la última década le dio un impulso definitivo al nuevo marco económico, otorgándole no sólo legitimidad sino que también profundizándolo y perfeccionándolo en muchos aspectos.

El acortamiento de la brecha en el ingreso per cápita respecto de Estados Unidos es el resultado, como se aprecia en el Gráfico Nº 5, de una aceleración en el crecimiento de la economía.

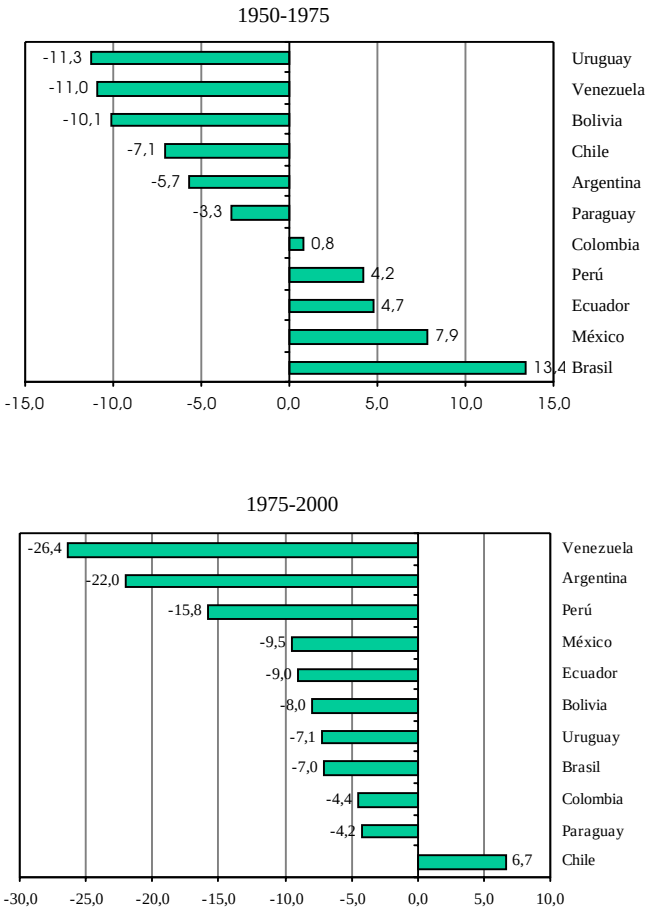
El Gráfico Nº 6 sugiere que esta aclaración en el crecimiento tiene como causa principal fuertes aumentos en la productividad[9]. Hasta un 40 por ciento de ese crecimiento podría ser explicado por esta variable y habida cuenta de la influencia que parece ejercer el crecimiento de la productividad sobre la acumulación de factores, esa magnitud puede estar subestimada.

El Gráfico Nº 6 deja en evidencia, además, que durante el proceso de fuerte crecimiento de la productividad la razón capital-producto retroce-

[9] Una explicación de la forma de cálculo de los niveles de productividad y de la relación capital producto que aparecen en este gráfico se encuentra en Beyer (2003).

www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 4: DOS TENDENCIAS DISTINTAS EN CONVERGENCIA



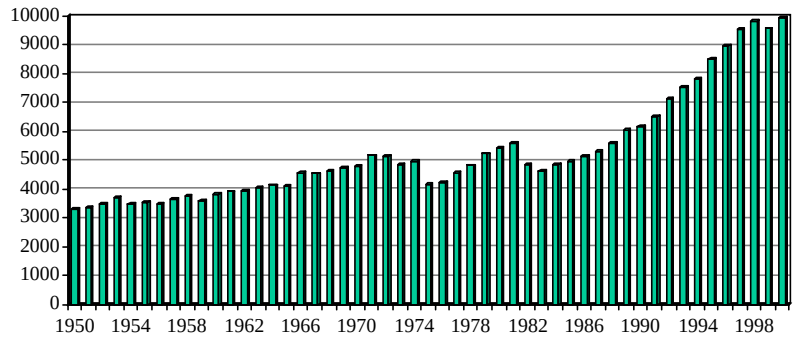
Fuente: Elaboración propia sobre la base de World Penn Tables V. 6.1.

de, avalando la idea de que este impulso se basa, al menos parcialmente, en un uso más eficiente de los factores disponibles. Para avanzar un poco más en el reconocimiento de la productividad como un factor central en el crecimiento del ingreso per cápita conviene plantear un modelo un poco más formal de crecimiento. Para estos efectos piénsese en una función de producción para el país i en el momento t como la que sigue:

$$Y_{it} = K_{it}^{\alpha} (H_{it} A_{it})^{1-\alpha}$$

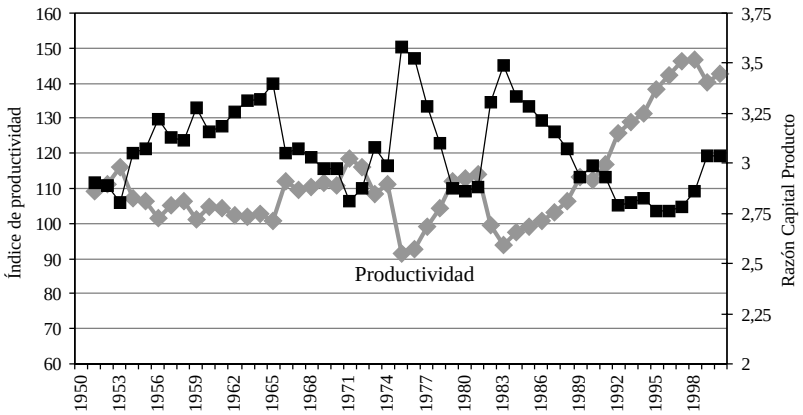
www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 5: LA EVOLUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
(Dólares de 1996 ajustados por el poder de compra)



Fuente: Elaboración propia sobre la base de World Penn Tables v. 6.1.

GRÁFICO N° 6: LA IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CRECIMIENTO RECIENTE DE CHILE



Fuente: Elaboración propia sobre la base de World Penn Tables v. 6.1 y Beyer (2003)

donde Y_{it} es el nivel de producto, K_{it} es el stock de capital, H_{it} es el stock de capital humano y A_{it} representa una tecnología que eleva el aporte productivo del trabajo y que crece exógenamente a una tasa g. A_{it} podría representarse en la práctica como $A_{oi}(1+g)^t$. En este modelo sencillo α es la participación del capital en el producto. Para hacerlo simple se puede suponer que:

www.cepchile.cl

$$H_{it} = L_{it} * h_{it}$$

donde L representa trabajo bruto y h es una expresión que captura las habilidades promedios de esos trabajadores. Blis and Klenow (2000) sugirieron la siguiente expresión:

$$h_{it} = e^{\phi(s_{it})}$$

donde s_{it} denota la escolaridad promedio de la población económicamente activa. De manera más concreta, estos autores sugieren la siguiente forma funcional:

$$\phi(s) = \frac{\theta}{1-\psi} s^{1-\psi}$$

con valores $\theta = 0.32$ y $\psi = 0.58$. Hecho este planteo general, se puede intentar comprender las implicancias para la economía chilena de este modelo. Expresando la primera de estas ecuaciones en términos de unidades de producto por trabajador, tenemos:

$$y_{it} = k_{it}^{\alpha} (h_{it} A_{it})^{1-\alpha}.$$

Partiendo de la expresión anterior se puede tratar de entender las diferencias del producto por trabajador entre países. En principio, dados los supuestos iniciales, A_{it} no debería exhibir grandes diferencias entre países. Sí hay diferencias en k y h. Usando los antecedentes recopilados por Summer y Heston en las World Penn Tables (específicamente la versión 6.1) y utilizando el método de inventarios perpetuos se pueden construir las series de stock de capital por trabajador para un grupo importante de países. Por otra parte, la base de datos compilada por Barro y Lee contiene información sobre la escolaridad promedio de la población de 15 años y más (y 25 años y más) para una muestra de más de 100 países. Utilizando estos datos se puede intentar predecir las diferencias de ingreso por trabajador entre países[10]. Si se hace ese ejercicio para Chile y Estados

[10] Hay una discusión mucho más detallada aunque más técnica en Beyer (2003). Habitualmente esta comparación se hace en el estado estacionario, es decir en aquel momento en que el producto por trabajador crece solamente a la tasa a la que se expande exógenamente la tecnología. Se puede demostrar que, dadas las formas funcionales aquí expuestas, en el estado estacionario el ingreso por trabajador se representa como

$$y^*(t) = (s/(n+\delta+g))^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} hA(t).$$

Esta particular forma funcional obedece a que se asume que la escolaridad es constante y determinada exógenamente. En el estado estacionario, entonces, el nivel de producto dependería de la tasa de ahorro de los países, de su nivel de capital humano y de su nivel de productividad, que en el modelo, está implícito, es similar entre países.

www.cepchile.cl

Unidos, por ejemplo, y se asume un valor de α de entre 0,33 y 0,45 (compatibles con la participación del capital en el producto una vez que se da cuenta del trabajo informal o por cuenta propia que incorrectamente suele imputarse como ingreso del capital), uno arriba a la conclusión de que en el año 2000 el producto por trabajador debería haber sido en nuestro socio comercial entre un 62 y un 69 por ciento más alto que en Chile. Sin embargo, los datos efectivos para ese año indicaban que el producto por trabajador era un 157 por ciento más alto en el país del norte que en nuestro país (todos los datos pertinentes están en dólares ajustados por la paridad del poder de compra).

Probablemente las diferencias predichas en el producto por trabajador aumentarían si utilizáramos un mejor indicador de capital humano que esta forma funcional asociada a la escolaridad promedio de la población. Las diferencias de capital humano entre ambos países posiblemente son mucho mayores de las que sugieren las diferencias en escolaridad. Aun así las diferencias efectivas seguirían siendo mucho mayores que las predichas. Con todo, cabe hacer notar que dado los valores realistas de α, inferiores a 0.5, las diferencias en el stock de capital humano aportarían relativamente más a explicar las diferencias en el ingreso per cápita entre países que las diferencias en el stock de capital. El principal factor detrás de este yerro en la predicción de las diferencias en los ingresos per cápita parece estar en la "ingenuidad teórica" de suponer que A(t) es aproximadamente similar entre países, lo que equivale a argumentar que el progreso tecnológico (o si se quiere el crecimiento de la productividad) es efectivamente exógeno y que como consecuencia de ello todos los países expanden su frontera de producción al mismo ritmo, esto es, que las diferencias en el ingreso per cápita serían finalmente sólo el resultado de diferencias en los stocks de capital humano y físico. No era eso lo que sugería el Gráfico Nº 6 que mostraba una evolución cambiante de la productividad en las últimas décadas. El crecimiento de esta variable difiere, además, significativamente de un país a otro. Hay una larga lista de factores que pueden influir en este dispar desempeño, algunos de ellos difíciles de sustentar empíricamente, aunque pocos dudan que las políticas y las instituciones juegan, al respecto, un papel crucial. El desafío para un país como el nuestro es asegurarse que su inversión en educación se traduzca efectivamente en mayores niveles de capital humano y que sus instituciones y políticas faciliten el crecimiento de la productividad y no le impongan costosas barreras.

www.cepchile.cl

4. La necesidad de un marco institucional distinto en educación

4.1 Consideraciones preliminares

En diversos pasajes de este artículo ha ido quedando de manifiesto el papel central del capital humano en el progreso del país y la contribución que éste puede hacer a reducir las desigualdades de ingreso del país. Los avances en ambas dimensiones parecen, además, estar mucho más interrelacionados de lo que podría pensarse a primera vista. Para elevar nuestros niveles de capital humano es indispensable poner nuestra educación en un nivel sustancialmente superior al actual. Sugerimos que, en parte, los decepcionantes resultados de nuestro sistema educacional obedecen a que hasta ahora no hemos requerido de este factor productivo para pavimentar nuestro crecimiento, e incluso hemos dejado entrever que, dada nuestra dotación de recursos, el escenario de alta desigualdad era en alguna medida inevitable. Por supuesto éste es un problema de grados y mejores políticas educativas en el pasado habrían ayudado a amortiguar estas inercias desiguales. Pero en esta etapa de desarrollo se abre una oportunidad para progresar reduciendo desigualdades y ahora la falta de capital humano puede ser una barrera para avanzar en esta dimensión. Por ello, más allá de las distintas demandas que se le planteen al sistema educacional, deben redoblarse los esfuerzos para que nuestro sistema educacional alcance estándares mínimos de rendimiento académico. Las diversas pruebas internacionales, que son un primer buen estándar para nuestro sistema educacional, revelan que Chile está en un nivel que no se condice con nuestros actuales niveles de desarrollo económico y social y tampoco con los recursos públicos y privados que se destinan a educación.

La insatisfacción con la educación no sólo es un problema nacional y debates similares al nuestro se repiten en los más diversos países. Hay reparos tanto por su aporte al crecimiento económico como por su contribución a reducir las desigualdades. Expertos como Pritchett han llegado a preguntarse "¿Hacia dónde se ha ido toda la educación?"[11]. Numerosos países han experimentado significativos aumentos en sus niveles educacionales sino que ello se haya traducido en cambios apreciables en la tasa de crecimiento económico o en la desigualdad. Hay dos caminos posibles para salir de esta aparente contradicción. La primera y más obvia es que no importa tanto la cantidad como la calidad. Aumentos en el número de años de educación, que muchas veces se logra elevando los años de educación obligatoria, no necesariamente significan elevar las habilidades de las per-

[11] Véase Pritchett (1997).

www.cepchile.cl

sonas que reciben esa educación. Como son esas habilidades las que importan para el crecimiento económico, la conclusión parece obvia: más años de educación no necesariamente significan más crecimiento económico. Estudios que han tratado de capturar, todavía muy imperfectamente, la calidad de la educación en sus estimaciones parecen sugerir que ahí hay un factor que tiene una incidencia importante, al menos, en el crecimiento económico[12].

Un segundo camino para enfrentar la evidencia que sugiere que no hay relación entre crecimiento y educación es constatar que una buena educación es una condición necesaria pero no suficiente para que los países prosperen. Si es más rentable hacer lobby, si los precios están distorsionados, si los derechos de propiedad no están bien protegidos, en fin, si los proyectos que generan riqueza no son rentables, difícilmente llegarán las tecnologías y las inversiones necesarias para aprovechar a la población educada. Sin incentivos e instituciones adecuadas una buena educación no rendirá los frutos esperados[13].

Por último, y como tratamos de sostener en la sección dos, la relación entre todas las variables económicas es compleja y hay patrones bien trazados que subyacen a todo proceso de desarrollo. La clave es ir despejando las barreras que pueden frenar ese proceso. Con todo, tampoco hay que exagerar los argumentos de Pritchett. Hay países que han avanzado aceleradamente en desarrollo económico sustentados sobre un buen sistema educacional y con niveles de desigualdad moderados o bajos.

La gran ventaja actual de Chile es que los incentivos para el crecimiento están. Por eso las reformas de la educación que eleven el rendimiento educacional de nuestros estudiantes y permitan que se expandan las habilidades de nuestra fuerza de trabajo deberían tener, en el mediano y largo plazo, un impacto significativo en la capacidad productiva del país y seguramente también en la capacidad de atraer nuevas tecnologías. Por lo demás no parece haber ninguna razón estructural para pensar que nuestros estudiantes puedan obtener resultados similares o superiores a los estudiantes de Tailandia, Túnez o Polonia[14]. Los mediocres resultados son compartidos por todos nuestros estudiantes, incluidos los más aventajados

[12] Por ejemplo, véase Beyer y Vergara (2003). Estos autores sugieren que un mejoramiento en la calidad de la educación que coloque a nuestros alumnos en el rendimiento promedio de una prueba como el TIMSS podría elevar nuestra tasa de crecimiento en 0,7 puntos porcentuales al año.

[13] Un buen análisis de la importancia de incentivos e instituciones en el crecimiento económico se encuentra en Easterly (2001).

[14] Aquí haremos fundamentalmente referencia a los resultados obtenidos por Chile en las pruebas PISA y TIMSS de 2001 y 2003, respectivamente.

www.cepchile.cl

socialmente. No nos debe extrañar, entonces, que Chile coloque a menos de un 1% del estudiantado en los grupos formado por el 10% de rendimiento superior en el mundo[15]. Estos resultados, así como los de otros estudios, sugieren que más allá de nuestra realidad económica y social los desafíos en educación son enormes y que se requiere abordarlos con decisión.

Más allá de consideraciones distributivas, los recursos públicos y privados en educación están. En 1990 el gasto público en educación representaba un 2,5% del PIB y en la actualidad alcanza a un 4,4% de esa misma variable. El crecimiento relativo del gasto público en educación ha ido acompañado en el mismo período de una duplicación del PIB. Ambos fenómenos —el mayor énfasis en educación y el incremento del PIB— han permitido que los recursos que actualmente se destinan a la educación pública se hayan más que triplicado en pesos respecto de 1990. Si al esfuerzo del sector público se agregan los aproximadamente tres puntos porcentuales del PIB que gastan los privados en educación podemos constatar que nuestro país destina más del 7% de lo que produce a educar a sus niños y jóvenes. Esta magnitud nos ubica entre los países del mundo que relativamente más gastan en educación[16]. Los aumentos de recursos, sin embargo, no parecen haber venido aparejados con incrementos proporcionales en el "producto educativo", definido ampliamente como cobertura escolar ajustada por calidad de la educación. En otras palabras, la productividad de los recursos dedicados a educación parece haber experimentado un retroceso. El Cuadro N° 1 presenta la evolución de dicha productividad.

CUADRO N°1: LA PRODUCTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN
(Variaciones promedio anuales)

	Productividad de la educación
1981-85	3,0%
1986-90	2,7%
1991-95	-8,2%
1996-00	-6,7%

Fuente: Véase anexo 1.

[15] De nuevo esta afirmación se basa en los resultados que obtiene nuestro país en las pruebas PISA y TIMSS.

[16] Por supuesto la distribución entre gasto público y privado en educación difiere entre países. Chile es de los países que presentan una alta proporción de gasto privado en educación.

www.cepchile.cl

Queda en evidencia que la productividad de los recursos públicos por estudiante ha caído significativamente en los 90. Por supuesto, estos antecedentes deben mirarse con cautela. Las inversiones en educación demoran en surtir efecto. Además, dichas inversiones ocurrieron después de años de una caída significativa del gasto en los 80, del orden de 25 por ciento real, que de haberse mantenido en los 90 probablemente habría hecho colapsar la educación chilena. En este sentido los aumentos de productividad ocurridos en los 80 probablemente no eran sostenibles en el tiempo y, por tanto, eran más aparentes que efectivos. Con todo, estos números sugieren que resulta imprescindible asegurarse de que los recursos que ya se han allegado a educación y los que estén por venir sean bien gastados. Ciertamente no deberíamos esperar aumentos significativos en la productividad de los recursos pero tampoco caídas de esta magnitud. Además, sería incorrecto evaluar todo proceso educativo tomando como referencia sólo la productividad de los recursos educacionales. Pero tampoco podemos olvidar que siempre existe la alternativa de ir a un equilibrio de bajo gasto y resultados parecidos a los actuales. Por cierto, se podría argumentar que ese equilibrio no ayuda en nada a superar las desigualdades del país. Pero ese argumento es circular. Un equilibrio de alto gasto tampoco contribuirá a estos propósitos si no hay resultados efectivos y mejoras en los aprendizajes. Y, por tanto, no es evidente a primera vista cuál es el equilibrio deseable. Esta discusión se salva si se avanza hacia un marco institucional que asegure que los recursos destinados a educación se gasten mejor que en la actualidad. El actual marco que rige a la educación no ofrece garantías de que ello ocurrirá así porque está en gran medida capturado por los actores educativos.

4.2. Los déficits en nuestra educación

Respecto de si los déficits existen o son más bien el resultado de desigualdades pasadas es un debate que tiene muchas aristas. Además, hay indicadores que invitan a lecturas distintas. Si se miran indicadores tradicionales de eficiencia interna —egreso oportuno, tasas de reprobación o egreso total—, o de cobertura, los resultados del sistema educativo nacional sorprenden positivamente. Así, por ejemplo, en los últimos doce años los tiempos de egreso de la educación básica se han reducido, en promedio, en poco más de un año. Las tasas de reprobación en la educación básica han caído de 7,8% en 1990 a 2,8% en 2001. En el mismo período la tasa de reprobación en la educación media ha caído desde 12,4 a 5,9%. Pero esta

www.cepchile.cl

realidad ¿es consecuencia de una mejor educación o de criterios de promoción más laxos? El punto no es menor porque si bien una educación de calidad debería permitir una reducción en las tasas de reprobación el fenómeno puede tener su origen en cambios en las normas de aprobación antes que en el logro de determinados objetivos pedagógicos. De hecho, hemos sido testigos de cómo en el lapso de 30 años las notas promedio de los estudiantes que rinden las pruebas de admisión a las universidades nacionales han subido en una nota entera. Pocos se atreverían a sostener que ello obedece a los avances que ha registrado nuestra educación secundaria.

Por eso es que más allá de las tendencias nacionales que pueden estar afectadas por factores idiosincrásicos, parece razonable poner el peso de la prueba en los resultados que se obtienen a partir de pruebas internacionales. Ese análisis arroja resultados inquietantes. Suficientemente conocidos son los resultados que han obtenido los adultos chilenos en la Prueba Internacional del Adulto Lector: un 82% de nuestros compatriotas no alcanzaría los niveles necesarios de comprensión lectora que requieren las sociedades modernas actuales para desempeñarse adecuadamente en el mundo del trabajo. Menos destacado es el hecho de que si uno controla por el nivel educacional, no ha habido ningún avance generacional. En efecto, el nivel de comprensión lectora de una persona de 60 años con educación media es equivalente al nivel de comprensión lectora de una persona de 20 años con el mismo tipo de educación. "¡Qué 20 años no es nada!" dice la canción. Pues en educación tampoco parecen serlo 40. Por lo menos en Chile. La persistencia de los resultados (mediocres) en educación parece ser una constante en nuestro país.

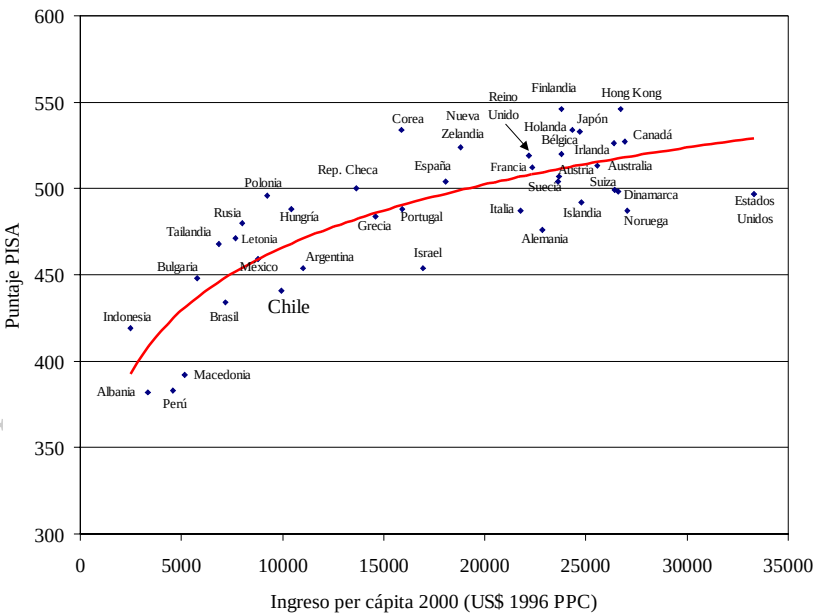
Se puede plantear que los resultados anteriores son consecuencia de antiguas y equivocadas políticas que sólo ahora comienzan a corregirse. Pero los Gráficos 7 y 8 sugieren que nuestros actuales estudiantes están lejos de alcanzar rendimientos satisfactorios. El primero de esos gráficos presenta un ajuste entre ingreso per cápita y resultados en la prueba PISA. Ésta es una prueba de habilidades lectoras aplicada a estudiantes de 15 años, representativos de los países que participaron en el estudio. Este examen fue desarrollado por expertos reunidos por la OECD en función de lo que se estima son las habilidades lectoras que deben tener los estudiantes en nuestro mundo actual. En el gráfico la línea curva y continua representa el mejor ajuste posible entre ingreso per cápita y rendimiento en esa prueba. Esa mejor relación se ajusta por la composición socioeconómica del estudiantado porque, por ejemplo, en Chile la proporción de estudiantes que viene de hogares de bajo nivel socioeconómico es muy superior a la que se observa, digamos, en Canadá. La necesidad de este ajuste reside en

www.cepchile.cl

el hecho de que sabemos que los rendimientos educativos de un joven están fuertemente influidos por el capital cultural y social de la familia, que está correlacionado de manera significativa con el nivel socioeconómico de los hogares. Este argumento se tiene que evaluar con cautela cuando se compara entre países porque hay aquí un grado de endogeneidad que no se puede desconocer. En efecto, es esperable que países con sistemas educacionales mediocres tengan, *ceteris paribus*, niveles de desigualdad mayores que aquellos que tienen buenos sistemas educacionales, por lo que estos ajustes pueden subestimar los verdaderos déficits educacionales.

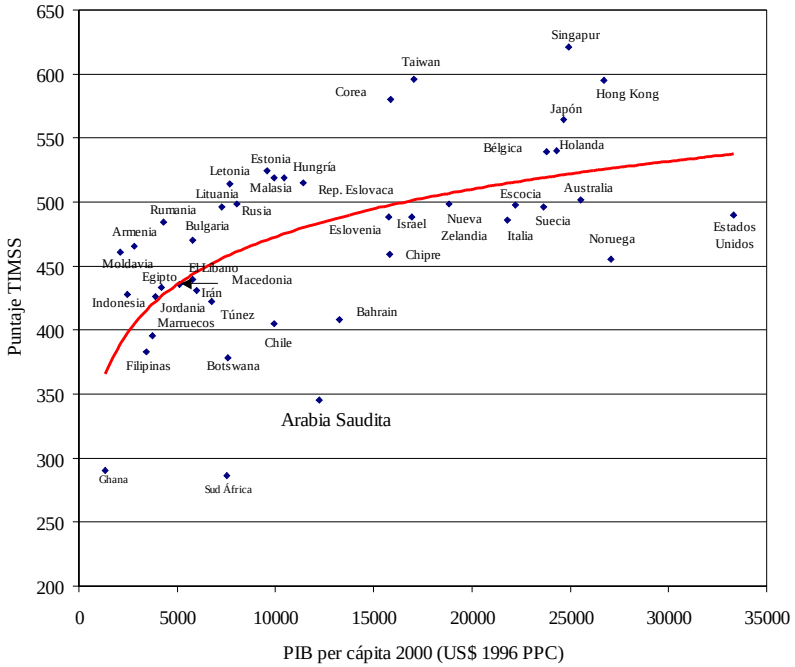
El Gráfico N° 7 permite concluir que Chile tiene un rendimiento en esta prueba que está por debajo (en un tercio de desviación estándar) del que debería tener si su sistema educativo se comportara como el promedio de los países que participaron en esa prueba. Alcanzar esta meta promedio, aunque es razonable, no deja de ser algo modesto porque hay países que tienen rendimientos que están muy por encima de lo que debería permitirles su realidad económica. Una meta ambiciosa sería alcanzar un rendimiento equivalente al de esos países. Esta ambición no vendría mal si, como hemos intentado sostener, para pasar a nuevos estadios de desarrollo es más imprescindible que nunca contar con un nivel satisfactorio de capital humano.

GRÁFICO N° 7: RESULTADOS EN PRUEBA PISA E INGRESO PER CÁPITA
(Ajustados por nivel socioeconómico del estudiantado)



www.cepchile.cl

GRÁFICO N° 8: RESULTADOS EN PRUEBA TIMSS 2003 E INGRESO PER CÁPITA
(Ajustados por escolaridad de los padres de los estudiantes)



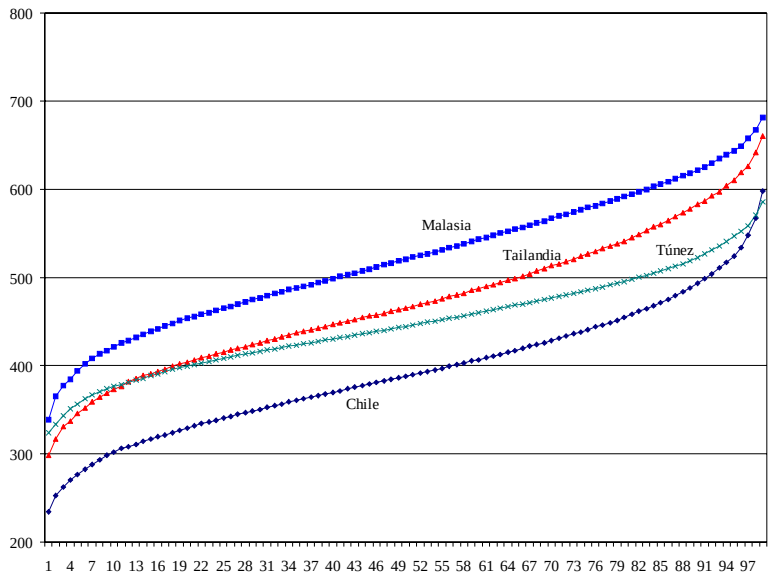
El déficit en la prueba PISA es de una magnitud suficientemente importante como para no ser olvidada en el análisis de las falencias de nuestro sistema educativo. El Gráfico Nº 8 revela un desempeño aún más deficiente, esta vez en la prueba TIMSS de matemáticas. Esta prueba se aplica a un grupo representativo de estudiantes, dos años menores que los que rinden la prueba PISA, de los países participantes. La responsabilidad de esta prueba recae en el Institute of Educational Achievement con el apoyo del Boston College. Aquí se realiza también un ajuste que intenta aislar el efecto que, sobre los rendimientos educativos, tiene el capital cultural del hogar. En este caso se utiliza la escolaridad de los padres, que probablemente es un mejor indicador que el nivel socioeconómico de los hogares (esa información no está disponible para la prueba PISA). Nuevamente, la línea curva y continua representa el mejor ajuste posible entre rendimiento e ingreso per cápita. En este caso Chile está aún más alejado, que en la prueba anterior, del nivel que le correspondería si se comportara como el promedio de los países que participaron en esa prueba. En este

www.cepchile.cl

caso es un déficit equivalente a dos tercios de una desviación estándar que es una magnitud ciertamente preocupante. Estos promedios, además, esconden el hecho de que alrededor de la mitad de los estudiantes nacionales que participaron en estas pruebas tienen resultados que están en un nivel que los realizadores de estas pruebas consideran básico o incluso inferior a éste.

Este insatisfactorio resultado es sólo la punta del iceberg. Porque, como adelantábamos más arriba, esconden que el desempeño del país es mediocre en todo el rango de la distribución de desempeño. Ésta se presenta en el Gráfico Nº 9 para Chile, y se la compara con las distribuciones de otros países de inferior ingreso per cápita, menor gasto en educación, y de una relativamente alta desigualdad y cobertura en este nivel educativo equivalente a la chilena. Los datos son de la prueba de 1999 dado que al momento de finalizar este artículo aún no estaba disponible la base de datos del año 2003. El gráfico ordena a los estudiantes de menor a mejor desempeño. En particular se presentan los puntajes obtenidos por los estudiantes que están en los percentiles 1, 2, 3, … 99. Esto significa que un 1 por ciento, 2 por ciento, …, un 99 por ciento, respectivamente, de los estudiantes obtuvo puntajes debajo de los que se indican en el gráfico. Por

GRÁFICO N° 9: RENDIMIENTO EN LA PRUEBA TIMSS MATEMÁTICAS EN 1999



www.cepchile.cl

ejemplo, en el caso de Chile, en el percentil 50 se lee un puntaje aproximado de 388 puntos, esto es que un 50 por ciento de los estudiantes obtuvo un puntaje de esa magnitud o inferior al mismo. Si se piensa que esa prueba estaba construida con un promedio internacional de 500 puntos, se aprecia nuevamente el mal desempeño relativo de Chile. De hecho este puntaje se alcanza aproximadamente en el percentil 92 sugiriendo que sólo un 8 por ciento de nuestros estudiantes están por sobre el desempeño internacional en esta prueba.

Por ello es preocupante comprobar que los estudiantes chilenos de mejor rendimiento relativo tienen un desempeño que es parecido a los estudiantes malayos que están en el percentil 40 o 50 de su distribución. Este panorama transmite la sensación, ciertamente desalentadora, de que el país está aún lejos de crear las condiciones en términos de capital humano que se requieren para pasar a etapas siguientes de nuestro desarrollo. Por supuesto, en parte este problema se ha abordado con un acceso creciente a la educación superior, pero ahí también comienzan a existir restricciones. Por una parte, de financiamiento para los estudiantes y, por otra, de las dificultades prácticas que involucra educar en ese nivel a jóvenes con deficiencias en su formación inicial tan marcadas.

Aunque el desafío es de una magnitud enorme tampoco parece razonable plantear que no se puede avanzar en plazos prudentes con los recursos que actualmente disponemos. Países como Malasia y Tailandia, por ejemplo, han logrado en poco tiempo y con déficits iniciales mucho más profundos que los del Chile actual generar sistemas educativos que producen resultados relativamente satisfactorios. Por supuesto que también tienen problemas, pero no hay espacio para el fatalismo. Hacia el futuro es clave desarrollar un marco institucional que asegure un buen aprovechamiento de los recursos y un sistema educativo que en un grado importante esté orientado a los resultados.

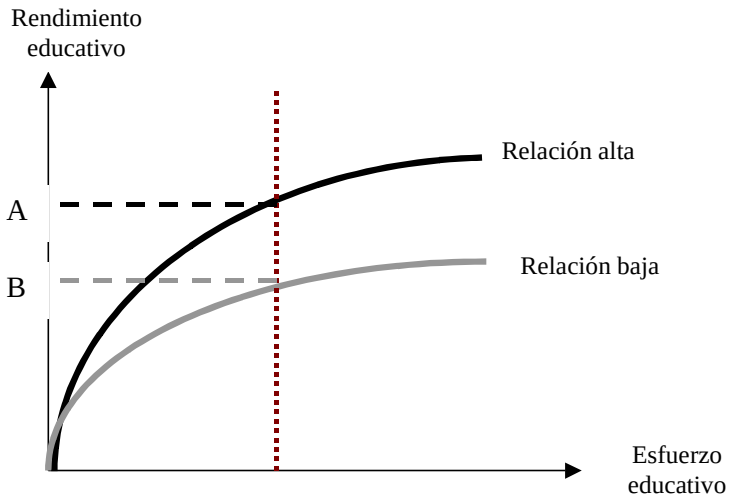
4.3. Un nuevo marco institucional

Las diferencias en los sistemas educacionales de los países que les va bien (o mal) en el TIMSS son significativas, por lo que tratar de resumir las causas de los buenos (o malos) resultados en unas pocas variables no es una tarea fácil. Pero, si rescatamos los elementos comunes en los diversos países seguramente habremos avanzado en definir esas causas. No es nuestra idea entrar aquí en un análisis exhaustivo de esos elementos aunque sí ofrecer un marco general de análisis. La idea central que subyace en este enfoque es que la institucionalidad educativa del país influye en sus rendi-

www.cepchile.cl

mientos educativos. En particular, cuando se piensa en políticas educativas no se puede olvidar que no hay una relación única entre los esfuerzos educativos y el rendimiento generado. Eso es precisamente lo que se ilustra en la Figura N° 2.

FIGURA 2: RENDIMIENTO EDUCATIVO Y ESFUERZO: LA IMPORTANCIA DEL MARCO INSTITUCIONAL



Se puede ver en esa figura que si los esfuerzos realizados son EE*, pueden obtenerse, indistinta aunque no simultáneamente, rendimientos educativos como A y B. Un equilibrio como el de A antes que el de B no es resultado del azar sino que fruto de un diseño adecuado de políticas e instituciones. Es en este ámbito donde hay amplio espacio para corregir lo que se ha venido haciendo hasta ahora en materia educativa. Esto significa que aun en ausencia de nuevos recursos se puede hacer mucho para mejorar la calidad de la educación en Chile. Para ello se requiere mejorar las políticas y corregir falencias institucionales.

En el análisis comparativo uno de los elementos que llama la atención, especialmente porque no aparece con fuerza en los países de bajo desempeño, es que los estudiantes tienen exámenes externos con consecuencias en distintos niveles educativos. De los países con mejor rendimiento, todos, con la excepción de Bélgica flamenca[17], tienen exámenes externos de evaluación. Estos no son inofensivos sino que tienen efectos

[17] En el TIMSS participó sólo la parte flamenca del país.

www.cepchile.cl

sobre el desarrollo escolar futuro de los alumnos. Los exámenes importan y son ampliamente difundidos y discutidos en las comunidades escolares. En Chile, en cambio, tenemos exámenes con consecuencias sólo al final del proceso educativo, cuando las posibilidades de corregir el camino andado no existen. Por cierto, estos exámenes no sólo tienen efectos para los estudiantes sino que para los establecimientos educativos. Las consecuencias para las escuelas de resultados poco satisfactorios no se dejan esperar. Hay desde amonestaciones hasta cambio de directores y profesores. Esos países cuentan, entonces, con una institucionalidad que incorpora métodos correctivos en aquellas instituciones donde los resultados educacionales son deficientes. En otras palabras, hay rendición de cuentas y acciones asociadas a esta rendición. Es muy difícil imaginar que en ausencia de estos elementos puedan generarse los suficientes incentivos para conseguir buenos resultados.

Un estudio reciente de Fuchs y Woessmann (2004), utilizando datos de la prueba PISA, estima que alrededor de un 25 por ciento de las variaciones de rendimiento entre 32 países participantes (es la primera versión de la prueba donde no participó Chile) son explicadas por variaciones institucionales, una magnitud que no deja de ser significativa. Este estudio tiene el mérito de controlar por las características socioeconómicas de los estudiantes y la educación y ocupación de los padres. Estas características influyen principalmente en los resultados de la parte lectora de la prueba, aunque menos en matemáticas y ciencias. Entre los elementos institucionales que afectan positivamente el rendimiento de los estudiantes en esta prueba destacan la presencia de exámenes externos. La autonomía de los establecimientos educativos también aporta a mejores rendimientos cuando va acompañada de mayor libertad en el manejo de personal y contratación de profesores así como también en la elección de textos escolares y asignación de recursos al interior del establecimiento. Los efectos de esta autonomía se refuerzan cuando hay exámenes externos.

Nuestros establecimientos educativos están lejos de contar con rendiciones de cuenta mínimas y tampoco gozan de autonomía, a pesar de la supuesta descentralización existente, en las materias que el estudio citado encuentra que afectan positivamente los rendimientos educativos de los estudiantes. Los establecimientos del país, sus directivos y sus profesores viven en la actualidad en un clima educativo de muy poca exigencia y que raya en la impunidad en lo que se refiere al desempeño escolar de los estudiantes. Las clases se interrumpen frecuentemente y los aprendizajes avanzan a un ritmo muy lento. ¡Por supuesto que hay problemas con la formación inicial de los profesores!, pero bajo el marco institucional en

www.cepchile.cl

que se desenvuelve la gran mayoría de los establecimientos del país no está garantizado que buenos profesores obtengan rendimientos sustancialmente mejores.

La creación de un marco institucional o un ambiente educacional en que los establecimientos del país se sientan presionados a hacerlo bien es de una urgencia innegable. En esta dimensión el país está muy rezagado. En su momento el régimen autoritario avanzó en la descentralización del sistema educacional traspasando las escuelas fiscales a las municipalidades y desregulando la oferta educacional. Se cambió, además, la forma de financiamiento de la educación desde un sistema de asignación presupuestaria por escuela a uno de subvención por alumno. Se pensaba que los padres preocupados porque sus hijos recibieran una educación de calidad iban a ir eligiendo las escuelas de mejor rendimiento, desplazando a aquellas de mal rendimiento. Sin embargo, no se creó un sistema que informara a los padres del desempeño de las escuelas. Los padres nunca tuvieron a su disposición un instrumento efectivo para realizar comparaciones entre escuelas. Recién en 1995 se implementó un sistema de información a partir de los resultados de la prueba SIMCE. Este instrumento llega a los padres, sin embargo, en forma muy difusa. No cabe duda que se debe perfeccionar. La información debe ser mucho más precisa, clara y llegar, ojalá directamente, a los padres. Los informes que muchos estados norteamericanos están haciendo llegar a las familias parece un modelo a seguir. Con todo, las posibilidades efectivas de elección en muchas comunas son extraordinariamente limitadas y la oferta, por la heterogeneidad en el tamaño o densidad de las comunas, no es tan dinámica como se preveía en su momento. Además, tampoco los padres eligen necesariamente a los buenos establecimientos. En parte, porque esa decisión depende de una serie de factores. También porque hay dejación. Hay aquí una tensión inevitable entre libertad de elección y tolerancia hacia los establecimientos de bajo desempeño. La existencia de exámenes externos con consecuencias tanto para estudiantes como para establecimientos le quita peso a esa tensión, como sugerimos más adelante.

Por otra parte, la municipalización de la educación no ha dado los frutos esperados. En parte, por los mismos factores mencionados anteriormente. Pero también deben agregarse factores adicionales. En primer lugar, en muchas municipalidades se repitieron, e incluso se agudizaron, los niveles de centralización que se observaban cuando las escuelas eran fiscales. Muchas de las escuelas municipales carecen de una autonomía mínima para llevar adelante la gestión educacional. La legitimidad que les ha otorgado a los alcaldes su elección democrática ha acentuado, en algunos ca-

www.cepchile.cl

sos, esta centralización comunal. En segundo lugar, los alumnos muchas veces se cambian entre escuelas municipales y, por lo tanto, las finanzas municipales no se resienten. Ello diluye los incentivos a mejorar la gestión de las escuelas municipales. Además, casi un 20% de las comunas del país no tiene ningún tipo de competencia de escuelas privadas. Otro 40% enfrenta una competencia privada muy limitada. De ahí que no deba extrañar que las matrículas de las escuelas municipales y particulares subvencionadas se hayan mantenido relativamente estables en torno al 57 y 34%, respectivamente, en los últimos 15 años. Las comunas con menor presencia de opciones educacionales son precisamente las comunas más pobres. Así, no es de extrañar que mientras el 75% de los alumnos del primer quintil de ingreso asisten a una escuela municipal sólo un 48 y un 39% del tercer y cuarto quintil asisten a ese tipo de establecimiento educacional. Hay un aspecto lateral a esta discusión que no se puede soslayar. Si existe coincidencia en los estudios empíricos en que la escolaridad de los padres o el capital cultural del hogar influye en los rendimientos de los estudiantes, el actual diseño de la subvención es incompatible con esta realidad. Ese antecedente indica que el esfuerzo que se debe hacer para alcanzar un rendimiento educativo determinado es mayor en el caso de un estudiante que proviene de un hogar con un bajo nivel de capital cultural que en el de uno que proviene de otro hogar. Sin embargo, el diseño de la subvención no reconoce este hecho. El resultado es una oferta de menor calidad relativa para los estudiantes de comunas de más bajos ingresos y sin posibilidades reales de que se genere dinamismo en esa oferta.

Pero también la falta de dinamismo y calidad en el sector municipal, y en el país en general, están marcadas por el estatuto docente que protege exageradamente a los profesores municipales en el desempeño de sus funciones. La evaluación docente es un primer paso para ir eliminando los obstáculos que impone esta legislación a la formación de capital humano. Pero es claramente insuficiente. La urgencia en estos momentos es que los rendimientos académicos mediocres no se perpetúen en los establecimientos educativos del país. El estatuto docente y en general el actual marco institucional, aun con evaluación de por medio, no evita esa persistencia. Un fenómeno que en cualquier sistema educacional con estándares mínimos de excelencia sería impensable.

Este estatuto docente indudablemente tiene que flexibilizarse, pero es importante hacer una digresión que se resume el Cuadro N° 2 y que indica la evolución salarial de los profesores y del resto de los profesionales de la economía chilena en los últimos 20 años. El ajuste provocado por la crisis económica de 1982-1983 y las posteriores transformaciones reca-

www.cepchile.cl

yeron de manera desproporcionada sobre los profesores. Sus remuneraciones reales descendieron en casi un 38% en el período comprendido entre 1981 y 1990. La de los profesionales en su conjunto no sólo no cayó sino que se expandió marginalmente. Creo que es inevitable que este tipo de ajustes "dispare de vuelta". Fue un error aprobar el estatuto docente en la forma que se aprobó, pero su origen se comenzó a sembrar en los 80.

CUADRO Nº 2: ÍNDICE DE REMUNERACIONES REALES

	Profesores	Profesionales
1981	100,0	100,0
1990	62,4	101,7
1993	84,5	114,1
1996	115,1	132,0
2000	149,2	143,2
2002	165,5	147,3

Fuente: INE y MINEDUC.

Pero, más allá de esta digresión, no parece razonable que un sistema educacional en el cual los establecimientos, sus directivos y sus profesores son finalmente los responsables del rendimiento de los alumnos mantenga un estatuto docente tan anacrónico como el que Chile presenta. Por supuesto, toda modificación de este estatuto en la dirección de lo que aquí se ha manifestado supone enfrentar al gremio de los profesores. Ello no es una tarea fácil. Es un grupo social significativo que goza de una alta credibilidad. Una encuesta del Departamento de Sociología de la Universidad Católica los ubicaba entre los profesionales que más confianza despiertan en la población. Por lo mismo sus movilizaciones son tremendamente efectivas. Pero ese no es el problema, sí lo es la enorme capacidad que tienen para identificar sus propios intereses con los intereses del país. Y aquí el camino, tal como hemos planteado hasta ahora, sigue siendo el desarrollo de instituciones y políticas que de manera impersonal aseguren que frente a un mal desempeño de los establecimientos educativos habrá espacio para tomar medidas que permitan que la inercia de rendimientos deficientes pueda ser contrarrestada.

Este desarrollo institucional debe recoger el hecho de que al final los cambios tienen que venir de los establecimientos y de las salas de clases. Hay más probabilidades de lograr una mejor educación si se deja a las comunidades locales ensayar con mayor libertad. Los resultados del

www.cepchile.cl

trabajo de Fuchs y Woessmann, antes mencionados, avala este camino Pero esos "ensayos" tienen que ser evaluados. De ahí que los establecimientos deban rendir cuentas frente a la comunidad escolar. Esa rendición debe, en primer lugar, dar cuenta de los resultados académicos. Para ello deben mantenerse evaluaciones externas exigentes tipo SIMCE. Sería extremadamente importante, como sucede en casi todos los países que tienen buenos rendimientos educacionales, que estos exámenes externos afectarán de alguna manera el paso del alumno al nivel educacional siguiente de educación o que entregaran algún tipo de certificación de habilidades. Una medida modesta pero poderosa sería que esta prueba se tradujese en una nota, por ejemplo, equivalente al 25% de la nota final en la disciplina en la que se rinde el examen. Esto, además, ayudaría a las escuelas a definir más precisamente sus estándares internos.

Parece recomendable evitar a toda costa la persistencia de los malos resultados. ¿Cómo hacer operativo ese marco institucional? Hemos propuesto en Beyer (2001) algunos caminos. Entre éstos, que los padres puedan "intervenir" las escuelas con rendimientos deficientes. Esta intervención de los padres en las escuelas de sus hijos se puede combinar con diversos aspectos específicos que habría que ensayar más cuidadosamente. Por ejemplo, se podría permitir a los padres delegar la administración de las escuelas en instituciones especializadas como fundaciones, universidades o sostenedores privados de buen rendimiento. Es fundamental que esas instituciones se comprometan con metas específicas y se sometan al escrutinio público que los padres demanden.

Este esquema no es propicio para establecimientos particulares subvencionados sin que ello se transforme en una limitación del derecho de propiedad. Pero entre estos también existen establecimientos de resultados persistentemente mediocres. En estos casos deben aplicarse criterios distintos para generar esa presión. Una posibilidad razonable y de aplicación general es establecer contratos de desempeño para cada uno de los establecimientos que recibe recursos públicos. El incumplimiento de estos contratos pone en riesgo la elegibilidad de ese establecimiento para recibir la subvención educacional. Este contrato de desempeño debe reconocer la autonomía del establecimiento para definir sus procesos pedagógicos y debe concentrarse en la consecución de metas precisas en períodos determinados. El contrato debe reconocer el punto de partida del establecimiento y no imponer metas inalcanzables, pero éstas deben ser exigentes. Para evitar arbitrariedades en la definición de estos contratos la contraparte que vela por el interés público debe ser una institución autónoma del poder político y altamente profesional. Para elaborar este contrato los estableci-

www.cepchile.cl

mientos deberían poder acceder a fondos concursables que les permitan abordarlos de la mejor manera posible. La posibilidad de que se suspenda la subvención para los establecimientos de resultados deficientes es polémica, pero es apremiante contar con un marco institucional que asegure no sólo un buen uso de los recursos sino que también esté orientado en un grado importante hacia resultados. Además, parece indispensable velar por la mejor educación posible para niños y jóvenes. En este contexto no parece que requisitos mínimos de desempeño afecten la libertad de elección de las familias en el campo educacional. La existencia de establecimientos más responsables de los resultados académicos de sus alumnos es imprescindible si se quiere generar una dinámica educacional virtuosa. Por supuesto, también involucra riesgos. Desde luego, para mostrar rápidamente resultados, los establecimientos podrían desplazar a los alumnos de menor rendimiento. Pero hay maneras de minimizar este riesgo como los exámenes de "valor agregado". Además, los beneficios potenciales de un sistema educacional más responsable y transparente son tan significativos que, de todas maneras, vale la pena correr este riesgo.

5. A modo de conclusión

He intentado sostener en este artículo que Chile está viviendo su momento de mayor desigualdad y que, en cierta medida, ello era inevitable como consecuencia del patrón de desarrollo subyacente que es resultado de sus dotaciones de factores productivos. Al mismo tiempo he dejado entrever un grado importante de optimismo respecto de la evolución futura de la desigualdad. Estamos a las puertas de pasar a un estadio de reducción en esas desigualdades. Para ello es indispensable que podamos allegar más capital humano a la economía.

Pero también necesitamos asegurar un fuerte crecimiento en la productividad que invite a la acumulación de capital tanto físico como humano. He sugerido, además, que ambos fenómenos están más entrelazados de lo que puede pensarse. Sin ese capital humano no sólo se hará muy difícil atraer las tecnologías que necesitamos para pasar a ese nuevo estadio de desarrollo sino que tampoco podremos reasignar nuestros recursos productivos para asegurar esas ganancias de productividad. Por supuesto, para que éstas sean posibles se requiere una economía competitiva, buenas instituciones y también políticas adecuadas. Muy resumidamente, se requiere un ambiente que no incentive las inercias, y que asegure dinamismo y la posibilidad de reasignar con rapidez y sin pérdidas de eficiencia los recursos productivos.

www.cepchile.cl

Es precisamente en esta dirección que nos tenemos que mover en educación. Ésta tiene resultados mediocres y se desenvuelve en un marco institucional donde los incentivos vigentes no aseguran una orientación que permita ser optimista respecto de mejoras futuras. Hay persistencia e inercia en los resultados educativos. Hay que avanzar hacia un marco institucional distinto que ponga los aprendizajes y destrezas de los estudiantes en el centro de las consideraciones pedagógicas. Ello permitirá ir acumulando el capital humano necesario para seguir aumentando nuestro nivel de desarrollo y reducir las desigualdades que tanto preocupan.

ANEXO
PRODUCTIVIDAD DEL GASTO EN EDUCACIÓN

Los intentos por medir el precio y la productividad del sector educación y, en general, de los servicios no es una tarea fácil. Proponemos, sin embargo, una metodología simple para avanzar en esta tarea. Suponemos que el precio de la educación (P_{sq}) es igual al gasto en educación (G_s), dividido por el número de alumnos (A), corregido por un índice de calidad (I_q) de modo que

$$P_{sq} = G_s/(A*I_q) = P_s*(1/I_q).$$

P_s correspondería al precio de la educación si la calidad se hubiese mantenido constante. Como el aumento en el gasto en educación puede haber elevado la calidad de la educación, un incremento en el gasto por alumno no necesariamente sugiere un aumento en el precio de la educación. La importancia de definir adecuadamente el precio de la educación radica en que, usando el modelo de costo de síndromes sugerido por Baumol (1967), se puede evaluar a partir de los cambios en el precio relativo de la educación los cambios en la productividad del sector educación (sobre este modelo véase también Krueger, 2001; Gundlach *et al.*, 2001, realizan este ejercicio para los países de la OECD). Se supone que el único factor de producción es trabajo (L) y que existen dos sectores: educación (S) con una tasa de crecimiento de la productividad de z_S y resto R con una tasa de crecimiento de la productividad de z_R.

El producto en ambos sectores puede ser descrito por una función de producción del tipo

$$Y_{it}=\gamma_i L_{it}\exp(z_i t)\ i = S, R\ ,$$

www.cepchile.cl

donde Y_{it} es el nivel de producto del sector i en el año t; γi es un parámetro de eficiencia específico al sector i, y L_{it} es la cantidad de trabajo empleada en el sector i en el año t. La productividad marginal en ambos sectores está dada por:

$$dY_i/dL_i = \gamma_i exp(z_i t) \; i = S, R.$$

Si se iguala el valor de las productividades marginales a los salarios tenemos que

$$W = P_{sq}\gamma_s exp(z_s t) = P_s(1/I_q)\gamma_s exp(z_s t) = P_R\gamma_R exp(z_R t).$$

Se concluye, entonces, que el precio relativo de la educación cumple la siguiente condición

$$P_{sq}/P_R = (\gamma_R/\gamma_S)exp((z_R - z_S)t).$$

O también,

$$P_s/P_R = I_q(\gamma_R/\gamma_S)exp((z_R - z_S)t).$$

A partir de aquí se tiene que el cambio porcentual en el precio relativo de la educación equivale a las diferencias sectoriales en el crecimiento de la productividad ajustado por el cambio en la calidad de la educación que ocurre en el tiempo (I_q depende del tiempo transcurrido). En efecto,

$$\frac{d(P_S/P_R)/dt}{P_S/P_R} = dI_q/dt + z_R - z_S.$$

Esto significa que sin cambios en la calidad de la educación, un cambio en el precio relativo de la educación que iguale la tasa de crecimiento de la productividad en el resto de los sectores supone una productividad constante de la educación. Si hay cambios en la calidad de la educación el cambio en el precio relativo de la educación podría ser mayor que el crecimiento en la productividad del resto de la economía, sin que ello reduzca la productividad del sector educación. Empíricamente este modelo se puede reformular para utilizar conceptos más familiares. Específicamen-

www.cepchile.cl

te nos podemos concentrar en el precio de la educación deflactado por el deflactor del PIB y en el crecimiento de la productividad total de los factores. Para ello utilizamos dos ecuaciones adicionales. El nivel de precios del PIB puede plantearse como

$$P_{PIB} = P_{sq}^{(YS/Y)} P_R^{(YR/Y)}$$

donde Y_i/Y representa la participación del sector i en el PIB. Se desprende de esto que:

$$\Delta P_s - \Delta P_{PIB} - (Y_S/Y)\Delta I_q = \Delta P_s - (Y_S/Y)\Delta P_s - (Y_R/Y)\Delta P_R,$$

por consiguiente:

$$(1) \quad \Delta P_s - \Delta P_R = (\Delta P_s - \Delta P_{PIB})/(Y_R/Y) - (Y_S/Y_R)\Delta I_q = \Delta I_q + z_R - z_S$$

$$(1') \quad \Delta P_s - \Delta P_R = (\Delta P_s - \Delta P_{PIB})/(Y_R/Y) = (Y/Y_R)\Delta I_q + z_R - z_S.$$

Como siempre los Δ representan tasas de cambio, en este caso anuales. Por otra parte la tasa de crecimiento de la productividad total de factores está dada por

$$\Delta PTF = (Y_S/Y)\, z_S + (Y_R/Y)\, z_R.$$

Reordenando términos se tiene que:

$$(2) \quad z_R - z_S = (\Delta PTF - z_S)/(Y_R/Y).$$

Reemplazando (2) en (1) y restando $(\Delta PTF + \Delta I_q)$ en ambos lados se tiene:

$$(3) \quad \Delta P_S - \Delta P_{PIB} - \Delta PTF - \Delta I_q = - z_S.$$

Esta ecuación nos permite afirmar que un incremento en el precio de la educación deflactado por el deflactor del PIB que vaya más allá del

www.cepchile.cl

incremento en la productividad total de los factores, ajustado por los aumentos en calidad, supone una caída en la productividad de la educación. ¿Cómo obtenemos la información necesaria? El precio de la educación lo estimamos dividiendo el gasto en educación (preescolar, básica, especial, media científico-humanista y media técnico profesional) por la matrícula de niños y jóvenes en establecimientos municipales (fiscales) y particulares subvencionados. Los datos del deflactor del PIB provienen del Banco Central. Los datos de PTF provienen de Roldós (1997) y han sido actualizados usando su metodología para los años 1997 a 2000. Datos de calidad satisfactorios no existen en Chile. De hecho las diversas pruebas de evaluación llevadas a cabo en los últimos años no pueden compararse entre sí (Eyzaguirre y Fontaine, 1999). Cox (2001) sostiene que si se comparan los resultados del SIMCE del año 2000 y de 1997 (ambos de 8° básico) en los aspectos enfatizados por la reforma educacional, se observan aumentos importantes en la calidad de la educación, del orden de 4,6% si se toman sus mejores números en el rendimiento de los alumnos en el período (esto sugiere aumentos de calidad del orden de 1,5% promedio anual). Si se comparan las pruebas SIMCE en los 90 (previo a la estandarización de los puntajes) se puede concluir que hay aumentos máximos en el logro académico del orden de 3,1% anual. Esto claramente exagera los aumentos de calidad porque la norma fue reduciéndose (sobre este punto véase Eyzaguirre y Fontaine, 1999). También ha habido mejoras en la eficiencia interna del sistema educacional chileno que pueden considerarse como aumentos de calidad. Sin embargo, éstos parecen estar más correlacionados con el crecimiento económico del país. En los últimos 20 años los tiempos de egreso han ido reduciéndose a tasas decrecientes y la retención a 8° básico y a 4° medio ha ido aumentando a tasas decrecientes. No consideramos, entonces, la mayor eficiencia interna del sistema como un indicador de calidad. Para nuestra estimación suponemos, por consiguiente, una variación anual en la calidad de la educación de 3,1% en la primera mitad de los 90. A la segunda mitad de los 90 le agregamos a esta magnitud el 1,5% anual que reflejaría el desarrollo de las habilidades que la reforma quiere potenciar. Para los 80 la información es aún más escasa. Entre los años 1982 y 1984 una selección aleatoria de escuelas (distinta cada año) rindió la prueba de evaluación de rendimiento escolar (PER). Los rendimientos en cuarto básico se mantienen prácticamente sin variaciones. En 8° básico se observa un aumento en rendimiento. Las pruebas, sin embargo, no son estrictamente comparables. Para la primera mitad de los 80 suponemos que no hubo cambios en el rendimiento educacional de los alumnos. En la segunda mitad comparamos el resultado de la última PER (1984) con el

www.cepchile.cl

SIMCE de 1988 (son pruebas de 4° básico). En estricto rigor, esta comparación no se puede hacer, pero como nuestro objetivo es definir órdenes de magnitud, la llevamos adelante. La calidad habría bajado en la segunda mitad de los 80 en 1,3%.

Variaciones promedio anuales

	Precio Educación	Deflactor PIB	PTF	Calidad	1 – 2 – 3 – 4 Prod. educación
1981-85	18,4%	23,7%	-2,3%	0,0%	-3,0%
1986-90	18,1%	19,8%	2,2%	-1,3%	-2,7%
1991-95	25,7%	11,1%	3,3%	3,1%	8,2%
1996-00	16,0%	3,5%	1,6%	4,6%	6,7%

Fuente: Véase texto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baumol, William: "Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis". En *American Economic Review*, Vol. 57 (junio 1967), pp. 415-426.

Berman, Eli, John Bound y Stephen Machin: "Implications of Skill-Biased Technological Change: International Evidence". En *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 113 (1998), pp. 1245-1279.

Beyer, Harald: "Educación y Desigualdad de Ingresos: Una Nueva Mirada". En *Estudios Públicos*, 77 (verano 2000), pp. 97-130.

Beyer, Harald, "Falencias Institucionales en Educación: Reflexiones a Propósito de los Resultados del TIMSS". En *Estudios Públicos*, 71 (otoño 2001), pp. 5-33.

Beyer, Harald: "Sources of Growth in the Chilean Manufacturing Sector". Mimeo, Centro de Estudios Públicos, 2002.

Beyer, Harald: "Evolution of Productivity Levels since 1960: A World View". Mimeo, Centro de Estudios Públicos, 2003.

Beyer, Harald y Rodrigo Vergara: "Productivity and Economic Growth: The Case of Chile". En Norman Loayza y Raimundo Soto (eds.), *Economic Growth: Sources, Trends and Cycles*. Santiago: Banco Central , 2003.

Blis, Mark y Peter Klenow: "Does Schooling Cause Growth or the Other Way Around?". En *American Economic Review*, Vol. 76 (2000), pp. 1072-1085.

Borjas, George, Richard Freeman y Lawrence Katz: "How Much Do Immigration and Trade Affect Labor Market Outcome?". En *Brookings Paper of Economic Activity*, Vol. 1 (1997), pp. 1-90.

Bourguignon, François y Christian Morrison: "Inequality among World Citizens: 1820-1992". En *American Economic Review*, Vol. 92 (2002), pp. 727-744.

www.cepchile.cl

Cox, Cristián: "Radiografía a los resultados del SIMCE". Informe N° 163 en www.asuntospublicos.org, 15 de diciembre, 2001.

Easterly, William: *The Elusive Quest for Growth*. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001.

Eyzaguirre, Bárbara y Loreto Fontaine: "¿Qué Mide Realmente el SIMCE?". En *Estudios Públicos* N° 75 (invierno 1999), pp. 107-161.

Fuchs, Thomas y Ludger Woessmann: "What Accounts for International Differences in Student Performance? A Reexamination Using PISA Data". Iza Discussion Paper, N° 1287, septiembre 2004.

Goldin, Claudia y Lawrence Katz: "The Origins of Technology-Skill Complementarities". En *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 113 (junio 1998), pp. 693-732.

Grossman, Gene y Elhanan Helpman: "Endogenous Innovation in the Theory of Growth". En *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 8 (1994), pp. 23-44.

Gundlach, Erich, Ludger Wossmann y Jens Gmelin: "The Decline of Schooling Productivity in OECD Countries". En *Economic Journal*, Vol. 111 (mayo 2001), pp. C135-C147.

Krueger, Alan: "An Interview with William J. Baumol". En *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 15, N° 3 (verano 2001), pp. 211-231.

Leamer, Edward: "Paths of Development in the Three-Factor, N-Good General Equilibrium Model". En *Journal of Political Economy*, Vol. 95 (1987), pp. 961-999.

Leamer, Edward, H. Maul, S. Rodríguez y P. K. Schott: "Does Natural Resource Abundance Increase Latin America Income Inequality?". En *Journal of Development Economics*, Vol. 59 (1999), pp. 3-42.

Maddison, Angus: *The World Economy: A Millennial Perspective*, Paris: OECD.

Pavnick, Nina: "What Explains Skill Upgrading in Less Developed Countries?". En *Journal of Development Economics*, Vol. 71 (2003), pp. 311-328.

Pritchett, Lant: "Where Has All the Education Gone?". Banco Mundial, Policy Research Working Paper N° 1581, 1997.

Roldós, Jorge: "El Crecimiento del Producto Potencial en Mercados Emergentes: El Caso de Chile". En Felipe Morandé y Rodrigo Vergara (eds)., *Análisis empírico del crecimiento en Chile*. Santiago: Centro de Estudios Públicos/ILADES, 1997.

Solow, Robert: "A Contribution to the Theory of Economic Growth". En *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 70 (1956), pp. 65-94. □

www.cepchile.cl

ENSAYO

ALGUNAS APLICACIONES DE ECONOMÍA AMBIENTAL EN CHILE*

Raúl O'Ryan, Manuel Díaz y Andrés Ulloa

Este artículo presenta algunos resultados de investigaciones realizadas en el ámbito de la economía ambiental y desarrolladas en la última década por el Programa de Gestión y Economía Ambiental (PROGEA). Los casos presentados —que ilustran los diversos enfoques desarrollados recientemente en este campo— muestran cómo un razonable uso del instrumental económico en el ámbito del medio ambiente permite hacer propuestas y recomendaciones valiosas de política pública y finalmente tomar mejores decisiones.

RAÚL O'RYAN G. Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile.

MANUEL DÍAZ R. Investigador del Programa de Gestión y Economía Ambiental (PROGEA), Universidad de Chile.

ANDRÉS ULLOA O. Investigador del Programa de Gestión y Economía Ambiental (PROGEA), Universidad de Chile.

* Versión revisada del trabajo presentado en el Encuentro Anual de Economistas de Chile que se realizó en Punta de Tralca en septiembre de 2003.

1. INTRODUCCIÓN

En este artículo nos proponemos presentar aplicaciones de economía ambiental en Chile —nuestras aplicaciones—, bajo el supuesto (buenos somos los economistas para hacer supuestos) de que lo realizado en esta última década tiene alguna coherencia, sigue una línea y en definitiva se puede aprender algo de lo que es la economía ambiental a partir de lo hecho. Sin embargo, como bien sabemos los que nos dedicamos a la investigación, los proyectos que se realizan por lo general son el resultado del azar, combinándose aleatoriamente conversaciones motivadoras que nos enamoran de algún tema, invitaciones hechas por colegas, inquietudes personales, la lectura de un trabajo que nos encandila, oportunidades de financiamiento, estados de ánimo, etc. Si hay un hilo conductor, es el hecho de que se trata de problemas ambientales. Por otro lado, el campo de la economía ambiental es tan vasto que difícilmente se puede llegar a visualizarlo en su conjunto a partir de aplicaciones particulares. En resumen, no es evidente que haya una coherencia en lo realizado y estamos seguros de que sólo presentaremos una parte pequeña del amplio campo de acción de esta subdisciplina aplicada[1].

Debemos reconocer, además, que nuestro desarrollo en el campo de la economía ambiental, en realidad, es sólo una excusa para aplicar los conceptos microeconómicos en un área de alta complejidad e impacto en la que es fácil olvidarse que hay *trade-offs* (muy difícil de evaluarlos) y que los incentivos importan, en la que hay ganadores y perdedores (las soluciones *win-win* son pocas) y que el diablo está en los detalles que se nos olvidan al diseñar. Es un área en que lo interdisciplinario es fundamental y en que los modelos aplicados son escasos pero muy necesarios para apoyar la toma de decisiones.

Habiendo hecho estos descargos, precisamos que nuestra aproximación al tema de la economía ambiental es *aplicado*, en el sentido de que hemos intentado generar modelos conceptuales y antecedentes duros que apoyen propuestas de políticas. Ello implica tratar de entender los mercados específicos, conversar con los involucrados, recolectar información primaria, conocer los aspectos técnicos. En verdad, en nuestra realidad de país —aún— en desarrollo la disponibilidad de información para apoyar decisiones es escasa, lo que nos obliga a salir a buscarla, a ensuciarnos las

[1] De la teoría microeconómica básica surgen varias subdisciplinas fundamentales, por ejemplo, finanzas públicas, organización industrial y comercio internacional, y subdisciplinas aplicadas, tales como economía del trabajo, economía de la salud, economía y derecho y economía ambiental, entre otras.

www.cepchile.cl

manos. Compartimos en este sentido el planteamiento hecho por el profesor Darrell Hueth de la Universidad de Maryland en una conferencia reciente, en que señala que "en cierto sentido es afortunado que en estos países sea poco probable encontrar datos secundarios"..., ya que nos obliga a conversar, a salir a terreno[2].

Queremos señalar, además, que a nuestro juicio las recetas simples o un enfoque tipo *piecemeal* no se aplican muchas veces en este campo (y en general en ninguno en la economía). Generalmente nos encontramos en situaciones en que se aplica el teorema del segundo óptimo, lo que significa que las distorsiones de difícil corrección en un mercado obligan a distorsionar otros mercados, para lograr una asignación eficiente de recursos. Por una parte, hay políticas públicas, tales como impuestos distorsionadores, subsidios y protecciones; y por otra, en el sector privado hay externalidades de todo tipo y comportamientos no competitivos. Como sabemos, esto obliga a hacer evaluaciones empíricas para comparar los costos y beneficios de las políticas que se busca aplicar. En particular se necesitan modelos más o menos sofisticados para hacer las evaluaciones. Arrow, Dasgupta y Mäler, en el trabajo reciente "Welfare Economics in Imperfect Economies" (2002), señalan en este sentido que es necesario avanzar en la generación de indicadores teóricamente correctos de bienestar intertemporal cuando hay distorsiones en la economía, así como en su evaluación empírica, basada en modelos de equilibrio general o al menos entre varios sectores.

Finalmente es importante precisar el ámbito específico en que centraremos este artículo. Primero es necesario destacar que por lo general se habla de la "economía ambiental *y* de recursos naturales", para hacer una clara distinción entre los problemas ambientales o de calidad ambiental y los problemas asociados al manejo óptimo de recursos naturales. Los temas tratados en ambas áreas son diferentes, si bien el enfoque económico normativo general con que se abordan es similar: se busca definir una política socialmente óptima y luego establecer los instrumentos que permitan acercarse a esta política óptima. La economía ambiental aborda los temas de contaminación del aire, agua, suelos, el ruido; los problemas globales y regionales, como el calentamiento global y la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono; el manejo de sustancias tóxicas. La economía de recursos se preocupa de los recursos renovables, como el caso de los bos-

[2] Por otra parte, observamos, no sin algo de envidia, el trabajo de colegas en otras latitudes que pueden, desde sus oficinas, utilizando poderosas bases de datos secundarias en línea, realizar corridas de modelos haciendo supuestos de funciones de utilidad flexibles y competencia perfecta, las que luego se publican en los mejores *journals* de economía.

www.cepchile.cl

ques, el agua y la pesca; y de los no renovables, como el cobre; de la producción de alimentos, del petróleo y la energía.

Segundo, hay temas transversales que cruzan las diversas áreas tales como los criterios de selección de instrumentos para la regulación ambiental, que incluyen el problema de la incertidumbre y diseño de los mismos además de su eficiencia e impacto distributivo; evaluaciones parciales vs evaluaciones generales; el problema de la optimalidad intertemporal (eficiencia dinámica vs. eficiencia estática); y técnicas de valoración.

Nuestra área de trabajo ha estado centrada en los últimos años fundamentalmente en temas de economía ambiental, criterios de selección de instrumentos y equilibrio general. Por tanto, en las secciones que siguen presentaremos los resultados obtenidos en nuestras investigaciones para Chile en cada uno de estos ámbitos, así como algunas conclusiones y recomendaciones que surgen a partir de nuestra experiencia de más de una década en estos temas en el Programa de Gestión y Economía Ambiental (PROGEA). Cabe destacar que en forma creciente académicos chilenos están publicando en *journals* importantes acerca de estos temas. Específicamente en la sección 2 se presentan tres casos relacionados con enfoques de regulación. Luego, en la sección 3 se discute un nuevo modelo para entender los instrumentos regulatorios que afectan a las empresas cuyo accionar tiene efectos sobre el medio ambiente y se presenta un caso. Finalmente la sección 4 discute la aplicación de un modelo de equilibrio general para evaluar políticas ambientales. La sección 5 presenta las principales conclusiones.

2. ENFOQUES PARA LA REGULACIÓN AMBIENTAL: CASOS

El mercado puede fallar de múltiples maneras tratándose de problemas ambientales. Por una parte están las externalidades, que son efectos no deseados —y no compensados— de una actividad productiva o de consumo. Es característico que lleven a un exceso de contaminación. Por otra, está la insuficiente provisión de bienes y servicios ambientales con carácter de bien público, tales como la biodiversidad y bosques y la sobreexplotación de bienes de libre acceso, como la pesca, la explotación de aguas subterráneas o los yacimientos de gas.

Los enfoques de regulación normativos tradicionales proponen dos modos de enfrentar estas fallas de mercado. El primer enfoque es el *análisis costo-beneficio*, basado en el enfoque pigouviano, busca las formas de

www.cepchile.cl

acercar los costos sociales y privados *aceptando* que existe una imperfección en el mercado. A partir de ello se proponen instrumentos correctivos que maximizan el bienestar social. El segundo enfoque, de *derechos de propiedad*, basado en Coase, se concentra en *explicar* por qué existe la imperfección y en las formas de superarla, por lo general disolviendo el problema. Se propone para ello la creación de los mercados ausentes, que serían el origen del problema. Ambos enfoques son optimizantes en el sentido de que buscan un resultado eficiente. Si bien éstos son conceptualmente atractivos (en particular para los economistas), son difíciles de aplicar en la práctica, considerando los requerimientos de información y dificultades de implementación.

La práctica de los tomadores de decisión ha llevado además al desarrollo de tres enfoques alternativos. Éstos no buscan el resultado óptimo, pero sí avanzar en el logro de mejoras ambientales. Por una parte el *enfoque de costo-efectividad* busca identificar los instrumentos que permitan el logro de las metas ambientales establecidas al menor costo posible. Este enfoque —y la propuesta relacionada de utilizar permisos transables— ha tenido gran aceptación entre los economistas.

Luego, el *análisis de riesgos* es un enfoque que busca establecer metas aceptables en base a equilibrar diversos atributos de interés para el regulador, tales como costos, riesgos, aspectos éticos, sociales y legales. Finalmente, en la última década se han desarrollado con fuerza los *enfoques o acuerdos voluntarios*. Éstos son *compromisos* de parte de empresas contaminantes de mejorar su desempeño ambiental que no son exigidos por la legislación. Por tanto, en contraste con los enfoques regulatorios anteriores, no se aplican necesariamente a todas las fuentes emisoras. En particular no se aplican a aquellas fuentes que no se benefician de participar en los programas, o cuyos costos son mayores que los beneficios. Por ejemplo, en el año 2000 sólo en Estados Unidos 13.000 firmas, organizaciones no gubernamentales y agencias locales estaban involucradas en acuerdos voluntarios promovidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Si bien estos enfoques son prácticos, son mirados con suspicacia por parte de los economistas, ya que no aseguran un resultado eficiente.

Es interesante constatar que algunos de estos enfoques se están aplicando en Chile y que la economía se está usando en forma creciente en el campo ambiental. A continuación se discuten algunas aplicaciones en las que nos ha tocado estar involucrados y el aporte que se ha hecho desde una óptica económica.

www.cepchile.cl

2.1. Caso 1: Costo efectividad de instrumentos para reducir las emisiones en Santiago[3]

La primera aplicación en que nos tocó participar fue en la evaluación de la de costo efectividad del uso de permisos transables para Santiago, tema muy discutido en la literatura internacional de la época. En Santiago se estaba implementando desde 1992 este instrumento —el sistema de compensaciones—, lo que lo transformaba en una de las primeras aplicaciones urbanas significativas en el mundo. Este sistema entrega a cada fuente puntual existente de la ciudad un total máximo para emitir, y le autoriza a emitir en exceso si compensa éste comprando cupos de contaminación a fuentes que reducen más allá de su meta individual. Además obliga a cada fuente nueva a entrar emitiendo cero, ya que debe compensar todas sus emisiones.

La información disponible era muy escasa. Recién se estaban generando los inventarios de emisiones, por lo que la información sobre fuentes emisoras (ubicación, emisiones) y las metodologías de cálculo eran deficientes. Para hacer este tipo de análisis es necesario además contar con información de opciones de control, lo que éstas reducen y sus costos. Finalmente se requieren modelos que permitan relacionar las emisiones con las concentraciones, lo que se estaba trabajando de manera incipiente en la época. Hubo que construir mucha de la información y hacer supuestos fuertes para los parámetros donde aquélla no estaba disponible. La información y los modelos son un problema hasta el día de hoy en este ámbito.

La evaluación empírica exigió, para las 1.441 fuentes involucradas y 289 zonas en que se dividió la ciudad, resolver el siguiente problema:

$$\min \sum_{i=1}^{n} c^i\,(e^i) \qquad (1)$$

s.a.

$$Q = f\,(e^i, \ldots\ldots e^n) \qquad (2)$$

$$Q \leq Q^* \qquad (3)$$

$$e^i \geq 0 \; i = 1\;1, \ldots\ldots, n, \qquad (4)$$

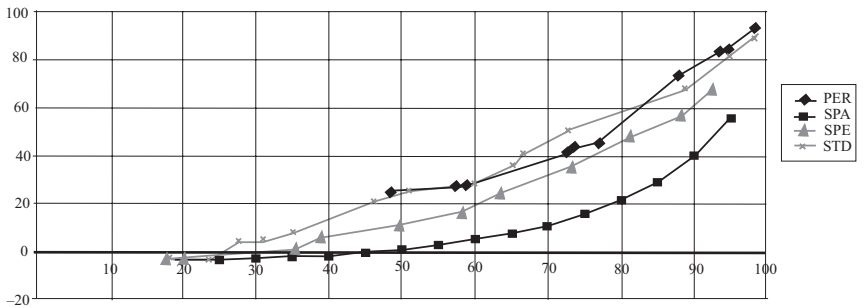
[3] Resumido a partir de O'Ryan (1996). Disponible en www.dii.uchile/progea/

www.cepchile.cl

donde e^i son las emisiones por fuente *i* después que se aplica la política i; $c^i(e^i)$ es el costo total de abatimiento para la fuente *i* de reducir a e^i; *Q* es un vector del estándar de concentración ambiental en las ubicaciones del sector K; f (e^1,....., e^n) es un modelo de sistemas naturales que relaciona los niveles de emisiones para todas las fuentes con las concentraciones ambientales en cada receptor; y Q^* es un vector de los niveles de concentración ambientales.

Se consideraron cuatro instrumentos[4] —dos de mercado (SPA y SPE) y dos de regulación directa (PER y STD)— y se compararon los costos asociados a cumplir diferentes metas. Cabe señalar que SPA es la aplicación teóricamente óptima (de mínimo costo) de permisos transables. SPE es una aplicación subóptima que acepta intercambiar permisos sin importar la localización de las fuentes. STD en cambio es la aplicación de estándares de emisión uniformes a las fuentes y PER exige reducción porcentual igual a cada fuente. Los resultados se resumen en la Figura N° 1.

FIGURA N° 1: COSTO EFECTIVIDAD DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS EN SANTIAGO



Se concluyó que SPE —el sistema propuesto para Santiago— tiene un desempeño peor que SPA, sin embargo en general mejor que el de PER y STD hasta reducciones de un 65%. Esto, siempre que se realicen todos los intercambios. Estos resultados, que estaban en la línea de lo obtenido en otros estudios para Estados Unidos, respaldan la aplicación del instrumento propuesto.

Cabe preguntarse: ¿qué buscaban las autoridades al implementar este sistema? ¿Para qué se estaba implementando un esquema flexible si ni

[4] SPA: sistema de permisos ambientales; SPE: sistema de permisos de emisión; PER: porcentaje de reducción de emisiones igual para todas las firmas; STD: estándar de emisión igual para todas las firmas.

www.cepchile.cl

siquiera se había evaluado su conveniencia? ¿Se lograron los resultados esperados? No hay documentos que detallen estos objetivos ni una evaluación de su desempeño, pero en conversaciones con las autoridades de la época surgieron los siguientes objetivos implícitos:

(1) usar instrumentos de mercado costo efectivos, esto casi a nivel de dogma;
(2) aceptación de la regulación por parte del sector privado;
(3) mantener en un mínimo la intervención y discrecionalidad gubernamentales;
(4) respeto a los derechos de propiedad;
(5) simplicidad en el diseño y facilidad de uso;
(6) mantener bajos —pero efectivos— los costos de control y aplicación;
(7) poner un tope a las emisiones totales de calderas y procesos industriales, permitiendo, no obstante, el ingreso de fuentes nuevas en el sistema.

Los resultados observados seis años después de aplicar un sistema mucho más modesto que el propuesto eran poco alentadores. Hasta 1998, las tareas de descontaminación habían resultado exitosas, pero el sistema de permisos no. Puede argumentarse que, aun en ausencia del sistema, se habría obtenido la mayor parte de las reducciones observadas en el período, las que obedecerían a la llegada del gas natural, a la obligación de las fuentes de cumplir con una "norma de decencia"[5], que en la práctica obligaba a no usar combustibles sólidos o altamente contaminantes[6], y al interés de las fuentes de evitar restricciones a su operación durante las preemergencias, lo que se lograba emitiendo menos[7].

Las fuentes existentes no habían utilizado la mayor flexibilidad, es decir, no se había desarrollado un mercado de transacciones. Las fuentes nuevas casi no estaban compensando sus emisiones, a pesar de que la legislación lo exigía y que había créditos disponibles. 70% de las emisiones de los procesos industriales no era parte del sistema, debido a que problemas técnicos impedían estimar sus emisiones[8]. Por eso, tales emisio-

[5] De 112 mg/m^3.

[6] Como el carbón, la leña o el petróleo pesado.

[7] Un punto importante es establecer si el gas natural habría llegado a Santiago si los requisitos ambientales no lo hubieran tornado necesario. En ausencia de un sistema de permisos, ¿habrían impuesto las autoridades normas estrictas, factibles de cumplir solamente con gas natural, un combustible no disponible en ese momento?

[8] Para un análisis más acabado, véase O'Ryan (2002), Montero *et al.* (2001) y O'Ryan (1999).

www.cepchile.cl

nes no estaban bajo control. Así, los objetivos implícitos antes señalados no se estaban cumpliendo: no había costo efectividad y las emisiones de fuentes nuevas no estaban bajo control. Adicionalmente, el sistema sufrió constantes cambios, incluso antes de entrar en plena vigencia, lo que decepcionó parcialmente a los empresarios.

Si bien desde 1999 a la fecha este mercado ha empezado a funcionar mejor —en particular las fuentes nuevas están compensando sus emisiones—, se siguen observando altos costos de transacción, incertidumbre regulatoria e insuficiencias administrativas que dificultan que este tipo de instrumentos opere con la eficiencia teórica prevista. Quizás el resultado más importante es que ha permitido imponer metas al total de emisiones de cada tipo de fuente sin que ello haya implicado que no entren más fuentes al sistema.

Cabe señalar que hoy el análisis costo efectividad es bastante menos novedoso. No es aceptable tan fácilmente como una tesis de doctorado, a no ser que existan contribuciones notables. De hecho, los ejercicios más típicos de este tipo de modelamiento se pueden obtener en memorias de pregrado (y lo hemos hecho). Lo que se está investigando con más detención es precisamente cómo reducir los problemas que dificultan que estos mercados se desarrollen y operen.

2.2. Caso 2: Análisis riesgo-costo de una regulación ambiental para el arsénico[9]

Chile presenta altos niveles de arsénico en el aire y en el agua, en particular en el Norte. Esto se debe tanto a las altas concentraciones que existen en forma natural en el suelo y en los ríos como a las emisiones de las múltiples fundiciones de cobre del país. Aproximadamente 370 mil personas reciben el impacto de las emisiones de arsénico en el aire y 300 mil el de las emisiones en el agua. El arsénico inorgánico ha sido catalogado como una sustancia cancerígena por la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer, en particular como causante de cáncer de pulmón[10], y este daño sería independiente de la vía de ingesta.

En la Segunda Región, la tasa de mortalidad por este tipo de cáncer supera 2,6 veces el promedio nacional. Por ello, desde comienzos de los noventa, el Ministerio de Salud, venía proponiendo una norma de calidad

[9] Resumido a partir de O'Ryan y Díaz (2000), pp. 115-134. Disponible en www.dii.uchile.cl/progea/pub-en.htm

[10] Existe alguna evidencia de que el arsénico que ha contaminado el agua produce además cáncer en otros órganos, tales como los riñones, el hígado y la vejiga.

www.cepchile.cl

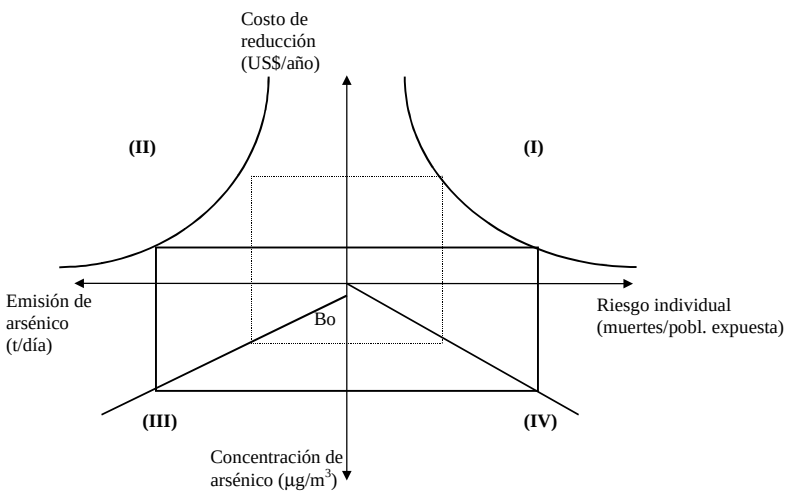
muy estricta de 0,05 µg/m^3 como promedio anual para el arsénico en el aire. Ello generó una polémica bastante aguda con el Ministerio de Minería y las empresas afectadas —cinco de las siete más grandes son estatales—, lo que finalmente llevó a la proposición, a fines de 1993, de un proyecto liderado por la Universidad de Chile[11] para examinar el tema y hacer propuestas concretas. Aún así, en marzo de 1994, a través del decreto 477, el Ministerio de Salud publicó una norma de calidad que tuvo que ser derogada a los pocos meses por oposición de las empresas y del Ministerio de Minería. Como veremos, esta oposición tenía fundamento.

Las preguntas centrales que se debían responder eran: 1) ¿qué instrumento aplicar: norma de calidad —la cual, de acuerdo con nuestra legislación, debía ser uniforme para todo el país— o norma de emisión, que podía se diferenciada según el número de afectados y emisiones de cada fundición?, y 2) ¿qué valor de norma aplicar? Adicionalmente el proyecto entregó antecedentes para analizar si era más barato regular el arsénico del aire o el del agua.

Metodología de análisis

Para hacer el análisis se propuso utilizar una metodología de evaluación riesgo-costo, la que se presenta esquemáticamente en la Figura N° 2.

FIGURA N° 2: CURVA DE EVALUACIÓN RIESGO-COSTO



[11] Proyecto FONDEF 2-24.

www.cepchile.cl

Esta metodología se aplica a cada fuente emisora. En primer lugar se identifica un rango de valores posibles para la concentración de arsénico. Luego, cada uno de estos valores se relaciona con un nivel de emisión (cuadrante III). Para ello es necesario utilizar un modelo de dispersión o factores de transferencia. Es fundamental conocer el nivel base natural (Bo), ya que la concentración resultante de las emisiones es la suma de este nivel base y el aporte respectivo de la fuente. Este nivel de emisión es la meta para la fundición, que permitiría cumplir con la calidad ambiental que se evalúa. Para lograr este nivel de emisión, cada fuente debe aplicar opciones de reducción e incurrir en un costo (cuadrante II). Finalmente, la concentración meta determina, por medio del riesgo unitario, un riesgo individual para cada localidad afectada por cada fuente (cuadrante I). Ello permite estimar, a partir de la población expuesta a cada nivel de concentración, las muertes que se evitarán al aplicar el estándar. De esta forma se obtiene, para cada nivel de concentración, un riesgo implícito y muertes evitadas por localidad, y el costo en que incurre cada fundición para lograr esa calidad del aire.

Resultados evaluación riesgo-costo

Los resultados muestran que hay opciones *win-win* que logran significativas mejoras en salud a muy bajo costo, e incluso con beneficios netos para las fundiciones involucradas. Sin embargo los costos aumentan rápidamente al hacerse más restrictiva la norma de calidad, mientras que los beneficios adicionales en salud son muy bajos.

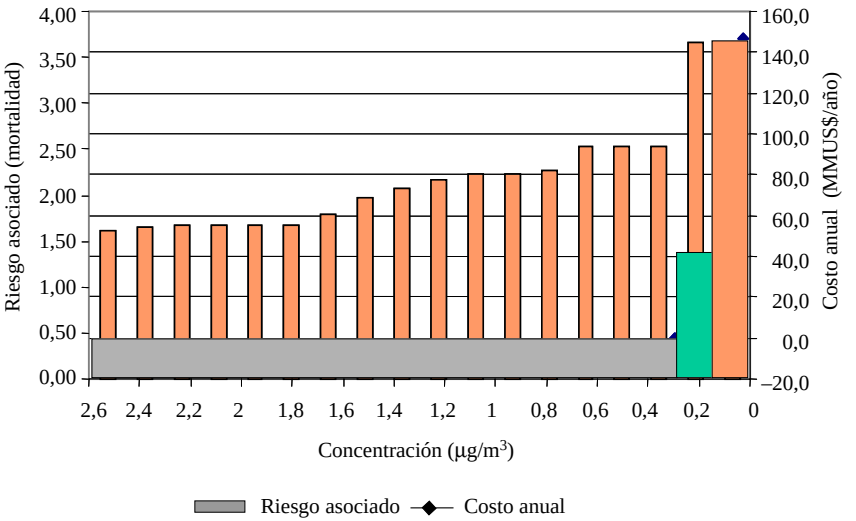
De la Figura N° 3 se desprende que es posible imponer valores de la norma entre 2,5 µg/m^3 y 0,3 µg/m^3 con un beneficio neto para las firmas si cumplen con la norma propuesta[12]. A partir de valores de la norma menores que 0,3 µg/m^3 y hasta 0,15 µg/m^3, los costos anuales de cada nivel posible de la norma toman valores positivos intermedios entre US$ 35 millones y US$ 38 millones. Para una norma inferior a 0,15 µg/m^3, los costos crecen significativamente y se llegan a elevar por sobre los US$ 100 millones anuales[13]. Las muertes estadísticas evitadas cada año decrecen al

[12] Esto se explica por el hecho de que algunas de las opciones permiten una mayor recuperación de cobre y de ácido sulfúrico del proceso, lo que incrementa los ingresos de las fundiciones, además de una reducción de los costos de operación. Con ello, a una tasa de descuento del 12%, las opciones aplicadas permiten un valor presente positivo. Es probable que las empresas tengan mejores usos alternativos para sus recursos de inversión, que les reporten una tasa de retorno superior al 12%.

[13] Esto se explica fundamentalmente por el hecho de que, con estas normas, algunas de las fundiciones más grandes del país deben cerrar su operación, ya que el valor de concentración exigido es inferior al nivel base natural

www.cepchile.cl

FIGURA N° 3: COSTOS DE REDUCCIÓN PARA DISTINTOS VALORES DE NORMA DE CALIDAD DE ARSÉNICO



imponer una norma más exigente, pero ya no varían para valores de calidad menores que 0,15 µg/m^3. Luego, una norma de calidad más exigente no tiene sentido económico.

¿Tiene sentido una norma de calidad única? Un examen permite concluir que el impacto de las diferentes normas es diferente en cada fundición. En efecto, el Cuadro N° 1 presenta el costo, las emisiones y la concentración que se logra en el punto de máximo impacto para cada fundición de los diferentes niveles potenciales de la norma.

Como se aprecia en el Cuadro N° 1, en muchas localidades, niveles naturales altos de arsénico hacen muy costoso o simplemente imposible el lograr estándares muy exigentes. Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de regular caso a caso cada fuente —por medio de una norma de emisión— en vez de utilizar un instrumento único (norma de calidad), ya que una reglamentación pareja es impracticable, extremadamente cara, o deja sin protección suficiente a zonas importantes. Cabe destacar que, para el valor de norma propuesto por el Ministerio de Salud (0,05 µg/m^3), cuatro de las siete fundiciones no son capaces de cumplir ni siquiera dejando de operar. Estos resultados se usaron para establecer en 1997 normas de emisión diferenciadas para fundiciones, las que hoy están en plena vigencia.

www.cepchile.cl

CUADRO N° 1: IMPACTO EN FUNDICIONES DE DIFERENTES NIVELES DE NORMA DE CALIDAD PARA EL As

Fundición		Norma de calidad (µg/m^3)					
		0,70	0,30	0,1	0,09	0,07	0,05
Fundición 1	Conc. anual (MUS$) Emis. (t/día) Conc. (µg/m^3)	0,4 0,63 0,35	6,9 0,49 0,29	37,4 0,63 0,10	44,2 0 No cumple	44,2 0 No cumple	44,2 0 No cumple
Fundición 2	Conc. anual (MUS$) Emis. (t/día) Conc. (µg/m^3)	–8,9 0,18 0,08	–8,9 0,18 0,08	–8,9 0,18 0,08	–8,9 0,18 0,08	6,4 0 No cumple	6,4 0 No cumple
Fundición 3	Conc. anual (MUS$) Emis. (t/día) Conc. (µg/m^3)	0 0,83 0,11	0 0,83 0,11	1,3 0,76 0,1	2,6 0,41 0,06	2,6 0,41 0,06	3,3 0,34 0,05
Fundición 4	Conc. anual (MUS$) Emis. (t/día) Conc. (µg/m^3)	0 0,12 0,24	0 0,12 0,24	5,7 0,03 0,10	9,6 0,0 0,08	9,6 0,0 No cumple	9,6 0,0 No cumple
Fundición 5	Conc. anual (MUS$) Emis. (t/día) Conc. (µg/m^3)	0 0,24 0,09	0 0,24 0,09	0 0,24 0,09	0 0,24 0,09	1,2 0,16 0,06	3,6 0,05 0,03
Fundición 6	Conc. anual (MUS$) Emis. (t/día) Conc. (µg/m^3)	0 0,07 0,15	0 0,07 0,15	1,5 0,03 0,06	1,5 0,03 0,06	1,5 0,03 0,06	7,9 0,02 0,04
Fundición 7	Conc. anual (MUS$) Emis. (t/día) Conc. (µg/m^3)	0 0,81 0,55	1,9 0,27 0,27	15,3 0,0 0,08	15,3 0,0 0,08	15,3 0,0 No cumple	15,3 0,0 No cumple

Nota: Achurados se presentan aquellos casos en que las fundiciones deben cerrar para alcanzar el valor de norma de calidad propuesta.

Finalmente, cabe preguntarse si conviene reducir concentraciones de As en el aire o en el agua. El Cuadro N° 2 permite concluir que el esfuerzo de reducir descargas al agua es más rentable socialmente que el de reducir emisiones al aire. El costo de reducir 3,7 vidas estadísticas anuales (v. e.) (2,6 v. e. al reducir las concentraciones de As en agua a 0,1 mg/l y

www.cepchile.cl

1,1 v. e. al reducir las concentraciones de As en aire a 0,4 µg/m^3) es apenas US$ 11 millones, comparados con los US$ 35 millones (y hasta US$ 140 millones) de reducir en el aire.

Uno de los aspectos más relevantes que nos tocó abordar en este trabajo fue el de la economía política. La industria minera hizo un *lobby* intenso para impedir una norma de calidad ambiental que, como vimos, no tenía sentido económico. Por otro lado, la posición liderada por el Minsal era cerrada y con pocos fundamentos socioeconómicos e incluso de salud. A poco de haber comenzado con la investigación nos dimos cuenta de que las normas de calidad para este tipo de contaminantes tóxicos peligrosos sólo existían en países en que no causaban problemas. En aquellos países donde el arsénico era un problema se norma en forma más flexible de manera tal de evitar grandes, costosos y demorosos conflictos judiciales que finalmente producían la completa inacción. Aquí el papel de la universidad fue muy importante. Ello permitió mostrar que en forma seria se pueden generar modelos e información que permiten tomar buenas decisiones y aumentar el bienestar social.

En términos generales se puede concluir que la generación de una norma ambiental es un proceso complejo, que exige de modelos sofisticados y cuyo resultado es más eficiente en la medida en que se utilizan instrumentos más flexibles. Por otra parte, se ha podido aplicar una política sin necesidad de evaluar en términos monetarios los beneficios.

CUADRO N° 2: COSTOS Y BENEFICIOS DE REDUCIR EL ARSÉNICO EN EL AIRE Y EN EL AGUA

Agua			Aire		
Concentración As (mg/l)	Costo anual (Miles de US$)	Muertes estadísticas evitadas (personas por año)	Concentración As (µg/m^3)	Costo anual (Miles de US$)	Muertes estadísticas evitadas (personas por año)
0,04	0	0	0,40	383	1,13
0,03	10	0,88	0,15	37.000	1,17
0,02	440	1,76	0,10	37.383	1,33
0,01	10.910	2,64	0,08	44.243	1,36

www.cepchile.cl

2.3. Caso 3: Beneficios netos de reducir la contaminación en Santiago

Desde 1994 la Ley de Bases del Medio Ambiente exige realizar un análisis de costos y beneficios a los diversos planes y normas ambientales que se aplican. Tanto el Plan de Descontaminación de Santiago de 1997 como los posteriores planes para fundiciones de cobre han incorporado este análisis. Por ello en 1997 la Universidad de Chile desarrolló un Manual para Evaluar Costos y Beneficios para Conama. La Universidad Católica ha estado desarrollando recientemente el modelo Apheba para Conama con este fin. Otras instituciones públicas han estado involucradas en este tipo de esfuerzos, como el Ministerio de Minería, Mideplán y la Sectra. Para esta última la Universidad de Chile ha desarrollado el modelo integrado de evaluación económica, MODEC, que opera en conjunto con un modelo de emisiones (MODEM), para evaluar los beneficios ambientales de políticas de transporte. Este tipo de análisis es muy útil y permite establecer si los costos en que se incurrieron son razonables a la luz de los beneficios que se obtienen. En teoría, la autoridad debiera elegir un nivel de reducción que maximice el beneficio neto (beneficios menos costos). El siguiente caso ilustra lo anterior.

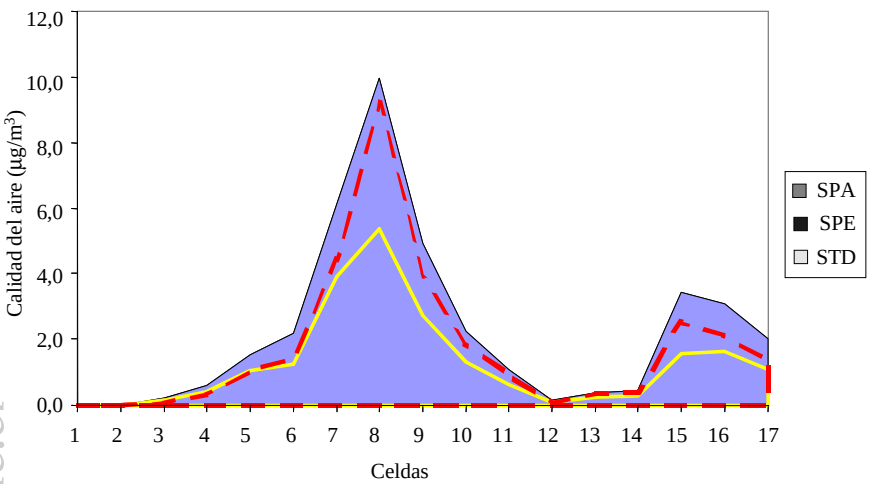
Luego de la aplicación del Decreto 4 detallada en el caso 1, los empresarios han reclamando que en la última década las fuentes fijas han realizado un esfuerzo significativo de descontaminación y que no les corresponde hacer más. Por otro lado, y como se destaca en el caso 1, los instrumentos económicos permiten el logro de las metas ambientales al menor costo para las fuentes. Lo que no se dijo, sin embargo, es que este menor costo se logra por dos razones muy diferentes. Primero, la ganancia en eficiencia estática tradicional, que se logra al reducir las emisiones de las fuentes a las que les cuesta menos. Una segunda fuente de reducción de costos se logra porque los instrumentos flexibles permiten una menor reducción de emisiones a las fuentes participantes que lo que permiten los instrumentos de regulación directa. En efecto, al ser menos flexibles, estos últimos obligan en muchos casos a reducir más allá de la meta de calidad establecida en muchas zonas de la ciudad. Esto las hace más costosas para las fuentes, pero a la vez la mejora en calidad ambiental genera beneficios —a la salud, materiales, agricultura y estéticos— mayores. Como la meta propuesta para estas fuentes no se ha hecho en base a un análisis optimizante de costo-beneficio, cabe la duda de cómo se comparan los *beneficios netos* de aplicar cada tipo de instrumento. ¿Serán los beneficios ambientales de aplicar un instrumento de regulación directa suficientes como para más que compensar los mayores costos de los mismos? En un artículo

www.cepchile.cl

reciente escrito en conjunto con José Miguel Sánchez se explora esta pregunta y de pasada da respuesta a los empresarios respecto de si su esfuerzo puede considerarse suficiente.

Para ello, siguiendo la metodología detallada en el caso 1, se comparan primero los costos de aplicar SPA, SPE y normas de emisión parejas (STD). Se utilizan datos más recientes pero se obtienen resultados similares en cuanto a que SPA es costo efectiva, SPE es de mayor costo y STD es la más costosa. Sin embargo, la reducción en concentraciones asociadas a cada instrumento es también diferente, como se observa en la Figura N° 4. SPA exige menores reducciones en las 17 celdas que SPE, y ésta menores reducciones que STD. Por tanto, los beneficios ambientales de STD serán mayores.

FIGURA N° 4: CALIDAD DEL AIRE LOGRADA AL APLICAR INSTRUMENTOS QUE REDUCEN LAS CONCENTRACIONES EN 36% EN LA PEOR CELDA (REDUCCIÓN META DESEADA = 100)



Para estimar estos beneficios es necesario identificar los daños que se evitan y luego valorarlos. La metodología de evaluación de beneficios en salud consiste en el uso de funciones-dosis respuesta que capturan los efectos en salud por la mejora en la calidad ambiental con respecto a la situación base. El siguiente Cuadro N° 3 presenta los valores utilizados para ello.

www.cepchile.cl

CUADRO N° 3: COSTOS UNITARIOS DE EFECTOS EN SALUD

Efectos en salud considerados	Dólares de 1998
Mortalidad	700.000
Bronquitis crónica	140.000
Admisiones hospitalarias debido a enfermedades respiratorias	1.600
Admisiones hospitalarias debido a enfermedades cardiovasculares	3.500
Visitas a salas de emergencia debido a enfermedades respiratorias	80
Ataques de asma	170
Enfermedades respiratorias menores en niños	170
Síntomas respiratorios agudos	9
Días de actividad restringida	16

Fuente: Holz y Sánchez (2000). Los números han sido redondeados para evitar dar un sentido de falsa precisión.

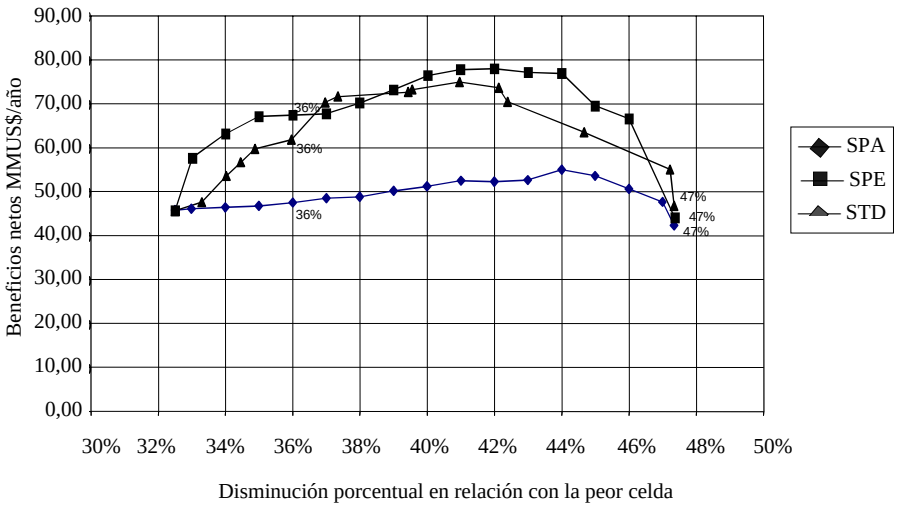
Al anualizar los beneficios diarios obtenidos en el análisis de valoración y sumarlos a los costos se obtienen los beneficios netos. Éstos se aprecian en la Figura N° 5. Se desprenden varias conclusiones interesantes. Primero, que el máximo beneficio social se logra reduciendo en 42% las emisiones utilizando SPE. Esto permite responder a los empresarios que aún es deseable hacer reducciones mayores. Segundo, que el instrumento SPA, que es el más costo efectivo, aparece como el de menor beneficio neto. SPE y STD permiten lograr un beneficio neto relativamente similar. Lo anterior se debe al hecho de que los beneficios en salud de las reducciones adicionales asociadas a éstos más que compensan las ganancias en eficiencia y costos del SPA[14].

En este caso, la valoración entrega información respecto de la posibilidad de exigir mayores reducciones *sumando* los beneficios de diversos impactos en salud. Además confirma que utilizar SPE es una buena opción. En el caso 2 anterior bastaba considerar un solo efecto —cáncer de pulmón— para obtener los resultados que informaron la decisión de política, y por ello no fue necesario valorar. Para seguir avanzando en esta línea es crítico consensuar los valores de dosis-respuesta por utilizar para cada efecto y especialmente los valores por utilizar para ponerle un valor monetario a cada efecto (el "valor de la vida", por ejemplo).

[14] No debe concluirse a partir de esto que el SPA no es deseable. Aplicarlo como se ha hecho aquí, imponiendo que en cada una de las zonas (receptores) consideradas se debe cumplir una meta de calidad única, lleva a este resultado. Por cierto, se puede proponer un sistema SPA que replique las calidades obtenidas en cada celda utilizando STD o SPE y en este caso las ganancias en eficiencia de SPA permitirán obtener los mayores beneficios netos.

www.cepchile.cl

FIGURA N° 5: BENEFICIOS NETOS DE REDUCIR MATERIAL PARTICULADO EN SANTIAGO CONSIDERANDO DIFERENTES INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN



3. INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL: EL NUEVO MODELO Y CASOS PARA CHILE

Es ya un lugar común para los economistas ambientales la distinción entre instrumentos de regulación directa (*command and control*) y los de incentivo de mercado o simplemente económicos (*market based incentives*), los que son aplicados por el gobierno. Los primeros *obligan* al cumplimiento de un determinado estándar o tecnología a todas las fuentes involucradas en la regulación. Los instrumentos económicos buscan cambiar el comportamiento de los agentes económicos internalizando los costos ambientales por medio de un *cambio de los incentivos* que enfrentan los agentes. Incluyen por lo general los permisos transables, impuestos, depósitos reembolsables, etc. Sin embargo los instrumentos que promueven una mayor protección del ambiente y las presiones que reciben las empresas son hoy más sofisticados que esto, como se discute a continuación. Luego se presenta un caso ilustrativo del problema asociado a la selección de instrumentos de regulación.

3.1. El Nuevo modelo de regulación ambiental

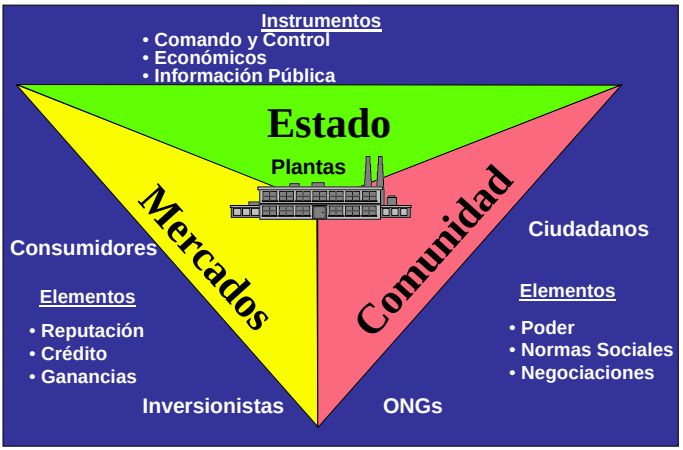
Para analizar la forma en que se lleva hoy la regulación ambiental es conveniente considerar un modelo conceptual propuesto recientemente por

www.cepchile.cl

el Banco Mundial (2002), que se presenta en la Figura N° 6. Este modelo distingue entre tres instituciones/agentes que influyen sobre las fuentes emisoras: el mercado, la comunidad y el gobierno.

Los *mercados* crean incentivos para limitar las emisiones. Por una parte los *consumidores* con creciente conciencia ecológica exigen que los productos y servicios que compran sean amigables con el medio ambiente, idealmente de la cuna a la tumba del producto. Se han creado instrumentos específicos, en particular los sistemas de certificación. Entre éstos se distinguen los ecoetiquetados (por ejemplo, Nordic Swan, Swedish Environmental Choice Programme, Eco-label Award Scheme de la UE), que se preocupan del cumplimiento de ciertos criterios que aseguran que el *producto* sea amigable con el ambiente en cada una de sus etapas; y la certificación de que la *gestión de la producción* incorpora criterios de sustentabilidad (ISO 14001, Forest Stewardship Council [FSC]). Las organizaciones no gubernamentales (ONG) juegan un rol importante aquí al promover acciones específicas ante consumidores y productores para obligar a éstos a producir de manera menos contaminante. Los exportadores chilenos han sufrido estos problemas en carne propia, como se detalla en dos trabajos recientes, uno para la minería chilena y otro para el sector forestal[15].

FIGURA N° 6: EL NUEVO MODELO DE REGULACIÓN AMBIENTAL



[15] Véanse O'Ryan y Ulloa (2001) y O'Ryan y Fierro (2001), respectivamente.

www.cepchile.cl

Por otra parte, los *inversionistas* también presionan en muchos casos para asegurar que el comportamiento ambiental de las empresas en que invierten sea satisfactorio. De otra manera las sanciones y obligaciones que se pueden imponer a los emisores pueden disminuir la rentabilidad de los proyectos financiados. Esto no es un problema teórico: estudios recientes señalan que ante malas noticias en lo ambiental en la prensa, el precio de las acciones cae entre 1% y 2%, incluso en Chile[16].

Las *comunidades* por su parte influyen considerablemente en el comportamiento ambiental de las plantas industriales[17]. Donde hay regulaciones, éstas pueden influenciar a los políticos para apoyar regulaciones más estrictas. Donde no, ejercen una suerte de regulación informal al presionar a las firmas. Ante la amenaza de sanciones sociales, políticas o físicas, si no se compensa a la comunidad afectada o se reducen emisiones, los industriales negocian directamente con ésta. Por cierto, el resultado no tiene necesariamente que ver con un óptimo social. Los ciudadanos, las organizaciones sociales y religiosas y las ONG —nacionales e internacionales— juegan un rol importante. En Ralco, luego de diez años de litigio, se alcanzó un acuerdo entre la Endesa y cuatro familias pehuenches que permitirá ejecutar la central hidroeléctrica que aumenta en 18% la disponibilidad de energía del sistema interconectado central. Estas familias recorrieron el mundo buscando apoyo a su causa y el resultado final requirió la intervención del Gobierno al más alto nivel[18]. La economía política de esta relación y sus implicancias para el logro de un resultado eficiente están recién apareciendo.

Por su parte, el *gobierno* dispone de los instrumentos de regulación directa y económicos antes mencionados para promover sus objetivos ambientales. La discusión y la investigación en este ámbito se han ampliado desde la contraposición de instrumentos económicos y de regulación directa con una óptica de eficiencia, hasta preguntas sobre las otras dimensiones por considerar al momento de aplicar un instrumento: su efectividad, y los aspectos administrativos, legales e institucionales involucrados. Aparte de la dimensión costo-efectividad, la decisión del instrumento a aplicar incluye sus impactos distributivos —ganadores y perdedores—, los requerimientos de información, cambios legales requeridos, principios de gestión ambiental que se deben modificar, factibilidad política, costos de fiscalización y monitoreo, facilidad en su aplicación e incertidumbres presentes[19].

[16] Véase Dasgupta, Laplante y Mamingi (1997).

[17] Véase, por ejemplo, Dasgupta, Lucas y Wheeler (1998).

[18] Véase *El Mercurio*, 17 de septiembre, 2003, p. A1.

[19] Véanse diversos estudios: Bohm y Russell (1985); OTA (1995); IPCC (1996); Richards (1998).

www.cepchile.cl

Finalmente, ha surgido en la última década la posibilidad de ejercer presión por medio de la diseminación de información (*information disclosure*) sobre emisiones o desempeño ambiental. Esta posibilidad se relaciona directamente con las dos instituciones anteriores, ya que la información permite que la comunidad local, las ONG, inversionistas y consumidores conozcan mejor el desempeño ambiental. Por cierto, este instrumento es problemático de aplicar, ya que nada asegura que los resultados se relacionen con valores razonables para la industria afectada: los afectados pueden presionar por cero emisión, aun cuando ello no sea eficiente. Proper en Indonesia y EcoWatch en Filipinas son ejemplos de aplicaciones de este instrumento.

El nuevo modelo de regulación tiene una especial relevancia para los países en desarrollo que dependen del comercio exterior. Las restricciones ambientales externas y las fitosanitarias condicionan la política ambiental local; gran parte de ésta deja de ser endógena y está determinada por las exigencias internacionales. Es decir, por grupos de poder externos que influencian a los consumidores y a los gobiernos para aplicar normas que muchas veces son medidas de protección comercial. Nuevamente la economía política de la regulación ambiental juega un papel preponderante, pero ahora los jugadores son externos y nosotros perdemos grados de libertad para entrar en este juego. Los mercados externos reaccionan a presiones locales que generalmente no tienen que ver con el bienestar mundial y ni siquiera local. El resultado es que las empresas nacionales se ven sometidas a regulaciones más exigentes que las que un análisis costo-beneficio sostendría.

3.2. Caso 4: Estrategia para el control de sustancias agotadoras de la capa de ozono: no exactamente lo que ordenó el doctor[20]

Los criterios para seleccionar instrumentos son un tema de discusión teórica y de aplicación importante. Este caso lo ilustra por medio de una aplicación específica.

En marzo de 1990 Chile ratificó el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (SAO), comprometiéndose primero a reducir y luego a eliminar su consumo. Como muchos países en desarrollo, Chile no había definido hasta el año 2000 una estrategia para cumplir dicho protocolo. Los países desarrollados, por su parte, han optado por diversas estrategias por lo general combinando el uso de regulación

[20] Resumido a partir de O'Ryan, Ulloa y Asencio (1999). Disponible en www.dii.uchile.cl/progea/pub-en.htm

www.cepchile.cl

directa e instrumentos de mercado. Por ello se trabajó con Conama para elaborar una propuesta específica.

Chile es básicamente un país importador de SAO. La sustancia más importante es el CFC-11 con un 38% del consumo PAO[21], seguido por el CFC-12 (32%) y luego el bromuro de metilo (BM, 22%). Las demás sustancias tienen poco peso en el consumo PAO[22]. La importación de CFC está concentrada en pocas empresas importadoras. Con respecto a los usuarios finales de CFC, cerca del 55% del consumo se concentra en empresas grandes y medianas y el resto está atomizado en empresas pequeñas, o con consumos eventuales, y entre técnicos de refrigeración. En total se estima que podrían existir más de 400 usuarios finales de CFC.

En este contexto, es de interés responder preguntas como ¿qué atributos son relevantes para la autoridad ambiental al momento de seleccionar instrumentos que permitan cumplir las obligaciones contraídas en el protocolo? ¿Cuáles son los costos de cumplir con las reducciones comprometidas? ¿Hace una diferencia significativa el aplicar instrumentos flexibles? Los economistas prefieren usar instrumentos flexibles porque son costo-efectivos. Sin embargo, los reguladores también tienen otros atributos que valoran al momento de elegir un instrumento específico: la efectividad, la simplicidad administrativa, legal e institucional, y las posibilidades de monitoreo y fiscalización.

Escenarios de Consumo de CFC: 1997-2010

Se definieron cinco escenarios potenciales para el consumo de CFC-11 y CFC-12 que combinan posibles tasas de consumo, niveles de reconversión de empresas usuarias y niveles de uso del Fondo Multilateral del Banco Mundial para la reconversión de empresas. La Figura N° 7 presenta los resultados, comparados con las obligaciones contraídas por Chile.

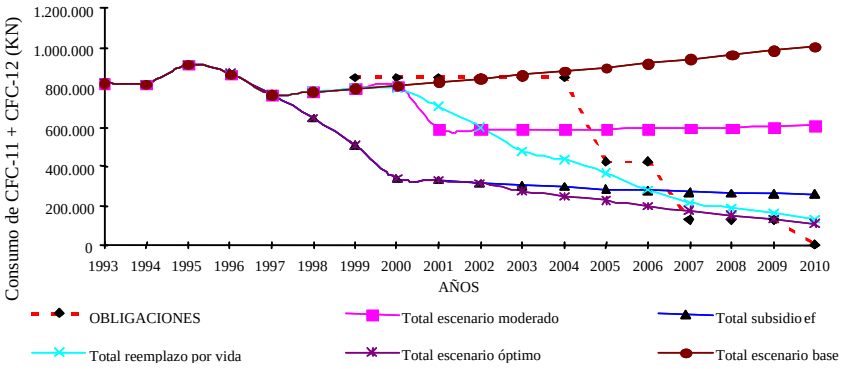
Se puede concluir que es necesario generar una estrategia que haga factible acercarse al escenario optimista, de modo que Chile cumpla con las obligaciones que le impone el protocolo respecto de los CFC. Adicionalmente, será necesario definir instrumentos que permitan asegurar el cumplimiento de las metas de los años 2007 y 2010, que se prevén como las más difíciles de lograr.

[21] El potencial de agotamiento de la capa de ozono (PAO) de un compuesto es una medida de su capacidad para destruir ozono estratosférico. Es una medida relativa en que se define el PAO del CFC-11 como 1,0, y el de los demás compuestos en base a este punto de referencia.

[22] Con excepción de los HCFC (que pesan poco en el total PAO), se espera que sigan disminuyendo.

www.cepchile.cl

FIGURA N° 7: COMPARACIÓN DE ESCENARIOS CON OBLIGACIONES



Evaluación cualitativa de opciones regulatorias

En base a la experiencia internacional y a las características específicas del caso chileno se ha considerado interesante evaluar cualitativamente cinco instrumentos de regulación: tres de regulación directa y dos de mercado. Los primeros incluyen normas de producto, que regulan la producción e importación de productos que pudieran contener o haber sido fabricados con sustancias controladas; prohibición de importación de sustancias o grupos de ellas; y cuotas de importación, que permiten que agentes autorizados importen un total máximo de sustancias (distinto de cero). Las regulaciones de mercado consideradas incluyen: tarifas a las importaciones, mediante las cuales se cobra una sobretasa a la internación de sustancias, y un sistema de permisos de importación transables (SPIT), que consiste en la asignación de permisos de importación libremente transables entre los usuarios de estas sustancias. El Cuadro N° 4 resume la evaluación cualitativa de cada opción.

Es claro que no hay ninguna opción dominante. Sin embargo, al comparar los SPIT con las cuotas de importación y las tarifas, se concluye que aquéllos tienen ventajas. Si bien todas las opciones requieren una ley, los SPIT son eficientes (cosa que no sucede con las cuotas) y efectivos (lo que no sucede con las tarifas). En particular, reducen fuertemente la incertidumbre tanto para los usuarios como para el regulador. Además, la potencial aplicación de SPIT no parece contar con un rechazo de parte de la autoridad económica, mientras que la aplicación de una tarifa es más sensible. Por otra parte, la opción de prohibir en forma secuencial ciertas

www.cepchile.cl

www.cepchile.cl

CUADRO N° 4: EVALUACIÓN CUALITATIVA DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Instrumento regulatorio	Costo/efectividad	Efectividad	Facilidad legal	Facilidad de monitoreo y fiscalización	Aceptación	
					Por usuarios	Por regulador
NORMA DE PRODUCTO	MEDIA. Es posible evaluar la costo-efectividad media de cada sector, pero no es posible incorporar variaciones de costos dentro de cada sector.	BAJA. No permite reducciones por debajo del 30% del consumo actual. Por lo tanto, no permite cumplir metas intermedias.	ALTA. Sólo requiere de un trámite administrativo.	BAJA. Es necesario fiscalizar los productos que pudieran contener sustancias controladas.	BAJA. Primeros productores afectados podrían considerarla discriminatoria.	MEDIA. A pesar de tener una alta facilidad legal, requiere manejo de gran cantidad de información técnica para hacerla costo-efectiva.
PROHIBICIÓN DE IMPORTACIÓN DE SUSTANCIAS	BAJA-MEDIA. Poco flexible; no permite discriminar entre distintos sectores productivos con distinta costo-efectividad.	MEDIA. Obliga a reducir en exceso o a no cumplir las metas.	ALTA. Sólo requiere de un trámite administrativo.	ALTA. Sólo requiere control de importaciones de sustancias controladas.	BAJA-MEDIA. Primeros usuarios afectados podrían considerarla discriminatoria.	ALTA. Sencilla de aplicar.
CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE SUSTANCIAS	BAJA-MEDIA. Depende de la asignación inicial, la que difícilmente es costo-efectiva.	ALTA. Se ajusta, por definición, a la meta establecida.	BAJA. Requiere ser aprobada por una ley.	ALTA. Sólo requiere control de importaciones de sustancias controladas.	MEDIA. Depende del mecanismo de asignación inicial.	BAJA. Requiere una ley.

(continúa)

www.cepchile.cl

(continuación)

Instrumento regulatorio	Costo/efectividad	Efectividad	Facilidad legal	Facilidad de monitoreo y fiscalización	Aceptación	
					Por usuarios	Por regulador
TARIFA A LA IMPORTACIÓN DE SUSTANCIAS	ALTA. Por definición es costo-efectiva. Induce a los productores de menores costos a la reconversión.	MEDIA. Alta incertidumbre en el efecto de las tarifas sobre el consumo.	BAJA. Requiere ser aprobada por una ley.	ALTA. Sólo requiere control de importaciones de sustancias controladas.	MEDIA. Permite a los productores definir en qué momento realizar la reconversión, pero obliga a pagar por cada unidad utilizada.	BAJA. Requiere ley y es incierta.
PERMISOS DE IMPORTACIÓN TRANSABLES	ALTA. Alta flexibilidad. Permite transar los derechos asignados.	ALTA. Se ajusta, por definición, a la meta establecida.	BAJA. Requiere ser aprobada por una ley.	MEDIA. Requiere control de importa-ciones de sustancias controladas, y adicionalmente el control de la transacción de permisos.	ALTA. Permite a los productores definir en qué momento realizar la reconversión y, si se regula inicialmente, no obliga a pagar por cada unidad utilizada.	BAJA. Requiere una ley y controles adicionales.

sustancias tiene el atractivo de ser fácil de implementar y de controlar. Considerando que la reconversión de la industria usuaria del CFC-11 presenta costos menores que la usuaria de CFC-12, debiera prohibirse primero el CFC-11 y luego el CFC-12. Las fechas de reducción relevantes son el 2005 (50%) y el 2007 (15%), por lo que es interesante generar y evaluar un escenario que cumpla, vía prohibiciones, con estas metas.

Estas conclusiones generales se discutieron con el equipo Conama encargado de definir la regulación, y a partir de ellas, y de las prioridades del regulador se optó por evaluar cuantitativamente los siguientes instrumentos: SPIT, prohibición adelantada (que permita cumplir en las fechas previstas del acuerdo), prohibición, normas de productos.

Evaluación cuantitativa de opciones elegidas

El Cuadro N° 5 presenta los costos de cada opción regulatoria para tres escenarios.

CUADRO N° 5: COSTOS DE LAS OPCIONES REGULATORIAS PARA CADA ESCENARIO

	Escenario pesimista VPN [US$ millones]	Escenario moderado VPN [US$ millones]	Escenario optimista VPN [US$ millones]
Prohibiciones: 2005-2010	8,7**	3,6**	1,1*
Norma de producto	11,4**	2,9**	0,8*
SPIT	14,4	5,4	1,1
Prohibiciones adelantadas: 2005-2007	18,8	11,0	4,9

* Leve incumplimiento.
** Incumplimiento significativo.

Los ahorros de los costos de aplicar un SPIT (US$ 4 millones a US$ 5 millones) no son muy significativos. Discusiones con las autoridades de Conama señalan que este gasto adicional es un "mal menor" si con ello se evita llevar la discusión de la estrategia al Congreso, lo que efectivamente sucede al aplicar prohibiciones adelantadas. La autoridad tampoco estima que sean importantes los usos potenciales que se pueden dejar de realizar por adelantar la prohibición de CFC12 al 2007. No hay quien abogue por ellos si se plantea esto con suficiente antelación. Por ello, al

www.cepchile.cl

sopesar tanto los antecedentes cuantitativos como cualitativos, *la autoridad se inclina por aplicar prohibiciones por sustancia, adelantando la de CFC12 al 2007*. ¡No exactamente lo que ordenó "el doctor"![23]

4. ANÁLISIS DE EQUILIBRIO PARCIAL VS. EQUILIBRIO GENERAL

En general, para analizar diferentes políticas ambientales se usan modelos de equilibrio parcial. Estos modelos tienen la gran ventaja de que requieren poca información y permiten analizar en detalle el o los sectores afectados directamente. Sin embargo, estos modelos no capturan los efectos sobre el resto de los agentes y sectores de la economía. Los modelos de equilibrio parcial no permiten encontrar respuestas acerca de los impactos en otros sectores. Los impactos sobre el empleo, el ingreso, los sectores más afectados, los ganadores y perdedores indirectos no son analizados en estos modelos.

Los modelos de equilibrio general resuelven en parte el problema, pues permiten una visión global de la economía integrando consumidores y productores, además de las acciones del gobierno en un solo modelo. Desgraciadamente, los modelos de equilibrio general teóricos son por lo común muy simples y no representan adecuadamente las interrelaciones económicas entre diferentes agentes en forma realista, o bien asumen muy pocos sectores productivos. Los modelos de equilibrio general computables (EGC) permiten integrar un mayor número de sectores e incorporar adecuadamente las relaciones económicas entre productores y consumidores, además de utilizar datos empíricos provenientes de las cuentas nacionales del país. Si bien estos modelos requieren esfuerzos notablemente superiores en su desarrollo, debido al enorme caudal de información que debe determinarse y el tiempo para su desarrollo en sí, permiten apreciar en forma "más realista" los impactos que se generan en la economía del país. Por ello es deseable tener un modelo con estas características que permita complementar los análisis de equilibrio parcial. Los modelos EGC siguen el tradicional flujo circular de la renta que en este caso se resume en la Figura N° 8, según la cual se observan las interrelaciones entre los diferentes agentes económicos.

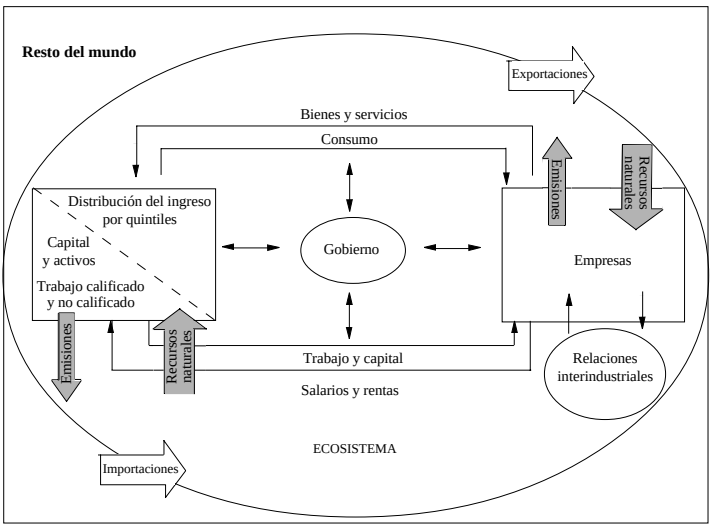
Las principales tres etapas en la construcción de un modelo EGC son las siguientes:

1. Desarrollo del modelo teórico que rige a la economía (supuestos de competencia de los mercados locales y extranjeros, funciones de producción y consumo, intertemporalidad, etc.).

[23] Es decir, los economistas preocupados por la eficiencia.

www.cepchile.cl

FIGURA N° 8: FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA



2. Especificación de los agentes considerados y su desglose (factores productivos, sectores, socios comerciales, etc.).
3. Construcción/adaptación del modelo a la problemática específica que se desea explorar.

4.1. El modelo Ecogem-Chile

Para realizar análisis de equilibrio general se ha adaptado un modelo que permite examinar conjuntamente los impactos derivados de ciertas reformas impositivas, con los impactos en general sobre la economía derivados de acuerdos comerciales. Esto permite desarrollar investigación en diversos ámbitos, en particular impuestos/subsidios ambientales y de comercio y medio ambiente. Para ello se ha trabajado con una adaptación del modelo de la OECD (Beghin, *et al.*, 1996) que hemos llamado Ecogem-Chile. Es un modelo estático, cuyas principales características son el gran número de especificaciones que posee. Su posibilidad de incluir múltiples sectores productivos, tipos de trabajo, hogares agrupados por ingreso, socios comerciales y una amplia gama de instrumentos de política tributaria es una de ellas.

www.cepchile.cl

La producción se modela mediante funciones CES/CET, elasticidad de sustitución/transformación constante, anidadas. Por el lado de la producción (XP), el primer nivel se escoge mediante una CES entre una canasta de insumos intermedios no energéticos y una canasta de factores (capital y trabajo) e insumos energéticos (KEL). KEL es un bien compuesto de capital (K), energía (E) y trabajo (L). Por el lado de los factores se divide la canasta de capital-energía y el trabajo mediante una nueva CES, y sucesivamente se separa la energía del capital, asumiéndose siempre función CES para la sustitución tanto entre factores como dentro de ellos (tipos de trabajo, energía y capital)[24]. ND representa insumos no energéticos. PKEL y PND son los precios compuestos del KEL y ND para cada sector i. Asumiendo rendimientos constantes a escala en la producción, cada sector produce minimizando costos, sujeto a la función de producción de la siguiente manera:

$$\min \; PKEL_i KEL_i + PND_i ND_i$$

s.a.

$$XP_i = \left[a_{kel,i} KEL_i^{\rho_i^p} + a_{n\,d,i} ND_i^{\rho_i^p}\right]^{i/\rho_i^p}$$

Por el lado de los hogares, éstos distribuyen su ingreso entre ahorro y consumo mediante una función de utilidad ELES (*Extendend Linear Expenditure System*). La forma en la cual se incorpora el ahorro (dividido por un índice de precios de los demás bienes) neutraliza parcialmente la sustitución entre ahorro y consumo, debido a que el precio del ahorro es una ponderación de los precios de todos los demás bienes. Esta función además considera consumos mínimos de subsistencia a la *stone-geary*. Se pueden distinguir diferentes tipos de hogares por ingreso (quintiles o deciles), según información de base disponible. El consumidor *h* resuelve el siguiente problema:

$$\max \quad U = \sum_{i=1}^{n} \mu_i ln(C_i - \theta_i) + \mu_s \, ln\left(\frac{S}{cpi}\right)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^{n} PC_i C_i + S = YD \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^{n} \mu_i + \mu_s = 1$$

[24] KEL es un bien compuesto de K, E y L, que luego mediante una nueva CES se divide en KE y L, y luego en tipos de L y en K y E.

www.cepchile.cl

Otros elementos: Una vez definidas las demandas intermedias y la de los hogares, sólo resta incluir el resto de las demandas finales, i. e., inversión, gasto de gobierno, variación de existencias y márgenes de distribución (domésticas y sobreimportaciones). La demanda final de cada ítem se define como porciones fijas de la demanda final total.

En cuanto a las finanzas públicas, se tienen distintos tipos de impuestos y transferencias. En el modelo se definen: impuestos al trabajo (diferenciado por categoría ocupacional), a las firmas (utilidades), al ingreso (diferenciado por quintil o decil), los cuales son directos. Además se definen aranceles y subsidios a las importaciones, impuestos y subsidios a las exportaciones (diferenciados por sector) e IVA (nacional e importado, así como por sector). Finalmente, el modelo además incluye los impuestos/subsidios sectoriales indirectos (a los derivados del petróleo, a las bebidas y al tabaco, el subsidio al carbón, etc.) y transferencias desde y hacia el exterior y los hogares por parte del gobierno.

En la incorporación del sector externo se utiliza el supuesto de Armington, que permite sustitución imperfecta entre bienes y servicios nacionales e importados. Así también se usa una función CES anidada para representar la canasta nacional e importada. A su vez, para la oferta de producción nacional, ésta recibe un tratamiento similar al de la demanda, incorporando ahora una CET para distinguir entre el mercado nacional y el de exportaciones.

4.2. Caso 5: Impuestos ambientales

Durante el desarrollo de esta línea de investigación se han realizado diversas aplicaciones. Sin embargo cabe destacar dos. La primera consiste en explorar el impacto de los impuestos y subsidios que afectan al medio ambiente en Chile. El segundo grupo de aplicaciones versa sobre el tema de comercio y medio ambiente, en particular los impactos de los acuerdos de libre comercio sobre el medio ambiente.

Algunos resultados de la primera área de trabajo se resumen a continuación. El análisis que se realiza consiste en evaluar cuantitativamente el impacto de introducir impuestos ambientales en Chile. Para ello se evalúan dos alternativas: un impuesto a las emisiones de PM10 y otro impuesto a los combustibles derivados del petróleo. En ambos casos lo que se busca es reducir las emisiones de PM10 en aproximadamente 10%.

Los resultados se resumen en el Cuadro N° 6 y son ilustrativos del tipo de análisis que permite este tipo de enfoque. Al observar los resultados de la simulación, lo primero que se observa es que para el caso de un

www.cepchile.cl

impuesto a los derivados del petróleo los efectos son más negativos que en el caso de un impuesto a las emisiones. Asimismo, esto repercute en el resto de los sectores, haciendo de ésta una política más onerosa en términos globales. El ingreso real cae para todos en ambos casos. A su vez el ahorro se ve negativamente afectado por estas políticas. En el caso de las emisiones de contaminantes se tiene que estos resultados se reducen para el PM10 en cerca del 10%.

CUADRO N° 6: IMPACTOS DE INCLUIR IMPUESTOS AL PM10 Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Impactos		Simulación de impuestos	
		PM10	Derivados del petróleo
Macro	PIB real demanda final	-0,2%	-0,5%
	Consumo	-0,2%	-0,8%
	Inversión	-0,2%	0,4%
	Exportaciones	-1,5%	-2,0%
	Importaciones	-1,6%	-2,0%
Sectorial	Refinería petróleo	-11,2%	-20,6%
	Petróleo y gas natural	-4,5%	-7,4%
	Otros transportes	-3,4%	-3,0%
	Transporte terrestre	-2,2%	-2,3%
	No renovables	-0,7%	-0,5%
	Alimentos	0,6%	0,0%
	Textiles	1,6%	0,6%
	Construcción	-0,2%	0,3%
	Gas	2,3%	2,2%
	Electricidad	1,3%	1,0%
	Agua	3,3%	2,0%
Hogares	Ingreso disponible real Q1	0,2%	-0,5%
	Ingreso disponible real Q2	0,2%	-0,5%
	Ingreso disponible real Q3	0,1%	-0,6%
	Ingreso disponible real Q4	-0,1%	-0,8%
	Ingreso disponible real Q5	-0,5%	-1,0%
Emisiones	SO_2	-11,1%	-10,9%
	NO_2	-11,0%	-10,8%
	CO	-3,0%	-3,1%
	COV	-1,7%	-3,6%
	PM10	-10,0%	-9,7%

www.cepchile.cl

4.3 Conclusiones y futuros desarrollos de la línea

El desarrollo del modelo Ecogem-Chile permite analizar una variada gama de políticas públicas y su impacto en los diferentes agentes económicos. Cabe señalar que, como todo modelo, es imperfecto desde su concepción, pues considera un conjunto de supuestos (como cualquier otro modelo) que son siempre criticables. Sin embargo, al hacer explícitos estos supuestos, se pueden llevar a cabo análisis útiles en especial para los tomadores de decisión. Por otra parte, esto también permite modificar dichos supuestos en etapas posteriores o por parte de otros investigadores si se cree necesario.

Entre las falencias del modelo actual se cuenta su estaticidad, es decir, el hecho de que trabaje con un modelo estático, obviando las relaciones dinámicas de la economía, en especial la inversión. Para ello se sigue trabajando actualmente en el desarrollo de un modelo dinámico que permita capturar dichas interrelaciones de mediano y largo plazo. Éstas son fundamentales en políticas que se consideran tendrán impactos de este período temporal, como son las políticas con impacto en la sustentabilidad del desarrollo, o el crecimiento de largo plazo.

Otra falencia en que se está trabajando es la estimación de parámetros del modelo, en especial todas las elasticidades que éste emplea. Como todo modelo de EGC, éste también es fuertemente criticado por utilizar un número importante de parámetros que con frecuencia no se estiman estadísticamente. En este sentido, se está trabajando para disminuir (ojalá eliminar) los parámetros no estimados en el modelo.

Finalmente, un tema adicional en el que se está trabajando es la incorporación de la calidad ambiental en la función de utilidad, con el fin de incorporar las preferencias de los consumidores por una mejor calidad ambiental, y con ello mejorar de modo sustancial el análisis de políticas ambientales con el modelo en cuestión. Esta área es tal vez, en los modelos EGC, la más novedosa.

5. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

El *toolkit* de los economistas estaba bien preparado a comienzos de los noventa para guiar la regulación ambiental. Chile ha seguido en la última década la evolución observada en diversos países desarrollados: primero regulación directa, luego el uso de instrumentos económicos, y la creciente incorporación de evaluaciones de costos **y** beneficios. Por ejem-

www.cepchile.cl

plo, los Planes de Descontaminación y Normas deben realizar un análisis costo-beneficio para su aplicación. Si bien ello se hace de manera simple, deja de manifiesto el interés por incorporar los aspectos económicos en la toma de decisiones, tanto en la selección de instrumentos como en la definición de las metas por lograr. Cabe destacar que en esto somos más ambiciosos incluso que en Estados Unidos, donde por ley no se pueden considerar los aspectos económicos al aplicar normas que afectan a la salud. El caso de la regulación del arsénico es un buen ejemplo del cambio de mentalidad observado, ya que se normó considerando diversas dimensiones, no sólo los impactos en salud, como era tradicional.

Sin embargo, es fundamental incorporar más evaluaciones empíricas que permitan asegurar que las políticas aplicadas sean relativamente eficientes y eficaces. Tales evaluaciones deben iluminar respecto de la conveniencia de aplicar determinados instrumentos, por ejemplo, permisos transables para aire y agua. Deben también incorporar las implicancias distributivas y sectoriales de cada política, para así entender mejor las reacciones esperables y la economía política detrás de éstas. Para estas evaluaciones en este campo es común tener que analizar más de un mercado a la vez, lo que obliga al uso de modelos econométricos sectoriales con ecuaciones que describan el comportamiento de mercados específicos. El uso de pesticidas o el impacto de regular un contaminante urbano son ejemplo de ello. En algunos casos las evaluaciones de equilibrio general son apropiadas, en particular si se busca evaluar políticas que cruzan los principales sectores económicos (impuestos, tratados de libre comercio).

El diseño e implementación de los instrumentos debe mejorarse. Cuando el diseño es insuficiente —o inapropiado para el problema específico— se hace necesario modificar constantemente los instrumentos y eso genera incertidumbre regulatoria. Además, una inadecuada implementación implica crecientes costos de transacción. Con ello los instrumentos pierden credibilidad y no operan de manera eficiente, en particular los instrumentos económicos. Es común observar en la política ambiental que instrumentos interesantes se aplican mal y por tanto sus resultados son deficientes. Normalmente se desecha el instrumento (y no a quienes los aplicaron), aun cuando si bien concebidos y bien implementados pudieron ser eficientes. En otros casos se insiste con un instrumento inapropiado para el problema que se aborda.

Chile ha avanzado poco en cuanto al "hacer cumplir" (*enforcement*). El tipo de sanciones aplicables y los montos involucrados por lo general no se relacionan con lo necesario para incentivar el cumplimiento.

www.cepchile.cl

Hace falta mayor investigación en este campo, la que está desarrollándose en forma muy incipiente.

Lo anterior implica que es necesario conocer los mercados con los que se está trabajando. No bastan las recetas simplistas de modelos de equilibrio parcial. ¡Para ello, los economistas deben salir a terreno! Además se requiere una mayor capacidad para trabajo interdisciplinario (economistas, ingenieros, abogados), mejor información y mejores modelos físicos y económicos.

En los últimos cinco años se han desarrollado los acuerdos de producción limpia (enfoque voluntario), que han permitido poner bajo control a algunos sectores que con otro tipo de instrumentos serían ineficaces debido a las dificultades de monitoreo y fiscalización. Hay un interesante campo de investigación futura en esta línea que identifica aquellos sectores para los que este tipo de instrumento es más aplicable. Similarmente, hay un amplio espacio para estudiar la conveniencia de aplicar instrumentos de diseminación de información, en especial cuando se estima costoso o difícil el hacer cumplir ciertas regulaciones. Por ahora la teoría económica ofrece pocas luces respecto de cuándo conviene aplicarlos, qué forma deben tomar y su comparación con la aplicación de instrumentos más tradicionales de regulación.

Un campo donde Chile ha sido extremadamente descuidado es el de las exigencias ambientales internacionales a las que se ven sometidas las exportaciones. Los principales sectores exportadores —y los más dinámicos de la economía—, tales como el salmonero, el forestal y el minero, están amenazados por estas exigencias. La aplicación del principio precautorio, y la acción de las ONG, empresas competidoras de nuestros productos, gobiernos y grupos de consumidores organizados, en forma creciente, presionan por un "manejo sustentable" de los recursos y que su uso no genere riesgos. La definición de qué se entiende por ello es difusa y queda en manos de instituciones que tienen intereses propios (distintos de maximizar el bienestar mundial). Hay crecientes exigencias de una certificación ambiental que asegure que el producto sea amigable con el ambiente en todas las etapas de su ciclo de vida. Estos instrumentos son también definidos por instituciones externas con intereses propios. Ello es una forma novedosa de proteccionismo que puede tener implicancias muy negativas para Chile. Hay, por cierto, en todas estas definiciones un importante juego de intereses. Entender la economía política que está detrás es crítico para diseñar las instituciones, políticas e instrumentos que permitan defender nuestras exportaciones.

Finalmente, hacemos un llamado a entusiasmar a nuestros estudiantes para que investiguen en temas de manejo de recursos. Este campo está

www.cepchile.cl

prácticamente virgen, por ejemplo, en un tema tan relevante como el del cobre. No es lógico que en este campo haya muchas veces más trabajos publicados por investigadores de otros países.

Estamos convencidos de que veremos en forma creciente que la aplicación de buena economía a los problemas ambientales será una forma en que los académicos de Latinoamérica publiquen en los mejores *journals* del área: *Journal of Environmental Economics and Management, Land Economics, Canadian Journal of Economics, American Journal of Agricultural Economics, Environmental and Resources Economics, Environment and Development Economics*, etc.[25].

REFERENCIAS

Arrow, K.; P. Dasgupta y K. G. Mäler: "Welfare Economics in Imperfect Economies". Documento de trabajo preparado en visita de los dos primeros autores al Beijer International Institute of Ecological Economics, Estocolmo, Suecia, 2002.

Banco Mundial: "Armonización de la Actividad Industrial con el Medio Ambiente: Nuevas Funciones de la Comunidad, el Mercado y el Gobierno". Coedición con Alfaomega Colombiana S. A., mayo, 2002.

Beghin, John, Sébastien Dessus, David Roland-Holst y Dominique van der Mensbrugghe: "General Equilibrium Modelling Of Trade And The Environment". Technical Paper N° 116, OECD Development Centre, 1996.

Bohm y Russell: "Comparative Analysis of Alternative Policy Instruments". En A. Kneese y J. Sweeney (eds.), *Handbook of Natural Resources and Energy Economics*, Vol. I. Amsterdam: North Holland, 1985.

Dasgupta, Laplante y Mamingi: "Capital Market Responses to Environmental Performance in Developing Countries". World Bank Development Research Group Working Paper, N° 1909, octubre, 1997.

Dasgupta, Lucas y Wheeler: "Small Manufacturing Plants, Pollution and Poverty: New Evidence from Brazil and Mexico". World Bank Development Research Group Working Paper, N° 2029, diciembre, 1998.

El Mercurio: "Fin a 10 Años de Litigios por Central Ralco", 17 de septiembre, 2003, p. A1.

Holz, J. C. y Sánchez, J. M.: "Estimation of Unitary Costs of Mortality and Morbidity and its Application to Assess The Health Benefits of the Santiago Decontamination Plan". Documento no publicado, 2000.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): *Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1996.

[25] Cabe señalar que en junio de 2004 se realizó el Primer Congreso Latinoamericano y del Caribe de Economistas Ambientales y de Recursos, organizado por la recientemente creada Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economistas Ambientales y de Recursos (ALEAR). Éste se constituyó formalmente en el Segundo Congreso Mundial de Economistas Ambientales y de Recursos realizado el 2002 en Monterrey, California. Todo lo anterior señala que ésta es una subdisciplina que está consolidándose en la región.

www.cepchile.cl

Montero, J. P., J. M. Sánchez y R. Katz: "Análisis del Mercado de Emisiones de Material Particulado en Santiago". *Estudios Públicos*, 81 (verano 2001).

O'Ryan, Raúl: "Cost-Effective Policies to Improve Urban Air Quality in Santiago, Chile". *Journal of Environmental Economics and Management*, 31, November, pp. 302-313, 1996.

O'Ryan, Raúl: "Actualización y Aplicación de Permisos de Emisión Transables a la Contaminación Atmosférica de la Región Metropolitana en el Contexto del Plan de Descontaminación". Informe Final Preparado para Conama, 1999.

O'Ryan, R., A. Ulloa y G. Asencio: "Strategy for Controlling Ozone-Depleting Substances in a Country that Imports Them: The Case of Chile". XVII Latin American Meeting of the Econometric Society, August 2-6, 1999, Cancún, México.

O'Ryan, Raúl y M. Díaz: "Risk-Cost Analysis For The Regulation Of Airborne Toxic Substances In a Developing Context: The Case Of Arsenic in Chile". *Environmental and Resource Economics*, Vol. 15, N° 2, February, pp. 115-134, 2000.

O'Ryan, Raúl y G. Fierro: "Trade and the Environment: Forestry". En R. Fischer (ed.), *Latin America and the Global Economy. Export, Trade and the Threat of Protection.* U.K.: Palgrave McMillan Press, 2001, pp. 158-197.

O'Ryan, Raúl y A. Ulloa: "Trade and the Environment: Mining". En R. Fischer (ed.), *Latin America and the Global Economy. Export, Trade and the Threat of Protection.* U.K.: Palgrave McMillan Press, 2001, pp. 121-157.

O'Ryan, Raúl: "Emissions Trading in Santiago: Why Has It Not Worked, but Been Successful?". Trabajo presentado en CATEP (Concerted Action for Tradable Emissions Permits) Workshop, marzo 24-25, Department of Economics, University College London, U. K., 2002.

OTA (Office of Technology Assessment): *Assessing Contractor Use in Superfund: A Background Paper of OTA's Assessment on Superfund Implementation.* U. S. Government Printing Office, Washington D. C., 1995.

Richards, K.: "Framing Environmental Policy Instrument Choice". School of Public and Environmental Affairs. Working Paper, Indiana University, julio 1998. □

www.cepchile.cl

CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DE LOS SUPERMERCADOS

CONCENTRACIÓN, HIPERMERCADOS, RELACIONES CON PROVEEDORES Y MARCAS PROPIAS*

Loreto Lira

A partir de la década de los noventa se comienza a producir en el mundo un cambio estructural en la industria de los supermercados, caracterizado principalmente por una creciente concentración de mercado, un fuerte auge de los hipermercados y una sostenida política de precios bajos para los consumidores.

El objetivo de este artículo es analizar las razones que están detrás de los cambios de esta industria y algunos de los efectos que se han derivado de dichos cambios, basado tanto en consideraciones teóricas como en la experiencia internacional. En particular se analizan los efectos en las relaciones proveedores-distribuidores y sus consecuencias sobre los consumidores finales, así como el impacto de la nueva organización industrial en el surgimiento de las marcas propias.

LORETO LIRA. Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes, Santiago.

* La autora agradece los comentarios de Carlos Antonio Díaz.

1. Introducción

A partir de la década de los noventa se comienza a producir en el mundo un cambio estructural en la industria de los supermercados, caracterizada principalmente por una creciente concentración de mercado, un fuerte auge de los hipermercados y una sostenida política de precios bajos para los consumidores.

Tras estos cambios se identifican claramente diversos factores. Por el lado de la oferta, los avances tecnológicos en la información y comunicaciones crean economías de escala y de ámbito que, por una parte, permiten la expansión de cadenas de hipermercados (muy intensivas en el uso de la tecnología de la información) y, por otra, llevan a la concentración de la industria. Por el lado de la demanda, el recurso tiempo se hace cada vez más escaso debido a la creciente participación de la mujer en el mercado laboral, lo que aumenta las preferencias por los hipermercados, pues dan la posibilidad de comprar un mayor número de productos en un mismo lugar.

El objetivo de este artículo es analizar en profundidad las razones que están detrás de los cambios en esta industria y algunos de los efectos que se han derivado de dichos cambios, basado tanto en consideraciones teóricas como en la experiencia internacional. En particular se analizan los efectos en las relaciones proveedores-distribuidores y sus consecuencias sobre los consumidores finales. Debe destacarse que la relación entre proveedores y distribuidores es quizás uno de los aspectos más discutidos recientemente tanto en el mundo como en Chile en referencia a este tema. Asimismo, se analiza el impacto de la nueva organización industrial en el surgimiento de las marcas propias.

Desde un punto de vista teórico, se podría sostener que la concentración de la industria de la distribución desplaza el poder de negociación desde los proveedores hacia los distribuidores. El impacto que esto tenga sobre los consumidores de los bienes finales dependerá de la forma en que opere la industria de la distribución. En caso de que las cadenas de la distribución compitan a través de los precios, los beneficios que puedan obtener en sus negociaciones con los proveedores, como consecuencia del desplazamiento de poder, serán traspasadas a los consumidores. En tales circunstancias, estos últimos son los principales beneficiados. Una de las preguntas que cabe hacerse es entonces si se ha producido dicho desplazamiento de poder de negociación. La evidencia empírica internacional no permite afirmar que así haya sido, medido como la evolución relativa de diversos índices de rentabilidad de proveedores y distribuidores. Por el contrario, hay cierta evidencia de que, en algunas categorías de productos,

www.cepchile.cl

los proveedores incluso habrían mejorado sus rentabilidades relativas a los distribuidores. Entre las posibles explicaciones de estos hallazgos podría mencionarse el hecho de que los proveedores o productores han aumentado la eficiencia de sus negocios; otra es que estos últimos también han tendido a concentrarse y, por último, podría decirse que los distribuidores no han sido capaces de retener los beneficios de las negociaciones, puesto que han debido traspasarlos a los consumidores.

Otra consecuencia de la concentración de la industria de los supermercados es el auge experimentado por las marcas propias. Éstas se han transformado en una pieza fundamental del negocio. Se identifican tres razones principales: son una fuente directa de ingresos, aportan a la diferenciación de las cadenas de supermercados entre sí y cooperan en el desplazamiento de poderes desde los proveedores hacia los distribuidores. En este auge también influye el hecho de que los consumidores actuales son menos leales a las marcas tradicionales y más racionales en sus compras, ateniéndose principalmente a las variables de calidad y precio.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: la sección 2 describe las principales tendencias de la industria de los supermercados y sus causas. La sección 3 presenta los casos de Wal-Mart, Tesco y D&S. La sección 4 se centra en las implicancias de estos cambios en las relaciones entre proveedores y distribuidores. En la sección 5 se investiga el impacto que ha tenido la nueva organización de la industria en el desarrollo de marcas propias. En la sección 6 se presentan conclusiones.

2. Las principales tendencias en la industria de los supermercados y sus causas

En los últimos años han ocurrido profundos cambios en la industria de los supermercados en el mundo, cuyas principales tendencias son: la creciente concentración de la industria, políticas de precios bajos y el incremento de los hipermercados. Existen causas de oferta y de demanda tras estos cambios.

2.1. Creciente concentración de la industria

La industria de los supermercados se ha ido concentrando en el mundo en los últimos años. Así, en Estados Unidos, en el período 1987-1997, las ventas brutas del sector comercio crecieron en términos reales 35,4%, mientras que el número de establecimientos creció durante ese

www.cepchile.cl

mismo período sólo 6,7%. Adicionalmente, la participación en el mercado de las 50 empresas más grandes pasó de 20,3% en 1987 a 25,7% en 1997 (Sieling, Friedman y Dumas, 2001). En Europa también se da esta tendencia: las diez principales cadenas de distribución que tenían el 28% de participación en el mercado en 1992 alcanzaron el 36% en 1997. El número de locales de venta de abarrotes cayó de más de 140.000 a menos de 40.000 en el período 1960-97 en Gran Bretaña, mientras que en Francia bajó de 152.000 a 41.700 entre 1968-94, y en la antigua Alemania Occidental de 212.700 a 69.000 en el período 1955-89 (Dobson y Waterson, 1999). En Chile se observa algo similar, aunque con un cierto desfase en el tiempo: las cuatro principales cadenas de supermercados aumentaron su participación en el mercado desde 47,3% en 1996 hasta 62,1% en mayo de 2004 (Asach).

Causas de la concentración

La concentración de la industria de los supermercados es una consecuencia directa del surgimiento de economías de escala y de ámbito a partir de fines de la década de los ochenta en el mundo. Éstas generan fuertes incentivos para que las empresas aumenten el tamaño de su negocio tanto en el volumen como en la variedad de los productos ofrecidos, ya que de esta forma logran reducir los costos medios de su gestión, es decir, incrementan la eficiencia de su operación (Dobson y Waterson, 1997). A su vez, las economías de escala y de ámbito encuentran su origen en los avances tecnológicos en el área de la informática y de las comunicaciones, los cuales básicamente han estado orientados a aumentar la eficiencia en el manejo de los inventarios, pieza clave en el negocio del *retail*. Específicamente, los avances tecnológicos han permitido disminuir los períodos de mantención de mercadería en stock y acortar los plazos entre la medición del nivel de inventarios y el despacho de nuevas órdenes. Esto se ha logrado a través de la implementación de los sistemas interconectados de transmisión de datos (EDI: *electronic data interchange*), que mantienen en comunicación computacional permanente a distribuidores con proveedores, y del uso de los códigos de barras, que hace posible llevar mediciones más actualizadas de los inventarios (Holmes 2001). Nakamura (1997) define como "revolución del *retail*" a la rápida automatización de los procesos de las transacciones en este sector.

Los estudios de Fernald y Ramnath (2004) investigan la productividad total de los factores en Estados Unidos durante la década de los noven-

www.cepchile.cl

ta para todos los sectores de la economía. Ellos evidencian un aceleramiento general en la productividad total de los factores (PTF) en Estados Unidos a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. Entre ellos se destacan los sectores de ventas al por mayor y *retail*, ya que exhiben el mayor crecimiento en la PTF a partir de 1995. En el período 1995 a 2000, esta tasa creció a 5,33% y la del comercio mayorista a 5,37% versus el 2,08% del promedio de la economía no agrícola. Ver Cuadro N° 1.

CUADRO N° 1: ESTADOS UNIDOS PERÍODO 1990-2000: CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (PTF)
(Tasa porcentual anual)

	1990-1994	1995-2000
Minería	3,08	–2,15
Industria	2,40	2,76
Construcción	0,39	–0,98
Transporte	1,69	1,53
Comunicaciones	2,31	0,15
Electricidad, gas y agua	0,42	0,17
Comercio mayorista	**1,66**	**5,37**
Comercio minorista	**0,83**	**5,33**
Sector financiero	0,44	3,39
Sector inmobiliario	1,12	0,40
Otros servicios	–1,89	0,08
Total sector privado no agrícola	0,91	2,88

Fuente: *Economic Perspectives*, 2004, Vol. 28, N° 1.

Fernald y Ramnath señalan que los sectores de la economía más intensivos en el uso de la tecnología de la información (TI) son los que presentan una mayor PTF. Dado que los sectores del comercio detallista y mayorista son efectivamente los que más aumentaron su PTF, se deduce que ellos deben ser los más intensivos en el uso de la tecnología de la información.

La productividad del trabajo también ha crecido fuertemente en el sector *retail*. Se estima que ésta se aceleró bruscamente hacia fines de los noventa en Estados Unidos. Durante el período 1995-1999, la productividad del trabajo en el sector comercio creció a una tasa promedio anual de 3,1%, casi el doble de la tasa de crecimiento de esta variable en la economía en general en el período 1990-1995 (1,6%). La principal causa de esta mayor productividad se encuentra en los adelantos tecnológicos computacionales que permiten mejores manejos de inventarios desde el punto de

www.cepchile.cl

venta, ajustar precios de forma más eficiente y el desarrollo de bases de datos de los clientes (Sieling *et al*., 2001).

2.2. Políticas de precios bajos

Las principales distribuidoras han ido implementando la política de precios bajos. Wal-Mart ha sido la cadena de distribución que ha liderado esta política en el mundo. Algunos estudios internacionales estiman que Wal-Mart en Estados Unidos vende sus productos en promedio a precios 25% inferiores a los de la competencia (véase Cuadro N° 3). En Chile, también ha estado presente la venta a precios bajos, sobre todo a partir de la segunda mitad de los noventa. Esta política ha sido llevada a cabo principalmente por D&S, la mayor distribuidora nacional. La creciente competitividad en precios de los productos vendidos por los supermercados puede nombrarse como una de las causas que han contribuido a disminuir la inflación en Chile, especialmente en los últimos cinco años. El Cuadro N° 2 muestra las variaciones porcentuales del IPC a partir de 1994, en forma separada en dos períodos (1994-1998 y 1999-julio de 2004). Se ve que en el segundo período los rubros susceptibles de ser vendidos por supermercados han tenido variaciones de precios muy inferiores al promedio del IPC. En efecto, el IPC ha subido 16,4%, en tanto que los alimentos han aumentado sólo en 4,7%, el equipamiento de la vivienda ha bajado 6,5% y el vestuario ha descendido en 23,9%.

CUADRO N° 2: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL IPC POR RUBRO

	1994-2004 jul	1994-1998	1999-2004 jul
IPC	62,0	39,5	16,1
Alimentación	39,8	33,5	4,7
Vivienda	78,7	40,8	26,9
Equip. de la vivienda	18,3	26,5	–6,5
Vestuario	–35,0	–14,5	–23,9
Transporte	126,9	47,2	54,1
Salud	106,2	61,3	27,9
Educación y recreación	126,4	80,6	25,4
Otros	47,8	54,9	–4,6

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadísticas): www.ine.cl

www.cepchile.cl

Causas de los precios bajos

La concentración de la industria de los supermercados se ha ido produciendo a través de la competencia en los precios. Los distribuidores que han sido capaces de incorporar anticipadamente los avances tecnológicos en su negocio han podido ofrecer sus productos a precios menores que los de sus competidores, debido a la reducción en sus costos operativos que dichos cambios significan. De esta forma, las cadenas de supermercados, con una estructura de costos inferiores y, por lo tanto, con mayor utilización de la tecnología, han ido desplazando al resto de los distribuidores, lo que ha redundado en una mayor concentración de la industria. Esta sustitución de empresas menos eficientes por las más eficientes ha ido generando un aumento en la productividad total del sector *retail* (Foster, Haltiwanger y Krizan, 2002).

2.3. Incremento de los hipermercados

En la actualidad la industria de supermercados contempla al menos tres formatos de venta, que varían de acuerdo con el tamaño de sus salas de venta. El más chico se refiere a los supermercados con salas de venta de hasta 3.000 metros cuadrados, después vienen los supermercados tradicionales con locales de venta de hasta 6.000 metros cuadrados y por último, los hipermercados con locales de venta sobre los 6.000 metros cuadrados, donde se ofrece, además de los productos tradicionales, una serie de otras categorías, como electrodomésticos, electrónica, librería, jardinería, piscinería, vestuario, zapatería, juguetería y artículos de decoración. En estos formatos los hipermercados han sido los que más se han desarrollado en los últimos años. Es así como en Estados Unidos el gasto total en comida de los consumidores en los supermercados tradicionales cayó desde 42,8% en 1988 hasta 13,4% en 1998 y el número de supermercados tradicionales se redujo en un 8% entre 1987 y 1997 (Sieling *et al*., 2001). Messinger y Narasimhan (1995) destacan que el número de ítems vendidos por local aumentó de 7.800 en 1970 a 18.466 en 1993. El tamaño promedio de los locales también creció desde 2.508 m^2 en 1983 hasta 3.456 m^2 en 1993. La participación de las ventas de los supermercados convencionales se redujo de 73,1% en 1980 a 30,4% en 1991. En Chile, en el rubro supermercados, el porcentaje de ventas de los supermercados tradicionales cayó desde 71% hasta 65% en el período 2000-2003. Como contrapartida, aumentaron las ventas de los hipermercados de 26% a 32%, manteniéndose constante las

www.cepchile.cl

de los autoservicios, que corresponden, de acuerdo con la definición, a locales de conveniencia (locales cuya superficie de venta es inferior a los 1.000 metros cuadrados) (Nielsen 2004).

Causas de oferta en el incremento de los hipermercados

Holmes (2001) afirma que los cambios en la tecnología de la información aumentan el tamaño óptimo de local, lo que es coherente con el éxito de los formatos de hipermercados. Señala que los avances tecnológicos, como los códigos de barras, y los sistemas de comunicaciones con proveedores permiten, por una parte, obtener mediciones más rápidas de los inventarios en los locales de venta y, por otra, aumentar la velocidad de las nuevas órdenes de mercaderías. Así se disminuye el tiempo que transcurre entre la medición del inventario y el despacho de la nueva orden. Esto incentiva al distribuidor a disminuir sus niveles de inventarios, puesto que en definitiva éstos actúan como un sustituto de la información. De esta manera tienden a aumentar en las frecuencias de los despachos de las mercaderías. Si además se asume que existen economías de escala en los despachos, entonces se deduce que el tamaño óptimo del local debe ser mayor. Por ejemplo, si un local permanece del mismo tamaño y al mismo tiempo duplica la frecuencia de sus pedidos de mercadería como consecuencia de los avances tecnológicos recién mencionados, entonces los camiones sólo debieran llenarse hasta la mitad, con lo que no se estarían aprovechando las economías de escala en el transporte. Se genera entonces un incentivo para agrandar los locales de venta.

Causas de la demanda en el incremento de los hipermercados

El fuerte aumento de los locales con formato de hipermercado también está motivado por razones de demanda. Los consumidores buscan reducir el tiempo destinado a comprar, lo que los ha llevado a querer adquirir la mayor cantidad de bienes posible en una misma ocasión y en un mismo local, lo que se conoce como *one stop shopping*.

La intención de los consumidores de reducir el tiempo de compra se debe a que éste se ha ido transformando en un recurso cada vez más escaso. La creciente participación de la mujer en la fuerza laboral parece ser la principal causa de esta tendencia. En Estados Unidos la participación de la mujer en la fuerza laboral medida como porcentaje de la población femenina de 16 años y más, ha ido en constante aumento: 43,3% en 1970,

www.cepchile.cl

51,5% en 1980, 57,5% en 1990 y 59,9% en 2000 (Bureau of Labor Statistics, USA). El aumento del ingreso per cápita de la población es otro factor que actúa en el mismo sentido, pues aumenta la demanda de oportunidades para disfrutar de ocio. Con el fin de disminuir el tiempo dedicado a actividades que lo usan como insumo, se pretende que las compras de supermercados también se puedan transformar en una entretención o pasatiempo.

Demanda por variedad. Betancourt y Gautschi (1990) desarrollan un modelo formal para explicar la existencia de una demanda por variedad, que es lo que está detrás del deseo del *one stop shopping*. Ellos afirman que los distribuidores ofrecen una variedad de productos, entre ellos algunos parecen sustitutos, otros complementarios y otros independientes en consumo, de acuerdo a los criterios tradicionales. Lo interesante es que los consumidores desean comprar al mismo tiempo y en el mismo lugar no sólo los bienes considerados tradicionalmente complementarios (pollo y arroz), sino también los sustitutos (pollo y carne) y los independientes (pollo y calcetines). La causa de esto es que aun cuando los bienes pueden ser sustitutos o independientes en su *consumo*, son complementarios en la *compra*. Es decir, la demanda por variedad es una consecuencia directa del hecho de que los bienes sean complementarios en la compra. A su vez, esta complementariedad surge debido a la existencia de costos asociados directamente al hecho de comprar.

Costos asociados al hecho de comprar. Los autores identifican los siguientes costos asociados al hecho de comprar:

— el tiempo destinado a comprar;
— la distancia del consumidor al lugar de compra;
— el ajuste que pueda tener que hacer el consumidor en su compra si no encuentra exactamente el producto en la forma y marca que buscaba;
— los costos de información respecto de los productos por comprar;
— el almacenaje de los productos comprados;
— los costos psicológicos de comprar, como pueden ser las molestias causadas por el ruido, la suciedad, etc.

Servicios de distribución. El *retailer* conoce la existencia de estos costos de compra para los consumidores y busca reducir al menos alguno de ellos como una forma de atraerlos. Esto lo lleva a ofrecer servicios de distribución.

www.cepchile.cl

Los autores identifican los siguientes servicios de distribución:

— la variedad de productos, orientada principalmente a reducir el tiempo de compra de los consumidores;
— la accesibilidad al local, que disminuye la distancia entre los consumidores y el lugar de compra;
— el ambiente del local busca aminorar los costos psicológicos de la compra;
— la disponibilidad de información y probabilidad de obtener el producto deseado en la forma deseada o en el momento deseado, lo que ayuda a restringir los costos de ajuste que deben hacer los consumidores en caso de no encontrar los productos en la forma y marca exactas que ellos requieran.

Tipos de locales. Cada *retailer* ofrece una combinación diferente de servicios de distribución, pues le resulta muy costoso ofrecerlos todos al mismo tiempo. Esto da como resultado la existencia de diferentes tipos de locales. Por ejemplo, los hipermercados, orientados a ofrecer una gran variedad de productos y así reducir el tiempo destinado a comprar; los locales de conveniencia, que ofrecen poca variedad pero gran accesibilidad al local, puesto que se ubican cerca de los consumidores y tienen horarios de atención muy extensos; y los locales de especialidad, donde su principal característica es ofrecer un alto grado de profundidad en su mercado específico para satisfacer la necesidad del consumidor de encontrar el producto deseado en la forma y en el momento deseados.

Se deduce de este análisis que el fuerte aumento de los formatos tipo hipermercados responde al aumento de la demanda por variedad de parte de los consumidores, la que a su vez se debe al aumento del costo de su tiempo. En otras palabras, los bienes se han ido haciendo cada vez más complementarios en la compra.

3. Los casos Wal-Mart, Tesco y D&S

En esta sección se revisa el caso de Wal-Mart en Estados Unidos, el de Tesco en Gran Bretaña y el de D&S en Chile. Se detectan patrones comunes: fuerte crecimiento de los formatos tipo hipermercados, aumento de la participación de mercado dentro de la industria, política de precios bajos y clara diversificación de formatos, según los nichos del mercado.

www.cepchile.cl

3.1. El caso Wal-Mart

El auge de los hipermercados ha sido liderado en Estados Unidos por la empresa distribuidora Wal-Mart. Esta empresa, a fines de la década de los ochenta, incorporó el rubro alimentos dentro de sus ventas, inspirada en el éxito de estos centros de venta en Europa, donde los hipermercados existían desde mucho antes. La medida fue muy cuestionada inicialmente por los analistas, quienes la consideraban extraordinariamente riesgosa, debido a que el margen de ganancias de los alimentos es tradicionalmente inferior al del resto de los productos. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar lo contrario: Wal-Mart es hoy día la empresa más grande del mundo, con ventas de US$ 245 mil millones al año y con 1,4 millones de empleados, lo que lo sitúa como el empleador más grande del mundo. Esta estrategia se implementó en su momento pensando en la sinergia entre los negocios de alimentos y del resto de los productos, como vestuario, jardinería, zapatería, etc., ya que los primeros debían actuar como generadores de tráfico, aumentando así la frecuencia de visitas al local y atando la compra de los otros bienes, que son los que aportan más margen a la empresa. Sin embargo, la realidad excedió a lo planeado y el gran éxito de estas tiendas tipo hipermercados (llamadas *supercenters*), más allá de significar un enganche de los consumidores, fue el hecho de que los alimentos fueron un gran negocio en sí mismos, puesto que Wal-Mart incorporó anticipadamente los cambios tecnológicos (Yoffie y Wang, 2002).

La estrategia de precios de Wal-Mart ha sido vender siempre a precios bajos: *every day low prices* (EDLP). Comparaciones de canastas idénticas de productos entre Wal-Mart y algunos competidores arrojan diferencias de precio promedio de alrededor de 25% (véase Cuadro N° 3).

CUADRO N° 3: PRECIOS DE CANASTAS IDÉNTICAS (2002)

	Wal-Mart	Prom. resto	Albertstons	Kroger	Safeway	WinnDixie	Publix	Ahorro % en Wal-Mart
Las Vegas	88,4	125,2	125,9	117,6	131,9			29,4%
Tampa	87,3	110,1	118,4			107,6	104,3	20,7%
Dallas	89,3	118,8	122,9	118,4	115,2			24,8%
Promedio	88,3	118,0						25,2%

Fuente: Bell y Feiner: “Wal-Mart Neighborhood Markets”, 2003.

www.cepchile.cl

Respecto de los formatos de los locales de ventas, Wal-Mart fue diversificando sus tiendas a través del tiempo con el objeto de abarcar diferentes nichos. En la actualidad cuenta con: tiendas de descuento, hipermercados, supermercados de barrio y los llamados Sam's Clubs (que venden a los consumidores productos al por mayor y por lo tanto a menores precios). Las tiendas de descuento (*discount stores*) son las más antiguas y no incluyen los alimentos entre sus productos. Los hipermercados (*supercenters*) sí los incluyen y son también los más exitosos. Su tamaño va desde 17.500 hasta 19.500 metros cuadrados, donde los alimentos ocupan cerca de un tercio del hipermercado. Están generalmente ubicados en áreas suburbanas. Los supermercados de barrio (*neighborhood markets*), cuyo tamaño es de unos 4.200 metros cuadrados, son la última innovación en cuanto a formato; su tamaño es equivalente al de los supermercados antiguos y están diseñados para "rellenar" las áreas entre los hipermercados o situados en lugares de mucha densidad de población, donde sería impracticable establecer un hipermercado. A fines de 2002, Wal-Mart contaba con un total de 4.414 locales en todo el mundo, 1.170 locales internacionales, 31 supermercados de barrio, 500 Sam's Clubs, 1.066 hipermercados y 1.647 tiendas de descuento (Cuadro N° 4). El principal aumento en el número de locales viene dado por los hipermercados y por los locales internacionales.

CUADRO N° 4: NÚMERO DE LOCALES DE WAL-MART

	1992	1997	2002
Locales en Estados Unidos:			
Tiendas de descuento	1.714	1.960	1.647
Hipermercados	10	344	1066
Sam's Clubs	208	436	500
Supermercados de barrio	–	–	31
Locales internacionales	–	314	1.170
Total	1.932	3.054	4.414

Fuente: Bell y Feiner: "Wal-Mart Neighborhood Markets", 2003.

El crecimiento promedio anual de las ventas de Wal-Mart es de 17,4% entre los años 1992 y 2002. La utilidad neta se ha situado en torno al 3% de las ventas y el retorno sobre patrimonio ha sido algo superior al 20% (Cuadro N° 5).

www.cepchile.cl

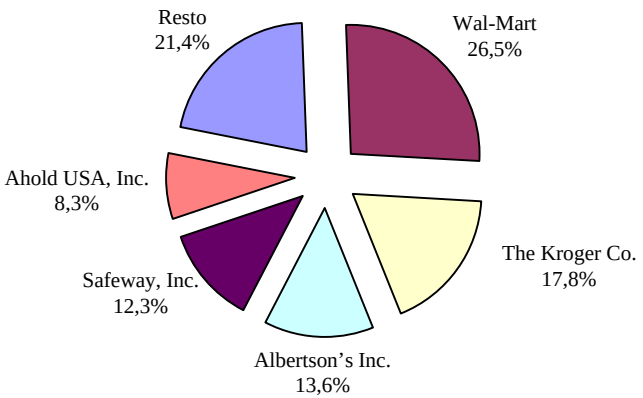
CUADRO N° 5: WAL-MART: VENTAS Y UTILIDADES
(millones de dólares y porcentajes)

	1992	1997	2002
Ventas (mill. US$)	43.887	104.859	217.799
Crecimiento de las ventas netas (%)	35	12	14
Utilidad neta (mill. US$)	1.609	3.056	6.671
Ut. neta sobre ventas (%)	3,7	2,9	3,1
Retorno sobre patrimonio (ROE) (%)	26,0	19,2	20,1

Fuente: Bell y Feiner: "Wal-Mart Neighborhood Markets", 2003.

Wal-Mart es la empresa con mayor participación de mercado dentro de Estados Unidos en cuanto al volumen de ventas. Los supermercados de barrio y los Sam's Clubs son comparables a los supermercados tradicionales. En el Gráfico N° 1 se observa que en Estados Unidos, respecto de los nueve principales supermercados tradicionales, estos dos formatos de Wal-Mart reunían en 2001 una participación de mercado de 26,5%; les seguían The Kroger Co. con 17,8% y en tercer lugar se ubicaba Albertson's con 13,6%.

GRÁFICO N° 1: PARTICIPACIÓN DE LOS 9 MAYORES SUPERMERCADOS TRADICIONALES (2001)



Fuente: Bell y Feiner: "Wal-Mart Neighborhood Markets", 2003.

www.cepchile.cl

La participación en el mercado por concepto de ventas de los hipermercados (*supercenters*) de Wal-Mart es aun mayor. En 2001, entre los cinco principales hipermercados, Wal-Mart era, lejos, el más grande, con 72,4% de las ventas totales, seguido por Kroger con 12,4% (Cuadro N° 6).

CUADRO N° 6: HIPERMERCADOS: LOS 5 MÁS GRANDES
(ventas en miles de millones de dólares y porcentajes)

	2001E m mill US$	%
Wal-Mart	64,9	72,4
Kroger	11,1	12,4
Meijer	5,4	6,0
Kmart	6,4	7,1
Target	1,9	2,1
Total	89,7	100,0

Fuente: Bell y Feiner: "Wal-Mart Neighborhood Markets", 2003.

La expansión internacional de la empresa, que comenzó en 1993, no ha sido fácil. Los esfuerzos de internacionalización se han centrado en los mercados europeos, debido a su alto poder adquisitivo. Wal-Mart ha entrado también en Asia y en el resto de América. Se estableció en Asia: en Corea, con utilidades inferiores a las esperadas; en China, donde ha debido ir sorteando las restricciones estatales; en Japón, donde, tras fracasar en 1997, ha vuelto a entrar en 2002; y en Indonesia, con el peor resultado de todos. En el mercado del resto de América ha tenido éxito en Canadá y México, países donde ha pasado a ser el *retailer* dominante. También ha entrado en Brasil, de manera muy agresiva, y en Argentina, con dificultades.

3.2. El caso Tesco

Tesco es la empresa que lidera este cambio en la industria de los supermercados en Gran Bretaña. En 1997, Tesco desarrolló un agresivo plan a diez años, según el cual se establecían dos metas principales. Una era participar fuertemente tanto en el rubro de los alimentos como en los de no alimentos (vestuario, música, y otros). La otra fue la internacionaliza-

www.cepchile.cl

ción. Las cifras cinco años después demostraban el éxito del plan: en 2002 Tesco alcanzó un 4% de participación en el mercado total de los no alimentos. Respecto del tamaño alcanzado, la empresa contaba con 1.023 locales: 750 en Gran Bretaña y el resto en diez países. Los principales competidores internos son Asda (adquirida por Wal-Mart) y Morrison. Le siguen Sainsbury's y Safeway. Los locales internacionales representan cerca del 42% del espacio total de venta, pero sólo un 10% de sus ingresos operacionales. Ahí, Carrefour y Wal-Mart son los principales competidores. La estrategia de precios es la de precios bajos siempre (EDLP). La diversificación de formatos es la siguiente: los *metro*, pequeños locales (190 metros cuadrados) ubicados en el centro de la ciudad y orientados a los sandwiches y comida preparada; los *express*, locales también pequeños (900 metros cuadrados) ubicados generalmente cerca de las bombas de bencina Esso. Los *superstore* (3.200 metros cuadrados), que son los tradicionales supermercados Tesco, y los *extra* (8.400 metros cuadrados), que son los de formato hipermercado y a través de los cuales se abarca el rubro de los no alimentos (Bell 2003).

3.3. El caso D&S

En Chile, la cadena de supermercados D&S es la que lidera el mercado con una participación de ventas de 34,4% a mayo de 2004. Le sigue Cencosud con 21,4%. Muy por debajo se sitúan San Francisco[1], con 3,2%, y Unimarc, con 3,1% tras una pérdida de participación de mercado sostenida en el tiempo (ver Cuadro N° 7).

En 2003, D&S adoptó la estrategia de "precios bajos siempre"; antes tenía la política de promociones de fines de semana y de productos en particular. Jumbo, el segundo actor, ha seguido una política diferente de precios basada en promociones puntuales de diferentes productos y en la calidad; de ahí su lema: "La calidad no cuesta más".

Las ventas de D&S han crecido a una tasa promedio de 9% desde 1998 hasta 2003. El margen de operación se sitúa en torno al 22% (22,5% en 2003) y la utilidad neta en 2,3% en el período (1,8% en 2003). La rentabilidad sobre el patrimonio se situó el último año en 6,9% (Cuadro N° 8).

La diversificación de formatos ha seguido la pauta internacional: los Líder Mercado, que son hipermercados con 9.600 m^2 en promedio; los Líder Vecino, con 3.800 m^2 en promedio, que equivalen a los supermerca-

[1] San Francisco fue adquirida por Falabella en julio de 2004.

www.cepchile.cl

CUADRO N° 7: INDUSTRIA DE LOS SUPERMERCADOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN PORCENTAJES

	1996	2000	2004 mayo
D&S	19,2	28,3	34,4
Cencosud	6,3	7,0	21,4
Santa Isabel	13,3	10,3	
Unimarc	8,5	5,4	3,1
San Francisco	2,0	2,7	3,2
Montserrat	4,2	3,2	2,7
Montecarlo	1,8	2,0	2,7
Carrefour		1,6	
Rendic		2,2	3,1
Las Brisas/Extra	4,1	2,5	
Resto	40,6	34,9	29,4
Total	100	100[1]	100

Notas:
[a] D&S compra Carrefour en 2003.
[b] Cencosud compra Santa Isabel y Tops en 2003 y Las Brisas/Extra en 2004.
Fuente: Asociación Gremial de Supermercados de Chile (Asach): www.asach.com

CUADRO N° 8: D&S: PRINCIPALES DATOS FINANCIEROS

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Ventas (mill. $ dic. 03)	664.373	833.517	779.717	854.084	939.270	1.023.654
Margen de explotación (ingresos)	21,1	20,9	21,8	22,5	22,8	22,5
Resultado operacional (% ingresos)	3,7	3,3	5,7	6,0	4,0	3,9
Utilidad neta (% ingresos)	2,8	–1,1	3,6	4,3	2,3	1,8
Rentabilidad sobre patrimonio (%)	7,4	–3,9	11,9	14,6	8,0	6,8

Fuente: D&S: www.dys.cl

dos tradicionales, y los Líder Express, los más pequeños, con 1.500 m^2 (véase Cuadro N° 9). Actualmente, el 84% del total de las ventas de D&S se realiza a través de hipermercados (Líder Vecino + Líder Mercado). Las ventas de artículos no alimentos representan hoy el 26,4% del total de las ventas de D&S.

www.cepchile.cl

CUADRO N° 9: NÚMERO DE LOCALES D&S, IV TRIMESTRE DE 2003

	m^2 promedio	N° de locales
Supermercados	1.532	26
Líder Express		
Hipermercados	6.987	42
Líder Vecino	3.821	19
Líder Mercado	9.603	23
Total	4.902	68

Fuente: D&S: www.dys.cl

4. Relaciones entre proveedores y distribuidores en la industria de los supermercados

Una de las consecuencias directas de la concentración de la industria de supermercados es el desplazamiento de poderes desde proveedores hacia distribuidores.

4.1. Marco conceptual

Desde el punto de vista económico, la distribución es el último eslabón en la cadena de producción. El óptimo para el productor es tratar de ejercer el máximo control sobre toda la cadena productiva, de manera de conseguir el resultado que él estima conveniente. Desde esta perspectiva, el productor intentará también controlar la distribución de sus productos. Para esto evaluará como primera opción la posibilidad de verticalizar su producción, y lo hará siempre y cuando los beneficios de hacerlo sean mayores que los costos. Dado que el productor no es capaz, por lo general, de distribuir él mismo sus productos, los entrega a terceros (los distribuidores) para que hagan esta tarea. Sin embargo, trata de controlar lo más posible a los distribuidores de manera de inducirlos a actuar de la forma que a él más le conviene. Esto lleva al surgimiento de negociaciones contractuales entre ambos agentes. En la literatura dichas negociaciones reciben el nombre de restricciones verticales (Carlton y Perloff, 20001, p. 396). Entre las restric-

www.cepchile.cl

ciones impuestas por los proveedores sobre los distribuidores se pueden mencionar, por ejemplo: precio mínimo de venta al público, la venta de un número mínimo de unidades al público y la imposición de no vender determinados productos de la competencia. De esto se desprenden al menos dos conclusiones: la primera es que las relaciones entre proveedores y distribuidores son por definición complicadas, y la segunda, que la capacidad que tengan los proveedores de ejercer restricciones verticales sobre los distribuidores dependerá de las formas en que se organicen ambas industrias.

Lo que ha sucedido en el mundo es que la industria de la distribución se ha ido concentrando a raíz de los cambios comentados en la sección anterior. Junto con esto, esta industria ha dado señales de fuerte competencia, lo que se refleja en las agresivas políticas de precios bajos para los consumidores. La mayor concentración en el mercado de la distribución ha traído como consecuencia un profundo cambio en las relaciones con los proveedores. Mientras más concentrada sea la industria de la distribución, más difícil es para los proveedores imponerles restricciones verticales. Y al revés. Teóricamente este aumento de la concentración de los distribuidores genera un desplazamiento de poderes desde proveedores hacia distribuidores, *ceteris paribus* (esto es, siempre y cuando no se tienda a producir también una concentración en las industrias productivas). Si a esto se suma el hecho de que esta industria muestra fuertes signos de competencia, entonces los beneficios que los distribuidores logren obtener de sus negociaciones con los proveedores, como consecuencia de su mejor posición relativa frente a ellos, son traspasados a los consumidores. En esta línea, Dobson y Waterson (1997) afirman que si la industria de la distribución se concentra y los consumidores visualizan como fuertes sustitutos los servicios que entregan las distintas cadenas de *retail*, entonces los precios finales de venta al público tienden a bajar como consecuencia de dicho aumento de concentración. Esto se dará incluso en el caso límite en que existan sólo dos cadenas de distribución, si ellas compiten a la manera de Bertrand[2] y si sus servicios son percibidos como perfectos sustitutos por los consumidores. Así, en estas situaciones, la disminución del poder de los proveedores como consecuencia del aumento en la concentración de los distribuidores puede ser suficiente para inducir una caída en los precios finales, con lo que los consumidores se verían beneficiados.

[2] El modelo de Bertrand supone que las empresas compiten entre sí a través de los precios, lo que lleva a un resultado competitivo.

www.cepchile.cl

4.2. La evidencia empírica

De los análisis empíricos realizados a nivel internacional no se ha podido confirmar la hipótesis teórica de que se haya producido un desplazamiento de poder desde los proveedores hacia los distribuidores. El desplazamiento de poder se mide a través de las rentabilidades relativas de los *retailers* en relación con los productores o proveedores.

Farris y Ailawadi (1992) fueron los primeros en poner en duda este desplazamiento de poderes desde productores de productos empaquetados hacia *retailers*. Ellos analizaron las tendencias en las utilidades de productores y distribuidores y observaron que éstas no eran concordantes con dicho desplazamiento de poder. Sin embargo, este resultado se obtuvo para los grandes productores y no necesariamente para los pequeños. Esto sugiere que el tamaño de las empresas puede ser un factor importante en la habilidad para trabajar con un *retailer* poderoso. Messinger y Narasimhan (1995) también concluyen que no existe evidencia de un desplazamiento de poder desde proveedores hacia distribuidores. Bloom y Perry (2001) detectaron que aquellos productores que vendían a *retailers* poderosos no mostraban necesariamente menores utilidades que aquellos que no. Ellos afirman que los grandes proveedores que fueron capaces de desarrollar una buena relación con Wal-Mart pueden tener un mejor desempeño financiero y extraer más utilidades de su mercado que sus contrapartes que no desarrollaron tal vínculo. Así, para los proveedores es conveniente establecer buenas relaciones con Wal-Mart, ya que, a pesar de tener que cumplir con grandes exigencias en precios y tiempos de despacho, entre otros, saben que acceden a aumentar su participación en el mercado. Un proveedor decía: "Sólo hay una cosa peor que venderle a Wal-Mart, no venderle a Wal-Mart". Uno de los elementos que ha beneficiado a las relaciones entre Wal-Mart y sus proveedores ha sido la implemetación del *retail link*. Este sistema informa computacionalmente a los proveedores los datos relevantes de cada uno de los puntos de venta de Wal-Mart. Con esto se logra una mayor eficiencia en el manejo de inventarios y despacho de mercadería y a la vez les permite a los productores estimar las ventas a futuro, todo esto tienda por tienda. El costo de desarrollo y perfeccionamiento de este sistema fue altísimo (se estima que Wal-Mart invirtió cerca de US$ 4.000 millones y los proveedores también debieron realizar una inversión sustancial) y es hoy en día uno de los más sofisticados del mundo en la materia (Ghemawat, Mark y Bradley, 2003).

Una de las posibles explicaciones para la falta de evidencias del desplazamiento de poderes desde proveedores hacia supermercados es que

www.cepchile.cl

la creciente concentración de esta industria ha significado un cambio estructural mayor a lo largo de la cadena completa del proceso productivo y no sólo del comercio detallista. De acuerdo con esto, los proveedores han ido ajustándose a esta nueva organización de los distribuidores y han aumentado la eficiencia de sus procesos productivos, lo que en definitiva les ha permitido mantener o incluso incrementar sus rentabilidades. Otra de las explicaciones que se tienden a dar es que el aumento en la concentración de los supermercados ha inducido a que los proveedores se concentren aún más, con lo que no se cumple la premisa básica del desplazamiento de poderes. Messinger y Narasimhan (1995) señalan que, en Estados Unidos, la concentración de la industria de la distribución ha sido de la misma magnitud que la concentración de la industria manufacturera a nivel nacional. Por último, se podría pensar que efectivamente se han producido desplazamientos de poder a lo largo de la cadena productiva, pero que éstos no se han visto reflejados en aumentos de las rentabilidades de los distribuidores, ya que se han traspasado todos los beneficios de las negociaciones a los consumidores, debido a la fuerte competencia de esta industria.

5. Marcas propias

Las marcas propias son aquellas cuyo dueño es el intermediario o distribuidor del producto y no necesariamente su fabricante, quien no se identifica con la marca.

Las marcas propias nacieron en el siglo XIX, como una idea de los distribuidores de producir ellos mismos sus productos o bien de comprarlos directamente a los productores para evitarse los costos de intermediación. Las primeras marcas propias se dieron para el vestuario y de ahí se siguió a los alimentos.

El concepto del distribuidor dueño de la marca propia era vender siempre a precios más bajos que las marcas tradicionales, de manera de ofrecer una alternativa barata a los consumidores. La idea era capturar un nicho de mercado inexplotado hasta ese momento, el de menores precios e inferior calidad. Dadas estas características, sus ventas fluctuaban inversamente al ciclo económico hasta las décadas de los setenta u ochenta, época en la que todavía el mercado de la distribución se encontraba altamente fragmentado. En la década de los noventa se genera un nuevo impulso en el desarrollo de las marcas propias. De acuerdo al Boston Consulting Group (2003), la participación de las marcas propias dentro del total de las ventas de abarrotes para un conjunto de países europeos y Estados Unidos creció en forma importante entre 1997 y 2002 (Cuadro N° 10).

www.cepchile.cl

CUADRO N° 10: MARCAS PROPIAS EN LA INDUSTRIA DE ABARROTES (% DE VENTAS)

	1997	2002
Gran Bretaña	29,7	39,0
Bélgica	25,8	26,9
Alemania	11,3	24,0
Francia	16,8	20,8
Holanda	17,8	18,6
España	16,2	17,6
Estados Unidos	14,1	15,6
Italia	8,0	11,1

Fuente: Brady, Brown y Hulit: "Private Label: Threat to Manufacturers, Opportunity for Retailers", 2003.

5.1. Causas del fuerte desarrollo de las marcas propias

Tras el fuerte desarrollo de las marcas propias es posible encontrar causas tanto de oferta como de demanda.

5.1.1. Causas de oferta

La concentración de la industria de la distribución se cuenta como una causa importante del fuerte incremento de las marcas propias en el mundo en las últimas dos décadas (Putsis y Coterill, 1999). Las marcas propias comienzan a ser vistas como un aspecto importante en la generación de utilidades del negocio. Se distinguen tres vías por las que las marcas propias agregan rentabilidad al negocio:

a) **Representan una fuente directa de ingresos**. Las marcas propias constituyen una fuente directa de ingresos para los distribuidores en relación con la venta de otras marcas. El margen de venta que el distribuidor obtiene de una marca propia es mayor que el que obtiene de una marca tradicional (Ailawadi, 2001; Ailawadi y Harlam, 2004). Existen al menos dos posibles razones para esto: los proveedores de marcas propias tienen menor poder de mercado que los proveedores de marcas tradicionales, puesto que su grado de concentración es menor y operan en un mercado competitivo donde no existe diferenciación de productos, por lo que sus precios de venta a los distribuidores debieran estar cerca de sus costos marginales (Ailawadi y Harlam, 2000). Por otra parte, significan un ahorro

www.cepchile.cl

de costos respecto del ítem publicidad. Para el caso de las marcas tradicionales, la inversión requerida en publicidad debe efectuarse producto por producto, lo que representa un factor de costo importante. En cambio, en el caso de las marcas privadas se publicita la marca del supermercado y esto abarca toda la gama de productos que éste quiera incluir. Ambos factores juntos hacen que el costo de una marca propia para el distribuidor sea menor que el de una marca tradicional. A pesar de lo anterior, los estudios advierten del peligro de desplazar las marcas tradicionales por las marcas propias, pues esto puede repercutir negativamente en las utilidades del distribuidor. La coexistencia de marcas propias junto con marcas tradicionales es clave en la rentabilidad del distribuidor (Ailawadi y Harlam, 2000). Existe una demanda por variedad de parte de los consumidores, que es del interés de los distribuidores respetar. Así, las empresas distribuidoras orientadas a obtener sus utilidades por la vía de generar un alto tráfico de público, deben ofrecer una amplia y profunda variedad de productos. Deben, entonces, mantener un adecuado balance entre marcas propias y marcas tradicionales (Dhar y Hoch, 1997). Otro enfoque que lleva a la misma conclusión se refiere a que dado que las marcas propias se venden a precios a veces muy inferiores que los de las marcas tradicionales, éstas pueden terminar reportando una menor rentabilidad que las tradicionales, aun cuando su margen de venta sea mayor (Ailawadi y Harlam, 2004).

b) **Permiten que los distribuidores se diferencien entre sí**. A partir de la década de los noventa en Estados Unidos, y a medida que se va concentrando la industria del *retail*, se comienza a promover la cadena de distribución como una marca. La mayor lealtad a una determinada cadena o su diferenciación repercute positivamente en las utilidades del *retailer*. Las marcas propias pasan a ser una vía eficiente por la cual los distribuidores logran diferenciarse de sus competidores y conseguir fidelidad de parte de los consumidores. En efecto, Corstjens y Lal (2000) muestran que la lealtad a la tienda derivada del consumo de una marca propia de calidad puede aumentar las utilidades del distribuidor, aun cuando el margen de ganancias de ésta no sea mayor que el de las marcas tradicionales. Se ha demostrado empíricamente que los consumidores que compran al menos algunos productos de marcas propias contribuyen más a la rentabilidad de los distribuidores, en comparación con aquellos que sólo demandan marcas tradicionales. Sin embargo, se ha visto que los consumidores que están muy enfocados a las marcas propias reportan menos rentabilidad, pues se trata en general de clientes muy selectivos al momento de comprar, que adquieren muy pocos bienes y sólo los de menores precios (Ailawadi y Harlam, 2004).

www.cepchile.cl

c) **Aportan en el desplazamiento de poder desde los proveedores hacia los distribuidores**. Desde un punto de vista teórico, las marcas propias desplazan poder de negociación desde los proveedores hacia los distribuidores. Narasimhan y Wilcox (1998) afirman que cuando las preferencias de los consumidores por las marcas tradicionales no son fuertes y ellos se muestran dispuestos a cambiarse a una marca propia, entonces los distribuidores se beneficiarán por la introducción de éstas, puesto que lograrán obtener menores precios de compra de parte de los proveedores de marcas tradicionales. Sin embargo, sus investigaciones empíricas aportan sólo un leve sustento a tal afirmación. En Estados Unidos existe evidencia de que la probabilidad de que un distribuidor introduzca una marca propia en una determinada categoría de productos es mayor mientras mayor sea la participación de la marca líder en esa categoría. Esto lleva a concluir que los distribuidores estarían buscando aumentar su poder de negociación con el proveedor de dicha marca a través de la presencia de las marcas propias (Morton y Zettelmeyer, 2000).

Los incentivos de los distribuidores para proveer marcas propias llevan a que se produzca una verticalización hacia atrás del proceso productivo. En la sección anterior se mencionaba que los productores, como primera opción, siempre buscan manejar directamente cada una de las etapas de su proceso productivo. Es decir, siempre que sea eficiente hacerlo, el productor tratará de integrar verticalmente lo más posible su negocio. Se mencionaba también que el último eslabón en el proceso productivo era la distribución y que ésta era claramente inviable de verticalizar, por lo que el productor debía entregar tal tarea a terceros. Aquí, por todas estas razones, se obtiene una cierta tendencia a que se dé el proceso al revés. Es decir, es el distribuidor quien termina por controlar al menos parte del proceso productivo.

5. 1.2. Causas de demanda

Los consumidores actuales presentan algunos aspectos nuevos en su comportamiento: son consumidores más informados y han madurado sus hábitos de compra. Esta nueva conducta implica que están más capacitados para entender mejor las relaciones de calidad y precio de los bienes, lo que en definitiva los lleva a ser más abiertos a adquirir productos y marcas nuevas, como es el caso de las marcas propias, y menos leales a las marcas tradicionales. Éste es en definitiva un escenario propicio para la introducción de marcas propias (Fiske y Silverstein, 2002).

www.cepchile.cl

6. Conclusiones

De este trabajo se desprende que el sector distribución ha experimentado profundos cambios en el mundo a partir de la década de los ochenta. Las principales características de estos cambios son la concentración de la industria, el auge de los hipermercados y las políticas de precios bajos para los consumidores finales. Los avances tecnológicos en el campo de la informática han permitido optimizar los despachos de mercaderías y manejo de inventarios, generando así economías de escala y de ámbito en la industria de la distribución. Estudios sobre la productividad marginal de los factores (PTF) en Estados Unidos muestran que el sector *retail* es el que presenta un mayor crecimiento de esta variable en el período 1995-2000. Esto ha favorecido a la concentración de la industria de la distribución, ya que las empresas que adoptan oportunamente los adelantos tecnológicos pueden ofrecer menores precios debido al ahorro de costos y van ganando así participación de mercado respecto de sus competidores. Los adelantos tecnológicos han permitido también el auge de los hipermercados. En este último caso también se encuentra como causa la creciente participación de la mujer en el mercado laboral, pues aumenta la demanda por el *one stop shopping* a raíz del aumento del costo del tiempo que esto conlleva.

La concentración de la industria de la distribución produce un desplazamiento de poderes desde los proveedores hacia los distribuidores. Si la industria de la distribución es competitiva, entonces los beneficios de las mejores negociaciones obtenidas con los proveedores deberán ser traspasados a los consumidores. La evidencia empírica internacional no permite afirmar que efectivamente se haya producido tal desplazamiento de poderes, medido como la evolución de diversos índices de rentabilidades relativas entre proveedores y distribuidores. Entre las explicaciones a estos hallazgos se encuentran los posibles aumentos de concentración de las industrias proveedoras —por lo que no habría tal desplazamiento de poder—, los aumentos de eficiencia de los proveedores como consecuencia de las mayores exigencias de los distribuidores y la incapacidad de los distribuidores de retener para ellos los beneficios obtenidos de las negociaciones.

La concentración de la industria favorece también al desarrollo de las marcas propias. Éstas representan, además de una fuente directa de ingresos para los distribuidores, una manera de diferenciarse respecto de sus competidores y una forma de aportar en el desplazamiento de poderes

www.cepchile.cl

desde proveedores de marcas tradicionales hacia ellos. Los consumidores actuales están más proclives a aceptarlas, puesto que su lealtad a las marcas tradicionales ha disminuido como consecuencia de su mayor capacidad de informarse en cuanto a las relaciones calidad-precio de los bienes.

REFERENCIAS

AcNielsen, Child: "Cambios en el Mercado Chileno 2004: Entendiendo al Consumidor". 2004, p. 5.

Ailawadi, K. L. y B. Harlam: "The effect of Store Brands on the Retailer Profitability: An Empirical Analysis". Tuck School Working Paper, Dartmouth College, 2000.

Ailawadi, K. L.: "The retail power-performance conundrum: What have we learned?" *Journal of Retailing* 77 (2001), pp. 299-318.

Ailawadi, K. L. y B. Harlam: "An Empirical Analysis of the Determinants of Retail Margins: The Role of Store-Brand Share". *Journal of Marketing*, Vol. 68, N° 1 (enero 2004).

Asociación Gremial de Supermercados de Chile: www.asach.com

Bell, D.: Tesco Plc. Harvard Business School, March 6, 2003.

Bell, D. y J. Feiner: "Wal-Mart Neighborhood Markets". Harvard Business School, November 22, 2003.

Betancourt R. y D. Gautschi: "Demand, Complementarities, Households Production and Retail Assortments". *Marketing Science*, Vol. 9, N° 2, primavera 1990, pp. 146-161.

Bloom, P. y V. Perry: "Retailer Power and Supplier Welfare: The Case of Wal-Mart". *Journal of Retailing*, 77 (2001), pp. 379-396.

Brady, L., A. Brown y B. Hulit: "Private Label: Threat to Manufacturers, Opportunity for Retailers". The Boston Consulting Group, 2003. www.bcg.com

Bureau of Labor Statistics (USA): *Current Population Survey*. U.S. Department of Labor.

Carlton, D. y J. Perloff: *Modern Industrial Organization.* Addison Wesley Longman, 3ª edición, 2000.

Cortjens, M. y R. Lal: "Building Store Loyalty Through Store Brands". *Journal of Marketing Research*, Vol. 37, N° 3 (2000), pp. 281- 291.

Dhar, S. y S. Hoch: "Why Store Brand Penetration Varies by Retailer". *Marketing Science*, Vol. 16, N° 3 (1997), pp. 208-227.

Dobson y Waterson: "Countervaling Power and Consumer Prices". *The Economic Journal, N° 107* (marzo 1997), pp. 418-430.

Dobson, P. y M. Waterson: "Retailer Power: Recent Developments and Policy Implications". *Economic Policy*, Vol. 14, N° 28 (1999), p. 135.

D&S: www.dys.cl

Farris, P. y K. Ailawadi: "Retail Power: Monster or Mouse? "*Journal of Retailing*, Vol. 68, N° 4 (1992), pp. 351-369.

Fernald, J. y S. Ramnath: "The Acceleration in US Total Factor Productivity after 1995: The Role of Information Technology". *Economic Perspectives*, Vol. 28, N° 1 (2004), pp. 52-68.

Fiske, N. y M. Silverstein: "Trading Up: The New Luxury and Why We Need It". The Boston Consulting Group, 2003. www.bcg.com

www.cepchile.cl

Foster, L., J. Haltiwanger y C. J. Krizan: "The Link between Aggregate and Microproductivity Growth: Evidence from Retail Trade". National Bureau of Economic Research, Working Paper N° 9120 (2002).

Ghemawat, P., K. Mark y S. Bradley: "Wal-Mart Stores in 2003". Harvard Business School. octubre 23, 2003.

Holmes, T. "Bar Codes Lead to Frequent Deliveries and Superstores". *Rand Journal of Economics*, Vol. 32, N° 4 (invierno 2001), pp. 708-725.

INE (Instituto Nacional de Estadísticas): ine.cl

Messinger, P. y C. Narasimhan: "Has Power Shifted in the Grocery Channel?" *Marketing Science*, Vol. 2, N° 2, 1995.

Morton, F. y F. Zettelmeyer: "The Strategic Positioning of Store Brands in Retailer-Manufacturer Bargaining". Working Paper Series. Yale School of Management, abril 2000.

Nakamura, L.: "Is the US Economy Really Growing to Slowly? Maybe We're Measuring Growth Wrong". *Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia*, marzo/abril (1997).

Narasimhan, C. y R. Wilcox: "Private Labels and the Channel Relationship: A Cross-Category Analysis". *Journal of Business*, Vol. 71, N° 4 (1998), pp. 573-601.

Putsis, W. y R. Coterill: "Share, Price and Category Expenditure-Geografic Markets Effects and Private Labels". *Managerial and Decision Economics*, 20 (1999), pp. 175-187.

Sieling, M., B. Friedman y M. Dumas: "Labor Productivity in the Retail Industry, 1987-99". *Monthly Labor Review*, Vol. 124, N° 12 (diciembre 2001).

Yoffie, D. y Y. Wang: "Wal-Mart in 2002". Harvard Business School. Marzo 22, 2002. □

www.cepchile.cl

ENSAYO

LA CONVOCATORIA A LA INTERVENCIÓN MILITAR EN CHILE EN LA GUERRA CIVIL DE 1891*

Alejandro San Francisco

El presente artículo se refiere a los llamados reiterados hechos por el gobierno de Balmaceda (1886-1891) y la oposición parlamentaria para que los militares intervinieran en política y los favorecieran a cada uno de ellos en la lucha de poder que se libraba en Chile desde mediados de esa administración. Especial importancia tiene la prensa de diciembre de 1890, que apela pública y explícitamente a los uniformados, en el sentido de defender al Presidente de la República en virtud del principio de obediencia y no deliberación de las Fuerzas Armadas (prensa balmacedista) o bien promoviendo la sublevación contra él de acuerdo con el derecho de rebelión contra un gobierno dictatorial que se salía de los márgenes de la Constitución y de las leyes (como estimaban los opositores). Como resultado, la resolución del conflicto fue de carácter armado, como lo mostró la guerra civil que se desarrolló entre enero y agosto de 1891. De esta manera, la convocatoria a la intervención militar en la guerra civil de 1891 se transforma en un antecedente —que requiere un estudio comparativo— de las intervenciones y golpes militares del siglo XX.

ALEJANDRO SAN FRANCISCO. Profesor del Instituto de Historia y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Editor de *Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América*.

* El autor agradece especialmente a Alan Angell, por sus sugerencias y comentarios a una primera versión de este artículo, y a Claudia Castillo por su contribución en la realización de esta investigación.

Introducción

El 2003, con ocasión de cumplirse los treinta años del 11 de septiembre de 1973, se desarrolló un debate que involucró a las Fuerzas Armadas y a los académicos, en relación a la intervención militar que puso fin al gobierno socialista de la Unidad Popular[1]. Como resultado de la discusión, también se volvieron los ojos hacia los golpes militares de 1924-25, que habrían marcado el inicio de la presencia de los uniformados en política chilena, como suele señalar la historiografía[2]. Según ha sido tradicional en Chile, la guerra civil de 1891 es excluida del análisis de las intervenciones militares, en circunstancias que es, a nuestro juicio, un antecedente clave para entender mejor los golpes militares del siglo XX. Al conflicto de 1891 se lo caracteriza generalmente de una manera diferente, en el cual se habrían enfrentado un Ejército más favorable a la obediencia debida al Presidente de la República, contra una Marina cercana a los sectores aristocráticos del puerto de Valparaíso y partidaria de los ideales del parlamentarismo inglés[3]. El asunto, sin embargo, es mucho más complejo, y la guerra civil de 1891 tiene movimientos desde el Ejército tanto en la dirección opositora como en la gubernamental, como se comprobaría en el preludio de la guerra civil y durante los ocho meses que duró el conflicto. La deliberación política de los militares, que precedió al estallido de la guerra y que fue pública y permanente, tiene mucho que ver en esto[4]. También es importante el hecho de que tanto el gobierno de Balmaceda como sus detractores hayan decidido convocar expresamente a las Fuerzas Armadas a intervenir, ante la inminencia de producirse la crisis constitucional a fines de 1890 y comienzos de 1891. De esto último se trata, precisamente, el presente artículo.

Diciembre de 1890 no fue un mes normal en la historia de Chile, como se comprobaría pronto al comenzar el año siguiente. Un periódico

[1] Por ejemplo, Cheyre, Juan Emilio: "2003: Un Desafío Futuro", *La Tercera*, 5 de enero de 2003; San Francisco, Alejandro: "El Ejército, la Historia y la Responsabilidad Institucional", *La Segunda*, 6 de enero de 2003; y la polémica entre Arturo Fontaine T. y Gonzalo Rojas S. recogida en "Debate sobre la Posición de las FF.AA. frente al Gobierno Militar", 2003, pp. 301-310.

[2] Al respecto, Nunn, Frederick: *Chilean Politics, 1920-1931: The Honorable Mission of the Armed Forces*, 1970, pp. 2, 5 y 47-48; Vial, Gonzalo: *Historia de Chile*. Vol. 3, *Alessandri y los Golpes Militares*, 2001, p. 408; Millar, René: "Significado y Antecedentes del Movimiento Militar de 1924", 1972-1973, pp. 7-102.

[3] Edwards, Alberto: *La Fronda Aristocrática*, 1992 (13ª edición), Caps. XXIX y XX; Góngora, Mario: *Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX*, 2003 (8ª edición), pp. 102-103.

[4] San Francisco, Alejandro: "La Deliberación Política de los Militares Chilenos en el Preludio de la Guerra Civil de 1891", por publicarse.

www.cepchile.cl

extranjero que circulaba en el puerto de Valparaíso, *The Chilian Times*, declaraba a fines de ese mes: "Esperamos que las disensiones que por largo tiempo han dividido y perturbado al país se acaben con el término de 1890, y que una nueva era más brillante sea inaugurada con el Año Nuevo"[5]. El problema de fondo, todos lo sabían, era que el conflicto que durante el año había enfrentado al Presidente Balmaceda contra la oposición parlamentaria no podía seguir estirándose sin hacer peligrar las instituciones republicanas y la continuidad constitucional. De hecho, la carta de 1833 fijaba una fecha límite para las disensiones —el 1° de enero de 1891—, momento después del cual o se arribaba a una solución aceptable por las partes o el agrio debate político podía derivar en una intervención armada, en forma de guerra civil, golpe de Estado o revolución. En cualquiera de los casos, sería una demostración más de la incapacidad de los sectores dirigentes por encontrar fórmulas de convivencia estables en el tiempo y mostraría que Chile no estaba ajeno ni inmune a las revoluciones y problemas que habían caracterizado al siglo XIX hispanoamericano[6]. Ya durante la crisis provocada por la censura al Ministerio de Mayo, liderado por Enrique S. Sanfuentes, el país había estado al borde del precipicio y se llegó a hablar de la clausura del Congreso, la renuncia del Presidente de la República y una eventual resolución militar al conflicto político[7].

La Constitución de 1833 establecía que correspondía al Congreso Nacional dictar anualmente dos leyes, denominadas "leyes periódicas" o constitucionales: la de presupuesto anual de la Nación y aquella que fijaba las fuerzas de mar y tierra[8]. El Congreso, sin embargo, se encontraba clausurado desde octubre, cuando Balmaceda decidió poner fin a su período de sesiones extraordinarias, nombrando un nuevo gabinete encabezado por Claudio Vicuña. El Presidente, por otra parte, no manifestaba el menor

[5] *The Chilian Times*, 27 de diciembre de 1890.

[6] A pesar de la gravedad de la situación, Balmaceda mostraba un orgullo patriótico por el desarrollo histórico y la situación de Chile en ese entonces, como señaló a mediados de 1890: "Chile ha sido en el período de su organización una excepción entre las Repúblicas fundadas en el siglo XIX; y en los últimos treinta años ofrece un ejemplo sin igual en los continentes de ambas Américas, y acaso sin paralelo en el resto del mundo. Mientras las naciones han sufrido graves agitaciones sociales y políticas, cambios imprevistos de Gobiernos y profundas revoluciones, la República de Chile no ha sufrido, a pesar de la situación extraordinaria creada por una formidable guerra exterior, ni un solo trastorno político, ni un solo motín militar. Ni por un instante se ha perturbado la marcha de sólido progreso realizado por una y otra generación", en Balmaceda, José Manuel: "Mensaje Presidencial de 1890", pp. 5-9.

[7] Para revisar los sucesos políticos de Chile en 1890 son especialmente útiles, entre varios autores que se han referido al tema, Bañados Espinosa, Julio: *Balmaceda, su Gobierno y la Revolución de 1891*, 1894, Tomo I, pp. 409-701; Encina, Francisco Antonio: *Historia de Chile*, 1970 (2ª edición), Tomo XIX, pp. 187-326.

[8] *Constitución Política de la República*, 1833, Art. 28 (37 en el texto original).

www.cepchile.cl

interés por convocar a sesionar al Congreso (quizá porque se encontraría con la desagradable sorpresa de una censura o una acusación constitucional contra sus ministros); la oposición gastaba todas sus municiones a través de la prensa y la Comisión Conservadora, donde se proferían repetidos ataques a la persona de Balmaceda y de sus ministros y partidarios[9]. Ni el gobierno ni la oposición demostraban un interés real por solucionar el conflicto político y las páginas de los periódicos escalaban una espiral peligrosa de descalificaciones, amenazas y, en definitiva, de un odio político creciente[10].

Ante esa realidad, quizá sólo cabían dos "soluciones": la claudicación definitiva de uno de los bandos en disputa o bien la imposición por la fuerza de la postura defendida por cada uno de ellos. Esto significaba, en dos palabras, que Balmaceda podía renunciar —como ya se lo habían solicitado dirigentes opositores, apelando a su patriotismo y al ejemplo de O'Higgins—, o bien debía despedir a su gabinete para ser reemplazado por un ministerio parlamentario, acordado con la oposición, como había ocurrido con el Ministerio Prats, de agosto de 1890. También la situación podía modificarse mediante la renuncia de sus posiciones por parte del Congreso, el cual enfrentado a la dura realidad podría haberse mantenido sin mayor intervención en la política del país, aceptando los gabinetes presidenciales de Balmaceda y dejando de lado sus intenciones de querer influir en la marcha de la administración a través de la formación de los ministerios. Sin embargo, ninguno de los contendores se manifestaba dispuesto a ceder, y el paso de los días, en vez de servir para un acuerdo Gobierno-oposición, aumentaba los niveles de violencia verbal y agresiones recíprocas de los balmacedistas y sus contradictores.

La oposición, por ejemplo, fue clara y explícita a partir de octubre: una reunión de los líderes contrarios al gobierno determinó "unir sus esfuerzos para preparar la resistencia por todos los medios legales, mientras el gobierno se mantenga dentro de la Constitución, y por todos los medios posibles cuando salga de ella"[11]. Desde *La Nación*, periódico gobiernista, se podían leer las siguientes declaraciones a fines de año: "La ola de malas pasiones amenaza con invadirlo todo y destruir hasta los cimientos del orden público en que hemos vivido desde treinta años: el comercio se

[9] Un documento indispensable para comprender la política chilena a fines de 1890 es Congreso Nacional: *Comisión Conservadora*, sesión de 16 de octubre a sesión de 24 de diciembre de 1890, 273 páginas.

[10] San Francisco, Alejandro: "Las Batallas de la Pluma: La Prensa y el Odio Político en Chile en el Preludio de la Guerra Civil de 1891", 2004.

[11] Para las resoluciones de esta reunión se puede consultar *El Ferrocarril*, 21 de octubre de 1890.

www.cepchile.cl

sentía languidecer por las incertidumbres que crea una situación incierta; la sociedad entera encontraba dudas y vacilaciones"[12].

Frente a lo anterior cabía la alternativa extrema de poner al país fuera de la ley y la Constitución y, por lo tanto, de resolver la situación con un golpe de fuerza encabezado por Balmaceda o por sus detractores. La situación no era cómoda y, ciertamente, resultaba excéntrica desde el punto de vista histórico y planteaba una serie de interrogantes difíciles de contestar. ¿Cómo puede funcionar de manera institucional, en forma, un país que no tiene leyes "constitucionales" aprobadas en la forma prescrita por la Constitución? ¿De qué manera operaría el presupuesto y las fuerzas de mar y tierra en 1891? ¿Qué autoridad tendría Balmaceda si se ponía fuera de la ley? ¿Se convertiría en un dictador o un tirano, como lo llamaban los opositores? ¿Cuál debía ser la actitud de las Fuerzas Armadas ante este caso inédito: debían permanecer bajo el Presidente de la República y ajeno a las luchas de partido o más bien podían desobedecer a un gobernante que había dejado de ser constitucional?

El tema es de la mayor importancia y fue precisamente en relación a este último aspecto donde se concentraron tanto la propaganda gobiernista como la opositora a fines de 1890: el conflicto originalmente político se movía lenta pero inexorablemente en una dirección militar; el dilema Presidente-Congreso se transformaba en un asunto que también involucraba a los uniformados; la vieja prescindencia política de las Fuerzas Armadas chilenas daba paso a la posibilidad de intervención en medio de la crisis institucional, rompiendo de esa manera una larga y orgullosa tradición. Diciembre de 1890 demostraba ser un mes decisivo y las batallas de la oratoria y de la pluma llegaron a uno de sus momentos culminantes, anticipando lo que serían los combates armados del año siguiente.

El caso chileno es particularmente interesante, algo complejo y en ocasiones insuficientemente comprendido, tanto para el conjunto del siglo XIX como para el caso específico de 1891. Por una parte, los militares ejercieron el poder político en diversas ocasiones desde los inicios de la república —los casos de O'Higgins, Freire, Prieto y Bulnes así lo demuestran—, pero en el marco de un régimen predominantemente civil, al menos desde 1831 en adelante, y en especial desde la vigencia de la Constitución de 1833[13]. Esto permitió que, pasadas las décadas, Chile fuera considerado un país con vigencia plena del régimen constitucional y ausencia de milita-

[12] *La Nación*, 26 de diciembre 1890.

[13] Véase por ejemplo, Collier, Simon: "Cuatro Hombres de Armas en la Formación y la Consolidación de la República", 2003, pp. 16-38.

www.cepchile.cl

rismo, una verdadera excepción en el concierto americano en el siglo de los caudillos, las guerras civiles y desorganización[14].

Por ello mismo, los gobiernos militares en Chile y la politización de las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista historiográfico, quedan reservados al siglo XX, específicamente tras los golpes de 1924-25 y la intervención de 1973. El asunto, sin embargo, es mucho más complejo y distintos antecedentes nos permiten afirmar la presencia de signos claros de abandono de posiciones civilistas con anterioridad al estallido de la guerra civil de fines del siglo XIX, a medida que las Fuerzas Armadas se politizaban y la política se militarizaba. Con ello, quedaban abiertas las puertas para que las instituciones de la defensa nacional tomaran parte por el presidente Balmaceda o por el Congreso, en medio del conflicto abierto por el poder que ellos enfrentaron entre 1889 y 1891. Incluso es posible hacer comparaciones interesantes entre los tres procesos, buscar patrones de comportamiento político y analizar elementos comunes y diferencias entre la última guerra civil del primer siglo de vida republicana y los golpes de Estado del siglo XX[15].

En el presente trabajo se pretende abordar dicha problemática y la forma cómo se manifestó a fines de 1890 y comienzos de 1891, es decir, cuando las instituciones militares estuvieron frente al momento de la definición fundamental: permanecer junto al Presidente de la República o rebelarse contra dicha autoridad, como promovían los líderes de la oposición parlamentaria. En un primer momento el texto analiza la politización del Ejército en 1890, como se deduce de diferentes manifestaciones públicas a lo largo del año que generaron una división interna en el Ejército, paralelas a la discusión Presidente-Congreso. En segundo término, el estudio se refiere a un asunto de la mayor importancia y que inaugura la fase final de la crisis: el homenaje que la oposición de Santiago rindió al general Manuel Baquedano, que tuvo consecuencias políticas que se analizaron en la prensa durante varios días. En seguida, el trabajo se detiene en el problema constitucional de la ley que fija las fuerzas de mar y tierra, no aprobada todavía por el Congreso para 1891 y que constituía uno de los fundamentos de la compleja situación jurídica que enfrentaba el país y lo ponía en una situación límite desconocida en el país. A continuación, el artículo aborda

[14] Véase Lieuwen, Edwin: *Arms and Politics in Latin America*, 1961 (edición revisada) pp. 24 y 29; Johnson, John: *The Military and Society in Latin America*, 1964, p. 50; Lynch, John: *Caudillos in Spanish America 1800-1850*, 1992. Respecto de la excepcionalidad de Chile, véanse pp. 83, 130, 235 y 433.

[15] Hemos tratado este tema en San Francisco, Alejandro: "Las Intervenciones Militares en Chile: Patrones y Modelos en la Guerra Civil de 1891, los golpes militares de 1924-25 y la intervención militar de 1973", 2003.

www.cepchile.cl

la perspectiva del gobierno del Presidente Balmaceda a fines de 1890, cuando insiste en la obediencia sin deliberación, de manera de contar con el respaldo inequívoco y sumiso de los militares. Luego el trabajo se refiere a la postura alternativa presentada por la oposición, que destacaba la posibilidad de una acción de los uniformados contra el gobierno de Balmaceda, a medida que éste optaba por superar los límites de la legalidad y la Constitución. Posteriormente, el texto analiza el comienzo de enero de 1891, cuando el problema constitucional se hizo evidente, el Presidente y el Congreso decidieron un camino sin retorno en sus respectivas posiciones y las Fuerzas Armadas debieron optar por uno u otro bando. Finalmente, el trabajo busca proporcionar una explicación más comprensiva de la actitud del Ejército y la Marina y de sus líderes en 1891, ya que ellos fueron parte esencial en el estallido de la guerra civil y en el desarrollo del conflicto, cerrando un proceso de participación de los militares en la resolución de la insoluble crisis política entre el gobierno y la oposición parlamentaria.

Es necesario presentar una aclaración previa respecto del presente artículo, en relación a que se trata de una "historia del tiempo corto", de la coyuntura, de los acontecimientos, de un espacio brevísimo que no supera los 40 días[16]. Evidentemente, el edificio constitucional había experimentado transformaciones importantes entre 1860 y 1890, particularmente en lo que se refiere a la pérdida de prerrogativas presidenciales y el aumento de los poderes parlamentarios, tanto a nivel del texto de la Constitución como en las prácticas políticas que contribuyeron a formar el sistema parlamentario consuetudinario en Chile[17]. También es claro que la lucha por el poder que caracterizó la década de 1880, y especialmente en el gobierno de José Manuel Balmaceda, no fue un asunto de un día para otro, sino que representaba la manifestación pública que adquiría la pugna por la influencia política, la capacidad económica del país, la prensa, en definitiva, el poder del Estado[18]. La politización del Ejército tuvo, por su parte, una manifestación abierta durante todo el año que precedió a la guerra civil, no fue un asunto que se precipitara de un día para otro.

Sin embargo, a pesar de todas esas consideraciones, tiene sentido estudiar el "tiempo corto", el período que va desde el 29 de noviembre de

[16] El concepto es de Fernand Braudel, en *El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la Época de Felipe II*, 2002, Prólogo a la Primera Edición Francesa, Vol. 1, pp. 18-19.

[17] Heise, Julio: *Historia de Chile. El Período Parlamentario, 1861-1925*, 1974, Tomo I, especialmente pp. 36-67; Silva, Fernando y otros, *Historia de Chile*, Tomo 4, 1988 (8ª edición), pp. 681-704.

[18] Esta visión de la lucha por el poder está, recientemente, en el excelente estudio de Sagredo, Rafael: *Vapor al Norte, Tren al Sur: El Viaje Presidencial como Práctica Política en Chile, Siglo XIX*, 2001.

www.cepchile.cl

1890 al 7 de enero de 1891, es decir, desde la manifestación en favor del general Baquedano hasta el levantamiento de la Escuadra contra el Presidente Balmaceda. La razón es muy simple: en ese tiempo el conflicto político se agudizó y desaparecieron las fórmulas de solución institucionales; en ese período la política se militarizó y ambos contendores prefirieron mirar a los cuarteles para obtener apoyos y, eventualmente, derrotar al adversario por vías de hecho; por último, es posible y necesario estudiar el tiempo corto porque el 1° de enero se acababa el plazo fatal, ese día el país amanecería sin leyes de presupuesto y leyes de las Fuerzas Armadas, poniendo sobre Chile y los hombres de esos días el sabor de lo desconocido e indeseado: la guerra civil, que dejaría miles de muertos en los campos de batalla y que pondría la vergüenza donde antes se encontraba el orgullo nacional por el desarrollo republicano alcanzado.

1. La politización del Ejército en 1890

Sin duda el gran hito militar en tiempos de José Manuel Balmaceda se refirió al proceso de modernización del Ejército, sobre la base del sistema alemán, que llevó a Chile el coronel teutón Emilio Körner. El objetivo de la misión alemana era profesionalizar ("prusianizar") a los militares chilenos, que si bien habían resultado victoriosos en la Guerra del Pacífico (1879-1884) y contaban con orgullo sus hazañas, carecían del conocimiento científico de la "ciencia militar". Así lo ha entendido la historiografía, que ha dedicado numerosos estudios al tema, varios de ellos de gran calidad y con trabajo en las fuentes primarias[19]. A dicha modernización del Ejército se sumó la fuerte inversión económica que hizo el gobierno de Balmaceda en buques para la Armada y armas para el Ejército, símbolo de la importancia que se atribuía entonces al poder armado y también una expresión evidente de las posibilidades ciertas de que el país tuviera que enfrentar un nuevo conflicto bélico internacional con alguno de sus países vecinos[20].

[19] La bibliografía al respecto es abundante. Algunos de los trabajos más importantes son Nunn, Frederick: "Emil Körner and the Prussianization of the Chilean Army: Origins, Process and Consequences, 1885-1920", 1970, pp. 300-22; Quiroga, Patricio y Carlos Maldonado: *El Prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas: Un Estudio Histórico, 1885-1945*, 1988; Blancpain, Jean-Pierre: "L'Armée Chilienne et les Instructeurs Allemands en Amérique Latine (1885-1914)", 1991, pp. 347-393; Brahm, Enrique: *Preparados para la Guerra: Pensamiento Militar Chileno bajo Influencia Alemana 1885-1930*, 2003; Sater, William y Holger Herwig: *The Grand Illusion. The Prussianization of the Chilean Army*, 1999.

[20] Ibarrola, Bernardo: "El Ejército de Balmaceda: Modernización y Crisis. Las fuerzas chilenas de mar y tierra, 1884-1890", 2003; Núñez P., Jorge: "La Política Militar del Presidente Balmaceda", 1993, pp. 65-71.

www.cepchile.cl

El asunto fundamental en el plano militar, sin embargo, debe ser complementado con otro aspecto. Junto a la profesionalización anhelada se desarrolló paralelamente su contrapartida, una politización del Ejército; adicionalmente, la guerra internacional no llegó, pero sí lo hizo una guerra civil de consecuencias desastrosas para el país, una de cuyas manifestaciones más interesantes se refiere precisamente a la presencia de los uniformados en los diferentes bandos que disputaban el poder. La actuación de los militares chilenos en la política contingente de fines del siglo XIX ha sido un tema olvidado por la historiografía y no hay análisis completos, de conjunto, basados en investigaciones originales, que den cuenta de un asunto que estimamos de la mayor importancia, si bien numerosas fuentes documentales e impresas ponen de manifiesto —en ocasiones de manera detallada— la progresiva presencia de los uniformados en las actividades y luchas de partidos, así como también los llamados evidentes, abiertos, en ocasiones sistemáticos, hechos por los medios de gobierno y de oposición hacia los soldados en orden a influirlos para que ellos apoyaran una u otra postura en medio del conflicto.

Lo que podríamos denominar "factores de politización de los militares" son múltiples, que en ocasiones corren por caminos paralelos y en otras se entremezclan. Desde enero hasta diciembre de 1890 las manifestaciones de partidismo político al interior de los líderes del Ejército fueron crecientes y, sin lugar a dudas, se percibió ya en esa época como un factor que distorsionaba la vida política del país y ponía a Chile en el peligroso ámbito del "militarismo" —al menos embrionario— que había hecho historia en el continente americano, plagado de caudillos y revoluciones de los que Chile parecía estar inmune[21]. Entre los factores de politización de los uniformados enunciaremos los siguientes:

En primer lugar, se puede apreciar la presencia de miembros del Ejército en altas funciones de gobierno, específicamente en cargos de ministros de Estado. El punto de inflexión lo representó el nombramiento del general Velásquez como Ministro de Guerra en enero de 1890, con lo que se produjo de hecho la politización del Ejército: era necesario contar con un hombre de sable en el gobierno en medio de la crisis, como resumió un opositor[22]. En segundo término, los militares participaron en *meetings* políticos y reuniones partidistas, politizando con ello a la institución que representaban. Una de esas reuniones de militares, en homenaje al nuevo ministro Velásquez "marca, en cierto modo, si bien muy vagamente, el origen de

[21] Dicho "germen de militarismo" fue denunciado por *El Comercio*, de Valparaíso, 29 de mayo de 1890.

[22] Véase Zegers, Julio: "Revolución 1891", p. 5-III, inédito (en Archivo Fernández Larraín, Volumen LXXX).

www.cepchile.cl

la intromisión política en el Ejército"[23]. Fue tan grave el asunto que en septiembre el nuevo Ministro de Guerra, Federico Errázuriz, decidió que los uniformados evitaran "su asistencia a banquetes u otras manifestaciones de carácter político aunque esos actos sean en honor de personas que desempeñan puestos públicos importantes o se tributen a Jefes del Ejército"[24]. En tercer lugar, se desarrolla una deliberación pública de los militares en política contingente, manifestando opiniones en favor del gobierno y sus políticas (Velásquez y Barbosa) o bien oponiéndose a sus puntos de vista y llamando incluso a la desobediencia de los uniformados hacia el poder ejecutivo (del Canto y Boonen Rivera)[25]. En cuarto lugar, encontramos homenajes a héroes militares, pero que tuvieron un claro contenido político. El caso más emblemático fue el que recibió el general Manuel Baquedano en noviembre de 1890, como se verá en el presente artículo. Otro elemento que es notorio a medida que avanzaba el conflicto en 1890 está reflejado en los viajes presidenciales, los que contaron progresivamente con mayor participación militar, lo que también puede entenderse en la línea del deseo del Presidente de la República por atraerse el favor de los uniformados, "para fortalecer la situación política presidencial", en palabras de Rafael Sagredo[26]. Otro aspecto se refiere a los ataques a distintos uniformados de parte de la prensa partidista de entonces. De esta manera, *La Nación* denunciaba a los militares más cercanos a la oposición, mientras *La Libertad Electoral* y *El Ferrocarril*, por ejemplo, atacaban a los uniformados balmacedistas, por razones profesionales, pero sobre todo por la filiación política de los soldados.

En 1890 también hubo un tema que emergió con fuerza, como fue el asignar a los militares el carácter de garantes de la Constitución y las leyes, que se veían en peligro en medio de la crisis institucional. El tema formó parte del homenaje que recibió Baquedano en noviembre; finalmente ésa sería la fórmula utilizada por los dirigentes opositores para convocar a la rebelión de enero, "designamos a don Jorge Montt para que coadyuve a la acción del Congreso, a fin de restablecer el imperio de la Constitución", era el párrafo final del *Acta de Deposición de Balmaceda*, que justificó el levantamiento de la Armada en enero de 1891[27].

[23] Blanchard Chessi, Enrique: "La Revolución Chilena de 1891", 30 de abril de 1910.

[24] Federico Errázuriz al Comandante General de Armas de Santiago, en Ministerio de Guerra, N° 850, Santiago, 6 de septiembre de 1890.

[25] Un análisis de conjunto sobre este tema en San Francisco, Alejandro: "La Deliberación Política de los Militares Chilenos...", por aparecer.

[26] Así lo ha destacado recientemente Rafael Sagredo en *Vapor al Norte, Tren al Sur*, 2001, pp. 239-241, 246-247 y 354-357.

[27] Congreso Nacional: "Acta de Deposición del Presidente Balmaceda", en *Memorandum de la Revolución de 1891*, 1892, pp. 25-30.

www.cepchile.cl

Lo anterior nos lleva a un último elemento, de la mayor importancia. Frente a la imposibilidad de arribar a un acuerdo estable en el tiempo entre el Presidente Balmaceda y el Congreso Nacional, en diciembre de 1890 tanto los balmacedistas como los opositores hicieron llamados expresos, a través de la prensa o de otras instancias, a las instituciones armadas para que se manifestaran en favor del Ejecutivo o de la oposición parlamentaria, en caso de que llegara —como se presupuestaba— la hora de resolver el asunto por la vía armada. De esta manera los distintos sectores políticos comenzaron a mirar hacia los cuarteles, abandonando la tradición chilena de apoliticismo de las Fuerzas Armadas y provocando, de alguna manera, la última fase del conflicto pre-armado.

Para entonces, los dos últimos meses de 1890, el clima político había sufrido una profunda transformación, caracterizado principalmente por la polarización política entre el gobierno y la oposición, las agresiones continuas y crecientes a través de la prensa, la militarización del discurso político y el abandono de las posibilidades de solución legal del conflicto de poderes. De esta manera, la guerra civil se acercaba a pasos agigantados y la resolución armada de la crisis se tornaba inevitable, al menos con los datos y actitudes presentes a fines de 1890.

Se podría decir que la clausura del año, y la pendiente inexorable hacia la guerra civil, comenzó con el homenaje al general Manuel Baquedano, realizado el 29 de noviembre en Santiago.

2. El general Baquedano, garante de la Constitución

El general Baquedano era considerado, por unánime sentimiento nacional, la figura más destacada en el servicio público, ajeno a las disputas de partido, símbolo claro del triunfo chileno en los campos de batalla de la Guerra del Pacífico: un héroe. Sus camaradas de armas lo recibieron con júbilo: "el pueblo entero de Santiago se agolpó a las puertas de la estación de los ferrocarriles del Estado para tributarle el homenaje de su cariño a su feliz arribo. Desde ese día su casa se ha visto frecuentada por lo más selecto de nuestra sociedad y del ejército"[28]. *La Revista Militar de Chile*, en tanto, declaró que "el pueblo, sin distinción de clases ni de colores políticos, unánimemente lo aclama en todas partes"[29].

Sin embargo, la situación era un poco distinta. A fines de 1890 el general Manuel Baquedano recibió un homenaje organizado por la oposi-

[28] *El Círculo Militar*, Año III, N° 34, 1° de diciembre de 1890.

[29] *Revista Militar de Chile*, Tomo X, N° 51, Santiago, 1° de diciembre de 1890, p. 286.

www.cepchile.cl

ción de la capital, al cual asistieron numerosas personas, pero donde fueron excluidos expresamente aquellos que continuaban como partidarios del Presidente Balmaceda[30]. Días antes de la celebración un diario resumía, a través de un poema, la tarea que Baquedano debía acometer:

> Ilustre jeneral, altivo y grande,
> Veo en tu sien la lumbre de la gloria,
> El rayo de valor brilla en tu mano;
> Te veo erguido i fuerte como el Ande;
> Pero te resta aun otra victoria:
> Defender a la patria de un tirano[31].

La referencia a la contingencia política es evidente, y la mención a Balmaceda es dura: "un tirano". La idea de realizar el acto tenía un doble origen, propio de los tiempos que corrían. Por una parte, el general estaba volviendo desde Europa, donde había estado durante una prolongada ausencia de su patria, de manera que sus amigos chilenos querían recibirlo como el héroe nacional que era y homenajearlo como correspondía a sus galones. Por otro lado, la situación política del país llevaba a muchas personas a considerar a Baquedano como al principal garante del orden constitucional, amenazado a juicio de los opositores por las actitudes presidencialistas —incluso dictatoriales— de Balmaceda. La forma elegida para rendir tributo a Baquedano fue un banquete de 500 cubiertos en el Teatro Municipal de la capital, evento que fue anunciado por la prensa en numerosas ocasiones.

El acto contó con la mayor solemnidad y tuvo numerosos oradores, representantes de los diferentes partidos políticos que se oponían a la política presidencial. Entre ellos podemos destacar a Eulogio Altamirano, Enrique Mac Iver y Clemente Fabres[32]. Además hablaron en el evento dos hombres que habían representado la última posibilidad de acuerdo entre el Presidente y el Congreso a mediados de año, Álvaro Covarrubias y Belisario Prats. Desde el ámbito militar, los principales oradores fueron el contraalmirante Luis Uribe y el propio general Baquedano.

En la ocasión hubo llamados expresos a Baquedano para asumir un papel de garante de la Constitución y las leyes, en caso de que el Presidente Balmaceda siguiera por la pendiente que lo conducía fuera de los límites republicanos. Las referencias de los discursos eran claras: "héroe destinado por la Providencia para su salvación (de la República)", "sabrá salvar las

[30] Orrego Luco, Luis: *Memorias del Tiempo Viejo*, 1984, p. 312.
[31] El poema, firmado por *Voix du peuple*, en *El Día*, 24 de noviembre de 1890.
[32] El primero de ellos liberal, el segundo radical y conservador el tercero.

www.cepchile.cl

leyes y libertades de la República", "General. Mandad y obedeceremos". Un orador resumió de manera elocuente la posición asignada a Baquedano: "Tributemos al ilustre general nuestros agradecimientos, y saludemos de nuevo en él al representante de las glorias del ejército y armada, y al defensor del nombre e instituciones de la República"[33].

El discurso del general Baquedano es interesante y forma parte de la deliberación política de los militares que precedió a la guerra civil[34]. Lo redactó Máximo Ramón Lira, secretario y amigo personal del héroe militar[35]. No se trataba de un texto terminante, resueltamente contrario al gobierno o que anunciara la inminencia de una intervención militar. Más bien era ecléctico y elusivo. Pero había algunas líneas que daban a entender su postura cercana a la oposición: el éxito de Chile estaba en la bondad de sus instituciones y en las virtudes de sus hijos; pedía que el país se mantuviera libre de manchas; bebió una copa por el porvenir de Chile al amparo de las mismas leyes que habían hecho grande al país[36].

A pesar de su importancia, la historiografía no ha prestado suficiente atención al homenaje a Baquedano, quizá porque ha olvidado considerar en toda su magnitud el factor político-militar en torno a la guerra civil de 1891. Rodríguez Bravo omite mencionar el evento, al igual que Julio Bañados, Harold Blakemore, Hernán Ramírez N. y Gonzalo Vial[37]; Carmona, el biógrafo de Baquedano, también se olvida del asunto[38]; Ricardo Salas Edwards lo ubica como parte de las postrimerías del régimen constitucional, aunque sin destacar mayormente el hecho[39]; Encina percibe el acercamiento de la oposición a Baquedano como parte de una estrategia política anti-balmacedista[40]. Sin embargo, ninguno de ellos logra penetrar en el contenido profundo del acto y las consecuencias que él tuvo de cara a la lucha político-militar.

---

[33] Las frases arriba reproducidas fueron parte de los discursos de los líderes de la oposición en el homenaje a Baquedano. Se encuentran transcritas en *El Ferrocarril*, 30 de noviembre de 1890.

[34] Lo hemos mencionado en San Francisco, Alejandro: "La Deliberación Política de los Militares Chilenos...", por aparecer.

[35] Orrego Luco, Luis: *Memorias del Tiempo Viejo*, 1984, pp. 312-313.

[36] El discurso de Baquedano en *El Ferrocarril*, 30 de noviembre de 1890.

[37] Bañados E., Julio: *Balmaceda..., 1894*; Rodríguez Bravo, Joaquín: *Balmaceda y el Conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo*, 1921, 1925, 2 tomos; Ramírez Necochea, Hernán: *Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891*, 1958; Blakemore, Harold: *Gobierno Chileno y Salitre Inglés 1886-1896: Balmaceda y North*, 1977; Bravo, Fernando, Francisco Bulnes y Gonzalo Vial: *Balmaceda y la Guerra Civil*, 1991.

[38] Carmona, Jorge: *Baquedano*, 1946.

[39] Salas Edwards, Ricardo: *Balmaceda y el Parlamentarismo en Chile*, 1914, 1925, Volumen I, pp. 374-376.

[40] Encina, Francisco A.: *Historia de Chile*, Tomo XIX, 1970 (segunda edición), pp. 312-315.

www.cepchile.cl

El homenaje, en realidad, tuvo un significado político claro y también un notable contenido simbólico, por cuanto elevó a Baquedano —y por extensión a los militares— como "Jefe Supremo del Ejército chileno, guardián de la Constitución", única garantía en medio de la crisis. Como señaló el embajador alemán en Chile, en un documento notable por su síntesis y claridad, un político opositor chileno le había declarado que "en caso de que Balmaceda se lanzase al camino resbaladizo de la dictadura, tendríamos que ver en Baquedano el libertador y —quiéralo él o no— nuestro futuro Presidente"[41]. Los partidos comenzaban a mirar los uniformes para encabezar el gobierno del país, en una situación que se repetiría en 1891 con figuras como el general Velásquez, el general Estanislao del Canto, el capitán Jorge Montt y, ciertamente, el propio Baquedano.

Según era de esperarse, la reacción de la prensa y los partidos fue contradictoria, y cubrió ampliamente el acto en favor de Baquedano. Los diarios de oposición destacaron el homenaje al mérito que había significado el evento, que también involucraba un dique "contra la corriente corruptora de hombres y de instituciones"[42]; se contraponía la soledad del Presidente Balmaceda con lo masivo y amplio de la convocatoria al homenaje al general[43]; otro medio destacaba las múltiples dificultades puestas por el gobierno para la realización del evento, en lo que había fracasado, considerando el gran éxito del acto[44]; asimismo, se resumía la figura de Baquedano como "encarnación purísima de nuestras victorias, símbolo de nuestro buen nombre en el extranjero y grata esperanza en los días nublados de nuestro porvenir"[45].

La respuesta del gobierno se expresó a través de los periódicos oficialistas y, como era de esperarse, fue abiertamente contraria a la visión de los organizadores del homenaje a Baquedano. Sobre el carácter de General en Jefe que le habían reconocido al héroe del Pacífico en el acto de fines de noviembre, *La Nación* estimó necesario precisar que se trataba de un título meramente honorífico y que Baquedano no tenía "EL MANDO DEL EJÉRCITO DE CHILE, que por la Constitución corresponde al Presidente de la República. El general Baquedano no tiene en Chile ni siquiera el mando del último de los soldados del ejército"[46]. Como resumen del evento, el periódico balmacedista declaraba: "al calor de los odios y de las

[41] Véase Gutschmid a Caprivi, N° 1, Santiago, 9 de diciembre de 1890 (1891), pp. 3-4.

[42] *La Época*, 30 de noviembre de 1890.

[43] *El Mercurio*, 4 de diciembre de 1890.

[44] *El Chileno*, 30 de noviembre de 1890.

[45] *El Estandarte Católico*, 1° de diciembre de 1890.

[46] *La Nación*, "El Ejército", 1° de diciembre de 1890. El destacado en el original.

www.cepchile.cl

pasiones políticas, realizada en forma artera e insidiosa y persiguiendo un propósito francamente subversivo y trastocador, ha tenido lugar el sábado la manifestación que la coalición oligárquica ofreció al general don Manuel Baquedano, en el Teatro Municipal de Santiago"[47]. Mientras tanto *El Comercio* reproducía una carta en que se expresaba que Baquedano se había prestado "a servir de juguete a un bando sin conciencia y sin pudor, que sólo ambiciona el poder y el presupuesto"[48].

Como fuera, ambos sectores hacían la misma evaluación del evento, aunque difirieran en sus afectos: Baquedano se había convertido en un personaje político de la mayor importancia y quedaba claro, a quien quisiera ver, que la oposición había optado resueltamente por atraer al Ejército para enfrentarse a Balmaceda en caso que el Presidente quisiera gobernar a partir del 1° de enero de 1891 sin la aprobación de las leyes constitucionales por parte del Congreso Nacional. El gobierno, por su parte, no se quedaba atrás, y reafirmaba la doctrina según la cual el representante máximo del Ejército era precisamente el Presidente de la República al que la oposición atacaba sistemáticamente. Según precisó un contemporáneo de los hechos, antibalmacedista, "el banquete a Baquedano llevaba consigo el implícito llamado al Ejército de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes"[49].

Durante diciembre continuarían presentes tanto los llamados a los militares como las disputas constitucionales entre el gobierno y la oposición parlamentaria. Una de ellas, fundamental por su carácter jurídico, constitucional y militar, era la situación de la ley periódica que regiría en 1891 en relación a las Fuerzas Armadas.

3. El problema constitucional de las fuerzas de mar y tierra

Uno de los problemas más graves asociados a la crisis institucional de 1890-91 se refiere al problema de las leyes periódicas, es decir, la ley de presupuestos y la ley que fijaba las fuerzas de mar y tierra del país. Si bien ambos son particularmente importantes, el segundo tema cobra una especial consideración si analizamos el papel de las Fuerzas Armadas en el

[47] *La Nación*, "El Primer Acto de Seducción", 2 de diciembre de 1890. En el mismo documento *La Nación* explica: "el país sabe bien, como el Ejército y el General Baquedano, que en Chile no hay ni puede haber otro Generalísimo y otro Almirante que el Presidente de la República, al cual deben respeto y obediencia todos los militares, desde el General Baquedano hasta el último marinero".

[48] *El Comercio*, 1° de diciembre de 1890.

[49] Orrego Luco, Luis: *Memorias del Tiempo Viejo*, 1984, p. 314.

www.cepchile.cl

desenlace del conflicto y en el estallido de la guerra civil entre el gobierno de Balmaceda y la oposición parlamentaria.

El artículo 28 de la Constitución de 1833 establecía lo siguiente: "Solo en virtud de una ley se puede:

3º Fijar igualmente en cada año las fuerzas del mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra"[50].

En diferentes períodos de la historia —así lo recordaría Balmaceda en su *Manifiesto a la Nación* del 1° de enero de 1891— los años habían comenzado sin que hubieran estado aprobadas las leyes de presupuestos y las que fijaban las fuerzas militares, por lo cual, desde ese punto de vista, la situación no presentaba una gran novedad. Sin embargo, había una diferencia de fondo, omitida por el Presidente de la República en su explicación: en todos los casos que él invocaba como precedentes el Congreso Nacional había seguido sesionando normalmente, de manera que la falta de leyes podía suplirse con la resolución parlamentaria, cuando las cámaras votaran las leyes periódicas pendientes. Era evidente que en 1890 el conflicto Balmaceda-oposición era imposible de solucionar por vías constitucionales, por cuanto el Congreso permanecía clausurado, Balmaceda no manifestaba intenciones de volver a convocarlo y, por ende, 1891 comenzaría como muchos temían que sucediera: sin las leyes constitucionales aprobadas. El conjunto de hechos fue el que puso a Chile en una situación inédita por su gravedad y por las fuerzas políticas y sociales involucradas en la división política del país.

A pesar de la norma expresa de la Constitución, el gobierno insistió a fines de año en la necesidad de interpretar el texto de la carta fundamental de acuerdo a las circunstancias precisas que enfrentaba Chile a fines de 1890. El fundamento de toda la argumentación gubernativa residía en otro artículo de la Constitución, que encargaba al Presidente de la República, ya que "su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, y la seguridad exterior de la República", cuestión que también tenía vigencia en los tiempos de crisis[51].

La administración se defendía explicando que las cámaras no habían querido aprobar el proyecto de ley que fijaba las fuerzas de mar y tierra para 1891 y, por el contrario, sólo habían dilatado la discusión sobre el particular, mostrando con ello su carencia de voluntad política. A lo anterior se sumaba el argumento histórico mencionado, porque ya habían sido

[50] *Constitución Política de la República de Chile*, 1833, Artículo 28 (Art. 37 en el texto original).

[51] *Constitución Política de la República de Chile*, 1833, Artículo 72 (Art. 81 en el texto original).

www.cepchile.cl

muchos los Presidentes de la República, incluido el propio Balmaceda en 1887, que habían gobernado algún tiempo sin que estuvieran previamente aprobadas las leyes periódicas. Por ello, concluía el *Diario Oficial* en un interesante editorial, "de la práctica comprobada por actos de diversas administraciones y de distintos Congresos, resulta que la ley dictada en 25 de diciembre de 1889, rige, prácticamente y de hecho, como ha sucedido en ocasiones diversas, hasta que se promulgue otra nueva ley"[52]. Dichas ideas fueron ratificadas en otro editorial del mismo periódico días después, consolidando con ello una interpretación constitucional que, sin embargo, ponía al gobierno al borde de la inconstitucionalidad[53].

La misma idea sostuvo la prensa balmacedista para apoyar la doctrina constitucional del gobierno. En un editorial de mediados de diciembre, *La Nación* concluía diciendo: "En suma, durante las administraciones de Prieto, Bulnes, Montt, Pérez, Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda, se ha dejado en diversas ocasiones de dar en tiempo oportuno la ley que fija las fuerzas de mar y tierra, sin que por ello nadie haya sostenido que los tales Jefes de Estado se convirtieran *por ello* en dictadores ni en déspotas"[54].

Los partidos y líderes de la oposición, como era de esperarse, pensaban diametralmente distinto. El principal argumento contra el gobierno residía en el hecho que tanto el ejército como la armada requerían para su subsistencia de una ley y que dicho texto no estaba aprobado. Adicionalmente, el Congreso estaba clausurado y nada hacía presentir que antes del 31 de diciembre fueran reabiertas las sesiones para discutir las leyes constitucionales pendientes[55].

Así lo denunciaba un medio congresista, refiriéndose a la actitud del Ejecutivo y a los argumentos esgrimidos por su prensa. "Y con artificios de tinterillo se dirige ahora al ejército y la armada desde las columnas editoriales del *Diario Oficial* de la República para persuadirlos de que a él, el Ejecutivo, solo deben obediencia, para convencerlos de que, aun cuando espire la ley que fija su fuerza, siempre continuarán existiendo legalmente siquiera por seis meses más"[56].

Sin embargo, fue en la Comisión Conservadora —integrada por senadores y diputados, y que funcionaba durante el receso parlamentario—

[52] *Diario Oficial*, "El Ejército y la Armada", 9 de diciembre de 1890.
[53] *Diario Oficial*, "El Ejército y la Armada", 12 de diciembre de 1890.
[54] *La Nación*, "Sofismas e Ignorancia", 18 de diciembre de 1890.
[55] Balmaceda rechazó cualquier posibilidad de convocar nuevamente a las sesiones del Congreso, porque podía producirse una acusación constitucional en contra del Ministerio Vicuña.
[56] *La Época*, "La Dictadura, el Ejército y la Armada", 10 de diciembre de 1890.

www.cepchile.cl

donde la discusión se tornó más agresiva contra las autoridades de gobierno. Ahí los parlamentarios buscaron contradecir el punto de vista presidencial respecto de las leyes constitucionales, profundizando en la idea de que Chile estaría fuera de la Constitución, de las leyes y de las tradiciones republicanas, en caso que el Ejecutivo prorrogara por sí mismo dichas normas sin la aprobación del Congreso.

Desde luego, en el seno de la Comisión Conservadora hubo múltiples llamados al Presidente Balmaceda para que convocara a sesiones del Congreso Nacional, para que fuera éste el que discutiera y aprobara las leyes que fijaban las fuerzas de mar y tierra. Ante la negativa del gobierno y frente a los editoriales del *Diario Oficial*, de discutible valor doctrinal para los opositores, la Comisión dedicó una sesión completa a debatir el problema de las leyes constitucionales y el punto de vista del Ejecutivo. Pedro Montt inició el debate denunciando "como esas ideas y ese pensamiento tienden a subvertir el orden establecido y a trastornar las verdaderas doctrinas legales y constitucionales". A juicio de Montt, era una prerrogativa exclusiva del Congreso aprobar o posponer las leyes periódicas, por lo que la posición de Balmaceda atentaba contra el régimen parlamentario de gobierno vigente en Chile. Luego el diputado del Partido Nacional agregaba lo siguiente: "se me resiste el alma a aceptar que en pocos días más va a precipitarse el Gobierno voluntaria y deliberadamente en la dictadura y en el despotismo". Por último, Montt proponía un proyecto de acuerdo destinado a precisar la posición institucional sobre el particular, que establecía: "La Comisión Conservadora acuerda manifestar al Presidente de la República que el mantenimiento de las fuerzas de mar y tierra después del 31 de Diciembre, sin que se dicte por el Poder Legislativo la ley que lo autorice, importa una violación abierta del artículo 28 de la Constitución"[57].

Luego terciaron en la discusión otros parlamentarios de diferentes partidos: Ladislao Errázuriz, Carlos Walker Martínez, José Antonio Gandarillas y Eulogio Altamirano. Todos ellos, sin excepción —los balmacedistas no asistían a la Comisión desde octubre, por considerar que ella funcionaba ilegalmente y no daba garantías a todos los sectores— respaldaron la postura defendida por Pedro Montt y condenaron duramente el artículo del gobierno en el *Diario Oficial*; además criticaron al Presidente Balmaceda y sus concepciones sobre el sistema de gobierno imperante; denunciaron los deseos gubernativos de establecer una dictadura y vulnerar

[57] Congreso Nacional: *Comisión Conservadora*, sesión de 10 de diciembre de 1890, pp. 228-233.

www.cepchile.cl

las instituciones republicanas que enorgullecían al país[58]. Entre los aspectos de mayor interés, sin duda, se encuentra el hecho que los miembros de la Comisión Conservadora, particularmente en relación a las Fuerzas Armadas, enfatizaron dos elementos: por una parte, que no podía haber fuerza pública sin una ley que autorizara su existencia; por otro lado, que los militares no podían actuar contra la Constitución y las leyes, obedeciendo al "capricho de un solo hombre". Como resumió el líder conservador Carlos Walker M., "la dignidad nacional se siente herida en lo más hondo con la tristísima idea de llegar a ver a su Ejército y a su Escuadra convertida en esclavos de un César de comedia... que quiera el cielo no se convierta en tragedia"[59].

Desgraciadamente, todo parecía indicar que el drama nacional efectivamente se aproximaba. Como prueba suficiente de ello está el hecho de que tanto el gobierno como la oposición comenzaron a apelar a las Fuerzas Armadas para obtener su respaldo en medio de la crisis, dejando de lado así las fórmulas más consensuales o institucionales, para pasar directamente a las vías de hecho o, al menos, para estar preparados en caso de que la lucha por el poder derivara en un enfrentamiento militar.

4. El gobierno de Balmaceda y la apelación a la subordinación militar

En medio del conflicto, el Presidente Balmaceda y sus partidarios optaron por reforzar la doctrina tradicional del Ejército en relación al poder político. Como establecía la Constitución de 1833, "La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar"[60]. Por ello, el gobierno decidió insistir en la necesidad de la subordinación militar al Presidente de la República, jerárquicamente y sin hacer cuestión del conflicto político. Esto basándose en que el Jefe Supremo de la Nación era también el Generalísimo de las Fuerzas Armadas.

La Nación, el 1° de diciembre, publicaba un elocuente editorial, titulado "El Ejército". En dicho texto resumía así la posición que debía tener la institución armada: "El Ejército está en su puesto y sabrá conser-

[58] Los defensores del gobierno en la Comisión Conservadora habían sido Baldomero Frías Collao y Julio Bañados Espinosa, que sólo asistieron a las primeras reuniones de la institución.

[59] Congreso Nacional: *Comisión Conservadora*, sesión de 10 de diciembre de 1890, p. 235.

[60] *Constitución Política de la República de Chile*, 1833, Art. 148 (Art. 157 en el texto original).

www.cepchile.cl

varlo", rechazando con ello la sola posibilidad que la oposición parlamentaria lograra convencer a los militares de volverse contra la administración, encabezando una rebelión. Por el contrario, pensaba el periódico balmacedista, al Ejército "nada le hará cambiar su tranquilidad imperturbable, porque vive alimentado con el respeto profundo que debe al Poder Ejecutivo de la Nación; porque las luchas de los partidos no tocan a la Ordenanza General, que es su código, la única ley por la cual se rige, dentro de la subordinación militar y la consideración que dispensa a sus superiores jerárquicos en el servicio"[61].

A medida que el mes avanzaba, la prensa seguía insistiendo en los mismos argumentos y el propio Balmaceda continuaba reforzando la lealtad de los máximos jefes militares. Paralelamente, rechazaba las tentativas revolucionarias dirigidas por la oposición y los intentos que hacían por seducir a las instituciones armadas para rebelarse contra el Poder Ejecutivo. Particularmente, rechazaban las proclamas cotidianas que la prensa opositora dirigía "para corromper a los gloriosos soldados del Ejército", cuando los invitaba a resistir al Presidente de la República[62].

Pocos días antes de terminar el año, *El Comercio* resumió la posición del gobierno en un corto pero claro mensaje titulado "A nuestro glorioso Ejército". En dicho texto el periódico resumía las ideas centrales del pensamiento balmacedista sobre las Fuerzas Armadas en los tiempos de crisis que se vivían: que el Ejército siempre había sido fiel, respetuoso y obediente de la Constitución y las leyes; que el Ejército no tenía otro superior constitucional que el Jefe Supremo de la Nación, es decir, el Presidente de la República; recordaba que la fuerza pública era esencialmente obediente y que ningún cuerpo armado podía deliberar; que ni el pueblo ni el Congreso podían exigirles a las Fuerzas Armadas que dejaran de cumplir sus deberes constitucionales; que cualquier militar que faltara a la obediencia debida al Presidente de la República se constituía en traidor a la patria. Por último, el diario resumía con dureza lo siguiente: "La coalición opositora no podrá jamás conseguir que haya repugnantes y miserables Judas o traidores a la patria, entre esa falange brillante de hombres de honor y patriotismo, que componen los jefes, militares y soldados del ejército de Chile"[63].

[61] *La Nación*, "El Ejército", 1° de diciembre de 1891.

[62] *La Nación*, "Fuera de la ley", 29 de diciembre de 1891.

[63] *El Comercio*, "A Nuestro Glorioso Ejército", 30 de diciembre de 1890. La proclama se reprodujo textualmente el 31 de diciembre, cuando quedaba sólo un día para que llegara la fecha decisiva esperada por todos los sectores.

www.cepchile.cl

Fue esa convicción la que tenía el Presidente Balmaceda a fines de 1890, que le llevaba a esperar y estar seguro del apoyo que le brindarían las instituciones armadas en caso de que algunos chilenos intentaran sublevarse contra su gobierno por las razones que fueran. Obviamente no se trataba simplemente de reproducir artículos de prensa reforzando deberes militares, ni tampoco de concentrar todos los esfuerzos en explicar doctrinas jurídicas a los uniformados. Junto a lo anterior, el gobierno procuró ir asegurando el respaldo del Ejército, particularmente, para evitar una sorpresa desagradable al comenzar 1891. A través de sus figuras más importantes en la institución —Barbosa, Gana, Alzérreca, entre otros— Balmaceda pensó que contaría con el respaldo irrestricto de los héroes de 1879, que habían dado pruebas de su lealtad al gobierno en muchas ocasiones. Los mismos cargos ostentados por esas figuras militares son una prueba suficiente de la confianza del gobierno en algunos de los jefes uniformados: el general Barbosa era Comandante de Armas de Santiago, el general Gana había sido designado como Ministro de Guerra en el Ministerio Vicuña, Alzérreca en tanto era distinguido como Intendente de Santiago. De ellos, sólo el primero desempeñaba un puesto específicamente militar, mientras los otros dos asumían tareas reservadas habitualmente a los civiles: la politización militar de 1890 había marcado un cambio en las tradiciones chilenas y el año terminaba como había comenzado, con generales co-gobernando a través de los gabinetes, por expreso llamado del Presidente de la República[64].

Era evidente, a fines de año, que la situación podía derivar en una solución de fuerza, por más que las partes en conflicto declararan no querer llegar a una solución extrema. De ahí que *La Nación*, el principal defensor de la política presidencial a fines de 1890, sostuviera con dureza y claridad poco antes de la Navidad de ese año: "Opondremos el hierro al hierro y, antes que humillarnos a los imbéciles y los malvados, habremos de caer ejercitando inexorables represalias"[65]. No era, precisamente, una frase que propusiera un acuerdo pacífico. Los gobiernistas estaban convencidos de las posibilidades de éxito de su postura y basaban su confianza en la lealtad de los militares.

Sin embargo, los opositores trabajaban con igual o mayor fuerza por obtener el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas.

[64] Dos textos de testigos directos narran los esfuerzos del gobierno por mantener la lealtad de los militares a fines de 1890 y comienzos de 1891. Ellos son Velasco, Fanor: *La Revolución de 1891: Memorias*, 1914, y Rodríguez Mendoza, Emilio: *Como si Fuera Ayer!...*, 1919.

[65] *La Nación*, "Comparemos", 22 de diciembre de 1890.

www.cepchile.cl

5. La oposición y el llamado al levantamiento militar contra la dictadura

Los opositores al Presidente Balmaceda no desconocían la doctrina de las Fuerzas Armadas, sino que reconocían en ella una de las principales razones de la consolidación de la República, que permitieron a Chile mantenerse ajeno al caudillismo y a las rebeliones que azotaban a los demás países del continente. En este sentido, el conjunto de los partidos y los líderes del país estaban orgullosos de la tradición civilista de Chile y de la subordinación de los militares al poder político.

Sin embargo, a fines de 1890 el problema era distinto y el asunto principal dejó de ser la "obediencia sin deliberación", en la que todos estaban de acuerdo. El problema era todavía más complejo, y se refería fundamentalmente a la eventual inconstitucionalidad en que caería el Presidente Balmaceda al comenzar el año siguiente, por carecer de leyes de presupuesto y de aquellas que fijaban las fuerzas de mar y tierra. Frente a esa situación, ¿debían obedecer las Fuerzas Armadas a un gobierno "inconstitucional"? ¿Quedaban en libertad para optar por una u otra parte en conflicto? ¿O debían, derechamente, pronunciarse contra el gobierno de hecho que establecería Balmaceda?

Algunos destacados uniformados ya habían expresado su posición durante 1890, y ciertamente se podía apreciar una diferencia considerable de opiniones entre los soldados "balmacedistas" y los "opositores". Orozimbo Barbosa, por ejemplo, procuraba enfatizar los mandatos claros de la Constitución y la Ordenanza del Ejército, que obligaban a una subordinación y obediencia sin deliberación a los miembros de las Fuerzas Armadas[66]. Estanislao del Canto, por su parte, había sostenido que la Constitución no se había puesto en el caso de un conflicto entre los poderes del Estado, de manera que en tal situación los militares quedaban en una situación poco común y deberían saber cumplir con su deber, sin especificar la necesidad de seguir al Presidente de la República, sino más bien dejando una puerta abierta para la deliberación de los uniformados en uno u otro sentido[67].

[66] En agosto Barbosa había pronunciado un discurso en el homenaje al Ministerio Sanfuentes, en el cual declaró lo siguiente: "sabemos bien, como lo sabe el último ciudadano alistado en nuestro ejército, que la constitución nos prohíbe deliberar y que la Ordenanza nos enseñan a acatar y a rendir ciega obediencia a las autoridades legalmente constituidas; a cumplir y hacer cumplir sus órdenes cuando no van reñidas con el honor y la dignidad". El discurso completo se encuentra en *La Nación*, 16 de agosto de 1890.

[67] En su discurso del 26 de mayo de 1890, con deliberada ambigüedad, del Canto señaló: "debe obedecer a sus jefes, y respetar sobre todo los poderes constituidos: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La Constitución, señores, no ha podido ponerse en el caso de un

www.cepchile.cl

A fines de año la oposición ocupó dos vías principales para convocar a la intervención armada y la revolución contra Balmaceda: la prensa y la Comisión Conservadora. El asunto de fondo sobre el cual descansaba el argumento opositor se refería a la naturaleza del poder que gobernaba Chile y su evidente y abierta inconstitucionalidad, es decir, su carácter dictatorial o tiránico. Los líderes antibalmacedistas declaraban que Chile era un país que se estaba saliendo de la Constitución y las leyes por la acción de un gobierno que esperaba la llegada de un nuevo año sin la aprobación previa de las leyes constitucionales.

El 23 de diciembre *La Libertad Electoral* fue muy clara en plantear su posición en las instancias decisivas que se vivían en Chile. "Cualquier medio es bueno —decía el medio de prensa opositor—. Lo es la Comisión Conservadora, la prensa, el mitin y lo es también el brazo armado, cuando se han agotado todos los medios y han resultado ser todos ineficaces. Cuando la fuerza del derecho ha dicho su última palabra, tócale hacerse oír al derecho de la fuerza"[68].

En la misma línea, un periódico democrático se refería así en relación a las instituciones militares: "El ejército será valiente, abnegado para sacrificar su sangre generosa en los campos de batalla en pro de la Patria. Sabrá mantener puro y sin mancha el honor de la bandera contra los que intenten mancillarla; pero nunca será el instrumento de las ambiciones de un gobernante que se ha colocado fuera de toda ley; que no gobierna para el pueblo y por el pueblo"[69]. Era el grito de aviso en favor de la desobediencia militar.

Había otro argumento importante esgrimido por la prensa opositora, referido al vínculo inherente que había entre el pueblo y el ejército, que no podían dividirse en las horas de crisis que vivía Chile. "Por eso, también, no se romperán nunca los lazos vigorosos que unen al ejército y al pueblo y será imposible lanzar a aquel contra éste"[70]. Se hablaba de que el ejército estaba compuesto por ciudadanos que entendían sus deberes y que vivían en un país libre; que por ello amaban el orden, que en ningún caso podía entenderse como la imposición de una persona sobre el resto; que el ejército y el pueblo tenían un mismo y leal afecto por la Constitución y la patria.

Pero sin duda el documento más importante es uno redactado por Jorge Boonen Rivera, profesor de la Academia de Guerra, a fines de año.

divorcio entre estos poderes. El ejército, aunque en una situación difícil, sabrá cumplir con los mandatos de la Constitución, porque es digno y ama a su patria". El texto del breve discurso en *La Nación*, 28 de mayo de 1890.

[68] *La Libertad Electoral*, 23 de diciembre de 1890.

[69] *Las Provincias*, "El principio del fin", 26 de diciembre de 1890.

[70] *La Época*, "El Ejército y el Pueblo", 18 de diciembre de 1890.

www.cepchile.cl

En su artículo, publicado en *La Época*, Boonen declara que "existen y se pueden presentar casos en la vida militar en los cuales la desobediencia sería un deber, porque los intereses de individuos aislados están muy por abajo de los de la patria, que un militar de honor nunca debe olvidar"[71]. Con ello, no sólo aceptaba la desobediencia como una posibilidad, sino que la consagraba como un deber en el caso concreto de Chile a fines de 1890 y, sobre todo, a comienzos de 1891.

A todo lo anterior se sumaba, obviamente, un hecho de carácter práctico que estaba destinado a preparar las fuerzas en caso de que estallara el conflicto armado: la oposición realizó durante noviembre y diciembre gestiones específicas para ganarse el respaldo de las Fuerzas Armadas y algunos de sus miembros más destacados, y de esa manera resistir lo que ellos denominaban como una intención dictatorial del gobierno. Así lo dan a conocer algunos testigos aventajados de los hechos.

Como señaló uno de los principales revolucionarios, "se estudió atentamente el espíritu del ejército y de la armada y se trató de saber qué idea tenía de sus deberes en caso de violarse las instituciones; se reunieron recursos para adquirir y otros elementos de resistencia"[72]. El mismo Julio Zegers, ácido contradictor de Balmaceda y de sus políticas, fue el encargado de sondear al general Baquedano[73]. En el puerto las tareas principales las desarrolló Enrique Valdés Vergara, quien conversó con los marinos y procuró que Jorge Montt y otros estuvieran listos en caso de que el Presidente Balmaceda violara la Constitución[74].

Además, cuestión de la mayor importancia en un país como Chile, los principales líderes antibalmacedistas prepararon un documento clave, que más tarde se conocería como *Acta de Deposición del Presidente Balmaceda*. La idea de ese texto era declarar públicamente la ilegalidad e inconstitucionalidad de la administración, particularmente en lo que se refería a comenzar el año gobernando sin estar aprobadas las leyes de presupuesto anual y la que fijaba las fuerzas de mar y tierra.

---

[71] Boonen Rivera, Jorge: "La Obediencia Militar", en *La Época*, 30 de diciembre de 1890.

[72] Zegers, Julio: "Crónica Revolución 1891" (inédito), p. 15-VII. El texto se encuentra en el Archivo Fernández Larraín, volumen LXXX.

[73] Véase Zegers, Julio: "La Revolución de 1891", 3 de enero de 1891, anexo 13, pp. 169-170.

[74] Orrego Luco, Luis: *Memorias del Tiempo Viejo*, 1984, pp. 318-320. Orrego Luco narra que las principales gestiones fueron desarrolladas por el joven Enrique Valdés Vergara, que tenía contactos personales en la Marina. Ismael Valdés Vergara, en tanto, expresa que su hermano incluso iba más lejos, y esperaba dar un golpe mediante un asalto a La Moneda en diciembre, idea que finalmente fue abortada. Véase Valdés Vergara, Ismael: *La Revolución de 1891*, 1970, pp. 5-6.

www.cepchile.cl

El primer borrador del documento fue encargado a Enrique MacIver, uno de los principales oradores parlamentarios, miembro del Partido Radical y uno de los más ácidos contradictores de Balmaceda desde su sillón parlamentario. Los opositores encontraron, sin embargo, que el documento no tenía la fuerza necesaria ni los argumentos suficientes como para emprender un movimiento militar contra el gobierno. El segundo borrador lo redactó el líder conservador Abdón Cifuentes, en la noche del 27 al 28 de diciembre. La copia quedó en la casa de Manuel José Yrarrázaval, la máxima figura del Partido Conservador, hacia donde pasaron a firmar todos los que quisieran adherir al movimiento[75].

El texto era más comprensivo de los abusos e ilegalidades en las que había incurrido el gobierno a juicio de los opositores, e incluía además unas frases finales respecto del liderazgo militar de la revolución. "Y vos, general, que habéis conquistado tantas glorias para la patria, coronad vuestra vida restableciendo el imperio de la Constitución y las leyes". Este llamado al general Baquedano era perfectamente coherente con las insinuaciones abiertas o veladas que se le habían hecho en el banquete de homenaje del 29 de noviembre. Sin embargo, el héroe de 1879 prefirió que esa parte quedara en blanco. "Por ahí pueden pillarme. Mi nombre en blanco", fue su reflexión[76]. En esto habría influido su respeto, casi religioso, por la institución Presidente de la República[77]. Además, durante diciembre, Baquedano fue agasajado por Balmaceda y su familia, quienes le hicieron ver al general su inmenso valor y patriotismo, lo halagaron, y el soldado decidió abandonar la aventura opositora. Días después dejó la capital y se fue al campo durante la guerra civil[78].

Frente a eso, hubo que rehacer los ejemplares del acta, que estuvieron listos el 29 al anochecer. Los parlamentarios comenzaron a llegar a firmar, sin leer el documento, que se mantenía en celoso secreto, para servir de base a la declaración de ilegalidad del gobierno al comenzar 1891. Es necesario comprender que ésta era una de las exigencias mínimas que planteó Jorge Montt antes de embarcarse en la revolución: una declara-

[75] Una narración de primera mano en Cifuentes, Abdón: *Memorias*, 1936, Vol. 2, pp. 290-309.

[76] En Encina, Francisco A.: *Historia de Chile*, 1970 (segunda edición) Tomo XX, p. 67.

[77] Así se lo narró Máximo Lira a Luis Orrego Luco, en Orrego Luco, Luis: *Memorias del Tiempo Viejo*, 1984, pp. 313-314.

[78] Yrarrázaval, José Miguel: *El Presidente Balmaceda*, 1940, Tomo 2, p. 376, nota 149. Baquedano, al finalizar la guerra civil, fue convocado por Balmaceda para presidir un gobierno interino, cuyo único objetivo era resguardar el orden público hasta que se constituyera el gobierno definitivo de los vencedores. El breve "período" del general, apenas un par de días, terminó con más pena que gloria.

www.cepchile.cl

ción escrita y firmada por la mayoría del Congreso[79]. Finalmente, el mismo Montt fue el elegido por las fuerzas congresistas para restablecer el imperio de la Constitución, a comienzos de 1891, razón que lo constituiría en una figura política de primer nivel, hasta alcanzar la Presidencia de la República una vez concluida la guerra civil[80].

6. Enero de 1891: gobierno y oposición se juegan sus últimas cartas

La finalización de 1890 estuvo llena de problemas y amenazas en el ambiente, así como también comenzó a notarse el aire revolucionario y extra-constitucional, al cual contribuían, quizá en igual medida, el gobierno y la oposición. Lo resumió muy bien un periódico opositor casi al terminar diciembre: "El 1° de enero se acerca, la aurora del nuevo año viene teñida con líneas negras y rojas: tiene las oscuridades del abismo y los reflejos de una catástrofe"[81]. *La Nación*, en cambio, manifestaba a través de distintos editoriales una confianza excesiva en la continuidad institucional del país: "no habrá revolución, porque toda la lucha se reducirá a lo que vemos. O sea a la lengua y a los papeles"[82].

Quizá los dos sectores tenían algo de razón y fundamentos para defender su visión respecto a la crisis que se veía venir. La oposición estimaba que Balmaceda encabezaría una política abiertamente inconstitucional al comenzar el año nuevo, mientras el gobierno estaba convencido de tener la razón en el plano constitucional y de contar con la fuerza en el ámbito armado. En todo caso, era evidente que cualquier análisis tenía una connotación doble que habría sido impensable en otras épocas: por una parte, estaba presente el argumento político-constitucional, propio de la mentalidad de los sectores dirigentes y de las discusiones que habían caracterizado los debates parlamentarios y de la prensa en 1890; por otro lado, un nuevo elemento había asomado en la discusión y no desaparecería por mucho tiempo, como era la fuerza armada y la posibilidad que fuera ella la

[79] Encina, Francisco A.: *Historia de Chile*, 1970 (segunda edición), Tomo XX, pp. 60-61. Es decir, era necesario que previamente el Congreso depusiera a Balmaceda.

[80] Véase "Acta suscrita por la mayoría del Congreso Nacional" o "Acta de Deposición del Presidente Balmaceda" y también "Nota con que fue acompañada el acta precedente", 6 de enero de 1891 y "Aceptación de don Jorge Montt", 6 de enero de 1891, ambas complementarias del "Acta de Deposición". Ambas en *Memorandum de la Revolución de 1891* (1892), pp. 31-32.

[81] *La Libertad Electoral*, 26 de diciembre de 1890.

[82] *La Nación*, 24, 26, 29 y 31 de diciembre 1890.

www.cepchile.cl

que inclinara la balanza en uno u otro sentido. Es decir, la política se había militarizado y ello marcaba el comienzo de 1891.

El documento que inauguró el año de la guerra civil fue el *Manifiesto del Presidente Balmaceda a la Nación*, del 1° de enero de 1891, publicado en el *Diario Oficial* y en otros periódicos. En dicho texto el gobernante hizo expresa mención del conflicto constitucional y, especialmente, en relación a las Fuerzas Armadas. Balmaceda declaró que la mayoría del Congreso había "podido excitar al Ejército a la desobediencia de sus jefes jerárquicos". Casi al finalizar el *Manifiesto*, el Presidente precisó un hecho capital, que ilustraba lo que había sido la realidad chilena a fines de 1890 en materia político-militar: "Se ha incitado al Ejército y a la Armada a la desobediencia y a la revuelta. Empeño vano! El Ejército y la Armada tienen glorias imperecederas conquistadas en la guerra y en la paz. Saben que soy su Jefe constitucional, que por el artículo 148 de la Constitución son fuerzas esencialmente obedientes, que no pueden deliberar, y que han sido y continuarán siendo, para honra de Chile y reposo de nuestra sociedad, la piedra fundamental sobre la cual descansa la paz pública".

Otro aspecto que destacó el Presidente fue que el Congreso había "dejado perecer en los archivos del Congreso los proyectos de ley que presenté para mejorar los sueldos del Ejército y Armada". Al no haber ley de presupuestos, no se podrían pagar los sueldos de los funcionarios públicos. A lo anterior el gobierno contestaba claramente: "no entregaremos el Ejército y la Armada a la miseria"[83].

La oposición no se mantuvo al margen de la discusión, como es posible imaginar. Por una parte seguía incitando a las Fuerzas Armadas a la desobediencia y la deliberación contra el Poder Ejecutivo, pero de igual forma continuaba con algunos de sus contactos en las instituciones armadas a objeto de asegurar figuras militares para el inminente levantamiento. La prensa también abrió fuego contra la doctrina gobiernista.

Sin duda uno de los documentos principales de la oposición fue el famoso *Memorandum Político* —el tercero y último de la serie que había comenzado en 1889— de Julio Zegers, publicado en *El Ferrocarril* el 3 de enero de 1891. Lo interesante es que dicho texto resume muy bien los planteamientos de los congresistas en su conjunto y no exclusivamente de un líder aislado, por muy importante que éste fuera. Zegers respondía irónicamente al manifiesto presidencial: "Si el señor Balmaceda cuenta con la opinión pública, ¿por qué se encierra en la Moneda rodeado de bayonetas, desvelado por el ruido del tambor, por el *¡quién vive!* de los centinelas,

[83] Balmaceda, José Manuel: "Manifiesto a la Nación", en *Diario Oficial*, 1° de enero de 1891.

www.cepchile.cl

por el estrépito de las patrullas de infantería y caballería, en una palabra, por el rumor bélico que todo esto produce? Si tiene la conciencia tranquila ¿por qué impone al ejército los desvelos, las fatigas y el cúmulo de penalidades de la vida de campaña?"[84]. El diputado opositor tenía razón, por cuanto el gobierno desarrollaba una fuerte presión sobre las instituciones armadas para contar con su respaldo.

Un testigo privilegiado de los acontecimientos de comienzos de enero en La Moneda nos ha dejado sus recuerdos sobre los dramáticos días que vivía Balmaceda y sus seguidores más cercanos. Junto al Presidente pasaban personajes como los generales Gana, Ministro de Guerra, y Barbosa, Comandante de Armas de Santiago, además del General Velásquez, dos veces ministro en 1890. En la casa de gobierno se preguntaban sobre la actitud que tomaría la oposición frente al *Manifiesto* del Presidente. La respuesta era unánime: "Seguir estrellándose en la lealtad del Ejército"[85]. En realidad, ese era el secreto de Balmaceda, quien tenía una confianza ciega en sus generales y con ello se permitía dudar de las posibilidades de éxito de una eventual revolución.

La oposición, sin embargo, trabajaba en el mismo sentido, procurando ganarse el respaldo uniformado para enfrentar a la dictadura que comenzaba a regir en Chile a comienzos de 1891. Había una cierta certeza en cuanto al respaldo de la Marina, si bien los miembros de esta institución habían sido claros al señalar que sólo actuarían en la medida que el Presidente de la República se pusiera fuera de la Constitución, cuestión que ocurrió el 1° de enero. Con ello, el capitán Jorge Montt y sus compañeros de armas se sintieron en libertad para encabezar el movimiento revolucionario.

Los líderes congresistas estimaban contar también con el respaldo del Ejército, o más bien confiaban que tendrían su definición en caso de que la Marina se levantara, por cuanto la seguirían en defensa de las instituciones. El asunto no era tan claro, como demuestra un diálogo sostenido entre el entonces presidente del Senado, Vicente Reyes, y Eulogio Altamirano, uno de los principales oradores de la oposición. Reyes le preguntó a su visitante sobre los elementos con que contaba el Congreso: "El Ejército —contestó el señor Altamirano— pide dinero; pero la Marina anda bien". La respuesta de Vicente Reyes fue elocuente y profética: "El hecho de que el Ejército piense de un modo y la Marina de otro significa la guerra civil, de la cual se alejan mis principios"[86]. Días después la historia le daría la razón al líder del Senado.

[84] Zegers, Julio: *Memorandum Político*, 3 de enero de 1891, 1891, p. 32.
[85] Rodríguez Mendoza, Emilio: *Como si fuera ayer!...*, 1919, p. 138.
[86] Rodríguez Mendoza, Emilio: *Como si fuera ayer!...*, 1919, p. 132.

www.cepchile.cl

Un representante diplomático resumió muy bien la dramática situación en la que se encontraba el país a comienzos de enero de 1891: "Es casi seguro que la paz armada dará pronto lugar a la guerra civil. Los líderes de la oposición han mantenido recientemente un silencio ominoso respecto de sus planes, y es bien sabido que ambos partidos están tratando intensamente por todos los medios a su alcance para asegurar los servicios del Ejército y la Armada. Los grandes peligros hacia el futuro parecerían ser que se produzca una división entre el Ejército y la Armada, o que algún soldado ambicioso asumiera el gobierno del país. En estas contingencias Chile podría experimentar los horrores de la guerra civil o los problemas de una dictadura militar: desgracias de las cuales ha gozado inmunidad en los pasados treinta años"[87]. Mr. Kennedy tenía razón y el 7 de enero de 1891 se produjo el levantamiento de la Armada contra el gobierno de Balmaceda. La actitud de la mayoría del Ejército —si bien no de todos los miembros de esa institución— abriría el camino a la guerra civil que enlutaría al país hasta agosto del mismo año, cuando las tropas congresistas vencieran definitivamente al ejército balmacedista, poniendo fin al gobierno. Con ello terminaba más de un mes de presiones personales y a través de la prensa contra los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero dicho final abría paso a la guerra civil.

Es importante resolver por qué la revolución comenzó por la Marina. No cabe duda que casi todos los movimientos para involucrar a los militares en la política durante 1890, tanto del gobierno como de la oposición, se habían referido al Ejército. Ahí estaban los ministros militares, también los discursos de los uniformados, el posible golpe de Estado a mediados de año, el homenaje a Baquedano y los llamados de último minuto durante diciembre. La Marina, en cambio, más bien brillaba por su ausencia. Es que gobierno y oposición estaban convencidos que sólo con el apoyo del Ejército un movimiento armado podía tener posibilidades de éxito. De ahí que Balmaceda se dedicara fundamentalmente a reforzar la lealtad de sus generales, dejando de lado su relación con la Armada[88].

Un hecho simbólico grafica lo anterior. A mediados de diciembre de 1890 Balmaceda emprendió un viaje al sur a inaugurar un dique en Talcahuano. El Presidente viajó en barco, contra lo acostumbrado por él, pues sabemos que el gobernante habitualmente se desplazaba al norte en barco y al sur en tren[89]. Esta vez fue diferente porque la situación política también

[87] Mr. Kennedy a Salisbury, FO 16/264, N° 3, Santiago, 6 de enero de 1891.

[88] Todo este problema aparece muy bien narrado en Ibarrola, Bernardo: "El Ejército de Balmaceda: Modernización y Crisis", capítulo V, "Salto al abismo: Los militares, la política y la guerra", 2003.

[89] Sagredo, Rafael: *Vapor al Norte, Tren al Sur*, 2001, pp. 188ss.

www.cepchile.cl

lo era. En el viaje al sur ocurrieron dos hechos dignos de ser recordados. En primer lugar, el almirante Juan Williams Rebolledo, Comandante en Jefe de la Armada, recibió días antes de ese viaje una proclama que lo instaba a modificar el curso del viaje y trasladar al Presidente Balmaceda a la Isla de Juan Fernández, lo que terminaría con el gobierno despótico y permitiría formar una nueva administración respetuosa de la Constitución y las leyes. Finalmente eso no ocurrió, por cuanto Williams no se prestó para esa iniciativa[90]. El segundo hecho se produjo en el viaje mismo, a bordo del *Cochrane*, donde Balmaceda fue tratado con extrema frialdad por los marinos. Cuando estaba sentado cerca de la torre de mando en la nave, un guardia se acercó a él y le dijo sin más: "Está prohibido estar ahí", en lo que puede ser considerado una falta de respeto o al menos una descortesía contra el Primer Mandatario[91]. Balmaceda tomaría la decisión, improvisada por las circunstancias, de regresar a Santiago en tren[92].

En cualquier caso, Balmaceda ya se había equivocado con la Marina. La oposición logró comprometer en diciembre a Jorge Montt, quien dijo que estaba dispuesto a levantarse contra el gobierno si éste se ponía fuera de la Constitución. En estas gestiones fue clave la figura de Enrique Valdés Vergara, redactor de *El Heraldo*, de Valparaíso, quien tenía buenos contactos en la Marina desde la Guerra del Pacífico[93]. Más allá de las declaraciones grandilocuentes de algunos funcionarios —yo "respondo por la Marina", dijo el Subsecretario de Guerra Salas Lavaqui— la verdad es que el gobierno ya tenía las cartas perdidas a fines de diciembre y comienzos de enero, por más que siguiera conservando una confianza en el con-

[90] La narración de este episodio la hace el propio hijo del Almirante, que escribió años después sus recuerdos de esa época y que se reconocía admirador de Balmaceda. Véase Williams, Héctor: *Balmaceda*, 1949, pp. 109-111. Balmaceda se lo contó tiempo después a otras personas. Véase, por ejemplo, Velasco, Fanor: *La Revolución de 1891*, 1914 p. 327.

[91] Véase Rodríguez M., Emilio: *Cómo si Fuera Ayer!...*, 1919, p. 144. Rodríguez explica que Balmaceda contó este incidente a Williams, el cual aprovechó la ocasión para leerle la epístola mencionada, en que le insinuaban poner preso al Presidente.

[92] Al respecto, Sagredo, Rafael: *Vapor al Norte, Tren al Sur*, 2001, pp. 367-378. Un diario opositor a Balmaceda mencionó por esos días que "S. E. (Su Excelencia) resolvió hacer el viaje por tierra a causa de que manifiesta gran desconfianza por la Marina", *La Época*, 17 de diciembre de 1890. Balmaceda mismo dijo que regresaba por tierra para evitarse "cualquier desagrado", en Williams, Héctor: *Balmaceda*, 1949, p. 113.

[93] Sobre las gestiones Enrique Valdés Vergara en la promoción de la revolución, véase el libro de su hermano, Valdés Vergara, Ismael: *La Revolución de 1891*, 1970, pp. 5-6. Enrique Valdés era un joven impulsivo y había dirigido su prensa con ácidas críticas contra Balmaceda. En diciembre de 1890 pensaba incluso que lo mejor sería un golpe de Estado directo contra La Moneda, donde habría que "apoderarse de la persona de Balmaceda y de obligarlo pacíficamente o por medio de la violencia (por la razón o la fuerza) a someterse o a dimitir el mando", cuestión que llevaría a cabo el propio Enrique. Comenzada la guerra civil fue nombrado Secretario General de la Escuadra y murió en abril de ese año cuando fue hundido el Blanco Encalada.

www.cepchile.cl

junto de las instituciones armadas[94]. ¿Por qué se equivocó tan claramente el Presidente? ¿Confiaba en esas declaraciones de fidelidad de sus colaboradores o estimaba exageradas las prevenciones que algunos le hicieron sobre la deslealtad de los marinos?[95] Quizá ni lo uno ni lo otro: probablemente la razón de fondo de Balmaceda seguía siendo su confianza, casi ciega, en la institución "Presidente de la República" y en los mandatos constitucionales de obediencia y no deliberación[96]. Y quizá estimaba contar con el respaldo seguro, más claro y visible, del Ejército, con el cual habría material de guerra suficiente para derrotar a cualquier sublevado. La Marina, a ojos de Balmaceda, importaba mucho menos (en la práctica era así: los oficiales de la Armada eran sólo 124, contra los 945 del Ejército, por mencionar un aspecto)[97].

Para que se produjera el levantamiento, según se ha visto, faltaba solamente una cuestión, que se produjo el 5 de enero: ese día se decretaron los presupuestos para el año 1891, por la sola decisión del Presidente de la República, cuestión que volvía inconstitucional al gobierno. El resultado, doloroso pero esperable a la luz de las circunstancias, fue el levantamiento de la Armada y el fin de la paz que Chile había gozado por décadas. Ni siquiera lograron producir efectos los incentivos económicos que el gobierno les ofreció a los miembros de la Marina para que depusieran su actitud y volvieran al cauce de la obediencia al Poder Ejecutivo[98].

Jorge Montt, en cuanto líder militar de la revolución, fue expulsado de la Marina "por traidor a la patria", en tanto la Escuadra Nacional sublevada quedó fuera de la ley según un decreto del gobierno[99]. El Ejército, mayoritariamente en un comienzo, permaneció junto al gobierno de José

---

[94] La frase de Salas Lavaqui en Rodríguez M., Emilio: *Cómo si Fuera Ayer!...*, 1919, p. 145.

[95] Estas preguntas las plantea Williams, Héctor: *Balmaceda*, 1949, p. 107.

[96] Así lo expresaría con toda confianza y claridad el presidente Balmaceda en su "Manifiesto a la Nación", 1° de enero de 1891.

[97] Véase Ministerio de Guerra: *Memoria de Marina*, 1890, p. VI, y Ministerio de Guerra: *Memoria de Guerra*, 1890, p. 8. Véase también Ibarrola, Bernardo: "El Ejército de Balmaceda: Modernización y Crisis", capítulo V: "Salto al abismo: Los militares, la política y la guerra".

[98] Véanse decretos "Gratificaciones", Santiago, 10 de enero de 1891, y "Aumento de sueldo", Santiago, 12 de enero de 1891, en *Boletín de Leyes y Decretos de la Dictadura*, pp. 122-123. El primero de ellos ofreció una gratificación equivalente a dos años de sueldo si es que un buque y su tripulación "vuelve a la disciplina y se somete al gobierno"; el segundo decreto, en tanto, fijó un aumento de sueldo de 25% para los miembros de la Marina que no hubieran tomado parte en la insurrección.

[99] Véanse decretos "Jorge Montt y Javier Molinas", Santiago, 7 de enero de 1891, y "Escuadra Sublevada", Santiago, 9 de enero de 1891, ambos en *Boletín de Leyes y Decretos de la Dictadura*, pp. 120-121.

www.cepchile.cl

Manuel Balmaceda, aunque durante la guerra civil tuvo muchas defecciones que minaron al ejército gobiernista y, en alguna manera, facilitaron el triunfo opositor. La presión de los civiles en uno y otro sentido, había tenido un efecto político decisivo.

7. Conclusiones

Es evidente que la guerra civil de 1891 no fue el resultado de una casualidad o la mera reacción ante un asunto constitucional sin solución a comienzos de año, producto de la ausencia de las leyes de presupuesto y aquella que fijaba las fuerzas de mar y tierra. En efecto, el Congreso había concluido sus sesiones extraordinarias en octubre de 1890, junto con la formación de un nuevo gabinete de carácter exclusivamente presidencial. Con ello, se había eliminado la última posibilidad de solución política al conflicto entre el Presidente Balmaceda y la mayoría parlamentaria.

De ahí en adelante la militarización de la política se hizo pública, abierta y sin retorno; ambos sectores dejaron de lado las ilusiones de un consenso político. Balmaceda reforzó el presidencialismo de su gestión y su falta de voluntad de llegar a acuerdos; la oposición consolidó su intransigencia contraria al gobierno; la prensa continuó su radicalización y extremismo. Sin embargo, lo más importante fue otra cosa: desde el gobierno y la oposición los dirigentes políticos apelaron a la intervención de las Fuerzas Armadas, fuera para defender al Presidente de acuerdo a la obediencia debida constitucionalmente, fuera para levantarse contra ese mismo gobernante según la doctrina del derecho de rebelión.

La invitación a los uniformados fue en privado y en público, en reuniones políticas y a través de la prensa, en ocasiones velada y otras veces abierta. El período definitorio de la crisis se produjo entre fines de noviembre de 1890 y comienzos de enero de 1891, es decir, desde la proclamación-homenaje al general Baquedano de parte de la oposición hasta el levantamiento de la escuadra en la rada de Valparaíso. Durante ese tiempo ambos bandos se esforzaron por explicar a la opinión pública las razones de por qué abandonaban las vías constitucionales y optaban por la resolución armada de la crisis, por qué junto con llamar al apoyo ciudadano insistían en solicitar el refuerzo de las armas.

Incluso si se consideran literalmente los argumentos puntuales de parte de uno y otro, sobresale entre líneas de los editoriales y discursos una idea de fondo que en Chile parecía inconcebible: la incapacidad de llegar a fórmulas de gobierno estable y lograr acuerdos. No cabía en la mentalidad

www.cepchile.cl

parlamentaria la contradicción grave de opiniones entre el gobierno y la oposición, por cuanto era la mayoría del Congreso quien fijaba la composición del gabinete en conjunto con el Presidente y no parecía posible dentro de los cánones institucionales una contradicción profunda e insuperable entre los poderes del Estado. La situación corrió por un camino diametralmente diferente.

En esas circunstancias, los ojos de los políticos se volvieron a los militares, lo que representaba una curiosidad histórica. Los uniformados habían dado glorias a Chile en el ámbito exterior, pero dentro de las fronteras de Chile su misión era esencialmente profesional, obediente y no deliberante, ajena a los conflictos políticos. Pero, por otra parte, también debían obediencia a la Constitución y a las leyes de la República. De manera que la politización de las Fuerzas Armadas en los dos últimos años del gobierno de Balmaceda representó una inversión de la continuidad histórica, un quiebre importante y decisivo. No fueron los militares los que buscaron el poder ni la participación en el gobierno o en la oposición, sino que fueron los políticos quienes los involucraron en la contingencia, sumándolos a la cadena de pasiones desbordadas, odios acumulados y preparación de la guerra civil.

En este sentido, los comentarios de prensa de diciembre de 1890 son ilustrativos y evidentes y, ciertamente, tuvieron un efecto en los actores militares de la crisis. El asunto parece haber estado claro para los líderes civiles del gobierno, como refleja el hecho de que se prohibiera el ingreso de periódicos de oposición al interior de los cuarteles a mediados de diciembre[100]. Tanto Balmaceda como la oposición sabían que se aproximaba rápidamente el año nuevo y con ello una situación de enorme significación: el país comenzaría enero sin leyes de presupuesto ni leyes que fijaran las fuerzas de mar y tierra; el Congreso Nacional permanecía cerrado, por tanto no podía despachar dichas leyes. La situación era un juego de suma cero, pero con el agravante obvio de la inconstitucionalidad en que ingresarían las instituciones del país. ¿Qué debían hacer las Fuerzas Armadas en dicha situación? ¿Tenían que seguir pasivamente al Presidente Balmaceda, sin hacer cuestión de los problemas jurídicos? ¿Debían levantarse contra su gobierno, considerando que éste comenzaba a gobernar fuera de los límites de la Constitución? Precisamente esas posturas fueron las que promovieron el gobierno —obediencia sin deliberación— y la oposición —rebelión contra la dictadura. De manera que al comenzar enero de 1891 las instituciones armadas habían estado sumidas en una vorágine de incitaciones y amena-

[100] La información de esta prohibición en *El Día*, 19 de diciembre de 1890.

www.cepchile.cl

zas, invitaciones a obedecer o a insubordinarse, presiones para actuar en uno u otro sentido.

El resultado fue el peor previsible, desde el punto de vista del conflicto: las Fuerzas Armadas se dividieron —entre ellas y al interior de cada una de ellas—, iniciándose la guerra civil. Si todos hubieran permanecido junto al gobierno, no habría habido rebelión armada; si el conjunto de las instituciones armadas se hubieran sublevado, Balmaceda habría tenido que dejar el poder por la fuerza. La división del Ejército y la Armada determinó la profundización de la crisis, provocándose una guerra que dejaría al país con dos gobiernos, dos territorios y dos ejércitos luchando entre sí. La convocatoria a la intervención militar a fines de 1890 había rendido sus frutos a comienzos de 1891, pero el resultado era una tragedia que se extendería por varios meses y dejaría miles de muertos en los campos de batalla.

Referencias bibliográficas

Prensa periódica:
El Chileno.
El Comercio, Valparaíso.
El Día.
El Estandarte Católico.
El Ferrocarril.
El Mercurio, Valparaíso.
Diario Oficial.
La Época.
La Libertad Electoral.
La Nación.
Las Provincias.
The Chilian Times, Valparaíso.

Otras publicaciones periódicas:
El Círculo Militar.
Revista Militar de Chile.

Documentos oficiales:
Boletín de Leyes y Decretos de la Dictadura. Santiago: Imprenta Nacional, 1892.
Constitución Política de la República, 1833.
Congreso Nacional: *Cámara de Senadores*, 1890.
Congreso Nacional: *Cámara de Diputados*, 1890.
Congreso Nacional: *Comisión Conservadora*, 1890.
Memorandum de la Revolución de 1891. Santiago: Imprenta Cervantes, 1892.
Ministerio de Guerra: *Memoria de la Marina*, 1890.
Ministerio de Guerra: *Memoria de Guerra*, 1890.

www.cepchile.cl

Otra bibliografía consultada:

Balmaceda, José Manuel: *Mensaje Presidencial de 1890*. En Congreso Nacional, *Cámara de Senadores*, sesión de las Dos Cámaras Reunidas el 1° de junio de 1890.

Balmaceda, José Manuel: "Manifiesto a la Nación", 1° de enero de 1891, en *Diario Oficial*.

Bañados Espinosa, Julio: *Balmaceda, su Gobierno y la Revolución de 1891*, 2 tomos. París: Garnier Hermanos, 1894.

Blanchard Chessi, Enrique: "La Revolución Chilena de 1891". En revista *Zig-Zag*, N° 230 al 512, Santiago, 1909-1914.

Blancpain, Jean-Pierre: "L'Armée Chilienne et les Instructeurs Allemands en Amérique Latine (1885-1914)". En *Revue Historique* N° 578, Avril-Juin, 1991.

Blakemore, Harold: *Gobierno Chileno y Salitre Inglés 1886-1896: Balmaceda y North.* Santiago: Edit. Andrés Bello, 1977.

Boonen Rivera, Jorge: "La Obediencia Militar". En *La Época*, 30 de diciembre de 1890.

Bravo, Fernando; Francisco Bulnes y Gonzalo Vial: *Balmaceda y la Guerra Civil*. Santiago: Editorial Fundación, 1991.

Brahm, Enrique: *Preparados para la Guerra: Pensamiento Militar Chileno bajo Influencia Alemana 1885-1930.* Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2003.

Braudel, Fernand: *El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la Época de Felipe II*. México: Fondo de Cultura Económica, Vol. 1, 2002.

Carmona, Jorge: *Baquedano*. Santiago, 1946.

Cheyre, Juan Emilio: "2003. Un Desafío Futuro". En *La Tercera*, 5 de enero de 2003.

Cifuentes, Abdón: *Memorias.* Santiago: Ed. Nascimento, Vol. 2, 1936.

Collier, Simon: "Cuatro Hombres de Armas en la Formación y la Consolidación de la República". En Simon Collier y otros, *Patriotas y Ciudadanos.* Santiago, CED, 2003.

Congreso Nacional: "Acta de Deposición del Presidente Balmaceda". En *Memorandum de la Revolución de 1891*. Santiago: Imprenta Cervantes, 1892.

Edwards, Alberto: *La Fronda Aristocrática*. Santiago: Editorial Universitaria, 13ª edición, 1992.

Encina, Francisco Antonio: *Historia de Chile*. Santiago: Editorial Nascimento, 2ª edición, Tomo XIX, 1970.

Errázuriz, Federico: Ministerio de Guerra N° 850, Santiago, 6 de septiembre de 1890. En Archivo General del Ejército, Fondo Histórico, tomo N° 529.

Fontaine Talavera, Arturo: "Debate sobre la Posición de las FF. AA. frente al Gobierno Militar". En *Estudios Públicos*, 91 (2003).

Góngora, Mario: *Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los Siglos XIX y XX*. Santiago: Editorial Universitaria, 8ª edición, 2003.

Gutschmid (embajador de Alemania en Chile). Nota de Gutschmid a Caprivi, N° 1. En *Los Acontecimientos de Chile* (documentos publicados por la Cancillería alemana). Valparaíso: Imprenta de la Patria, 1891.

Heise, Julio: *Historia de Chile. El Período Parlamentario, 1861-1925*. Santiago, Editorial Andrés Bello, Tomo I, 1974.

Kennedy, John Gordon: Nota a Salisbury, FO16/264, Santiago, 6 de enero de 1891. (Archivo del Foreign Office, Kew, Londres.)

Ibarrola, Bernardo: "El Ejército de Balmaceda: Modernización y Crisis. Las Fuerzas Chilenas de Mar y Tierra, 1884-1890". Tesis doctoral, Programa de América Latina Contemporánea, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, 2003.

Johnson, John: *The Military and Society in Latin America*. California: Standford University Press, 1964.

www.cepchile.cl

Lieuwen, Edwin: *Arms and Politics in Latin America*. New York: Praeger Paperbacks, edición revisada, 1961.

Lynch, John: *Caudillos in Spanish America 1800-1850*. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Millar, René: "Significados y Antecedentes del Golpe Militar de 1924". En *Historia* Nº 11, 1972-1973.

Nunn, Frederick: *Chilean Politics, 1920-1931: The Honorable Mission of the Armed Forces.* Albuquerque: University of New Mexico Press, 1970.

Nunn, Frederick: "Emil Körner and the Prussianization of the Chilean Army: Origins, Process and Consequences, 1885-1920". En *Hispanic American Historical Review* N° 50, 2 (1970).

Núñez P., Jorge: "La Política Militar del Presidente Balmaceda". En Luis Ortega (editor), *La Guerra Civil de 1891: Cien años hoy*. Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 1993.

Orrego Luco, Luis: *Memorias del Tiempo Viejo*. Santiago: Ediciones Universidad de Chile, 1984.

Quiroga, Patricio y Carlos Maldonado: *El Prusianismo en las Fuerzas Armadas Chilenas: Un Estudio Histórico, 1885-1945*. Santiago: Ediciones Documentas, 1988.

Ramírez Necochea, Hernán: *Balmaceda y la Contrarrevolución de 1891*. Santiago: Editorial Universitaria, 1958.

Rodríguez Bravo, Joaquín: *Balmaceda y el Conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo.* Santiago: Imprenta Gutenberg, 1921, e Imprenta Cervantes, 1925.

Rodríguez Mendoza, Emilio: *Como si Fuera Ayer!...*, Santiago: Casa Editorial Minerva, 1919.

Rojas, Gonzalo: "Debate sobre la Posición de las FF.AA. frente al Gobierno Militar". En *Estudios Públicos*, 91 (2003).

Sagredo, Rafael: *Vapor al Norte, Tren al Sur: El Viaje Presidencial como Práctica Política en Chile, Siglo XIX*. Santiago: DIBAM, 2001.

Salas Edwards, Ricardo: *Balmaceda y el Parlamentarismo en Chile.* Vol. I. Santiago: Imprenta y Litografía Universo, 1914 y 1925.

San Francisco, Alejandro: "Las Intervenciones Militares en Chile: Patrones y Modelos en la Guerra Civil de 1891, los Golpes Militares de 1924-25 y la Intervención Militar de 1973". Conferencia en la Academia de Guerra del Ejército, 26 de agosto de 2003.

San Francisco, Alejandro: "El Ejército, la Historia y la Responsabilidad Institucional". En *La Segunda*, 6 de enero de 2003.

San Francisco, Alejandro: "Las Batallas de la Pluma: La Prensa y el Odio Político en Chile en el Preludio de la Guerra Civil de 1891". En Ángel Soto (ed.), *Entre Tintas y Plumas: Historias de la Prensa Chilena del Siglo XIX*. Santiago: Universidad de los Andes, 2004.

San Francisco, Alejandro: "La Deliberación Política de los Militares Chilenos en el Preludio de la Guerra Civil de 1891". Por aparecer en *Historia* 38, N° 1, 2005.

Sater, William y Holger Herwig: *The Grand Illusion. The Prussianization of the Chilean Army.* Lincoln y London: University of Nebraska Press, 1999.

Silva, Fernando y otros: *Historia de Chile*, Tomo 4. Santiago: Editorial Universitaria, 8ª edición, 1988.

Valdés Vergara, Ismael: *La Revolución de 1891*. Santiago: Editorial Francisco de Aguirre, 1970.

Velasco, Fanor: *La Revolución de 1891: Memorias.* Santiago: Imprenta y Litografía Universo, 1914.

www.cepchile.cl

Vial, Gonzalo: “Alessandri y los Golpes Militares”. En Gonzalo Vial, *Historia de Chile*, Vol. 3. Santiago, Zig Zag, 2001.

Williams, Héctor: *Balmaceda*. Santiago: 1949.

Yrarrázaval, José Miguel: *El Presidente Balmaceda*. Tomo 2. Santiago: Editorial Nascimento, 1940.

Zegers, Julio: “Revolución 1891”. Inédito. En Fondo Archivo Fernández Larraín, Vol. LXXX, Archivo Nacional de Chile.

Zegers, Julio: *Memorandum Político*. Santiago, Imprenta Cervantes, Octubre de 1891. □

www.cepchile.cl

ESCISIÓN DE LA ÉTICA EN PRIVADA Y PÚBLICA

Jorge Peña Vial

El autor considera que escindir la ética entre lo individual-privado y lo social-público, como dos ámbitos perfectamente diferenciados y separados, ha conducido al predominio de los expertos, al desencanto de la política y a una omnipresente corrupción que llena de desconcierto y perplejidad a nuestras democracias. El lema "haz en tu vida privada lo que quieras siempre que no entorpezcas los mecanismos 'objetivos' del buen funcionamiento técnico-objetivo", ha mostrado ser simplista y artificial. Esta disyunción arraiga —se señala— en otra más profunda y originaria entre *praxis* y *poiesis*, entre lo técnico y lo ético.

Tras analizar las ventajas e inconvenientes del método analítico, el autor propone como ideal metódico unir sin confundir, distinguir sin separar. Se trata de evitar tanto una concepción individualista de la ética como una interpretación exclusivamente técnica de la política. A juicio del autor, el dinamismo y la unidad de la conducta ética hacen imposible distinguir entre las virtudes que se adquieren y ejercitan de modo privado y las que se adquieren y ejercitan de modo público.

JORGE PEÑA. Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, Santiago. Es autor de *Imaginación, Símbolo y Realidad* (Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica, 1987), *Lévinas: El Olvido del Otro* (Ediciones Universidad de los Andes, 1996) y *Poética del Tiempo; Ética y Estética de la Narración* (Ed. Universitaria, 2002). Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, dedicadas preferentemente a temas de antropología y estética.

Estudios Públicos, 97 (verano 2005).

Diversos dualismos dominan la cultura de la modernidad: cuerpo/alma, sujeto/objeto, naturaleza/cultura, fe/razón, gracia/libertad, hechos/valores, lo público/lo privado. Y aunque teóricamente sabemos de la profunda, inextricable y maravillosa imbricación entre ambos (cuerpo-alma, naturaleza-cultura, lo individual y lo social) cognoscitivamente no acertamos a articularlos unitariamente y con frecuencia incurrimos en simplificaciones excluyentes, crasos reduccionismos o artificiosas distinciones. No disponemos de instrumentos epistemológicos ni de recursos educativos para afrontar la complejidad de lo real.

Lo que ahora nos proponemos es mostrar cómo el abuso del método analítico nos hace difícil afrontar las diversas dimensiones de la realidad —troceada y encasillada en diversas disciplinas— para luego centrarnos en lo que consideramos una artificial separación, aunque sí sea legítima y necesaria, entre la ética privada y la ética pública. Hemos creído necesario comenzar por la situación epistemológica que torna difícil captar la integralidad de la realidad para luego comprender, desde esos presupuestos, la escisión que se opera en el campo de la ética. El ideal metódico que consideramos adecuado para la comprensión de estas realidades complejas que requieren integración de diversas dimensiones, cabe resumirlo en la siguiente proposición: es necesario unir sin confundir, distinguir sin separar. Los pares de conceptos anteriormente mencionados y frecuentemente considerados en relación antinómica entre sí conviene verlos íntimamente asociados pero no confundidos, saber discernirlos pero no aislarlos ni separarlos. Comenzaremos con una crítica al método analítico, que ha hecho posible el surgimiento de las diversas ciencias positivas e incontestables progresos, pero cuyo uso indiscriminado ha tenido consecuencias nocivas ulteriores que han comenzado a ponerse de manifiesto a mediados del siglo XX.

1. Ventajas y crítica del método analítico

No cabe duda de que el empleo del método analítico ha estado asociado al inmenso progreso de la ciencia en la edad moderna, entendiendo por tal la que se despliega desde el siglo XVII en adelante. Descartes emplea el análisis como método seguro en el progreso de la ciencia. Se trata de descomponer, aislar, desglosar, ir a los elementos simples y básicos hasta desembocar en ideas claras y distintas. Así Descartes arribó a dos sustancias a las que se puede reducir todo lo existente y que constituyen el término en el que desemboca el método analítico: por un lado la *res cogi-*

www.cepchile.cl

tans (pensamiento, conciencia), por otro la *res extensa* (materia, extensión, cantidad). La gran disyunción que a partir de entonces reina sobre la cultura occidental remitió el cuerpo y el cerebro al reino de la Ciencia sometiéndolos a las leyes deterministas y mecanicistas, mientras que el Espíritu, refugiado en el reino de la Filosofía y de las Humanidades, vivió en la inmaterialidad, la creatividad y la libertad. Cuando los dos reinos se encuentran, se libra la gran guerra metafísica del Espíritu libre contra la Materia determinista, dándose en la actualidad esta batalla en el terreno de la relación espíritu-cerebro. Pareciera que estamos condenados bien sea a la disyunción, bien sea a la reducción (del espíritu al cerebro) o a la subordinación (del cerebro al espíritu). Y esta batalla es tanto más radical cuanto más hegemónica y reductora es cada una de estas nociones.

No es extraño que el objeto de estudio sea el mismo, pero se hace desde enfoques tan diametralmente opuestos y desde perspectivas tan heterogéneas que pareciera que nada tuvieran en común. Así por ejemplo, en mis clases de Antropología filosófica abordo la sensación y la percepción, y me detengo en la consideración del significado del mundo de la luz, del color y el sonido, captados por los sentidos y recreados a través de la pintura, la escultura y la música. Las sensaciones, colores y sonidos están cargados de significado humano y apuntan a sentidos que están más allá de las funciones estrictamente biológicas, tal como lo refleja el lenguaje ordinario. Decimos que una persona "tiene buen gusto", "olfato político", que es pesado o "pegote"; a su vez, el color azul transmite serenidad y calma, la tuba es un sonido arcano y profundo, el amarillo es centrífugo y la trompeta estridente, etc... Al frente, en el Edificio de Ciencias, respecto de lo mismo, se habla de afectores, efectores, nervio óptico y transmisión vía medula espinal, medio ondulatorio, aéreo o acuoso.

Hasta hace poco cabía una política de desarrollos paralelos y de reinos separados. Así el filósofo desde la falsa cúspide de abstractas ideas globales veía como inofensivos los experimentos desarrollados por los laboriosos científicos experimentales; a su vez, el científico consideraba arrogantes, abstrusas, bizantinas y, sobre todo alejadas de la realidad, las reflexiones filosóficas. Hoy tal disyunción y pacífico desarrollo en paralelo ya no es posible. Es que el científico y la dinámica de su investigación le lleva a desembocar y, por así decir, precipitarse en enormes cuestiones filosóficas acerca de qué es la vida, el pensamiento, la naturaleza, el cuerpo, y, a su vez, el filósofo no puede olímpicamente prescindir, refugiado en sus estéticas deducciones lógicas, del enorme y valiosísimo caudal de información proveniente de las ciencias particulares.

www.cepchile.cl

El empleo del método analítico ha hecho posible el surgimiento de las ciencias positivas, pues le ha permitido aislar una dimensión de la realidad para someterla a un análisis específico y separado. Así el psicólogo atenderá a la dimensión psicológica, el biólogo a los aspectos orgánicos, el sociólogo a las cuestiones sociales y culturales, el economista estudiará la incidencia de los factores económicos, y así sucesivamente con respecto a las demás ciencias. La ciencia legitima esta abstracción de los diversos aspectos de la realidad al implementar una metodología propia y específica para el análisis. La compleja y unitaria estructura de la realidad, y en concreto el hombre y sus diversas dimensiones integradas unitariamente, es asaltada desde los diversos flancos abiertos por cada una de las ciencias y su específica perspectiva.

El paradigma de la simplificación, como lo ha llamado el sociólogo Edgar Morin[1], conduce o bien a la disyunción o a la reducción. En virtud de lo primero el pensamiento científico pone en disyunción realidades inseparables sin poder considerar su vínculo. Por momentos no disponemos de un instrumental adecuado para apreciar la complejidad de lo real, tanto más cuando hay algunos que se empeñan en levantar acta de defunción respecto de la metafísica. Esta disyunción ha enrarecido las comunicaciones entre el conocimiento científico y la reflexión filosófica. Pero no sólo esto, el principio de disyunción ha aislado radicalmente entre sí a los tres grandes campos del conocimiento científico: la Física, la Biología y las ciencias del hombre. Y cuando se quiere evitar la disyunción y se intenta asociarlas e integrarlas, no raramente se incurre en la otra manifestación de la simplificación: el reduccionismo. Este consiste en la explicación de lo más complejo a partir de lo menos complejo; normalmente se reduce lo biológico a lo físico-químico y lo antropológico a lo biológico. Por la disyunción se separa lo que está ligado, por la reducción se unifica y reduce lo que es distinto y diverso.

Gracias al método analítico que aísla, separa, desune, reduce a la unidad, mide, la ciencia ha descubierto tanto la célula, la molécula, el átomo, la partícula, como la gravitación, el electromagnetismo, el quántum de energía y la escritura del ADN. Sin embargo, las estructuras de estos saberes están disociadas entre sí. La física ya no llega a comunicarse ni siquiera consigo misma pues está dislocada entre micro-física y cosmofísica, y mientras tanto el hombre se desenvuelve en el terreno intermedio entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande donde sigue siendo válida la física clásica. A su vez, el hombre de las ciencias humanas, de

[1] Cfr: Morin, Edgar: *Introduction a la Pensée Complexe*, 1990 (trad. al castellano, editorial Gedisa, 1994).

www.cepchile.cl

la conciencia y de la libertad, es un espectro suprafísico y suprabiológico. No tenemos una visión unitaria e integrada del hombre sino fragmentaria y dislocada por provenir de distintos enfoques; visión desmigajada entre las disciplinas, pulverizada entre heterogéneas perspectivas.

La reducción, la simplificación, han sido métodos heurísticos. Así, por ejemplo, ha sido preciso simplificar, es decir, poner entre paréntesis el problema del sujeto para no ver más que el objeto; ha sido preciso aislar el objeto estudiado del sujeto que lo concibe y de su entorno. Hay que reconocer, como hemos dicho, que esta simplificación, esta reducción y esta disyunción han conducido a progresos fabulosos, puesto que la obsesión por lo Elemental, por la Ley Simple, han llevado al conocimiento de la molécula, luego del átomo, y luego de la partícula. Por otra parte, por método y provisionalmente, podemos aislar un objeto de su entorno, pero, por método también, no es menos importante considerar que los objetos, y sobre todo los seres vivientes, son sistemas abiertos que sólo pueden ser definidos ecológicamente, es decir, en sus interacciones con el entorno, que forma parte de ellos tanto como ellos forman parte de él. Los efectos conjugados de la superespecialización, de la reducción y de la simplificación, que han producido progresos científicos incontestables, conducen hoy a la dislocación del conocimiento científico en imperios aislados entre sí (Física, Biología, Antropología), los cuales sólo pueden volver a unirse de modo mutilado por la reducción de lo más complejo a lo más simple o por vanos y vagos esfuerzos interdisciplinares.

Se asegura que el aumento informacional y la heterogeneidad de saberes hacen imposible toda articulación unitaria. A toda persona se le convence que la época de Leonardo o del renacimiento ya irremediablemente quedó atrás y que ahora es imposible tener una visión unitaria del hombre y del mundo. El especialista debe marginar las cuestiones fundamentales por generales, vagas, difíciles, abstractas y no operacionales. ¿Qué es el hombre?, ¿qué es el mundo?, ¿qué es el hombre en el mundo?, son preguntas que el científico remite a la filosofía, y ya se sabe lo elitista que es en sus abstrusas especulaciones, o a la religión, plagada de mitos o de respuestas poéticas pero racionalmente insatisfactorias. Sistemáticamente se dejan de lado las cuestiones decisivas de índole filosófica, y, a lo más, a la edad de retirarse, se tolera que los grandes dignatarios de las disciplinas científicas adopten cierta altura meditativa.

Esta situación actualmente es insostenible. El científico desemboca en agudas cuestiones filosóficas y frecuentemente carece de preparación y rigor para enfrentarlas de un modo que no sea unilateral, unidimensional o reduccionista. Actualmente nos encontramos en un momento decisivo en

www.cepchile.cl

que el hombre dispone de tal poder sobre los resortes originarios de la vida, que la visión que se tenga del hombre será decisiva para el futuro de la humanidad. Este poder es aún más radical y afecta más íntimamente al hombre que el que dispuso hace cincuenta y cinco años con el dominio de la energía atómica. Este dominio ya no afecta sólo a la estructura íntima de la materia, sino al hombre mismo en su organismo y en su mente. Pronto alcanzaremos la posibilidad de manipular y configurar a cualquier hombre tanto en su autonomía reproductora —el gen— cuanto en su autonomía individual —el cerebro. Constituye una retroacción del espíritu sobre las condiciones físico-químico-biológicas que lo hacen posible. Esta posibilidad representa un evento capital en la historia de la humanidad y de la vida entera. El control de nuestras determinaciones naturales a partir de nuestras aptitudes espirituales y nuestras finalidades culturales, no sólo promete perspectivas esperanzadoras y exaltantes —como lo son las terapias génicas y el remedio a carencias bioquímicas—, sino que asimismo, de no existir una adecuada visión acerca de la naturaleza del hombre, prepara eventualidades terroríficas. Las discusiones en torno a la clonación son sólo un preámbulo y un tímido anuncio de las eventualidades que nos pueden sobrevenir. Y mientras tanto, sigue dándose una práctica de investigación científica fundada en conocimientos parciales, atomizados, unidimensionales e ignorantes de la complejidad del todo cuyo conocimiento sería necesario para guiar la acción. Abruptamente se desemboca en problemas filosóficos de gran envergadura: qué es la vida, cómo se interrelacionan mente y cerebro, qué actitud adoptar frente a armamentos biológicos, químicos y ecológicos, frente a la experimentación en el ser humano y la recombinación del ADN, la inseminación artificial y los bancos de esperma, la modificación, modelaje y control del comportamiento humano, y un largo etcétera, que golpea la conciencia de nuestra ciencia y de nuestros científicos. Por todas partes surgen voces acerca de la misión de la Bioética, que no dejan de clamar, con más o menos solidez filosófica, que es necesario aprender a transitar por caminos de sabiduría antes de explotar por los aires o introducir mutaciones impredecibles e incontroladas. El ideal ilustrado y ya presente en la aurora de la Modernidad "ser dueños y poseedores de la naturaleza", ha permitido grandes desarrollos y el definitivo despegue de la ciencia experimental, pero a la vez, y cada vez lo apreciamos con más claridad, ha conducido a violencias destructoras y daños irreparables sobre la complejidad viviente, que retroactúa de manera perjudicial y violenta sobre la esfera humana misma. Más que nunca este inédito poder sobre la vida nos debe llevar a una defensa de la vida, a una protección de toda vida, y cuánto más, de toda vida humana.

www.cepchile.cl

Sí, es mucho lo que le debemos al método analítico. El surgimiento y desarrollo de las diversas ciencias, la consolidación de un especialismo sin cuya consolidación no es posible el progreso en el saber, la adopción de diferentes metodologías de acuerdo a las distintas perspectivas que cabe adoptar frente a la realidad. Sin embargo, debemos reconocer que su empleo indiscriminado ha traído consecuencias nocivas ulteriores que sólo a fines del siglo XX se empiezan a revelar de modo más manifiesto. Quizás podemos decir, siguiendo a Leonardo Polo[2], que el malestar de nuestro tiempo se origina en el empleo abusivo del método analítico, o para ser más exactos, en las respuestas exclusivamente analíticas a problemas que no lo son. El método analítico es el adecuado para aquellas realidades compuestas de partes y cuyo todo se obtiene por la suma de las mismas. Una máquina, por ejemplo, puede considerarse por partes porque está hecha de partes, por acoplamiento de piezas. El planteamiento analítico es el adecuado al modo de ser de la materia y de las máquinas, pero no para el estudio de los organismos vivos en el que todo está interconectado con todo y todos los factores y dimensiones de la realidad son pertinentes. Sin embargo, la formación que recibe un médico es irremediablemente analítica. El paciente es derivado de especialista a especialista porque ellos han sido formados analíticamente en su especialidad. Muchos médicos se dedican a solucionar los problemas que plantean otros médicos y no están capacitados para entender comprensivamente al enfermo. En este sentido me parece que la medicina es útil cuando el organismo tiene la capacidad de resolver por sí mismo los efectos secundarios que provoca la acción médica. Aquí ha aparecido un concepto interesante y creo conveniente detenerme en él: los efectos secundarios o efectos perversos. Se pregunta Leonardo Polo: "¿No será la nuestra una situación en la que nos topamos con un gran número de efectos secundarios a los que, a su vez, tratamos de dar solución analíticamente? ¿No explica esta inhabilidad el desencanto moderno?"[3].

El tratamiento analítico de asuntos humanos es al menos arriesgado: provoca más problemas que los que resuelve. Pero, ¿en qué consiste esta proliferación de efectos secundarios que explican el creciente desencanto y escepticismo ante la acción humana? Pongamos otro ejemplo, ya no de índole médica, para asegurarnos que se entiende el concepto de efecto secundario. El economista sabe cómo reducir la inflación, ha sido entrenado para ello, controla las variables económicas que la producen y puede idear las estrategias y los instrumentos adecuados para reducir la

[2] Cfr.: Polo, Leonardo: *Quién es el Hombre*: *Un Espíritu en el Tiempo*, 1991.
[3] Polo, Leonardo, *Quién es el Hombre*..., 1991, p. 45.

www.cepchile.cl

inflación que, según muchos, es el principal y más dañino flagelo económico. Pero esa solución analítica —reducción a toda costa de la inflación— provoca efectos secundarios y perversos —contracción económica, fuerte desempleo, múltiples efectos sociales, familiares y políticos— que de efectos secundarios paulatinamente, y de hecho, deriven en principales. El efecto secundario deja de ser tal para convertirse en perverso y primario. Asimismo, hace algunos decenios el anhelo y meta común de los países era la industrialización a toda costa. Pero ese objetivo largamente acariciado trajo consigo todo un elenco de efectos secundarios que, al poco andar, fueron principales: contaminación de las aguas y del aire, exigencias cada vez más fuertes de calidad de vida, etc.

El médico, el economista, el psicólogo son formados analíticamente; esto es inevitable. Sin embargo, si se quiere afrontar la complejidad de los problemas actuales sin una mirada ciega y mutiladora debido a esa formación unidimensional, se deberá tener una mirada humanista sensible al arte, a la religión y a la filosofía, pero, por sobre todo, se deberá disponer de una adecuada formación metafísica. Sólo ella puede ser base sólida para una sana antropología y una coherente moral. "El hombre es una unidad que no se reconstituye partiendo de su análisis"[4], observa Leonardo Polo. Lo maravilloso del hombre radica en su integridad dinámica, en ser un fascinante microcosmos —como decían los antiguos— que recoge en sí todas las dimensiones de la realidad: física, química, biológica, psicológica, espiritual, social y cultural.

Esta maravillosa interrelación de todas las dimensiones presentes en el hombre ha sido puesta de relieve por Popper y Eccles al hablar de la interrelación entre el cerebro, mente y cultura y la mutua interconexión entre los tres mundos. La relación del espíritu con el cerebro no puede ser concebida simplemente como la del producto con el productor, del efecto con la causa, de lo emanado con lo emanante, puesto que el producto puede retroactuar sobre su productor, y el efecto sobre su causa. Todo ello indica una acción recíproca, un efecto mutuo, una causalidad circular. Y aún más, se debe introducir un tercer término, puesto que sin cultura, es decir, sin lenguaje, saber hacer y saberes acumulados en el patrimonio social, el espíritu humano no hubiera despegado y el cerebro del hombre se habría limitado a las computaciones de un primate de bajo rango. El espíritu que depende del cerebro, depende de otra forma de la cultura. La cultura es indispensable para la emergencia de la conciencia y el espíritu, y para el

[4] Ibídem, p. 48, "las diferencias del hombre son internas, tanto si lo consideramos somática como anímica y espiritualmente (...). El hombre es intimidad antes que composición", p. 48.

www.cepchile.cl

pleno desarrollo del cerebro. De este modo la unidualidad de mente y cerebro debe transformarse en trinidad: cerebro, mente y cultura. Lo fascinante de este problema que ha pasado a ser un punto de convergencia de diversas disciplinas (funcionalismo, psicología cognitiva, inteligencia artificial, neurociencia, neurolingüística, sistema de redes, cibernética, etc.) es que asocia en sí todos los niveles de aquello que llamamos realidad. Totalmente fisicoquímica en sus interacciones, totalmente biológica en su organización, totalmente humana en sus actividades humanas y conscientes. En ello lo notable es la inseparabilidad de todos los aspectos físicos, biológicos, psíquicos y espirituales. No hay actividad intelectual, delicadeza de sentimientos, no existe la menor intuición poética que no corresponda a interacciones moleculares y que no dependa de una química cerebral. Y a la inversa, es un hecho que el espíritu, sus ideas, sus concepciones de la vida, del mundo y del hombre, afecta al cerebro y, vía el cerebro, al organismo entero. Los males del espíritu pueden convertirse en enfermedades del cuerpo, producir el desplome del sistema inmunológico; la hipnosis puede desencadenar perturbaciones fisiológicas y somáticas; la autoeducación de la voluntad puede conducir a controlar el sistema respiratorio y los latidos del corazón en ciertas técnicas del yoga, y la sugestión puede provocar la curación e incluso la muerte. Por su parte, la ecología nos ha sensibilizado frente a la maravillosa interrelación de todas las cosas con todas las cosas. No deja de ser llamativo que la última y novísima de las ciencias positivas, la ecología, se haya constituido no por la reivindicación de una perspectiva específica acerca de lo real, sino con la pretensión de ser una síntesis de las diversas perspectivas de las ciencias positivas.

Está claro que el método analítico no es el indicado para el estudio de la complejidad de los vivientes y del hombre, pues no es capaz de percibir el complejo trenzado de causalidades circulantes y que mutuamente retroactúan entre sí. Cada vez estamos más conscientes de que una mínima alteración en la bolsa de Hong Kong puede repercutir fuertemente en Nueva York y producir un "crack" en Santiago; el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta en las antípodas.

Es difícil comprender el complejo trenzado de causalidades que dieron origen a una enfermedad, una actitud, una mentalidad. Sólo una filosofía metafísica, saber arquitectónico y ordenador por excelencia, puede arrojar algo de luz sobre esta complejidad. No se trata de volver a entronizarla como reina de las diversas ciencias; ya pagó caro por su excesiva arrogancia y suficiencia, y de reina pasó a ser la servil esclava de las ciencias, limitada a hacer análisis lógico del lenguaje de la ciencia, que pasaba a ser el único acceso serio a lo real. No se trata de buscar teorías

www.cepchile.cl

generales ni teorías unitarias, casi siempre abstractas, pobres e igualmente simplificadoras. Se trata de algo más sencillo y menos pretencioso: articular lo que está separado y volver a unir lo que está desunido. Se trata de ganar en humildad frente a la enorme riqueza de lo real y de lo creado. Se trata, por una parte, en darse cuenta de las grandes limitaciones en la formación universitaria y, por otra, en no cejar en el empeño por conquistar una formación más coherente, unitaria e integrada. Se trata de sustituir el modelo educativo, denunciado por Morin, basado en la disyunción, reducción y unidimensionalización, por uno que tenga en cuenta la distinción y conjunción, que permita distinguir sin separar o desarticular, asociar sin confundir, identificar o reducir. Como decía el adagio tomista para referirse a las relaciones que cabe establecer entre filosofía y teología: la clave está en unir sin confundir, distinguir sin separar.

Existe una falta de adecuación cada vez mayor, profunda y grave entre una formación universitaria que proporciona unos saberes especializados, discordes, troceados, encasillados en disciplinas, y por otra parte unas realidades o problemas que cada vez son más multidimensionales, multidisciplinarios, transversales, globales e incluso planetarios. La hiperespecialización exigida por el desarrollo actual de la ciencia, el enclaustramiento en la propia disciplina y en su exclusiva metodología, vuelve ciego tanto para lo global como lo esencial. Se hace difícil captar "lo que está tejido junto", es decir lo complejo, según el sentido original de este término. Acierta Edgar Morin —y en esto también ha insistido Niklas Luhmann— cuando dice que "el desafío de la globalidad es pues al mismo tiempo un desafío de complejidad"[5]. Existirá complejidad mientras sean inseparables los componentes diferentes que constituyen un todo (como lo económico, lo político, lo sociológico, lo psicológico, lo afectivo, lo ideológico) y haya un tejido interdependiente entre las partes y el todo y el todo y las partes.

De no mediar un cambio en la educación se abrirá una brecha cada vez más insalvable entre un saber exclusivamente reservado para los especialistas que dominan un lenguaje técnico-esotérico, apto para iniciados, cuantitativo y formalizable, y una abismal ignorancia que afectará a la

[5] Morin, Edgar: *La Mente Bien Ordenada*, 2000, p. 9. Más adelante añade: "Nuestra civilización y, por consiguiente, nuestra enseñanza han privilegiado la separación en detrimento de la unión, el análisis en detrimento de la síntesis. Unión y síntesis permanecen subdesarrolladas en ellas (...). La psicología cognitiva demuestra que el conocimiento progresa principalmente menos por sofisticación, formalización y abstracción de los conocimientos particulares, que por aptitud en integrar esos conocimientos dentro de su contexto y su conjunto global. *A partir de entonces, el desarrollo de la aptitud para contextualizar y globalizar los saberes se convierte en un imperativo de la educación*" (pp. 29-30).

www.cepchile.cl

mayoría de los profanos. El conocimiento queda así entonces reservado a los expertos, cuya gran competencia en un campo acotado y cerrado se torna incompetencia cuando ese dominio se ve alterado por factores nuevos o modificado por influjos externos. Así mientras los expertos pierden la aptitud de concebir lo global y lo fundamental, el ciudadano medio pierde el derecho al conocimiento. En unos y en otros este debilitamiento de la perspectiva global conduce al debilitamiento tanto del sentido de responsabilidad como de la solidaridad, ya que por una parte cada uno tiende a no ser responsable más que de sus tareas especializadas, y por otra, nadie percibe ya sus lazos orgánicos con su ciudad y los demás ciudadanos. No cabe asombrarse entonces del desinterés creciente por la política debido a la apropiación por parte de los expertos, especialistas y técnicos de gran número de problemas vitales y esenciales en los que los ciudadanos deberían estar implicados y participar si no se quiere incurrir en déficit democrático.

2. La artificial separación entre ética pública y ética privada

No cabe concebir al hombre como un átomo aislado. Requiere de la cultura para el pleno despliegue de su naturaleza esencial[6]. Necesita de educación y del apoyo de una comunidad tanto para poder hablar como para el pleno florecimiento de su ser y de sus posibilidades. Nunca se insistirá lo suficiente en la postura aristotélica que dice que sólo en un determinado tipo específico de contexto social pueden desarrollarse las virtudes intelectuales y morales de los seres humanos. Yo soy hermano, primo, nieto, miembro de esta familia, de este pueblo, de esta tribu. Estas no son características que pertenecen al ser humano accidentalmente, características de las cuales debo ser despojado para descubrir mi verdadera identidad. Son parte de ella, de mi sustancia, definen por lo menos parcialmente, y algunas veces totalmente, mis obligaciones y deberes. El hombre aislado y la sociedad sustantiva son abstracciones sin realidad: lo que realmente existe es un conjunto solidario de personas integradas en ámbitos comunitarios de diverso nivel y carácter. Son las *esferas de justicia*, de las que ha hablado Michael Walser, según las cuales las reglas de la justicia se deben aplicar de manera diversa según el ámbito de que se trata. Será el tránsito arbitrario o interesado de una esfera a otra lo que resulta perturbador y muchas veces origen de corrupción. Por ello es necesario distinguir

[6] Cfr.: Peña Vial, Jorge: "Diversas Acepciones de la Naturaleza en su Relación con la Cultura", 2000, pp. 25-57.

www.cepchile.cl

el ámbito público del privado, ya sea porque conseguir ventajas públicas en razón de conexiones privadas es inmoral, como también lo es aprovecharse de un puesto público para conseguir beneficios particulares. Pero si bien esta distinción es necesaria, la profunda y compleja imbricación de lo individual y social nos lleva a pensar que escindir en la ética lo individual-privado de lo social-público, si bien es una distinción de ámbitos conveniente, el dinamismo vital de la ética lo excluye y es del todo artificial y contrario a la realidad.

Alejandro Llano sostiene en el prólogo de *Humanismo Cívico,* uno de los libros más sólidos e iluminadores de filosofía política que me ha tocado leer, que el individualismo posesivo de la "primera modernidad" ya no da más de sí. Su fijación en los ejes *Estado/mercado, Estado-nación/ individuo*, y *público/privado* arrojó excelentes resultados en sus primeros pasos hacia la búsqueda de una mayor igualdad, de una competitividad más dinámica y de un sentido universal de ciudadanía. Pero es necesario un cambio de paradigma. "Un nuevo planteamiento de esta índole ya no puede seguir ateniéndose —si es que alguna vez lo hizo, escribe Llano— a la *generatio aequivoca* de tipo mandevilliano, según la cual las virtudes públicas procederían, como por arte de magia, de los vicios privados. Es el propio concepto de virtud, en buena parte rehabilitado por la mejor ética actual, el que impide tal escisión entre el sujeto y el objeto, el individuo y la comunidad, lo privado y lo público, que en realidad se imbrican y sólo artificialmente cabe distinguir. Lo mismo que ya no resulta viable, en general, la separación entre la moral privada y la ética pública, aunque no convenga caer en confusiones que llevarían al relativismo o al moralismo (...). La moral o ética constituye una unidad vital que no admite contraposiciones duales, aunque sea correcto —e incluso necesario— distinguir entre las diversas 'esferas de justicia', según la propuesta de Michael Walser"[7]. Ya son abundantes las desafortunadas consecuencias que lleva consigo la ruptura teórica y práctica entre la moral personal y la ética pública.

El Estado, amparado en un agnosticismo axiológico no exento de determinados fundamentos filosóficos que hacen de su presunta neutralidad una ilusión, impide que los ciudadanos adopten decisiones de relevancia pública acerca de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Se permite que esas elecciones vitales, asépticamente, sean ejercidas en el ámbito privado porque el espacio público debe estar regido por un neutralismo que sólo admite normas abstractas justificadas de un modo puramente procedimental. El liberalismo exige este desarraigo y requiere de esta escisión que, inevitablemente, es un plano inclinado hacia un creciente individualismo.

[7] Llano, Alejandro: *Humanismo Cívico*, 1999, p. 10.

www.cepchile.cl

Sólo se aspira a un consenso fáctico dado que las plurales concepciones de la vida, se piensa, llevan a un antagonismo insalvable en el que no cabe una discusión intelectual conducente a un consenso racional. Esta tajante separación se traduce en que la única voz autorizada para abordar el ámbito de lo público sea la de los expertos —los únicos preparados para afrontar las complejidades de una sociedad altamente compleja y tecnificada— y sistemáticamente sean marginados el ciudadano de la calle y el hombre corriente. Ante este estado de cosas no puede extrañar la poca participación ciudadana en la cuestión pública y su desencanto por la política. Tampoco puede extrañar, dado que esta artificial separación así lo posibilita, la omnipresente corrupción que actualmente llena de desasosiego y perplejidad a nuestras democracias. Todo indica que la corrupción no es casual ni accidental cuando se separa la ética pública de la ética privada. El esfuerzo por silenciar toda discusión moral, filosófica y religiosa del ámbito público, en vistas a un consenso instrumental y fáctico, ha empobrecido el discurso político y erosionado los recursos éticos y cívicos que pudieran permitir una mayor participación ciudadana que toda democracia está llamada a promover. Alejandro Llano se rebela frente a este estado de cosas cuando escribe: "Mi envergadura moral se ve dramáticamente aplanada cuando mis convicciones éticas sólo me sirven para andar por casa, mientras que los empeños de mayor aliento —las 'cosas serias'— han de ser gestionadas por personas o entidades formalmente legitimadas para representar al interés general. Y lo que las legitime, naturalmente, no habrá de ser su supuesta categoría ética, porque entonces recaeríamos en los laberintos divergentes de los sentimientos morales intransferibles, de las concepciones filosóficas o religiosas o, por decirlo de una vez, en la maraña del irracionalismo personal. Lo que justifica a las instancias oficiales y a sus correspondientes expertos no es la ética sino la técnica: la técnica política necesaria para escalar el poder en una sociedad mediática, podríamos decir malévolamente; pero también podríamos decir con mayor cordura: la técnica jurídica y la técnica económica, los conocimientos aplicados propios de la tecnoestructura. Estamos ahora en el ámbito más restringido de la *razón pública*, regida por los principios de neutralidad y eficacia"[8]. Creemos que un ámbito público sin religión, sin filosofía o sin convicciones morales es impensable porque forma parte del trasfondo cultural de la sociedad civil. Y la política que intenta extirpar esas raíces, en aras de obtener una aséptica neutralidad estatal, suscribe una concreta y bien determinada filosofía, moral y religión. Los ciudadanos dispondrán de energía, iniciativa y creati-

[8] Ibídem, pp. 28-29.

www.cepchile.cl

vidad cuando no cedan en su esfuerzo por la búsqueda del bien y la verdad que los perfecciona, y sabiendo resistir a las múltiples presiones que esa búsqueda implica derivadas del afán de poder, el interés económico y la manipulación persuasiva de los medios de comunicación que terminan por desfigurarla.

Esta disyunción y separación que denunciamos está íntimamente asociada a otra más profunda y originaria, a saber, la separación, también artificial, entre *poiesis* y *praxis*, entre lo técnico y lo ético. Nuevamente, si bien cabe distinguirlas no conviene separarlas. No sólo interesa hacer buenos zapatos, sino preguntarnos qué le acontece al zapatero cuando hace zapatos con arte y oficio, si crece como persona en lo cognoscitivo, moral y espiritual. La *praxis* no remite a la perfección de la obra externa, sino a la vida lograda del agente, a su incremento en su dignidad humana y personal. Ello requiere el despliegue de las virtudes tanto intelectuales y morales informadas por el amor, es decir, una rectitud de vida que no se limita unilateral y restrictivamente a la mera honestidad económica, al parecer único criterio objetivo según el cual se juzga la honradez de la ética pública. En absoluto se trata de sugerir una especie de moralismo o reducción de la política a la ética, pero sí considerar que la pérdida del alcance político de la ética, con la privatización del bien que ello implica, es el reverso de la desmoralización de la política, de su tecnificación y pragmatismo crecientes que cada vez más conducen a formas intolerables de insolidaridad. Se trata de evitar tanto una concepción individualista de la ética como una interpretación exclusivamente técnica de la política. El lema "En tu vida privada haz lo que quieras siempre que no entorpezcas los mecanismos 'objetivos' del buen funcionamiento técnico-económico" se ha mostrado simplista e irreal, un artificial reparto de territorios. Además un mínimo realismo ético nos indica que muchos individuos que dicen hacer lo que quieren —por las dependencias y sometimientos que implica— no es lo que en el fondo ellos mismos "quisieran querer", sobre todo cuando los criterios de actuación proceden de una emotividad desbordada o de impulsos vitales que distorsionan todo discernimiento racional. Es hora de darnos cuenta de que la ética no es sólo un asunto que concierna a la conciencia individual como plantea el deontologismo, ni que sea un mero procedimiento racional para resolver conflictos de intereses buscando el beneficio de la mayoría, como sostiene el pragmatismo y el consecuencialismo. No es el reflejo de la conciencia individual ni el resultado de un consenso dialógico ni el fruto de un cálculo de beneficios. La ética se hace vida a través de las virtudes, apunta a bienes reales que, dado su fundamen-

www.cepchile.cl

to metafísico, tienen validez universal aunque se den diversas interpretaciones y no siempre se obtenga un acuerdo sobre tales bienes.

Si bien es necesario distinguir ambos dominios, los gobernantes de un pueblo o los líderes de una empresa no pueden taparse los ojos y olímpicamente ignorar lo que acontece en el diario vivir de sus subordinados respecto a su calidad de vida. Es por ello que existen campañas públicas relativas a la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, el Sida, la violencia doméstica, embarazos prematuros, etc. Incluso pareciera que cada vez se inmiscuyen más en ámbitos estrictamente privados, con lo que se demuestra que la pretendida separación es parcial cuando hay en juego convicciones ideológicas y políticas de por medio. Dada la mutua interconexión de las virtudes entre sí, no es posible establecer fronteras bien delimitadas entre las virtudes que se despliegan en el ámbito privado (templanza, por ejemplo) de las que parecen encontrar su ámbito propio en el dominio público. Además no raras veces la corrupción pública —la económica que todos unánimemente rechazan— ha surgido de la necesidad de atender a los cuantiosos gastos que demandaban los *vicios privados*. Con humor y sensatez lo ha planteado Alejandro Llano cuando escribe: "En la razón pública permanece la convicción de que no es políticamente fiable aquel que no es capaz de llevar una vida personal moralmente digna. El vicio de mentir no se distiende en dos niveles, el privado y el público, sino que consiste en un hábito unitario que se ejerce allí donde salta la oportunidad de obtener un beneficio personal o colectivo a base de ocultar la verdad. Como saben los anglosajones, no es prudente elegir como gobernador a quien no le compraríamos un caballo o un coche usado. Quien abusa sexualmente de los más débiles en la oscuridad no se abstendrá de atropellar económicamente a quienes están bajo su dominio en el quehacer profesional o político. El que es un dogmático en su vida intelectual y recaba orgullosamente para sí el tener toda la razón, suele ser un fanático o un sectario en la actuación pública, donde no admite que otras personas o grupos puedan haber llegado a enfoques más ciertos o a soluciones mejor pensadas"[9].

Los mejores clásicos del pensamiento democrático, contrariamente a la fábula de Bernard de Mandeville (vicios privados, virtudes públicas), especialmente Tocqueville, establecen la estrecha conexión que existe entre la pervivencia del auténtico régimen democrático y la calidad ética de los miembros de las comunidades que lo componen. Llano incluso asevera que la caracterización más radical de la democracia estriba en comprenderla como "un sistema político que se basa en la relevancia social de las

[9] Ibídem, p. 95.

www.cepchile.cl

virtudes morales (...). Lo que resulta utópico es, más bien, intentar lograr una vida de participación política y solidaridad ciudadana en un Estado constitucional de derecho sin apelar a las virtudes personales, que constituyen el único resorte real para llevar a la práctica un programa político cuya exigencia corre pareja con su excelencia"[10]. No puede aceptarse tranquilamente que lo privado sea sinónimo de lo "privativo", carente de misión social, recortada en su alcance y únicamente al servicio de sus intereses particulares y desentendiéndose del bien general. En ese caso lo privado pasaría a ser sinónimo de exclusivos intereses egoístas y dichas actividades carecerían de sentido y estarían privadas de dignidad, a la vez que se transfiere únicamente al Estado el monopolio de la benevolencia.

Si bien cabe distinguir la ética pública de la privada, el dinamismo y la unidad de la conducta ética hacen imposible distinguir entre las virtudes que se adquieren y ejercitan de modo privado y las que se adquieren y ejercitan de modo público. No se sabe bien dónde establecer la frontera y si es necesario establecerla. Es que las virtudes no pueden adquirirse en solitario ni tampoco cabe desarrollarlas en una estricta privacidad. Resulta imposible establecer compartimentos estancos en nuestro comportamiento. La copa de vino bebida cada tarde en la oscuridad de la bodega o en el rincón de un bar, acaba dejando un rastro en la mirada, los ojos y el aliento. La diaria lectura de obras literarias valiosas termina por manifestarse de buenas a primera en el inicio de un diálogo por trivial que sea. La prepotencia en el trabajo se delata al interior de la familia como los hijos pueden indicarlo. Para no referirnos a la asociación y vínculo causal que constantemente establecen ciertas revistas empeñadas en ventilar sórdidas intimidades, entre la infidelidad conyugal y sus clandestinos encuentros con la secuencia implacable de corrupción política que fatalmente parece conducir a esas mismas personalidades públicas. Por eso concluirá con sabiduría Alejandro Llano: "Lo más grave del neoliberalismo ideológico dominante no son los defectos de su funcionamiento o las quiebras de su engranaje teórico. Lo verdaderamente preocupante es que en su seno se ha consagrado un tipo de vida civil que excluye, por principio, la tensión hacia el perfeccionamiento humano de las personas que componen los entramados sociales. Tal perfeccionamiento, de acuerdo con el humanismo cívico, sólo es posible por la participación en la vida pública, es decir, por el compromiso personal y comunal con unos bienes que a todos nos pertenecen y cuyo cultivo a todos nos concierne. Tal participación es mínima, superficial y esporádica, para la mayor parte de los ciudadanos. Parece que casi

[10] Ibídem, p. 101.

www.cepchile.cl

nadie deja ya de resignarse a que la cosa pública sea gestionada por una elite, paradójicamente mediocre, de políticos profesionales, burócratas asentados y técnicos en cuestiones colectivas"[11].

3. Anhelo de unidad

Apreciamos que por todas partes existe un anhelo de unidad que integre estas dimensiones artificialmente separadas ya sea por el análisis o por un pretendidamente pacífico reparto de territorios. En el campo del saber la metafísica y la teología, y en otro sentido el arte, han ejercido una función jerarquizadora e integradora de los diversos saberes. Se anhela reparar las rupturas entre ciencia, cultura y sabiduría, entre *praxis* y *poiesis*, técnica y ética, arte y moral. No se ve por qué deben estar en permanente conflicto ni darse continuas relaciones conflictivas entre la verdad, el bien y la belleza. No hay acción educativa posible ni propuesta de ideales magnánimos y valiosos sin coherencia ni unidad de vida. Ésta se fundamenta en la congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se es. En el campo específico de la ética, la ética de las virtudes, la ética de los bienes y la ética de normas discurren por diversas vías y es del todo conveniente una síntesis integradora. En el ámbito psicológico la persona está llamada a buscar una identidad e integración unitaria entre sus diversos dinamismos si no quiere dispersarse en una multiplicidad de átomos y variados "yoes".

En este sentido la solución del problema de la unidad interior del hombre no es el *desdoblamiento*, sino el sacrificio. Como ha señalado Guitton, el hombre actual se ve disociado y desdoblado en ámbitos dispares cada uno con distintas lógicas y exigencias (como profesional, deportista, padre ejemplar, amante ocasional, etc.) y no unificado a través del sacrificio y la subordinación de la parte mediocre y egoísta de nosotros mismos a la parte señorial y noble. Esta unidad de la que hablamos impone una subordinación de los planos y de los órdenes, pero esa subordinación, que implica sacrificio, procura la paz y obtiene la unidad. Cito a Jean Guitton: "El hombre moderno que se ve desdoblado, es en muchos casos un ser disociado y no sacrificado. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre disociado se mueve entre dos corrientes eléctricas de signo contrario, pero que actúan en el mismo plano del ser. Y el hombre sacrificado se ve probado, pero unificado, ya que los dos polos de su ser están situados en planos y niveles distintos, uno de ellos subordinado al otro (...). Si me desdoblo,

[11] Ibídem, pp. 188-189.

www.cepchile.cl

entonces acepto mis infidelidades sucesivas: están ligadas a unos instantes, a unos episodios, a unas situaciones, a unas coyunturas de mi vida, con las que yo no hago cuerpo, con las que (mejor dicho) yo no hago alma, porque no estoy conectado a ellas (...). Fidelidad es unidad sentida, experiencial. Sí, el hombre es disponible; pero el mejor uso que puede hacer de esta disponibilidad, si quiere acabar con su división interior, es convertir la disponibilidad en fidelidad a través de ciertos ejes que puede escoger (una mujer, un país, una fe)"[12].

El modo cómo se logra esta unidad interior y esta coherencia en la acción será explicado de manera diversa por Aristóteles y por San Agustín. Sin embargo, no tenemos virtud si no se da una transformación de la fuente de donde manan los deseos y las pasiones del alma. Estos deseos fortalecidos y llevados a su plenitud son las virtudes. "Actuar virtuosamente no es, como Kant pensaría más tarde, actuar contra la inclinación; es actuar desde una inclinación formada por el cultivo de las virtudes"[13]. Las virtudes son el fortalecimiento de esas tendencias naturales y su adecuada integración en la totalidad de la persona.

La vida de cada cual tendrá consistencia y continuidad si la persona conquista cierta unidad al interior de sí misma que le asegure permanencia e identidad. Dicho en términos clásicos, si cultiva las virtudes, que son precisamente las que introducen orden y jerarquía tanto al interior del hombre como en sus relaciones con los demás. Esta unidad otorgada por el cultivo armonioso y equilibrado de las virtudes impedirá el desdoblamiento y fragmentación al interior de sí mismo y el quedar a merced de tendencias contrapuestas como acontece cuando no se da una adecuada ordenación y jerarquización de las mismas. El comportamiento virtuoso y racionalmente dirigido conduce al fortalecimiento de las tendencias, a su estructuración e integración unitaria, tal como lo describieron Platón en el mito del carro alado y Aristóteles en la *Ética a Nicómaco.*

El hombre dispone de una naturaleza teleológica orientada a las virtudes; éstas constituyen la máxima actualización de las virtualidades presentes en su naturaleza[14]. Ellas no son un imperativo externo, sino que es una exigencia interna de la misma naturaleza encaminada a su cabal desarrollo y a su máxima plenitud. En este sentido el deber no debe ser considerado como algo extrínseco, sino como guía y pauta de orientación

[12] Guitton, Jean: *Lo Impuro*, 1992, pp. 145-146, 147.

[13] MacIntyre, Alasdair: *Tras la Virtud*, 1987, p. 189.

[14] Cfr.: Peña Vial, Jorge: "Naturaleza Teleológica: Articulación entre Ser, Deber Ser y Virtud", 1998, pp. 467-479. Como la noción de naturaleza es algo equívoca cfr. también Peña Vial, Jorge: "Diversas Acepciones de la Naturaleza en su Relación con la Cultura", 2000.

www.cepchile.cl

para el pleno desenvolvimiento del hombre. Por eso, entre otras cosas, la ética no puede limitarse a ser una "ética de mínimos" ya que para eso está el Derecho. La ética procura el fortalecimiento intrínseco y real del hombre, y esto se logra por mediación de las virtudes. A su vez, como dirá Leonardo Polo, "las normas ellas mismas también son amables, y así lo dice Tomás de Aquino, pero esto sólo se sabe cuando se tienen virtudes"[15].

El problema de la unidad interior del hombre requiere de un tipo de ascesis que los incultos —los que no quieren cultivarse ni someterse a ningún tipo de aprendizaje— no quieren ni pueden desear. Aristóteles decía que "los que están involucrados en el aprendizaje no están jugando; el aprendizaje viene acompañado por el dolor"[16]. La conquista de cierta integración unitaria de las tendencias no es algo dado sino que es fruto del esfuerzo personal. En este sentido, cabe el desdoblamiento interior como consecuencia de tendencias que pugnan entre sí arrastrando a la persona a direcciones contrarias (placer-deber, generosidad-egoísmo, los otros-el yo, lo racional-pasional) o la conquista de la unidad a través del sacrificio y jerarquización de las tendencias.

La conquista de esta unidad y armonía no viene facilitada por estas escisiones, fisuras y segregaciones de los distintos ámbitos que hemos considerado, que si bien cabe distinguir, no conviene separar.

Bibliografía

Arana, Juan: *El Caos del Conocimiento: Del Árbol de las Ciencias a la Maraña del Saber*. Pamplona: Ed. Eunsa, 2004.

Aristóteles: *Política*, VIII, 1339 a 28-29.

Guitton, Jean: *Lo Impuro.* Trad. al castellano de Alfonso Ortiz García. Madrid: Ed. PPC, 1992.

Llano, Alejandro: *Humanismo Cívico*. Barcelona: Ed. Ariel, 1999.

MacIntyre, Alasdair: *Tras la Virtud*. Trad. al castellano de Amalia Valcarcel. Barcelona: Ed. Crítica, 1987.

Morin, Edgar: *Introduction a la Pensée Complexe.* París: ESF Editeur, 1990. [Traducción al castellano de Marcelo Pakman, Barcelona, Ed. Gedisa, 1994.]

Morin, Edgar: *Ciencia con Conciencia*. Barcelona: Ed. Anthropos, 1996.

Morin, Edgar: *La Mente Bien Ordenada*. Trad. al castellano de María José Buxo-Dulce Montesinos. Barcelona: Ed. Seix-Barral, 2000.

[15] Polo, Leonardo: *Ética: Hacia una Versión Moderna de los Temas Clásicos,* 1996, p. 114. Leonardo Polo ha definido al hombre en términos de donación y de crecimiento irrestricto como "perfeccionador perfeccionable": "Este carácter del ser humano según el cual puede ir a más o a menos; puede desvitalizarse o aumentar su vitalidad (...). Lo que aumenta la vitalidad humana, eso es ética. Lo que disminuye la vitalidad humana, eso es antiético, malo" (ibídem, p. 86).

[16] *Política*, VIII, 1339 a 28-29.

www.cepchile.cl

Llano, Alejandro: *El Diablo Es Conservador*. Pamplona: Ed. Eunsa, 2000.

Peña Vial, Jorge: "Naturaleza Teleológica: Articulación entre Ser, Deber Ser y Virtud". En *Sapientia*, Vol. LIII, 1998, fasc. 204.

Peña Vial, Jorge: "Diversas Acepciones de la Naturaleza en su Relación con la Cultura". En *Anuario de Filosofía Jurídica y Social*, Nº 18, 2000, Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social.

Polo, Leonardo: *Quién es el Hombre*: *Un Espíritu en el Tiempo*. Madrid: Ed. Rialp, 1991.

Polo, Leonardo: *Ética: Hacia una Versión Moderna de los Temas Clásicos.* Madrid: Unión Editorial, 1996. □

www.cepchile.cl

RAWLS Y EL LIBERALISMO*

Thomas Nagel

En este ensayo se intenta mostrar la contribución distintiva de John Rawls a la tradición liberal. Se destaca su fundamentación del pluralismo como valioso en sí y no como un mero *modus vivendi*, y su compatibilidad tanto con convicciones religiosas fuertes y ortodoxas como con filosofías más escépticas. Por otro lado, se subraya la prioridad que Rawls concede al mejoramiento de los más desfavorecidos como la única manera de justificar las desigualdades socioeconómicas**.**

THOMAS NAGEL. Profesor en la Facultad de Derecho de la New York University (NYU). Estudió y obtuvo un B.Phil., en Oxford y luego un doctorado en Harvard. Autor de diversos libros, entre ellos, *The Possibility of Altruism* (Oxford, 1970), *Mortal Questions* (Cambridge, 1979), *The View From Nowhere* (Oxford, 1986), *Equality and Partiality* (Oxford, 1991) y *The Last Word* (Oxford, 1997).

* Thomas Nagel, "Rawls and Liberalism", en Samuel Freeman (ed.), *The Cambridge Companion to Rawls* (© Cambridge University Press, 2003). Traducido y reproducido con permiso del autor y de Cambridge University Press.

I

La palabra "liberalismo" tiene diferentes significados para distintas personas. El término lo emplea actualmente en Europa la izquierda para fustigar a la derecha por profesar una fe ciega en el valor de una economía de mercado irrestricta y prestar insuficiente atención al importante papel que le cabe al Estado en la tarea de hacer realidad los valores de igualdad y justicia social. (En ocasiones este uso está marcado por las variantes "neoliberalismo" o "ultraliberalismo".) En los Estados Unidos, por otra parte, el término lo utiliza la derecha para fustigar a la izquierda por su apego no realista a los valores de igualdad social y económica, y por su excesiva propensión a utilizar el poder estatal para perseguir esos fines sacrificando la libertad y la iniciativa individuales. Así pues, los republicanos estadounidenses que censuran a los miembros del Partido Demócrata calificándolos de liberales sensibleros son precisamente el tipo de individuos a los que los socialistas franceses reprueban tildándolos de liberales desalmados.

Tanto el primero como el segundo de estos usos peyorativos diametralmente opuestos poseen algún grado de sustentación en la amplia tradición del liberalismo como un conjunto de movimientos e ideas de carácter político que comparten ciertas convicciones y discrepan respecto de otras. Un aspecto significativo de nuestra era es que actualmente la mayor parte del debate político en el mundo occidental tiene lugar entre distintas ramas de esta tradición. Sus grandes figuras históricas son Locke, Rousseau, Constant, Kant y Mill, y en el siglo pasado entre sus representantes intelectuales se han incluido Dewey, Orwell, Hayek, Aron, Hart, Berlin y muchos otros. Con la reciente expansión de la democracia el liberalismo ha adquirido importancia política en países de todo el mundo.

Rawls ocupa un lugar especial dentro de esta tradición, pues ha explorado y desarrollado sus fundamentos filosóficos llegando a profundidades sin precedentes —transformando de este modo la disciplina de la teoría política en nuestra era—, y ha sostenido una visión distintiva y marcadamente igualitaria que está reñida con muchas otras posturas en el ámbito liberal, aunque él la ve como una perspectiva que sigue las ideas básicas del liberalismo hasta su conclusión lógica.

Un indicio de la importancia de una teoría política es la vehemencia con que es atacada y la necesidad que experimentan sus oponentes de explicar sus discrepancias y de situarse en relación con ella. Rawls ha sido atacado implacablemente, y desde muchas direcciones, pues su teoría de la justicia posee el tipo de substancia real que genera intensos desacuerdos. Si bien el estilo de presentación es siempre moderado en vez de desafiante,

www.cepchile.cl

las visiones mismas son altamente polémicas. Por ejemplo, no representan la corriente de opinión liberal que prevalece hoy en día en los Estados Unidos.

En pocas palabras, lo que Rawls ha hecho es combinar los muy sólidos principios de la igualdad social y económica vinculados al socialismo europeo con los igualmente sólidos principios de tolerancia pluralista y libertad personal asociados al liberalismo estadounidense, y lo ha hecho en una teoría que los deriva de una base común. El resultado se aproxima en espíritu más a la socialdemocracia europea que a cualquiera de los movimientos políticos predominantes en los Estados Unidos.

La teoría de Rawls constituye la última etapa de una larga evolución en el contenido del liberalismo, que se inicia con una noción más restringida, ejemplificada por Locke, que se centraba en la libertad personal y la igualdad política. La evolución ha obedecido sobre todo al reconocimiento de la importancia de las estructuras sociales y económicas, al igual que de las instituciones políticas y jurídicas, en el proceso de moldear la vida de la gente, y a la aceptación gradual de la responsabilidad social debida a sus efectos. Cuando la misma atención moral se dirigió hacia estos aspectos, tal como antes se había concentrado en instituciones estrictamente políticas y en los usos del poder político, el resultado fue una expansión del ideal social liberal y una concepción ampliada de la justicia. En efecto, el empleo de los términos "justa" e "injusta" para describir no sólo acciones y leyes individuales sino además sociedades enteras y sistemas sociales o económicos es una manifestación relativamente reciente de este cambio de perspectiva. El liberalismo de Rawls representa la toma de conciencia más plena hasta hoy en día de esta concepción de la justicia de una sociedad en su conjunto, en virtud de la cual todas las instituciones que forman parte de la estructura básica de la sociedad tienen que ser evaluadas de acuerdo con un criterio común.

El impulso original de la tradición liberal, que se encuentra en el pensamiento de Locke y Kant, es la idea de la soberanía moral de cada individuo. Lo anterior supone limitar los modos a través de los cuales el Estado puede restringir legítimamente la libertad de los individuos, aun cuando se le debe otorgar el monopolio de la fuerza para así responder a los intereses colectivos de esas personas y mantener la paz entre ellas. La libertad de culto, expresión, asociación y manejo de la vida privada, así como el uso de la propiedad privada, forman el núcleo de las libertades protegidas. Mill propuso un argumento distinto y del tipo utilitarista de la norma (*rule-utilitarian*) para justificar estos límites a la autoridad estatal sobre el individuo, que el liberalismo ha seguido esgrimiendo como argu-

www.cepchile.cl

mento central durante los continuos debates en torno a sus fundamentos morales y su interpretación y alcance adecuados.

El otro poderoso impulso moral del liberalismo, la hostilidad hacia la imposición por parte del Estado de desigualdades de status, coincide en su punto de origen con la protección de la libertad, ya que ambas significan la eliminación de la esclavitud, la servidumbre y el sistema de castas. Pero la oposición a la desigualdad se extiende gradualmente a exigencias más positivas, tales como igualdad de derechos de ciudadanía para todos los grupos, sufragio universal, derecho a ejercer un cargo, la abolición de la autoridad política hereditaria: en suma, a la igualdad política y jurídica como característica general de las instituciones públicas.

Lo que ha conducido a la creación de las formas modernas de liberalismo igualitario del tipo que propugna Rawls es el reconocimiento de que una sociedad puede imponer desigualdades de estatus a sus miembros de distintas maneras además de explicitarlas legalmente. La totalidad del sistema de instituciones sociales y económicas —cuya existencia se debe en parte a leyes tales como el derecho de contrato y de propiedad, pero que en realidad está estructurado por convenciones y pautas que son la suma de innumerables transacciones y elecciones realizadas por individuos que actúan dentro de este marco a lo largo del tiempo— ofrece opciones y oportunidades de vida muy desiguales a diferentes personas, dependiendo de dónde han sido situadas en él por el destino.

La conciencia de las desigualdades de clase hereditarias condujo, por cierto, al surgimiento de otros movimientos políticos fuera del liberalismo, pero expandió las inquietudes de esta última corriente a través de una extensión natural de la oposición a la desigualdad, desde la desigualdad que era impuesta deliberadamente hacia la desigualdad que era previsible y evitable, pero tolerada. Lo anterior ha derivado en una expansión masiva de lo que el liberalismo puede exigirle al Estado, ya que no se trata sólo de una prohibición sino además de una demanda positiva: que el Estado utilice su poder para evitar que algunas graves desigualdades sociales surjan o produzcan sus peores efectos.

No obstante, el impulso igualitario del liberalismo, a diferencia de movimientos situados más a la izquierda, siempre se ha mantenido estrictamente dentro de los límites al poder estatal impuestos por la soberanía de cada individuo sobre sí mismo. Por mucho que se le exija al Estado avanzar en una dirección positiva con el objeto de frenar el desarrollo de profundas desigualdades institucionales y estructurales, cuando cumple con esa obligación éste no puede violar los derechos básicos a la libertad de ciudadanos individuales. No siempre resulta fácil agrupar estos impulsos

www.cepchile.cl

en una teoría coherente, y la tarea se ha traducido en disputas que nos son familiares al interior del campo liberal.

La teoría de Rawls es notable por lo lejos que ha llegado en su afán de seguir estos dos impulsos morales, y por la manera en que los vincula. Para Rawls la protección del pluralismo y los derechos individuales, al igual que la promoción de la igualdad socioeconómica, son expresiones de un solo valor: el de la igualdad en las relaciones entre la gente mediante sus instituciones comunes, tanto políticas como sociales. Cuando la estructura básica de la sociedad se desvía de este ideal de igualdad hemos impuesto socialmente la inequidad; de ahí el nombre de "justicia como equidad" ("*justice as fairness*"). Una sociedad deja de tratar a algunos de sus miembros como iguales si restringe su libertad de expresión o permite que crezcan en un ambiente de pobreza.

Lo que torna al liberalismo de Rawls en una corriente tan polémica es la interpretación fuerte que hace de los requerimientos de justicia para todas las instituciones básicas de la sociedad. La suya es una posición muy distinta del liberalismo de Mill, en el que predomina la insistencia en la imposición de límites a la acción del Estado. Mill estaba consciente del atractivo igualitario del socialismo y reaccionó frente a este fenómeno en su obra "Capítulos sobre el Socialismo", publicada póstumamente[1]. Sus dudas en cuanto a la viabilidad económica y psicológica de un sistema de esas características eran de un tipo que ha persistido y demostrado su validez. Aun así, el impulso igualitario también persistió y a la larga influyó en el desarrollo del liberalismo del Estado benefactor. Todavía no está claro qué alcance tendrá ese efecto, situación que hoy en día es en gran medida materia de debate político en todos los regímenes liberales en el sentido amplio del término.

La otra gran diferencia respecto de Mill es que la descripción de Rawls de los derechos individuales fundamentales para el liberalismo no es instrumental. Él no piensa que sean beneficiosos debido a los resultados que producirán, sino que son beneficiosos en sí mismos. O más bien sostiene que se trata de principios de derecho y que el derecho es anterior al bien. La protección de ciertas relaciones mutuas entre personas libres e iguales, dándoles a cada una un tipo de inviolabilidad, es una condición de una sociedad justa que, según Rawls, no puede explicarse por su tendencia a promover el bienestar general. Se trata de una exigencia básica que no deriva de ninguna fuente. Esta concepción no instrumental de los derechos individuales también está respaldada por la postura de rechazo de Rawls al

[1] En Collini, S. (ed.): *On Liberty and Other Writings*, 1989.

www.cepchile.cl

método utilitario de sumar ventajas y desventajas entre las personas y escoger el sistema que maximice el total. La importancia que tiene para la moralidad el carácter distintivo de las personas también explica la forma especial que él le imprime al contrato social como fundamento para la teoría política. Pero entrar en detalles nos alejaría demasiado del tema de este ensayo.

II

La relación de la teoría de Rawls con otras visiones se manifestará claramente si examinamos en detalle sus dos principios de justicia. Entonces veremos cómo sus elecciones entre alternativas expresan una postura moral específica y, al mismo tiempo, qué posturas pueden ser expresadas por opciones diferentes. Según su última formulación en *Liberalismo político*, los dos principios son los siguientes:

a) Cada persona tiene el mismo derecho a gozar de un esquema enteramente apropiado de derechos y libertades básicos e iguales, que sea compatible con el mismo esquema para todos; y en este esquema a las libertades políticas iguales, y sólo a estas libertades, se les ha de garantizar su valor equitativo.

b) Las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos condiciones: en primer lugar, deben estar vinculadas a puestos y cargos abiertos a todas las personas bajo condiciones de una justa igualdad de oportunidades; y en segundo lugar, tienen que ser concebidas para el máximo beneficio de los miembros menos favorecidos de la sociedad[2].

El primer principio (igualdad de derechos y libertades) tiene prioridad sobre el segundo, y la primera parte del segundo principio (justa igualdad de oportunidades) tiene prioridad sobre la segunda parte (el principio de la diferencia).

Nótese que el primer principio es uno de estricta igualdad, y el segundo, uno de desigualdad permitida. El primero se aplica de manera aproximada a las estructuras y garantías constitucionales de los sistemas políticos y jurídicos, y el segundo al funcionamiento de los sistemas sociales y económicos, particularmente en la medida en que puedan ser afectados por políticas tributarias y diversos enfoques aplicados a la seguridad social, el empleo, la indemnización por invalidez, el mantenimiento de los

[2] Rawls, John: *Political Liberalism*, 1993, pp. 5-6 (citado como *"PL"* con números de página).

www.cepchile.cl

hijos, la educación, la atención médica, etc. La estricta prioridad de los derechos y libertades individuales por sobre la reducción de las desigualdades sociales y económicas constituye el verdadero meollo del liberalismo, que durante un largo período ha motivado el desdén de la izquierda radical. Esta batalla ideológica no ha concluido, como puede apreciarse en la denigración de los "valores occidentales" por parte de la última generación de déspotas no occidentales.

Con todo, el dilema relativo a qué incluir dentro del esquema obligatorio de derechos y libertades marca una importante división entre los liberales. Existen aquellos que creen que los derechos fundamentales están asociados a la protección del proceso democrático y a la prevención de la opresión política (derechos tales como libertad de expresión, libertad de asociación, debido proceso legal, derecho a voto y a ocupar cargos, y libertad de culto). Desde esta óptica, las libertades puramente personales y culturales, como las que están en juego en las disputas sobre el cumplimiento de la ley en materia de moralidad sexual o sobre la legalidad del aborto, no gozan del mismo estatus. En estos aspectos la interpretación de Rawls del alcance de los derechos básicos tiende a ser más amplia por motivos que serán analizados más adelante, y que tienen que ver con los fundamentos de esos derechos y con la manera en que una sociedad justa debe aceptar el pluralismo.

Por otra parte, existe un tipo significativo de derecho que Rawls excluye de la protección total del primer principio, a saber los derechos de propiedad. Aquellos que asignan un considerable peso moral a los derechos de propiedad —no sólo al derecho a poseer ciertos bienes personales, el cual es incluido por Rawls, sino además a derechos significativos de acumulación y disposición de la propiedad privada—, pertenecen a la rama libertaria del liberalismo. Aun cuando los libertarios en el sentido estricto son escasos, la alta valoración de la libertad económica es un elemento importante en la postura de aquellos que conservan un apego lockeano al derecho natural de los individuos a disfrutar de los frutos de su trabajo y de las utilidades que obtengan de otras transacciones económicas no prohibidas.

Rawls no compartirá ninguna de esas opiniones. En su teoría, el derecho a disfrutar de lo que uno ha ganado o adquirido legalmente tiene un estatus completamente distinto al de la libertad de expresión, la libertad de culto, o la libertad de elegir nuestro empleo. Los derechos de propiedad económicamente significativos se valoran no como parte esencial de la libertad individual sino como características indispensables del sistema económico sin las cuales la seguridad y las expectativas confiables que resultan fundamentales para la planificación, la inversión, la producción y

www.cepchile.cl

la acumulación de capital a largo plazo no serían posibles. La dependencia de los contratos, de los acuerdos salariales, del pago de dividendos, etc., resulta económicamente esencial, y es sólo la justificación de todo el sistema lo que proporciona el sustento moral al derecho de un individuo a disfrutar de lo que gana o adquiere mediante los actos que él y otros realizan de conformidad con las normas. Aquello a lo que él tiene derecho está determinado por las normas; y lo que éstas deben ser, incluidas las normas de tributación y redistribución, dependerá de cuál sistema global sea el más justo en cuanto a sus resultados, considerado en términos generales. En la teoría de Rawls los derechos de propiedad individual son la consecuencia, y no el fundamento, de la justicia de las instituciones económicas. En las teorías de tendencia libertaria se da el caso inverso.

Este rechazo de la libertad económica como valor en sí mismo es una característica de la visión de Rawls que ha provocado resistencia junto con un rechazo, estrechamente relacionado, del mérito individual como valor político fundamental. Para los efectos de la teoría política al menos, Rawls sostiene que las personas merecen gozar del producto de su esfuerzo sólo si tienen derecho a él en virtud de las normas de un sistema justo. Sólo entonces ellas tienen una aspiración legítima a obtener el goce de lo que producen. Esta perspectiva es, a mi juicio, más inflexible de lo que estaría dispuesta a aceptar incluso la mayoría de aquellos que se describirían como liberales. Existen sin duda quienes sostienen que, aun antes de las instituciones, la gente merece lo que gana con su propio esfuerzo, y que debería permitirse que esto incidiera en la estructuración de un sistema económico justo. Lo anterior podría expresarse mediante alguna modificación en la interpretación del primer principio de Rawls, para admitir cierto grado de libertad económica como derecho protegido.

Si pasamos ahora al segundo principio, lo primero que cabe observar es que la inclusión de algún principio que limite las desigualdades que en un Estado justo pueden surgir de la libertad de opción ejercida por personas que actúan bajo un régimen de derechos y libertades individuales adecuados y totalmente protegidos, es lo que marca la diferencia entre el liberalismo de tipo *laissez-faire* y el liberalismo del Estado benefactor. El segundo expresa el reconocimiento de que la estratificación de clases —y la consiguiente desigualdad de oportunidades en la vida— son males sociales que afectan el grado de justicia de una sociedad.

Para comenzar con la primera parte del segundo principio: la igualdad de oportunidades ha llegado a convertirse en un postulado central de la mayoría de las perspectivas liberales, pero admite dos interpretaciones muy distintas, una negativa y otra positiva. La igualdad negativa de oportunida-

www.cepchile.cl

des significa la ausencia de barreras para la competencia por posiciones en la jerarquía social y económica, de modo que cualquier persona puede escalar hasta un puesto para el cual está calificada. Esto es lo que Rawls denomina el principio de "carreras abiertas a los talentos". La igualdad positiva de oportunidades, o lo que Rawls llama "igualdad justa de oportunidades", impone más requisitos: es preciso que toda persona, cualquiera haya sido su punto de partida en la vida, tenga las mismas oportunidades para desarrollar sus talentos naturales hasta el nivel que sea capaz de alcanzar, de manera que, cuando llegue el momento, pueda competir por un puesto sin las desventajas derivadas del hecho de provenir de un ambiente precario. La segunda interpretación, capacitar a todas las personas para realizar sus potencialidades, requiere un grado mucho mayor de intervención estatal que la primera, garantizando así que las puertas estén abiertas para cualquiera que cumpla con los requisitos.

El apego a la igualdad negativa de oportunidades —condenando la exclusión deliberada de cualquier persona por motivos de raza, clase, sexo, o religión de una oportunidad igualitaria para competir— resulta hoy prácticamente incontrovertible[3]. Y hasta cierto punto el valor de la igualdad justa o positiva de oportunidades, o igualdad de posibilidades, goza de un reconocimiento cada vez mayor. La obligación de una sociedad próspera de garantizar el acceso a la educación hasta el nivel universitario para todos los que estén dispuestos a beneficiarse de él y sean capaces de aprovecharlo, y cierto grado de obligación en cuanto a asegurarse de que los niños reciban una alimentación y una atención médica adecuadas, por muy pobres que sean sus padres, son aceptadas por la mayoría de los segmentos del espectro político en sociedades ampliamente liberales. Los desacuerdos giran en torno al grado en que se deben nivelar las desigualdades de oportunidades.

Tales desigualdades no pueden eliminarse del todo porque las diferencias entre familias tienen un importante efecto en los niños que la acción del Estado no puede eliminar del todo. Pero hay lugar para desacuerdos sobre el alcance que deben tener las iniciativas. Parte de esas discrepancias puede obedecer a diferencias de opinión sobre la magnitud del efecto de la clase en las opciones de la gente. Algunos sostienen que

[3] Ha sido quebrantado por la política de acción afirmativa, que resulta por cierto altamente polémica en las sociedades liberales, pero es probablemente mejor comprendida en términos rawlsianos como un intento por aplicar la justicia correctiva, un intento por rectificar las consecuencias residuales de una violación particularmente flagrante en el pasado del primer principio de igualdad de derechos y libertades. Por tanto, la acción afirmativa no forma parte de lo que Rawls denominaría "teoría del estricto acatamiento" o teoría ideal, que es lo que los dos principios de justicia supuestamente deben describir. Véase Rawls, John: *A Theory of Justice*, 1971/ edición revisada, 1999, pp. 9-9/7-8 (edición revisada).

www.cepchile.cl

cualquiera puede tener éxito si trabaja arduamente, mientras que otros señalan cómo aumenta el grado de dificultad si comenzamos desde abajo y no desde arriba. Aun así, sospecho que la mayor parte del disenso se debe a una diferencia en el enfoque moral. Aquellos que se inclinan a considerar como algo inobjetable las ventajas comparativas que reciben los niños por haber tenido la suerte de ser hijos de padres adinerados probablemente se concentran en el hecho de que ellas son el resultado de un afecto familiar normal e irreprochable. Otros, que piensan que esas ventajas y las correspondientes desventajas de quienes nacen en un ambiente de pobreza y desigualdad son injustas, probablemente se concentran en el hecho de que quienes las reciben no han hecho nada para merecerlas.

Sin embargo, el debate en torno a la forma adecuada de igualdad de oportunidades produce mucho menos desacuerdo que cuando se discute si una sociedad justa debe ir más allá de este ámbito para luchar por la igualdad de resultados. Lo anterior nos conduce finalmente a la segunda parte del segundo principio —el principio de la diferencia—, que constituye la exigencia más impresionantemente igualitaria de Rawls y una de sus afirmaciones más impugnadas. Reproduciendo sus palabras, señala que las desigualdades sociales y económicas "deben redundar en el máximo beneficio de los miembros menos favorecidos de la sociedad". Podemos concebir un principio todavía más igualitario, que preconice un mayor grado de equidad aun si ello significa disminuir el nivel de bienestar de todas las personas, incluido el de los más desfavorecidos. Con todo, el razonamiento anterior no despierta mucho atractivo fuera de la tradición del socialismo utópico, y en todo caso es probablemente el reflejo de algo más: la idea de que la estricta igualdad de posesiones fomentaría la existencia de un nivel universal de autoestima y respeto mutuo que es imposible de alcanzar en una sociedad social y económicamente estratificada. Allí radica el atractivo de la perenne fantasía de abolir toda jerarquía. Pero el principio de la diferencia de Rawls sigue siendo muy igualitario, y puede contrastarse con diversas alternativas que cuentan con respaldo dentro del espectro de posturas liberales.

En primer lugar existe la visión de que la única igualdad que se requiere para la justicia es la igualdad de oportunidades, y que como las desigualdades que surgen bajo un régimen de igualdad de oportunidades son el resultado de lo que la gente obtiene de sus oportunidades, ellas no son injustas. Algo más igualitaria es la posición según la cual no se debería permitir que ciertas formas de desgracia, incluida la invalidez, una enfermedad grave, y particularmente una reducida capacidad para obtener ingresos debido a falta de habilidades o a abrumadoras responsabilidades como

www.cepchile.cl

padre o madre, transformen a sus víctimas en seres desvalidos e indigentes. El hecho de proporcionar algún tipo de red de seguridad social es una medida que cuenta con un amplio grado de apoyo cuando se trata de afrontar esos casos, aunque no existe consenso en cuanto a la altura a la que se debe colocar la red, es decir, el nivel mínimo de protección social que se debe garantizar. Tal vez la manera más adecuada de interpretar esta postura sea considerarla no como una visión fundamentalmente igualitaria sino más bien como la consecuencia de algo más: el juicio de que algunas formas absolutas de privación son particularmente perjudiciales y que ninguna sociedad decente debe tolerarlas si cuenta con los recursos para prevenirlas.

Otro punto de vista que tiene consecuencias igualitarias, pese a no ser fundamentalmente igualitario, es el utilitarismo, la postura de que maximizar el bienestar total debe ser un objetivo social. La indigencia provoca una considerable baja en el total, y la utilidad marginal descendente de los recursos significa que la transferencia de algunos de ellos de los ricos a los pobres, si es posible realizarla sin una pérdida excesiva, aumentará el bienestar total. Parece probable que la mayor parte del apoyo a las políticas moderadas de asistencia a las personas desfavorecidas obedece a posiciones morales como éstas y no al igualitarismo más profundamente arraigado que propugna Rawls.

El principio de la diferencia de Rawls se basa en el intuitivamente atractivo juicio moral de que todas las desigualdades en las perspectivas de vida que la estructura básica de la sociedad les depara a las personas, y de las cuales ellas no son responsables, aparecen a primera vista como injustas; tales desigualdades sólo pueden justificarse si las instituciones que componen esa estructura son las más eficaces de que se dispone para alcanzar un objetivo igualitario: el de lograr que el grupo más desfavorecido de la sociedad llegue a ser tan próspero como resulte posible. Se trata de una meta igualitaria porque obstaculiza la búsqueda de mayor igualdad sólo si ese empeño pudiera empeorar la situación de todos.

Puede que la anterior sea una postura radical, pero es preciso tener en cuenta que sólo se aplica a profundas desigualdades estructurales que afectan estadísticamente a una gran cantidad de personas en las distintas categorías sociales. No se aplica a las incontables desigualdades que inevitablemente surgirán entre los individuos a medida que la gente adopte decisiones e interactúe, y tenga éxito o fracase en sus esfuerzos, en el contexto de cualquier estructura socioeconómica, por justa que sea. Si la amplia estructura de la sociedad satisface los principios de justicia en sus efectos estadísticos a gran escala en las perspectivas para la vida de los

www.cepchile.cl

diferentes grupos, entonces, de acuerdo con Rawls, cualquier desigualdad individual que surja de su funcionamiento será *ipso facto* justa. Eso es lo que quiere decir Rawls al considerar su sistema de justicia como puramente procesal: el diseño global del sistema les confiere legitimidad a los resultados específicos, cualesquiera que éstos sean.

No obstante, el principio de la diferencia significa que el diseño global del sistema debe ser evaluado en función de su éxito en la eliminación de esas desigualdades que no se necesitan para proporcionar el máximo beneficio a los más desfavorecidos. Y este imperativo depende del aserto moral de que es injusto que las personas sufran o se beneficien diferencialmente debido a desigualdades entre ellas, de las cuales no son responsables. Una sociedad que no procura reducir esos diferenciales no es justa, y ello resulta aplicable si las diferencias en cuestión son raciales, sexuales o religiosas, o bien disparidades de fortuna al nacer, por ejemplo, haber nacido rico o haber nacido pobre, o haber nacido con aptitudes naturales inusuales o sin ellas.

Es este último punto, la injusticia en el hecho de que la sociedad sistemáticamente recompense o penalice a la gente sobre la base de los resultados que obtengan en la lotería natural o genética, lo que sustenta el principio de la diferencia. Aun en condiciones ideales de igualdad justa de oportunidades, esas desigualdades surgirán como producto del funcionamiento normal de una economía de mercado competitiva en la que las aptitudes productivas escasas son un activo muy demandado. Según Rawls esas desigualdades son injustas a menos que se apliquen políticas complementarias que garanticen que el sistema funcione para el máximo beneficio de los más desfavorecidos. La gente no merece el lugar que ocupa en la lotería natural más de lo que merece su lugar de nacimiento en la estructura de clases, y por tanto no merece automáticamente lo que "naturalmente" deriva de cualquiera de esas diferencias.

Otro argumento acerca del segundo principio merece nuestra atención: la prioridad de la primera de sus condiciones sobre la segunda. Rawls sostiene que no se puede sacrificar la justa igualdad de oportunidades, aun si con ello se llegara a beneficiar a los grupos más desfavorecidos de una sociedad. Quizás cueste imaginar cómo puede darse esta situación, pero yo aludí en un párrafo anterior de esta sección a la desviación de la igualdad de oportunidades representada por la acción afirmativa. Tal vez sea posible que alguien, incluso en ausencia del legado histórico de la esclavitud o de un sistema de castas, opte por un programa que dé preferencias a los menos talentosos en la designación de cargos apetecidos, o quizás que favorezca un sistema aleatorio de selección para ocupar los cargos, todo ello con el

www.cepchile.cl

objeto de evitar el desarrollo de una meritocracia hereditaria. Ese tipo de cambio de prioridad entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados representaría una posición más radicalmente igualitaria que la de Rawls, y también una que, en cierto sentido, aparece como más antiindividualista.

Este breve análisis de las alternativas demuestra que al proponer sus dos principios de justicia Rawls no sólo ha expresado una posición distintiva, sino que además ha proporcionado un marco para identificar las diferencias moralmente cruciales entre una completa gama de posturas frente a las principales cuestiones relativas a la justicia social. Ahora deseo ahondar aun más en las justificaciones de los aspectos más polémicos de su visión: su pluralismo y su igualitarismo.

III

Un elemento importante en la concepción de Rawls de la libertad es la exigencia de que un Estado justo se abstenga, en la medida de lo posible, de intentar imponer a sus miembros una concepción única de los fines y el significado de la vida. Esta idea se plantea de manera más directa en la exigencia de libertad de culto, y Rawls le asigna gran importancia a la decadencia histórica de las ideas de tolerancia a partir de las guerras religiosas del siglo XVII y sus secuelas. Pero él aplica el principio en un sentido mucho más amplio para abarcar todas las profundas diferencias en las concepciones fundamentales del bien. Rawls opina que frente a éstas una sociedad justa debe adoptar una actitud de tolerancia y abrigar expectativas de pluralismo, además de dar libertad a la gente para perseguir sus objetivos últimos siempre que no obstaculicen las demás exigencias de justicia.

A lo que esta posición se opone es, en particular, a una u otra forma de perfeccionismo basada en el compromiso con una determinada idea entre otras acerca de los fines de la vida, junto a la insistencia en que el adecuado papel de una comunidad política consiste en guiar a sus miembros en esa dirección mediante la coerción, la educación, la exclusión de otras opciones y el control del ámbito cultural. Rawls se opone al perfeccionismo no solamente debido a que la disputa por la hegemonía religiosa o cultural produce divisiones y es potencialmente peligrosa para todas las partes. Eso equivaldría a aceptar el pluralismo y la tolerancia como un mero *modus vivendi*, necesario por razones prácticas aunque lejano del ideal. Rawls estima, por el contrario, que el pluralismo y la tolerancia

www.cepchile.cl

respecto de los fines últimos son condiciones de respeto mutuo entre ciudadanos, que nuestro sentido de justicia debería conducirnos a valorar intrínseca y no instrumentalmente. En la postura original este ideal recibe una expresión formal en el hecho de que las partes del contrato hipotético supuestamente ignoran su propia concepción plena del bien, de modo que tienen que escoger principios de justicia basándose en una concepción insustancial y puramente formal que saben que sería compatible con cualquiera de las concepciones más enjundiosas que puede ser la que realmente sostienen. Esta característica del velo de ignorancia, como no saber cuáles son nuestros orígenes de raza y clase, es obligatoria porque Rawls afirma que el trato igualitario que los sistemas sociales y políticos dan a aquellos que profesan distintos valores globales es una importante forma de justicia.

La distinción entre valores globales y valores más estrictamente políticos se analiza extensamente en la obra *Liberalismo Político*, y Rawls sugiere que en *Teoría de la Justicia* él no prestó adecuada atención a esta diferencia[4]. Se trata de una cuestión más bien sutil. Yo personalmente estimo que el objetivo de independizar la teoría de la justicia de cualquier visión global en particular ya estaba presente implícitamente en el libro anterior, aunque el debate posterior resulta muy importante para determinar cómo cree Rawls que se puede lograr ese cometido de manera coherente. De cualquier modo, las preguntas en cuanto a si es posible y, en caso afirmativo, si es deseable, han despertado considerable atención. El propio Rawls señala a otros pensadores dentro de la tradición liberal, como Kant y Mill, que dan por sentado que el liberalismo político debe derivarse de una concepción moral global. Esa percepción aún cuenta con muchos adherentes. Y desde que Rawls planteó el problema algunos escépticos han argumentado que es imposible apoyar una teoría política de la justicia sobre una base más estrecha, como él pretende; que el tipo de neutralidad o abstinencia que él requiere de nosotros cuando pensamos en la justicia es inasequible e incapaz de sustentar el compromiso moral con principios de tolerancia y antiperfeccionismo[5].

Lo anterior corresponde a una acalorada polémica que se suscita una y otra vez en el debate público: ¿Acaso las típicas exigencias liberales de tolerancia y libertad individual con respecto a la religión, el comportamiento sexual, la pornografía, el aborto, el suicidio asistido, etc., dependen realmente de la demanda de imparcialidad estatal frente a profundas y

[4] Véase la introducción a *PL*, pp. xvii-xx, y pp. xix-xxii en *PL*, 1996, edición en rústica.

[5] Véase, por ejemplo, Raz, Joseph: "Facing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence", 1990.

www.cepchile.cl

cuestionadas convicciones personales, o se basan, más bien, en las convicciones disputadas y bastante específicas de esos mismos liberales, convicciones que a ellos les resulta políticamente inconveniente invocar en forma directa, vale decir, escepticismo religioso, libertinaje sexual y respaldo moral al aborto y al suicidio asistido? Alternativamente podría alegarse que la verdadera base de todas las posiciones liberales es una creencia global en que lo mejor para cada persona es vivir su vida de acuerdo con sus propias opciones autónomas, cualesquiera que éstas sean, y que esa es la realidad que una sociedad justa debe hacer posible siempre y cuando se logre orientarla hacia personas con preferencias y compromisos ampliamente variables. Se trata de un tema de discusión sustantiva y teóricamente importante en torno al cual gira la forma apropiada de tolerancia liberal.

Es verdad que con respecto a cualquier materia relativa a los derechos individuales, como la homosexualidad, se pueden aducir dos argumentos muy distintos a favor de la libertad. El primero es que no hay nada impropio en la homosexualidad, por lo que no se la debe prohibir. El segundo es que, sea o no moralmente impropia la homosexualidad, el sexo es uno de esos aspectos altamente personales de la vida que no deberían ser controlados por la sociedad sobre la base de las convicciones de la mayoría de sus miembros. Es cierto también que muchas de las personas que estarían dispuestas a esgrimir el segundo argumento también respaldarían el primero, y quizás no muchas de las que rechazaran el primero serían persuadidas por el segundo. Aun así, existe una importante justificación del atractivo que para algunos liberales al estilo de Rawls tiene el segundo argumento de orden superior, la cual pertenece específicamente al ámbito de la teoría política y no de la teoría moral general. Cuente o no con una amplia aceptación, el argumento de segundo orden pretende apelar a un valor que todos los miembros de una sociedad liberal pluralista podrían razonablemente aceptar incluso si discreparan fundamentalmente en sus opiniones acerca de la moralidad sexual. No se trata del valor predominante de la autonomía personal individual, que puede ser rechazado por muchas posturas religiosas y otras visiones globales. Es el valor del respeto mutuo, que limita los fundamentos sobre los cuales podemos recurrir al poder colectivo del Estado para obligar a aquellos que no comparten nuestras convicciones a someterse a la voluntad de la mayoría.

Todo gobierno, toda sociedad, requiere que el Estado cuente con ese poder; el problema sólo tiene que ver con sus límites y con las justificaciones admisibles para su ejercicio. La manera en que define esos límites es una de las características más importantes de cualquier postura liberal, lo que la transforma en una teoría liberal de la democracia y no en un mero

www.cepchile.cl

mayoritarismo. Como sabemos por el argumento de Mill, los límites estrictos al alcance y a las justificaciones directas admisibles del ejercicio del poder estatal se pueden defender prontamente recurriendo al valor integral de la felicidad y el florecimiento humano individual sin depender de ningún principio de imparcialidad de segundo orden entre visiones globales. *Sobre la Libertad* constituye una poderosa defensa normativamente utilitaria de los principios liberales.

Con todo, Rawls desea algo más: algo que en cierto modo resulta más difícilmente convincente y tal vez potencialmente menos persuasivo en el debate político real. Él aspira a una justificación de la libertad y el pluralismo que no dependa del sistema individualista de valores que comparten tantos liberales. El liberalismo político debería ser compatible con la ortodoxia religiosa. Eso es lo que anhela Rawls, porque cuando se trata de los fundamentos constitucionales dicho sistema no demuestra el suficiente grado de respeto para con aquellos numerosos miembros de una sociedad gobernada liberalmente que no comparten esos valores globalmente individualistas para justificar las instituciones bajo las cuales todos debemos vivir, y los derechos que esas instituciones garantizan, con referencia a motivaciones que no es razonable esperar que esos individuos acepten. El alcance de una justificación para las garantías constitucionales de la libertad individual tiene que ser más amplio, incluso si ello significa que su control resultará más precario.

Rawls identifica el tipo de razonamiento que tiene en mente en sus dilatados análisis de lo que él llama "razón pública" y su relación con el hecho del pluralismo razonable. Estos conceptos son muy importantes en *Liberalismo Político* y son abordados con el máximo de detalle en otro ensayo aún posterior, publicado en 1997[6]. La mayor dificultad para definir una visión como ésta radica en distinguir entre aquellos conflictos de valores que se inscriben en el ámbito de la razón pública y aquellos que no. Las discrepancias fuera del terreno público, cuyo ejemplo más claro lo constituyen las diferencias religiosas, deben evitarse en la medida de lo posible cuando se justifica el diseño de las instituciones sociales y políticas básicas. Pero las discrepancias dentro de la esfera de la razón pública pueden ser igualmente fundamentales, aunque a juicio de Rawls aquellos que mantienen el equilibrio del poder político no deben vacilar en ejercerlo basándose en su visión sobre esos asuntos, o en imponer el resultado a aquellos con opiniones contrarias. Lo anterior ocurre todo el tiempo en el debate político sobre temas como la guerra y la paz, la política económica, tributa-

[6] "The Idea of Public Reason Revisited", 1999, pp. 573-615.

www.cepchile.cl

ción, prestaciones sociales, o protección ambiental, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia?

Rawls subraya que la razón pública no debe percibirse como un procedimiento eficaz de toma de decisiones, que garantiza la generación de acuerdos, sino más bien como un tipo especial de desacuerdo, argumentación y contraargumentación, que procura utilizar métodos mutuamente reconocidos de evaluación y evidencia, susciten o no un consenso. Aun si no estamos convencidos por los argumentos de un oponente acerca de la justicia distributiva, por ejemplo, podemos reconocer que ofrecen fundamentos que a su juicio sería razonable que nosotros aceptáramos, simplemente en virtud de la capacidad de razonamiento que todos compartimos. No puede afirmarse lo mismo cuando se apela a la fe o a la revelación.

El que un argumento constituya o no una apelación a la razón pública es en sí un tema susceptible de debate (pensemos en la cuestión de la permisibilidad del aborto). De todos modos, el concepto de razón pública no es planteado por Rawls como un test mecánico de la admisibilidad de los argumentos, sino más bien como una descripción de lo que deberíamos estar buscando en una justificación admisible para el diseño de las instituciones básicas. Al aplicar el concepto habrá discrepancias de orden superior, al igual que se observan argumentos antagónicos dentro del ámbito de la razón pública. Pero el sentido de justicia debería conducirnos a intentar, de buena fe, ofrecer a nuestros conciudadanos fundamentos para el ejercicio del poder colectivo que a nuestro juicio ellos, desde su punto de vista como co-razonadores, tengan motivos de aceptar, incluso si en realidad no lo hacen. Invocar sólo nuestras convicciones privadas equivale, según Rawls, a violar el requisito de reciprocidad que se aplica a miembros de una sociedad justa.

Amén de estos problemas de definición existe el gran problema de la justificación. ¿Cómo podemos dejar a un lado algunas de nuestras convicciones más profundas —convicciones acerca de los fines últimos de la vida— al decidir cómo debe organizarse nuestra sociedad? Puede parecer una traición a nuestros valores el que deliberadamente nos rehusemos, si tenemos el poder, a situar a todas las personas en lo que creemos es la verdadera senda religiosa a la salvación o, por el contrario, la verdadera senda secular de la autonomía individual y la autorrealización, mediante el correspondiente diseño de los sistemas políticos, sociales y educacionales. Basar los valores políticos en algo inferior a nuestros valores trascendentes más amplios puede parecer moralmente incorrecto y psicológicamente incoherente. Pues ¿cómo pueden estos valores políticos más restringidos tener el poder de mantener a raya los valores religiosos trascendentes, por

www.cepchile.cl

ejemplo, particularmente cuando éstos tienen que ver no sólo con mis propios intereses, sino además con lo que yo considero son los intereses más importantes de todas las personas, y por tanto de mis conciudadanos, cualesquiera sean sus propias convicciones? La misma pregunta se plantea acerca de los valores seculares individualistas, lo cual parecería justificar la oposición política a la religión ortodoxa.

Se trata de un difícil dilema de teoría moral, que encontramos en los fundamentos de los derechos individuales y por tanto en los fundamentos de un liberalismo basado en los derechos. La duda central es si una exigencia de respeto mutuo, que opere en el contexto del ejercicio del poder colectivo sobre cada uno de los miembros de una sociedad, es lo suficientemente enérgica como para refrenar no sólo la ilimitada búsqueda del interés propio de la mayoría a expensas de la minoría, sino también la búsqueda ilimitada de los valores ostensiblemente trascendentes de la mayoría contra la voluntad de la minoría que no los comparte. Los escépticos responden que basar nuestros principios sobre lo políticamente correcto o incorrecto en algo menos importante que nuestro completo sistema de valores equivale a asignarles a dichos valores sólo una importancia superficial en comparación con una universalidad abstracta y casi sin contenido.

El intento de Rawls de responder la pregunta fundando la tolerancia y la libertad liberales en principios de derecho que son previos a concepciones del bien es una de sus contribuciones más significativas. La dificultad de la tarea es considerable, y en la mente de muchos detractores se mantiene la sospecha de que tales visiones son una suerte de camuflaje liberal para argumentos mucho más parciales: que el propuesto atractivo ecuménico del liberalismo es hueco. Algunas de estos críticos son propiamente liberales que creen que es mejor defender los ideales liberales apelando a una concepción explícitamente liberal del bien humano.

Sin embargo, yo estimo que la alternativa de Rawls es una idea moral de primera importancia y que representa un ideal político por el cual vale la pena luchar. Aun cuando es mucho más difícil de explicar y defender que un liberalismo basado directamente en valores individualistas y utilitaristas, un liberalismo político rawlsiano que pueda justificarse incluso ante aquellos que profesan creencias religiosas ortodoxas y no comparten dichos valores es preferible como fundamento para determinar la legitimidad del ejercicio del poder por parte del Estado sobre todos sus ciudadanos. Rawls ha intentado describir una forma de liberalismo que pueda exigir la fidelidad no sólo de los individualistas seculares, y que se plantee no sólo como un *modus vivendi* o una segunda mejor opción. Me parece que ha identificado una fuente de convicción y motivación moral que no

www.cepchile.cl

depende del escepticismo religioso o de una ética de la autonomía individual, y que tiene un importante papel que desempeñar en la justificación de las instituciones democráticas liberales.

IV

La otra importante fuente de controversias en la postura moral de Rawls es su acentuado igualitarismo, ejemplificado por el principio de la diferencia. No sólo el principio mismo sino además varias de las aseveraciones planteadas en su apoyo han despertado un considerable grado de oposición. Rawls restringe en cierta manera el estatus de dicho principio en la obra *Liberalismo Político*, al señalar que forma parte de la justicia elemental, pero no es un elemento esencial de la constitución, y que resulta mucho más difícil determinar si se ha hecho realidad que en el caso de las libertades básicas; aun así sigue siendo un componente muy importante de su visión global.

Rawls defiende más plenamente el principio de la diferencia en el capítulo 2 de *Teoría de la Justicia*, al sostener que se deriva intuitivamente, por una suerte de analogía, de otros principios de igualdad que son menos polémicos. Su principal argumento es que no podemos quedar satisfechos con la igualdad de oportunidades. Incluso el principio de igualdad negativa de oportunidades, que excluye la discriminación deliberada, depende de la creencia de que el sistema social no debe asignar beneficios o desventajas únicamente sobre la base de diferencias entre las personas que éstas no han hecho nada para merecer y de las cuales no son responsables. Excluir a los candidatos calificados de una profesión debido a su raza o sexo equivale a penalizarlos por motivos que son arbitrarios en el peor sentido, y una sociedad que permite que ello ocurra es injusta.

Éste es, sin embargo, sólo un primer paso, porque la gente no es más responsable por el estatus socioeconómico de la familia en que nace que por su raza o su sexo. Empero, un sistema que garantiza sólo la igualdad negativa de oportunidades permite que se desarrollen y acumulen desigualdades de clase sin hacer nada por contrarrestar las enormes diferencias que ellas generan en las oportunidades para que los individuos adquieran la capacitación y la experiencia necesarias a fin de desarrollar sus aptitudes y así competir por cargos formalmente vacantes. La igualdad negativa de oportunidades no equivale, por tanto, a la igualdad plena de oportunidades. Debe complementarse con el suministro positivo de los recursos que permitirán que cada competidor potencial desarrolle sus habilidades naturales

www.cepchile.cl

y, en consecuencia, se encuentre en condiciones de aprovechar sus oportunidades. Eso es lo que Rawls quiere decir con igualdad justa de oportunidades.

El mismo razonamiento lo lleva aun más lejos. Incluso bajo un régimen de igualdad justa de oportunidades seguirán surgiendo desigualdades inmerecidas. La igualdad justa de oportunidades, en la medida en que pueda lograrse, garantiza sólo que las personas con iguales aptitudes naturales tendrán aproximadamente las mismas oportunidades de prosperar. Pero las personas no poseen aptitudes naturales idénticas, y sus diferencias naturales o genéticas continuarán influyendo en los beneficios que obtengan de la interacción con el orden social y económico. Aun así ello también resulta moralmente arbitrario, pues la gente no es más responsable de su dotación genética que de su raza o el estatus económico de sus padres. Por consiguiente, una sociedad justa combatirá estas diferencias inmerecidas en los beneficios en la medida en que pueda hacerlo sin perjudicar a las mismas personas cuya arbitraria penalización está vivamente interesada en rectificar, a saber aquellos que ocupan el último lugar en la carrera socioeconómica. De ahí el principio de la diferencia.

Pese a lo persuasivas que resultan estas analogías, no todos están convencidos de que haya algo injusto en el hecho de que las personas se beneficien diferencialmente del empleo de sus propias aptitudes naturales aunque no hayan hecho nada para merecerlas. Incluso si no han hecho nada para merecerla, su estructura genética forma parte de su identidad, y puede parecer un atentado contra la independencia de las personas afirmar que no tienen derecho a gozar de las ventajas que se desprenden de esa identidad, excepto en la medida en que ello también beneficie a otros. En tales reacciones se ha reconocido y adoptado la sorprendente observación de Rawls en cuanto a que "el principio de la diferencia representa, en efecto, un acuerdo para considerar la distribución de los talentos naturales como un patrimonio común y para participar de los beneficios de tal distribución cualquiera que ella resulte ser"[7].

En la discusión de este asunto se identifica una escisión fundamental en la tradición liberal entre aquellos que identifican la justicia con la lucha contra cualquier tipo de desigualdad inmerecida que el diseño del sistema social puede mejorar, y aquellos que estiman que la esfera de acción de la justicia es más restringida, que la sociedad está exenta de responsabilidad ante ciertas formas de diferencias "naturales", aun cuando sean injustas en un sentido no político. En esta concepción más limitada, una sociedad justa debería proporcionar un marco, con igualdad justa de

[7] *TJ*, pp. 101/87 (edición revisada), frase reproducida.

www.cepchile.cl

oportunidades y un mínimo social adecuado, dentro del cual la gente logre ascender por su propio esfuerzo hasta el nivel en que sus habilidades naturales y su empeño puedan llevarla.

La significación moral de la elección entre esta visión y la de Rawls es bastante difícil de describir. Ambas son interpretaciones de la vaga idea de relaciones de cooperación y respeto mutuos entre los individuos separados y autónomos que conforman una sociedad. No somos propietarios unos de otros y deseamos interactuar en condiciones de igualdad o reciprocidad en cierto sentido. Pero en la concepción de Rawls no debemos aspirar a que el sistema colectivamente sustentado, del cual todos somos miembros por igual, nos permita cosechar beneficios sobre la base de accidentes afortunados del destino que no merecemos, a expensas de otras personas menos venturosas que tampoco merecen su sino. El hecho de que no merezcamos el resultado que obtenemos en la lotería natural se comunica moralmente con lo que deriva de él a través del funcionamiento de la economía. Como señala Rawls en otro planteamiento memorable: "En la justicia como equidad, los hombres acceden a compartir el destino del otro"[8].

La visión opuesta es que conservamos un mayor grado de independencia de las pretensiones de los demás cuando nos incorporamos a una sociedad y no nos entregamos a ella ni siquiera metafóricamente. Sólo una libertad personal básica permanece protegida por la igualdad liberal, lo mismo que el derecho a beneficiarse de nuestros esfuerzos y talentos. Nuestro grado de responsabilidad por la suerte del otro, como co-miembros de una sociedad, es considerable, aunque está definitivamente limitado por nuestra persistente independencia.

La clave moral para la posición más expansiva de Rawls estriba en la idea de que, debido al papel esencial que les cabe al Estado, a la ley y a las convenciones de propiedad en la tarea de hacer posible la extraordinaria productividad y acumulación de riquezas de una economía moderna, tenemos una responsabilidad colectiva por la forma general de lo que resulta de la suma de opciones individuales dentro de ese marco. Somos, por tanto, responsables de desigualdades en gran escala que no habrían surgido dentro de un marco alternativo, y si son moralmente arbitrarias tenemos motivos para aspirar a alterar el sistema a fin de reducirlas. Nos parece sencillamente repugnante que exista una empresa conjunta en que las gratificaciones se distribuyan de acuerdo con la dotación genética, a menos que haya alguna otra justificación instrumental para esa distribución, como ocurre cuando una desigualdad satisface el principio de la diferencia.

[8] *TJ*, pp. 102/88 (edición revisada), frase reproducida.

www.cepchile.cl

Entre aquellos que estarían de acuerdo con Rawls en cuanto a aceptar la responsabilidad de la sociedad por todos los resultados que ella permita, y no sólo por los que produzca deliberadamente, aún hay motivos para discrepar con el marcado igualitarismo del principio de la diferencia. La estricta prioridad asignada a la tarea de mejorar la situación de los más desfavorecidos, dándole preferencia incluso frente a mejoramientos individuales y colectivos en mayor escala de la situación de las personas más afortunadas, no parece una postura razonable, en particular para los adeptos al utilitarismo. Los utilitaristas tal vez estén de acuerdo en que las desigualdades sociales requieren de una justificación, pero estiman que se podrían explicar porque contribuyen al bienestar general y no sólo al beneficio de los más desfavorecidos.

Incluso aquellos que estarían dispuestos a admitir que se dé algún grado de prioridad a las necesidades de los más desfavorecidos por sobre las de los más afortunados —después de todo éstos ya *poseen* lo que aquellos necesitan— pueden estimar que el principio de la diferencia es demasiado absoluto. Al parecer se devaluarían irracionalmente los intereses de la clase media si se afirmara que un orden socioeconómico siempre será más justo si los sacrifica en favor de los intereses de la clase baja. Tales dudas también se manifiestan en el contrato hipotético: a menudo se plantea la interrogante en cuanto a si las partes en la posición original actuarán racionalmente y adoptarán la estrategia de opción máxima (*maximin choice*), la cual conduce a elegir el principio de la diferencia, como una manera de garantizar que el peor resultado posible sea lo menos malo posible. El marcado igualitarismo de Rawls exhibe una excepcionalmente violenta aversión al hecho de que las instituciones sociales generen lo que él considera diferencias inmerecidas.

Fuera de la ya conocida oposición desde la derecha, que sostiene que el principio de la diferencia es demasiado igualitario, se plantea una interesante crítica desde la izquierda en el sentido de que Rawls se inclina demasiado a tolerar las desigualdades económicas en virtud del principio de la diferencia incluso si ellas son el resultado de motivaciones adquisitivas por parte de miembros de la sociedad, diametralmente opuestas al ideal de igualdad[9]. El asunto es que, en una economía de mercado, se supone que las desigualdades en el ingreso y la riqueza surgirán como resultado de los incentivos en materia de salarios y utilidades que impulsan la actividad económica. La afirmación de que estas desigualdades son necesarias para

[9] Véanse Cohen, G. A.: "Incentives, Inequality, and Community", 1992; Cohen, G. A.: "Where Action Is: On the Site of Distributive Justice", 1997, pp. 3-30, y Cohen, G. A.: *If You're an Egalitarian, How Come You're So Rich?*, 2000, conferencias 8-9.

www.cepchile.cl

el beneficio de los más desfavorecidos depende del supuesto de que los individuos no se sentirían adecuadamente motivados en su papel como participantes en la economía si no se ofrecen incentivos personales que apelen al deseo puramente individualista de acumular recursos para el uso discrecional de ellos mismos y de sus familias. Pero luego se plantea la siguiente pregunta: ¿puede una sociedad ser verdaderamente justa si existe un abismo tan grande entre el igualitarismo que determina el diseño de sus instituciones y el individualismo que motiva a sus miembros cuando actúan en el contexto de esas instituciones?

El hecho de que Rawls acepte esta división es una señal de su apego sin reservas a la tradición liberal a pesar de su marcado igualitarismo institucional. Una cosa es la teoría política, y otra la moralidad personal. La justicia se concibe como una virtud específicamente política, que deja a los individuos en libertad para vivir su vida en pos de sus propios objetivos y compromisos, sean estos hedonistas o puritanos, libertinos o devotamente religiosos. Las exigencias especiales de respeto igualitario por los intereses de todos que impone la justicia se aplican a la esfera de las instituciones sustentadas colectivamente, y no a la vida personal. Así pues, el liberalismo entraña una división del terreno moral y deja a los individuos en libertad para que encarnen una gran diversidad de formas de vida, algunas de ellas altamente ensimismadas, siempre que sean compatibles con una estructura básica justa de cooperación.

V

La división entre lo personal y lo político, o la resuelta destinación de la justicia a la categoría política, ha adquirido prominencia en los escritos de Rawls después de *Teoría de la Justicia*, para culminar en *Liberalismo Político*. Ha subrayado que la justicia como equidad es una concepción política independiente, en parte como respuesta a las críticas en contra de *Teoría de la Justicia* según las cuales en esta obra se recurría a una concepción del yo como sujeto de opción autónomo e irrestricto cuyo bien consistía en moldear sus propias preferencias y procurar la satisfacción de éstas, cualesquiera que fueran. A pesar de que la mayoría de esas críticas obedecían a interpretaciones erróneas, incluida una tan burda como atribuirle a Rawls la opinión de que las personas reales eran como los personajes despojados en la posición original, también pusieron de relieve el complejo tema de la coherencia de una posición que permite que los valores políticos sean independientes de los valores globales y predominen sobre ellos en la

www.cepchile.cl

esfera política, aun si estos últimos tienen que ver con los aspectos más importantes de la vida como la salvación y la autorrealización.

Uno de los importantes argumentos planteados por Rawls es que la alternativa de derivar el orden político de un determinado sistema de valores globales suele estar respaldada por la nostalgia de un pasado comunitario que nunca existió, donde todos los miembros de una sociedad estaban unidos por la devoción a su concepción común del bien: el mundo cristiano de la Edad Media (en la fantasía). Rawls señala que para preservar una ortodoxia de este tipo siempre ha sido necesaria la opresión porque el consenso armonioso en torno a valores fundamentales no se mantiene naturalmente. La inquisición no fue un accidente; la persecución de herejes y apóstatas es un elemento inevitable en el intento por mantener la unidad global y prevenir el brote de una disidencia llamativa. El pluralismo, por el contrario, es el resultado natural de un régimen de libertades y derechos individuales básicos.

De lo anterior se desprende que el respaldo para el elemento central del liberalismo, la garantía de los derechos básicos, debe ser compatible con el pluralismo. Ahora bien, hay que reconocer que sería posible preconizar esos derechos de una manera puramente instrumental arguyendo que cada parte en medio de la pluralidad de visiones globales tiene más que perder ante el riesgo de transformarse en una minoría oprimida, que lo que tiene que ganar ante la posibilidad de convertirse en la mayoría dominante. En consecuencia, el liberalismo sería adoptado como *modus vivendi* entre las partes, cada una de las cuales preferiría, de ser posible, imponer a los demás su concepción global. Con todo, Rawls favorece el criterio más exigente según el cual el respeto igualitario por los demás, expresado en el reconocimiento de sus derechos, debería ser valorado por sí mismo, y éste tendría que ser el máximo valor en la esfera de las instituciones políticas, aunque no en el manejo de la vida personal.

La importancia de los derechos liberales depende precisamente del hecho de que son aspectos que para la gente pueden revestir mayor importancia que el orden político, pero respecto de los cuales una diversidad de creencias y compromisos resulta inevitable. La única manera de convivir en un clima de igualdad con otras personas de las que discrepamos fundamentalmente acerca de los fines de la vida, dentro de un marco que impone su estructura básica en la vida de todos nosotros, consiste en adoptar principios para evaluar el marco que puedan ser aceptados por tantos de nosotros como sea posible. La base de dichos principios debe ser, por ende, compatible con una amplia gama de visiones globales razonables, pero mutuamente incompatibles.

www.cepchile.cl

Ello significa que algunas visiones globales no son razonables por cuanto no permiten su propia subordinación a la exigencia de reciprocidad, esto es, al objetivo de buscar una base de cooperación colectivamente aceptable. Los movimientos fanáticos que subordinan el individuo a la comunidad dependen de valores globales que son no razonables en este sentido. Pero Rawls cree que una amplia gama de visiones, que conforman la pluralidad típica de una sociedad libre, son razonables y pueden respaldar el marco institucional común. Eso es lo que quiere decir con el término "consenso superpuesto" ("overlapping consensus"). La superposición del consenso no se refiere a la derivabilidad de principios comunes de justicia a partir de todas las visiones globales en el ramillete pluralista, sino más bien a la *compatibilidad* de cada una de esas visiones globales con una concepción política independiente que les permitirá coexistir.

Existen y seguirá habiendo muchas formas de liberalismo. Y si bien hoy en día la tradición liberal está adquiriendo cada vez más influencia política en países económicamente avanzados, además de realizar importantes incursiones en otras regiones, sigue siendo objeto de ataques que no sólo provienen de los apologistas de la tiranía y el fanatismo sino además de muchas otras personas incapaces de aceptar que el liberalismo imponga severas restricciones al uso legítimo del poder estatal: que insista en que el fin, por valioso que sea, no justifica los medios. La defensa de Rawls de una postura liberal específica, al igual que su profunda exploración de los fundamentos de ésta en la teoría ética y política, constituyen una perdurable contribución a esta tradición.

Referencias bibliográficas

Cohen, G. A.: "Incentives, Inequality, and Community". En Grethe B. Peterson (ed.), *The Tanner Lectures on Human Values*, Vol. 13 (1992).

Cohen, G. A.: "Where Action Is: On the Site of Distributive Justice". En *Philosophy and Public Affairs*, 26 (invierno, 1997).

Cohen, G. A.: *If You're an Egalitarian, How Come You're So Rich?* Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

Mill, J. S. : "Chapters on Socialism". En S. Collini (ed.), *On Liberty and Other Writings*. Cambridge, Gran Bretaña: Cambridge University Press, 1989.

Rawls, John: *Political Liberalism*. Nueva York: Columbia University Press, 1993.

Rawls, John: *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971/ edición revisada, 1999.

Rawls, John: "The Idea of Public Reason Revisited". En John Rawls (Samuel Freeman, ed.), *Collected Papers*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Raz, Joseph: "Facing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence". En *Philosophy & Public Affairs*, 19 (1990). □

www.cepchile.cl

HEGEL COMO PENSADOR CONSERVADOR*

Roger Scruton

Roger Scruton sostiene en este ensayo que la filosofía hegeliana señala un camino al que debe prestar atención el pensamiento conservador. Al concebir a los seres humanos y a las instituciones en su verdadera interdependencia, advierte Scruton, Hegel logra superar tanto al liberalismo como a la ilusión socialista de poner el fin a la política. A juicio del autor, la importancia de Hegel para el pensador conservador radica, precisamente, en haber rescatado al ser humano de la filosofía del individualismo.

Hegel rechaza la teoría de la legitimidad fundada en el contrato social, señala Scruton, porque el individuo adquiere autonomía sólo cuando se reconoce a sí mismo como ser social, en condición de dependencia mutua, vinculado por una ley moral que lo obliga a reconocer la personalidad de los otros. En consecuencia, la sociedad no puede estar basada en un contrato, porque la autonomía indivi-

ROGER SCRUTON. Profesor visitante de Filosofía en el Departamento de Filosofía, Birkbeck College, Londres. Ha sido profesor visitante en numerosas universidades, entre ellas Princeton, Stanford, Cambridge y Boston University. Editor de *The Salisbury Review*. Autor de numerosos libros en los campos de la filosofía, teoría política, crítica y narrativa.

* "Hegel as a Conservative Thinker", apareció originalmente en *The Salisbury Review*, Vol. 4, N° 4, julio 1984, y posteriormente en el libro de Roger Scruton, *Philosopher on Dover Beach: Essays* (South Bend, Indiana: St. Agustine Press, 1990, 1998). Su publicación en castellano en esta edición cuenta con la debida autorización del autor. Traducción de Antonio Avaria por encargo de *Estudios Públicos*.

dual, sin la cual no puede haber contrato genuino, presupone el orden social. Por otro lado, agrega Scruton, Hegel hace una sorprendente defensa del orden burgués al considerar al libre mercado como institución nuclear de la sociedad civil, y al capitalismo como consecuencia ineludible de la distinción entre sociedad civil y Estado, y necesario instrumento de continuidad social. Se plantea así un desafío importante al socialismo.

El recelo con que consideran a Hegel los escritores ingleses en general, y los conservadores británicos y estadounidenses en particular, no es totalmente infundado. Este grandioso sistema metafísico, que presume de abrazar completamente lo real y lo posible, unirlos en una visión total del devenir del hombre, explicando y justificando todo lo que es, fue y será, tal sistema inevitablemente despertará el escepticismo del filósofo empírico, así como la alarma y la repugnancia del político componedor. Nada parece más alejado de la vacilación pragmática de los conservadores [*Toryism*] que esta visión sumamente arrogante y sumamente unificada del mundo, en la que las concepciones sublimes de la teología se re-construyen como una parábola secular, y la historia humana se transforma en su propio redentor.

Y sin embargo, no hay filósofo más pertinente para nuestro tiempo, o para la tarea intelectual que encara el conservadurismo moderno, que Hegel. Precisamente, el reconocimiento que hace Hegel de la modernidad como una condición espiritual distinta es lo que confiere a su análisis la profundidad y la autoridad que le faltan al pensamiento "neo-conservador". El hombre moderno se encuentra escindido de la historia, de la costumbre, de los usos religiosos, y al mismo tiempo lleva el peso de un anhelo consciente de ellos —anhelo del que vanamente intenta zafarse haciendo recaer sobre su legado el fuego de la animosidad del hombre que ha triunfado por su propio esfuerzo. Si esta condición espiritual es a menudo ignorada o descrita de manera equivocada por la teoría conservadora, se debe al menos en parte a que no se aprendió la lección de Hegel. Gracias a sir Karl Popper, cuyo ideal negativo de una "sociedad abierta" presta tan escasa atención a los verdaderos intereses humanos, los neo-conservadores olvidaron la importante tarea que Hegel les puso por delante: la tarea de proporcionar al desposeído espiritual una promesa de hogar genuino.

¿Pero cómo realizar esta tarea? Defender el prejuicio irreflexivo del hombre activo normal resultaba fácil en una época en que el prejuicio era consecuencia inmediata de los dogmas de la religión revelada, o cuando la

www.cepchile.cl

continuidad social asegura que aquellos elevados a la conciencia de sí mismos se aparten apenas en pequeños detalles de las creencias de los felices mortales predestinados a no poner nunca en duda lo que saben. Ya en Burke —el primer conservador moderno— la defensa de la costumbre y del prejuicio asume un aire claramente paradójico: lo que se defiende es precisamente lo que se destruye en su propia defensa. El descubrimiento de sí mismo conduce al descrédito del prejuicio. Por reconocer este hecho y tratar de reconstituir, en el plano de la reflexión, las verdades del prejuicio, Hegel es, para nosotros, el más sustancial y autorizado de los conservadores modernos. También él dudaba de la posibilidad de la tarea; también él tenía dudas de que el pensamiento conservador pudiera ser oportuno alguna vez. Porque hay un sentido en el cual la recuperación del prejuicio siempre llegará demasiado tarde: "Cuando la filosofía pinta su gris en el gris, ya una forma de vida ha envejecido y con el gris en el gris no se deja rejuvenecer, sino únicamente conocer. El búho de Minerva sólo alza su vuelo a la caída del crepúsculo" (prefacio de la *Filosofía del Derecho*). Al mismo tiempo, la filosofía de Hegel señala el camino hacia una recuperación de la fe: fe en lo que es concreto, completo y cognoscible. El hombre moderno, al que Hegel conscientemente se dirige, es un hombre para quien toda conexión con un orden superior a él mismo se debe ganar mediante algún esfuerzo propio, y el que nunca aceptará sin cuestionamiento lo que emana de sus propios empeños imperfectos. Un hombre así estará descontento con cualquier fe que se le ofrezca. No es defecto de Hegel proveer la fe que suele adoptarse en un estado de incertidumbre, y ensalzar la ironía con la cual, en nuestro descreimiento, debemos recibirla.

Uno de los problemas más grandes para un conservadurismo radical consiste en distinguir la visión conservadora de la liberal. ¿Cómo podemos dar al conservadurismo la plausibilidad de ser algo más que el reflejo glorioso de la idea liberal? La filosofía del liberalismo afinca toda política y toda moralidad en una idea de la libertad, sin proporcionar, por regla general, teoría alguna de la naturaleza humana que nos diga qué es la libertad, o por qué deberíamos valorarla. Aísla al hombre de la historia, de la cultura, de todos aquellos aspectos no elegidos de sí mismo que en el hecho son —según los hegelianos— las precondiciones de su verdadera autonomía. Cuando el liberal moderno trata de concretar la idea de libertad que propone, se encuentra siempre obligado a endosar (a sabiendas o no) los hábitos y predilecciones de una forma de vida particular —la forma de vida del intelectual urbano emancipado. En esta filosofía, la naturaleza humana sobrevive sólo de una manera peculiar y atenuada. Nuestra realización estriba en satisfacer tantos arbitrios como el corto tiempo lo permita.

www.cepchile.cl

Esta filosofía no presenta una idea del yo, como entidad por encima de los deseos y creencias que lo componen. En consecuencia, no proporciona otra idea de autorrealización como no sea la libre satisfacción del deseo. El problema de la política se reduce (como en J. S. Mill) a un problema de coordinación: ¿cómo asegurar que la satisfacción del deseo de una persona no impida la satisfacción del deseo de otra?

Hegel fue el primer pensador sistemático en atacar las raíces intelectuales del liberalismo. El liberal, advirtió, considera como "escogida" toda institución a la que el hombre ha conferido legitimidad. Sin embargo, el sentido de legitimidad de los hombres deriva precisamente del respeto que se tienen a sí mismos en tanto seres formados, criados y amplificados por instituciones. No es que los hombres hayan deseado y elegido sus instituciones, porque sin instituciones no habría nada que elegir. Ni se trata de saber cómo abandonar cada práctica heredada y declararla legítima por algún acto de voluntad —así como tampoco podemos tomar distancia de nosotros mismos y preguntar: "¿Deberé ser, o no, esta cosa que soy?" El error del liberalismo radica en el intento de fundar una visión de la sociedad únicamente en la idea de la elección racional —en una noción "abstracta", como dijo Hegel, de la razón práctica, que no hace referencia a la historia, la comunidad y la consanguinidad. El liberalismo aprecia por encima de todo el libre arbitrio, y considera a la justicia —el resguardo de los derechos— como el procedimiento en virtud del cual la libertad de cada persona puede reconciliarse con la libertad de su vecino. Por consiguiente, los conceptos de libertad y justicia se entrelazan: así como están entrelazados en la teoría liberal de John Rawls. El liberal moderno va más allá, argumentando con Rawls que la idea de justicia debe liberarse de cualquier concepción particular del bien del hombre. Ningún esquema particular de valores, ni comunidad histórica particular, ni costumbre, circunstancia o prejuicio particulares, puede incorporarse a la declaración abstracta de nuestros derechos básicos, que sólo refleja la exigencia fundamental de que la justicia sea la garantía de la libertad, y el respeto por la libertad, la base del gobierno legítimo.

Tras las ideas abstractas de libertad y justicia, argumenta Hegel, yace una idea igualmente abstracta de la persona individual. El liberal supone (en palabras de Rawls) que "el yo es anterior a los fines afirmados por él". Nuestros valores y metas son "posesiones" —circunstancias variables que ninguna idea de justicia que pretenda imponerse universalmente puede considerar sacrosantas. Para alcanzar ese nivel universal, el liberal debe hacer abstracción de todo lo que distingue a un individuo de otro, a fin de aproximarse a la posición hipotética (la posición del "contrato origi-

www.cepchile.cl

nal") en la que los individuos no tienen otra base para su arbitrio que el arbitrio mismo. El yo se convierte, para el liberal, en el "sujeto trascendental" de Kant, criatura noumenal, divorciada de las "condiciones empíricas" y cuyo *principium individuationis* jamás puede definirse.

Hegel acepta la idea kantiana de un "sujeto trascendental" como la premisa del razonamiento práctico. Pero discrepa de la concepción liberal de la sociedad, arguyendo que el yo no es anterior a su propia historia, a la comunidad de la cual deriva, o a los valores históricos y hábitos morales que lo atan al mundo. El yo liberal y la moralidad liberal son por igual abstracciones que deben hacerse reales y concretas mediante la moralidad de la costumbre, o *Sittlichkeit*. El individualista liberal, que se identifica a sí mismo como fuera del orden moral, independiente y forjado por sí solo, otorgando o rehusando legitimidad mediante sus propios actos soberanos de voluntad, depende del orden de la *Sittlichkeit* para su existencia. El yo liberado es un artefacto social, hecho posible únicamente por instituciones cuya autoridad trasciende todo lo que una voluntad liberada pudiera haberles conferido. La autonomía, que es el más alto don de la existencia política, no puede ser la base del orden político.

Para Hegel, la filosofía política no es un reino autosuficiente de indagación, independiente de la lógica, de la historiografía y de la filosofía del pensamiento. Debemos comprender el reino de las instituciones mediante el estudio del *Geist* (espíritu). Debemos mostrar la relación entre lo externo y lo interno, entre las instituciones libres y el libre arbitrio del individuo que se nutre de ellas. Por lo tanto, para aproximarnos a la filosofía política de Hegel tenemos que pasar por la compleja argumentación de la *Fenomenología del Espíritu*.

La premisa de la epistemología tradicional es el conocimiento inmediato que tengo de mis estados "subjetivos". De la misma premisa deriva el individualista liberal su visión peculiar del hombre, como constituido por su subjetividad y realizado en el libre arbitrio que arranca de ella. El recurso final de la epistemología cartesiana es el mismo que el de la teoría política liberal: el conocimiento inmediato del yo, como sujeto. La certeza "yo soy" se hermana con la igual certeza, "yo quiero". Llegamos a esta certidumbre por abstracción del mundo material (Descartes), o por las condiciones empíricas de la actividad (Kant). Pero lo que se me da por esta abstracción es precisamente nada —como el mismo Kant lo reconoce en sus argumentos contra Descartes. La inmediatez de la conciencia subjetiva es índice de su vacuidad. Para Hegel, el yo real es un artefacto, que se hace realidad mediante el proceso por el cual se convierte en objeto de su propia conciencia e intención (el proceso de *Selbsbestimmung*). El yo es creado en

www.cepchile.cl

sociedad, a través de nuestra resolución dialéctica del conflicto, y de nuestro devenir en la costumbre, la moralidad y la asociación civil. Estos factores constituyen lo "dado" inamovible de la condición humana, porque sin ellos no puede haber la toma de conciencia del yo que nos permitiría cuestionar nuestra existencia.

Esta visión del hombre recibe su primera resonancia política en la celebrada descripción de la relación entre amo y esclavo (*Fenomenología del Espíritu*, cap. 4, parte I). La esclavitud, sostiene Hegel, es la primera resolución de la "lucha de vida o muerte" con el otro. Esta lucha es producto de la necesidad del yo de confirmarse a sí mismo en contraposición a los demás, obligándolos a reconocerle su libertad. Sin este reconocimiento el yo es esencialmente incompleto, "no realizado", carente de "autocerteza" —sin garantía de su realidad objetiva como agente digno de estimación en el mundo público. Al resolver la lucha de vida o muerte mediante una prueba de fuerza, una parte adquiere el poder de privar a la otra de su vida. Matar al otro, sin embargo, es destruir la posibilidad de imponer el reconocimiento buscado, es precisamente renunciar a la autocerteza que era el propósito del conflicto. De ahí que el vencedor deba contentarse con esclavizar al vencido. Al enfrentarse éste con las exigencias incontestables de la voluntad de su amo en todo momento, el amo impone el reconocimiento del esclavo.

Este proyecto, afirma Hegel, es inherentemente paradójico. Precisamente en el acto de esclavizar, el amo renuncia al poder de obtener lo que desea. Porque lo que desea no es mero poder, sino *libertad* en un sentido "positivo" del término, según el cual la libertad presupone un cierto tipo de existencia social. Libertad no es simplemente la capacidad de obtener lo que deseo: es la capacidad de valorar lo que puedo también obtener, y así confirmar mi significación. No cualquier orden social puede conferir esta libertad a aquellos que pertenecen a él. Consideremos la "libertad" de la que disfrutan los ciudadanos de *Un Mundo Feliz*, de Aldous Huxley; pueden obtener todo lo que desean, y difieren de nosotros solamente en esto: que sus deseos, implantados en ellos por aquellos que quieren controlarlos, no añaden significación a su vida moral. No pueden decir si vale o no la pena, si es sabio o necio, controlar o satisfacer sus inclinaciones. El yo del agente no está comprometido en sus deseos: satisfacerlos no consiste en expresarse en un acto de autorrealización, ni consiste en ejercitar la libertad propia de nuestra naturaleza racional. Sentirse presente en los propios deseos, y confirmado por ellos, requiere un tipo específico de contexto social —uno en el que un sentido de validez puede constituirse en fundamento de la autoestima.

www.cepchile.cl

Al esclavizar al otro lo inhabilitamos para proveer ese contexto. Justamente al ser obligado a respetar, el esclavo cesa de respetar. El amo, hambriento de reconocimiento, reclama ese reconocimiento de manera tiránica; sin él, tiene poder pero carece de autoridad, y la obediencia servil del esclavo no es más que un fastidioso recuerdo del vacío moral que su poder oculta. Al mismo tiempo, liberado de la necesidad de trabajar para beneficio propio, el amo disfruta de otro tipo de libertad: libertad de la necesidad. Pero esta libertad es la libertad del consumidor que busca en vano aquello que le asegure el valor de sus acciones, y cuya gratificación desaparece siempre en el momento de alcanzarla.

Para entender el predicamento del amo, hemos de entender también el predicamento del esclavo. Hegel sostiene que podemos hacerlo sólo si antes comprendemos dos componentes fundamentales del mundo humano: el trabajo y el miedo a la muerte. Corresponde a la naturaleza de la actividad racional el poseer un fin o propósito, e intentar cambiar el mundo para realizar tal propósito. La meta final de todo ser racional es la construcción del yo —de una entidad personal reconocible, que florece conforme a su propia naturaleza autónoma, en un mundo que en parte él mismo crea. El medio para este fin es el trabajo, en el sentido más amplio del término: la transformación de la materia prima de la realidad en los símbolos vivos del trato humano. Al realizar esta actividad, el hombre deja impresas en el mundo, en el lenguaje y la cultura, así como en los productos materiales, las huellas de su propia voluntad, y de este modo llega a verse a sí mismo reflejado en el mundo, un objeto de contemplación, y no meramente un sujeto cuya existencia es oscura para todos, incluido él mismo. Únicamente en este proceso de "impresión" puede el hombre alcanzar la conciencia de sí mismo. Porque sólo al convertirse en un objeto reconocible (un objeto para otros) el hombre se convierte en objeto de conocimiento para sí mismo. Sólo entonces puede comenzar a ver su propia existencia como una fuente de valor, por la que asume responsabilidad en sus actos, y la cual crea los términos con los que se relaciona con otros que son libres como él.

Hegel sostiene que el poder del amo no puede equivaler a la libertad, ya que no incluye un compromiso activo con el mundo. El amo sólo tiene un sentido disminuido de su propia realidad como agente responsable. Por contraste, el esclavo no carece de ese sentido. Por el contrario, se vuelve cada vez más consciente de él, y también toma conciencia del tratamiento injusto que lo priva del poder de realizar en beneficio propio aquello para lo cual tiene los recursos mentales y físicos tanto para emprender como valorar en beneficio de otro. Forzosamente, por consiguiente, el esclavo resentirá cada vez más su posición, mientras que el amo

www.cepchile.cl

dejará de encontrar valor en la dominación que disfruta. El primero adquiere el deseo de derribar el poder que lo oprime; el segundo pierde la voluntad de retenerlo. La relación de ambos contiene las semillas de su propio colapso. A medida que se desarrolla, la contradicción interna rompe gradualmente a pedazos el inestable intercambio entre ellos, y coloca al esclavo en los zapatos del amo, y al amo en los del esclavo.

Según Hegel, el resultado de esta "dialéctica" —este vaivén de poder entre amo y esclavo— es la "superación" (*Aufhebung*) final de la contradicción que los vincula. La relación de amo y esclavo se eleva a una entre iguales, en la que las partes dejan de tratarse unas a otras como medios, y comienzan en cambio a tratarse como fines en sí mismos. Por último, entonces, con la aparición de una relación "ética", la contradicción se resuelve. Cada uno tiene ahora libertad en su integridad: el poder de ejercerla, y el reconocimiento social en virtud del cual su ejercicio vale la pena. El "reconocimiento" que llevó al conflicto original requiere sólo esta resolución: es *esto* —la aceptación de la autonomía personal y del derecho individual del otro— lo que otorga el verdadero reconocimiento que se buscaba. De esta manera, Hegel aboga por la tesis de que la verdadera libertad y la verdadera realización necesitan obediencia al "derecho abstracto" de Kant; y en particular a la ley que nos prescribe respetar a todas las personas, y tratarlas, no sólo como medios, sino como fines en sí mismos.

La parábola del amo y el esclavo sugiere muchas ideas —y los conservadores no poseen el monopolio de su interpretación. (Las líneas generales del argumento de Hegel sobreviven, por ejemplo, en el humanismo marxista, e incluso en la teoría de la historia expuesta en *Das Kapital.*) Para el conservador, la parábola de Hegel es importante principalmente como desafío a la concepción liberal del yo y la sociedad. Si Hegel tiene razón, entonces la libertad es un artefacto social, que nace del conflicto, el sometimiento y la lucha. Por otra parte, la "igualdad de respeto" que liberales y socialistas estiman como fundamento del orden civilizado, inherentemente nace manchada por el conflicto. Dicha igualdad ha de ganarse desde la desigualdad, y la idea de una igualdad absoluta, libre de las huellas del poder, la servidumbre y la explotación, no es sino ilusión. La historia de la libertad sobrevive en la verdadera calidad de la libertad, y es una historia de servidumbre. Tenemos que comprender nuestra condición social como emergiendo de una lucha desigual, cuya base nunca podrá ser definitivamente destruida o superada. La libertad que Hegel nos adscribe es a la vez política y profundamente antiutópica. Además, cualquier igualdad que

www.cepchile.cl

exista en este estadio de libertad es una igualdad negociada, compatible con las más grandes desigualdades en privilegios, riqueza y poder.

El encuentro entre amo y esclavo representa lo que Hegel llama un "momento" de toma de conciencia —esto es, un estrato arqueológico de nuestro ser, que se revela en todo lo que decimos y hacemos, y que sólo puede ser separado de la plétora de la actividad racional mediante ficciones y parábolas semejantes a las que Hegel nos relata. La parábola describe como un proceso lo que de hecho es un componente estructural del producto. La "dialéctica" es una representación temporal de una condición espiritual inalterable. No es absurdo ni falto de luces representar de esta manera la estructura de la conciencia humana. Porque el tiempo es la condición de nuestro ser, y la toma de conciencia entraña la necesidad constante de mitologizar su propio pasado, y de buscar dentro de sí los residuos fosilizados de una historia que procedió de otra parte, e inmemorialmente.

Representada como proceso, la dialéctica implica una transición desde la inmediatez, la escisión y la enajenación, de vuelta a una aceptación autoconsciente de una unidad nueva y comprendida. La resolución de la lucha de vida o muerte en una concepción puramente abstracta del derecho —el "derecho natural"— deja todavía la experiencia ética del sujeto sólo parcialmente "determinada". *Lo que* debe valorar, y ante *lo que* debe someterse: tales preguntas carecen aún de significación para él, y sólo adquieren sentido al separarse consiguientemente de los otros en la esfera de la "moralidad". En esta esfera estamos gobernados por obligaciones específicas, y éstas entran en pugna con la necesidad de juzgar cada acto, cada persona y cada conflicto en términos de una historia individual que la vuelve recalcitrante a los principios. La oposición entre justicia abstracta y deber concreto sólo se supera en la vida ética —*Sittlichkeit*—, en la cual las costumbres, leyes e instituciones otorgan realidad a nuestros escrúpulos morales, y reconcilian en nosotros las contrastantes demandas de autonomía y comunidad.

La *Sittlichkeit* es el rótulo que Hegel asigna a la condición social y política del hombre. También contiene dentro de sí la estructura de la dialéctica. En este ámbito, el individuo se mueve entre los lazos inmediatos del amor, el matrimonio y la procreación, y el vínculo más amplio y abierto de la competencia y el contrato. La tensión resultante entre "familia" y "sociedad civil" (*burgerliche Gesellschaft*) encuentra su resolución y realización en "el Estado" como la más alta de las instituciones humanas. En el Estado, el vínculo "inmediato" del hombre con su circunstancia, alienado en el flujo de la gran sociedad, es finalmente restaurado, "realizado" y

www.cepchile.cl

"determinado", como una forma de colmada autocerteza. Como siempre, Hegel nos previene contra una lectura literal de sus metáforas temporales:

> (...) En la esfera ética comenzamos de nuevo por lo inmediato, por la forma natural, no desarrollada, del pensamiento ético en la *familia*; luego llegamos a la *partición* de la substancia ética en la *sociedad civil*; y finalmente en el Estado alcanzamos la unidad y la verdad de estas dos formas unilaterales del espíritu ético. Sin embargo, el curso de esta exposición no significa en modo alguno que la vida ética (*Sittlichkeit*) sea *posterior en el tiempo* al derecho y la moralidad, ni que expliquemos la familia y la sociedad civil como *antecedentes* del Estado en el mundo real. Por el contrario, tenemos plena conciencia que la vida ética es el fundamento del derecho y la moralidad, como asimismo que la familia y la sociedad civil con sus distinciones bien ordenadas ya presuponen la existencia del Estado. En el desarrollo *filosófico* de la esfera ética, sin embargo, no podemos comenzar por el Estado, pues aquí la esfera ética se ha desplegado en su forma más concreta, mientras que el comienzo necesariamente es algo abstracto. (*Enciclopedia*, agregado al § 408.)

Por "familia", Hegel no quiere decir los arreglos específicos que él conocía bien, sino todas aquellas relaciones de "piedad natural" que otorgan al individuo el núcleo de identidad y apoyo moral a partir del cual se desarrolla su naturaleza social. Piedad es la capacidad de reconocer y actuar de acuerdo con obligaciones que nunca fueron contraídas. Dichas obligaciones rodean al individuo desde el nacimiento, formando su conciencia de sí mismo e invadiendo su libertad, aun antes de poseer completamente ambas. Dichas obligaciones pertenecen al hogar (y están simbolizadas, para Hegel en los *penates* romanos). La deslealtad hacia la casa familiar es una forma de deslealtad hacia uno mismo, pues significa rechazar la fuerza sin la cual la libertad, la voluntad y la razón serían gestos vanos en un vacío moral. De ahí que reconocer estas obligaciones, que no son autoimpuestas, es parte esencial de la racionalidad. Todos los argumentos para pensar que un ser racional *debe* (como afirma el liberal) reconocer una legitimidad en los derechos contractuales, son por ende también argumentos para decir que él debe reconocer legitimidad en otra cosa. Esta otra cosa es lo que el filósofo conservador debe describir y el político conservador, defender.

Resulta fácil ver por qué Hegel rechaza la teoría liberal de legitimidad, fundada en el "contrato social". Porque sólo en condición de dependencia mutua, cuando se reconoce a sí mismo como ser social, ligado por una ley moral que lo constriñe a reconocer la personalidad de otros, el individuo adquiere (o "realiza") su autonomía. Para entonces, ya existe la

www.cepchile.cl

sociedad. Por consiguiente, la sociedad no puede estar basada en un contrato, porque la autonomía individual, sin la cual no puede haber contrato genuino, presupone el orden social mismo que supuestamente se ha formado a través de ésta.

En lugar de la idea liberal, Hegel introduce un concepto de legitimidad que trasciende el arbitrio individual. Esta legitimidad no contractual se origina en la esfera de la piedad, de la cual Hegel tiene muchas cosas interesantes que decir. Sostiene que el matrimonio, que se origina en un contrato, no puede entenderse como una obligación contractual. Antes bien, es "una relación *sustancial*", y la vida que implica es "vida en su totalidad —esto es, como la realidad de la especie y su proceso-de-vida" (*Filosofía del Derecho*, § 161). En ese ordenamiento vive la especie en nosotros, y las obligaciones trascendentales, que se extienden de generación en generación, se tornan reales y vívidas en el amor inmediato entre individuos. Esta unión, que es una autorrestricción, es también una liberación, pues concede a las partes una nueva conciencia y certeza de la validez de su mundo en común (*Filosofía del Derecho*, § 162). Tales relaciones inevitablemente están dotadas de un carácter sacro para las partes, y el sentido de obligación política puede verse como una recuperación en el más alto nivel del sentido de lo sagrado, lo ordenado y lo incuestionable, que primero se adquiere a través de esos lazos de la carne.

Podemos hablar de sociedad civil como la *esfera* del contrato, pues su principio u orden (en su forma natural, realizada) es la asociación voluntaria. Sin embargo, esta "esfera del contrato" no está en sí misma fundada, o justificada, por un lazo contractual. Más bien es la arena de la construcción espontánea de instituciones, donde las obligaciones se emprenden y se cumplen, no con la sociedad como un todo, sino con sus miembros. Es aún menos cierto decir que el Estado está fundado en un contrato social. Así como no es posible explicar el matrimonio en términos contractuales,

> del mismo modo, tampoco radica la naturaleza del Estado en una relación contractual, ya sea que se considere al Estado como un contrato de todos con todos, o de todos con el príncipe o el gobierno (...) La intromisión de esta relación contractual y en general de las relaciones de la propiedad privada, en la relación entre el individuo y el Estado, ha provocado las mayores confusiones en el derecho constitucional y en la vida pública. (*Filosofía del Derecho*, § 75.)

El modo contractual de pensar introduce una ilusión de arbitrio donde no hay arbitrio, erosiona el hábito de obediencia y nos induce a tratar en términos instrumentales un ordenamiento —soberanía legal— que sólo puede entenderse y realizarse como un fin en sí mismo.

www.cepchile.cl

Por consiguiente, el Estado es una entidad cuya autoridad trasciende todo cuanto se le pueda haber conferido por arbitrio contractual, poco más o menos como su realidad histórica trasciende la vida de cualquier sujeto histórico. Tomando una sugerencia de Rousseau, y asimismo del Derecho Romano, Hegel más adelante afirma que el Estado es en el hecho una persona, no meramente en el sentido legal de poseer derechos y deberes adjudicables, sino también en el sentido moral. Tiene actividad, voluntad, responsabilidad e identidad a través del tiempo. Idea planes, considera razones —que pueden ser buenas o malas— y asume responsabilidad por sus actos. (O al menos, esa es su naturaleza en su forma correcta o "realizada".) Este Estado personal, en palabras de Hegel, es "la realidad efectiva de la idea ética" (*Filosofía del Derecho,* § 257). Por esto quiere decir que personifica y a la vez sustenta el ideal de libre existencia personal que es el *telos* de nuestro empeño. La gran persona del Estado tiene derechos que persona alguna individual puede poseer (por ejemplo el derecho de dar muerte al individuo criminal, o exigir el sacrificio supremo de aquellos que combaten en su defensa). También tiene deberes que trascienden los deberes de los individuos —tales como el de mantener un sistema imparcial de justicia en virtud del cual todos los conflictos (incluyendo conflictos con el propio Estado) se resuelvan pacíficamente. Como toda persona, el Estado no debe ser tratado sólo como un medio, sino como un fin en sí mismo —en otras palabras, su sobrevivencia y sus derechos no son negociables.

Debido precisamente a que el Estado tiene esta identidad como persona ética, debe distinguirse de la sociedad civil. Asociada con la teoría contractual de legitimidad está la idea igualmente peligrosa de que la sociedad y el Estado son una y la misma cosa. Hegel formula una advertencia sucinta y compleja contra lo que puede razonablemente ser descrito como la falacia predominante del liberalismo victoriano (la falacia que vicia casi enteramente el argumento de J. S. Mill en *On Liberty*):

> Cuando se confunde el Estado con la sociedad civil, y se establece que su fin específico es la seguridad y protección de la propiedad y de la libertad personal, entonces el interés del individuo en cuanto tal se ha transformado en el fin último de su asociación, de lo que se desprende que ser miembro del Estado depende del arbitrio de cada uno. (*Filosofía del Derecho,* § 258.)

En otras palabras, confundir el Estado con la sociedad civil es adoptar una visión instrumental del gobierno, debilitando el lazo de la obligación política. Es re-construir los vínculos de la ciudadanía y la soberanía como relaciones de interés, revocables y extinguibles a la manera de una

www.cepchile.cl

asociación de negocios. Es descuidar precisamente lo que convierte la obediencia en hábito, y la asociación civil en una profunda fuerza ética: la autoridad trascendente del orden político.

Quizás el desarrollo más significativo en la política moderna ha sido el surgimiento de sistemas políticos con el vicio opuesto al criticado por Hegel: no el vicio de disolver el Estado en el orden provisorio de la sociedad civil, sino el de destruir la sociedad civil por medio de un Estado coercitivo. La forma totalitaria moderna de gobierno —los popperianos ignorantes gustan de echarle la culpa a Hegel— no es menos la antítesis del ideal de Hegel que el Estado desechable, de quita y pon del liberal. Porque también aquí se ha destruido la distinción entre Estado y sociedad civil. Las instituciones autónomas (o "corporaciones", como Hegel las describe) —que son el núcleo de la sociedad civil— han sido todas subvertidas, y no se permite asociación alguna que no sea una rama del sistema central de control. El gobierno totalitario es, en el verdadero sentido, impersonal: al no estar sujeto a ninguna influencia correctora de la sociedad civil, cesa de responder por sus actos, y comienza a colocarse por sobre la ley, a través de la cual se empeña en imponerse. Tal vez nada reivindica mejor las dos principales concepciones de la teoría política de Hegel que la historia del poder totalitario: la teoría de que Estado y sociedad civil florecen sólo cuando no se confunden, y la idea que el Estado, en su auténtica forma, posee la identidad, autoridad y maneras de una persona.

Esto no quiere decir que la relación entre Estado y sociedad sea fácil de caracterizar o defender. La descripción de Hegel de esta relación en términos de la "dialéctica" expresa adecuadamente el hecho de que los que aquí se distinguen también están íntimamente unidos. Deberíamos tal vez comprender la relación entre Estado y sociedad, en el espíritu de Hegel, por analogía con la persona humana. La persona humana no es idéntica con su cuerpo ni distinta de él, pero está unida al mismo en un nudo metafísico que los filósofos procuran infructuosamente desatar. Al tratar a alguien como una persona, nos dirigimos a su parte racional y capaz de tomar decisiones: al tratarla como un cuerpo (cuando está enferma o incapacitada), estudiamos las funciones anatómicas que yacen fuera de su voluntad. La sociedad civil es como el cuerpo humano: es la substancia que compone el Estado, pero cuyos movimientos y funciones nacen sin intención por una "mano invisible" de asociaciones voluntarias. Y el Estado es como la persona humana: es el foro supremo de la toma de decisiones, en el cual la razón y la responsabilidad son las únicas guías con autoridad. Estado y sociedad son inseparables pero sin embargo distintos, y el intento

www.cepchile.cl

de absorber uno dentro del otro es el camino seguro para un cuerpo político atrofiado, lisiado y calamitoso.

En Hegel, el desarrollo de la idea de un Estado personal está lleno de interesantes observaciones incidentales, y no ha perdido nada de su urgencia. Como de Maistre, aboga por la santidad de las constituciones.

> La constitución, aunque haya surgido en el tiempo, no debe ser considerada como algo hecho. Más bien debe ser tratada simplemente como algo existente en sí y por sí, y en consecuencia exaltada por encima de las cosas que se hacen, como lo divino y lo constante. (*Filosofía del Derecho,* § 273.)

Aquí Hegel aboga por un "como si" verdaderamente conservador. Al considerar la constitución *como si* fuera divina, reconocemos la vida del Estado como más allá de todo arbitrio, un ente "dado", que no es instrumental a nuestras metas, ni desprovisto de derechos sobre nosotros. De esta manera hay que contemplar a las personas. Perder el respeto inherente a lo históricamente dado es embarcarse en un mar sin fin de arbitrios, en el que flotamos sin brújula bajo cielos nihilistas.

De nuevo como de Maistre, Hegel reconoce a la monarquía como la encarnación y estatuto simbólico de la individualidad del Estado. En la persona del monarca,

> la unidad del Estado se salva del peligro de ser rebajada a la esfera de la particularidad y sus caprichos, fines y opiniones, y se salva también de la lucha de facciones por el trono, y del debilitamiento y destrucción del poder del Estado. (*Filosofía del Derecho,* § 281.)

Hegel sigue más adelante razonando en favor del efecto estabilizador del orden hereditario, el que expresa en forma más convincente que ningún otro modo de sucesión la contingencia histórica del cuerpo político, y lo "dado" de sus lealtades. Agrega, sin embargo, que es siempre peligroso dar argumentos utilitarios para una institución cuya autoridad depende, en último análisis, de la simple piedad. Al dar razones consecuencialistas para la monarquía hereditaria

> se rebaja la majestad del trono a la esfera de la argumentación, se ignora su verdadero carácter como inmediatez sin fundamento y último ser en sí, y se la asienta no en la idea del Estado que le es inmanente, sino en algo exterior a ella, en alguna noción extraña como, por ejemplo, "el bienestar del Estado" o "el bienestar del pueblo". (*Filosofía del Derecho,* § 281.)

www.cepchile.cl

En tales pasajes apreciamos la fertilidad de la dialéctica, que permite a Hegel hacer justicia no sólo a las instituciones humanas y a las experiencias individuales que ellas engendran, sino también a nuestra apreciación de que el orden político, como la vida misma, contiene un núcleo que es sagrado, incondicional y central a todo lo que somos.

Los pormenores de la teoría de Hegel son enormes y de largo alcance. Así como proporcionan defensas plausibles e imaginativas de las instituciones civiles básicas —la propiedad privada, el derecho, los derechos civiles y la libertad de contrato—, también abordan sutilmente los factores más delicados del orden político, tales como la educación, el ceremonial, el bienestar y la división de poderes. Hegel no era un demócrata, si bien propugnaba un gobierno representativo en el cual el parlamento equilibraría y corregiría al poder ejecutivo. Percibió que la representación tanto puede ser amenazada por la democracia como engendrada por la misma, y que sólo podría existir mediada por disposiciones constitucionales de extrema delicadeza. El mantenimiento de estas disposiciones requiere una activa cooperación de la mayoría, y esta cooperación nunca podría asegurarse en condiciones de necesidad. En consecuencia, Hegel defiende la creación de un Estado de bienestar y da, por primera vez, el argumento tal vez más importante en favor de esa institución. El Estado, indica, no puede situarse en una relación personal con sus ciudadanos y al mismo tiempo permanecer indiferente a sus necesidades. Si bien estas necesidades no constituyen derechos —concebirlas así es una de las corrupciones peculiares del socialismo—, ellas no obstante definen deberes del soberano.

Al mismo tiempo, el libre mercado —como institución nuclear de la sociedad civil— es el instrumento necesario para la transferencia de riqueza. Por otra parte, explica Hegel, no podría haber seguridad en el hogar, ni orden establecido de generación en generación, sin acumulación de capital. Por consiguiente, el capitalismo es la consecuencia inescapable de la distinción entre sociedad civil y Estado, y el necesario instrumento de continuidad social. Esta sorprendente defensa del "orden burgués" presenta un desafío importante para el socialista moderno: porque es una defensa que se rehúsa a ver la "estructura económica" del capitalismo como el rasgo fundamental o decisivo de un cuerpo político personal. Por el contrario, es una consecuencia, un epifenómeno, que el derecho y la continuidad han vuelto necesarios. Una consecuencia similar es el sistema de clases que, a ojos de Hegel, no tiene nada de la crueldad u opresión en que se detienen tan insistentemente los socialistas. En todas estas materias, infiere Hegel, el socialista confunde lo que es accidental con lo que es esencial, y dirige su resentimiento a rasgos de la condición humana que por una parte no son

www.cepchile.cl

objetables en sí, y que por otra, son vástagos naturales de un orden singularmente apropiado para el desarrollo de la felicidad humana.

Si tuviésemos que expresar en una breve fórmula por qué exactamente Hegel es tan supremamente importante como pensador conservador, diríamos que es porque rescató al individuo humano de la filosofía del individualismo. Al considerar a las instituciones y a los individuos en su verdadera interdependencia, superó a la vez las simplificaciones del liberalismo y el peligroso deseo de los socialistas de dar fin a la política —meta final en la que los hombres serán iguales, no constreñidos y libres, y en la que el poder ya no se ejercerá. Una comprensión del individuo humano como artefacto social enseña que la desigualdad es natural, el poder es un bien, y la coacción un ingrediente necesario de la única libertad que podemos valorar. La *bürgerliche Gesellschaft* no es históricamente transitoria, ni moralmente corrupta: es simplemente la forma más alta de existencia humana, en la cual la naturaleza sufrida pero imperfecta del hombre se realiza en plenitud. Como dijera Hegel, con razón, es la realidad ética de la que dependen todas nuestras satisfacciones individuales, y sin la cual nos encontramos confundidos, alienados y faltos de libertad. □

www.cepchile.cl

RETRATO DE OCTAVIO PAZ

Enrico Mario Santí

Entrevisté a Octavio Paz muchas veces a lo largo de los casi veinte años que trabajamos juntos. Las nuestras eran conversaciones que casi siempre versaban sobre su vida y su obra, y en especial sobre aquellos textos suyos, como *Libertad bajo palabra* y *El laberinto de la soledad*, que me tocó preparar para ediciones anotadas y comentadas. Sostuvimos la presente a fines de 1996. La ocasión fue un diálogo que, como parte del libro *Retrato de Octavio Paz*, la editorial Galaxia-Gutenberg de Barcelona me encomendó oportunamente. Como ese libro es de inminente publicación, agradezco doble y especialmente a la editorial, a su director Joan Tarrida, y a mi buen amigo Nicanor Vélez el permiso de darla a conocer ahora y la confianza que ello supone. Los problemas de salud de Paz posteriores a nuestro encuentro le impidieron revisar y corregir, como solía hacer, su transcripción. En mi esfuerzo por ponerla al día, pedí a Marie-José Paz, viuda del poeta, que me ayudara en su corrección. Sin la eficiente y sesuda intervención de Marie-José el presente texto no habría sido posible.

ENRICO MARIO SANTÍ (Santiago de Cuba, 1950) ocupa actualmente la cátedra William T. Bryan de Estudios Hispánicos en la Universidad de Kentucky, Lexington. Entre sus libros se destacan *Pablo Neruda: The Poetics of Prophecy* (1982), la edición crítica del *Canto General* (1991), *El Acto de las Palabras: Estudios y Diálogos con Octavio Paz* (1998) y *Bienes del Siglo: Sobre Cultura Cubana* (2002).

Estudios Públicos, 97 (verano 2005).

Recuerdo que en aquella ocasión que conversamos en la biblioteca de su casa del Paseo de la Reforma, Paz no se sentía del todo bien. A su molestia física se unía, en ese momento, un persistente disgusto moral ante la realidad mexicana y sus discordias políticas, como reflejan los pasajes finales de nuestra conversación. A más de cinco años de habérsele otorgado el Premio Nobel, no había día en que la prensa local no publicara un ataque, crítica o vejación de sus opiniones, y a veces de su persona, casi siempre de manera gratuita. Además de ajustarse a las normas editoriales encomendadas, nuestro diálogo siguió las partes de una agenda de mutuo acuerdo. Por eso, para los que conocen las previas y muchas entrevistas que concedió el poeta, gran parte de la nuestra les resultará familiar. Acaso los pasajes más innovadores —o al menos, los que más me gustan— son aquellos donde pudimos hablar sobre sus orígenes poéticos: su lectura de Quevedo, por ejemplo; y en el otro extremo, su difícil debate con la clase intelectual mexicana, a diferencia del diálogo con el país y su pueblo, que era, y sigue siendo, fructífero.

No dejan de resonar sus palabras de entonces hoy, ocho años después, cuando la figura de Paz sigue siendo el objeto de críticas, algunas no tan veladas, incomprensiones y hasta ninguneos anacrónicos. En un reciente coloquio sobre la obra de Paz en el Colegio de México en el que me tocó participar, por ejemplo, distinguidos científicos sociales de la talla de los doctores Soledad Loaeza y José Woldenberg porfiaron en que, en el célebre discurso de Frankfurt de octubre de 1984, conocido por su título de "El diálogo y el ruido", Paz había excluido el papel de Estados Unidos de su crítica al entonces proceso de paz en Centroamérica, cuando lo cierto es que esa crítica al gobierno de Ronald Reagan aparece en al menos tres pasajes distintos del discurso; o bien en que, en el mismo texto, Paz había sido injusto con el gobierno sandinista al llamarlo una dictadura burocratico-militar al estilo de la de Cuba*.

* Entre el 19 de julio de 1979, cuando los sandinistas asumieron el poder en Managua, y noviembre de 1984, cuando se celebran las primeras elecciones después de la revolución nicaragüense, el gobierno sandinista confiscó todas las estaciones de televisión, cerró múltiples veces *La Prensa*, el único periódico de oposición, y muchas veces mandó quemar sus ejemplares; ignoró consistentemente el célebre Estatuto de Derechos y Garantías que consagra el derecho a la organización política; conculcó el derecho del líder sindicalista Fabio Gadea a abrir una estación de televisión independiente y cerró tres de sus estaciones de radio; creó los Comités de Defensa de la Revolución al estilo de los CDR cubanos; votó en contra de la condena de la ONU a la invasión soviética de Afganistán; estableció convenios con los partidos comunistas de todos los países del bloque soviético; pospuso las elecciones nacionales por lo menos cinco años; prohibió varias veces la reunión masiva del MDN (Movimiento Democrático Nicaragüense); prohibió las encuestas independientes a raíz de una que les daba a los sandinistas (en noviembre de 1980) un margen de apoyo de sólo 28%; asesinó a por lo

www.cepchile.cl

En días en que Paz el pensador se plagia, el poeta se invoca, y el hombre público que fue se tergiversa, tal vez valga la pena recordar estas palabras suyas en que recordó tantas cosas sobre su vida y su obra, su tierra y su gente.

ENTREVISTA

Una familia de escritores

ENRICO MARIO SANTÍ: *En otras entrevistas has hablado de tus primeros recuerdos literarios.*

OCTAVIO PAZ: En general, el misterio de la vocación (porque es un misterio) tiene que ver con la infancia. La vocación se manifiesta en la juventud, pero hay un período de imitación, diríamos, de modelos familiares. En mi caso fue decisiva la presencia de mi abuelo, Ireneo Paz, que era escritor. Yo lo veía leer y escribir todos los días. Sabía que había escrito memorias, novelas, de modo que fue un poco el modelo. Sí, efectivamente, en mi casa, de niño, había una gran influencia del mundo de la literatura. Mi abuelo tenía una buena biblioteca. Pero también tenía unos atriles con fotografías de autores de la época. Ahí podías ver fotos, o bien grabados, por ejemplo, de Víctor Hugo y otros escritores franceses. Pero no solamente franceses, también había hispanoamericanos, mexicanos... Estaba Pérez Galdós, que era uno de sus modelos.

EMS: *¿Norteamericanos?*

OP: Whitman, no: creo que es de adelantada, y tal vez era muy radical. Emerson sí, probablemente; también Longfellow.

EMS: *¿Pero con tu abuelo hablaste de literatura alguna vez?*

OP: Cómo no, muchas veces. Me contaba historias. Yo lo veía leer, y cuando veía que agarraba los libros, por ejemplo cuando leía a Quevedo, yo también quería leer a Quevedo. Naturalmente no entendía nada.

EMS: *¿Él te veía también a ti como escritor?*

OP: No. Yo, al principio, tuve la mayor libertad, de niño, para leer los libros que se me antojaran. Nadie se preocupó, sea por tolerancia o por descuido, en saber lo que leía. De modo que mis primeras revelaciones

menos 35 indios miskitos en la masacre de Cruce de las Balsas y después abrió una serie de campos de concentración para el resto de la tribu; clausuró la estación Radio Católica bajo cargos de difamación al gobierno; prohibió que la escuela católica La Salle contratara a sus propios profesores. Estos y muchos otros hechos, que prueban que Octavio Paz no exageraba la comparación del gobierno sandinista con el de Cuba, se pueden comprobar en el libro *Nicaragua's Continuing Revolution, 1977-1990: A Chronology*, ed. David Ridenour y David Amalsi (1990), pp. 44-255.

www.cepchile.cl

eróticas se las debo a la literatura. Leí muchas novelas que no tenía por qué haber leído a esa edad.

EMS: *También está tu padre que fue periodista e historiador.*

OP: Sí, bueno, mucho menos, porque mi relación con él fue menos íntima en la infancia. Él no estaba en la casa y había grandes ausencias.

EMS: *Pero esas cosas funcionan también de manera inconsciente, ¿no? Es decir, sabías que tu padre era escritor.*

OP: No solamente eso. Le ayudé cuando adolescente a copiar a máquina artículos o textos suyos de memorias de la Revolución Mexicana, incluso textos de placer, a veces un poco desde el punto de vista literario. Pero fue menor la influencia de mi padre, mucho mayor la de mi abuelo, y después, también, una influencia determinante fue la de una tía.

EMS: *¿Tu tía Amalia?*

OP: Sí, era gran lectora, le interesaba mucho la literatura. Pero no tradujo a Baudelaire, como tú me preguntaste hace un momento.

EMS: *¿Pero sí era una amante de la poesía francesa?*

OP: Era una amante de la novela, más que de la poesía francesa. Pero conocía bien la poesía, sobre todo de lengua española. Tenía un álbum, yo lo he contado en un prólogo de estas *Obras completas* que hemos publicado en Círculo de Lectores. Tenía un álbum y había muchos poemas de amigos suyos, poetas de la época. Entre ellos, y nada menos, un poema de Gutiérrez Nájera.

EMS: *¿Dedicado a ella?*

OP: Dedicado a ella.

EMS: *¡Versos de circunstancia!*

OP: Desde los románticos, posiblemente desde Bécquer, tal vez antes, se escribían poemas para las señoritas de la época en un álbum muy decorado con una escritura peculiar, y con ilustraciones, dibujos de pájaros o de paisajes. Era un gusto muy fin de siglo. El de mi tía Amalia era inmediatamente anterior a la Revolución, anterior a 1910: un álbum que abarca de 1880 a 1900, más o menos. Todavía lo conservo.

EMS: *Pero, aparte del álbum, ¿hablabas tú con tu tía Amalia acerca de literatura o acerca de poesía, o acerca de tu propia vocación?*

OP: Hablaba sobre todo de literatura. De poesía menos. Pero no recuerdo exactamente. Hablaba de mis lecturas más que nada, y sí, creo que le interesaba mucho cuando yo empecé a escribir. Pero ella murió antes de que yo realmente empezara a publicar. Ésas fueron las influencias fundamentales. En el caso de mi madre no fue una influencia literaria, pero sí el descubrimiento del mundo español. Para mí, España, mi descubrimiento de España, tiene dos ventanas: una inmediata, mi madre. Es decir:

www.cepchile.cl

la música española, la cocina española, el mundo hispánico, diríamos, el mundo andaluz.

EMS: *Te lo dice también un descendiente de andaluces.*

OP: Ahí está. Iba de visita con mis abuelos que habían vivido en un pueblo a una hora de Puerto de Santa María. Mi abuelo era de Medina Sidonia, un lugar cerca de Jerez. Pero la otra ventana, también decisiva, fue la literatura española y la poesía de España. Muy pronto empecé a leer y a hojear libros ilustrados de historia. Creo que de aquí los podemos ver, estos libros rojos que tú ves ahí. Entre esos tomos está la *Historia* de La Fuente. Todo eso no lo leí, era yo muy niño, pero sí lo hojeaba. De pronto se convirtieron en héroes (curiosamente, más que los héroes españoles) los árabes. Todo ese mundo islámico me sedujo. Todo esto forma parte, diríamos, de mi aprendizaje literario.

EMS: *Hay todo un romance familiar literario en esa casa donde te crías.*

OP: Sí, exactamente. Era una casa, como he dicho otras veces, con muchos libros, con muebles buenos, viejos. Nunca se compraron muebles en mi casa. Cuando había un mueble que no funcionaba bien, que parecía inutilizado, se le mandaba a reparar.

Un niño en la escuela

EMS: *Tuviste una educación bastante formal, al principio. Por ejemplo, tu kindergarten en Los Ángeles...*

OP: La etapa en que estuve en Estados Unidos fue importante. Me marcó para siempre la estancia en Los Ángeles. Después estuve en un colegio francés, El Zacatito, de los hermanos La Salle. Ahí estudié los primeros cuatro años de la primaria. Y en el último año tuve entre mis maestros a un hermano, un profesor al que le llamábamos el hermano Antonio. Nos fascinaba porque nos contaba las leyendas de la historia sagrada de un modo lleno de poesía. Los milagros, todas estas historias de la Biblia que son prodigiosas se las oímos, en versión muy depurada porque la Biblia es un libro bastante arriesgado. Después, ingresé en la segunda época en la escuela. Terminé la educación primaria en una escuela inglesa, el colegio Williams. Ahí, también, me interesó la historia y la literatura. Finalmente, entré a la escuela secundaria. Tuve una gran admiración literaria, en maestras más que en maestros. La primera aparición pública de la mujer en México es en la educación. Tuve maestras admirables que todavía recuerdo con mucho cariño.

EMS: *¿Se trata de tus primeras lecturas serias?*

www.cepchile.cl

OP: Sí, de literatura. Tuve una maestra, Soledad Anaya: celosa, muy purista. Le escandalizaba que yo defendiese, un día en la clase, a Góngora. Leía además a los modernistas, a Rubén Darío por ejemplo. Los muchachos de mi edad que empezábamos a escribir ingresamos en la Universidad y tuvimos (al menos yo tuve) una doble iniciación. Por una parte, la iniciación a la vida política de la época, de rebeliones estudiantiles. La crítica del régimen revolucionario de aquellos años. Y junto a eso, la literatura.

EMS: *¿Hasta qué punto se podría decir que esta crítica política, durante tu primera juventud, es una herencia de tu padre?*

OP: No. Es una actitud general de la época. Fundamos una unión de estudiantes, pro-obrera y campesina. Pero en el bachillerato, a mis amigos, a todos ellos, les interesaba la literatura. Para nosotros la literatura era inseparable de las visiones políticas.

EMS: *¿Y sociales?*

OP: Claro, y fundamentalmente, junto a los hijos de obreros y campesinos. Esto pasaba en el año treinta, cuando yo entré a la escuela preparatoria, al bachillerato. El año anterior había sido el de la gran rebelión estudiantil, asociada a la gran cruzada de José Vasconcelos, nuestro héroe intelectual. Mejor dicho: la gran cruzada que había fracasado. De modo que todos nos sentíamos partícipes de la derrota: de Vasconcelos, de las elecciones que, a nuestro juicio (y era verdad), el contrincante había ganado de modo fraudulento. Es el año en que nace también el Partido Nacional Revolucionario, que después se transforma en el pri. De modo que todo esto fue en 1929. Todo esto era el marco político, pero mucho más el literario.

EMS: *Ése es un momento muy importante de la literatura y no solamente en México. En realidad en todo el mundo, en Occidente en general. También has contado, por ejemplo, que fue precisamente durante esos años que en un mismo número de la revista* Contemporáneos *descubres* The Waste Land *y* Anábasis.

OP: Fue un poquito antes de esto. Quisiera hablar de los maestros que tuvimos. Desde luego Carlos Pellicer, entonces profesor de Literatura Hispanoamericana. Con él realmente empezamos a leer con mayor atención a muchos poetas que conocíamos mal. Por ejemplo a Lugones, y también a los poetas de vanguardia de ese momento.

EMS: *¿Españoles también?*

OP: Sí, claro. Es cuando aparecen los poetas españoles, los andaluces. Pero, en fin, antes de esto quería hablarte también de filosofía. Tuvimos varios maestros muy empapados en la fenomenología, la filosofía moderna, grandes lectores de la *Revista de Occidente*. Entre ellos, en primer término, Samuel Ramos.

www.cepchile.cl

EMS: *¿También era maestro en la preparatoria?*

OP: Sí, justamente. De modo que tuvimos a Pellicer, a Samuel Ramos, a José Gorostiza, aunque estuvo poco tiempo, y a Julio Torri. Ése sí fue mi maestro. Primero en el bachillerato y luego en la Facultad de Filosofía y Letras. Es el momento en que aparecen todas esas nuevas corrientes; para nosotros era la gran novedad. No entendíamos bien lo que pasaba en el mundo. Pero imagínate: estaba, por un lado, la *Revista de Occidente*. Esto significaba la filosofía alemana, que empezamos a leer muy jóvenes. Al mismo tiempo, los poetas, los novelistas, a quienes leímos muchísimo. Entre los españoles, por ejemplo, y mucho, a Benjamín Jarnés. Y a los poetas de la generación del 27. Teníamos un culto por ellos. Había amigos míos que copiaban a máquina sus poemas, porque no había bastantes ejemplares para leer a Rafael Alberti, o a Pedro Salinas, o a García Lorca. Ahí empezamos a leer a Borges, aunque no nos impresionó demasiado como poeta. Fueron unos diez años después, cuando en *Sur* Borges empezó a publicar los cuentos de *El jardín de senderos que se bifurcan*, su primer libro, que nos asombró. Pero eso ya es por los años cuarenta, cuarenta y uno. Tengo todavía la primera edición. Tengo dos ediciones: la mía y otra que me regaló Borges en papel biblia, dedicada.

EMS: *En ese momento, ¿también Neruda es el gran poeta?*

OP: Digamos que un poco después. Pero ya habíamos leído poemas de Neruda.

EMS: *Algunos de ellos en* Revista de Occidente.

OP: Algunos poemas de Neruda fueron publicados. Pero no solamente los poetas españoles. En esos años es cuando descubro la novela moderna. Yo había leído a Balzac y a Zola muy joven, de niño también a Dickens. Pero no fue hasta los años de bachillerato que leí a Proust. Para mí fue un estremecimiento, una revelación.

EMS: *De ahí viene ese ensayo tuyo que recogimos en* Primeras letras.

OP: Leímos también a Kafka, que apareció en español antes que en francés, por ejemplo.

EMS: *¿Y a Joyce?*

OP: A Joyce, sí, también. Incluso tuvimos los jóvenes una revista, que se llamó *Cuadernos del Valle de México*, en cuyo segundo número publicamos un fragmento del *Ulises*, en una traducción de un chico, amigo nuestro, mexicano. Era significativo todo el estado de inquietudes de ese momento.

www.cepchile.cl

EMS: *Se une ahí la preocupación social y política, por una parte, y por la otra, el descubrimiento de una nueva filosofía. También, una nueva poesía y una nueva literatura. Así que ése es un momento clave de tu formación, justamente. ¿Cuántos años tenías entonces?*

Un joven en la biblioteca

OP: Tenía diecisiete, dieciocho, diecinueve. Bueno, eso fue la juventud, hasta los veintitantos años. Leí muchísimo. Pero, también, desde niño había leído a los clásicos españoles. El teatro de Calderón, de Lope de Vega y de Tirso. Y en esa época, leí mucho, por influencia de la generación del 27, a Góngora. Pero me deslicé hacia Quevedo, que me interesó mucho más.

EMS: *"Nada me desengaña / el mundo me ha hechizado." Ése es el gran lema que repites constantemente en esa primera época.*

OP: Hay un problema, y es éste. En esa etapa leí una serie de poemas, que, en realidad, forman un solo poema que le llaman ahora *Heráclito cristiano, a imitación de la de David*. Pero en la versión que yo leí, que también fue corregida por Quevedo, se llama *Lágrimas de un penitente*. Para mí fue una revelación. Claro, tú comparas ese poema con los grandes poemas de la época, con la *Fábula de Polifemo y Galatea*, pues, es mucho más perfecto el poema de Góngora, que es uno de los grandes poemas europeos del siglo xvii. No es la perfección, la belleza puramente o la hermosura en un poema, como regla general, lo que nos puede impresionar más. Hay otras cosas. Por ejemplo, en la poesía latina los versos no tienen la perfección de Horacio o de Virgilio, pero tienen alguna nota profundamente personal, profundamente moderna que nos toca más de cerca. Ezra Pound, sobre todo, nos da una versión más o menos de un poema que no es una traducción, sino una recreación, diríamos. A mí, en el caso de Quevedo, me ocurrió lo mismo. Toda mi vida he tenido un diálogo con Quevedo.

EMS: *¿Te sigue pareciendo que es el primer poeta moderno?*

OP: Sí, creo que en *Lágrimas de un penitente*, o *Heráclito cristiano*, aparece esto que me parece esencial: la conciencia enamorada de sí misma. Ahora bien, esto que es un lugar común cristiano, en Quevedo tiene una exasperación que va a ser cada vez más neta, cada vez más clara, cada vez más definitiva, en los sucesores, sobre todo en el siglo diecinueve. Está, por ejemplo, en Baudelaire: la conciencia del mal.

www.cepchile.cl

EMS: *Entonces, así como vas descubriendo la poesía moderna, vas descubriendo, tácitamente, una raíz hispánica moderna, que no es precisamente contemporánea, pero sí moderna.*

OP: Quevedo es uno de los pocos escritores clásicos españoles que me ha dado esa modernidad. Pero es muy curioso: en España los otros poetas no leyeron a Quevedo como yo lo leí, desde la perspectiva que yo lo leí. El único que podría aproximarse a mi lectura es Neruda, pero no exactamente de la misma manera.

EMS: *Tampoco Borges. Borges se opone al gongorismo de la época a través de la relectura de Quevedo.*

OP: Nada más que un poco miope, diríamos. Borges vio en Quevedo a un gran retórico, un gran conceptista. Por ejemplo, su lectura del soneto al Duque de Osuna. "Y su epitafio la sangrienta..." Esto es muy hermoso, pero es retórico, una imagen retórica. Para mí lo importante no es eso. Es un poema sobre la envidia, sobre la suerte de los héroes. Está enraizado con la suerte de Escipión. Todo eso, el aspecto propiamente moral de Quevedo, no le interesó a Borges, como tampoco le interesó el aspecto propiamente metafísico.

EMS: *Es interesante. Se podría hacer una antología de cómo leen a Quevedo Octavio Paz, Borges y Neruda. Cada uno tiene su Quevedo. Paz, la lectura moral y metafísica; Borges, la lectura retórica; Neruda, la lectura apasionada.*

OP: También palpó la muerte.

EMS: *También la muerte es parte de esa pasión. Y Lezama Lima ¿cuál sería su lectura?*

OP: La de Lezama Lima es un poco también la de Borges. Lo que le interesa, sobre todo, es el sistema de metáforas, que es notable, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que cuando Quevedo habla de la risa, habla de relámpagos, de "risas carmesíes". Es un verso que podría haber sido de Góngora, en cierto modo. Claro, estamos hablando de la vocación poética, de la tentación revolucionaria, y habría que hablar también de la tentación religiosa, que se confunde con la metafísica y con la filosofía. También, por eso, me interesó Quevedo, porque es un poeta religioso negativamente. Es decir, yo no podría aspirar a tener la sublimidad de San Juan de la Cruz, que es el poeta de la unión con Dios. Pero Quevedo es el poeta de la separación de Dios. Y es un poeta muy moderno, lo cual a mí me afectó profundamente, quizá, por razones personales, en mi biografía intelectual, si tú quieres.

Después hay otro tema esencial, en mi poesía y en mi vida: la mujer.

www.cepchile.cl

EMS: *Como para todo joven, ¿no? Es muy importante la presencia o la aparición de la mujer.*

OP: Caminábamos sin cesar por la ciudad de México en busca de mujeres, esperando a *la* mujer, que nunca iba a aparecer, o bien iba a aparecer al doblar la esquina o al subir al tranvía.

EMS: *Es decir, ya eran surrealistas sin saberlo, porque eso es lo primero que se pregunta André Breton en* Nadja.

OP: El encuentro.

EMS: *Que no es realmente una cuestión literaria, sino una cuestión vital.*

OP: Vital, es lo que digo. Bueno, la separación de Dios en Quevedo tampoco es puramente literaria, tiene una dimensión humana.

EMS: *Eso es lo interesante siempre. Después de haber conocido a muchos escritores, después de haber yo mismo escrito poemas, descubrimos que la verdadera poesía es la que se basa en esas profundas experiencias vitales.*

OP: Y no bastan las experiencias.

EMS: *Tampoco, es cierto.*

OP: Pero sin ellas, hay simplemente retórica. Borges usa esas experiencias porque experimentó la tentación de la identidad propia, es decir, la fábula del espejo: ¿quién soy yo? También, la tentación de la eternidad y del infinito. Todo eso en él fue decisivo. En Neruda fueron otras cosas. En mi caso, yo creo que podríamos decir que fueron estas cosas de mi juventud: la revolución, la idea de que podíamos cambiar el mundo, el heroísmo. Y, claro está, la idea de la muerte, de mi alma mortal en este mundo.

El poeta en la calle

EMS: *Todo esto contribuye al momento en que empiezas a escribir.*

OP: La poesía fue una manera de darme cuenta de lo que yo quería decir. Muchas veces te acercas al papel atraído por una necesidad oscura de decir algo, pero no sabes qué vas a decir. Eso se nota, por ejemplo, cuando uno quiere escribir un ensayo. Cuando uno va a escribir un poema, muchas veces no sabe qué va a decir. Sientes la necesidad, pero es una necesidad que no aciertas a definir claramente. En su lugar hay una suerte de páramo angustioso. Pero de pronto una chispa, una espiga, un chorro de agua, lo que sea, te lleva a decir ciertas cosas.

EMS: *Me recuerda esto mucho al comienzo de tu poema* Blanco, *donde aparece un girasol y, de pronto, comienza a florecer la palabra.*

www.cepchile.cl

OP: Pero en *Blanco*, más o menos, yo sabía lo que iba a decir. No lo sabía claramente, porque uno nunca sabe lo que va a decir. En otras ocasiones no es así. Por ejemplo, los primeros treinta o cincuenta versos (no sé cuántos serían ahora en este momento), de *Piedra de sol*, que me fueron absolutamente dictados. Me salieron endecasílabos, perfectamente medidos, y como si yo estuviese repitiendo o transcribiendo algo que estaba oyendo dentro de mí. Estaba yo muy complacido porque eran puras ideas, imágenes que yo podía ver u oír. Las oía con gran placer. Me gustaban y no sabía adónde iban, y entonces tenía deseos de saber cómo iba a continuar esta corriente. Y por eso la imagen del río, y de los árboles. Después me di cuenta de que, aunque lo había escrito en México, en realidad estaba recordando, sin darme cuenta, ciertos momentos de contemplación al caminar al lado del Sena, no el Sena de París sino el de los alrededores de París. Otras veces no es así. Otras veces has preparado el poema, lo has pensado (por ejemplo *Blanco*), pero de pronto, en el momento de ejecutarlo, surge otra cosa, totalmente distinta. Esto ocurre también en los poemas breves y en los de extensión media. Siempre hay esta colaboración, diríamos, entre la conciencia y lo que llamamos inspiración.

EMS: *Aunque podría también llamarse el inconsciente, de alguna manera.*

OP: Pero el inconsciente quizás sea una palabra demasiado fácil.

Edición de autor

EMS: *Es interesante, Octavio, que ahora estés haciendo una edición de las* Obras completas *para Círculo de Lectores.*

OP: Bueno, los diez primeros tomos. Me arrepiento mucho de esos diez tomos, que podrían haberse reducido a un tercio, probablemente. Ahora empezamos a publicar la *Obra poética*, dos tomos de quinientas páginas cada uno. Aparece el primer tomo, que es el volumen que publicó Seix-Barral como *Obra poética*. Después, el segundo tomo va a incluir lo que he escrito después de *El mono gramático*, y hasta ahora. También, algunos poemas escritos en colaboración, un experimento importante como, por ejemplo, *Renga*, o el libro escrito con Tomlinson, o bien otro que escribí en la India, que me gusta bastante. Finalmente, las traducciones. Considero que en mi caso no son meras traducciones, sino recreaciones poéticas. Hay algunas traducciones que me gustan, tanto o más que lo mejor que yo he escrito. Por ejemplo, ciertos poemas de Pessoa o bien ciertas libertades que me he tomado con una traducción de originales que yo ignoro. Ignoro, por

www.cepchile.cl

ejemplo, el chino y el japonés; pero a través de versiones al inglés, al francés y a otros idiomas, he podido rehacer ciertos poemas en español. Con algunos de ellos estoy contento. Lo mismo con los sonetos de Nerval, o con algún poema de John Donne. Todo eso va en el segundo tomo junto con los poemas que he escrito después de *El mono gramático*, es decir, después de 1975, la obra final.

EMS: *¿Incluye tus primeros poemas?*

OP: No. Después, hay un volumen que se llama, no tiene todavía un título claro, pero por el momento se va a llamar *Primeros escritos*. En eso se ha empeñado el editor. A mí no me acaba de gustar, pero está dividido en dos partes: una, el libro que hicimos contigo, en el que tú ayudaste, fuiste definitivo en eso, *Primeras letras*, y antes, los poemas. Es un librito de unas ciento cincuenta páginas, más o menos, que se llama *Primera instancia*. Ahí están los poemas inéditos, los que escribí cuando tenía diecisiete años. Estuve dudando mucho. Me dije: ¿Publico esto o no? Mi primera idea fue no publicarlo, pero me ocurrió esto. La edición se llama *Obras completas*: parecía desleal no publicarlo. Después me di cuenta de que si no lo publicaba yo, lo iban a publicar otros más tarde, que es lo que le ha pasado a Borges y lo que le ha pasado a mucha gente, a muchos poetas. Mejor atreverse y con un poco de impudicia probablemente. En eso tengo el precedente de Neruda y de otros poetas. Voy a publicar los primeros poemas sin alterar los géneros. Hay alteraciones, pero no son de ahora, son antiguas. Es decir, no tal como aparecieron —te voy a explicar eso. En algunos casos, hay una primera versión, pero de esos años, es decir, de la misma época, en que hay pequeñas modificaciones, o raras modificaciones. Son poemas escritos entre 1931, cuando tenía diecisiete años, y 1943, cuando tenía veintinueve. Te voy a explicar por qué hay esa ruptura: la primera parte está compuesta por poemas que nunca han sido recogidos, casi todos publicados en periódicos, por ejemplo *El Nacional*.

EMS: *¿Como el famoso* "Cabellera"*?*

OP: Sí, hay otro más que no recogieron, que está en *El Nacional* también. Se trata de poemas publicados en *Barandal*, una revista que hacíamos en aquella época, en *Cuadernos del Valle de México*, y en otras más. Son una serie de poemas y tres o cuatro inéditos. Bueno, a mí me gustan, me divierten, son juguetes. Me divirtió verlos.

EMS: *¿Eran juguetes cuando los escribiste?*

OP: Más bien, desafíos. Porque estaba yo contagiado por la poética del momento. Había que hablar del patín, del tenis, del deporte. Luego hay este pequeño libro, que es el más débil, a mi juicio, *Luna silvestre*, donde todavía hay algún verso que podría salvarse. Pero, en fin, hay que publicar-

www.cepchile.cl

lo todo. Después, todo el libro *A la orilla del mundo*, lo primero que publiqué que, realmente, ya tiene cierto interés, del cual me avergüenzo por la imperfección, pero no por lo que está detrás: la imperfección que es "Raíz del hombre" o "Bajo tu clara sombra", todos esos poemas. Y después, está otra sección de poemas sobre España, dos nada más porque el tercero está en el otro tomo. Y también, la primera versión de *Entre la piedra y la flor*, muy distinta a la segunda. Algunos de esos poemas fueron publicados en revistas y algunos en la primera edición de *Libertad bajo palabra*, que luego retiré. Les he puesto el título original de *Vigilias*. Son poemas un poco de introspección bajo el signo del análisis íntimo, poemas más bien negros, de soledad, no quevedescos pero sí dentro de esa poesía de reflexión interior. Y termina todo en 1943. Tenía veintinueve años, aunque muchos de los poemas escritos en ese período han pasado al tomo de *Obra poética*, porque me parece que ésas sí son obras. Otras se quedaron en borradores, se quedaron en intentos, y las publico porque ya todo fue publicado. Si no, lo hubiera destruido, excepto los cuatro primeros poemas inéditos, que me parecen graciosos, como una cabriola de jovencito.

EMS: *Me alegro de que todo eso por fin se publique; nos da una imagen mucho más completa de esa primera época. Conocíamos ya bastante bien la prosa, que habíamos publicado. Este es el complemento que faltaba.*

OP: Es interesante por dos razones. Primero, porque no las condeno totalmente: las veo con cierta ironía y piedad. Después, porque algunas personas me han criticado con bastante malevolencia que yo he ocultado poemas por razones de orden ideológico, político. No es cierto. Ahora que los voy a publicar, se verá que los poemas ideológicos son muy pocos, y que, además, retiré esos poemas porque, simplemente, no me satisfacían poéticamente. Pero no por ninguna otra razón. Los publico porque no tengo más remedio, pero no me gustaría hacerlo.

Un director de revistas

EMS: *Hablemos ahora acerca de esta época, acerca de estos poemas que publicaste en revistas en las que colaborabas y en algunas que dirigías, por ejemplo,* Taller, Barandal, Cuadernos del Valle de México. *Eso es impresionante. A lo largo de tu vida has estado íntimamente involucrado también en la creación de revistas. Es el Octavio Paz dedicado, también, a la creación de contextos culturales: a agrupar a gente en la*

www.cepchile.cl

creación. Ha sido una contribución positiva al desarrollo humano de las personas. La institución de la revista ha sido tu manera de hacerlo.

OP: Sí, es verdad. Al principio de esas revistas no fui yo el editor. Éramos un grupo de jóvenes. Siempre que un grupo de jóvenes escritores se juntan, quieren modificar al mundo, quieren llegar al cielo, quieren defender el infierno, y lo único que se les ocurre es fundar una revista. Éste ha sido el secreto. Después, la fundación de revistas ha obedecido a razones de orden espiritual y, también, ideológico. Por ejemplo, *Taller* no la fundé yo, la fundamos con un grupo de amigos.

EMS: *Yo no lo veo tanto como una cuestión ideológica, sino más bien de moral poética.*

OP: El caso de *Taller* fue más bien de moral literaria. Era un grupo de jóvenes que no teníamos pleito con la generación inmediatamente anterior, pero sí nos sentíamos distintos. De ahí creamos la revista. Después, me hicieron director a mí porque poco a poco los demás fueron abandonándola. Además, hubo gente que daba dinero pero que pidió que alguno fuese responsable y mis amigos decidieron que yo fuese el responsable. Hicimos doce números. Después, otras revistas en las que he participado, como *Letras de México* o *El hijo pródigo*. Fui uno de los redactores. Pero lo hice siempre con mucho interés, con mucho entusiasmo sobre todo. En el caso de *El hijo pródigo*, en los siete primeros números colaboré activamente. Después me fui del país. Muchos años después, fundé *Plural*. Ahí sí hubo una moral cívica y espiritual. Creía que el país se asfixiaba, que no había una crítica de la sociedad totalitaria, que los jóvenes rebeldes habían olvidado rebelarse contra las tiranías totalitarias.

EMS: *El problema vino después del 68. Aquí en México, me refiero.*

OP: Yo esencialmente estuve a favor del 68 en lo que tenía de reforma, en lo que tenía de aspiración democrática. Eso fue lo fundamental y estuvo bien. Lo que no estuvo bien fue la actitud que vino después, con los grupos que siguieron al 68. Algunos de ellos se convirtieron en terroristas. Para mí era urgente desinfectar a toda la cultura mexicana.

EMS: *Lo interesante acerca de* Plural *es que en ese momento hay una revisión histórica de México y de América Latina, un revisionismo histórico.*

OP: Hay que decir que me ayudaron varias gentes. Yo solo no habría podido hacerlo.

EMS: *Por ejemplo, gente como Cosío Villegas.*

OP: Sí, claro, de la generación anterior, o bien, gente joven como José de la Colina o Alejandro Rossi, al final Enrique Krauze. Sobre todo, una defensa de la literatura, de la literatura mejor de México y de América.

www.cepchile.cl

Severo Sarduy empezó a colaborar y todos, creo que todos, los que valían propiamente, como Juan Goytisolo.

EMS: *¿Carlos Fuentes?*

OP: Carlos Fuentes fue uno de nuestros colaboradores más constantes. Pero aparte de eso, también quise abrirla a una serie de movimientos nuevos. Por ejemplo, la antropología, el estructuralismo de Lévi-Strauss, la lingüística de Jakobson, la resurrección de una posible nueva vanguardia, como la música de Cage. En fin, poner al día al país. Es lo que quisimos hacer y es lo que hemos querido continuar en *Vuelta*.

Una defensa de la poesía

EMS: *Este año, 1996, se cumplen los cuarenta años de la primera edición de* El arco y la lira*. Aunque es un libro que, en realidad, tú empezaste a escribir antes de 1956.*

OP: En el cincuenta y seis lo entregué. Lo terminé antes, creo que en 1955.

EMS: *Pero lo habías empezado a escribir en Córcega.*

OP: Empecé en el 51, 52, y lo interrumpí porque tuve que viajar a Oriente. Fue el primer viaje. Después continué, pero en cuanto llegué a México en el año 53, seguí, aunque tenía que trabajar. Yo no he vivido de mis libros sino hasta muy tarde. He vivido del trabajo de diplomático. Tenía que trabajar todo el día, y la noche o los *weekends* dedicarlos a la escritura de poemas, o de *El arco y la lira*, o del libro que tuviese entre manos.

EMS: *Me da la impresión que* El arco y la lira *es el crisol donde se funden todas tus experiencias poéticas, en el sentido de que todo el conocimiento poético, todo el conocimiento de tus poemas, se viene a resumir, a articular, en ese libro. También creo otra cosa: que los otros libros sobre poética, y sobre la poesía que has escrito a partir del año cincuenta y seis, son reiteraciones.*

OP: O ampliaciones.

EMS: *O revisiones, o críticas, de ese libro fundamental.*

OP: La semilla está en un pequeño ensayo juvenil, "Poesía de soledad y poesía de comunión", en el que tomo como emblemas a San Juan de la Cruz y a Quevedo. Lo que escribí en *El arco y la lira* es un desarrollo de todo eso. No sé si ahora escribiría lo mismo que escribí en *El arco y la lira*. No me arrepiento de haber escrito lo que escribí, aunque ahora me parece una empresa quimérica.

www.cepchile.cl

EMS: *Es cierto que* El arco y la lira*, por ejemplo, es un libro en el que, un poco como en* El laberinto de la soledad*, echas mano a otras áreas del conocimiento, como la antropología, o la lingüística o la religión...*

OP: O la filosofía. La poesía es una respuesta o bien una expresión de la condición original de los hombres, y luego tiene características especiales que la distinguen esencialmente de la religión, que es otra respuesta de la filosofía... pero es tan legítima como ellas. Eso lo sigo pensando.

EMS: *Por eso, entonces, se puede decir que* El arco y la lira*, al igual que tus otros textos posteriores, son una defensa de la poesía, en el sentido de que sitúan la poesía en relación con otros, como se dice hoy, discursos, otros modos de pensamiento, otros modos de análisis. Además de que en el momento en que piensas en todas esas cuestiones, la poesía no se considera uno de los discursos legítimos de análisis. Por ejemplo, pensemos en lo que Sartre había escrito sobre Mallarmé o Baudelaire.*

OP: Ya Sartre había escrito antes *Qu'est-ce que la littérature?*, donde hace una crítica de la poesía.

EMS: *Y del poeta.*

OP: Sartre estaba totalmente equivocado. Pensaba que la poesía no es literatura.

EMS: *Ni es comprometida.*

OP: No puede serlo, según él, porque la palabra se transforma en objeto, como en el caso de la pintura o de las otras artes, mientras que la prosa, aunque sigue teniendo valores físicos, es fundamentalmente sentido.

EMS: *Te tiene que haber turbado enormemente haber leído esto, ¿no?*

OP: Sí, bueno, pero no lo creí. Creí desde el principio que era un horror. Sartre estaba, en primer lugar, considerando la poesía desde una perspectiva muy francesa, muy reducida, sobre todo del simbolismo, del surrealismo. Pensaba que había otras aproximaciones.

EMS: *Pero lo curioso es cómo, en ese momento, nadie le contestó.*

OP: Yo sí le contesté, aunque no directamente.

EMS: *Tú sí, pero yo digo sus contemporáneos, por ejemplo, Merleau-Ponty nunca le contestó.*

OP: Estaba de acuerdo con él...

EMS: *Breton tampoco.*

OP: Pero no porque creyese que Sartre tenía razón. Le pareció que aquello no tenía ni pies ni cabeza.

EMS: *Pero no asumió la responsabilidad, por así decirlo.*

OP: Es que en Francia había habido un abuso de la poesía, de desprecio a la poesía. La poesía no era significante. Había que verla desde

www.cepchile.cl

un punto de vista simplemente estético, superior (lo que pensaba Valéry), o bien, como una expresión mística, de cierta realidad escondida, que eso sería el surrealismo. Olvidaban la ambigüedad esencial del acto poético y sobre todo, la ambigüedad esencial del lenguaje.

EMS: *Creo que ése es el mérito singular de* El arco y la lira. *Para utilizar un concepto sartreano, le crea otra "situación" a la poesía; vuelve a situar a la poesía dentro de su verdadero contexto.*

OP: Hay que decir que ya había antecedentes en Heidegger. De modo que este libro le debe no todo, pero sí algún capítulo central. No lo habría podido escribir sin Heidegger. Eso lo digo con mucha melancolía porque en ese momento ya se sabía que él había sido nazi; es decir, que había tenido simpatías nazis, aunque que habían sido transitorias. Yo no conocía bien la biografía. A mí lo que me impresionó de Heidegger, sobre todo, fue lo primero que leí de él en *Cruz y Raya*: "¿Qué es Metafísica?" Es un ensayo sobre la nada, extraordinario, y después leí, con mucha atención y con mucho cuidado, *Ser y tiempo* y las interpretaciones de varios otros, entre ellos la de José Gaos, pero no la única de este libro. En fin, un libro muy difícil, ahora le repruebo muchos aspectos. Me parece que es, a veces, inútilmente complicado.

EMS: *Es muy alemán, entre otras cosas.*

OP: Pero fíjate que Kant puede ser aburrido, pero no es despreciable. Me dijo un día Ortega y Gasset, quien tuvo simpatía por mí (pensó que yo no era totalmente estúpido): "Deje la literatura, deje la poesía y la literatura, póngase a pensar en serio y aprenda alemán, porque son las dos lenguas filosóficas, el griego y el alemán. Aprender el griego, a estas alturas, es un poco difícil, así pues, por lo menos alemán." A mí me da tristeza porque creo que en lo de Heidegger hay una parte absolutamente perecedera, de mucho análisis. En ese momento yo no estaba familiarizado, tampoco, con la ciencia sino en términos muy generales, como buen hijo de mi época literaria. Había leído a Freud, esas cosas, pero la "ciencia ciencia" la conocía mal.

EMS: *La física, por ejemplo.*

OP: Todo esto, después de que lo he leído me ha asombrado. Heidegger era un enemigo de la técnica y la ciencia. Yo no lo soy. En el caso de Sartre y otros muchos, su ignorancia de la ciencia moderna es notable. Pero eso se puede extender a gente que tenía conocimientos científicos, como León Trotski. No sabía nada de matemáticas modernas, de la lógica moderna, estaba empeñado en la dialéctica, y no sabía que había una nueva lógica. Es decir, fui víctima un poco de las dos culturas: la cultura científica y la cultura humanística. Después lo he tratado de rectificar, no sé si lo

www.cepchile.cl

he logrado. Las lagunas de ese libro pecan de por ahí. Sin embargo, lo esencial del libro lo sigo defendiendo. Aparte de que tiene algunas páginas que están más o menos bien escritas.

Poema y pintura

EMS: *Has colaborado muchas veces con pintores. Esta colaboración entre pintor y poeta, ¿a qué se debe?*

OP: A muchas cosas. En primer lugar, yo siempre tuve afición a la pintura. Bueno, tuve afición a todas las artes. Hemos hablado del descubrimiento de la filosofía moderna en el bachillerato, pero también hubo el descubrimiento de las artes. Claro, lo que pasa es que yo nunca me he sentido con autoridad para hablar de música, que es demasiado técnico, o de arquitectura, pero sí de las otras artes visuales, y propiamente de pintura. En mi caso, desde muy joven, me interesaron las artes visuales. Poco a poco han sido, en general, colaboraciones por amistad. Después, a los editores, algunos dueños de galerías, les ha interesado hacer esos libros de arte.

EMS: *Por ejemplo, el de Cy Twombly, un libro muy hermoso.*

OP: Yo no escribí nada, los poemas estaban escritos, pero él escogió los poemas y los ilustró.

EMS: *Es uno de los pocos libros de arte tuyos que he podido adquirir. Uno de los últimos que me ha gustado mucho, que vi fugazmente, es el de Balthus. Lo vimos en Nueva York cuando estuvimos en el homenaje tuyo de la Academia de Poetas Norteamericanos.*

OP: No lo he vuelto a ver. Es un libro muy bonito. Quiero mucho a Balthus. Soy viejo amigo, y de su mujer también. Los vimos ahora en París. Tiene 87 años.

EMS: *Pero lo interesante es cómo éstas han sido coincidencias amistosas. Ciertamente lo fue en el caso de Tamayo.*

OP: Ahí había más. Ahí había una defensa de Tamayo. Formaba parte de la lucha. Hemos hablado de esas luchas, que no son políticas, sino más bien de otro orden. Tiene que ver con la política. Tamayo había sido excluido del arte mexicano por los muralistas y por los críticos. Yo fui uno de sus primeros defensores.

EMS: *Lo mismo ocurrió con Buñuel.*

OP: Sí. Sobre Tamayo habían escrito Xavier Villaurrutia y algún otro. Pero nunca lo habían defendido. Lo habían exaltado como un pintor excelente y nada más. Yo fui el primero que me atreví a enfrentarme al

www.cepchile.cl

dogmatismo de los muralistas y de los críticos. En el caso de Buñuel fue algo parecido, pero distinto. En Buñuel lo que pasa es que *Los olvidados* no fue enviada por el gobierno mexicano al festival de Cannes. No sólo eso: hubo mucha gente que criticó la película.

EMS: *Porque daba una imagen "falsa" de México.*

OP: Entre ellos, Fernando Benítez y...

EMS: *La izquierda y la derecha unidos por el dogmatismo de la representación de México, de crear una "falsa imagen" de México.*

OP: Yo admiré desde el principio a Buñuel: lo quise mucho y lo admiré mucho.

EMS: *En el festival de Cannes, tú mismo repartiste las hojas de presentación.*

OP: Sí, claro, él estaba muy enredado con eso. Había una correspondencia entre Buñuel y yo en ese momento. Después Buñuel pensó que yo podría hacer una película con él y no la hicimos: *San Simeón, el Estilita*, el asceta cristiano, ¿te acuerdas? Tengo una carta de Buñuel explicando por qué no colaboró conmigo en eso.

EMS: *Krasno es otro pintor con quien colaboraste, ¿no?*

OP: Bueno, Krasno menos. No pudo dar mucho. ¡Lástima! El libro que hicimos juntos fue idea totalmente suya. Yo no intervine para nada. En realidad, en ninguno intervine, en el sentido de que les dijera cómo había que hacer las cosas, pero habíamos escogido los poemas, o los textos, incluso en el caso de Tamayo. En el caso de Tamayo, ilustró *¿Águila o Sol?* espontáneamente. Hizo tres dibujos que se han perdido: los ando buscando y no los encuentro. Tàpies también. Estos libros ilustrados por pintores les ayudan al poeta moderno a sobrevivir. A mí no tanto. Pero a muchos amigos míos, que no tenían entradas, les sirvieron muchísimo. Además, yo creo que es una tradición, eso sí me gustaría decirlo, de la pintura moderna. Hay antecedentes: Lope de Vega habló de pintura y Rubens de poesía. Pero esta colaboración entre pintores y poetas empieza, sobre todo, en la época del simbolismo. Empieza con Baudelaire, y luego, la continúan los simbolistas. Es sobre todo, una tradición francesa, que yo adopté y estoy muy contento de haberla adoptado.

Poesía y cine

EMS: *También es interesante tu otra intervención directa en el cine. Has hablado en otras entrevistas, por ejemplo, acerca de tu fugaz trabajo con Jean Malaquais en esa lejana película* El Rebelde *con Jorge Negrete.*

www.cepchile.cl

OP: Es una adaptación de un cuento de Pushkin. Pero eso fue puramente potencial económico, alimenticio.

EMS: *Sí, lo mismo de tu fugaz intervención como agente de doblaje de películas en Nueva York. Pero claro, nada de esto explica tan bien la fascinación que tú has sentido por llevar la palabra poética a la pantalla. Hace poco realizaste un impresionante video del poema* Blanco *y así cumpliste tu viejo sueño de hacer que la tecnología se ponga al servicio de la poesía. ¿Crees que lograste ese experimento en el video?*

OP: Yo no puedo ser juez naturalmente. A mí me gusta, está bien hecho, con medios artesanales. Posiblemente se podría haber hecho mucho mejor. Pero creo que está bastante bien hecho y es una tentativa que ojalá tenga prolongación, no solamente en mi caso. Sería bueno que algunos poetas se arriesgaran a este tipo de experiencias. Después de todo se ha hablado muy mal de la televisión, pero yo creo que se habla mal por la manera en que la estamos usando. Podría ser un instrumento, como la radio, como los otros medios de comunicación, maravilloso.

EMS: *Hay algunos desarrollos interesantes en la televisión norteamericana, o europea. Por ejemplo, con la cuestión esta que se llama mtv, la tv musical: canciones que se actúan, se dramatizan, presentan situaciones que yo al menos asocio con el surrealismo.*

OP: Claro que los surrealistas se habrían quedado encantados. Lo que pasa es que todo eso se ha mercantilizado. El gran peligro es el mismo: son medios que se han transformado en grandes industrias. También la edición es industria, pero no de un modo tan directo como lo es la televisión y la radio. Pero quisiera añadir algo. Cada época tiene sus medios de comunicación. No sabemos cómo los primitivos decían los poemas. Probablemente los acompañaban con músicas, cantos y danzas, pero no sabemos cómo. Sabemos que los griegos recitaban los poemas. Yo he visto en la India cantar poemas, es una tradición. En fin, esto siempre ha ocurrido con los trovadores: el poema como palabra hablada. El poema como escritura aparece, por ejemplo, en la Edad Media: el libro ilustrado, las miniaturas. Con la imprenta todo cambia, pero no cambia totalmente. Cambia la manera de oír el poema; ya no lo oímos: lo leemos. Pero cuando lo leemos, lo oímos. Cuando tú lees un ensayo o una novela estás siguiendo, en el caso de la novela, las peripecias, o los análisis psicológicos, o las divagaciones del autor. Pero en el caso de un poema, no: tienes que leerlo y oírlo, aunque sea mentalmente, oralmente. Entonces, eso quiere decir que la poesía (y por eso Sartre estaba equivocado) ha conservado sus valores significativos. No es cierto que sea puramente sonoridad. Al mismo tiempo no rompe con los valores físicos, por ejemplo con el sonido, y hay también

www.cepchile.cl

imagen poética. No todos los poemas, pero sí muchos, producen una imagen visual. En todos los poemas, de pronto, hay imágenes que tú ves con los ojos como ves una imagen en el cine, o un relámpago en el cielo de la noche.

EMS: *Por eso, precisamente, el video de* Blanco *es tan impresionante. Logra captar ese paso que es, no precisamente intelectual, pero sí visual, sin abandonar el contenido referencial que se quiebra sobre todo con los colores.*

OP: Ahí está. Lo que pensé siempre es que el cine y la televisión podrían ser buenos transmisores de poemas, pero que había que encontrar la forma. *Blanco* es una tentativa. Pero puede haber otras aproximaciones: no digo que sea la única. Lo que no me parece bien es la práctica norteamericana moderna de hacer que el poeta diga sus poemas en la televisión. Eso tiene interés, pero no mucho. Más interés tiene crear una obra que se desprenda. Yo creo que la obra poética debe desprenderse del autor. Aún la radio es muy importante porque está nada más la voz: no te molesta la presencia de un señor diciendo los poemas. Es lo que traté de evitar también en *Blanco*.

EMS: *No hay personajes.*

OP: Hay frases, imágenes y sonidos.

EMS: *Y alguna que otra letra.*

OP: Sí, y letras. De hecho, podría haber usado más letras, pero era muy difícil. Quizá en otra pantalla más grande hubiéramos podido utilizar más letras, en movimiento, quizá. Una de dos: o se extingue, pero entonces sería una pérdida muy grande para la poesía, o bien la poesía logra introducirse en los nuevos modos de comunicación. En ese caso, inaugura un porvenir muy distinto al resto de la literatura. Porque la novela hoy día se convierte en telenovela, en *soap opera*. Yo no sé qué va a ocurrir con la novela. Mientras que en el caso de la poesía, puede cambiar, como el ejemplo que tú pusiste de la música visualizada.

Poesía e historia

EMS: *Hace cuarenta años escribiste y publicaste* El arco y la lira. *Pero hace ya casi cincuenta publicaste* El laberinto de la soledad, *donde describiste, y criticaste, un país y una gente.*

OP: Bueno, México.

EMS: *Sobre todo, lo que toca al trato entre las personas. Después de haber hecho una edición de* El laberinto de la soledad, *después de haber*

www.cepchile.cl

pensado en ese libro, una de las cosas que siempre me ha impresionado acerca de ese libro es que es un lamento acerca de cómo la gente se trata.

OP: No creo que sea un lamento.

EMS: *Al menos una crítica. Una descripción.*

OP: Es una descripción del trato en una sociedad. Es un libro sobre una sociedad. Una sociedad no es lo que piensan los hombres únicamente, lo que hablan y piensan entre ellos. La palabra *entre* es fundamental porque la sociedad es relación sobre todo y la palabra *entre* es, sobre todo, eso: relación. A veces relación de oposición, a veces de afinidad. Porque soy mexicano: no podía describir otro país. Mexicano de una clase social y de una región. Hay partes de mi libro que seguramente no se aplican a los campesinos mexicanos, o a los indios de Oaxaca, o de Chiapas. En otros ensayos me he ocupado de ellos y sobre todo, de sus antepasados, de historia del arte por ejemplo. Me ha interesado mucho el mundo precolombino. Creo que soy el escritor mexicano que ha escrito más sobre el mundo precolombino: más de la mitad de mi libro *Los privilegios de la vista* es sobre arte precolombino y sobre la sociedad precolombina. Pero son estudios más bien históricos.

EMS: *Mientras que* El laberinto de la soledad...

OP: Es una descripción viva, de la cual soy testigo.

EMS: *Me da la impresión que el libro surge de una angustia, aunque para ti era evidentemente una falta de relación.*

OP: Bueno, lo que es, sigue siendo, una falta de relación, perversa o dañina. Una relación, como todas las relaciones, hechas de amor y de odio, de miedo y de descubrimientos. Es lo que quise expresar. Cuando escribí el libro me di cuenta de un tema esencial: los hombres están solos. Es un tema universal. Y los hombres quieren remediar su soledad de muchas maneras. El ermitaño no existe, el ermitaño es un fenómeno aislado. Incluso cuando se aísla, el ermitaño lo es porque atrás está la comunidad. De modo que el hombre es siempre un ser comunitario. Las comunidades humanas son imperfectas y están movidas por este doble ritmo de unión y separación. Y en este caso, en México, esto es particularmente cierto. México es un fragmento de la historia universal. México como nación, como país, nació cuando se quebró el imperio español. El mundo precolombino no conoció al *otro*: se conocían ellos mismos. Era una sociedad cerrada sobre sí misma, dividida en distintas naciones que guerreaban sin cesar. Esto es lo mismo aplicable a las altas civilizaciones de México como a las planicies de los nómadas de Estados Unidos, donde hubo guerra continua entre ellos. La colonia española, la dominación española, resuelve esto en una unidad. Por una parte unidad política, el Virreinato: por la

www.cepchile.cl

fuerza e impuesta. Por otra, unidad religiosa: no solamente impuesta sino adoptada por los nuevos creyentes. Después, México se convirtió en una nación católica. Pero el catolicismo dejó de operar, y en el siglo diecinueve ocurren dos cosas. Una es la gran ruptura, a fines del dieciocho, principios del diecinueve: la gran dispersión, la gran fragmentación de España. Surge en todos estos países de América Latina. Uno de ellos es México, que quiere buscar o encontrar una nueva universalidad, una nueva manera de insertarse en el mundo. La otra es la soledad, no solamente la soledad de cada miembro, de cada mexicano, sino también de la colectividad del país. Y creo que es aplicable a toda América Latina.

EMS: *Yo leo el libro en un curso que doy sobre Literatura y Sociedad en América Latina. Comenzamos con* El laberinto de la soledad *como una introducción a América Latina, no sólo a México.*

OP: ¿Cuál es la reacción de los jóvenes?

EMS: *Se quedan deslumbrados. En la universidad norteamericana los estudiantes están habituados a dos cosas: o bien, a leer literatura, o bien historias oficiales. Tu libro es distinto: un ensayo literario que va dando opiniones acerca de cosas extrañas: los "pachucos" de Los Ángeles, reflexiones acerca de La Malinche y Hernán Cortés. En general, el libro toca una estructura profunda.*

OP: Hay otros elementos que no aparecen en otros países. Por ejemplo, el mundo precolombino no aparece en Argentina, en Cuba apenas. En Cuba lo que aparece es el elemento negro.

EMS: *Claro. Pero en última instancia, eso no es lo importante. Lo importante es la soledad del ser humano, sobre todo en una situación en la que la modernidad, en vez de resolver ese problema, lo agrava. Ése es el fenómeno de América Latina.*

OP: Y no hemos podido todavía insertarnos en la modernidad. Al contrario.

EMS: *Lo que hemos hecho es tratar de resolver el problema complicándolo a partir de otro concepto manipulado: la modernización.*

OP: No somos los únicos. Sin hablar de los países asiáticos, sin excluir a Japón que también tiene grandes problemas íntimos, digamos un ejemplo europeo, o casi europeo: Rusia. Los rusos, ahora lo estamos viendo después de setenta años de comunismo, no acaban de ser modernos.

EMS: *Pero también creo que el argumento tuyo es doble. México, afortunadamente, no se ha podido insertar completamente en la modernidad porque su premodernidad de alguna manera lo salva. La modernidad tampoco es la solución.*

OP: Nos ha preservado, pero evidentemente no es una respuesta.

www.cepchile.cl

EMS: *¿Hay respuesta?*

OP: El mundo ha cambiado. Hay problemas ahora que no existían hace cien años.

EMS: *El tráfico, por ejemplo.*

OP: Yo estaba pensando en el *polumo*. Eso no existía. Pero, de todos modos, esto es consecuencia de la historia de México. No había tampoco sobrepoblación. Era un país con pocos habitantes y ahora tiene más de cien millones. Los problemas se han agravado. Lo esencial es el gran problema de la convivencia. Primero entre los mexicanos, y frente al mundo: sigue siendo la gran interrogación de México.

EMS: *En ese sentido, creo que el libro es vigente. Es decir, todavía hace las mismas preguntas que todo el mundo se hace y no se pueden responder fácilmente.*

OP: Solamente que seas un fanático y tengas una respuesta a todo eso. La Iglesia católica lo dice así. También el Partido Comunista: ellos tienen la solución y a los que no estén de acuerdo hay que fusilarlos.

EMS: *Tú tienes, de hecho, el raro privilegio de ser el único escritor y, que yo sepa, la única figura pública que ha sido quemada en efigie en México. Lo más terrible es que desde que ocurrió, en 1984, nunca ha habido ninguna retracción, o siquiera una reflexión, sobre este acto.*

OP: Así es. En el momento en que esto ocurrió yo estaba fuera de México. Muy pocos protestaron, no llegaron a diez. Después, nadie ha dicho ni media palabra. Cuando recuerdo esto, o cuando alguien lo recuerda, hay una incomodidad generalizada, un poco como decir "calzones" en la sociedad burguesa de fines de siglo: palabras inconvenientes. Eso confirma *El laberinto de la soledad*. Nuestra incapacidad para aceptar la realidad.

EMS: *Pero también tiene un aspecto institucional que a mí por lo menos me indigna. Hoy en un taxi pasé frente al Museo Nacional de Antropología. Pensé en la "crítica de la pirámide", en el ensayo* Postdata *y en la crítica que le hiciste al museo en ese momento, la falsificación de la historia de México. Me preguntaba entonces: ¿habrán los científicos de inah rectificado, o reflexionado, sobre esa crítica de una persona que, con buena fe, ha hecho una observación sobre su tarea? Me entró una melancolía terrible al pensar que la sordera todavía existe a ese nivel institucional.*

OP: Sí, existe sobre todo entre los intelectuales, y en el medio oficial. Hay otros ejemplos de esta suerte de incapacidad, no sé cómo llamarla. Por ejemplo, el arzobispo de México hace unos meses condenó el libro mío sobre Sor Juana Inés de la Cruz porque le parecía blasfemo.

www.cepchile.cl

EMS: *¿Sin haber hecho una reflexión?*

OP: Pero, además, él no tiene autoridad para hacerlo. El pobre arzobispo que hable de otras cosas. Pero no tiene autoridad ni literaria ni histórica para hablar de esos temas. Los otros, sus acólitos, un teólogo y un historiador, presentaron argumentos tontos.

EMS: *El problema no es que no tengan el derecho a hacer cualquier tipo de observación. Lo tienen. Pero ¿está sustentada esa observación en una reflexión o en un argumento racional, lógico?*

OP: Hay que decir, y esto te da otra visión, que en el caso del arzobispo hubo muchas respuestas de intelectuales. Dijeron que aunque no estaban de acuerdo con mi visión de Sor Juana, era intolerable que el arzobispo hablara de esto. Pero esas mismas personas no dijeron ni media palabra cuando me quemaron en efigie, en el Paseo de la Reforma, o cuando ha habido otros escándalos por el estilo. Todo el tiempo hay pequeños olvidos en mi ciudad. No me gusta hablar de eso porque parece que tengo obsesión.

EMS: *Sé que evitas el tema. Pero yo no lo puedo obviar. Al hacer una observación acerca de, por ejemplo, Octavio Paz en su contexto, estas cosas hay que decirlas.*

La soledad

OP: Además se ha difundido la visión de que yo soy un hombre autoritario. Tú que me conoces sabes muy bien que no lo soy, que si algo soy es un hombre que duda de sí mismo sobre todo, de lo que pienso y de lo que digo. Hablemos del malestar, puesto que hemos hablado de *El laberinto de la soledad*. Hablemos de mí mismo. Porque hay una parte de autobiografía en ese libro, como en todo libro de esa índole. Desde niño me sentí excluido; por razones misteriosas, pero siempre me sentí excluido. No sé si los demás niños sintiesen lo mismo, creo que no. Yo me sentí siempre excluido, aparte. Y eso ha continuado hasta ahora. "No es mexicano", me acuerdo que me decían. Durante años me criticaron con la idea de que yo no era mexicano, que yo era un extranjerizante, que era un eco de Francia, o de los Estados Unidos, de lo que fuera, que no era de aquí. Después, que yo era un escritor difícil, intelectualista, que yo no era poeta, que nadie me entendía, que no era un poeta que se pudiera entender.

EMS: *Si no se comprende eso acerca del contexto de Octavio Paz, se pierde gran parte de la esencia de tu preocupación. Primero, por la evidente introspección de tu poesía: ese tono íntimo de diálogo con el otro, de establecer un diálogo con el otro, aunque sea el otro que se lleva*

www.cepchile.cl

dentro. Y después, la pregunta obsesiva acerca de México, acerca de tu cultura y tu tiempo.

OP: Eso es natural. Después de todo, cuando hablábamos de esa situación mía, de ser una suerte de islote, señalado con reprobación o con desconfianza o con lejanía, hay que decir que se trata de un mundo muy pequeño: a la mayoría de los mexicanos ni lo saben ni les importa, ni mucho menos. Pero es el pequeño mundo en el que vivo.

EMS: *A lo que me refiero es a esa misma imagen dentro de tu literatura. Por ejemplo, el primer texto de* Libertad bajo palabra*: un "pueblo rencoroso" que te acusa, el "bullicio" contra el cual surge la palabra.*

OP: Hay silencio. Nadie quiere hablar de eso, porque si se habla de eso hay que decidir si yo soy un enfermo mental, o si tengo delirio de persecución.

EMS: *O si eres un caudillo que persigue a los demás.*

OP: Algo así. Si bien hay algo de verdad en lo que yo siento y en lo que yo digo, es lo que no han dicho nunca.

EMS: *Tal vez porque no hay una reflexión.*

OP: Sí. Y esto incluso con gente que quiero y estimo. No ha habido ninguna tentativa por hacer ese tipo de reflexión.

EMS: *Y lo interesante es que a pesar de eso estás aquí al pie del cañón. No te has ido a vivir al extranjero, sólo por temporadas.*

OP: Bueno, viví muchos años fuera. Regresé después del 68. Regresé primero porque quería terminar dos diálogos. Primero, el diálogo con mi madre: resultó que era ya muy mayor y no pude terminarlo como yo hubiese querido. Y después, el diálogo con mi país. Ese terminó en una querella que aún no se cicatriza.

EMS: *¿Y ha terminado el diálogo?*

OP: Lo que pasa es que ya no hay diálogo. Es innecesario, no puedo seguir argumentando.

EMS: *¿Has dicho todo lo que tienes que decir?*

OP: He dicho no todo, pero sí casi todo. Quizá tendría que haber escrito una obra de ficción para poder decir con mayor facilidad muchas cosas que no dije, o dije mal. Nunca está uno satisfecho con lo que se ha dicho. Hace mucho escribí *El laberinto de la soledad*, no sé siquiera si lo tolero ahora. Pero creo que aunque mi país ha cambiado, el análisis sigue siendo válido.

¿Obra completa?

EMS: *Quisiera terminar hablando de la edición de tus* Obras completas*, que va a publicar Círculo de Lectores.*

www.cepchile.cl

OP: Se está terminando ya. Estamos en el tomo décimo.

EMS: *Para mí es impresionante esta reordenación de tu obra.*

OP: Yo simplemente lo he agrupado de un modo bastante sencillo, por temas.

EMS: *Pero también es una relectura de tu obra.*

OP: No creas. He agrupado los libros porque más o menos sé de qué tratan.

EMS: *¿Por temas, pero no cronológicamente?*

OP: No, pensé, dudé entre cronología y temática.

EMS: *Y triunfó la temática.*

OP: Sí, porque si hubiese hecho una ordenación puramente cronológica, habría sido de lectura muy difícil. Puede que sea un poco monótono. Pero ahí, en las primeras quinientas o seiscientas páginas, está lo que yo llamaría, con un poco de exageración probablemente, mi poética. Después, en los tres tomos siguientes está mi crítica literaria, que es sobre todo crítica poética y que también tiene que ver con mi formación. Casi nada de lo que he escrito es puramente desinteresado, aunque muchos de esos textos sí fueron pedidos por amigos o por editores, o por revistas. Probablemente nunca habría escrito sobre Rubén Darío si no me lo hubieran pedido. Pero estoy contento con lo que hice sobre otros. Después, está el tomo sobre Sor Juana, que lo continúa: es crítica literaria, pero también es un libro de historia y una biografía. A mí lo que me gusta de ese libro es la parte final; con la parte primera, que es puramente biografía, habría podido escribir una novela. Después los dos tomos de artes visuales, donde hay algunos ensayos que me gustan; luego el tomo sobre temas mexicanos. Y luego el décimo tomo, la reflexión, donde están algunos de los libros que más me gustan.

EMS: Vislumbres de la India, *por ejemplo.*

OP: Ése me gusta menos, aunque tiene capítulos que me gustan. Me gusta mucho más el pequeño ensayo sobre Sade. Ahí digo cosas que creo son relativamente nuevas. Hace cuatro o cinco meses, en una revista universitaria salió un ensayo largo de un profesor sobre el Marqués de Sade. Cita a casi todos los que han escrito sobre el tema, menos a mí. Pero ahora lo que me interesa es la poesía. Luego incluiremos en otro tomo entrevistas como ésta, porque creo que forman parte de mi obra, de mi actividad literaria. Algunas, no todas. Pero no creo yo mucho en las *Obras completas*. Están bien que se queden ahí, pero lo que puede que quede de las obras serán algunas páginas. Con eso basta.

Me gustaría, por último, hablar un poco de mi experiencia de la India. Quisiera hablar un poco de dos cosas. De mi experiencia en el

www.cepchile.cl

extranjero, el descubrimiento de los Estados Unidos, por ejemplo. Conocí al país de niño, fue un espectáculo magnífico.

EMS: *Por una parte, Tú como el Otro dentro de México; pero después el Otro dentro de otra cultura. Primero los Estados Unidos, aunque tal vez primero fue España.*

OP: Eso es lo que quisiera decir: mi relación con España siempre ha sido muy profunda. Me siento, yo siento, que soy heredero de la gran literatura española. ¡Y que no me griten los españoles creyendo que ellos son los dueños de Cervantes, o de Quevedo o de Góngora, porque no lo son! Es un bien compartido. A los Estados Unidos los conocí en plan de guerra: el trabajo, el valor, un pueblo de gente valiente, abierto, hospitalario, generoso. Francia fue reencontrarme con mi adolescencia, con mis lecturas. Fue un momento también de grandes pasiones. Finalmente en la India lo más importante que me pasó fue haber encontrado a Marie-José. Porque esto cambió radicalmente mi vida. Sin ella yo no hubiera podido hacer mucho de lo que he hecho.

EMS: *Sobre todo después que te vas de París en 1962 y de padecer la gran decepción que cuentas al final de* Salamandra, *en el penúltimo poema:* "Yo estaba vivo y fui a buscar la muerte". *Haberte ido a la India como una especie de adiós a todo, para después llegar allí y encontrarte con la vida, con esa maravillosa mujer, todo eso tiene que haber sido algo muy grande pero también muy extraño. Ir al otro extremo del mundo para encontrarte a ti mismo.*

OP: Yo creo que una vida humana (y aquí podemos terminar) está hecha de muchos nacimientos, muertes y renacimientos. No es cierto que uno nazca una sola vez. No sé si se nace una sola vez, pero sí sé que se muere y se renace muchas veces, hasta que nos toque la definitiva.

EMS: *Eso lo aprendí leyendo tu obra, sobre todo leyendo tu poesía. Esa necesidad de reconocer cuándo algo termina y cuándo se debe volver a empezar. Como te ocurrió en 1943, cuando escribes* La vida sencilla.

OP: ¡Ah, ese poema te gusta!

EMS: *Es con el que cierro el prólogo a tus* Primeras Letras.

OP: También ahí hay el comienzo de algo que no se sabe.

EMS: *La puerta condenada con que...*

OP: ...se dice adiós a México.

EMS: *Sí, el adiós a México y el saludo a otro tipo de relaciones.*

OP: A otro tipo de poesía... y de vida. □

www.cepchile.cl

David Gallagher: *Otras Improvisaciones*
(Santiago: El Mercurio-Aguilar, 2004, 544 págs.)

GALLAGHERÍAS*

Arturo Fontaine Talavera

En ese conocido soneto que comienza con los versos "Un soneto me manda a hacer Violante,/ que en mi vida me he visto en tal aprieto", Lope de Vega aborda el tópico del terror que paraliza ante la página en blanco. Sigue diciendo Lope: "catorce versos dicen que es soneto,/ burla burlando van los tres delante." La gracia de este soneto sobre el soneto es que al ir dejando constancia de la dificultad que crea la cárcel del soneto con humor se la va venciendo. Gallagher, obligado a escribir una columna en la cárcel de 2.980 caracteres sin espacios semana de por medio, no podía dejar de tocar este asunto que persigue a cualquier escritor como un fantasma. La recomendación habitual en estos casos es "tirarse a la piscina".

Gallagher trata de hacerlo y no: "Pero no escribo. No me tiro a la piscina". Se acaba el disco y mientras piensa en poner uno de Mahler, de Keith Jarrett o de Pearl Jam, se encuentra escribiendo. "No sé", dice "exac-

ARTURO FONTAINE TALAVERA. Licenciado en Filosofía, Universidad de Chile. M. A. y M. Phil. en Filosofía, Columbia University. Director del Centro Estudios Públicos. Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Autor de los libros *Nueva York* (poesía) (Editorial Universitaria, 1976); *Poemas Hablados* (poesía) (Francisco Zegers, Editor, 1986); *Tu Nombre en Vano* (poesía) (Editorial Universitaria, 1995); *Oír su Voz* (novela) (reeditado por Alfaguara, 2003), y *Cuando Éramos Inmortales* (novela) (Editorial Alfaguara, 1998).

* Presentación del libro *Otras Improvisaciones* en el Centro de Estudios Públicos el 29 de noviembre de 2004. Extractos del texto aparecieron en *El Mercurio*, sección Artes y Letras, del 5 de diciembre de 2004, y en la revista *Rocinante*, N° 76, febrero 2005, Santiago.

tamente cuándo ni cómo". Y agrega: "es mejor tal vez dejarse caer a la piscina, distraídamente, de alguna forma encontrarse en la piscina, sin tener que cometer ese acto temerario que es tirarse a la piscina, estar volando en el aire entre piso y piscina".

Como lector uno lo siente. También uno se encuentra distraídamente, sin saber cómo, ya en mitad del artículo. Cuando se va despierta con la sensación de haber vivido algo que tenía la intensidad y brevedad de un sueño. Y como en los sueños, la experiencia es imposible de reconstruir.

Pero algo nuevo ocurre al releer estos artículos como parte del cuerpo de un libro. La profunda consistencia interior y la alegría de una escritura personalísima hacen que estos artículos leídos antes a la hora del desayuno, aparezcan ahora como anticipos, como fragmentos de un solo gran friso.

El arte del ensayo se parece mucho al arte de la conversación. Y en esto Gallagher es un maestro. Se deja caer a los temas como sin querer. Da la impresión de que todo está ocurriendo ahí, espontáneamente y sin esfuerzo ni programa alguno. Es un improvisador extraordinario. "Improvisaciones" se llamó su libro anterior (CEP, 1992) y "Otras Improvisaciones" (El Mercurio-Aguilar, 2004) éste. Uno no sabe adónde va y, sin embargo, lo sigue. En una misma página coinciden el juez Garzón y Garcilazo de la Vega; de Hitler pasa a Lady Macbeth y de ella a Amina, de la ópera de Bellini. En otra crónica Armstrong pisa la luna y una mujer se ahoga en Chappaquidick sepultando las ambiciones presidenciales de Ted Kennedy, mientras Jimi Hendrix está en Woodstock y el general Viaux se encierra en el Tacna.

Esto sólo es posible por el tono a la vez casual, íntimo y sugerente. Gallagher no nos impone lo que piensa. Más bien nos induce a adivinarlo. Hay mucho humor en estas páginas. Por ejemplo, yendo por calle Monjitas ve pasar una comitiva de motocicletas y Mercedes Benz. Es el Presidente Iliescu, de Rumania, quien saca la mano para saludar. Dice Gallagher: "Había algo terriblemente triste en el saludo que brindaba porque nadie en Monjitas sabía quién era y nadie le respondía".

Sus apreciaciones acerca del momento político o económico leídas hoy resultan premonitorias. Ajeno a los reduccionismos de cualquier naturaleza, Gallagher ha confiado en la sensatez del pueblo chileno, de sus líderes, y en las virtudes de la democracia. Los hechos, creo, le han dado la razón.

A veces, su artículo se desarrolla como una carta o parte de una noticia: una madre ahogó en Carolina del Sur a sus dos hijos y no se sabe por qué. Ese día fue al gimnasio, como siempre, a hacer aeróbica. Y de allí

www.cepchile.cl

comienza un recorrido lleno de sorpresas que trasciende con mucho aquello que pareció darle origen y cuya vigencia se acrecienta con el tiempo.

Aquí, abrigados y entrelazados entre estas páginas, están los grandes amores de David Gallagher. Desde luego, todo lo ruso: su historia, su literatura, su religión, sus ciudades, su música, sus museos, sus campos infinitos, la humanidad de su gente que, impulsada por pasiones extremas y contradictorias, a menudo llora como quien ríe o ríe como quien llora.

David aprendió ruso para leer a los novelistas en su idioma y lo habla casi tan bien como el castellano, el francés o el italiano. Su acento, eso sí, es un poco anticuado porque lo aprendió en París viviendo en casa de exiliados rusos. Su profesora, nieta de Tolstoi, era una vieja chapada a la antigua.

Éste es Peterhof, cerca de San Petersburgo: "Entre tanta blancura, la manera más certera de guiarse por el parque es seguir el canal, que finalmente se detiene en el mar. Claro que uno apenas se da cuenta, porque el mar está blanco, helado y nevado hasta el horizonte. Si uno sigue caminando por la línea del canal, puede incluso repetir el prestigioso milagro de caminar sobre el agua".

Y Borges ("La obra de Borges", dice, "más que escritura, es una suerte de lectura") y Wagner y Proust con una Albertine que de repente, sobre una bicicleta en Balbec, se llama Sarita.

Y los viajes: de la pampa argentina al Nilo; de Nueva York a Kuelap, en la Amazonía, una fortaleza de los indios chapapoyas contra los incas; de Calcuta a Mont Ventoux en Provenza, que escaló Pretarca; de Torcello, cerca de Venecia, a la laguna Miscanti, en el desolado altiplano chileno; de Petra a Chépica; de Chavín, ubicada a más de 4.000 metros de altura en la sierra peruana y construido 2.500 años antes de Cristo al Mar Rojo; de Siwa, un oasis en el Sahara, a La Patagonia. Y así.

Y la ópera: Moussorsky y Verdi, Gounod y Gluck, Mozart y Britten, Bártok, Antón García y Shostakovich.

Y el cine (Scorsese, Spielberg, Tarantino, Hicks, Kubrick, entre otros) y el teatro. Hay dos versiones de King Lear y un brillante comentario del "Hamlet" que montó en Londres John Caird que termina con Horacio a punto de beber la copa envenenada. Hamlet moribundo, junto a su madre y su padrastro muertos, le dice que no, que él debe sobrevivir para poder contar la historia. Y también aparece "Oleanna" de Mamet —que le permite ironizar lo "políticamente correcto"—; el Don Juan de Tirso comparado con el "Don Giovanni" de Mozart; el "Tartufo" de Moliére o "El Gran Teatro del Mundo" de Calderón.

www.cepchile.cl

Y la pintura: de los techos copulares de Tiépolo (escribí "copulantes" pero alcancé a corregirme) a las instalaciones de Bill Viola, de Mantenga a Cienfuegos, de Szyzslo al coreano Nam June Peik y su mundo de televisores encendidos.

Y la tradición de las libertades: Orwell, Hayek, Isaiah Berlin.

Y la novela. Surgen agudos comentarios sobre los autores más diversos: Ishiguro, Donoso, Kafka, Edwards, Vikram Seth, Cerda, Wharton, Contreras, Roddy Doyle, García Márquez, James, Stendhal, Aguilar Camín, Graham Greene, Fuguet, Jane Austin, Vargas Llosa, Coetzee, Salman Rushdie… No sigo. Se cuentan anécdotas curiosas. Lord Byron propone un día a sus invitados que escriban un cuento de terror. De ahí saldrán "El Vampiro", antecedente de "Drácula", y "Frankenstein" de Mary Sheley. Y, cuidado, el chupasangre, el "Drácula", le debe mucho a Darwin, a lo que éste vio en Quillota: un extraño murciélago le chupaba la sangre a una yegua. Gallagher es un experto en "Drácula", en su macabra ofrenda de sangre que reclama de las mujeres que ama.

Y, bueno, las personas mismas que nutren todos sus amores. De allí esos retratos de Borges y Madonna, del Che Guevara y Elton John con la Princesa Diana, del rey Felipe II en el Escorial y Margaret Thatcher, de Rasputín y Lenin.

Y, en fin, su amor por Londres. Cita a Doctor Johnson: "Cuando uno se cansa de Londres, se cansa de la vida".

Todo esto va pasando como un montaje de film y con una divertida levedad. No con la pesadez didáctica con que yo se los estoy presentando. Los alcances y referencias brotan por intensificar la captación de la experiencia, de puro gozo de vida.

No es raro, debo advertirlo, que el comentario de Gallagher sea mejor que el original que comenta. Sucede, por ejemplo, con el film "Proposición Indecente" con Robert Redford. (Ustedes recuerdan: la mujer, Diana, acepta la proposición de un millonario que le ofrece un millón de dólares y acepta con permiso de su marido). "Por cierto, la pregunta del millón ¿usted lo haría? Es interesante", escribe Gallagher. "Algunas mujeres contestan que si fuera… con Robert Redford... Otras que con Robert Redford no, pero que con Kevin Costner, sí… Caen en la misma trampa que Diana cuando Gage (Robert Redford) le dice "no hagas nada que no quieras hacer". Es que la que lo hace sólo si le gusta lo hace porque le gusta. Y en ese caso es capaz de hacerlo por el puro gusto. De allí que un marido tendría que preocuparse si a su mujer le importa con quién lo hace." Cuando llega la explosión de celos del marido de Diana —el mismo

www.cepchile.cl

que permitió antes la transacción a cambio del millón de dólares— viene la profecía autocumplida. “Si ya cree que me enamoré de Gage, piensa Diana, ¿qué saco con no enamorarme?”

¿Cuál es el mejor de los artículos de este libro? Creo que sé la respuesta: “El arte de ser bueno”. Trata de un monje benedictino, “Dom”, al que Gallagher conoció en el colegio. En mi mente se cruza con otro monje, que le interesa a David, Zocima, de “Los Hermanos Karamazov”. “Antes de morir”, recuerda David, Zocima les dice a sus hermanos que “nadie es tan bueno como para no ser responsable de los pecados de los demás, porque todos somos capaces de cometerlos”. Esta reflexión del padre Zocima nos sigue resonando.

Pero el monje benedictino “Dom” no era Zocima, el personaje de Dostoievsky. Dom “sabía”, dice Gallagher “que es difícil ser un gran santo si uno busca serlo”. Pero, ¿será cierto? ¿Qué es lo que realmente sabía el monje “Dom” acerca de la bondad? Quizás nada; pero no hay duda, era un hombre bueno. Quizá, el secreto de la verdadera santidad asomaba sólo en su risa.

David Gallagher, sin buscar serlo, sin lanzarse a la piscina sino que dejándose caer a ella, se ha constituido, a mi juicio, en uno de los grandes del arte del ensayo en nuestra lengua. Es un privilegio tenerlo entre nosotros. □

www.cepchile.cl

INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES*

Estudios Públicos recoge en las páginas que siguen textos del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, incluido el prólogo del Presidente de la República. Se reproducen también aquí las declaraciones y reacciones que provocó el Informe en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, así como en la judicatura.

Como en ocasiones anteriores —Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), Acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos (2000) y la propuesta de derechos humanos del Presidente Lagos de agosto del 2003— su publicación contribuye a dejar memoria y llama a reflexionar acerca de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar.

Arturo Fontaine Talavera
Director

* Para acceder a otros documentos y artículos de Estudios Públicos sobre la historia política de Chile y la cuestión de los derechos humanos, véase www.cepchile.cl

ÍNDICE

Introducción 297

A. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (extractos)

Prólogo de S.E. el Presidente de la República.
"Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo". 307

Capítulo III: Contexto. 314

Capítulo IV: Prisión política y tortura, período por período. 363

Capítulo V: Métodos de tortura. 386

Capítulo VI: Recintos de detención. 427

Capítulo VII: Perfil de las víctimas. 469

Capítulo VIII: Consecuencias de la prisión política y tortura. 486

Capítulo IX: Propuestas de reparación. 493

B. Respuestas institucionales (por orden cronológico)

"Ejército de Chile: El Fin de una Visión", noviembre 3, 2004.
General Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del Ejército. 505

Declaración, noviembre 13, 2004.
Policía de Investigaciones de Chile. 509

Declaración, noviembre 30, 2004.
Armada de Chile. 511

Comunicado Oficial, noviembre 30, 2004.
Carabineros de Chile. 513

Declaración, diciembre 1, 2004.
Fuerza Aérea de Chile. 514

Discurso (en seminario organizado por el Ejército de Chile, diciembre 7, 2004).
General Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del Ejército. 517

Declaración, diciembre 9, 2004.
Corte Suprema. 527

Declaración, diciembre 14, 2004.
Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile. 530

INTRODUCCIÓN[1]

El 12 de agosto de 2003, el Presidente Ricardo Lagos presentó al país su propuesta para encarar el problema aún no resuelto de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Este documento fue titulado "No Hay Mañana Sin Ayer" y entre sus propuestas figuraba el establecimiento de una Comisión que "establezca de manera rigurosa una lista de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas"[2] . A este fin, el documento precisó que el propósito de la Comisión sería "determinar quiénes son los chilenos y chilenas que pasaron por esta experiencia, se creará por decreto supremo una comisión responsable de extender un certificado que acredite esta calidad. Tal certificado permitirá a las personas que lo poseen y que no han recibido otra forma de reparación, una indemnización austera y simbólica que determinará el ejecutivo. Esta Comisión, en su metodología de trabajo, tendrá las mismas características de la Comisión Rettig para garantizar la plena privacidad de su labor."

La propuesta se materializó tres meses después. Por Decreto Supremo N° 1.040 de Interior, publicado en el *Diario Oficial* el 11 de noviembre de 2003, fue creada la "Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura", como órgano asesor del Presidente de la República. Entre los considerandos que anteceden a esta norma, se señala: "Que cualquier intento de solución del problema de los derechos humanos en Chile obliga a dar una mirada global a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana y a reconocer a las víctimas de dichas violaciones; que muchas de esas personas no han sido hasta la fecha reconocidas en su carácter de víctimas de la represión, ni han recibido reparación alguna por parte del Estado; que sólo en la medida que se esclarezca completamente la verdad, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro; que la experiencia de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación [Comisión Rettig] y de la denominada mesa de Diálogo demuestran que es posible alcanzar crecientes grados de verdad...".

A la Comisión se le encomendó dos tareas básicas. Primero, "determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políti-

[1] Las citas del Informe y de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas hechas en esta introducción, provienen del texto publicado en formato PDF en www.comisionprisionpoliticaytortura.cl Los números que acompañan a las citas refieren a las páginas de esos textos.

[2] El texto completo de la propuesta presidencial "No Hay Mañana sin Ayer" se encuentra publicado en *Estudios Públicos*, 92 (primavera 2003), pp. 314-333.

cas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990". Segundo, "proponer al Presidente de la República las condiciones, características, formas y modos de las medidas de reparación, austeras y simbólicas, que podrán otorgarse a las personas que, reconocidas como prisioneros políticos o torturados, no hubieren recibido hasta la fecha otro beneficio de carácter reparatorio derivado de tal calidad."

Los miembros de la Comisión fueron: Monseñor Sergio Valech Aldunate, quien la presidió; María Luisa Sepúlveda Edwards, su vicepresidenta ejecutiva, Miguel Luis Amunátegui Monckeberg, Luciano Fouillioux Fernández, José Antonio Gómez Urrutia, Elizabeth Lira Kornfeld, Lucas Sierra Iribarren y Álvaro Varela Walker.

De acuerdo al citado decreto supremo, para que una persona pudiera ser calificada como "víctima" por la comisión debían concurrir los siguientes requisitos copulativos:

• La privación de libertad o la tortura, o ambas si fuera el caso, debían haber obedecido a razones políticas;

• Los victimarios debían ser agentes del Estado o personas a su servicio, entendiéndose por tales a aquellos particulares que, sin tener calidad de agentes del Estado, actuaban con conocimiento, tolerancia, aquiescencia o en connivencia con éstos, sin que se precise una relación formal o de orden contractual, y

• Los hechos debían haber acaecido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

No pudieron ser calificadas como víctimas, pues el decreto las excluyó de antemano, "las personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos". Tampoco se incluyeron las personas que fueron objeto de "retenciones" temporales efectuadas durante allanamientos masivos, operaciones "peineta", u otra forma similar de control colectivo o indiscriminado de la población. Por otro lado, a la luz del Decreto Supremo N° 355 de 1990, de los ministerios de Interior y Justicia, que creó la Comisión Rettig, y del citado Decreto Supremo N° 1.040 de 2003, la Comisión estimó que los actos de privación de libertad o tortura por razones políticas que hubiesen ocasionado la muerte de la persona que los sufrió, quedaban excluidos de su mandato, pues fueron objeto, precisamente, de la Comisión Rettig. Por último, la Comisión consideró que las personas que sufrieron prisión política y tortura en el período que cubrió su mandato, pero que fallecieron

antes de la recepción de antecedentes por parte de la Comisión, podrían ser calificadas como "víctimas" en la medida que sus familiares directos presentaran su caso y lo acreditaran.

En cuanto a la competencia y procedimiento de la Comisión, el Decreto Supremo N° 1.040 estableció una precisión fundamental: "En el cumplimiento de su objeto, la Comisión no podrá, de manera alguna, asumir funciones de carácter jurisdiccional y, en consecuencia, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a la ley pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento." La Comisión, por tanto, no fue un tribunal, sino un órgano asesor del Presidente de la República.

Lo anterior explica el hecho de que no se haya pretendido que ella se sometiera a las exigencias básicas del debido proceso, como por ejemplo, la bilateralidad de la audiencia. Esto justifica su deber de no pronunciarse sobre responsabilidades individuales e, incluso, de omitir los nombres de personas determinadas que puedan aparecer envueltas como victimarios en los hechos que ella ha conocido. Asimismo, este carácter no jurisdiccional tiene consecuencias sobre el valor probatorio de sus conclusiones. Obviamente, éstas no hacen "plena prueba", no, al menos, en el sentido más judicial de la expresión. El informe, por tanto, no fue concebido para ser presentado alguna vez como medio de prueba en algún determinado juicio, sino que más bien como antecedente para la discusión pública.

Según indica el Informe, para confeccionar este antecedente la Comisión siguió el modelo de la Comisión Rettig e intentó "adquirir convicción moral" para calificar los hechos que se le presentaron. Los hechos a calificar fueron la calidad de víctima de prisión política y de tortura. Así lo describe el informe:

"Siguiendo la metodología instaurada por la Comisión Rettig, la Comisión entendió por *calificación* el proceso colegiado de evaluación de los antecedentes permitieran *adquirir convicción moral* respecto de la calidad de preso o torturado por razones políticas, o ambas. Esto, en términos tales que ameriten su reconocimiento oficial como tal o se deseche la petición." (Informe, pp. 45-46.)

Si bien el criterio de "convicción moral" para calificar los hechos fue un punto de semejanza entre la Comisión Rettig y esta Comisión, hubo también un punto de significativa diferencia: el carácter de los hechos que les correspondió calificar. La Comisión Rettig tuvo por objeto determinar las personas ejecutadas y las que fueron desaparecidas, por agentes del Estado, entre 1973 y 1990. Esta Comisión, en cambio, debió calificar las personas que sufrieron prisión política y, además, tortura. Aparte de una enorme diferencia en el número de casos que les correspondió conocer

—la Comisión Rettig conoció la décima parte de los casos conocidos por ésta—, la forma de acreditar los hechos fue también diferente. La prueba de las ejecuciones cuyas víctimas debió calificar la Comisión Rettig no fue fácil, pues, por regla general, quedó poco rastro de ellas. Como se comprenderá, la prueba de las desapariciones fue aún más difícil. Lo dramático de éstas es, precisamente, el hecho de que no hay rastro.

Sobre la prisión política, en cambio, hay más rastro. Por lo pronto, y a diferencia de la Comisión Rettig, aquí las víctimas, en su inmensa mayoría, están vivas para dar testimonio. Además, una parte importante de los casos calificados por esta Comisión tuvieron el respaldo de pruebas documentales. Como puntualiza este informe, y a fin de ir construyendo una base de datos con toda la información disponible, la Comisión "celebró acuerdos de cooperación y entrega de información con la Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (FASIC), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE). Se realizó también un convenio con la Universidad Alberto Hurtado, mediante el cual fue posible el trabajo de un grupo de alumnos que investigó los informes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, rescatando de esa fuente los nombres de personas detenidas, en su mayoría dirigentes sindicales, respecto de las cuales se recurrió a esta organización en el momento en que sus derechos eran vulnerados. Este grupo investigó, con el mismo objetivo, en los archivos de prensa de la época que custodia la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, y entregó en ambos casos los registros en archivos computacionales que fueron integrados a la base de datos de esta Comisión. Mediante la realización de convenios fue posible también acceder a los archivos del Obispado de San Felipe, del Obispado de Talca, del Obispado de Copiapó, del Obispado de Temuco y del Departamento de la Pastoral Obrera de Concepción, todos los cuales fueron instrumentos de gran importancia para obtener documentación de respaldo en numerosos casos y validar en fuentes confiables la que había sido presentada. Se utilizaron con este fin complementario los siguientes registros: las relaciones que aparecen en los numerosos libros publicados en el período; dos listados de detenidos elaborados aparentemente por el Ejército, que contenían nombres de más de 12.000 detenidos en diversos recintos de dicha rama y de la Armada, en noviembre y diciembre de 1973; listados de Gendarmería de detenidos en distintas unidades penales del país por razones políticas y las respuestas que este servicio del Estado entregó a numerosas consultas hechas por esta Comisión; listas entregadas por el Archivo Nacional de los libros de ingreso a la Cárcel Pública de prisioneros de

guerra; relación de los ingresos de recursos de amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago durante los años 1973 a 1976; información entregada por el Servicio de Registro Civil e Identificación en respuesta a consultas hechas por la Comisión; información sistematizada del Informe Nacional de Verdad y Reconciliación [Informe Rettig] y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; información de entidades estatales, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas y de Orden; información solicitada a distintos servicios y empresas del Estado, como la Tesorería General de la República, el Servicio de Aduanas, la Empresa Nacional de Minería ENAMI, la Corporación del Cobre (CODELCO), Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, Servicio de Impuestos Internos, entre otras." (Informe, pp. 30 y 31.)

Un criterio clave a la hora de calificar la prisión política fue la "motivación política" de la privación de libertad. Al respecto, señala el informe: "La motivación política no siempre es evidente y, de hecho, la actividad represiva siempre buscó respaldo en la supuesta defensa de la seguridad del Estado, del orden público, de la lucha contra el terrorismo, etc. Para discernir la presencia de tal motivación se pueden considerar los siguientes factores:

a) La existencia de la motivación política como fundamento único del acto represivo se reconoce porque deja de haber delito cuando se omite la motivación política de la conducta del imputado. Esto se refiere a los casos en que la conducta sancionada es enteramente de naturaleza política, como las acciones penadas como consecuencia de la prescripción del quehacer político o la pertenencia a partidos declarados asociaciones ilícitas por la mera doctrina a que adhieren, como ocurre con el Decreto Ley N° 77, que declaró ilícitos a los partidos políticos pertenecientes a la Unidad Popular. Dentro de este concepto se consideran todas las normas jurídicas dictadas en contravención de las normas y principios del derecho internacional de derechos humanos, que como normas jurídicas penalizaron conductas propias del ejercicio de un derecho reconocido por el derecho internacional, o establecieron medidas punitivas en contra de personas a causa de su identidad.

b) La existencia de medidas privativas de libertad sin juicio y sin fundamento, como las detenciones administrativas o la aplicación de medidas restrictivas o privativas de libertad una vez cumplidas las condenas, en virtud de las atribuciones de los estados de excepción constitucional. Ello es particularmente claro dada la extensión temporal de la vigencia de dichos estados de excepción y la falta de justificación y de control democrático de su vigencia y renovación.

c) La aplicación de normas jurídicas en forma arbitraria o con claros fines de represión política de mayor rigor en el juzgamiento de hechos, impuestas en forma arbitraria o con claros fines de represión política, como la ampliación de las penas o las restricciones en el derecho a defensa impuestas por el tiempo de guerra sin existir las hipótesis de hecho que justifica tal declaración y sin el consiguiente reconocimiento de las garantías establecidas en los Convenios de Ginebra para los acusados de delitos supuestamente considerados en dicha categoría, o la imposición del fuero militar para juzgar delitos que carecen de tal carácter, lo que se traduce en extensiones de los períodos de detención sin requerirse la presentación de los detenidos ante los tribunales, extensiones de los períodos de incomunicación y otras limitaciones al derecho a defensa y a las garantías del debido proceso. El juzgamiento de hechos bajo estas condiciones o en virtud de normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, contiene claramente una motivación política.

d) También existe motivación política en la detención y juzgamiento de delitos que constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislación ordinaria de un país, que fueron cometidos con la intención de derrocar al régimen o impulsar cambios políticos. Si bien en estos casos la privación de libertad no es ilegítima *per se,* debe velarse por el cumplimiento de garantías del debido proceso en el juzgamiento de los hechos y por que no se apliquen torturas a los imputados." (Informe, pp. 24 y 25.)

A diferencia de la prisión política, de la tortura hay menos rastro. Por regla general, no hay secuelas visibles tras los años transcurridos desde los hechos conocidos por la Comisión y, obviamente, no hay prueba documental de ella. Indica el Informe: "No ha sido posible disponer de la acreditación de la tortura mediante informes médicos u otras formas de constatación de las lesiones o secuelas. Dado el contexto en que ocurrieron los hechos, particularmente en los primeros años del régimen militar, muy pocas personas recibieron atención de salud con el objeto de constatar las torturas y algunas permanecieron detenidas por largo tiempo luego de que ellas les fueran inflingidas, haciendo prácticamente imposible certificarlas. Finalmente, tampoco ha sido posible calificar las situaciones de tortura de acuerdo a su gravedad. Luego de treinta años no es posible evaluar lo padecido por una persona de acuerdo a la calificación de su relato o escudriñar en sus recuerdos sin generar una nueva victimización. Por ello, reconociendo el sufrimiento de las personas, la Comisión ha estimado razonable definir una categoría común de víctimas." (Informe, "Nómina de personas reconocidas como víctimas", pp. 8-9.) De este modo, la Comisión no pretendió probar la tortura respecto de cada persona en particular, pero

por la inmensa cantidad de testimonios coincidentes sobre métodos, recintos, organismos, períodos y otras circunstancias, sí pudo convencerse de que fue una práctica con un carácter sistemático y de que no hay razones para dudar de los presos políticos que la denuncian de manera coherente con este carácter.

La Comisión trabajó con una definición operativa de "tortura", extraída de dos documentos del derecho internacional: *La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes*, de la ONU, y la *Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura*, de la OEA[3]. Dice esa definición: "Constituye tortura todo acto por el cual se haya infligido intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidar o coaccionar a esa persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación. Siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos se hayan cometido por un agente del Estado u otra persona a su servicio, o que actúe bajo su instigación, o con su consentimiento o aquiescencia." (Informe, p. 19.)

Desde un punto de vista orgánico, la Comisión tuvo dos dimensiones distintas, pero complementarias: la Comisión propiamente tal, cuya tarea fue conocer y decidir los casos que se presentaron; y la vicepresidencia ejecutiva, integrada por equipos de profesionales, técnicos y administrativos, que sirvió de estructura operativa y de apoyo a la Comisión. La vicepresidencia ejecutiva se dividió en cuatro áreas y dos unidades de apoyo. Entre las primeras: atención de público, información e investigación documental, calificación y administración y finanzas. Entre las segundas: unidad de procesamiento y archivo, y unidad de apoyo informático.

La Comisión tuvo su sede en Santiago, pero el trabajo se extendió por el país y el extranjero. Señala el Informe: "En regiones se atendió en 42 gobernaciones, con profesionales de los equipos locales designados especialmente para atender las tareas de la Comisión en cada provincia. En las 13 gobernaciones de mayor población se realizaron contrataciones de profesionales destinados a asumir y reforzar el trabajo local. Durante todo el período de recepción de antecedentes, profesionales del equipo central se desplazaron a regiones para apoyar directamente la atención de público, efectuando en forma extraordinaria 160 visitas a 106 localidades apartadas o que no eran sede de gobernación. Para aquellas víctimas que en la actualidad residen en el extranjero se estableció una coordinación con el Minis-

[3] La promulgación de ambas convenciones por parte de Chile se publicó el 26-11-88 en el *Diario Oficial*.

terio de Relaciones Exteriores, a fin de realizar la recepción de antecedentes a través de los consulados de Chile en el exterior." (Informe, p. 28)

Desde un punto de vista funcional, el trabajo de la Comisión tuvo tres etapas. Primero, recepción de antecedentes en todo el país y en el extranjero; segundo, análisis de los casos y, tercero, calificación de los casos. La primera etapa consistió en la entrega de una ficha por parte de cada declarante, junto a todos sus antecedentes, y una entrevista personal. Esta presentación debió ser hecha en forma personal y voluntaria por cada interesado. Sólo en casos excepcionales como, por ejemplo, el de personas ya muertas o probadamente impedidas de concurrir a la Comisión, se aceptó su representación por familiares cercanos. La segunda etapa, como señala el Informe, estuvo compuesta por las siguientes tareas: "validar la información en fuentes confiables; realizar investigación documental; solicitar referencias a organismos de derechos humanos; solicitar referencias a organizaciones de víctimas; solicitar referencias a organismos públicos; investigar las referencias y testigos; validar mediante investigación en base de datos disponibles, realizar una segunda entrevista si los pasos anteriores hubieren sido insuficientes" (Informe, p. 41).

Realizadas estas tareas, fue posible avanzar algunas de las siguientes conclusiones: "La privación de libertad o tortura por razones políticas resultó suficientemente demostrada; pudo haber existido privación de libertad o tortura, pero resultó imposible obtener elementos de validación; si bien pudo haber habido una violación de derechos humanos, no existió privación de libertad o tortura por motivos políticos, cometida por agentes del Estado, en el período y con las características comprendidas en el mandato de la Comisión; el caso está fuera del mandato institucional" (Informe, p. 43) Esta información fue sintetizada mediante las siguientes categorías tentativas: "**Precalifica**: Incluía aquellas presentaciones que contenían suficientes antecedentes para proceder a su precalificación, tanto por lo verosímil de la relación como por la acreditación documental que se acompañaba, y casos con antecedentes documentales parciales, pero cuyo contexto y los hechos relatados permitían formarse convicción moral respecto de su veracidad. **No precalifica**: Se trataba de aquellas presentaciones claramente fuera de mandato, casos de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte, allanamientos sin detención, exilio, amedrentamientos, detenciones en manifestaciones de protesta por Carabineros y sin privación de libertad ni denuncia judicial de torturas, o por estar fuera del límite temporal, etc. **Con antecedentes por definir conforme a mandato**: Incluía aquellas denuncias que contaban con suficientes antecedentes de respaldo o eran coherentes en su relato, pero presentaban dudas respecto de su inclusión en el mandato." (Informe, p. 43.)

Con toda esta información a la vista, se pasaba a la tercera y última etapa, en la cual la Comisión decidía finalmente sobre cada caso, formándose convicción moral respecto de él, según se explicó más arriba. Si la calificación resultaba positiva, la Comisión declaraba en cada caso la "condición de víctima de prisión o tortura por razones políticas". De los 35.868 casos presentados a la Comisión, 27.255 merecieron esta declaración (sobre un total de 33.221 detenciones, ya que muchas personas fueron detenidas más de una vez).

El Informe

En el cumplimiento de su mandato, la Comisión produjo un Informe que fue entregado al Presidente de la República el 10 de noviembre de 2004, y éste lo dio a conocer al país el 28 del mismo mes[4]. El Informe tiene dos partes. La primera está compuesta por diez capítulos y la segunda por la nómina de las 27.255 personas calificadas como víctimas. En la primera parte, el Capítulo I contiene una "Presentación", y el Capítulo II, "Funcionamiento de la Comisión", que se refiere a diversos aspectos orgánicos y metodológicos de ella, en los términos sintetizados más arriba. Los capítulos siguientes contienen la sustancia del trabajo de la Comisión, según el orden y la descripción que aparece en las páginas 87 y 88 del Informe.

Capítulo III: **Contexto**. "Descripción general del proceso de instalación del poder y concentración de éste al iniciarse el régimen militar, con referencia a los estados de excepción constitucional y las normas dictadas para la represión política, el papel que desempeñó el Poder Judicial, el funcionamiento de los tribunales de guerra, el papel que desempeñó la prensa, y las acciones de defensa y de denuncia que se llevaron a cabo en Chile y en el exterior."

Capítulo IV: **Prisión política y tortura, período por período**. "Explicación de la forma como operó la prisión política y la tortura en tres períodos: septiembre a diciembre de 1973, como la etapa de las detenciones masivas y el uso de centros de detención públicos y de gran capacidad; 1974 a 1977, período de predominio de la DINA y de mayor selectividad; 1978 a 1990, etapa marcada por la actuación de la CNI, la irrupción de un movimiento de oposición democrática y la aparición de grupos organizados de oposición armada."

[4] El texto del discurso "Para Nunca Más Vivirlo, Nunca Más Negarlo", con que el Presidente de la República dio a conocer el Informe al país (Prólogo del Informe), se incluye en este número de *Estudios Públicos*.

Capítulo V: **Métodos de tortura: definiciones y testimonios**. "Descripción de los diferentes métodos que se aplicaron, ejemplificados con extractos de testimonios directos de las propias víctimas. Se incluye un apartado acerca de la violencia sexual en contra de mujeres."

Capítulo VI: **Recintos de detención**. "Itinerario de la prisión en cada región, con referencia a los recintos por los que usualmente pasaban las personas y el trato que allá recibían los detenidos. Descripción de los recintos de detención más importantes de cada región, sus características y régimen interno, y enumeración de los restantes recintos en donde permanecieron prisioneros políticos, indicando la época en la que funcionaron como tales."

Capítulo VII: **Perfil de las víctimas**. "Descripción de las características de las víctimas: edad, sexo, ocupación, nivel de compromiso político o social, etc., y comparación de su situación al momento de la detención con su estado actual. Este capítulo y el anterior sirven de orientación para las propuestas de medidas de reparación, al identificar las necesidades más frecuentes mencionadas por las víctimas."

Capítulo VIII: **Consecuencias de la prisión política y la tortura**. "Explicación de las secuelas sufridas por las víctimas de prisión política y tortura en los planos físico y psicológico, a partir de la propia percepción de las personas 30 años después de ocurridos los hechos."

Capítulo IX: **Propuestas de reparación**. "Propuestas de criterios de reparación que se presentan al Presidente de la República, que son en los ámbitos jurídico, económico, moral, de salud y social. Se incluyen sugerencias de medidas en beneficio directo de las víctimas, así como medidas de prevención y promoción de los derechos humanos, gestos simbólicos de reparación y encuentro en el nivel social, y acciones destinadas al reconocimiento de la memoria. En materia social se recomiendan medidas relativas a vivienda, educación y exención del servicio militar obligatorio."

Capítulo X: "**Palabras finales**".

A continuación se reproducen el Prólogo del Presidente de la República y extractos de los capítulos recién mencionados, con excepción del último ("Palabras finales"). Luego, en la segunda parte de este documento, se incluyen las reacciones que provocó el Informe en las siguientes instituciones: Corte Suprema, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, Investigaciones y Asociación Nacional de Magistrados de Chile.

Lucas Sierra[5].

[5] Abogado e Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP). Miembro de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

A. INFORME*

PRÓLOGO: REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, RICARDO LAGOS ESCOBAR**

PARA NUNCA MÁS VIVIRLO, NUNCA MÁS NEGARLO

El 12 de agosto de 2003 di a conocer al país mi propuesta sobre Derechos Humanos. Señalé entonces que era inmenso el sufrimiento de las víctimas, de quienes fueron detenidos y encarcelados por razones políticas, la mayoría torturados. Independientemente de las ideas que cada uno profese, esos compatriotas merecen el respeto de todos los chilenos.

Decidí entonces crear una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que fuera capaz de determinar el universo de quienes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

He recibido el Informe de dicha Comisión. La madurez de Chile requiere conocer aquella parte de la verdad que todavía permanecía oculta a los ojos de mucha gente. Su contenido se hará público y estará al alcance de todos los chilenos y de la comunidad internacional.

Es un documento elaborado con extrema acuciosidad, en el que se recogió el testimonio de 35.865 personas residentes en Chile y el extranjero.

De ellas, cerca de 28 mil testimonios fueron aceptados como válidos, y algo más de 7 mil no cumplieron los estrictos requisitos para ser aceptados por la Comisión. Estas 7 mil personas tendrán el derecho a que su situación sea reconsiderada por la Comisión, la cual volverá a estudiar esos antecedentes y tomar sobre ellas una decisión definitiva.

En este Informe se aborda el contexto en que se produjeron las detenciones y las torturas; se examinan los diferentes períodos de la represión; se identifican los métodos de tortura utilizados; se hace un catastro de los recintos de detención; se analiza el perfil de las víctimas; se señalan las consecuencias que los tormentos tuvieron para los detenidos y sus familias; y, por último, se presentan propuestas de reparación.

Creo no equivocarme al señalar que la elaboración de este Informe constituye una experiencia sin precedentes en el mundo, pues re-construye —31 años después— un cuadro completo de la tremenda abyección que vivió nuestra patria, y busca crear las condiciones para recomponer nuestra memoria colectiva. Representa un acto de dignificación de las víctimas y un empeño por sanar las heridas de nuestra alma nacional.

---

* Extractos del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

** Discurso con que S.E. el Presidente de la República dio a conocer al país el 28 de noviembre de 2004 el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Texto completo.

El Informe es una expresión de la fortaleza moral de Chile, que necesitaba mirar con madurez la profundidad del abismo en el cual un día cayó. Da cuenta de una comunidad que puede, ahora más que antes, mirar de frente y sin temores, las desventuras que jamás deberían haber ocurrido en esta tierra. Da cuenta de un país que hoy es más fuerte, porque está cohesionado en torno a la paz, la libertad y el derecho.

La lectura del Informe

He leído y analizado este Informe cuidadosamente. Me han conmovido los relatos de las víctimas. Se trata de experiencias estremecedoras, al punto que la emoción hace difícil la lectura de muchos pasajes. He sentido muy de cerca la magnitud del sufrimiento, la sinrazón de la crueldad extrema, la inmensidad del dolor.

Expreso aquí, como Presidente de todos los chilenos, mi solidaridad y mi afecto a todas las víctimas y sus familias.

Nadie que lea este Informe podrá permanecer indiferente. Estoy seguro que la inmensa mayoría de mis compatriotas sentirá el dolor de los que sufrieron y reafirmará su adhesión a la libertad y los derechos humanos.

Al leer el Informe, varias preguntas nos acosan una y otra vez.

¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo provocar conductas humanas como las que allí aparecen? No tengo respuesta para ello. Como en otras partes del mundo y en otros momentos de la historia, la razón no alcanza a explicar ciertos comportamientos humanos en los que predomina la crueldad extrema. ¿Cómo explicar que el 94% de las personas detenidas señalaron haber sufrido torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que prestaron testimonio, casi todas señalan haber sido objeto de violencia sexual?

Y hay otros interrogantes. ¿Cómo pudimos vivir 30 años de silencio? Sabemos que durante la dictadura el silencio era consecuencia del miedo, pero eso no lo explica todo. Del lado de las víctimas, el silencio se relaciona con una actitud de dignidad básica. El Informe nos dice: "Descorrer el velo de la tortura, de la humillación, de la violación física y sicológica, es algo muy difícil de hacer. Incluso ante los propios cónyuges. Y ese mismo silencio comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos, de aquello que preferimos poner en el estante de las pesadillas y arrancar de los archivos de la historia".

El trasfondo del Informe son las vidas quebradas, las familias destruidas, las perspectivas personales tronchadas, la impotencia para dar a los hijos una vida mejor. Todo ello estuvo cubierto durante mucho tiempo por un espeso e insano silencio. Eso tenía que terminar, y ha terminado.

La entereza de las víctimas y sus familiares, así como de las personas e instituciones que siempre estuvieron a su lado impidió que ese silencio se convirtiera en olvido. Allí reside la fortaleza moral de las víctimas.

Algunos preguntarán si tiene sentido hacer un informe tantos años después de los hechos. El propio documento da una respuesta al señalar que "la experiencia de la prisión política y la tortura representó un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias, y que las acompaña hasta el presente".

No se trata únicamente de horrores del pasado, sino también de daños que permanecen hasta hoy. Además, necesitábamos enfrentarnos a esta parte traumática de verdad que nos era debida y completar el proceso de justicia y reparación al que las víctimas tienen derecho.

En esos oscuros días del ayer, a través de la prisión y la tortura, a estos compatriotas y sus familias se les trató de arrebatar su dignidad para siempre. Reivindicarlos treinta años después es exaltar esa dignidad que nunca perdieron y que fue el sustento moral de la lucha por recuperar la democracia.

La recuperación de la memoria

En su casi bicentenaria historia, Chile ha tenido pocos quiebres tan profundos y dolorosos como el de 1973. Ninguno ha sido tan crudamente investigado como este último. Ello es sanador del cuerpo y el alma de nuestro país, y puede servirnos para fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad que es capaz de aprender de sus errores y de superar divisiones que en un determinado momento parecieron irreparables.

Ha sido un largo, paciente, y complejo camino. El primer paso fue el de la Comisión Verdad y Reconciliación, creada por el Presidente Aylwin y que presidió el abogado Raúl Rettig. Gracias a su labor, fue posible establecer en gran medida la verdad sobre los compatriotas que murieron como consecuencia de la violencia política, y certificar más allá de toda duda el drama de los detenidos desaparecidos.

Otro paso fundamental fue la Mesa de Diálogo, instalada por el Presidente Frei, en la cual participaron las FF.AA. y otras instituciones, que extendió la conciencia sobre la magnitud de la tragedia y favoreció el proceso de reencuentro nacional.

El camino de las reparaciones para las víctimas se construyó a través de múltiples formas, con el fin de atenuar en parte los estragos de la represión. El año pasado, formulé mis propuestas en un documento titulado "No hay mañana sin ayer". Hoy esas propuestas están en trámite legislativo en el Congreso Nacional.

Las lecciones básicas

Lo he dicho en varias ocasiones: el quiebre de la democracia y de las bases de nuestra convivencia se produjo en medio de tormentas políticas e ideológicas que no fuimos capaces de controlar. La ruptura de la institucionalidad y la instauración de la arbitrariedad y el terror fueron la consecuencia de esos errores colectivos e individuales.

Se puede entender el contexto de intransigencia política anterior al golpe de Estado, la errónea transformación del adversario en enemigo, el marco internacional de la guerra fría, como antecedentes de la ruptura institucional, pero no hay justificación para la inclemencia que vino después. Comparto, pues, plenamente lo afirmado por el Comandante en Jefe del Ejército: "¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito en las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones de los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética".

No, mil veces no. Nunca habrá justificación ética para las atrocidades que se cometieron y que detalla el Informe. Nunca más.

El reconocimiento de este triste capítulo de nuestra historia permite que todos los chilenos nos sintamos hoy parte de una misma comunidad y de un mismo destino. Este reconocimiento permite sentir que nuestras instituciones armadas nos pertenecen a todos los chilenos.

Reconocer el desvarío y la pérdida del rumbo que en un momento del pasado permitieron que las instituciones armadas y el Estado se apartaran de su tradición histórica, de sus propias doctrinas que las vieron nacer y desarrollarse, es la condición para que retomemos la senda de siempre trazada por los fundadores de la República.

El Informe hace el recuento de los recintos donde se practicó la tortura, señala los agentes del Estado que la practicaron, establece los medios empleados por diversos organismos públicos, identifica las leyes que ampararon las prácticas represivas, describe la actuación de los tribunales. La larga lista de cuarteles, comisarías, unidades, buques, intendencias, campos de prisioneros y recintos secretos cubre todo el territorio nacional. La conclusión es clara e insoslayable: la prisión política y la tortura fue una práctica institucional de Estado, absolutamente inaceptable, y por completo ajena a la tradición histórica de Chile.

Hoy podemos mirar con serenidad nuestro pasado. Estamos construyendo una democracia cada día más sólida y bregando por el progreso y la justicia social, que son la base de una nación cohesionada. Hemos recuperado la necesaria armonía entre la sociedad y sus instituciones armadas.

Tenemos la fortaleza suficiente para transformar el dolor en memoria y la memoria en unidad nacional, en futuro compartido.

La reparación

El trabajo de la Comisión y la difusión del Informe constituyen el acto más importante de reparación de las víctimas. Se terminó el silencio, se desterró el olvido, se reivindicó la dignidad.

Pero ello requiere algo más. Si está comprometida la responsabilidad de los agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado responda por ello, lo cual implica adoptar medidas que ayuden a mitigar los efectos del dolor causado.

Lo digo claramente: estas medidas están orientadas a sanar las heridas, y no a reabrirlas.

En este sentido, comparto las tres líneas de reparación presentadas por la Comisión. En primer lugar, las medidas institucionales, las cuales cristalizarán en la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá a través de la educación el respeto por los derechos humanos, a la vez que se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada desde la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.

En segundo lugar, las medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones de la terrible experiencia que hemos conocido. Estas medidas, por cierto, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.

En tercer lugar, las medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico.

Las medidas de reparación jurídicas se refieren básicamente al restablecimiento de la honra pública de estas personas que las más de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y del restablecimiento pleno de todos sus derechos ciudadanos.

En el ámbito económico, ya lo he dicho antes, resulta imposible reparar los daños físicos y espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas. Estimo, además, que sería una falta de respeto a las víctimas el que este valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión sobre dineros.

No obstante, considero que el Estado, que ya hizo un esfuerzo respecto de los familiares de ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el exilio y que decidieron retornar, respecto de quienes fueron exonerados de sus trabajos por razones políticas, debe entonces entregar una compensación que, aunque austera, sea una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.

Después de mucho meditar, y considerando que la mayoría de las víctimas tienen más de 55 años, he decidido que la reparación más adecuada es a través del pago a las víctimas de una pensión que les ayude a tener una mejor calidad de vida en los años que tienen por delante.

Ahora bien, respecto del monto de esta pensión, tengo que tomar en cuenta todas las obligaciones que el Estado tiene con la sociedad, particularmente con las familias más pobres de nuestra patria.

Haciendo el máximo esfuerzo, he decidido enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de reparación que establece que cada una de las víctimas reciba una pensión equivalente al valor de una y media pensión mínima, esto es, algo más de 112 mil pesos mensuales. Cabe recordar que el monto de dichas pensiones aumenta cuando la persona cumple 70 años, y vuelve a aumentar cuando cumple 75. A quienes reciban una pensión por causa de derechos humanos, ella se le imputará a esta nueva pensión.

Estoy consciente que para muchos el reconocimiento de su calidad de detenido político constituye una reparación moral suficiente para recuperar su dignidad herida. Ellos, en un gesto solidario, podrán renunciar a la reparación económica, y esos fondos serán aportados a las actividades del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

De otra parte, y acogiendo la propuesta de la Comisión, he resuelto que las víctimas consignadas en el Informe tengan una acogida preferencial en materia de educación, salud, y vivienda.

En educación, todas aquellas víctimas que por razones de la prisión o la tortura vieron interrumpidos sus estudios, el Estado les garantizará la continuidad gratuita de sus estudios, sean ellos de nivel básico, medio, o superior. En salud, todas las víctimas consignadas en el Informe tendrán gratuidad en la atención institucional y serán beneficiarios del Programa de Rehabilitación y Atención Integral de Salud (PRAIS). Además, el Estado les garantizará los apoyos técnicos y la rehabilitación física necesaria a aquellas víctimas que hayan quedado con problemas físicos como consecuencia de la prisión o la tortura. En vivienda, las víctimas tendrán un tratamiento preferencial para acceder a los beneficios de vivienda, los cuales serán próximamente dados a conocer por la Ministra de esa cartera.

Palabras finales

Estoy profundamente orgulloso del esfuerzo realizado, al que concurrieron muchas personas e instituciones. Esto nos engrandece como comunidad, nos dignifica a todos los chilenos, es una prueba de coraje republicano de una nación que cree en sus instituciones, en su fortaleza histórica, en su vocación humanista y democrática.

Quiero agradecer el trabajo de los miembros de la Comisión y sus colaboradores, en particular la tarea cumplida por Monseñor Sergio Valech, que encarna el rol determinante jugado por la Iglesia Católica y otras Iglesias en la defensa de los derechos humanos en los momentos más duros. Aprecio la colaboración prestada por las instituciones civiles y militares.

Los miembros de la Comisión cumplieron una tarea dolorosa como pocas. Al hacerlo, demostraron un inmenso amor a la patria.

Quiero agradecer finalmente a todas las chilenas y a todos los chilenos que prestaron testimonio y estuvieron dispuestos a revivir su sufrimiento por el bien de Chile. Tal como ellos lo pidieron, sus testimonios serán confidenciales y, por tanto, nadie tendrá acceso a ellos durante los próximos 50 años.

El camino de hacernos cargo de este pasado ha sido largo, difícil, complejo. Asumir la cruda verdad de lo ocurrido y la responsabilidad de lo obrado, no ha sido fácil para ningún chileno.

Como sociedad hemos ido abriendo los ojos a la realidad de nuestros compatriotas desaparecidos, ejecutados, exiliados, exonerados, y ahora, a quienes sufrieron prisión política y tortura.

Como Estado, en la medida de las posibilidades, hemos ido proponiendo y definiendo medidas de reparación moral, simbólica, y también económicas, a todas esas personas que fueron víctimas de atropellos a sus derechos más elementales. Con el reconocimiento a las víctimas de prisión política y tortura completamos un capítulo por el cual teníamos que pasar.

Lo hemos hecho no para reavivar rencores y divisiones, sino para fortalecer la convivencia y la unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu del Informe. Ese es el espíritu que debe prevalecer una vez conocido el sufrimiento y el dolor.

Porque hemos sido capaces de mirar toda la verdad de frente, podemos empezar a superar el dolor, a restaurar las heridas.

Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo.

III. Contexto*

Con este capítulo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura aspira a describir un contexto básico para la mejor comprensión de la represión política verificada durante el régimen militar, considerando que ésta tuvo lugar, cobró impulso y pudo prolongarse debido a una serie de factores de índole social, política, institucional, jurídica y cultural. No es su intención ofrecer un cuadro completo o pormenorizado de la historia del régimen instalado por la Junta Militar de gobierno desde el 11 de septiembre de 1973. Tampoco pretende dilucidar el peso relativo de los distintos factores que incidieron en el quiebre de la democracia en Chile, tras un período de intensa polarización política nacional e internacional y de fuerte movilización social, ni pronunciarse sobre las responsabilidades de cada actor político y social en la incubación y precipitación de esa crisis. El conocimiento del proceso que desembocó en el 11 de septiembre de 1973, no puede justificar la violación masiva de los derechos humanos posterior. En concordancia con el mandato específico de esta Comisión, no pareció necesario referirse a ese período previo, ni repetir el trabajo de encuadre histórico de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, realizado hace más de una década por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En concreto, este capítulo busca dar cuenta del contexto de la represión política, con particular referencia a la prisión política y la tortura.

Concentración de poderes

Al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 regía en Chile la Constitución de 1925. Esta Carta Fundamental consagraba la división de poderes, cuya finalidad era evitar los abusos en el ejercicio de sus funciones, mediante la fiscalización recíproca de sus actuaciones y la común sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Al producirse el derrocamiento del gobierno elegido en 1970, la Junta Militar procedió a fijar sus propias atribuciones y a subordinar el ejercicio de otros poderes del Estado a las necesidades del momento. La Junta Militar declaró que asumía el "Mando Supremo de la Nación", entendiendo por tal la concentración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, comprometiéndose en principio a garantizar la "plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial", así como a respetar la "Constitución y las leyes de la república, en la

* Capítulo III del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (extracto). Los puntos suspensivos entre corchetes indican párrafo incompleto u omitido.

medida que la actual situación del país lo permita". La Junta Militar se declaraba investida de la misión de reparar los males atribuidos a la acción del marxismo, sindicada como contraria a los intereses nacionales, definía la situación del momento como constitutiva de un estado de guerra interna librada contra sus agentes.

Desde su inicio, la Junta desplegó una intensa actividad legislativa mediante cientos de decretos leyes. Muchos de ellos entraron en conflicto con la Constitución vigente, produciéndose eventualmente una derogación tácita de la misma, lo que generó reparos en la Corte Suprema. Ella exigió que los decretos leyes que efectivamente la modificaran, así debían indicarlo, en forma expresa. Por ello, a través del Decreto Ley Nº 788, publicado en el *Diario Oficial* del día 4 de diciembre de 1974, la Junta Militar buscó salvar la situación previa, precisando la existencia de decretos leyes de rango constitucional, que "han tenido y tienen la calidad de normas modificatorias, ya sea de carácter expreso o tácito, parcial o total, del correspondiente precepto de dicha Constitución". De ahí en adelante, las modificaciones a la Constitución tuvieron un carácter expreso, lo que evitó la posibilidad de que los decretos leyes contrarios a la Carta de 1925 fueran declarados inaplicables. La preceptiva así elaborada señaló el tránsito al nuevo ordenamiento jurídico, que apuntaba en dirección al fortalecimiento del poder coactivo del aparato estatal. Éste no sólo dependió de la concentración de poderes, que motivó a los propios miembros de la Junta Militar a calificar su gobierno como un régimen autoritario; también se fue perfilando con una serie de medidas destinadas a crear condiciones institucionales favorables al accionar discrecional y expedito de las nuevas autoridades de gobierno. En 1974, cuando el Comandante en Jefe del Ejército asumió el título de Jefe Supremo de la Nación, y luego el más tradicional de Presidente de la República, la concentración del poder adquirió mayor fuerza todavía, al pasar desde una fase colegiada a otra personalista sin precedentes en la historia de Chile. Ahora, Augusto Pinochet Ugarte reunía la Comandancia en Jefe del Ejército con el monopolio de las funciones administrativas y gubernativas, al mismo tiempo que presidía las labores de la Junta de Gobierno, vale decir, del Poder Legislativo y Constituyente. La salida forzada del general Gustavo Leigh Guzmán de la Junta, en 1978, quien desaprobaba sus pretensiones de acelerar el traspaso del poder a los civiles, consolidaría aún más el liderazgo personal de Pinochet.

A continuación del golpe militar, mediante distintos decretos leyes, se disolvieron el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional; se proscribió a los partidos políticos que conformaban la Unidad Popular, a la vez que se decretaba el receso de todas las colectividades restantes (si bien en 1977, producto de la creciente oposición del Partido Demócrata Cristiano

al régimen militar, también serían prohibidas), y se destruyeron los registros electorales. En consonancia con las anteriores medidas orientadas a desarticular las instituciones y los procedimientos requeridos por una democracia representativa, se cesó en su cargo a las autoridades municipales vigentes, a fin de designar alcaldes llamados a secundar el trabajo de la Junta; y se decretó la calidad interina de todos los funcionarios de la Administración Pública, a excepción de los miembros del Poder Judicial y de la Contraloría. Se contó, en consecuencia, con la capacidad para purgar a voluntad los servicios estatales. En ausencia de elecciones y de plazos fijos para el ejercicio de funciones públicas de antigua representación popular, la ciudadanía perdió la facultad de elección de sus dirigentes mediante el sufragio. La Junta Militar también sometió a control las actividades de las organizaciones sindicales e intervino las universidades públicas y privadas, nombrando a altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en servicio activo o en retiro, como rectores-delegados dotados con amplias atribuciones para expulsar de sus planteles a profesores y estudiantes con simpatías de izquierda, a la vez que se sometían a escrutinio los contenidos de la docencia y la programación de los canales universitarios de televisión. Se instauró una rigurosa censura a la prensa escrita, la radio y la televisión, que puso fin a cualquier medio de comunicación masiva capaz de cuestionar o fiscalizar las acciones del régimen militar, con lo cual se implantaron condiciones proclives a los abusos de poder, sea en la forma de la prisión política o la tortura. Simultáneamente, el toque de queda, vigente durante años, sustrajo del escrutinio público las acciones de los agentes del Estado ocupados de la represión, autorizados para circular libremente en las horas prohibidas. El exilio por motivos de orden político entró en acción inmediatamente, afectando a miles de personas, muchas de las cuales, antes de hacer abandono del país, sufrieron prisión política y tortura.

Los esfuerzos de propaganda del régimen buscaron crear, con el apoyo de los medios de comunicación partidarios, que amplificaban la versión oficial de los hechos, un clima de opinión favorable a la aplicación de acciones punitivas. Resulta ilustrativo el presunto *Plan Z*, que habría definido genéricamente las víctimas en la mira de la izquierda abocada a la conquista del poder total por medio de la fuerza, y que evidencia, por parte de los militares y de sus colaboradores civiles, la pretensión de disculpar las medidas represivas, así presentadas como actos de legítima defensa. El *Plan Z* destacaba entre los alarmantes hallazgos consignados en el *Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile*, obra redactada para suscitar apoyo emocional al golpe militar y sus consecuencias, ilustrada con fotos del "armamento de guerra pesado y liviano encontrado por las fuerzas

militares y de orden en los arsenales de la Unidad Popular". Este libro, cuyas revelaciones nunca han podido ser validadas empíricamente, presentaba al *pronunciamiento militar* como la oportuna y justa reacción al inminente *autogolpe* de la Unidad Popular. La "parte más siniestra de dicho *operativo* —se informaba a la desprevenida población del país— era el exterminio simultáneo, en todo el país, de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. Se perseguía, con este golpe criminal, que debía iniciarse el 17 de septiembre, paralizar por el terror toda resistencia a la dictadura de la Unidad Popular, que se implantaría de inmediato". Debe consignarse que el *Libro blanco* serviría como prueba inculpatoria en procesos llevados a cabo por tribunales militares, lo que constituía una violación a las normas imperantes de admisibilidad de los medios de prueba. Entre los partidarios del golpe militar, tampoco debe desestimarse su papel legitimador de la violencia política, acompañada de indulgencia ante los atropellos al imperio del Derecho, incluso al interior del Poder Judicial.

Declaración de estado de guerra

En concordancia con todo lo anterior, la Junta suspendió las garantías individuales, desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Para fundamentar esa medida, alegó la existencia de un cuadro de conmoción interna atribuido a la existencia de fuerzas rebeldes o sediciosas, se decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional, y el estado de emergencia en determinadas provincias y departamentos. Como señaló el Decreto Ley Nº 5, publicado en el *Diario Oficial* del 22 de septiembre de 1973, el "estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias en que vive el país", debía considerarse como un "estado o tiempo de guerra" sometido al régimen jurídico que el Código de Justicia Militar y otras leyes penales contemplan para tales situaciones críticas. Esta preceptiva no hacía otra cosa que retirar de manos de la justicia ordinaria en beneficio de la justicia militar de tiempo de guerra el "conocimiento y la decisión de las causas por infracción a las normas sobre estado de sitio". Los estados de excepción serían renovados sin interrupciones durante quince años seguidos, mientras el estado de sitio —categoría que ampliaba aún más la discrecionalidad del poder en su tarea represiva, concediéndole a las autoridades de gobierno la facultad de ordenar arrestos arbitrarios, censurar la prensa y suspender un cúmulo de libertades civiles— se prolongaría hasta marzo de 1978, y posteriormente se restableció en dos ocasiones, ambas en la década de 1980.

Es legítimo preguntarse si existió de hecho la "guerra interna" aducida insistentemente por las nuevas autoridades y sus seguidores como justificación de sus políticas represivas. Hoy en día existe acuerdo en que las Fuerzas Armadas y de Orden lograron el control del país en el curso del mismo día del golpe, sin sufrir mayores contratiempos en ninguna parte. Esto se explica fundamentalmente por la inexistencia de divisiones entre las propias Fuerzas Armadas, que actuaron mancomunadamente, sin experimentar quiebres entre sectores involucrados en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y otros comprometidos con su defensa. Algunos de los altos oficiales partidarios del respeto al orden constitucional y la prescindencia política de las Fuerzas Armadas y de Orden se habían visto forzados a renunciar en las semanas previas al 11 de septiembre, tras quedar aislados dentro de sus propias instituciones, ya decantadas a favor de una salida extra institucional a la crisis política de 1973. Adicionalmente, constan casos de militares de todos los rangos víctimas de la represión política perpetrada por sus propios compañeros.

Entre los partidarios del gobierno depuesto predominó el desconcierto y el miedo. La poca resistencia que hubo fue esporádica, aislada, sin coordinación entre sí, y con una capacidad de fuego ineficaz frente a un ejército profesional cohesionado y, por añadidura, en pie de guerra. Las Fuerzas Armadas, en allanamientos previos al golpe realizados en aplicación de la reciente ley de control de armas, habían podido percatarse de la inexistencia de arsenales relevantes o significativos en poder de sectores comprometidos con la Unidad Popular, al mismo tiempo que evaluaban la disposición represiva de la suboficialidad y la tropa, puesta a prueba sobre todo en los allanamientos a las empresas controladas por los trabajadores. En todo caso, según la propia confesión de oficiales encargados de implementar el golpe militar, causó sorpresa la escasa o nula resistencia encontrada, incluso en las mayores ciudades del país.

[...].

Consejos de guerra

Frente a la inexistencia de un contexto de guerra interna, en ausencia de una lucha armada que hiciera peligrar el monopolio de la fuerza reservado a las Fuerzas Armadas y de Orden, legalmente no se justificaba la supeditación del ordenamiento jurídico a esa situación de emergencia. Tampoco existió ocupación de territorios por parte de enemigos que ameritara la utilización de tribunales militares en tiempo de guerra, consagrados en el Código de Justicia Militar. Este código prescribe que la jurisdicción

militar en tiempo de guerra comprende el territorio nacional declarado en estado de asamblea o de sitio, sea por ataque exterior o conmoción interior, y el territorio extranjero ocupado por las armas chilenas. Cabe recordar que la Junta Militar decretó el estado de sitio por conmoción interior, que se hizo entender como estado o tiempo de guerra. De modo que la declaración jurídica de guerra actuó como ficción legal y justificación política para acciones represivas sin correspondencia con el contexto de referencia, empleándose así los tribunales militares en tiempo de guerra.

¿Cómo actuaron los consejos en discusión? En la práctica, contraviniendo su propia normativa, sólo se aplicaron sus procedimientos coercitivos, ignorando los demás efectos jurídicos de la guerra, pues no se reconoció el uso legítimo de la fuerza por parte de sus oponentes, tampoco se respetó el carácter y los derechos de los prisioneros, ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra. Téngase presente que en el derecho internacional, como testimonio del rechazo unánime y sin reservas a la tortura, ésta se encuentra proscrita de las leyes, incluso de las leyes de la guerra, en cuyo caso es lícito matar en el curso de acciones bélicas, pero nunca torturar. Es más, los fiscales, a quienes en materia penal competía instruir y sustanciar todos los procesos, recogiendo y consignando las pruebas pertinentes, deteniendo a los inculpados y produciendo los elementos de convicción que fueran del caso, representaron un eslabón más en la cadena de los agentes represores. En efecto, se limitaron a recibir y a consignar antecedentes contrarios a los inculpados, omitiendo toda actuación o diligencia que pudiera beneficiarlos y exculparlos, siendo que a ellos tocaba investigar la verdad de los hechos y reunir los antecedentes que sirvieran para comprobarlos. No obstante, las declaraciones de los inculpados nunca fueron investigadas, optándose por rechazarlas en beneficio de las pruebas oficiales. O bien, en vez de interrogar personalmente a los implicados, a menudo los fiscales se conformaron con interrogatorios realizados por funcionarios desvinculados de los tribunales militares, en recintos ajenos a los mismos y mediante apremios que extraían confesiones ajustadas a los requerimientos de los torturadores. El análisis de los procesos revela que, actuando con sistemático descuido de la imparcialidad del debido proceso, los fiscales permitieron y aun propiciaron la tortura como método válido de interrogatorio. Igual puede decirse de otros miembros de los tribunales militares —que es el caso de los auditores— privilegiaron la misión punitiva de los mismos.

Tampoco se reconoció el derecho a la legítima defensa. En todo procedimiento penal los imputados gozan de diversos derechos y garantías. Por ejemplo, que se les informe de manera específica y clara de los hechos

que se les imputan; ser asistidos por un abogado desde los actos iniciales de la investigación; solicitar que se active la misma y conocer su contenido; solicitar el sobreseimiento de la causa; guardar silencio o declarar sin juramento; y no ser sometidos a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes*. No obstante, los imputados por los tribunales militares en tiempo de guerra a contar de 1973 casi nunca gozaron de los derechos antes señalados. En tales tribunales militares la norma fue la violación de esos derechos y garantías. No se sabía con certeza de los hechos imputados. Apenas se conocía la causal de detención, incluso en los casos en que existieron delitos reales de por medio. A veces se detenía por pertenecer a una institución o empresa. Otras sólo por ser o haber sido funcionario de una repartición pública determinada.

En general, la intervención de los abogados en las distintas actuaciones de la investigación se restringió al final de las mismas, y cuando podían actuar era por un corto tiempo. Los abogados, a quienes se acostumbraba impedirles el acceso a sus defendidos, debían partir por rastrearlos en los distintos centros de prisión; luego, intentar obtener algún documento que acreditara su detención; posteriormente, presionar para que se les sometiera a alguna modalidad de juicio que concluyera la etapa de "investigación", que solía traducirse en torturas. Así como estaba la situación, la convocatoria a un consejo de guerra podía aparecer como un paso adelante. Éste al menos admitía la posibilidad de la defensa, si bien no siempre inmediata, pues fue común la práctica, por parte de los fiscales, de reservar sólo un día al mes para la atención a los abogados y no concurrían a dicha cita en la fecha prevista, con lo cual los asuntos a tratar por éstos se postergaban, tal como se prolongaba el cautiverio de sus defendidos. Por añadidura, tampoco era posible solicitar diligencias y decisiones. No era permitido conocer las actuaciones.

Además, la construcción de las sentencias de los tribunales militares solía ser muy pobre, de un nivel ostensiblemente inferior al propio de una judicatura. Carecían de un sólido cuerpo de reflexión. En muchos casos se dieron por establecidos los hechos y los delitos sin mayores fundamentos, se indicaron someramente las defensas de los inculpados y se rechazaron rápidamente por ser contrarias a las conclusiones anteriores. Por lo común, no se hizo un análisis jurídico de las conductas establecidas, y éstas se encuadraron con facilidad en tipos penales elegidos de antemano. Incluso se declararon reprochables conductas que nunca lo fueron legalmente, con-

* Arts. 183, 184 y 121del Código de Justicia Militar, en relación al art. 67 del Código de Procedimiento Penal; art. 18 de la Constitución Política de 1925, y art. 105 del Convenio de Ginebra relativo al trato dado a los prisioneros de Guerra (Convenio III).

figurando delitos instrumentales a los acusadores. Con frecuencia se admitió la sola confesión para acreditar los delitos. Y se hizo un empleo indiscriminado de las presunciones. Hubo sentencias que se conformaron con aprobar las conclusiones del fiscal, quien, a su vez, se limitaba a aceptar la denuncia militar o policial; en otros casos ni siquiera se mencionaron los hechos por los cuales se procesaba, o apenas se consignaron genéricamente.

Para disipar cualquier duda respecto a las prácticas viciosas de los tribunales militares en tiempo de guerra, esta Comisión ha considerado ilustrativo traer a colación el contenido o carácter de algunas sentencias aportadas por declarantes. Éstas ejemplifican cómo los tribunales militares en ejercicio después del 11 de septiembre de 1973 se apartaron ostensiblemente de la ley y la justicia:

a) Las sentencias de los tribunales militares en tiempo de guerra evidencian una conducta especial que, en lo substantivo, restringió ostensiblemente el derecho a la defensa. En el proceso Rol N° 114-74 de Calama, se juzgó a 28 personas detenidas en Chuquicamata sin que existiera causa o motivo alguno. De hecho el Consejo de Guerra debió absolverlas de la acusación de haber infringido el artículo 4°, letra c), de la Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo, en frases decidoras, el fallo de fecha 14 de agosto de 1974 establece: "4°.- *Que es espíritu de la H. Junta Militar de Gobierno que dirige actualmente los destinos del país de no sancionar a las personas por ideas políticas, sino por los hechos delictuosos en que hubieren incurrido y también es su espíritu de dar oportunidad a los ciudadanos para que se rehabiliten y lleguen a ser elementos útiles a la sociedad de que forman parte; 5°.- Que, sin embargo, al H. Consejo de Guerra le parece de total y absoluta inconveniencia la presencia y permanencia de tales individuos en esta zona, ya que si bien es cierto que no fue posible configurar los delitos imputados ni sus correspondientes responsabilidades, no es menos verdad que son elementos negativos, que no constituyen factor de garantía alguna para la seguridad y tranquilidad que requiere el país para su recuperación a nivel nacional"*. A consecuencia de lo anterior, los inculpados fueron expulsados del mineral.

b) En la apreciación de la prueba en conciencia, fue común el empleo de interpretaciones absolutamente reñidas con el derecho, a partir de las cuales los consejos de guerra buscaron eximirse hasta de normas mínimas de lógica, razonabilidad y fundamentación de los fallos. Aquélla no se aplicó como un método para buscar la convicción con mayor esfuerzo, sino como una forma de admitir demostraciones irregulares o de presumir he-

chos mal establecidos o de preferir arbitrariamente algunos antecedentes sobre otros. No se realizó esa apreciación delicada, difícil, razonada, que mueve la conciencia del sentenciador en la comprobación del delito o del responsable, para así formarse una convicción. No se advirtió jamás, que la apreciación de la prueba en conciencia, así como el fallo en conciencia, constituyen reflexiones de mayor envergadura y no meras licencias procesales. En el proceso Rol N° 12-73 de Linares, donde se juzgó a 76 personas por hechos diferentes, el Consejo de Guerra expresa que la apreciación de la prueba en conciencia "*es fallar enteramente de acuerdo a su convencimiento personal*". Admite que el tribunal posee "*más las características de un jurado que de un tribunal de derecho*". Y agrega conceptos tales como: "*El consejo de guerra se vale libremente de todos los antecedentes, sin que en ello se vea entrabado por limitaciones legales*", por lo que "*ha omitido formular consideraciones particulares sobre los medios de prueba*".

La sentencia del consejo de guerra de Linares en el proceso de Rol N° 21-74, es aún más específica. Dice: "la facultad de apreciar la prueba en conciencia importa una verdadera derogación de las normas que encauzan o limitan la regulación probatoria, en términos tales que, al decir de un autor, el tribunal puede fallar enteramente de acuerdo a su convencimiento personal o, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia nacional, resolver en conciencia significa obrar con el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar".

Así pudo ser posible que en el proceso de Rol N° 1726-73 de Concepción, al fundamentar la condena el Consejo de Guerra estableció que "*la confesión del reo también puede contribuir a establecer la existencia del delito*" y que "*no podrá deducirse la plena existencia del hecho punible respecto de este reo, que declaró haber destruido los explosivos que tenía en su casa*". Estas decisiones se apartaron completamente de las normas probatorias del Código de Procedimiento Penal, cuerpo legal aplicable también en el sistema procesal militar*.

c) En los tribunales militares en tiempo de guerra se hizo abuso de las presunciones, arrancadas muchas veces, de hechos no probados. La circunstancia de haber sido miembro, por ejemplo, de un partido político, de un sindicato u otra agrupación, bastaba para declarar responsabilidades por hechos atribuidos a esa agrupación, a pesar de que no había antecedente alguno de que el inculpado hubiera participado en el supuesto hecho delictual. Así, en el proceso de Rol N° 428-73 de Antofagasta, se enjuicia a militantes del Partido Socialista de Tocopilla por infracciones a la Ley de

* Art. 194, inciso tercero, del Código de Justicia Militar, en relación al título IV, de la Segunda parte del Libro II del Código de Procedimiento Penal.

Control de Armas. El consejo de guerra sentencia el 12 de diciembre de 1973: "*En efecto, en sus calidades de principales dirigentes intelectuales y activistas del Partido Socialista de Tocopilla, no pudieron ignorar el almacenamiento de explosivos y otros elementos bélicos existente en la sede de dicha colectividad y tampoco podían ignorar el uso que se pretendía dar a tales elementos conforme a los planes terroristas elaborados por los máximos dirigentes de su Partido y por otros sujetos de la ex-Unidad Popular. Es por esto que pesa sobre todos ellos la grave presunción de responsabilidad establecida en el art. 8, inciso final* (después fue el penúltimo), *de la Ley de Control de Armas, no desvirtuada por las defensas ni por las declaraciones respectivas de los reos. En efecto, esta presunción se aplica cuando se descubre un almacenamiento de armas y consiste en que se presumirá de ser miembros de un grupo armado de combate a las personas que aparezcan como dueñas o autorizadas para poseer las armas, o a los moradores de los sitios en que estén situados los almacenamientos y los que hayan arrendado o facilitado los predios para el depósito"*. El Comandante en Jefe de la Primera División aprueba la sentencia el 22 de enero de 1974. De este modo, todos los socialistas de Tocopilla fueron considerados miembros de un grupo armado de combate. Dichas circunstancias ocurrieron antes del 11 de septiembre de 1973. En ese entonces, uno de los afectados trabajaba como profesor en Antofagasta, pero se le castigó igual, por haber sido detenido en Tocopilla.

En el proceso recién citado, se crea una sanción al margen de toda disposición legal. Al único procesado que se absuelve de los delitos investigados por "su escasa o ninguna cultura" y "su bajo coeficiente intelectual", "*como medida de seguridad para controlar su conducta, se le condena a tres años de vigilancia por parte de la Autoridad, conminándole al trabajo lícito por el bien de la Patria y de su propia familia*". Esta decisión del consejo de guerra se aleja por completo del derecho bajo el pretexto de defender la patria y la familia.

Por otro lado, en el proceso de Rol N° 29-74 de Osorno, seguido en contra de siete personas, el consejo de guerra considera que "*es de todos conocido que el MIR tendía a la violencia y a provocar el caos, y que cada uno de sus integrantes sabía o no podía ignorar este objetivo de alcanzar el poder por medio de la guerra civil y el aplastamiento de los contrarios; por lo tanto, el simple hecho de pertenecer al MIR, o ser simpatizante del mismo, indica un concierto para alcanzar los fines ilícitos señalados"*. Bastaba pertenecer al MIR para castigar a un militante o simpatizante, aunque no se acreditara conducta delictiva alguna.

d) En muchos casos se aplicaron penas desproporcionadas. Así, los procesos de la FACH mostraron una severidad inusitada. En el famoso proceso de Rol N° 1-73 se juzgó a personas por una supuesta infiltración en la Fuerza Aérea con el objeto de destruirla y sustituirla por otra que permitiera la instauración de la dictadura del proletariado. El fallo del Consejo de Guerra expresa, entre otras cosas, que los inculpados justificaron sus actos con el "*falso pretexto de estar gestándose un golpe militar para deponer al gobierno marxista*".

También ocurre lo anterior en el proceso de Rol N° 471-74 de Antofagasta, se juzga a un cabo segundo de la FACH, a quien se atribuye haber pertenecido a un núcleo del MIR, haber cantado una canción marxista, haber sido adoctrinado para sabotear los aviones y confeccionar un plano de la Base Aérea, que fue entregado a otra persona prófuga. El consejo de guerra lo condena a la pena única de presidio militar perpetuo, no obstante que tales conductas ocurrieron antes del 11 de septiembre de 1973. La sentencia es aprobada por el Jefe de la Primera División del Ejército. Se debe recordar que al procesado se le asignó como defensor a un capitán de la FACH, quien argumentó que los hechos no constituían el delito de traición por haber ocurrido en tiempo de paz, lo que desestimó el consejo de guerra por creer que tal delito puede cometerse tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Asimismo, cabe resaltar que el plano no fue encontrado; ello, en lugar de negar jurídicamente su existencia, tal como correspondía, agravó la situación del inculpado, pues el supuesto extremista prófugo, según se indicó, "*podría haberlo entregado a una potencia foránea con el consecuente daño irreparable*".

e) En íntima relación con tales penas desproporcionadas, se presentaron casos de tipificación de delitos a partir de conductas muy primarias o limitadas. Así ocurrió en el proceso de Rol N° 54-75 de Osorno, seguido en contra de 16 personas, a quienes se atribuye la organización clandestina del Partido Socialista después del 11 de septiembre de 1973 y a quienes se castigó por el delito de asociación ilícita establecido en el Decreto Ley N° 77 de 1973 y por otros delitos de la Ley sobre Control de Armas. Sin embargo, a dos de los procesados se les castigó como autores del delito de espionaje conforme a los artículos 245, N° 12, y 246 del Código de Justicia Militar, porque, de acuerdo con el consejo de guerra, "*extrajeron y escribieron secretos militares y otros datos del Regimiento de Ingenieros N° 4 Arauco, para su entrega al enemigo y para favorecer las operaciones de estos últimos*". Ha quedado establecido que no había un enemigo a quien entregar secretos ni operaciones que pudieren haber sido objeto de ayuda.

Pueden agregarse otras demostraciones sobre la facilidad de los consejos de guerra para establecer delitos con escasa reflexión. En el proceso de Rol N° 4-73 de Punta Arenas, se juzga las actividades del Partido Socialista con antelación al Golpe Militar. Se afirma en la sentencia que ese Partido "*tenía por finalidad actuar ofensivamente contra grupos de oposición y de las FF.AA. que se estimaron no adictos al Gobierno de la Unidad Popular*". La sentencia enumera después las supuestas y perversas pretensiones del Partido Socialista (cambiar la Constitución, expulsar a los miembros del Congreso Nacional y el Poder Judicial, provocar la guerra civil, incitar a la indisciplina y desobediencia a los miembros de las Fuerzas Armadas). Con estos preparativos se adjudicó a los procesados los delitos de rebelión militar del artículo 265 del Código de Justicia Militar y los delitos del artículo 4°, letras a), b) y d) de la Ley de Seguridad del Estado. En este proceso se da el rango de medio de prueba excepcional al *Libro Blanco* del cambio de gobierno en Chile. Por añadidura, se castigó por ofensas públicas a miembros de las Fuerzas Armadas, en tiempo de guerra, de acuerdo al artículo 284 del Código de Justicia Militar, a una procesada que, estando detenida, "*gritó belicosa y groseramente a un cabo que la custodiaba que no le dirigiera la palabra mientras usara esa porquería de uniforme*".

f) Cuando se aludió al uso indiscriminado de la confesión, se tocó la materia más extensa que se refiere a la admisibilidad de los medios de prueba. Nuestro sistema jurídico ha ido evolucionando en cuanto a la naturaleza de los medios de prueba, pero siempre ha fijado las reglas de su admisibilidad, de tal manera que los jueces no han podido ni pueden aceptar sino aquellos medios expresamente señalados. Es otra regla de certeza. Pese a eso, el examen de los tribunales militares en tiempo de guerra establecidos en 1973 depara algunas sorpresas. Según lo señalado, se utilizó el *Libro Blanco* como un documento que se bastaba a sí mismo, dando plena fe a su texto. El libro del acusador se blandió contra el acusado sin ninguna otra diligencia. En proceso sin rol del consejo de guerra de Los Ángeles, en que hubo 13 procesados, éste admitió la apreciación de todos "*los elementos probatorios*", entendiendo por tales, todos aquellos elementos de convicción reunidos del proceso, "*aun cuando no sean de los contemplados en el Código de Procedimiento Penal*". Así, pudo considerarse un informe del Servicio de Inteligencia o una declaración prestada por un inculpado en un regimiento, de la cual se retractó ante el tribunal. Con tales antecedentes, el tribunal no practicó las diligencias ordenadas por la ley, sino que sencillamente los utilizó en contra del imputado.

El Poder Judicial

A la definición unilateral de una guerra inexistente y a la actuación irregular y punitiva de los consejos de guerra debe añadirse la abdicación, por parte de la Corte Suprema, de su facultad, establecida en la Constitución Política del Estado vigente al momento del golpe militar, para controlar y supervigilar a los tribunales militares en tiempo de guerra. De esta manera la Corte Suprema se desentendió de faltas y abusos cometidos por los tribunales militares, no sólo en su funcionamiento, sino también en sus resoluciones. Renunciando a su tuición sobre los consejos de guerra, tampoco objetó la ampliación arbitraria de su competencia, para incluir actos y conductas previos a la dictación del Estado de Sitio.

Todo ello acarreó funestas consecuencias en lo concerniente al respeto a los derechos humanos, pues su exclusión jurisdiccional permitió las más graves violaciones a las personas y a la ley. A tanto llegó la exclusión jurisdiccional en que incurrió el máximo tribunal, que una materia tan especial y habitualmente tan delicada como el discernimiento de los menores de edad para los efectos penales, también fue cedida a los tribunales militares en tiempo de guerra. La connivencia de las máximas autoridades del Poder Judicial con los militares respondía, en parte, a su común rechazo al gobierno derrocado. Los altos magistrados censuraban su pretensión de instaurar el socialismo mediante el uso de "resquicios" legales, así como la deliberada pasividad del Ejecutivo ante las violaciones a la propiedad privada por parte de sus partidarios, ignorando por razones políticas numerosas resoluciones judiciales que ordenaban a la fuerza pública desalojar a quienes participaban en las "tomas" de predios agrícolas y fábricas. La férrea defensa de su poder jurisdiccional —contrariado por la resistencia administrativa al cumplimiento de sus sentencias— dañó drásticamente las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, cuyos miembros fueron atacados con encono por los voceros de la Unidad Popular, que les acusaban de actuar como guardianes de los intereses de las clases privilegiadas, en su resistencia al proceso de cambios conducente a una mayor justicia social.

Es necesario precisar que la Corte Suprema no sólo cedió el terreno para la acción discrecional de las nuevas autoridades y sus agentes. Además, hizo caso omiso de los abusos cometidos contra personas dejadas en total indefensión frente a aquellas arbitrariedades. Y esto a pesar de que, desde el inicio, éstas fueron denunciadas con insistencia por los abogados defensores, quienes, aceptando por fuerza la normativa jurídica de tiempo de guerra, intentaron infructuosamente que se respetaran los tratados inter-

nacionales suscritos por Chile en la materia, con miras a hacer valer las garantías al trato humano de los prisioneros. En rigor, el máximo tribunal del país brindó su decidido apoyo al gobierno militar. Entre sus ministros, hubo quien se sumó a una gira política por Europa para validar de cara al exterior las razones del "pronunciamiento militar". El presidente de la Corte Suprema a la fecha del golpe fue particularmente enfático en su adhesión a las nuevas autoridades. En los discursos de inauguración del año judicial, la actividad anual más solemne de dicho Poder, insistió en manifestar su respaldo al gobierno militar, llegando al extremo de negarles validez y autoridad a las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos formuladas por organismos nacionales e internacionales, y desestimando sus críticas al régimen de libertades públicas imperante en Chile tras el golpe de Estado. Cuando se refirió a los detenidos bajo el nuevo régimen, presentó un cuadro benévolo, sin aspectos sombríos, que no se condice con los miles de testimonios en sentido contrario.

[...]

Es más, el apoyo del Poder Judicial a las acciones punitivas del régimen militar corrió a la par con la purga interna del mismo. La posibilidad de disentir con la línea fijada por su máxima autoridad quedó debilitada tras la destitución de magistrados acusados de haber sido partidarios de la Unidad Popular. Mediante dos decretos leyes de diciembre de 1973, la Corte Suprema, adquirió la facultad de remover a voluntad a magistrados y funcionarios, sin necesidad siquiera de informar al afectado de los cargos invocados para su expulsión, con lo cual se anulaba de plano cualquier posibilidad de réplica. Incluso ya desde antes, para forzar renuncias de magistrados y funcionarios catalogados de marxistas, se había optado por el recurso de los traslados arbitrarios que obstaculizaban la continuación de la carrera en el Poder Judicial. A futuro, la política de los ascensos o las calificaciones serviría habitualmente para premiar a los incondicionales del gobierno militar y penalizar a quienes se obstinaran en actuar con independencia, desincentivando las resoluciones o los fallos adversos a sus lineamientos. El temor a los servicios de seguridad y sus represalias contra quienes se aventuraran en sus dominios también inhibió la acción independiente de la judicatura. Adicionalmente, alegando ignorancia de antecedentes sobre el afectado, el Ministerio del Interior con frecuencia invalidó las escasas intervenciones de las Cortes en favor de las víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, en cuyo transcurso la regla fue la aplicación de torturas. Al no estar acreditada la aprehensión por ningún organismo de seguridad y en ausencia de la orden de detención respectiva, difícilmente se podía poner en libertad a la persona en cuestión. A menudo los jueces se

escudaron en este procedimiento oficial para rechazar los recursos de amparo, incluso cuando existían testigos de la detención del afectado. Tampoco se acostumbró velar por los derechos y las garantías del mismo cuando sí se reconocía su aprehensión: por ejemplo, advirtiendo que la orden de detención era posterior al arresto, que había sido cumplida sin haber sido antes intimada, o que era efectuada por sujetos no individualizados, cuya calidad de funcionarios públicos tampoco había sido acreditada.

Interesa precisar aquí que la forma adecuada de tramitar los amparos, de acuerdo a un Auto Acordado dictado por la Corte Suprema en septiembre de 1932, requería que fuesen resueltos con la mayor celeridad posible, para prevenir que la "prisión injusta" redundara en grandes males para el afectado, disponiendo líneas de acción consecuentes con ese objetivo. Durante el régimen militar, los jueces desatendieron sistemáticamente esas indicaciones, que habían tenido como trasfondo original la dictadura de Ibáñez. No ignoraban que arriesgaban su carrera funcionaria si aceptaban los recursos de amparo, y que éstos de seguro serían revocados en las instancias superiores del Poder Judicial. Bien por miedo a las represalias o por convicción de estar colaborando con una causa encomiable, no actuaron con la decisión prevista frente a los funcionarios o agentes del Estado renuentes a informar sobre los amparados o reacios a cumplir con las disposiciones judiciales que les incumbían.

La resistencia de la magistratura a acoger los recursos de amparo privó a las víctimas de la represión de un crucial instrumento jurídico cuyo uso adecuado habría permitido hacer frente de forma más decidida a la tortura, a las dilatadas incomunicaciones que permitían prolongar su práctica, y a los arrestos en cárceles clandestinas donde los prisioneros quedaban a completa merced de sus captores, sustraídos a cualquier control por parte de la justicia. Sólo en Santiago, entre 1973 y 1989, el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad presentaron cerca de 9.000 recursos de amparo, por detención y preventivos, tanto individuales como masivos, que raramente fueron acogidos. Entre 1985 y 1989, por ejemplo, los tribunales de la capital acogieron apenas 28 recursos de amparo de los 2.357 presentados por la Vicaría de la Solidaridad, según consta en sus registros. Para legitimar la abdicación de sus funciones, las máximas autoridades del Poder Judicial recurrieron a una antigua doctrina que limitaba la procedencia del recurso de amparo cuando estaba en vigencia un estado de sitio. Esa jurisprudencia, por cierto muy debatida y cuestionable, siempre admitió su validez en el marco de "estados de sitio transitorios", o sea, de unos días apenas, y durante períodos en que tanto los ministros de Estado como el Presidente de la República debían responder de sus eventuales abusos de

poder y arbitrariedades ante el Congreso Nacional, vigente en tanto órgano fiscalizador de las acciones del gobierno. Desde luego, nada de esto sucedía después del 11 de septiembre de 1973.

El recurso de amparo o "*hábeas corpus*" ha sido tradicionalmente el mecanismo más importante a disposición de los jueces para velar por la vida y la integridad física de los arrestados, reclamando la presencia del "cuerpo" de éstos en los tribunales. A pesar de esto, rara vez los jueces ordenaron que se trajera al amparado a tribunales, aun admitiendo que los servicios de seguridad no siempre se avinieron a cumplir con tales solicitudes y, si lo hacían, como consta en testimonios entregados a esta Comisión, se cuidaban de amenazar previamente al afectado respecto a las graves consecuencias de una declaración sincera en lo tocante a las torturas padecidas. Callar las torturas aparecía como una forma de no exponerse a padecerlas de nuevo, según aclaraciones de los propios torturadores al momento de despedir a sus víctimas requeridas por la justicia. Tal como le advirtiera un agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) a un estudiante de Valparaíso detenido y torturado en 1984 (y que entregó a esta Comisión relatos pormenorizados de su experiencia), "vos sabís donde estái, o colaborái o te dejamos lisiado de por vida, aquí no valen los recursos de amparo, aquí mandamos nosotros".

En cuanto a los procesos por detenciones ilegales y por aplicación de tormentos, también fue costumbre entre jueces ordinarios y militares abstenerse de individualizar a los hechores; no decretar apremios contra los funcionarios que rehusasen informaciones relevantes; no constituirse en el lugar de los hechos; no practicar reconstituciones de escenas; no tomar nota de los rastros o huellas, ni efectuar retratos hablados de los hechores; no citar a los testigos de los hechos denunciados por el denunciante, y abusar del secreto de sumario pretextando diligencias pendientes que, como nunca se cumplían, posibilitaban la prolongación indefinida de ese estado. Todo esto, no hay que olvidar, mientras los victimarios podían presionar a la víctima para que desistiera de seguir adelante con la querella. Lo anterior también es válido para los pocos jueces con el coraje suficiente para proseguir investigaciones referentes a las denuncias de torturas. Las reiteradas amenazas de muerte buscaban poner fin a sus indagaciones (tal como le pasó al juez René García Villegas del Vigésimo Juzgado del Crimen de Santiago, según un informe de Amnistía Internacional de 1987). Por añadidura, los pocos jueces civiles que, entrada la década de 1980, se decidieron a llevar a fondo sus investigaciones, vieron cómo sus esfuerzos solían concluir en nada al traspasarse las causas a la justicia militar, a la cual competían las investigaciones en que se sospechaba la participación

de personal uniformado. En efecto, la justicia militar levantó una línea defensiva del sistema represivo: en su poder, las querellas por tortura se eternizaban o se rechazaban, resguardando jurídicamente a los violadores de los derechos humanos. De este modo, se eludió procesar a los miembros de los organismos de seguridad o de la policía inculpados por las denuncias de tortura, que de preferencia comenzaban a pesquisarse cuando los rastros más evidentes habían desaparecido, no pudiendo, así, acreditarse el delito.

Considerando los hechos expuestos hasta ahora, no sorprende constatar que José Cánovas Robles, el juez designado presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago en 1974, al rememorar el desempeño del Poder Judicial durante el régimen militar, concluyera en sus Memorias de un magistrado (1989): "Los tribunales de justicia no se atrevieron a imponer el respeto de los preceptos legales vigentes". En resumidas cuentas, las garantías de impunidad que el Poder Judicial —por propia iniciativa o presionado por las autoridades del Ejecutivo— ofreció a los agentes de la represión, alentaron la perpetuación e intensificación de la prisión política y la tortura, puesto que los magistrados corrientemente se abstuvieron de velar por los derechos y la integridad de sus víctimas. Con la venia de la Corte Suprema, se ignoró el principio de urgencia, en cuya virtud y por mandato legal el recurso de amparo debe fallarse en 24 horas, para prevenir la tortura. También se aceptó que la confesión extrajudicial obtenida mediante la tortura en los recintos secretos avalara las denuncias de la autoridad, siendo considerada una prueba sobre la participación criminal del reo. Así, no rara vez los agentes represores forjaron los culpables que, cuando menos ante los partidarios del régimen militar, parecían dar la razón al rigor punitivo de sus métodos. Y, como factor agravante, se sumaba la tolerancia frente a la incomunicación administrativa. Conforme con el principio según el cual las autoridades públicas, ni siquiera en circunstancias extraordinarias, tienen otra autoridad o derecho que aquel conferido por la Constitución y las leyes, es evidente que aquéllas no pueden disponer incomunicaciones a los detenidos en virtud de órdenes administrativas decretadas en estado de excepción, pues sus atribuciones se limitan al sólo hecho del arresto. Durante la dictadura, sin embargo, se conocieron incomunicaciones administrativas muy extensas; dos personas concurrentes ante esta Comisión sufrieron incomunicaciones de hasta 330 días, tras ser detenidas en enero de 1974, y permanecieron hasta noviembre de ese año en recintos secretos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). A continuación de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, las incomunicaciones persistieron, y llegaron a prolongarse por más de dos

meses, a causa de las prórrogas decretadas por los fiscales militares al plazo habitual de 20 días. Entre tanto, la persona incomunicada quedaba a disposición de los torturadores, con tiempo de sobra para ensañarse con sus víctimas y, luego, aguardar su aparente recuperación física.

Si el miedo a las represalias desincentivaba las denuncias ante los tribunales por los afectados, la mala acogida a las mismas por parte de los tribunales también incitaba a la minimización de un problema cuya real envergadura superaba con mucho al número de las querellas. Sólo la Vicaría de la Solidaridad, entre junio de 1978 y diciembre de 1989, presentó querellas por más de 1.300 casos de tortura en los tribunales, sin nunca obtener resultados satisfactorios. En 1981, por ejemplo, de los 909 detenidos por los servicios de seguridad bajo acusación de romper el receso político, subvertir el orden público o perpetrar otros delitos, 98 personas se querellaron por torturas y otros apremios ilegítimos. Todas las denuncias fueron desestimadas aduciendo falta de pruebas, algo que restaba sentido al uso de ese recurso legal, tanto más si la decisión de revelar la tortura ponía en riesgo la propia vida y la de los cercanos. Además, la CNI, contaba ocasionalmente con la colaboración de médicos en sus sesiones, quienes facilitaban certificados en que acreditaban que el detenido había abandonado sus recintos en perfecto estado de salud, de modo que, en caso de presentar lesiones, éstas no le concernían. Dicho procedimiento se aplicó hasta con detenidos muertos a causa de torturas. En ausencia de condenas de los tribunales, el Poder Judicial daba apariencias de honorabilidad al régimen militar, pues el gobierno insistía en negar la existencia de la tortura en Chile, no obstante las reiteradas condenas de organismos internacionales alusivas a atropellos a los derechos humanos. El máximo tribunal, en una sentencia del 8 de enero de 1986 (ingreso Corte Suprema Rol Nº 24.810), declaró que el "ejercicio de los derechos humanos está sujeto a las limitaciones que le imponga la autoridad, en cuanto sea indispensable para prevenir (...) el orden público, el bien común y la seguridad del Estado". No las leyes sino las autoridades podían limitar a su arbitrio el goce de los derechos de las personas.

Resta puntualizar que las denuncias sobre la tortura y la evidencia que las confirmaba permitieron a los magistrados tomar conocimiento de su uso regular e institucional, sobre todo desde fines de la década de 1970. Es cierto que al comienzo la denuncia de la tortura fue más bien genérica. Ello porque los organismos de defensa de los derechos humanos concentraron sus primeros esfuerzos en conocer el paradero y el estado de personas desaparecidas, y en poner a resguardo, facilitando su salida del país, a

ex prisioneros políticos todavía en situación de riesgo. Recién en junio de 1978 se registran las primeras denuncias al respecto interpuestas ante la justicia con respaldo de la Vicaría de la Solidaridad. En todo caso, las organizaciones creadas para brindar asistencia social y jurídica a las víctimas de la represión —como el Comité Pro Paz y la misma Vicaría— nunca dejaron de esmerarse por instruir a los magistrados sobre las violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, esas entidades efectuaron denuncias generales y suministraron información específica sobre las víctimas a los organismos internacionales. Así pues, los informes de éstos que alertaban sobre los atropellos en curso se sucedieron durante todos los años del régimen, comenzando con la indagación realizada por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 1973, cuyo resultado arrojó gravísimas denuncias de tortura por parte de los presos políticos. Por lo demás, la notoriedad de Chile en la materia nunca pasaría desapercibida afuera del país. La revista estadounidense Time, en su edición del 16 de agosto de 1976, dedicó un extenso reportaje al uso contemporáneo de la tortura. De entre todas las naciones acusadas de estar practicándola como método auxiliar de gobierno, certificaba que los casos citados con mayor frecuencia por los expertos en el tema eran Chile e Irán. Frente a este tipo de acusaciones, el gobierno militar siempre respondió negándoles toda validez, significando que eran parte de una campaña de descrédito montada por el *marxismo internacional*.

Por cierto, se pueden invocar otros ejemplos —ahora internos— de denuncia pública. En 1983, a raíz de la reciente detención de diez dirigentes sindicales, cerca de noventa abogados presentaron un escrito a la Corte Suprema pidiéndole adoptar "urgentes medidas que pongan fin a la tortura, que ha pasado a ser una rutina habitual del interrogatorio y permanencia de cualquier persona en cárceles secretas de la CNI". Se quería hacer ver a los altos magistrados que, "mientras eran torturados se tramitaban recursos de amparo en su favor en la Corte de Apelaciones de Santiago; que las distintas salas que conocían de los recursos se negaban sistemáticamente a acceder a las peticiones de comisionar un ministro para constituirse en la CNI u ordenar a ese servicio traer a su presencia al detenido, lo que habría evitado la tortura permanente durante cinco días"*. Los abogados preocupados de la defensa de los derechos humanos nunca dejaron de insistir en que la tortura violaba la legislación nacional vigente e internacional ratificada por el gobierno de Chile. Ni la Constitución de 1980, pilar de la nueva institucionalidad, ni el Código Penal ni el Código de Justicia Militar amparaban

* "Terminar con la tortura ahora", *Solidaridad*, 1ra. quincena de septiembre (1983), p. 5.

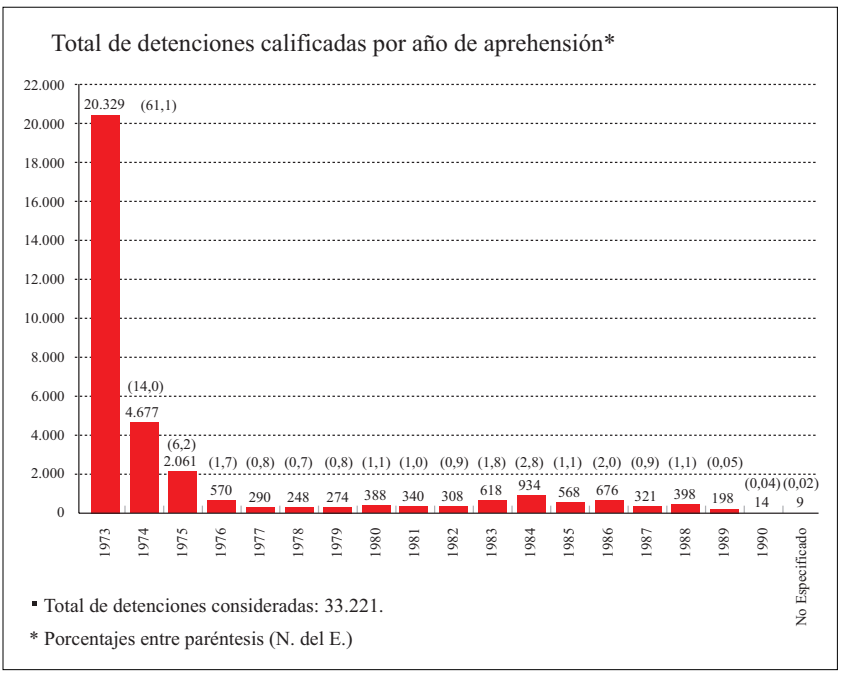
esos métodos, invariablemente condenados y proscritos. La tortura, durante todo el régimen militar, permaneció tipificada como un delito en el ordenamiento jurídico vigente, existiendo resguardos legales, sustantivos y procesales, para garantizar la integridad de los detenidos. Por eso recurrían a la Corte Suprema, conscientes de que existía el marco legal para intentar ponerle atajo a la tortura, recordándoles a sus ministros que en agosto de 1973 el máximo tribunal había adoptado un acuerdo nunca tan digno de consideración como ahora, puesto que prohibía expresamente interrogar y obtener declaraciones bajo apremios físicos y morales a los detenidos, y mantenerlos en lugares secretos e incomunicados sin previa orden del tribunal competente.

Huelga aclarar, con todo, que las escasas actuaciones positivas de la justicia respecto a los abusos de poder pusieron escollos a la práctica de la represión, pero los servicios de seguridad encontraron modos de sortearlos para continuar con el recurso a la tortura. En un fallo sin precedentes de noviembre 1983, motivado por la presentación de un recurso de amparo preventivo a favor de un dirigente poblacional, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago negó expresamente a la CNI la facultad para detener y recluir en cárceles secretas, haciendo valer las disposiciones constitucionales que sólo permitían a la fuerza pública (Carabineros e Investigaciones) realizar detenciones, a la vez que éstas siempre debían verificarse en los lugares públicos expresamente destinados al efecto. Los abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos celebraron la decisión, pero en rigor la represión siguió su curso, desalentando el optimismo inicial. De partida, la tortura también era una práctica empleada por Carabineros e Investigaciones, de suerte que reservar a sus funcionarios las detenciones no garantizaba librarse de los apremios ilegítimos, en sus vehículos de servicio, en sus retenes y en sus cuarteles. Peor aún, la CNI prosiguió actuando como era su costumbre. Las leyes nunca fueron vinculantes para los organismos de seguridad ni para los agentes de la represión, pues sus métodos formaban parte del arsenal de gobierno. La Ley 18.623, dictada en junio de 1987, le quitó la atribución a la CNI de mantener recintos de detenidos, al tiempo que la facultaba para realizar aprehensiones, siempre y cuando los afectados fuesen entregados a Carabineros, a Investigaciones o al tribunal del cual había emanado la orden respectiva. Pero la CNI mantuvo sus recintos secretos de detención, torturando además en los propios domicilios de los afectados y en dependencias de Investigaciones, según consta en denuncias judiciales, en informes de Amnistía Internacional y en testimonios recabados por esta Comisión.

El aparato represivo

La represión política —fusilamientos sumarios, tortura sistemática, privación arbitraria de libertad en recintos al margen del escrutinio de la ley, conculcación de derechos humanos fundamentales— operó desde el 11 de septiembre hasta el fin del gobierno militar, aunque con grados de intensidad variables y con distintos niveles de selectividad a la hora de señalar a sus víctimas. El *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación* ofrece valiosa y concluyente información al respecto al identificar la institucionalidad del aparato represor, el ámbito de sus actividades, sus métodos y sus procedimientos refinados con el tiempo, así como los lugares en donde se ejercieron tareas coercitivas.

El trabajo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ha permitido confirmar esos hallazgos, añadiendo sin embargo un componente de masividad a la práctica de la prisión política y la tortura antes insospechado, para concluir que la amplitud de la represión y el universo social de sus víctimas eran mayores al presupuestado hasta ahora. Basta con adelantar que más del 94% de las personas que sufrieron prisión política y acudieron a esta Comisión, dicen haber sufrido torturas de manos de agentes del Estado o de personas a su servicio, a lo largo y ancho de todo Chile.



Si bien la prisión política y la tortura acompañaron todos los años del gobierno militar, el grueso de sus víctimas se concentra en su fase de instalación en el poder: el 61% de las 33.221 detenciones calificadas por la Comisión corresponden a detenciones efectuadas en 1973, principalmente por Carabineros (43%) y personal del Ejército (30%).

Los antecedentes reunidos por esta Comisión permiten formarse convicción moral sobre la efectividad de las torturas denunciadas, invalidan cualquier explicación de éstas como actos anómalos o fortuitos, como acciones solamente imputables a título individual, y pone de relieve su deliberado carácter institucional. Todo confirma que la tortura operó como un sistema para obtener información y anular cualquier forma de resistencia. Sería erróneo suponer que la tortura nada más respondía a un método proscrito para obtener información relevante. A veces —cuando se buscaba capturar a las dirigencias de los partidos de izquierda en la clandestinidad— cumplió esa función. Pero el interrogatorio también fue, invariablemente, un ritual aleccionador. Esto queda particularmente en evidencia en el caso de los torturados cuyas confesiones debían confirmar las indicaciones de los represores. Es decir: a veces la tortura buscaba arrancar un secreto, pero siempre se proponía imponer el terror, aplicando escarmientos ejemplificadores para sofocar la oposición al régimen. Esta finalidad fue evidente en los primeros meses del régimen militar; y volvería a serlo en la década de 1980, cuando se hizo manifiesto el descontento.

Todo esto permite concluir que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito, del único Poder del Estado que no fue parte integrante de ese régimen: la judicatura.

De esta forma, a partir del golpe militar, sobre todo durante el tiempo restante de 1973, la represión se aplicó en casi todas las localidades del país, por miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, asistidos a veces por civiles que suelen participar en el proceso de selección de las víctimas, e incluso en las prácticas de tortura. En esta primera fase de embestida masiva contra todos quienes pudiesen ser catalogados como disidentes políticos, se ejecutó a numerosas personas sin juicio previo o tras procesos viciados, se asesinó a prisioneros inermes alegando la “ley de fuga”, se realizaron arrestos masivos que engrosaron las filas de prisioneros que se habían entregado voluntaria y confiadamente en respuesta a los

Bandos que reclamaban su comparecencia, y los allanamientos y otros operativos masivos de registro, tanto en la capital como en provincias, abarcaron poblaciones, industrias, universidades, edificios públicos, fundos, centros mineros. En vista de los miles de prisioneros reunidos, se debieron improvisar recintos de detención y tortura, al tiempo que se habilitaban campos de concentración en el norte, el centro y el sur del país, cuyos últimos prisioneros no serían liberados sino a fines de 1976. Resulta ilustrativo de la masividad de la prisión política y la tortura en 1973, enunciar tipos de recintos de detención registrados por esta Comisión: prefecturas, comisarías, subcomisarías, retenes, tenencias, cuarteles, regimientos, escuelas matrices, estadios deportivos, gimnasios, casas patronales, fábricas, edificios de instituciones públicas, hospitales, maestranzas, bases aéreas y navales, cárceles de hombres y mujeres, estaciones ferroviarias, embarcaciones de la Armada y de la marina mercante, campos de prisioneros, fiscalías militares, gobernaciones, intendencias, y establecimientos educacionales, como universidades y liceos.

No sólo se persigue a personas con cargos de responsabilidad en el gobierno depuesto, a connotadas figuras de izquierda y a sus militantes comunes y corrientes, sino a representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. Así, además de a dirigentes de partidos, militares y carabineros detienen a trabajadores sindicalizados, campesinos partícipes de la reforma agraria, dirigentes de juntas de vecinos y estudiantes universitarios y de secundaria. Numerosas personas buscan asilo en las embajadas, mientras el nuevo gobierno promueve la delación como una forma legítima de colaboración con el trabajo de restauración del "orden". Entre septiembre y octubre de 1973, la "caravana de la muerte", una misión a cargo de oficiales del Ejército enviada por el Presidente de la Junta Militar al norte y sur del país, alecciona con ejemplos brutales los grados de radical ensañamiento que debían prevalecer en el trato deparado a los prisioneros. La historia de varios de los integrantes de esa comitiva, luego incorporados en cargos de responsabilidad a la DINA, sugiere cierta tendencia "meritocrática" en el reclutamiento de los agentes de la represión, cuando a ésta le correspondió institucionalizarse como un recurso auxiliar de las prácticas de gobierno, una vez que el proceso de instalación en el poder ya estaba consumado.

Esta fase represiva masiva abrió las compuertas para todo tipo de abusos. Como enseñan distintos testimonios, en ocasiones se dio la práctica de aprovechar eventualmente la indefensión de las víctimas de la represión para robarles posesiones personales de valor. La prisión política y la tortura caen de golpe sobre personas que, cualquiera fuera su militancia a la fecha,

jamás previeron la irrupción de ese accidente en sus vidas. Como ejemplos extremos cabe mencionar la situación de individuos sin compromiso político con las fuerzas proscritas. Esta Comisión ha consignado casos de atrocidades que no responden a ninguna lógica represiva que se deduzca de la existencia de un enemigo con perfiles claros, poniendo de relieve el amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a sus víctimas, inmersas a la fuerza en una condición de grave inseguridad respecto a sus derechos fundamentales.

[...]

Tras esta etapa de masivo escarmiento colectivo por parte de la fuerza militar, ya a fines de 1973 la represión política comienza a derivar hacia criterios más selectivos, tanto en lo tocante a las víctimas como a los victimarios. Los represores improvisados de la primera hora ceden su lugar a los profesionales de la coerción, que hacen carrera en sus organismos y aplican métodos de tortura más "sofisticados". Las atrocidades prosiguen, pero afectan a menos personas, y éstas suelen tener algún tipo de filiación político-partidista. En este contexto, la misión de montar un Estado policial recayó en los servicios de inteligencia y, de manera prominente, en organismos especialmente creados al efecto, que centralizarían e infundirían cierta lógica instrumental a las anteriores prácticas represivas. Es el caso representativo de la DINA, bajo la dirección del coronel Manuel Contreras Sepúlveda, luego ascendido a general. Creada formalmente en junio de 1974, pero en funciones desde fines de 1973, la DINA encabezó la represión hasta el momento de su disolución, en 1977. En sus inicios contó con personal procedente de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y en cuanto primer organismo de inteligencia del gobierno en su conjunto, tuvo a su disposición un volumen de recursos que le permitió una capacidad operativa muy superior a la mostrada por sus congéneres. La DINA, pronto controlada por personal del Ejército, coexistió con otros servicios de inteligencia, e incluso se disputó las víctimas de la represión política con sus agentes. Ninguno de los otros servicios de inteligencia u organismos de seguridad, ni el mismo Comando Conjunto en operaciones entre 1975 y 1976, que reclutó personal de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, además de civiles con anterior militancia en el movimiento Patria y Libertad, puso en riesgo su preeminencia en el combate por todos los medios a cualquier resistencia o disidencia organizada al régimen. En su tarea buscó eliminar sistemáticamente a las personas que intentaban rearticular clandestinamente partidos o los movimientos señalados, según la lógica del enemigo interno, con el estigma del marxismo: prioritaria pero no exclusivamente, el MIR y los partidos Socialista y Co-

munista. Sus cuadros dirigentes, sus militantes y colaboradores, todos agrupados en la categoría del "extremista", pasaron a ser las principales víctimas de una represión más selectiva que la precedente, aunque en ningún caso menos despiadada. Con frecuencia la tortura culminó en muertes y, a menudo, en desaparición. A veces, bajo la presión de la tortura y las amenazas de muerte, el militante se convertía en colaborador.

Hacia 1976, el modo de operar de la represión comienza a adquirir nuevos patrones. Empieza a disminuir la detención con prolongados periodos de desaparecimiento, en tanto aumenta la aprehensión por unas horas o unos cuantos días. En ese lapso, tal como había ocurrido en la etapa previa, era habitual torturar, casi invariablemente aplicando electricidad. Prolifera el amedrentamiento. La intromisión de los agentes represivos en el ámbito de la vida doméstica de sus víctimas se hace más frecuente; por ejemplo, visitando su domicilio durante la noche e interrogando, ahí mismo, a sus familiares. A menudo, el afectado era seguido y vigilado, de tal manera que advirtiera que vivía a la sombra de una inminente acción represiva. Si se le detenía, no era llevado necesariamente a un recinto secreto: podía ser torturado e interrogado dentro de un vehículo en marcha, donde recibía presiones y amenazas para que colaborara, tras lo cual la persona podía volver a su entorno cotidiano, propagando el efecto intimidatorio del miedo entre sus cercanos.

Para dimensionar el alcance de la DINA como ejecutor de un Estado policial, debe precisarse que no sólo rastreó, capturó, torturó y asesinó a quienes juzgaba enemigos del régimen autoritario; también, mediante su vasta y nutrida red de colaboradores e informantes civiles en Chile y el extranjero, en reparticiones y empresas públicas y privadas, en legaciones diplomáticas, en aeropuertos de distintos países y aun de otros continentes, y en medios de comunicación chilenos, extendió la cobertura de su vigilancia a esferas de actividad y de personas ajenas a la riesgosa militancia en la resistencia al gobierno militar. Abarcó Chile, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, coordinando acciones de represión política con los otros servicios de seguridad del Cono Sur —la llamada "*Operación Cóndor*"— y con organizaciones terroristas extranjeras de extrema derecha. A tanto llegó el celo inquisidor de la DINA, que tampoco se privó de controlar a los propios funcionarios del gobierno, incluidos los ministros, y a prominentes militares en servicio activo. Contribuyó poderosamente al afianzamiento del poder personal del general Pinochet, liderando la "guerra contra el marxismo", pero también neutralizando a sus posibles rivales al centro del propio régimen militar. En su definición de los enemigos que debían mantenerse en la mira de los servicios de seguridad, tampoco se omitió a

los defensores de los derechos humanos que buscaban crear conciencia, tanto dentro como afuera del país, respecto a las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado.

En los hechos, la DINA era un organismo de gobierno que sólo rendía cuentas al Presidente de la Junta y Comandante en Jefe del Ejército, el general Augusto Pinochet, con absoluta prescindencia de los otros miembros de la Junta, de otros mandos de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial. Sus brutales procedimientos y autonomía de acción llegaron a despertar oposición y recelo entre quienes aprobaban las políticas coercitivas del gobierno, siempre y cuando estuvieran sometidas a cierto control y "racionalidad", en cuyas consideraciones desde luego estaba no provocar la enemistad de Estados Unidos. De hecho su disolución respondió a la convicción de que sus "licencias" perjudicaban a la posición del régimen militar frente a la comunidad internacional. La DINA, en efecto, realizó complejos operativos fuera de Chile contra personalidades opositoras. En 1974 asesinó al ex Comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats, y a su esposa, en Buenos Aires; en 1975, esta vez en Roma, atentó contra la vida del líder democratacristiano Bernardo Leighton y la de su esposa, quedando ambos seriamente heridos; y, en 1976, ahora en Washington D.C., mató a Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de Allende y líder de la oposición en el exilio, y a su secretaria norteamericana. Este atentado precipitaría el fin del organismo de seguridad, aun antes de que las investigaciones del FBI incriminaran a ex agentes suyos. Pinochet sustituyó a la DINA por la CNI, organismo de seguridad dependiente del Ministerio del Interior, a cuyo cargo quedaría Contreras al momento de su creación, para ser rápidamente reemplazado. Es de interés señalar que en el Decreto Ley Nº 1.876, que especifica los motivos para concluir con la DINA, se establece la "conveniencia de estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias las atribuciones de un organismo creado en situación de conflicto interno ya superada", dando a entender que ese conflicto interno se había prolongado por años, en circunstancias de que, según lo visto, nunca existió en propiedad.

La CNI, que no sería disuelta hasta febrero de 1990, heredó de la DINA su personal, sus recintos e instalaciones. En tanto organismo ejecutor de las atribuciones otorgadas al Ejecutivo por el Decreto Ley Nº 1.877, dictado el mismo día de su creación (13 de agosto de 1977), la CNI quedó facultada para "arrestar a personas hasta por el plazo de cinco días en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles". El Decreto Ley Nº 3.451, fechado en julio de 1980, aumentaría a veinte días el plazo legal para mantener bajo arresto sin poner a disposición de los tribunales correspon-

dientes al detenido en calidad de sospechoso de atentar contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, en cuyo nombre se venían introduciendo reformas legales restrictivas de la libertad personal desde 1975. Verificado el arresto en recintos secretos, no debe sorprender que la mayoría de los afectados hayan sido torturados. Entre el 17 de julio, fecha de publicación del Decreto Ley antes aludido, y el 31 de agosto del mismo año, de las 37 personas que permanecieron detenidas por más de cinco días, 22 denunciaron —o, más bien, se atrevieron a denunciar— apremios ilegítimos. De este modo, con el resguardo de la sanción oficial, se fueron estableciendo condiciones jurídicas favorables a la práctica selectiva pero sistemática de la tortura como uno de los métodos de gobierno al servicio de una dictadura. No fue ésta la única forma de cobertura legal otorgada a las actividades de la CNI. Cuando sus agentes tuvieron que comparecer ante los tribunales, lo hicieron con identidades falsas o "chapas", medida precautoria para la preservación de sus funciones y tareas, además de su impunidad. O bien, agentes bajo investigación judicial eran transferidos a lugares distantes por sus mismos superiores, a fin de dificultar o impedir su comparecencia ante los tribunales.

Entre 1978 y 1980, la CNI pudo concentrarse inicialmente en trabajos de inteligencia, marcando un aparente declive de la actividad represiva con relación al período precedente. Esto no significó el fin sino la disminución de la detención arbitraria e ilegal y la tortura en recintos secretos. Además, se intensificó la detención por períodos breves de personas que después eran liberadas sin ser entregadas a los tribunales competentes. En esos días de cautiverio, se les torturaba. Las víctimas de esta modalidad represiva eran, de preferencia, militantes o miembros de partidos políticos, líderes sindicales, familiares y amigos de las víctimas, especialmente familiares de detenidos desaparecidos y de presos políticos, y personas vinculadas a la denuncia de los atropellos a los derechos humanos. No fue desacostumbrado el uso de la tortura como fase preliminar a la obligación de hacer o firmar declaraciones autoinculpatorias. Así la dictadura procuraba validar su política represiva frente a la opinión pública, abultando artificialmente el número y la envergadura de sus enemigos más decididos.

El panorama cambiaría con la rearticulación del MIR en 1979, ahora decidido a ofrecer resistencia armada al régimen mediante el ingreso clandestino al país de militantes con entrenamiento militar, en el marco de la llamada "*Operación Retorno*". El desarrollo de la lucha insurgente repercutiría en la intensificación de las tareas represivas de la CNI y sus pares. El mismo general Pinochet saldría en defensa de los organismos de seguridad "que con valentía y abnegación —como declararía desde las

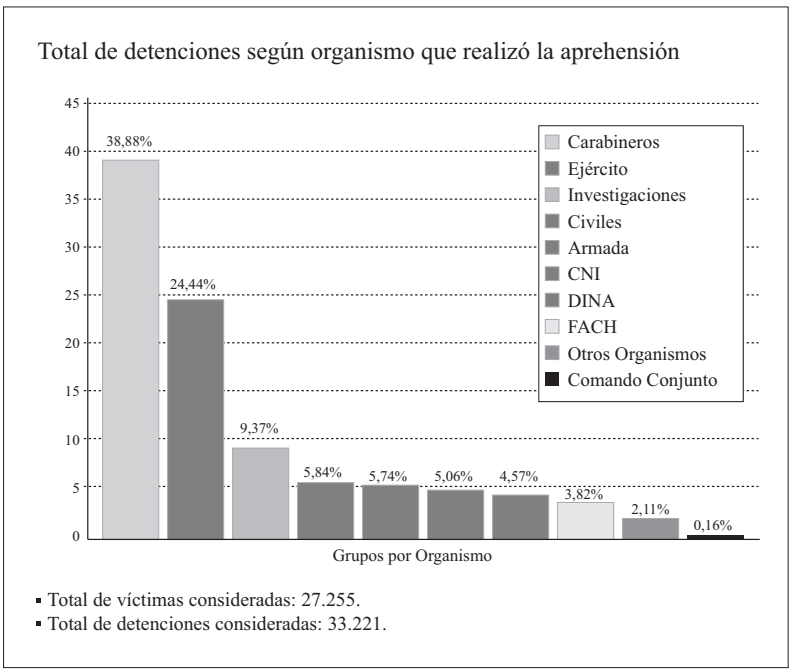
páginas de El Mercurio del 12 de septiembre de 1981— protegen la vida de los chilenos y el orden público de la nación". En todo caso, la arremetida de los "extremistas" iría cobrando mayor impulso en la década de los ochenta. Aumentarían las acciones de terrorismo selectivo contra personeros o agentes del régimen, los robos a bancos y la colocación de artefactos explosivos. Con la emergencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1983, grupo armado vinculado al Partido Comunista, que había resuelto oponer todo tipo de resistencia al régimen, la estrategia de la lucha armada de carácter insurgente penetraría en sectores poblacionales y se afincaría en el mundo urbano. La aparición del MAPU Lautaro acentuaría esta tendencia, muy gravitante entre la juventud de los sectores más desposeídos. La lógica beligerante de la lucha armada, impulsada como reacción al régimen militar, favorecía a su vez la política confrontacional del General Pinochet, quien así ganaba terreno para validar la necesidad de la represión y desestimar los llamados a la apertura política como un peligro para la gobernabilidad del país. El atentado fallido en su contra, realizado por el FPMR el 6 de septiembre de 1986, parecía confirmar sus premoniciones. Dada la situación de polarización de esos años, la Iglesia Católica advirtió repetidas veces sobre los peligros inherentes a la "espiral de violencia" marcada por los atentados contra agentes de seguridad, militares y carabineros por grupos insurgentes, cuyas acciones desataban a su vez represalias, tales como el asesinato de opositores y redadas masivas y violentas en algunas poblaciones.

Como ocurriera en los años setenta con la DINA, tampoco la represión sería patrimonio de la CNI. De entre los otros organismos o grupos comprometidos con la represión, cabe destacar a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Establecida en 1983 para hacer frente al nuevo escenario, marcado por la irrupción de grupos armados de extrema izquierda, sería disuelta tras conocerse la participación de agentes suyos en el degollamiento, el año 1985, de tres miembros del Partido Comunista. Asimismo, en la década de 1980 operaron comandos de carácter extra oficial que respondían fundamentalmente al imperativo de la venganza de sus "mártires" a manos de las llamadas "células extremistas", como el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA). En forma similar a sus congéneres oficiales, también recurrieron a la tortura como método de represalia y amedrentamiento.

Desde mayo de 1983, cuando se inician las jornadas mensuales de protesta nacional convocadas inicialmente por organismos sindicales y luego por dirigencias partidistas, a efecto de presionar a las autoridades en procura de una pronta salida democrática al régimen dictatorial, la repre-

sión y, concretamente, la tortura, vuelven a cobrar vigencia. La movilización social, a la cual se plegaron profesionales y estudiantes universitarios en solidaridad con los trabajadores, representó un desafío ciudadano que obligó a reconsiderar las políticas represivas en uso. Ante la reconstitución de redes sociales de articulada disconformidad política, la represión visible, porque ocurría en lugares públicos y a plena luz del día, recayó fundamentalmente en Carabineros, cuyos funcionarios actuaron como una fuerza antisubversiva antes que como simples garantes del orden público. La represión asociada a los allanamientos masivos a poblaciones periféricas recrudecería a partir de 1983, pero lo cierto es que en los años previos no fueron raras las incursiones punitivas de carabineros, militares y agentes de la CNI contra los líderes y las organizaciones poblacionales de base.

[...]



Ahora bien, respecto al aparato represivo, sería engañoso pensar que los atentados contra los derechos humanos sólo fueron acciones criminales dejadas en la impunidad con el apoyo del Poder Judicial. El gobierno también contó con un marco legal que instauró condiciones jurídicas adecuadas a la represión. Tradicionalmente, los estados de excepción constitucional limitaban las garantías individuales y los derechos fundamentales de las personas. El régimen militar intensificó estas restricciones, ya de por sí

severas, incorporándolas a su institucionalidad. Relativizando el principio de temporalidad, se instauró la posibilidad de sucesivas prórrogas, lo cual permitió prolongar los estados de excepción durante casi todo el régimen militar. También se ampliaron las causales que permitían invocar la oportunidad de esos estados, cuya pertinencia quedaba librada al criterio y a la conveniencia de las autoridades; como ejemplo, el Decreto Ley Nº 640 de 1974 sustituyó la causal de "conmoción interior" por "conmoción, cualquiera que sea su naturaleza". Por otra parte, numerosas leyes tuvieron carácter de secreto, que obligaba sin embargo a quienes las desconocían. Ya se aludió a la función punitiva que cumplieron los tribunales militares, que no sólo ampliaron su competencia, sino que juzgaron y fallaron en causas para las que eran incompetentes, incluso bajo las leyes de la época. Además, tanto en los años setenta como en los años ochenta, acciones lícitas fueron tipificadas como delitos, con vistas a perseguir a quienes denunciaban los atropellos a los derechos humanos e integraban la oposición pacífica al régimen, al tiempo que se aumentaban las penas de delitos preexistentes. Desde 1973, participar en actividades vinculadas a los partidos y movimientos de izquierda, transformados en "asociaciones ilícitas", pasó a constituir un delito contra la seguridad del Estado que costó la prisión política (en general acompañada de tortura) a numerosas personas concurrentes a esta Comisión. También, en octubre de 1983, frente a las jornadas de protestas nacionales, se dictó la ley 18.252 para sancionar penalmente —con penas de presidio, relegación o extrañamiento— a los dirigentes de las organizaciones sociales y políticas opositoras, definidos allí como "los que sin autorización fomenten o convoquen a actos públicos colectivos en calles, plazas y demás lugares de uso público y los que promuevan o inciten a manifestaciones de cualquier otra especie que permitan o faciliten la alteración de la tranquilidad pública".

Mención aparte merece el Decreto Ley Nº 2.191 de 1978, más conocido como la "ley de amnistía". Esgrimida por sus partidarios como un elevado aporte a la pacificación de una sociedad dividida en el pasado, en la práctica buscaba preservar en la impunidad las anteriores violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado o personas a su servicio, aun cuando ese fin también haya supuesto beneficios para personas identificadas con el gobierno de la Unidad Popular o la disidencia política. El ministro del Interior de la época, al referirse a esta ley en un discurso pronunciado el 15 de junio de 1978, definió cuál era la posición oficial respecto a los "excesos" previos y a sus responsables: "Es necesario que el país comprenda que derrotar una subversión violenta y organizada, (...) constituye un desafío que ha exigido la acción constante, abnegada y

preventiva de los organismos de seguridad, en términos que ella no puede ser enjuiciada pretendiendo aplicarle criterios propios de una época de normalidad".

Los medios de comunicación

El clima de impunidad que favoreció las graves violaciones de los derechos humanos bajo escrutinio de esta Comisión, encontró asidero en la concentración de poderes; en el amparo de una legislación restrictiva y abusiva; en la inacción, cuando no en la activa complicidad, de relevantes y numerosos miembros del Poder Judicial, así como de ciertos miembros civiles del régimen; en la prohibición de toda expresión ciudadana o actividad política; en el total control de los medios de comunicación e, inclusive, en el activo apoyo por parte de diversos medios escritos y de televisión a la acción del gobierno militar. Este clima de impunidad también halló sustento y convicción en parte de la población, dada la profunda crisis que aquejaba a la democracia y a sus instituciones; en la exacerbación ideológica extrema que validó la violencia política como medio de lucha en sustitución de la vía democrática; la supeditación del país a la lógica de la guerra fría y la particular influencia de la revolución cubana; en el fracaso de las políticas fundadas en la búsqueda del desarrollo social sin sustento en un desarrollo económico acorde, al tiempo que se generaban enormes y, a la postre, incontenibles expectativas que excedieron los cauces de la vía democrática. Todo ello, agudizado por el movimiento de los círculos empresariales, que desde el comienzo del gobierno de la Unidad Popular se aplicaron a implementar medidas desestabilizadoras.

Considerando ese caldo de cultivo, se puede entender por qué un gobierno autoritario, presentándose como el artífice de la recuperación de la institucionalidad quebrantada a partir del valor de las Fuerzas Armadas como modelo de austeridad y honestidad, pudo mantener su credibilidad por mucho más tiempo del que se hubiera esperado. La crisis previa favoreció su acción discrecional, mientras una gran mayoría de la población no sospechaba que la represión cobraría las dimensiones y la gravedad que alcanzó. La propia ausencia de actividad política y de un Congreso fiscalizador, unida a la abdicación del Poder Judicial y al control omnímodo sobre los medios de comunicación, incapacitados de investigar y, por convicción, anuentes con las políticas del nuevo régimen, fueron factores que abrieron paso a una de las más crueles represiones conocidas en la historia del país.

El golpe militar constituyó uno de los hitos más dramáticos para el periodismo de las últimas cuatro décadas, con graves repercusiones para los derechos y la integridad física y moral de muchos chilenos. Una prensa, cabe recordar, sumida en una crisis ya antes del golpe de Estado, si se considera el deterioro progresivo de la convivencia reflejado en sus medios, donde la beligerancia política, la violencia verbal y las descalificaciones del adversario habían alcanzado extremos de agresividad reñidos con las normas de una pacífica convivencia democrática.

Aprovechando estas circunstancias, la Junta Militar recién instalada justificó el control total de los medios. Los pocos autorizados a operar, fueron sometidos a censuras de hecho y a disposiciones legales abusivas. Simultáneamente, se dispuso la clausura de la prensa partidaria de la Unidad Popular. Se cerraron medios radiales y de prensa escrita, tales como *El Siglo, Última Hora, Puro Chile, Clarín, El Diario Color de Concepción, Mundo, Onda, Paloma, Ramona, Punto Final, Mayoría,* la Agencia Cubana *Prensa Latina, CTK Checoslovaca* y varias radios comunales. Por añadidura, se confiscaron sus bienes, desde edificios hasta maquinarias. Suerte parecida corrió la Editorial Quimantú, en la cual se destruyeron publicaciones, y la empresa Chile Films. En este contexto de restricción de libertades, se recurrió a la censura previa de noticias y opiniones *in situ*, a la prohibición de películas por motivos ideológicos y al embargo de publicaciones. Empresas estatales como el diario *La Nación* y *Televisión Nacional de Chile*, ahora bajo el control de las nuevas autoridades, obviamente cambiaron su política editorial, a semejanza de lo ocurrido con los canales universitarios de televisión, por mediación de los rectores militares delegados. Respecto a los trabajadores del ámbito periodístico en el contexto del proceso represivo, esta Comisión conoció los casos de cerca de 230 periodistas que sufrieron prisión política, a los cuales cabe sumar más de 70 casos de personas, en igual situación, vinculadas a esa actividad. Cabe recordar, asimismo, que la Comisión Rettig calificó la desaparición o ejecución de 23 periodistas.

Para controlar la información accesible a la mayoría de los chilenos y restringir el conocimiento de los asuntos que debían formar parte de la opinión pública, el gobierno militar invocó la defensa de la seguridad del Estado y las prevenciones para resguardar el orden público o los imperativos del receso político; montó un dispositivo jurídico, afinado con los años, que legalizó la censura y las sanciones contra quienes vulneraran sus severas restricciones, reservándose para sí la competencia para determinar en forma unilateral cuándo y cómo se atentaba contra aquéllos. En anticipo de cómo se violaría el básico principio jurídico de legalidad en materia

penal, ya el Bando Nº 12, redactado el mismo 11 de septiembre de 1973, disponía: "Se advierte a la prensa, radio y canales de televisión, que cualquiera información dada al público y no confirmada por la Junta del Gobierno Militar, determinará la inmediata intervención de la respectiva Empresa por las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que la Junta determine en su oportunidad". Luego, el Bando N° 15, junto con autorizar la publicación de *El Mercurio* y *La Tercera*, estableció: "Los directores tendrán la responsabilidad de entregar diariamente antes de su emisión las respectivas muestras para proceder a su revisión, advirtiéndose que la emisión de todo texto no autorizado será requisada y destruida". En esta misma línea, el 19 de septiembre, el Bando Nº 37, referente al ámbito radial, informaba que: "El Mando Militar tiene estricto control sobre las transmisiones. En consecuencia, cualquier empleo de esos sistemas con fines de provocar actos de insurgencia o informaciones tendenciosas, serán drásticamente sancionados".

[...]

En cualquier caso, la prensa presentó las labores de represión como cruzadas contra la delincuencia, denigrando así a las figuras opositoras mediante su presunta asociación con acciones delictivas. En octubre de 1973, la revista *Ercilla* publicó un reportaje denegatorio de la condición de los prisioneros reunidos en la isla Dawson, en cuyas dependencias se practicó la tortura, no sólo de acuerdo a la información recabada por esta Comisión, sino también a las denuncias de la época. Con el propósito de salirle al paso a la ola de "rumores sobre el maltrato a los detenidos", las autoridades habrían accedido al escrutinio de los periodistas. Para *Ercilla*, al menos, los prisioneros recibían un "trato deferente" y gozaban de "buena salud", según rezó el titular. "Si no existiesen los necesarios centinelas y alambradas, nadie podría decir —se argumentaba— que se trata de un campo de confinamiento. El aspecto físico de los confinados muestra una lozanía que no les era característica en su vida anterior. Sus rostros están tostados producto del sol y el viento magallánico." Resta precisar que la prensa en ejercicio también desempeñó un papel activo en la difusión de las ideas base del régimen militar, coadyuvando, de tal modo, a la idea de la existencia de un enemigo interno al acecho, con arsenales ocultos a su disposición. Cabe señalar que el contexto de violencia verbal preexistente en la política chilena dio pábulo a este predicamento.

[...]

La política comunicacional de la Junta Militar magnificó el peligro inminente de guerra civil. De ahí la publicación del *Libro Blanco* y su alusión al denominado *Plan Z*, que incluía documentos confidenciales pre-

suntamente hallados después del golpe militar, en donde se habría consignado que la Unidad Popular planeaba dar inicio a la guerra civil el día 17 de septiembre. De esta forma, cualquier acción subversiva pasaba a servir como estímulo a un estado de miedo colectivo. Valga como ejemplo un editorial de *El Mercurio* titulado "La dura batalla de Chile", del 5 de octubre de 1973, en donde se lee: "Los allanamientos militares y operativos policiales no se están efectuando sin motivo. Muy por el contrario, los continuos hallazgos de arsenales y demás elementos destinados a una larga lucha de guerrillas o a la formación de un verdadero ejército irregular, demuestra que para todos los fines jurídicos y de seguridad pública, el país se encuentra en estado de guerra. Por tal motivo, la aplicación de las disposiciones pertinentes del Código de Justicia Militar está plenamente justificada, como puede apreciarse en las informaciones de televisión, de radio, de revistas y de diarios, además de la experiencia personal de muchos ciudadanos. (...) Lamentablemente el imperativo del éxito de las acciones militares impide muchas veces que puedan exhibirse con toda oportunidad y con amplia divulgación las pruebas de la alta traición cometidas por los responsables del régimen anterior y los partidos políticos que lo apoyaron." En esta línea, cabe señalar que el juicio posterior que esta Comisión ha logrado formarse a la vista de los testimonios y la evidencia disponibles sobre la grave arbitrariedad de la Justicia Militar y los subsecuentes consejos de guerra, y la resignación de las facultades de supervigilancia de la Corte Suprema, ha sido lapidario.

[...]

El semanario *Qué Pasa* ofrece un ejemplo temprano de moderada disidencia interna al régimen, debida a civiles que aspiraban a grados mayores de institucionalización del sistema autoritario y a una participación más decisiva en su conducción. Ya a mediados de 1975 se comienza a manifestar la desaprobación de las prácticas de los servicios de seguridad, puntualmente de la DINA, aunque aludiendo, más bien, al costo político que implicaba apertrechar con municiones a los críticos que propugnaban el aislamiento internacional de Chile. De hecho, el llamado a la moderación cobraría fuerza a propósito del caso Letelier, que afectó seriamente las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, por otra parte, así como se censuraba a la DINA, en su edición del 9 de diciembre de 1975, *Qué Pasa* condenaba el auxilio a las víctimas por parte del Comité Pro Paz, acusándolo de brindar una "colaboración directa al violentismo marxista-leninista y a su propaganda exterior antichilena" que no considera la situación de emergencia del país, amenazado en el exterior por una feroz campaña de desprestigio, y en el interior por el "terrorismo" y la "guerrilla": "Una

emergencia tan aguda —rezaba el editorial— debía causar y efectivamente causa problemas de Derechos Humanos. No hay guerras 'limpias', sean exteriores, civiles o de subversión como la que libramos".

[...]

Con el tiempo, múltiples editoriales acogieron el tema, otra vez por vía indirecta, de la defensa de la libertad de prensa, criticando las restricciones existentes, formulando juicios adversos sobre los textos legales alusivos al tema o refiriéndose a lo que se expresaba en las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). También es cierto que la misma proliferación de la información internacional hizo más fácil la difusión de los hechos. Así, el 9 de junio de 1976, *El Mercurio* publicó el informe completo de la OEA sobre el estado de la cuestión de los derechos humanos en Chile, documento en cuyo encabezado se leen las siguientes palabras: "...haciendo un esfuerzo especial con el objeto de que la opinión pública disponga de los antecedentes completos que sirven de base a la discusión sobre los Derechos Humanos que se lleva a cabo en la OEA". Este informe, por cierto, venía aparejado a la respuesta del gobierno. A su vez, el 31 de junio de ese mismo año, el diario *La Tercera* fue impedido de circular por un día por transgredir el Bando N° 98, que prohibía las publicaciones sobre la presentación que sobre Derechos Humanos había hecho el antes aludido grupo de abogados ante la reunión de la OEA celebrada en Chile. El 2 de julio, en el editorial titulado "¿Censura de prensa?", *El Mercurio*, calificando la medida, expresó que ella: "No fue establecida en base a razones legales claras. (...) Es de esperar que la aplicación de cortapisas a la libertad de prensa se evite en el futuro con ventaja para el gobierno y los medios de publicidad afectados."

[...]

Así pues, durante años pesó, en beneficio de la política represiva, la ausencia de una prensa opositora que diversificara las visiones sobre los hechos y mostrara la actuación de los agentes del Estado en materia de Derechos Humanos, investigando, con los riesgos inherentes al caso, las violaciones ocurridas a contar del golpe militar. En los primeros tiempos, los únicos reductos de opinión claramente discordantes (mas allá de lo antes consignado), estaban confinados a publicaciones de escasa circulación, por lo tanto sin mayor repercusión pública, como la revista *Mensaje*, vinculada a los jesuitas. Hubo que esperar hasta el año 1976 para que comenzaran a aparecer los primeros nuevos órganos impresos ajenos o contrarios a la plataforma ideológica y social del régimen militar. La revista *Solidaridad*, con el patrocinio del Arzobispado de Santiago, acogió la necesidad de denunciar la política represiva —desde luego, la prisión polí-

tica y la tortura—, pero nunca pasó de ser un medio más bien circunscrito al ámbito de la Iglesia Católica. La revista *Apsi* nació ese mismo año, como un medio destinado al análisis internacional, a fin de eludir el cerco de la censura. En 1977 empezarían a circular *Hoy* y, luego, *Análisis*. En las condiciones imperantes de la época, obviamente no era fácil acceder a la verdad.

La aparición de estos nuevos medios informativos fue vista con buenos ojos por parte de los defensores de la libertad de expresión. Con todo, el 28 de enero de 1977, sucede uno de los hechos que evidenciarían lo aventurado de ese optimismo. En esa fecha, la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de Santiago suspendió indefinidamente las transmisiones de *Radio Balmaceda*, ya antes sometida a censura previa y suspensión temporal. *El Mercurio* del 1 de febrero de 1977 reaccionó, expresando editorialmente que: "La decisión de suspender las transmisiones de la radio tendrá ciertamente un eco exterior desfavorable en momentos en que se celebra en Ginebra el examen de la situación de los Derechos Humanos en Chile". La dictación del Bando Nº 107, en marzo de 1977, despejaría cualquier duda respecto a la posición oficial del gobierno. Implacable en sus lineamientos, el Bando en cuestión disponía que la fundación, edición, publicación, circulación, distribución y comercialización de nuevos diarios, revistas, periódicos o impresos deberían contar con la autorización oficial. Esta medida se hacía extensiva a la importación y comercialización de libros, diarios, revistas e impresos. Este Bando hizo que *El Mercurio* del 28 de marzo de 1977, en el editorial titulado "Actuaciones de la Asociación Nacional de la Prensa", afirmase que dicho texto "está destinado a agudizar el consenso que existe en el extranjero de que en Chile la libertad informativa está severamente restringida". Y el 10 de abril, en "La semana política", agregaría: "No es posible que en un régimen institucional chileno, que nuestro Régimen Militar establecido para salvar la libertad, resucite el mecanismo del index respecto de los libros extranjeros o de las nuevas publicaciones que puedan efectuarse en Chile". En su edición del 22 de mayo de 1977, *El Mercurio* volvería a abordar el tema de la libertad de prensa, señalando: "La autorización para una nueva revista semanal (*Hoy)* tardó bastante tiempo, pero el visto bueno es favorable para el gobierno. Ello demuestra una vez más la inutilidad de un control previo que sólo crea tensiones en tanto que la ciudadanía desea ser informada desde distintos puntos de vista".

[...]

A futuro, la Constitución de 1980 marcaría la tónica de lo que serían las restricciones a las libertades individuales y colectivas. El artículo Nº 8,

que no sería derogado sino hasta la reforma constitucional de 1989, estipulaba: "Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República." Estos términos resultaban unívocos para unos, y muy equívocos para otros, cuando de restricciones y sanciones se trataba; más aún si se tenían presentes las omnímodas facultades que conferían a las autoridades las disposiciones de los artículos transitorios de esa constitución, particularmente el 10º, sobre la prohibición para desarrollar toda actividad, acción o gestión de índole político partidista; 15º; 18º y 24º, sobre estados de emergencia dependientes sólo del Presidente de la República, o de asamblea y de sitio librados a la Junta de Gobierno a proposición de aquél, amén de las facultades absolutas sobre arrestos, restricciones a los derechos de reunión e información, en los casos de situaciones de "peligro de perturbación de la paz interior".

Entre tanto, desde 1984, la censura recrudeció por medio de decretos. El Nº 1.217, por ejemplo, se refiere a la prohibición de informar sobre hechos que "provoquen alarma en la población", términos de premeditada vaguedad para el tipo prohibido que permitían toda clase de arbitrariedades; el Decreto Nº 571 (de 1985), que suspendió la circulación de seis revistas de oposición y censuró a la revista *Hoy*; y el Decreto Exento Nº 324, también de 1985, que prohibía informar sobre los partidos políticos, llamados a protestas, actos terroristas, etc. Pese a todas estas restricciones, pese a los informes desfavorables de la situación de la libertad de expresión en Chile, el periodismo de oposición cobra fuerza en la década de 1980, con nuevos medios, a veces precariamente editados y de escasa circulación, que en ocasiones dan cabida y realce al quehacer de organizaciones de base que pugnaban por restituir los tejidos sociales de redes solidarias. Entre los medios más activos en la denuncia de las transgresiones a los derechos humanos cabe mencionar a la revista *Cauce* y al periódico *Fortín Mapocho*. Ya en su segundo número *Cauce* se había aventurado con una portada alusiva a la tortura, tema central de la edición: "La vida ha seguido en el país —se editorializó en esa oportunidad— durante estos diez años como si nada sucediese, en tanto en lugares secretos miles de personas sufrieron o sufren castigos horrorosos por delitos configurados por los mismos sujetos patológicos encargados por la autoridad para oficiar de investigadores, fiscales, jueces y verdugos, todo al mismo tiempo, sin ser cautelados por la justicia".

Esta relativa y precaria apertura informativa —favorecida por presiones y fuentes de financiamiento externas— permitió descomprimir la presión de la censura, sacando a la superficie temas hasta entonces silenciados, pero, en ningún caso, terminar con la capacidad de veto de las autoridades. Así y todo, con la aparición de *Hoy* se inaugura un escenario nuevo, siempre bajo amenaza, pero decidido a fiscalizar las actuaciones del régimen militar. Comienzan así a investigarse las violaciones pasadas y actuales de los derechos humanos, al tiempo que se abría el debate público a la opinión discordante de actores sociales hasta entonces marginados por razones políticas. El punto de vista de la autoridad pasó a ser confrontado con perspectivas críticas. Diversificada y extendida la información noticiosa, se instaló la competencia de versiones rivales, librada no sólo en la prensa escrita sino también, progresivamente, en las radios. Conquistada con esfuerzo, la apertura conoció, sin embargo, nuevos retrocesos dados por el endurecimiento coyuntural de la censura. Para hacerse una idea cabal del peso comunicacional del gobierno, baste con recordar que *La Época*, el primer diario opositor, recién surgiría en 1987. Falta por consignar, asimismo, que las emisoras radiales tuvieron un mayor espacio para realizar su trabajo. La *Radio Chilena* vinculada a la Iglesia Católica fue transformando su discurso pastoral en un noticiario cuyo contenido informativo era coherente con la oposición que anhelaba la democracia. La *Radio Cooperativa* y varias más se convirtieron en bastiones con fieles audiencias masivas, dejando atrás los tiempos del discurso autoritario incontrarrestable. Aun cuando esta radio sufrió reiteradas sanciones a causa del contenido de sus mensajes e incluso la cancelación de algunas de sus concesiones, logró encumbrarse al primer lugar de la sintonía merced a su apertura noticiosa a la actualidad del país.

En definitiva, según los testimonios recogidos por esta Comisión y la información obtenida de los medios de comunicación para acreditar las situaciones de prisión, puede concluirse que éstos, aislados como estaban, no constituyeron un freno a las políticas represivas impuestas por el régimen militar, y, respecto de la tortura, no hicieron directa denuncia de ella. En efecto, no existen antecedentes de denuncias hechas por medios de circulación nacional, de prensa o televisivos, que den cuenta de la tortura en cuanto método aplicado masivamente, tal como se desprende del trabajo de esta Comisión. Más todavía, cabe reiterar que en muchas ocasiones los medios de comunicación, en especial los más masivos y de cobertura nacional, avalaron sin reservas la versión oficial sobre los indicios de la represión en curso.

En todo caso, el tema de la tortura comenzó a abrirse paso hacia la opinión pública incluso antes de la creación de los medios opositores de la década de 1970. La tortura nunca dejó de estar en el centro de las denuncias. De ahí que aun la prensa partidaria del régimen militar debiera ocuparse del tema. Aquélla admitiría atisbos de crítica, esfuerzos esporádicos y poco contundentes, si se comparan con todo lo realizado por la prensa opositora en su esfuerzo por señalar la conveniencia o la necesidad de respetar los derechos humanos. Con todo, también es cierto que sólo gracias a la información recabada por esta Comisión se ha logrado calibrar el alcance efectivo de la tortura en la vida de miles de personas.

Órganos de denuncia internos y externos

Si bien la prensa nacional tardó años en desempeñar un papel fiscalizador del ejercicio de las autoridades, existieron desde el comienzo del régimen militar otras instancias que, en los hechos, actuaron como fuentes de denuncia de las violaciones de los derechos humanos, alertando a la comunidad internacional sobre las actuaciones anómalas del gobierno.

Durante las décadas de 1970 y 1980, el "caso chileno" suscitó la interacción entre dos frentes básicos: uno, comprometido con la defensa de los derechos humanos; el otro, opuesto, con la exculpación del gobierno chileno acusado de violarlos sistemáticamente. Este último, indistinguible del Estado de Chile, siempre se esforzó por desestimar esas acusaciones, para restar apoyo a la oposición interna en la comunidad internacional y, así, reducir el aislamiento de Chile en el concierto de las naciones. El otro frente, compenetrado con la suerte de las víctimas, contó a su favor con la actitud vigilante de la comunidad internacional de Estados que, como veremos en el siguiente apartado, no escatimó las condenas a la dictadura; también, estuvo integrado por organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, empeñadas en sacar a la luz pública los atropellos en curso, con miras a salvar vidas y a frenar la represión. Junto con el socorro a las víctimas, se aplicaron, pues, a la tarea de recopilar y difundir la información que hoy sirve para reconstituir la historia oculta de los años de censura, y que entonces permitió validar las condenas internacionales contra el régimen militar. Ella también ha sido elemento de juicio valioso para el trabajo de esta Comisión.

Deben considerarse, pues, las actividades de las organizaciones de derechos humanos en Chile y en el extranjero. Se ha establecido ya en el apartado anterior que el férreo control de los medios de comunicación actuó en contra de una inmediata reacción organizada frente al panorama

generalizado de atropello a los derechos humanos. Ahora bien, en forma aislada, algunos grupos se apresuraron a alertar sobre los masivos atropellos que estaban ocurriendo en todo el país. En el ámbito internacional, se produjo la inmediata reacción de importantes organizaciones de derechos humanos de carácter no gubernamental (ONG), como Amnistía Internacional, Americas Rights Watch, así como por el Consejo Mundial de Iglesias. A este respecto, es habitual aludir a la presentación realizada por Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, ya el 15 de septiembre de 1973, solicitando la intervención de Naciones Unidas, debido a las patentes amenazas al derecho a la vida imperantes por entonces en Chile. Esta actitud vigilante, sostenida en el tiempo, representó un proceso de creciente validación de dichas entidades como legítimas representantes, en el nivel internacional, de una suerte de "sociedad civil" extraterritorial, decidida a constituirse en un referente crítico global ante los estados nacionales, tanto más cuando éstos caían en poder de gobiernos dictatoriales. De modo que las ONG, en alianza con organizaciones multilaterales, pasaron a conformar una constelación de entes supervisores que gravitaron en torno de Chile. En conjunto, intentan paliar la situación interna mediante la asistencia directa de las víctimas. Asimismo, documentan ese proceso a fin de recabar la información necesaria para evaluar con precisión la verdadera condición del país en materia tan delicada, sorteando los escollos de la política de desinformación implementada por las autoridades del régimen militar. En referencia a este punto, sobresale la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyos informes (sin violar sus normas de confidencialidad) servirían posteriormente para la elaboración del Informe Rettig.

En el plano interno, destaca el rol protagónico de las iglesias, en especial la Católica. Al margen de su actividad pastoral dirigida a toda la comunidad, a causa de la represión y con la premura de una emergencia se implementaron acciones concretas de socorro y amparo a las víctimas. Surgieron así, a la zaga del golpe militar, dos instituciones llamadas a cumplir una labor fundamental: la Comisión Nacional de Refugiados (CONAR) y, sobre todo, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Comité Pro Paz o COPACHI). Este último, fundado el 6 de octubre de 1973 por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, tuvo por objeto "atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad económica o personal", procurando "dar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual" a esas personas y a esas familias. Integrado por las iglesias Católica, Luterana, Metodista de Chile, Ortodoxa y Pentecostal, además de la Comu-

nidad Hebrea de Chile, ya su carácter ecuménico revelaba por sí solo la naturaleza global, por sobre cualquier división confesional, del problema de la represión. Para apreciar la envergadura social de su trabajo, sirve recordar que prestó, no obstante su breve existencia, asesoría jurídica en 6.994 casos de persecución política en la capital, más 1.908 en provincias, amén de los 6.411 casos de despidos laborales debidos a las mismas razones, y el abultado número de 16.992 personas beneficiarias del programa de asistencia médica. En semejante contexto, la defensa de los derechos humanos se transformó en imperativo ético-religioso para distintos grupos cristianos, los cuales aunaron esfuerzos con personas no creyentes o de otras comunidades religiosas, a fin de ofrecer un auxilio más concertado —y por ende más efectivo— a quienes padecían el embate punitivo del aparato estatal.

Por razones obvias, el trabajo del Comité Pro Paz no pasó desapercibido para las autoridades. Amortiguar el impacto de la represión era considerado un acto de colaboración con el enemigo. De ahí el trabajo de hostigamiento hacia sus miembros, sobre todo a quienes no pertenecían a la Iglesia Católica. Las presiones, ejercidas incluso personalmente por el general Pinochet sobre el Cardenal Silva Henríquez, forzaron su disolución el 31 de diciembre de 1975. Debido a ello, el propio Cardenal y Arzobispo de Santiago fundó, el 1 de enero de 1976, la Vicaría Episcopal de Solidaridad, con objetivos análogos a los del ecuménico Comité Pro Paz. No sería ésta la única iniciativa destinada a brindar apoyo a las víctimas de la represión. Otras organizaciones dignas de mención —la mayoría creadas en la década de 1970—, fueron la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC, 1975), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ, 1977), la Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles (CODEJU, 1977 en Valparaíso, 1978 en Santiago), la Comisión Chilena de Derechos Humanos (1978), la Sección Chilena de Amnistía Internacional (1978), la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE, 1979), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU, 1980), la Comisión Nacional contra la Tortura (1983), el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS, 1985), y el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS, 1988).

Con la creación de la Vicaría de la Solidaridad, en todo caso, la Iglesia Católica continuó con su compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos, de manifiesto en el apoyo mayoritario de la Conferencia Episcopal a la nueva iniciativa, también beneficiada por el respaldo de la Santa Sede y la comunidad internacional. Si bien sus constantes acciones judiciales ante los tribunales no lograron garantizar la integridad de las personas y el resguardo de sus derechos fundamentales, no es

menos cierto que la continua denuncia de los abusos contribuyó a señalar y monitorear la represión, restándole validez a la estrategia de negar su existencia, encaminadas a garantizar su acción discrecional mediante su sustracción a cualquier forma de escrutinio público, interno o externo. Aunque no es posible precisar el impacto de las presiones internacionales alentadas por tal acción de denuncia, es evidente que en ausencia de aquéllas el régimen militar no habría modificado sus políticas punitivas. Tampoco debe pasarse por alto, en el contexto del trabajo de esta Comisión, el valor de la labor de la Vicaría en tanto fuente de acopio documental capaz de proveer los materiales requeridos para abordar, con sólido fundamento empírico, el estudio de la historia de la represión durante la dictadura. Su archivo, dotado de más de 43.000 fichas con documentación fiel y cercana a la ocurrencia de los hechos, en conjunto con diversos otros antecedentes reunidos o aportados, ha sido de gran ayuda para la certificación de la veracidad de las afirmaciones de los comparecientes afectados por la represión.

La reiterada condena internacional

Al momento del golpe de Estado en Chile, el derecho internacional, perfeccionado a la luz de la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial, había puesto de relieve la perentoriedad del respeto a los derechos humanos, existiendo acuerdo sobre el carácter vinculante de su observancia por sobre las fronteras nacionales, de modo que su violación suponía un atentado contra la convivencia dentro de un país en particular, a la vez que contra la comunidad internacional en su conjunto. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Organización de Estados Americanos (OEA) habían nacido en el mundo de la posguerra como instancias articuladoras de un orden internacional que buscaba velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas. En 1945, la Carta de la ONU había declarado la resolución, por parte de sus integrantes, de "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana". Tres años más tarde, la Carta Fundacional de la OEA reiteró la vocación de "respeto de los derechos esenciales del hombre" como fundamento inamovible de sus propósitos.

A partir de estos parámetros —prueba del esfuerzo por avanzar en la gestión mancomunada de un orden más civilizado y benigno—, la comunidad internacional se reservaba el derecho de reclamar de los Estados transgresores el cumplimiento de las exigencias impuestas en pro del respeto a los derechos humanos, sin que aquéllos pudieran invocar en su favor

la vulneración del principio de no intervención o el trato discriminatorio —tal como haría la dictadura— en la aplicación de mecanismos especiales de supervisión. En el caso chileno, el contrapeso de la comunidad internacional cobraría mayor relevancia al prescindirse de las instituciones que tradicionalmente permitían la defensa de los derechos humanos en el país. En otros términos, desempeñaría una función supletoria en resguardo de esos derechos, cuya necesidad se tornó imperiosa por el apoyo del Poder Judicial a la política represiva. Ya el mismo exilio trasladó los conflictos de la política doméstica a un plano transnacional. Como corolario, la comunidad internacional —tanto los gobiernos y sus foros multilaterales como la opinión pública y las ONG de distintas naciones— devino en copartícipe del proceso de denuncia, socorro y rectificación humanitaria emprendido por los chilenos residentes en el país o en el extranjero. ¿Qué funciones cumplía la supervisión internacional en materia de derechos humanos? En primer lugar la revisión, que comporta un juicio de valor o una medición de las circunstancias que se denuncian en el Estado sujeto a ésta, con referencia a un estándar mínimo. En segundo lugar, la función correctiva, que supone por parte de las autoridades la enmienda de las conductas que se estiman violatorias. Y, finalmente, una función creativa, que involucra la adopción de normas o la modificación de las mismas en orden a lograr un desarrollo progresivo de los derechos humanos, más allá del mero acto de interpretación de la ley.

La generalizada percepción de Chile como un país con una sólida tradición democrática hizo reaccionar enérgicamente a las Naciones Unidas. Tres fueron los órganos principales con roles protagónicos al efecto: la Asamblea General, como sede o foro total de los Estados miembros; la Comisión de Derechos Humanos, dependiente del Consejo Económico y Social y la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de Minorías. Por añadidura, Chile se transformaría en un caso paradigmático con relación al perfeccionamiento de los mecanismos de control del sistema universal en materia de derechos humanos. De hecho las Naciones Unidas, en respuesta al desafío representado por Chile, implementaría nuevos mecanismos de supervisión y recolección de información, que luego incorporaría a su *modus operandi*, en virtud de su mayor eficacia. Por iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos, en 1975 se nombró un Grupo de Trabajo *Ad Hoc* para investigar la situación de los mismos en el país. Al cabo de tres años de labor, la Asamblea General de las Naciones Unidas, utilizando como base la resolución que originara ese Grupo de Trabajo, elaboró el mandato conducente a la designación, previa elección entre sus propios miembros, de un Relator Especial llamado a investigar la

situación de los derechos humanos en Chile, para informar de la misma a la Comisión y a la propia Asamblea General. Hasta 1990, las Naciones Unidas mantendría el sistema de Relator Especial para Chile.

Escapa al sentido de este Informe repasar cada resolución de condena emitida por los órganos del sistema universal de protección de derechos humanos acerca del caso chileno. Con todo, resulta pertinente establecer los principales hitos y los patrones de conducta seguidos en las décadas bajo escrutinio de la Comisión. Desde ya, puede afirmarse que las Naciones Unidas manifestaron preocupación e incluso indignación en resoluciones de condena de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos, durante todos los años, desde 1974 hasta 1989. Es oportuno consignar, asimismo, que a raíz del trabajo del Relator Especial designado para el efecto, se realizaron cuatro visitas *in loco* y se elaboraron ocho informes relativos a la situación de Chile. Por añadidura, y pese a que tanto la Asamblea General como la Comisión de Derechos Humanos son órganos de composición política, todas las resoluciones fueron condenatorias y con aplastantes votaciones a favor; si exceptuamos los gestos de apoyo al régimen militar por parte de otras dictaduras, sobre todo latinoamericanas, ello traslucía la existencia de un amplio acuerdo sobre la gravedad de la situación reinante en Chile. Las resoluciones condenatorias reiteran constantemente la preocupación, concordante con la desmedrada situación interna, por los temas de la tortura, la prisión política y las detenciones arbitrarias. Sólo por vía de ejemplo pueden citarse las siguientes resoluciones emanadas de la ONU alusivas a la prisión política y la tortura en Chile:

1. Resolución 3219 (XXIX), "Protección de los derechos humanos en Chile", AG. ONU, del 6 de noviembre de 1974, 29° período de sesiones, en la que se expresa la profunda preocupación por las "manifiestas y masivas" violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellas que implican amenazas a la vida y la libertad, basadas, *inter alia*, en arrestos arbitrarios, tortura y trato cruel, inhumano y degradante de detenidos y presos políticos, detención sin acusación y encarcelamiento por motivos políticos.

2. Resolución 3448 (XXX), "Protección de los derechos humanos en Chile", AG. ONU, del 9 de diciembre de 1975, 30° período de sesiones, en la que se solicita al gobierno de Chile la "no utilización del estado de sitio o emergencia para violar los derechos humanos y libertades fundamentales, la adopción de medidas adecuadas para poner fin a la práctica institucionalizada de la tortura y de otras formas de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizar en especial los derechos de detenidos

sin acusación y de los que están en prisión únicamente por motivos políticos".

3. Resolución 39/121, "Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Chile", AG. ONU, del 14 de diciembre de 1984, 39° período de sesiones, en la que se solicita al gobierno de Chile, entre otras medidas, "poner fin al régimen de excepción y a la práctica de declarar los estados de emergencia, bajo los cuales se llevan a cabo graves y continuas violaciones de los derechos humanos, el término a detenciones arbitrarias o ilegales y al encarcelamiento en lugares secretos, el respeto al derecho a la vida, a la integridad física, poniendo fin a la práctica de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

4. Resolución 41/161, "Situación de los derechos humanos y libertades fundamentales en Chile", AG. ONU, del 4 de diciembre de 1986, 41° período de sesiones, en la que se solicita al gobierno de Chile, inter alia, "el término de la tortura física y sicológica y el respeto efectivo del derecho a la vida e integridad física y moral y el fin de las detenciones arbitrarias y encarcelamiento en lugares secretos".

5. Resolución 221 (XXXVI), "Cuestión de los derechos humanos en Chile", CDH. ONU, del 29 de febrero de 1980, 36° período de sesiones, en la que se conmina al gobierno de Chile a "tomar medidas eficaces para impedir la tortura y otras formas de tratos inhumanos o degradantes, enjuiciar y castigar a los responsables, e insta a las autoridades a respetar escrupulosamente el deber del poder judicial de ejercer cabalmente y sin reservas sus facultades constitucionales aplicando el recurso de amparo para proteger a individuos contra la detención y prisión arbitrarias, y evitar así, desapariciones".

A las condenas de la ONU hay que sumar las censuras de la OEA. La reacción de la Comisión (CIDH), uno de los órganos especializados en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, fue inmediata. Ya el 14 de septiembre de 1973, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas expresaron (en un cable) a la Comisión su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en Chile. Acto seguido, el 17 de septiembre de 1973, la Comisión requirió información al país, le formuló recomendaciones preliminares sobre el respeto de los derechos fundamentales y solicitó autorización al gobierno militar para realizar una visita *in loco* por parte del secretario ejecutivo de la Comisión, visita que se consumó en octubre del mismo año. Con idéntica finalidad se verificó otra visita *in loco* por parte de cinco miembros de la Comisión, entre julio y agosto de 1974. La constante

preocupación de la Comisión se tradujo en la elaboración de cuatro informes especiales sobre el país (1974, 1976, 1977 y 1985) y, cuando no se le renovó el mandato, en la inclusión de Chile en un capítulo especial del Informe Anual. En este sentido, el Informe de 1985 reviste particular importancia, pues, ante la negativa del Estado de Chile a aceptar una visita *in loco*, pero gracias al apoyo de sectores de la sociedad civil chilena involucrados en la defensa de los derechos humanos, el documento resultante fue acumulativo e incluyó un análisis global de sus violaciones, desde 1973 hasta 1985.

Para ilustrar la reiterada preocupación de la OEA en lo referente a la prisión política y la tortura en Chile, cabe citar algunas de sus resoluciones:

1. Resolución 443 (IX-0/79), "Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", del 31 de octubre de 1979, AG. OEA, 9° período ordinario de sesiones, en la que "insta al gobierno de Chile a intensificar la adopción y aplicación de las medidas necesarias para preservar y asegurar efectivamente la plena vigencia de los derechos humanos en Chile".

2. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, observación *in loco* practicada en la República de Chile del 22 de julio al 2 de agosto de 1974, CIDH. OEA, de 24 de octubre de 1974. En este documento se requiere expresamente al gobierno de Chile que "se disponga prontamente una investigación exhaustiva, minuciosa, rápida e imparcial sobre la imposición de castigos y trabajos forzados a los prisioneros así como de torturas y malos tratos, la liberación de todos los prisioneros que no representen un peligro grave y cierto para el mantenimiento de la paz pública y que se dicten normas precisas que aseguren la eficacia del Recurso de Amparo, aún bajo estado de sitio".

3. Informe sobre la situación de derechos humanos en Chile, (período considerado: del 11 de septiembre de 1973 a julio de 1985), CIDH. OEA, de 2 de octubre de 1985, en el que la Comisión establece como probado que "la tortura tanto física como sicológica se ha aplicado en Chile por parte de los organismos de seguridad y Carabineros como forma de intimidar a la población, para conseguir información o declaraciones autoinculpatorias, su práctica es sistemática, por lo cual se cuenta con locales o recintos con la infraestructura adecuada, así como también con medios de locomoción con dicha infraestructura".

Frente al escrutinio de los organismos internacionales y las denuncias surgidas en el mismo país, donde la sola proliferación de los recursos de amparo evidenciaba el cuadro represivo en vigor, las autoridades inten-

taron desestimar las acusaciones. Ante el repudio de la comunidad internacional y el consiguiente desprestigio de Chile, la política exterior no pudo contrarrestar el debilitamiento de sus redes diplomáticas. Esto no era irrelevante para un gobierno que se proponía transformar el modelo de desarrollo, mediante el abandono de un esquema centrado en la expansión del mercado interno y la preeminencia del Estado como agente económico, en beneficio de un sistema de apertura a los mercados externos y a la iniciativa del sector privado, tanto nacional como extranjero. De ahí que la cooperación formal con los organismos internacionales de derechos humanos apareciese como una estrategia para neutralizar las denuncias que, ocasionalmente, redundaron en medidas de castigo contra Chile, por parte de gobiernos que buscaban ejercer presiones correctivas.

Pero esta actitud de colaboración no podía perpetuarse: la evidencia adversa e incriminatoria era imposible de ocultar. Los amagos de cooperación, pensados como gestos de propaganda favorable, se alternaron entonces con la resistencia oficial hacia los mecanismos internacionales de supervisión. En el ámbito del sistema universal, por ejemplo, Chile había manifestado su aquiescencia para que el Grupo de Trabajo *Ad Hoc* visitase el país; no obstante, el 4 de julio de 1975, mientras los integrantes de dicho Grupo se reunían en Lima para organizar la visita, el gobierno resolvió prohibirles el ingreso al país. Frente a esa decisión, el trabajo del Grupo debió continuar con testimonios e información recogidos en el exterior. A la par de esta falta de disponibilidad para someterse al escrutinio externo, en enero de 1978, el gobierno realizó una "consulta nacional" —rito publicitario con visos de representatividad popular— que pretendía legitimar el rechazo hacia los mecanismos de las Naciones Unidas, por estimar que constituían una "agresión internacional". Consignemos aquí que, para justificar la negativa a colaborar con el trabajo de los mecanismos internacionales de supervisión, fue común alegar la parcialidad de los mismos, producto de una "campaña" internacional de desprestigio que se proponía vulnerar el principio de no intervención en asuntos de jurisdicción interna.

Aun cuando la consulta —del todo ajena a cualquier mecanismo de validación objetiva de sus resultados— fue por fuerza favorable a los intereses del régimen, a instancias del gobierno norteamericano la Junta de Gobierno acabó por ceder y autorizó finalmente la visita del Grupo de Trabajo *Ad Hoc*, en julio de 1978. Luego de emitido el Informe, en consideración de su previsible contenido adverso, y reiterando la tesis de la "discriminación" hacia el país, Chile no le reconoció existencia legal al grupo de expertos creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, manifestando que, en lo sucesivo, sólo se entendería con la Secreta-

ría General de las Naciones Unidas en lo tocante al problema de derechos humanos. Esta actitud ambivalente, que combinaba los indicios de colaboración con la abierta hostilidad, también caracterizó las relaciones con el Relator Especial nombrado a partir de 1978. Tal como en varios pasajes de sus informes se reconocía la colaboración del Estado, en otras ocasiones se denunciaban las trabas puestas a su labor por parte de altos funcionarios del régimen, cuyas acciones obstruían el debido cumplimiento de su mandato.

Como sea, cualquier consideración de la injerencia de los organismos externos en el proceso de censura —estimulado por el trabajo de denuncia de las organizaciones locales nacidas para amparar a las víctimas— del atropello de los derechos humanos por parte del Estado de Chile debe referirse a las normas internacionales obligatorias para el país al 11 de septiembre de 1973. ¿Cuáles fueron los instrumentos vinculantes cuyo fin era proteger los derechos humanos, y que el régimen militar invariablemente desconoció? Tómense, a modo de ejemplo, los casos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969), y las Convenciones de Ginebra (1949).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en el ámbito del sistema universal el 16 de diciembre de 1966, fue ratificado por el Estado chileno el 10 de febrero de 1972. Aunque el gobierno militar dictó el Decreto Supremo N° 778, con fecha 30 de noviembre de 1976, retardó injustificadamente la publicación del mismo en el *Diario Oficial* hasta abril de 1989, con lo cual se impidió, al amparo de argumentos de apariencia formal, que los tribunales le dieran cabal aplicación. Al margen de la evidente vulneración al principio de *pacta sunt servanda*, según el cual los tratados deben ser cumplidos de buena fe, esa omisión premeditada indica el desconocimiento de los artículos 18 y 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969), en cuanto prescriben, desde la firma, que un Estado debe abstenerse de realizar actos que frustren el objeto y el fin del instrumento internacional, y que una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

En cuanto al Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por el Estado de Chile el 22 de noviembre de 1969, el gobierno militar se abstuvo de realizar cualquier trámite para su aprobación o ratificación. No obstante haber sido Chile uno de los principales promotores de la iniciativa, ésta sólo se transformó en norma obligatoria para el Estado el 5 de enero de

1991, una vez que el Congrego Nacional democráticamente elegido concluyera por aprobarlo por unanimidad en ambas cámaras. Finalmente, respecto a las Convenciones de Ginebra de 1949, es preciso formular algunas precisiones. Primero, éstas eran normas obligatorias para el Estado de Chile desde 1951. Segundo, varias normas dictadas por la Junta de Gobierno declaraban formalmente la existencia de un estado de guerra, pese a lo cual el gobierno violó las convenciones aludidas al negarse a reconocer el estatus de prisioneros de guerra —garante de derechos básicos— a las personas detenidas.

Sobre el particular, es de interés consignar que la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán en 1968, al pronunciarse acerca de las obligaciones en los conflictos armados internos, había pedido al Secretario General de la ONU que "tras celebrar consultas con el Comité Internacional de la Cruz Roja, señale a la atención de todos los Estados Miembros del sistema de las Naciones Unidas las normas actuales de derecho internacional sobre los conflictos armados, aseguren que en todos los conflictos armados los habitantes y los beligerantes estén protegidos de conformidad con los principios de las naciones, surgidos de los usos y costumbres establecidos entre los pueblos civilizados, de las leyes de humanidad y de los dictados de la conciencia pública". Esta disposición, conocida como la cláusula Martens, estaba incluida ya en el preámbulo de las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, relativas a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, siendo posteriormente incorporada en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. La importancia histórica de esta cláusula para efectos del trabajo de esta Comisión reside en sus tres principios consuetudinarios de protección de los derechos humanos. Declara que el derecho de infligir daños al enemigo no es ilimitado; le añade el deber de distinguir entre beligerantes y no beligerantes; para concluir con la prohibición de lanzar ataques contra la población civil como tal. Y, ciertamente, se encuentra la prohibición genérica de la tortura. Súmese a esto el hecho de que la cláusula Martens ha sido incorporada al derecho consuetudinario; por consiguiente, se aplica independientemente de la participación en los tratados que la reconocen. Es de carácter inderogable y, más importante aún, se aplica, así exista o no el estado de guerra declarado o su admisión por una parte en el conflicto. Ya con anterioridad al golpe militar, la cláusula Martens era internacionalmente considerada como un imperativo elemental de humanidad, tan válido en la paz como en épocas de conflictos armados. De acuerdo con lo anterior, la proscripción de la tortura se extendía a cualquier situación, revestía el carácter de absoluta.

IV. Prisión política y tortura, período a período*

Para comprender a cabalidad la historia de la privación de libertad por motivos políticos que afectó a miles de personas durante el período cubierto por el mandato de esta Comisión, se precisa considerar a la represión política como un proceso con diferentes ciclos. Estos presentan características particulares en lo relativo al número y perfil de las víctimas, a los organismos involucrados, a los recintos de detención, a las normas jurídicas aplicadas como pretexto e instrumento de la privación de libertad, e incluso a los métodos de tortura perpetrados en ese contexto. Sin perjuicio de ello, existen algunos elementos comunes que estuvieron presentes durante el régimen militar, que permiten afirmar que la prisión tenía motivaciones políticas. Dichos elementos, al margen de variaciones coyunturales, son los siguientes:

1. La privación de libertad por disposición de organismos político-administrativos, como el Ministerio del Interior, las jefaturas de estado de sitio u otros. Se trata, en efecto, de organismos autorizados a este respecto por normas de excepción constitucional, pero que en la situación en referencia fueron desnaturalizadas, aprovechando que no había elementos de control democrático de los estados de excepción, que los extendían durante períodos muy prolongados y los renovaban en forma continua por la sola decisión del Ejecutivo, sin necesidad de deliberación pública o de una adecuada fundamentación que justificara tales determinaciones.

2. Las detenciones ordenadas por fiscales militares en ausencia de proceso judicial contra el detenido, extralimitando así sus atribuciones.

3. Las detenciones practicadas por organismos de seguridad dependientes del gobierno, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y la Central Nacional de Informaciones (CNI) u otros servicios creados en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, para realizar la represión política al margen del Derecho, aun cuando algunos de éstos fueran consagrados por decretos leyes.

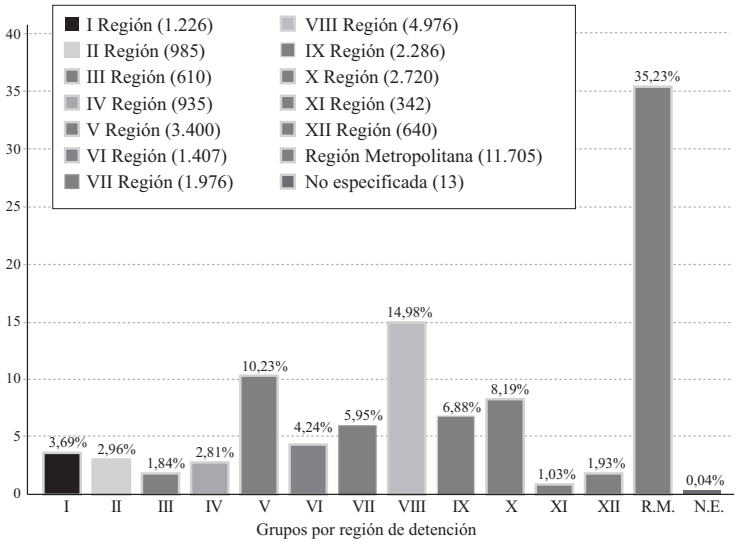
4. Las acusaciones de haber cometido delitos que no constituyen conductas punibles bajo un Estado de Derecho, o no contrarían derechos consagrados por la Constitución y el Derecho Internacional. De hecho, a partir del golpe de Estado se dictaron decretos leyes que tipificaron delitos sancionables, como la pertenencia a partidos políticos o la expresión de determinadas ideas; que penalizaron el ingreso al país de personas expulsadas o con prohibición de ingreso; y que sancionaron el ejercicio de dere-

* Capítulo IV del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (extracto).

chos como el de reunión, asociación y libre expresión. Se trató, entonces, de situaciones generalmente comprendidas en la categoría de delitos de conciencia, respecto de los cuales no existe fundamento jurídico para su penalización.

5. Finalmente, también constituyó prisión política aquella privación de libertad ordenada por un tribunal civil o militar, en el marco de un proceso judicial en el que se investigaban delitos tipificados como tales por cualquier ordenamiento jurídico democrático, pero en la que no se respetaron las garantías del debido proceso y la protección frente a torturas, dos derechos violados de modo sistemático.

Distribución de detenciones ocurridas desde 11-09-73 hasta 10-03-90 según región de aprehensión



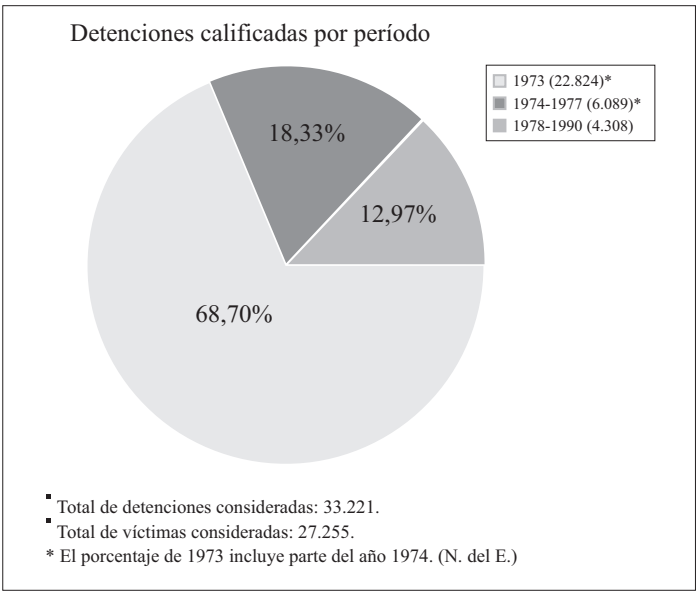
▪ Total de detenciones consideradas: 33.221.
▪ Total de víctimas consideradas: 27.255.

[...]

Del total de personas con testimonios validados ante esta Comisión, el 94% refiere haber sufrido torturas durante su detención. Los relatos concuerdan en que estos hechos fueron cometidos de manera similar y coordinada por efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad y de los servicios de inteligencia, como la DINA y la CNI, registrándose también casos excepcionales que mencionan la partici-

pación de civiles. De esos testimonios se desprende que, como se ha reiterado, la tortura fue una práctica recurrente durante el régimen militar. Varían el número de las personas perjudicadas y las características de las víctimas, pero poco o nada los métodos empleados. Es así como, en los primeros años se caracterizaron por su brutalidad y por dejar secuelas evidentes, poniendo con frecuencia en grave riesgo la vida de las víctimas, existiendo posteriormente mayor especialización en el tipo de presión física aplicada sobre el detenido. Salvo excepciones, los testimonios coinciden en que, durante su detención, las personas afectadas sufrieron la aplicación de más de un método de tortura, en que los golpes eran el más utilizado y, comúnmente, el primero en aplicarse. A partir de la información recabada, esta Comisión ha elaborado un cuadro de conjunto cuyo fin es ofrecer una síntesis que ilustre sobre el trato dado a los detenidos, los métodos de tortura empleados y, en términos más genéricos, los recintos en que esos hechos ocurrieron.

En procura de una mayor claridad expositiva de los antecedentes a disposición de la Comisión, el análisis de cómo se verificaron la prisión y la tortura por motivos políticos se ha dividido en tres períodos diferentes. Cabe insistir en que las divisiones temporales aquí adoptadas son tentativas, no tajantes, con la única finalidad de discernir etapas de acuerdo a la diversidad y al desarrollo de un proceso represivo continuo. En general, los hechos materia de este Informe no suceden, ni dejan de suceder, ni cambian radicalmente, en una fecha precisa. Entonces, el criterio de segmenta-



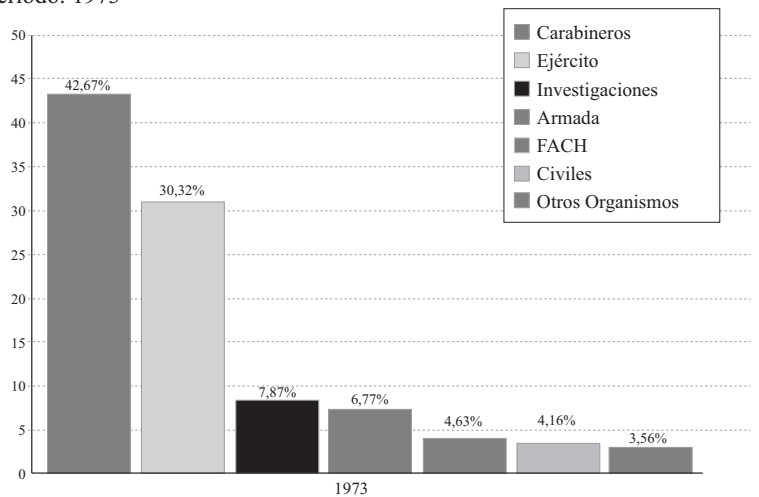
ción temporal responde a la consideración de indicadores tales como: organismos de seguridad involucrados, número y perfil de las víctimas, y contexto nacional imperante.

Primer período: septiembre - diciembre de 1973

El 67,4% de los testimonios calificados por la comisión refieren haber sido detenidos entre septiembre y diciembre de 1973 (18.364 personas, 22.824 detenciones) Durante ese período, la tortura fue práctica que ejecutaron miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, respondiendo a una práctica generalizada a escala nacional.

Como los otros períodos, éste tampoco se mantuvo inalterable. Los hechos que anuncian el fin del período son variados y no ocurrieron en forma simultánea, ni en todas las regiones del país. Algunos hitos a considerar son el cierre, en noviembre de 1973, del centro con el mayor número de detenidos, el Estadio Nacional; la entrada en funcionamiento del primer recinto secreto de detención, Londres 38; y la articulación, si bien todavía informal, del primer organismo de seguridad especializado en la represión, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Aparecen, por consiguiente, dos de los rasgos distintivos del segundo período —la acción discrecional

Total de detenciones calificadas por organismo aprehensor.
Período: 1973



- Total de víctimas consideradas: 18.364.
- Total de detenciones consideradas: 22.824.

de la DINA y el funcionamiento de centros clandestinos de detención y tortura— pero aún sin imponer la tónica del proceso represivo.

En este período, se invocaron las facultades de los estados de excepción para efectuar las detenciones. Algunos detenidos fueron enjuiciados en consejos de guerra. A otros, aunque nunca fueron procesados, los recluyeron por tiempos variables en estadios, campos de detenidos habilitados para esta finalidad, regimientos, comisarías o cárceles. A algunos se les impusieron medidas de relegación administrativa; otros fueron condenados a relegación por los tribunales militares. Fue frecuente también que, una vez recobrada la libertad, se les impusiera a las personas arrestos domiciliarios u otras medidas restrictivas, como la prohibición de abandonar la ciudad de su residencia. Algunos de los detenidos en este período, incluso luego de haber permanecido años detenidos, fueron expulsados del país, ya sea conmutándoseles sus penas de prisión por extrañamiento o bien, tras forzar su abandono del país, prohibiéndoseles mediante decisiones administrativas, su reingreso.

Durante este período, especialmente en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre, se produjeron arrestos masivos en allanamientos a empresas, poblaciones, asentamientos campesinos, centros mineros y universidades. Estos allanamientos respondían a un mismo patrón en todo el país. Comenzaban de madrugada y se prolongaban por varias horas. Las personas afectadas, reunidas en un mismo lugar, eran forzadas a permanecer tendidas de cara al suelo, con las manos en la nuca. Muchas recibían golpes. Concluido el registro, se procedía a trasladar a los detenidos a recintos de reclusión. También se publicitaron sucesivas listas de personas conminadas a presentarse ante las nuevas autoridades. Hubo además personas detenidas en sus domicilios, lugares de trabajo o reunión y en la vía pública, cuya pesquisa emprendieron efectivos de Carabineros o Investigaciones en coordinación con alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Los domicilios de las personas detenidas en estas circunstancias, a semejanza de lo ocurrido con quienes fueron aprehendidos tras responder al llamado de las autoridades, fueron sometidos a allanamientos, en los que solía emplearse una violencia desmedida, causando el destrozo de enseres, acto al cual se sumaba, ocasionalmente, la sustracción de bienes muebles o dinero. Adicionalmente, de manera más frecuente en los primeros días del régimen militar, las Fuerzas Armadas y de Orden recibieron la colaboración de civiles resueltos a denunciar a vecinos y a compañeros de trabajo identificados como militantes o simpatizantes de izquierda. La delación debe ser entendida como la culminación de un intenso proceso de polarización social, que llegó al extremo de convertir al adversario político en un

enemigo. Este fenómeno posibilitó la detención de personas en el contexto de los allanamientos, las redadas y los operativos militares, pero también se registraron casos puntuales en que se denunció a individuos de forma equivocada, o con el premeditado propósito de cobrar revancha por anteriores rencillas particulares, ajenas al conflicto político.

En este período, la mayoría de los detenidos fueron funcionarios del gobierno depuesto o simpatizantes, militantes y líderes de izquierda o miembros de organizaciones sociales. De las 27.255 personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura por esta Comisión, 5.373 fueron detenidas entre el 11 y 13 de septiembre, y trasladadas a recintos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o de Investigaciones.

Debido a que la capacidad de estos recintos fue rápidamente desbordada, ya el 12 de septiembre se empezaron a habilitar como centros de reclusión lugares capaces de mantener personas bajo vigilancia, como centros deportivos, centros culturales, centros de eventos, escuelas y liceos, edificios públicos, monumentos, hospitales, buques de la Armada y barcos mercantes de empresas privadas, contenedores portuarios, y dependencias de fundos, como casas patronales. En provincias, al tiempo que volvían a utilizarse antiguos campamentos de prisioneros, se construían apresuradamente otros nuevos. Tampoco se prescindió del recurso a las cárceles, disponiéndose el ingreso a los centros penitenciarios de Gendarmería por instrucciones verbales o escritas de las Fiscalías Militares, cuyas órdenes fueron frecuentemente impartidas al margen de todo juicio o proceso. Al respecto, se recomienda remitirse al capítulo de este Informe en donde se identifican los recintos de detención, así como sus principales características. Los testimonios recibidos dan cuenta de la existencia de 1.132 recintos de detención. En el capítulo se singularizan 803 de éstos, en atención al mayor número de detenidos que ellos mantuvieron.

Es preciso aclarar que la mayoría de estas detenciones se efectuaron por orden de las jefaturas de estado de sitio, en virtud de disposiciones de los estados de excepción constitucional, sin formular cargos o acusaciones. Algunas de estas detenciones fueron ordenadas por fiscales militares, pero al margen de cualquier proceso, bajo acusaciones vagas y antijurídicas como ser activista marxista, y, a la postre, sin traducirse en juicio alguno. Hubo otras ocasiones en las que, después de semanas o incluso meses, se formularon cargos y las personas fueron sometidas a consejos de guerra, en los que fueron absueltas o condenadas. En localidades rurales fueron frecuentes las detenciones practicadas por Carabineros, sin orden alguna de autoridades judiciales ni administrativas, luego de los cuales los afectados permanecían en los retenes y las comisarías, en donde muchos fueron

torturados, para luego ser liberados sin formulación de cargo, o para ser puestos a disposición de la autoridad administrativa correspondiente y remitidos a otros centros de detención.

En todo caso, resulta ilustrativo hacer el seguimiento de algunos casos individuales, a fin de dimensionar la arbitrariedad del proceso represivo y la vulnerabilidad de sus víctimas frente a los atropellos. El 15 de septiembre de 1973 fue detenido por Carabineros un hombre de 43 años, simpatizante del Partido Comunista, que se desempeñaba como funcionario público. En total, estuvo detenido durante más de un año, primero en la Comisaría de Tocopilla y, luego, ya en manos del Ejército, en el Regimiento de Telecomunicaciones Nº 6 de Tarapacá y en el campamento de Prisioneros de Pisagua. Durante el prolongado período de su privación de libertad, que concluyó en sobreseimiento, fue puesto a disposición de un tribunal militar, pero se desconoce el proceso y su rol, cuyo contenido el afectado nunca llegó a conocer. Abundan los casos de prisioneros sometidos a largos períodos de prisión arbitraria, que fueron transferidos de un lugar de detención a otro, lugares, con frecuencia, a cargo de organismos distintos. Otro empleado público, militante del Partido Socialista, de 35 años a la fecha del golpe de Estado, fue detenido por militares y personal de la Policía de Investigaciones, el 27 de septiembre de 1973. También estuvo prisionero más de un año, alternando los recintos de detención y los organismos a cargo de su custodia. Del Cuartel de Investigaciones de Copiapó, pasó al Regimiento de Copiapó, para recalar finalmente en la cárcel de esa misma ciudad, lo cual le significó estar bajo el control consecutivo de Investigaciones, del Ejército y de Gendarmería. Nunca se le enjuició ni se le puso a disposición de tribunal alguno. Esta situación fue bastante común, a juzgar por la información recopilada. Otro caso ilustrativo del carácter arbitrario de la prisión política es el siguiente: un joven de 18 años, dirigente estudiantil de enseñanza secundaria, afiliado a las Juventudes Comunistas, cuyo período de privación de libertad —primero en el Fuerte Borgoño, luego en la isla Quiriquina, siempre bajo custodia de la Armada— se prolongó desde el 17 de octubre de 1973 hasta el 8 de agosto de 1974, durante casi once meses, en el transcurso de los cuales nunca se le sometió a juicio.

Otra práctica anómala fue condenar a presidio por delitos supuestamente cometidos con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, cuya penalización respondía a los intereses de la política represiva en curso. Baste con citar el caso de un funcionario del Servicio de Salud, militante del Partido Socialista, detenido el 1 de octubre de 1973 por personal del Ejército, en la XII Región. No salió en libertad hasta el 10 de septiembre de

1975, completando casi dos años de prisión política, a manos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Gendarmería, organismos a cargo de los cinco lugares por los que transitó: dos recintos militares, un estadio fiscal, la isla Dawson y, finalmente, la cárcel de Punta Arenas. Puesto a disposición del Tribunal Militar de esa ciudad (rol 20/73), éste condenó al afectado a tres años de presidio, acusándole, entre otras cosas, de haber inducido a funcionarios del hospital donde trabajaba a formar una brigada de choque (antes del golpe de Estado). Tampoco hay que olvidar que la libertad no siempre deparaba el fin de la persecución de los ex prisioneros políticos. Éstos podían volver a ser detenidos y torturados, o quedaban sujetos a medidas de control, firmas periódicas en cuarteles o comisarías o a la prohibición de salir de la ciudad de residencia, por meses o hasta años. O bien, el abandono de la reclusión no significaba reintegrarse a la vida cotidiana, pues se les expulsaba del país por decreto.

[...]

A partir de la lectura confrontada de distintos relatos pueden destacarse algunas modalidades típicas de trato a los detenidos. La persona afectada era obligada, mediante golpes y amenazas, sin dejar de ser apuntada por personal armado, a subir al medio de transporte habilitado, que podía ser un bus, un camión o una patrullera policial o militar; ocasionalmente se usaban camiones tipo frigorífico pertenecientes a empresas estatales y, en algunos casos, a particulares. Algunas personas indicaron a esta Comisión haber sido previamente maniatadas, para luego ser arrojadas como bultos inertes al camión, en donde se las apilaba unas encima de las otras. Otros concurrentes manifestaron que, cuando eran transportados en buses, a los detenidos se les obligaba a ponerse de rodillas frente al respectivo asiento, obligándoles a mantener la cabeza gacha, y se les propinaban golpes al menor movimiento. Los testimonios coinciden en señalar que durante el traslado lo habitual era seguir recibiendo todo tipo de golpes; quienes viajaban tendidos en el piso y apilados, debían soportar, por añadidura, pisotones y saltos, mientras se proferían todo tipo de insultos, burlas y amenazas.

La mayoría de quienes concurrieron a la Comisión dejaron constancia de que, una vez alcanzado el destino, los detenidos recibían nuevos golpes de pies, puños y culatas, responsabilidad ahora de los efectivos a cargo de la custodia del recinto. Quienes ingresaron en centros donde había una gran cantidad de detenidos mencionaron reiteradamente la práctica conocida como el "callejón oscuro", consistente en hacer circular a los detenidos por entre dos hileras de uniformados, mientras éstos los golpeaban con sus botas y sus armas. Si alguien, en su carrera por esquivar los

golpes, caía al suelo, era levantado a golpes por los uniformados y obligado a seguir corriendo por dicho callejón.

El trato dado a los prisioneros una vez que ingresaban en el centro de detención variaba entre un recinto y otro, dependiendo, por ejemplo, del organismo encargado de la custodia. Con todo, el análisis de los testimonios correspondientes a este período arroja algunas características comunes a todos los recintos. En general, la alimentación era inadecuada, el abrigo insuficiente, las amenazas constantes, los golpes reiterados y el hacinamiento, impedía o dificultaba conciliar el sueño. A los detenidos se les mantenía en "incomunicación colectiva", régimen éste distinto a la incomunicación individual, que suponía la reclusión solitaria en celdas de aislamiento. La "incomunicación colectiva" no sólo impedía las visitas de familiares sino además comunicarse con un abogado. Esto último fue excepcionalmente permitido, cuando el detenido era sometido a consejo de guerra; y siempre y cuando existiese ya el dictamen del fiscal con el objeto de preparar la defensa, concediéndose un brevísimo plazo de visita, insuficiente para que el profesional pudiese preparar una estrategia adecuada. Adicionalmente, a los familiares no se les entregaba información del paradero del detenido, de si efectivamente el afectado se encontraba en dicho centro o en otro, si había sido liberado o condenado, o, en fin, si se encontraba vivo o muerto. Esta situación —el incomunicado era un virtual desaparecido, no sólo sustraído del contacto con sus familiares y cercanos, sino también impedido de relacionarse con un abogado— excede las facultades de un régimen normal de incomunicación, aun en el contexto de un Estado o tiempo de guerra. De hecho los familiares, no rara vez, sólo tuvieron noticias de los detenidos al momento de ser liberados, o bien cuando aparecían en algún recinto de Gendarmería de Chile, a la espera de un posible consejo de guerra, y entonces podían o no recibir visitas, según fuera el parecer de las autoridades. Los detenidos de este período que acudieron a esta Comisión coinciden en indicar la sensación de extrema incertidumbre que los embargaba respecto a su destino final. Al respecto, basta con señalar la abundancia de relatos de detenidos forzados a presenciar la ejecución de compañeros de prisión, reales o simuladas; y a ver u oír las torturas padecidas por otros. Un elevado número de concurrentes ante esta Comisión señaló haber sido sometido a simulacros de fusilamiento.

Sin perjuicio de todo lo anterior, los testimonios reservan los hechos más graves de tortura para el momento del interrogatorio, el cual solía realizarse en un lugar distinto del sitio en donde se mantenía a los detenidos, ya fuere dentro del perímetro del recinto de reclusión o en sus inmediaciones. En Santiago, por ejemplo, las personas confinadas en el Estadio

Nacional fueron mantenidas en las escotillas, los camarines y los baños, pero los interrogatorios se realizaron en el velódromo del mismo estadio, o en las casetas destinadas a la prensa. En la provincia de San Antonio, los detenidos fueron llevados al Campo de Prisioneros de Tejas Verdes y los interrogatorios se efectuaban en el casino subterráneo de la Escuela de Ingenieros del mismo lugar. Generalmente, en provincias, los detenidos fueron mantenidos en cárceles y en otros recintos de Gendarmería; a la hora de interrogarlos, se les llevaba al lugar donde funcionaban las Fiscalías Militares, sitios tales como regimientos o intendencias provinciales.

Los relatos presentados sobre torturas refieren que los interrogatorios comenzaban con preguntas sobre armas, la posible preparación militar o paramilitar del detenido, así como los pormenores del supuesto Plan Z, seguidas de otras más específicas, como la actividad desarrollada por el detenido, militancia política, e interrogantes derivadas de las propias respuestas. Numerosos testimonios indican que las preguntas se inscribían en afirmaciones o acusaciones de ser marxista, activista, socialista o comunista, como si la condición de tal fuese un delito que debía confesarse. Estas acusaciones se entremezclaban con insultos y golpes, mientras el interrogado se encontraba amarrado, habitualmente a una silla, no rara vez con la vista vendada o con una capucha en la cabeza. Esta Comisión registró casos que indican que los golpes, las preguntas, las acusaciones y los insultos se sucedían unos a otros sin dar tiempo de contestar al detenido. Entre los métodos de tortura registrados durante los interrogatorios en este período, el más utilizado, después de los golpes, fue la aplicación de electricidad, a la que podían sumarse, por ejemplo, las amenazas, la asfixia (*submarino húmedo, submarino seco* y otros) y diversas lesiones corporales causadas deliberadamente al detenido, entre las cuales sobresalían las quemaduras. Con referencia a estos meses inaugurales de la represión política, más masiva que en cualquier otro período, esta Comisión también recabó testimonios sobre otras técnicas de tortura —como la violación a mujeres y a hombres— que se definen en el capítulo sobre Métodos de Tortura del Informe.

Los equipos de interrogadores, se formaron con integrantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. También hubo colaboración de la Policía de Investigaciones, sin perjuicio de que dicho organismo policial, además, mantuvo detenidos y practicó interrogatorios en sus propios recintos, sobre todo en las zonas urbanas. Lo habitual era que mientras uno de los agentes preguntaba, otros torturaban y tomaban nota de las respuestas del detenido. No era raro que un detenido fuera sometido a más de un interrogatorio; las torturas podían darse con la excusa de inquirir

respuestas o como simple medida de escarmiento. Se acostumbraba regresar a la víctima a su lugar de detención, para que quedaran a la vista de sus compañeros las secuelas físicas de la reciente tortura, con el consiguiente efecto amedrentador sobre el resto de los prisioneros. A todo lo anterior se sumaban las insuficientes condiciones de higiene y alimentación en los recintos, que dificultaban la recuperación física del detenido. Aun cuando escapa al mandato de la Comisión, cabe consignar que algunos detenidos, después de ser llevados fuera de los recintos de prisioneros, pasaron a engrosar las listas de detenidos desaparecidos al perderse el rastro de su paradero; los cadáveres de otros fueron arrojados en la vía pública o entregados a sus familiares directos.

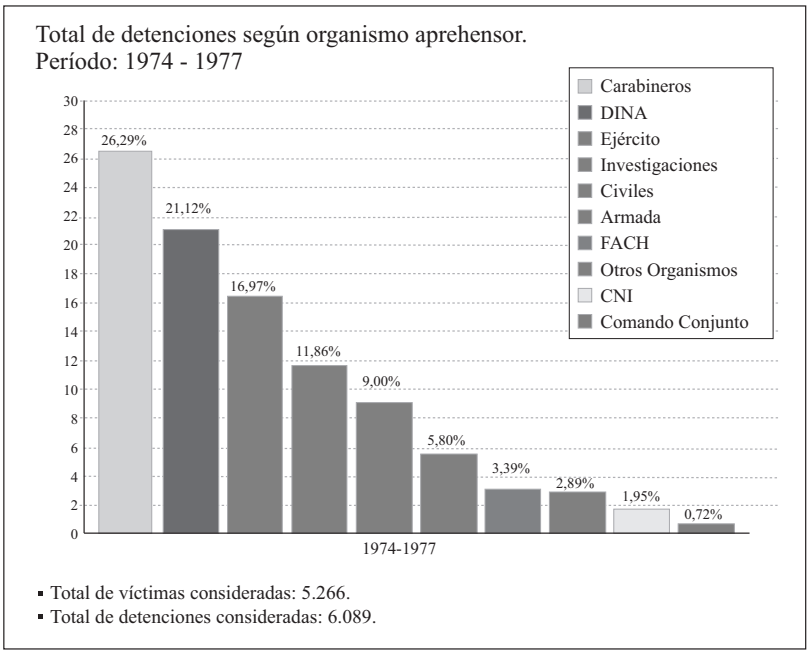
De las personas que acudieron ante esta Comisión, y que permanecieron privadas de libertad durante este período, el 3.571 permanecieron en un solo recinto de detención, 5.314 pasaron por dos recintos, y 9.437, por tres o más.

El 42,7% de los detenidos de esta época en conocimiento de esta Comisión, fueron arrestados por Carabineros, lo que equivale a 11.397 personas. Por regla general, a los detenidos no se les daba a conocer su traslado ni el lugar donde serían llevados, tampoco se informaba a sus familiares. Al salir del recinto de detención, al ser transportados y al ingresar al nuevo destino de reclusión, se repetían los maltratos. Se les sometía al mismo régimen punitivo y debían enfrentar ocasionalmente nuevos interrogatorios y, en otras oportunidades, la instancia culminante de un consejo de guerra que, no rara vez, recién consideraba su caso tras meses de reclusión. Especialmente, en los recintos importantes y en aquellos con algún tipo de registro de detenidos, la liberación debía ser precedida por la firma de un documento —una declaración jurada, una notificación, un certificado, o un "documento de situación"— en que la persona se comprometía a no participar en actividad política alguna, y a informar cualquier cambio de domicilio o lugar de trabajo. Conste que ocasionalmente se obligaba a declarar que se había recibido un buen trato durante la "prisión preventiva". En muchos de estos documentos, sobre todo en los certificados de detenidos que entregó el Ejército y después la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), se indicaba que la persona quedaba en "Libertad Condicional", pudiendo ser requerida nuevamente por las autoridades en cualquier momento. Desde el punto de vista jurídico, cabe precisar que la libertad condicional es un beneficio carcelario que se otorga a quien, habiendo sido condenado, ha tenido buena conducta en el recinto penitenciario. De la mayoría de los concurrentes ante esta Comisión, los menos fueron sometidos a juicio. También sucedió, particularmente en provincias,

que las personas liberadas sin mediar juicio alguno quedaban sujetas a control de firma ante la autoridad militar, policial o de Gendarmería. Sobre todo en localidades apartadas, la mayoría de las cuales estaban a cargo de Carabineros, a los detenidos puestos en libertad se les indicaba verbalmente que no podían salir del pueblo o abandonar sus domicilios sin previa autorización.

Segundo período: enero de 1974 - agosto de 1977

Del total de testimonios validados ante esta Comisión, 5.266, que equivalen a 19,3%, se refieren a prisioneros políticos detenidos entre enero de 1974 y agosto de 1977. En este período, o durante parte del mismo, perduraron características de la etapa precedente, a la vez que comenzaron a decantarse nuevas modalidades de detención y tortura. No obstante, cabe insistir, el tránsito de una fase a otra fue paulatino, hasta consumarse en junio de 1974, cuando la DINA recibió reconocimiento legal pleno y presupuesto propio. A pesar de ello, los campamentos de detenidos, característicos del primer período, se mantuvieron en funcionamiento incluso hasta 1976. En cualquier caso, éste fue un tiempo marcado por la acción represiva de la DINA. Desde que terminó la fase de arrestos masivos, las detenciones de carácter político fueron practicadas de preferencia por este



organismo y del total de detenciones calificadas en el período, 2.892 corresponden a personas que señalan haber permanecido en al menos un recinto de la DINA. Otros agentes militares y policiales disminuyeron ostensiblemente su participación en la represión, si bien siguieron colaborando con esta entidad y luego, también, con el Comando Conjunto, una asociación colaborativa formada por miembros de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. La segunda línea de la represión pone a disposición de los agentes de los servicios más activos a detenidos y sospechosos. Ahora el objetivo prioritario son los cuadros directivos del MIR y de los partidos Comunista y Socialista, a fin de impedir la rearticulación clandestina de redes opositoras a la dictadura.

A diferencia del primer período, en que las detenciones habitualmente ostentaban un carácter masivo, ahora adquieren un *modus operandi* selectivo. La mayoría de los relatos sobre esta etapa dan cuenta de detenciones individuales, realizadas en los domicilios, en los lugares de trabajo, en la vía pública. Los agentes represivos irrumpían en el entorno de la vida cotidiana, preguntando por quien buscaban; conocían su ocupación, su rutina habitual, los lugares que frecuentaba, los nombres de sus familiares y amigos, su militancia política. En otros casos, las detenciones se realizaron mediante redadas en lugares de reunión, en donde se juntaban militantes y simpatizantes de los partidos y movimientos de izquierda declarados ilegales por las autoridades. Esta Comisión también recibió testimonios de personas con compromisos militantes, detenidas en conjunto con familiares —parejas, hijos, padres o madres—, haciéndose abstracción de si éstos estaban o no involucrados en organizaciones políticas. Muchas de las personas detenidas en el período anterior y posteriormente liberadas, fueron detenidas nuevamente en esta etapa más selectiva.

En este período, las detenciones corrieron por cuenta de agentes de civil, que no se identificaban o, cuando mucho, indicaban verbalmente su pertenencia a alguno de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas o de Orden, o bien, que eran parte de la DINA. Las detenciones eran decididas por los mismos organismos, sin una orden de autoridad ni de tribunal alguno, y, en muchos casos, no se reconocían las detenciones ni siquiera ante el requerimiento de los tribunales. En ocasiones, éstas eran admitidas con posterioridad, como consecuencia de la presentación de un recurso de amparo, a propósito del cual el Ministerio del Interior validaba *a posteriori* el arresto, dictando un decreto en virtud de las atribuciones que otorgaban los estados de excepción constitucional. De todas formas, tal como se ha señalado, los tribunales solían rechazar los amparos, sea sobre la base de la información proveniente de los organismos de seguridad o del

Ministerio del Interior que negaba la detención, o fundándose en los decretos que la reconocían y le daban apariencia de legalidad.

A diferencia de la etapa previa, no se trasladaba a los detenidos en vehículos militares o policiales. Al comienzo se emplearon camiones tipo frigorífico, con la sección de carga, completamente cerrada, destinada a los detenidos; más tarde se utilizaron camionetas Chevrolet C-10 con la parte posterior cubierta por una lona, o vehículos requisados con antelación a otros prisioneros. En general, los vehículos carecían de patente o portaban imitaciones de matrículas extranjeras. Las detenciones se practicaban sin exhibir ante los detenidos ninguna orden de detención. Ocasionalmente se les enseñó una orden en blanco que se llenaba al verificarse la detención o con posterioridad. También constan casos en que la orden recién se emitió al momento de ser presentado un recurso de amparo. Los antecedentes recogidos por esta Comisión señalan que, primero en Santiago y después en otras ciudades de importancia, a los detenidos se les llevaba a recintos secretos de detención, en donde de inmediato se procedía a efectuar interrogatorios con aplicación de torturas. La permanencia en estos lugares casi nunca superaba dos semanas o un mes. El número de personas recluidas en estos centros ya no era tan elevado como antes; conformaban grupos que no pasaban de 30 ó 40 individuos. La excepción a la regla fue la Villa Grimaldi, cuya capacidad, en todo caso, seguía siendo inferior a la de los mayores centros de detención de la etapa previa (por ejemplo, el Estadio Nacional, cuyos prisioneros se contaban por miles, no por cientos). En provincias se continuó aplicando por un lapso adicional el sistema imperante en el primer período, si bien las detenciones también se volvieron más selectivas, y los implicados no tardarían en comenzar a ser transferidos a los recintos secretos de Santiago y otras ciudades importantes. Durante la detención en alguno de los recintos secretos, los agentes de seguridad bien podían concurrir al domicilio del detenido y allanarlo, intimidando y agrediendo, de paso, a sus familiares. Algunas víctimas refieren hurtos de especies o dinero.

Otros testimonios relatan que, tras ser interrogados y torturados, a los detenidos se solía llevarlos en vehículos para efectuar rondas en las calles destinadas a identificar personas que posteriormente también fueron arrestadas; el detenido inicial era forzado a colaborar mediante amenazas de muerte o de más y peores torturas. Asimismo, surgió un procedimiento de escasa aplicación, conocido como *ratonera*, para realizar detenciones que tomaban por sorpresa a los individuos afectados. Los agentes de seguridad allanaban el domicilio de una persona buscada; podían hacerse acompañar de algún detenido que conocía la dirección precisa. Allí permanecían

varios días. En el intertanto, mantenían bajo detención a los moradores originales y a toda persona que se presentara en el domicilio. De este modo lograban capturar a varios individuos con vinculaciones políticas entre sí. En el domicilio ocupado —transitorio e improvisado lugar de arresto— se emprendían extensos interrogatorios y también sesiones de tortura. Ya finalizado el operativo, quienes aún resultaban de interés para los organismos de seguridad eran llevados a recintos clandestinos.

También constan casos de víctimas que, una vez liberadas de los recintos secretos de detención, eran seguidas con el objeto de detener a otras personas involucradas en actividades políticas de oposición; el prisionero recién liberado, a propósito de esos contactos, podía ser nuevamente detenido para interrogatorios conjuntos o careos con los nuevos afectados. Cumplido el período de reclusión breve en algún lugar clandestino, las víctimas podían ser liberadas, y se las dejaba en la vía pública o en sitios eriazos, a menudo con la vista vendada, o bien se las trasladaba a un recinto público de detención, como un campo de prisioneros o una dependencia de Gendarmería.

La detención en el recinto secreto era negada de plano, pues no había registros de ella. Al respecto, es de interés recordar que durante la tramitación de los recursos de amparo interpuestos en las Cortes de Apelaciones a favor de los detenidos, el tribunal, a petición del recurrente, disponía consultar a los servicios de seguridad si el amparado se encontraba o no en su poder. En caso de obtenerse respuestas, éstas eran evacuadas con una demora que excedía lo debido y sólo cuando el detenido ya se hallaba en un recinto público, como cárceles y campos de detenidos; o bien en libertad, habiendo transcurrido ya días o semanas durante las cuales la detención no había sido reconocida, existiendo fundado temor de que la persona desapareciera. Es así como entre los detenidos en este período existía el temor siempre presente de ser ejecutados y desaparecidos, mientras su aprehensión no hubiera sido reconocida. Hay que señalar que en dichos recintos también permanecieron personas que son detenidas desaparecidas.

En contraste con esta situación, la detención en el recinto público era reconocida y documentada. En algunos casos, quienes arribaban a estos centros eran puestos a disposición del tribunal militar correspondiente, que los procesaba de conformidad con la legislación de tiempo de guerra. Otra posibilidad era quedar detenido en virtud de las normas de estado de sitio, sin cargo alguno, a la espera de un decreto de relegación o de expulsión del país, o bien de una orden de libertad emanada de la autoridad militar. Esta Comisión también conoció testimonios de personas que fueron trasladadas a recintos secretos destinados a la recuperación de los torturados, como

paso preliminar a su transferencia a un centro de detención oficialmente reconocido.

Respecto a las personas detenidas en este período, fundamentalmente se trató de individuos de quienes se sospechaba su participación en partidos o movimientos políticos proscritos. Además, se detuvo a personas acusadas de haber prestado alguna colaboración a estos militantes, por ejemplo, ocultándolos. Por estos mismos motivos, también fueron detenidos familiares suyos y amistades o simples conocidos, bajo el pretexto de extraerles información sobre su paradero o como presión al propio detenido reacio a colaborar. Los organismos de seguridad, fundamentalmente la DINA y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) —que en 1975 daría paso a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA)—, primero concentraron sus acciones en la represión al MIR, para ocuparse luego del Partido Socialista y, más tarde, del Partido Comunista, en cuya persecución también tomó parte el Comando Conjunto.

Igualmente, debe tenerse en consideración que personas detenidas en 1973, continuaron sufriendo prisión política durante este período, arrastrando tiempos de reclusión muy prolongados. La práctica de la prisión al margen de toda formalidad legal siguió vigente. Puede referirse el caso de un hombre de 23 años al momento de su detención, el 20 de junio de 1974. Por entonces militaba en el Partido Socialista, al tiempo que estudiaba la carrera de Economía en la Universidad de Chile y desarrollaba una intensa labor sindical. Lo aprehende el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y su primer recinto de detención fue el subterráneo de la plaza de la Constitución, en Santiago. Luego fue derivado a la DINA, que lo tuvo prisionero en Londres 38 y en Cuatro Álamos. Más tarde, ya en Tres Álamos, quedó a disposición de Carabineros. A continuación fue transferido a Ritoque, bajo el control de la Armada, para retornar posteriormente a Tres Álamos, a cargo de Carabineros. De aquí pasaría a la Penitenciaría de Santiago, quedando momentáneamente bajo el control de Gendarmería, para regresar por última vez a Tres Álamos. El último destino de su periplo como prisionero político sería la Cárcel de Santiago, nuevamente bajo la custodia de Gendarmería. En el intertanto, habían pasado 10 meses y 20 días. Recién a los 7 meses de permanecer recluido en virtud del estado de sitio fue puesto a disposición de un tribunal civil, proceso en el cual se dictó sobreseimiento. No obstante lo cual, el prisionero fue trasladado en calidad de detenido sin juicio a Tres Álamos. Finalmente se le expulsó del país. Todavía en enero de 1987 se le negó la solicitud de permiso de ingreso con motivo de la muerte de su padre. Esta Comisión conoció 1.432 casos de detenidos que luego de pasar largos períodos privados de libertad,

fueron expulsados del país por órdenes administrativas, prohibiéndoles posteriormente por años su reingreso.

En efecto, aún abundan, en continuidad con el período anterior, los casos de detención prolongada sin juicio. La aprehensión podía efectuarse en el lugar de trabajo y acarrear un largo cautiverio a manos de distintos organismos. Cabe mencionar el caso de un profesor de la Universidad de Chile, para entender cómo la violencia represiva podía caer de lleno sobre personas sin otro motivo inculpatorio que su condición de "marxistas". Tenía 22 años al efectuarse su detención el 11 de agosto de 1975, en el marco de un operativo a una de las Facultades de la Universidad, a solicitud del Ministerio de Educación, que señaló la aparición de rebrotes del marxismo, según informó la prensa de la época. El afectado sufrió el término de su contrato por parte de la rectoría de esa casa de estudios, a la vez que debía sobrellevar un año y tres meses de cautiverio, comenzando en dos recintos de la DINA: Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, para pasar luego a Tres Álamos, centro a cargo de Carabineros, en donde terminaría su prisión, aunque no sin antes haber pasado un tiempo en la V Región, en Puchuncaví, bajo custodia de la Armada. Tampoco era raro que personas ya recluidas en un recinto público fueran nuevamente ingresadas a recintos secretos, en donde se les volvía a interrogar y a torturar. Asimismo, tal como ocurriera en el período anterior, la prisión política podía culminar con el exilio del afectado, sin mediar resolución judicial alguna en su contra. Así le ocurrió a un estudiante de enseñanza media de 16 años al momento de su aprehensión, el 31 de mayo de 1976, cuando se desempeñaba como dirigente estudiantil y pertenecía al Partido Comunista. Tras más de tres meses de prisión política, debió partir al exilio, y la prohibición de su ingreso al país se prolongó hasta 1985. Detenido por Carabineros, terminaría su período de prisión en Tres Álamos, con una etapa intermedia en manos de la DINA, en el recinto de Cuatro Álamos.

Al igual que en el primer período, la tortura de los detenidos comenzaba en el momento mismo de la aprehensión. Fuera de los golpes y las amenazas que acompañaban su introducción en el vehículo de los agentes, la mayoría de los detenidos eran inmediatamente vendados, para impedir el reconocimiento del trayecto hacia el recinto secreto al cual se los llevaba. En la etapa previa, algunos detenidos tenían vendados los ojos al practicárseles el interrogatorio y la tortura. Quienes eran enviados a los recintos secretos, permanecían privados de visión, vendándoles los ojos durante gran parte, si no todo, el tiempo de reclusión; además de impedir el reconocimiento de los agentes represores y cualquier atisbo de empatía de éstos con las víctimas, este método aumentaba la sensación de vulnerabilidad y

los desorientaba en términos espaciales y temporales. Desaparecieron las largas esperas que antecedían al interrogatorio, que se acompañaba con tortura; en esta etapa el interrogatorio se efectuaba con prontitud, apenas ingresaba el detenido en el recinto clandestino. Estas sesiones podían prolongarse por varias horas y aun días con sus noches incluidas, alternándose los equipos de torturadores. En esta fase represiva, los interrogadores inquirían sobre información más precisa y hacían preguntas menos genéricas, lo que revelaba el conocimiento previo sobre las circunstancias del detenido. Por añadidura, los organismos de seguridad especializados en la represión, en particular la DINA, con frecuencia recurrían a la amenaza de aplicar tortura a los familiares —padres, cónyuge, hijos— como forma de presión sobre los prisioneros reacios a colaborar. De acuerdo a los testimonios reunidos por esta Comisión, en varias ocasiones esas amenazas se materializaron. Cuando esto ocurría, el detenido y sus familiares podían ser torturados en forma simultánea.

Entre los métodos de tortura identificados por esta Comisión, los más utilizados durante este período fueron los golpes y la aplicación de electricidad. Los golpes ya no se propinaban al bulto, sino en lugares corporales específicos, provocando desmayos, asfixia o lesiones en órganos internos. Se adoptaron técnicas conducentes a evitar que los golpes dejen rastros visibles en el cuerpo. Respecto a la electricidad, la rutina de los recintos secretos comprendía el sometimiento de los detenidos a la *parrilla*; para entonces se había consolidado el uso de aparatos que permitían graduar el voltaje y disminuir las marcas o quemaduras. A su vez, se ha denunciado que, en algunos lugares, médicos o personal de salud estaban presentes en las sesiones de tortura y evaluaban la resistencia de los detenidos. A los golpes y a la electricidad se sumaban las amenazas, la asfixia, los colgamientos. Constan en este período, a semejanza de en el anterior, las agresiones sexuales, en las que se perpetraban inclusive prácticas aberrantes como violaciones con perros especialmente entrenados al efecto, o la introducción de arañas en la vagina o en el ano. De hecho, en Santiago existió un recinto secreto a cargo de la DINA —*La Venda Sexy*, en la jerga de los agentes— en el que las agresiones sexuales fueron el método de tortura preferente.

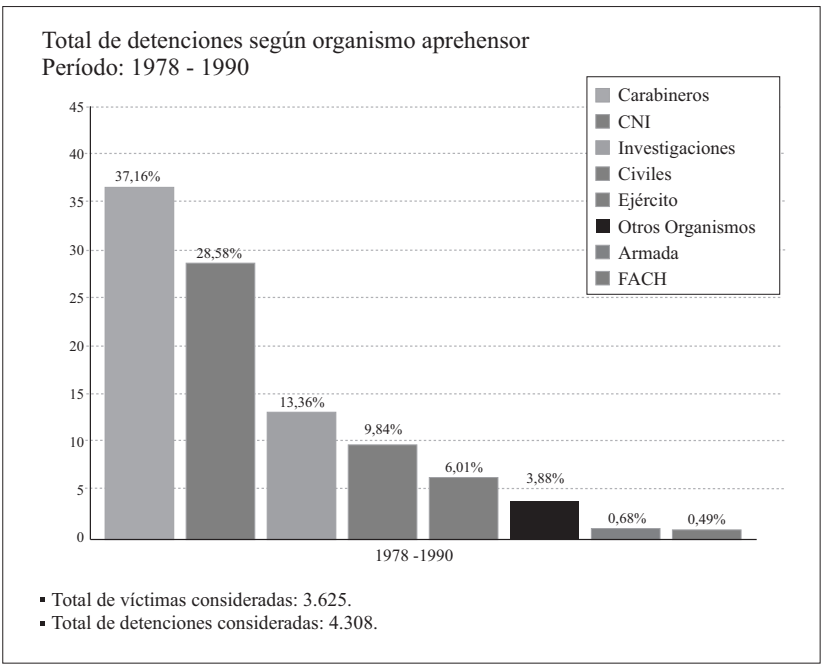
Tercer período: agosto de 1977 - marzo de 1990

Del total de testimonios validados por esta Comisión, 3.625, que representan el 13,3%, son de personas detenidas por motivos políticos entre agosto de 1977 y marzo de 1990, con 4.308 detenciones. Si en la

etapa previa el protagonismo de la DINA señaló un rasgo diferenciador, ahora es la Central Nacional de Inteligencia el organismo que distingue al período final del proceso represivo. En un total de 3.059 detenciones las personas permanecieron en recintos de la CNI en algún momento de su privación de libertad. Aun cuando continuó con los centros de detención y personal de la DINA, la CNI inscribió su acción en el marco de la institucionalidad del régimen e hizo frente a un contexto distinto, marcado por la creciente denuncia de las violaciones de derechos humanos, la progresiva emergencia de la oposición armada y el desenvolvimiento de un proceso de movilización social que buscaba forzar por medios pacíficos una pronta salida democrática. Frente a la rearticulación política de la ciudadanía, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile vuelven a intervenir de manera más activa en las tareas de coerción que perseguían doblegar la resistencia al régimen, deteniendo por plazos más breves y poniendo a los opositores a disposición de la CNI y de tribunales, especialmente de fiscalías militares, a efecto de ser procesados.

En efecto, a diferencia de los períodos anteriores, a partir del inicio de las jornadas nacionales de protesta en mayo de 1983, la ciudadanía opositora, convocada por dirigencias sindicales y políticas, por primera vez se manifiesta masiva y sincronizadamente en contra de la dictadura, haciendo visible como nunca antes el descontento frente al régimen y sus políticas, tanto en los barrios residenciales como en los espacios públicos de las ciudades, especialmente en Santiago. Estas acciones masivas de protesta, secundadas en su crítica al régimen militar por la prensa opositora y las radios no oficialistas, supusieron una rearticulación de actores sociales con fines políticos. En los sectores populares, haciendo contraste con lo ocurrido en barrios más pudientes, las manifestaciones de disenso —que al "caceroleo" añadían barricadas y fogatas para impedir el acceso de los agentes represores al interior de las poblaciones— fueron reprimidas con dureza. La acción policial y militar no sólo afectó a los manifestantes que se comprometían en enfrentamientos con sus agentes, sino también a la generalidad de los pobladores, hostilizados en el marco de los allanamientos masivos, tal como ya se refirió en el capítulo sobre el Contexto.

Sin perjuicio de sus acciones en contra del movimiento social opositor, la CNI dedicó mayor esfuerzo a la persecución a los tres grupos involucrados en la oposición armada al régimen militar, los que a su vez efectuaron ataques y atentados, cuyo saldo fue la muerte de personas sindicadas como agentes de la dictadura, en especial a funcionarios de Carabineros. En su labor de reprimir al MIR, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y al Movimiento Mapu Lautaro, la CNI realizó detenciones selectivas



que afectaban a los integrantes directos de esas organizaciones, pero también a las más extensas redes de personas vinculadas a ellos. Los detenidos de la CNI también podían ser remitidos a las fiscalías militares o, en caso de acusárseles de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado, ante ministros de las Cortes de Apelaciones.

Cabe subrayar que este período se distinguió por la mayor institucionalización jurídica del régimen militar. Desde esta perspectiva, dictó un decreto ley de amnistía que implicó la liberación de aquellos presos que aún permanecían detenidos; entró en vigencia la Constitución de 1980; se puso término al estado de sitio y al toque de queda. Sin embargo, medidas como las anteriores tuvieron efectos restringidos en lo relativo a la morigeración de la represión política. Por ejemplo, cuando se dictó la amnistía, la mayoría de los presos ya habían sido liberados. En muchos casos a éstos se les conmutó la pena de reclusión por extrañamiento. El extrañamiento se mantuvo a pesar de la amnistía, mediante la prohibición administrativa de ingreso al país dictada de conformidad con las normas de estados de excepción constitucional. Asimismo, subsistieron las restricciones a los derechos constitucionales, a través de los estados de emergencia permanentemente renovados sin dar justificación, y el establecimiento de un estado especial y permanente de restricción de dichos derechos, contemplado en el articula-

do transitorio de la Constitución, denominado "de peligro de perturbación de la paz interior". Por añadidura, en dos ocasiones, el estado de sitio fue declarado nuevamente, y se mantuvo su vigencia por algunos meses. Dichas normas fueron aplicadas para decretar arrestos y relegaciones de opositores al régimen, con prescindencia de todo control jurisdiccional.

Conforme al decreto que creó la Comisión y definió su mandato, los casos de personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos cometidos y luego condenadas por estos delitos, no fueron considerados. Esto explica, en parte, el menor número de testimonios calificados en este período, sin perjuicio de la mayor selectividad que alcanzó la prisión política en esta etapa. En todo caso, la práctica de la tortura aún revestía caracteres de rutina en lo concerniente a las personas afectadas de prisión política. Al menos durante la década de 1980, la CNI y los cuerpos policiales en general admitieron las detenciones efectuadas; éstas, incluso, recibieron amplia cobertura en los medios de comunicación. Ahora bien, en los primeros años de este período, los recintos de detención dependientes de la CNI aún mantenían el carácter de secretos. Al respecto cabe mencionar el caso de un hombre, periodista de profesión, que concurrió a esta Comisión, para referir su permanencia en un recinto secreto desde el 4 hasta el 18 de agosto de 1979, a raíz de la cual la CNI informó a la Corte de Apelaciones que el detenido se encontraba en una dependencia suya que no podía revelar, invocando razones de seguridad nacional. En el transcurso de esos días, el afectado fue víctima de torturas que motivarían su posterior denuncia judicial (recurso de amparo Rol Nº 656-79, Corte de Apelaciones de Santiago). Los recintos de detención de la CNI continuaron secretos hasta el 14 de junio de 1984, fecha en que se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo que autorizaba a ese servicio detener personas en los inmuebles señalados.

Tras un período de detención en los recintos de la CNI, las personas podían quedar a disposición de los tribunales militares o de los tribunales civiles, según el delito que se les imputaba. Una de las particularidades del período fue la creciente movilización social opositora y los esfuerzos de los servicios de seguridad y de las fuerzas del orden por reprimirla, adaptando sus métodos al nuevo contexto. Efectivamente, en 1983, cuando comenzaron las jornadas nacionales de protesta, como resultado de los operativos para reprimirlas, se practicaron detenciones breves, que duraban desde algunas horas hasta cinco días, para luego proceder a dejar a la persona en libertad, sin cargo alguno; en algunos casos fueron torturadas. Se buscaba inhibir la oposición al régimen, antes que extraer la confesión de algún

hecho ilícito específico. Además, en el contexto del proceso represivo a la movilización social opositora, también constan casos de personas agredidas en la vía pública o en vehículos policiales y militares. Esta Comisión recibió numerosos testimonios de personas retenidas al salir de una reunión política o social, o de algún evento cultural con rasgos contestatarios, que fueron violentadas en esas circunstancias con golpes, cortes y heridas a bala, para luego ser abandonadas en la calle, en sitios eriazos o en las inmediaciones de un centro asistencial de salud.

Tal como se adelantó, este tercer período se caracterizó por un mayor refinamiento en el uso de instrumentos jurídicos que facilitaban la privación de libertad por motivos políticos e incluso la tortura. Ello respondía al esfuerzo por darle un marco de legalidad a la represión política, no obstante que se recurría a normas contrarias al debido proceso y a las exigencias del derecho internacional en materia de prevención de torturas. En efecto, la consagración de largos períodos de detención a manos de la policía o de la CNI, y la discrecionalidad en el uso de atribuciones sin mayor control judicial, concedieron amplios márgenes para la práctica de torturas. La autorización para mantener incomunicados a los detenidos por largos períodos, al extremo de impedir la visita de abogados o médicos que pudieran evitar el aislamiento absoluto del afectado, favorecía la aplicación de torturas. Que estas medidas fueran adoptadas por tribunales militares y que se siguiera admitiendo el valor probatorio de declaraciones extrajudiciales no hacían sino agravar la situación de indefensión de las personas afectadas.

Por añadidura, en este último período se reanudaron los allanamientos masivos en las ciudades más importantes del país, especialmente en Santiago. Si bien dichas acciones represivas no forman parte del mandato de esta Comisión, la violencia ejercida en el transcurso de las mismas constituye una violación de derechos fundamentales, perpetrada contra sectores pobres, que resulta de por sí condenable. Entonces, las fuerzas militares, junto a Carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones y, ocasionalmente, agentes de la CNI, ocupaban y cercaban un sector de la ciudad, para luego sacar de sus casas, cualquiera fuera la hora del día o de la noche, a los hombres mayores de 16 años. Una vez trasladados a un lugar abierto, se procedía a registrarlos, al tiempo que se solicitaban sus antecedentes a los servicios de seguridad y se allanaban sus viviendas, con la violencia acostumbrada, con el fin de amedrentar a todos sus moradores. Con miras a validar los allanamientos masivos en sectores populares, las autoridades invocaron distintas leyes (por ejemplo, las leyes de Seguridad Interior del Estado, sobre Conductas Terroristas o sobre Control de Armas

y Explosivos) con las que pretendían inscribir sus labores represivas en el marco de la legalidad vigente.

Los testimonios concuerdan en que los servicios de seguridad, en especial la CNI, practicaron detenciones, amedrentamientos, amenazas y seguimientos. Aunque se mantenían las detenciones no reconocidas y las reclusiones en recintos secretos, la mayor parte de los declarantes que se refieren a la CNI indicaron que sus detenciones fueron habitualmente reconocidas y registradas, apelando de preferencia, como justificación oficial de las mismas, a la legalidad e institucionalidad creada para enmarcar las acciones de dicho organismo. Los detenidos eran trasladados a recintos de la CNI, algunos secretos, pero la mayoría de público conocimiento. La permanencia en esos lugares tendía a ser más breve que en el período anterior; las personas con aprehensión admitida se encontraban "técnicamente" bajo régimen de incomunicación extensible a cinco días, plazo ampliable a un máximo de 20 días a partir de 1980. Después de este período de reclusión, los afectados a menudo eran derivados a las fiscalías militares, y eventualmente se podía seguir un proceso formal en contra del detenido, en cuyo transcurso se acostumbraba tomar como medio probatorio principal confesiones firmadas durante la reclusión a cargo de la CNI. Como ya fue señalado en este Informe, estas confesiones autoinculpatorias fueron, no rara vez, resultado de torturas. Otros detenidos eran liberados en la vía pública o en sitios eriazos, con los ojos vendados y maniatados.

Durante la permanencia en recintos de la CNI, a los detenidos se les torturaba con los mismos métodos de las etapas previas, entre los cuales fueron, nuevamente, los más frecuentes los golpes reiterados al bulto y en zonas específicas y la aplicación de electricidad. Era práctica común desnudar y vendar los ojos a los detenidos por largo tiempo. También se recurría con insistencia a otros métodos de tortura, como agresiones sexuales, colgamientos, asfixia y quemaduras. Como ya era costumbre, la aplicación de torturas comenzaba en el momento de la detención, mediante golpes y amenazas. Las víctimas, de inmediato privadas de visión con vendas o capuchas, podían comenzar a ser interrogadas ya en el vehículo de los agentes. Recurrentemente, apenas ingresados al recinto de detención, los afectados eran torturados con electricidad.

En este período, son más comunes las querellas por tortura presentadas por ex prisioneros políticos. El 4 de septiembre de 1986, por ejemplo, la CNI detuvo a un dirigente comunista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS), quien, entre el Cuartel Borgoño a cargo del organismo de seguridad y luego en la Penitenciaría de Santiago, completó una reclusión de más de un año y fue puesto a disposición de un

tribunal civil y de un tribunal militar. Después de ser absuelto, el afectado presentó una querella por apremios ilegítimos y lesiones ante el 20º Juzgado del Crimen de Santiago. Lo mismo haría una funcionaria administrativa universitaria detenida por la CNI el 17 de septiembre de 1987, en el marco de la investigación del caso arsenales (rol 1797/86). La CNI procedió a allanar su domicilio, y llevaron detenidos a tres hijos suyos. Después de permanecer detenida en su vivienda por unos días, fue llevada ante una fiscalía militar, que la encargó reo por infracción a la Ley de Control de Armas. Permaneció en la Cárcel de San Miguel hasta el 31 de agosto de 1989. Sobreseída temporalmente, presentó una querella por apremios ilegítimos y secuestro ante el 20º Juzgado del Crimen de Santiago. Por otra parte, quienes perseveraban en sus militancias políticas de izquierda y en compromisos activistas opositores podían sufrir prisión política en distintos períodos. Baste citar el caso de un dirigente sindical comunista, detenido sin juicio el 11 de septiembre de 1973 por la Armada, en la base aeronaval El Belloto, de la V Región. En 1982 volvería a ser detenido, ahora por la CNI, que le confinó por un año y ocho meses en su recinto de Agua Santa 980, en Viña del Mar, y en la Cárcel de Valparaíso, esto es, en poder de Gendarmería. En agosto de 1984 volvería a ser detenido por la CNI, en sus habituales aprehensiones intimidatorias que duraban, tal como en este último caso, sólo unas horas.

V. Métodos de Tortura: Definiciones y Testimonios*

Como se expresara en el capítulo precedente, durante todo el régimen militar, la tortura se constituyó en una práctica habitual —si bien con grados de selectividad distintos, dependiendo del período— por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Tal como se ha establecido en pasajes anteriores de este Informe, se torturó en forma sistemática para obtener información y gobernar por el miedo, inculcando el temor profunda y duraderamente en las víctimas inmediatas y, a través de ellas, en todos quienes tomaban conocimiento directo o indirecto del uso de la tortura. Cabe insistir en el hecho de que más del 94% de los casos reconocidos por esta Comisión señalaron que, en el transcurso de la prisión política, sufrieron torturas. En general, las víctimas fueron sometidas a distintos métodos, cuyo uso alternado agravaba su impacto.

* Capítulo V del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (extracto).

Este capítulo consta de dos partes. La primera se refiere en forma detallada a los distintos métodos de tortura identificados a través de los testimonios, y la segunda se refiere específicamente a la violencia sexual contra las mujeres, profundizando algunos aspectos de esa violencia y sus efectos.

Los métodos

Los métodos que se enuncian a continuación se ajustan a la definición operativa de la tortura adoptada por esta Comisión, tras considerar detenidamente los parámetros fijados por las convenciones internacionales sobre esta práctica... Es importante advertir que la consideración por separado de los distintos métodos en aras de una mayor claridad, no debe ocultar el hecho de que las formas de tortura aquí definidas podían aplicarse de manera sucesiva o simultánea sobre la misma víctima. Asimismo, no todos los métodos fueron empleados con la misma frecuencia, y se incluyen sólo aquellas descripciones representativas de lo señalado por quienes entregaron sus testimonios. Invariablemente, las definiciones son ilustradas con testimonios de personas que acudieron a esta Comisión luego de sufrir tortura por parte de distintos organismos y en períodos diferentes. Para preservar la identidad de las víctimas, se han omitido los nombres y las ocupaciones, señalándose, eso sí, la fecha de detención, el sexo y el recinto en donde ocurrieron los hechos.

Golpizas reiteradas

A juzgar por la enorme cantidad de testimonios de personas golpeadas, puede afirmarse que las golpizas reiteradas constituyeron el método de tortura más socorrido durante el régimen militar y, en general, el primero que se aplicó a las víctimas de la represión. Era habitual que al momento de efectuarse la detención, la persona afectada, pese a no ofrecer resistencia, y estando incluso maniatada o esposada, fuese golpeada de manera intencional e injustificada. Este tipo de golpes, comúnmente llamados “uso excesivo de la fuerza”, constituyen tortura, pues no tienen otra finalidad que provocar un sufrimiento innecesario. Consta el caso de personas golpeadas en todo el cuerpo, de manera reiterada, por varios agentes, durante tiempo prolongado. También se dieron los golpes en partes específicas del cuerpo, no rara vez en las más sensibles, a veces hasta el sangramiento. Muchas de las personas golpeadas fueron previamente desnudadas y privadas del sentido de la vista mediante una venda en los ojos o la colocación

de una capucha, que les impedía advertir los golpes y les generaba una mayor sensación de indefensión. Las golpizas ocurrieron antes, durante y después de los interrogatorios. La mayoría de las secuelas permanentes que pudo conocer esta Comisión corresponden a golpes infligidos a los detenidos; entre otras, pueden mencionarse la pérdida total y parcial de la visión, pérdida total o parcial de la audición, pérdida de piezas dentales, problemas renales, esterilidad y distintas lesiones en la columna. Finalmente, pese a que el tema escapa al mandato de esta Comisión, cabe mencionar que hubo personas muertas a golpes.

A continuación se enumeran los golpes más frecuentemente recibidos por los detenidos que acudieron a brindar su testimonio:

• Golpes de pies y puños.

• Golpes con objetos contundentes: culata de las armas (culatazos), palos (palizas), laque (también llamado churro, luma o tonto de goma), apedreamientos, con otros objetos contundentes.

• Golpes con objetos flexibles o no contundentes (también llamados azotes o flagelamiento): látigos, fusta para caballos, baquetas (varillas de coligüe).

• El *teléfono*, esto es, golpes con mano abierta en ambos oídos (puede provocar lesiones auditivas permanentes).

• Golpes reiterados en los ojos, boca, nariz, testículos, pechos, cuello, rodillas y otras partes sensibles del cuerpo.

Las denuncias incluyen otras prácticas que implican golpes, tales como:

• Callejón oscuro: hacer pasar a los detenidos por entre dos hileras de efectivos que les propinan golpes de pies, puños y culatazos.

• Pisar y saltar sobre los detenidos cuando están tendidos en el suelo, boca arriba o boca abajo.

• Dejar caer el cuerpo del detenido al suelo escaleras abajo.

• Arrastrar al detenido por el suelo o por las escaleras, tomado del pelo, amarrado del cuello o de otro miembro.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento N° 14 de Aysén, XI Región: *Después me sentaron varias veces en una silla y me dieron 15 golpes en la cabeza, en uno de los golpes sentí una paralización interna que preferentemente me afectó la pierna derecha, a causa de los golpes quedé tendido en el piso* (...).

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, V Región: (...) *fui sometido durante mis primeras dos semanas en Tejas Verdes: choques eléctricos a*

las partes más sensibles del cuerpo estando yo amarrado en una silla de madera; golpes con "tontos de goma"; golpes con culatas de los fusiles; y golpes en los oídos con las dos manos al mismo tiempo [el teléfono].

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Base Aérea El Bosque, Región Metropolitana: *Nos recibió un contingente de alumnos y un gran número de oficiales de alto rango, con pistolas y metralletas en las manos, los alumnos con bayoneta calada* (...) *además de los golpes de culatazos, patadas por donde cayeran —cabeza y estómago—, nos tuvieron tres horas de pie, después nos hicieron tender boca abajo y los custodios se paseaban por encima de nosotros, el que levantaba la cabeza recibía el culatazo o patada en las costillas, la mayoría era golpeado ya que la loza ardía con el sol y no soportábamos tener la cara pegada al piso caliente. Eso duró todo el día, sin agua ni alimento.*

[...]

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Comisaría de Río Bueno, X Región: (...) *En otra sesión de interrogatorio las preguntas iban precedidas de martillazos sobre las uñas de los dedos de ambas manos, uno a uno, hasta que quedaban completamente inflamados y por lo tanto insensibles, por tal razón creo que cambié todas mis uñas.*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Estadio Nacional, Región Metropolitana: *Las torturas e interrogatorios me los hicieron durante tres sesiones en los camarines y baños del velódromo del Estadio Nacional. Estando con los ojos vendados, me golpeaban por todos lados, mientras me decían que no volvería a ver a mis hijos y esposa y que les harían daño sobre todo al menor, que tenía tres años. Estando de pie me pegaban al parecer con el dorso de la mano cortándome la respiración y haciéndome vomitar. Me pateaban estrellándome contra la muralla, haciéndome a veces sangrar de la nariz. Sentado me tocaban donde decían que me aplicarían corriente. Con tremendos golpes de mano me aplaudían los oídos.*

[...]

Hombre, detenido en mayo de 1975. Relato de su reclusión en el Regimiento Chorrillos de Talca, San Clemente, VII Región: (...) *me bajaron en un camino de tierra y me hicieron muchas preguntas, sobre todo lo que hacía yo en el colegio, qué hacía en mi casa, cómo se llamaban mis amigos, qué hacían mis hermanos, etc., yo contesté a sus preguntas, luego siento llegar otro auto que se estaciona al lado de nosotros, se baja un hombre y dice: éste es el huevón que andamos buscando, me tomó del pelo*

y me golpeó contra el auto, y me mencionó un nombre y si yo lo conocía, al responder que no, me dio varios golpes con un palo de coligüe en la cintura y en las piernas, caí al suelo, me pararon y me subieron al auto de nuevo, el mismo que me golpeó dijo: "Vamos no más, allá lo vamos hacer cantar a este huevón" (...). *Llegamos a un lugar que no pude identificar, porque estaba vendado. Me metieron a un cuarto y cuando estaba adentro me hicieron sacarme el pañuelo, que estaba lleno de sangre* (...) *veo frente a mí a un militar de alto rango, éste me mira de arriba abajo y mueve la cabeza como queriendo decir "puta la media pesquisa que hicieron mis agentes", ese militar era el comandante del Regimiento Talca* (...).

Hombre, detenido en noviembre de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *El día 19 de noviembre de 1975 a las 2:00 a.m. aproximadamente, ingresan a nuestro domicilio, rompiendo la puerta, unos 12 a 15 civiles armados con metralletas preguntando por (se omite el nombre). Inmediatamente proceden a amarrar a mis hijos con un alambre en las muñecas y los obligan a permanecer de boca en el piso en el pasaje. A mí me golpean con los puños al intentar averiguar lo que estaba sucediendo. Revisan toda la casa causando enormes destrozos en muebles, colchones, etc. A mí también me atan las manos con alambre; todos vendados, somos subidos a diferentes vehículos particulares. Yo quedé en el mismo vehículo con mi hijo. Según relato posterior de mis vecinos, había gran cantidad de vehículos estacionados en un gran operativo. Fuimos trasladados a lo que resultó ser Villa Grimaldi. Allí permanecí alrededor de tres horas, en un lugar que parecía ser una especie de patio habilitado como galpón. Se escuchaban voces y gritos, como que hubiera un gran número de personas. Me interrogaban siempre y me golpeaban fuertemente con los puños y manos, especialmente en la cara; a veces caía al suelo y me costaba incorporarme, ya que aún estaba amarrado.*

Hombre, detenido en mayo de 1988. Relato de su reclusión en el Cuartel General de Investigaciones (General Mackenna), Región Metropolitana: (...) *allanaron la casa, golpearon a mi familia, destrozaron la casa buscando armamento, me golpearon delante de mi familia, me pusieron una capucha en la cabeza, me subieron a un auto sin levantar la cabeza, llegamos al cuartel, donde me pusieron en una pieza chica, donde me amarraron de pies y manos, luego comenzó la tortura con golpes en los testículos, corriente en la boca, oídos, golpes en las piernas, luego, como no conseguían nada, me golpearon con manoplas, luego entró un compañero y lo torturaron delante mío para hablar. Esto fue el primer día* (...).

Lesiones corporales deliberadas

Esta Comisión recibió numerosos testimonios de víctimas a quienes se les provocaron lesiones corporales de manera deliberada y no se desconoce que la aplicación de muchos de los métodos de tortura pueden producir distintos daños físicos.

La lesión se define como el daño o detrimento corporal causado a una persona por una herida (corte o desgarro) o por un golpe. Si esta lesión es provocada intencionalmente por otro y cuando este otro un agente del Estado, o un particular con el consentimiento de aquel, quien realiza esta acción con la específica intención de provocar una lesión, esta acción es constitutiva de tortura.

Lo anterior es válido, por ejemplo, para los golpes, los colgamientos y la aplicación de electricidad. Además, bajo la denominación genérica de lesiones corporales se ha querido reunir hechos perpetrados con la intención precisa de causar un daño puntual en el cuerpo del detenido, provocado cuando éste se encontraba inerme, usualmente maniatado y con la vista vendada o encapuchado. No se trata de lesiones colaterales, previstas como posibilidad, sino de daños en primer grado, medulares del tipo de agresión constitutiva de tortura. Las extracciones de partes menores del cuerpo —como uñas de pies y manos, piezas dentales, pelo, cejas, etc.— resultan ilustrativas de este método de tortura. Valgan como ejemplo las heridas producidas por contacto con el fuego, un objeto caliente, o una sustancia cáustica o corrosiva que descompone el tejido orgánico. En efecto, las quemaduras fueron la modalidad de lesión corporal deliberada más común durante el régimen militar. Se provocaron quemaduras en diversas partes del cuerpo de la persona detenida, inclusive en las partes más sensibles, como genitales masculinos y femeninos. Las quemaduras con cigarrillos fueron las más habituales. Pero también constan casos de quemaduras con fierros calientes u otros objetos que provocaron serios daños a quienes fueron las víctimas.

Las lesiones corporales deliberadas, se pueden desglosar como sigue:

- Extracciones de partes menores del cuerpo (uñas, dientes, etc.).
- Cortes con arma blanca (en las manos, en las piernas, en los genitales, en la espalda, en otras partes del cuerpo).
- Fracturas deliberadas (de brazos, pies, manos, dedos).
- Heridas a bala.
- Lesiones auditivas premeditadas, provocadas por disparo de fusil junto a los oídos o por la exposición a sonidos agudos durante tiempo

prolongado, incluso hasta causar sangramiento de oídos, boca y nariz, con pérdida de conciencia en algunos casos.

• Lesiones en las uñas u otras partes del cuerpo mediante clavadura de alfileres, yataganes u otros objetos punzantes.

• Lesiones de diversa consideración resultantes de pasar un vehículo sobre los pies, las manos u otras partes del cuerpo del detenido.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la 3a Comisaría de Rahue, Osorno, X Región: *El día 19 de septiembre nos sacan del calabozo uno a uno para recibir golpes, un carabinero con un martillo de madera procede a darme un fuerte golpe en el dedo meñique de ambas manos, para luego con un alicate proceder a sacar las uñas, en ese momento ingresa el sargento* (se omite el nombre), *el cual quita al carabinero el alicate y procede a arrancarme con éste el bigote..., en un momento, producto del gran dolor y desesperación, logro morder la mano de este personaje, el que debe ser socorrido por un carabinero que me da un culatazo en mi cara (...) pierdo el conocimiento y al despertar, me doy cuenta que sangro mucho de cabeza, nariz y boca... luego me doy cuenta que me faltan ocho dientes... había procedido a sacármelos con el alicate... o a golpes, no sé.*

Hombre, detenido en diciembre de 1973, mientras estuvo detenido en el Regimiento Chorrillos de Talca, VII Región, señaló: (...) *No contentos de mi aspecto desfigurado por los golpes, me arrancaron las uñas de ambos pies y a sangre viva me aplicaban corriente provocándome un gran dolor.*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en la Casa de la Cultura de Barrancas, a cargo de un batallón del Regimiento Yungay de San Felipe, Región Metropolitana: *En un instante sentí que las yemas de mis dedos me ardían, me estaban clavando con agujas* (...) *encendió un potente foco de mercurio a unos dos metros de mi cara. Los gritos del subteniente se empezaron a alejar, mi rostro ardía, en mi desesperación me pasé la mano por la frente y parte de la cara. El capitán golpeó la mesa que me separaba de él y me dijo que si me pasaba la mano por la cara me iba a quedar marcada para siempre. Había sido muy tardía la advertencia porque mi rostro quedó quemado y con marcas que llevo hasta hoy.*

Hombre, detenido en mayo de 1974. Relato de su reclusión en la Isla Dawson, XII Región: (...) *luego fui amarrado de la muñeca izquierda a una estufa eléctrica para que lentamente fuera quemándome durante quince a veinte minutos y al escuchar mis gritos de desesperación fui*

desamarrado por el guardia de turno, al liberarme de las amarras traté de sacarme la venda que llevaba, ante mi acción fui amenazado de muerte.

Hombre, detenido en diciembre de 1983. Relato de su reclusión en el Cuartel General de Investigaciones (General Mackenna), Región Metropolitana: *Me dicen: entonces arrodíllate y pone la planta de los pies hacia arriba. Entre tres me sujetan y el cuarto procedió a saltar sobre la planta de mis pies. Yo sentía como mis huesos crujían con un dolor inexplicable. En ese momento pedí a gritos que me mataran, que ya no quería seguir viviendo, me respondieron que pronto* (...).

Colgamientos

Esta Comisión recibió abundantes testimonios de personas sometidas a este tipo de tortura, cuya aplicación se extendió por todo el período, especialmente por parte de los organismos de seguridad especializados en la represión. Junto con inmovilizar a la persona, este método mantiene a la víctima en posiciones forzadas que pueden tensionar las articulaciones hasta la dislocación, provocando dolores que se acrecientan conforme pasan los minutos y las horas. Permanecer colgado, en especial por períodos prolongados genera, además, sensaciones de indefensión, abandono y humillación, derivadas del trato atentatorio contra la dignidad humana.

Durante el régimen militar, los colgamientos revistieron diversas formas. Las personas fueron colgadas de una o de ambas muñecas; de uno o de ambos pies en posición invertida; de pies y manos amarrados a un palo puesto en posición horizontal, quedando el resto del cuerpo curvado; o bien de los brazos atados detrás de la espalda —método conocido como la *paloma*—, que provoca dislocación de los hombros. El tiempo de colgamiento, librado al arbitrio del agente a cargo, podía ir desde unos minutos hasta varios días. Por añadidura, la persona colgada, con bastante frecuencia debía padecer amenazas, insultos, humillaciones, golpes, mientras se hallaba desnuda; en algunos casos, incluso se les aplicó electricidad o se les sometió a algún tipo de agresión sexual.

Mención aparte merece un tipo de colgamiento especial, más sofisticado, llamado *pihuelo* o *pau de arará* (“palo volador”, en portugués). Primero se amarraban las manos, luego éstas a los pies cruzando una barra o un palo en sentido horizontal por entremedio del espacio formado; a continuación, esa barra o palo se colgaba en forma horizontal, con lo cual la víctima quedaba en posición invertida, colgando de manos y pies, amarrados entre sí. En ocasiones la barra se hacía girar, y aumentaban así los

dolores. El *pau de arará* fue utilizado principalmente, por los organismos de seguridad. A menudo, las personas que sufrieron cualquier modalidad de colgamiento, más tarde si no de inmediato, presentaron algún tipo de lesión en la columna.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento de Copiapó, III Región: *Fui llevado al cuartel del regimiento. En ese recinto me ataron los pies con las manos, por detrás. Luego me ataron un cordel desde los pies a la boca abierta y, mediante un lazo tiraban el cordel, haciéndome doblar la espalda y la cabeza hacia atrás, hasta extremos insoportables y muy dolorosos. A continuación, estando atado en la forma descrita, me colgaron de un árbol y fui pateado y golpeado con una metralleta, hasta aturdirme.*

[...]

Mujer, detenida en enero de 1974. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA de calle Londres 38, Región Metropolitana: *Me trasladaron a otra pieza en donde me hicieron desnudarme completamente. Luego me amarraron las muñecas con los tobillos quedando totalmente encogida. Enseguida colocaron una barra entre mis muñecas y los tobillos quedando suspendida de un mueble. En esta posición me golpearon los oídos y me aplicaron electricidad en las sienes, en los ojos, en la vagina, en el recto y en los pechos. Me interrogaban por nombres de personas,* (...) *Les dije que no conocía a nadie, entonces me volvieron a golpear y aplicar corriente. En la boca me colocaron un paño, el que me lo sacaban a ratos para que hablara.*(...).

Hombre, detenido en enero de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *En una oportunidad me colgaron desnudo, amarrado con los brazos a la espalda y me aplicaron corriente en las partes más sensibles, especialmente genitales (...) hasta la pérdida del aliento.*

Hombre, detenido en diciembre de 1983. Relato de su reclusión en el Cuartel General de Investigaciones (General Mackenna), Región Metropolitana: *Al llegar al final de la escalera que bajamos era todo frío y húmedo, sin preguntar nada me hicieron sacarme la ropa, menos las vendas, me hicieron sentarme en el suelo, recoger las rodillas y con mis manos amarradas pasarlas sobre mis rodillas. En ese momento sentí que introdujeron un fierro entre las rodillas y antebrazos (...) sentí correr dos objetos, posiblemente muebles. Tomaron el fierro entre cuatro personas (lo sé porque conversaban entre ellos) y fui colgado. Una vez colgado procedieron a poner objetos duros en mis ojos, posiblemente bolitas, luego objetos metálicos en mis muñecas, tobillos, sienes, ano y pene. Luego me*

amordazaron introduciendo estos objetos metálicos en mi boca, precisamente en mis molares. Cuando me encontraba en esta situación sentí ruido de papeles que ponían debajo de mí. En ese momento sentí lo aterrador, que fueron fuertes descargas eléctricas, en las cuales veía mi cuerpo totalmente iluminado con un resplandor intenso (...) sentía morir de dolor y de asfixia. Perdí la noción del tiempo, sólo sé que de vez en cuando me sacaban la mordaza y vomitaba en abundancia, luego volvían a lo mismo (...). Desconozco la cantidad de sesiones que fueron. Al término de cada una me dejaban colgado y decían "dejemos descansar a este huevón". Yo sentía sus pasos alejarse y sentía un alivio, pero inmediatamente volvían, aparentemente no eran los mismos, y decían "ya descansó mucho este huevón" y continuaban con el flagelo primero (...).

Posiciones forzadas

Tal como sucedió con los otros métodos de tortura, esta Comisión recibió un elevado número de testimonios de personas sometidas a posiciones forzadas. En el tiempo inmediatamente posterior al golpe de Estado, las posiciones forzadas por lo general ocurrieron a continuación de la detención, en los momentos previos al traslado a otros recintos y como preámbulo del interrogatorio. Los organismos de seguridad extremaron la aplicación de este método de tortura, prolongando la inmovilidad por días, inclusive semanas. Tanto así que un recinto clandestino de la DINA llegó a ser conocido como *la casa de la silla*, en alusión al hecho de que allí los detenidos eran mantenidos día y noche, durante todo su período de reclusión, sentados en una silla, a la cual se les amarraba de pies y manos, con la vista vendada.

Por posiciones forzadas, se entiende la coacción para que el detenido mantenga una determinada posición durante un largo tiempo hasta lograr un agotamiento físico extremo. La posición puede no ser incómoda en sí misma, pero se hace intolerable y desesperante cuando se la debe mantener desde algunas horas hasta días enteros. La manera de forzar al detenido a mantener estas posiciones se obtenía mediante golpes propinados al menor movimiento (por los distintos guardias que se alternaban en sus funciones de vigilancia ininterrumpida) y amenazas de diverso tipo, a lo que puede añadirse amarras en pies y manos (con cuerdas, alambres, esposas o grilletes) y la privación temporal de la visión mediante una venda en los ojos o una capucha en la cabeza.

Las posiciones más usuales, de acuerdo con los registros de esta Comisión, fueron permanecer de pie; tendido en el piso boca abajo; senta-

do y amarrado a una silla; de pie y con el cuerpo vuelto a la pared; con las manos en alto; o bien de rodillas y con las manos detrás de la nuca, por tiempos que iban desde varias horas hasta varios días y en algunos casos semanas.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Fiscalía Militar de Osorno, X Región: *(...) fui llevado a la Fiscalía Militar de Osorno, lo que es actualmente el Hospital Base de Osorno, donde nuevamente fui golpeado y amenazado de muerte. Me pusieron largas horas con las manos hacia arriba en la pared, con la amenaza si bajaba las manos me mataban (...).*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en la Escuela de Artillería de Linares, VII Región: *El militar llamó a un conscripto y le ordenó que me custodiara y me condujera hasta una gran sala donde había no menos de treinta personas detenidas. Estaban todos sentados en sillas de madera, vueltos hacia la pared. Minutos después llegó un militar con grado, quien escribió mi nombre en un pizarrón y anotó que yo debía pasar de pie toda la noche. En cuanto hubo cambio de guardia y el soldado que llegó dio la orden a los prisioneros de acostarse en el suelo, que era de madera, pero yo debía seguir de pie, sin derecho ni siquiera a apoyarme (...). Cerca de las 9 de la mañana vino un soldado a buscarme para ser "interrogado" (...). Después de un rato de golpes e insultos me preguntaron mi nombre, mi profesión y mi partido político, sin parar de darme golpes en todo el cuerpo, de la cabeza a las piernas (...) el otro detective se acordó que yo había pasado toda la noche de pie y empezó a golpearme por detrás de las piernas, mientras se burlaba preguntándome si me quería sentar.*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en la Comisaría de Curanilahue, VIII Región: *En esta unidad policial me pusieron con las manos en la nuca afirmándome con la cabeza en la pared en posición oblicua y las piernas abiertas, permaneciendo en dicha posición aproximadamente dos horas, mientras se me golpeaba con las culatas de las metralletas y puntapiés en diversas partes del cuerpo, entre otras, los testículos (...).*

Aplicación de electricidad

Las personas que concurrieron a esta Comisión relataron que desde el mismo día 11 de septiembre de 1973 fueron víctimas de aplicación de corriente eléctrica, en todas las regiones del país.

Este método de tortura consiste en la aplicación de descargas eléctricas en la totalidad del cuerpo o bien en zonas específicas, según sean los instrumentos empleados al efecto. Invariablemente, provoca intensos dolores físicos y agudo sufrimiento psíquico. Esta tortura puede producir secuelas físicas permanentes. Más de un tercio de las personas que indicaron a esta Comisión haber sido torturadas recibieron, entre otras formas de torturas, aplicación de electricidad. Este método se utilizó durante todo los años del régimen militar: en sus inicios y durante la fase de instalación en el poder, su aplicación fue masiva y a escala nacional.

En los principales recintos de detención, sea cual fuere su ubicación geográfica, se contó desde el primer momento con implementos apropiados para aplicar este tipo de tortura, que las víctimas describen como un *magneto* del cual salían los cables que se adherían a los puntos más sensibles del cuerpo del detenido. En muchos casos, los instrumentos disponibles permitían graduar las descargas eléctricas, aumentando o disminuyendo el voltaje a voluntad de los torturadores. En cualquier caso, en recintos de detención menores y peor equipados, también se aplicó electricidad a los interrogados aunque en forma más rudimentaria.

Al momento de aplicar la electricidad, muchas personas declararon que los interrogadores los sentaban en una silla, de preferencia metálica, o bien los tendían sobre una cama o un catre metálico. Se procedía a maniatarlos, inmovilizándolos. Previamente se solía desnudar a las personas; la vista vendada o la cabeza encapuchada agravaba la sensación de indefensión. En varias ocasiones, los efectivos militares o policiales arrojaban agua al detenido para asegurarse de que la descarga eléctrica se sintiera en todo el cuerpo.

Con la aparición de los organismos de seguridad especializados en la represión —fundamentalmente la DINA y la CNI—, la aplicación de electricidad se volvió rutinaria y el arsenal de métodos en uso se diversificó. Destaca el procedimiento conocido como *la parrilla*. Al detenido se le vendaban los ojos o se le encapuchaba. Luego se le desnudaba, acostándole sobre un catre metálico, al cual se le amarraba de pies y manos. Listos los preparativos, se procedía a aplicar descargas eléctricas mediante la colocación de electrodos en diferentes partes del cuerpo, eligiendo de preferencia las zonas más sensibles: axilas, plantas de los pies, sienes, ojos, oídos, boca, encías, lengua, senos o tetillas, pene o vagina, testículos, ano, hasta en heridas abiertas.

El dolor provocado en las zonas con electrodos se irradiaba hacia el resto del cuerpo. Otra modalidad de tortura con electricidad que se informó a la Comisión era la llamada *picana eléctrica*, una suerte de bastón con el

que se aplicaban descargas focalizadas en el cuerpo del detenido. Aunque de uso menos masivo que los métodos anteriores, también cabe referir la colocación del detenido en una bañera con agua fría, a la cual se le aplicaba electricidad. Debido a los riesgos inherentes a la aplicación de electricidad como método de tortura bajo cualquiera de sus formas, los agentes de seguridad se hicieron asesorar por médicos y otros profesionales de la salud, a fin de preservar con vida al detenido. Estos colaboradores realizaban evaluaciones de la resistencia física de la víctima, antes o durante la tortura, para ir graduando la intensidad de las descargas. Esto no sólo fue declarado directamente a esta Comisión; también consta en denuncias y querellas por torturas, presentadas ante los tribunales de justicia, por presos y presas por motivos políticos.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Estadio Nacional, Región Metropolitana: *Cuando estuve en el Estadio Nacional, fui llevado en la mañana, junto a otros compañeros, hacia el velódromo. Tenía que estar con una frazada en mi cabeza, mientras me llamaban para interrogarme. Mientras me interrogaban me desnudaron y me pusieron corriente en mis sienes, testículos, ano. Y me ponían algo en la boca para que no me mordiera la lengua mientras daban la corriente. Recuerdo estar sentado en una silla amarrado de pies y manos. Después me esposaron y me pusieron nuevamente corriente (...).*

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada N° 3, Los Ángeles, VIII Región: *(...) luego me ubicaron en una parrilla donde me aplicaron corriente (electricidad) en las manos, tobillos, cabeza y testículos, perdiendo el conocimiento por este hecho, pero con baldes de agua fría me hicieron revivir (...).*

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Academia de Guerra Aérea (AGA), Región Metropolitana: *Con los ojos vendados, se me sentó en una silla, simulando una silla eléctrica, ya que se ataban los pies a la silla, las manos, también el pecho era amarrado, luego ataban con fuerza la vista y la boca; los cables eléctricos fueron colocados en las sienes, al comenzar las sesiones de tortura, mi cabeza perdió control, como también mi boca, afirmo esto porque debido al descontrol de mi boca me mordí ambos lados de mi lengua, como también el lado interior de mi mejilla; el dolor y el pánico eran intensos y el horror hacían estragos en mi persona. Fui llevado de vuelta al "hangar" arrastrándome y completamente desnudo, una vez en ese lugar, no se le permitió a mis compañeros brindarme ayuda para alcanzar mi colchoneta; lo que debí hacer a punta y codo (...).*

Mujer, detenida en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en las dependencias del Ejército en que operaba el Servicio de Inteligencia Militar en Valdivia, Región de Los Lagos: *...siento un cosquilleo en mi cuerpo, el cual iba en aumento y sentía dolores y los músculos se me contraían, me mordía la lengua, sangraba, el corazón como que se detenía y luego taquicardia. Me desmayé, me hicieron reaccionar a golpes, otra descarga y así creo perdí la noción de las voces y me desmayé. Desperté tirada sobre paja en la pieza grande, tenía náuseas, me dolía todo, sentía olor y sabor a sangre en mi boca y un sabor como a metal. Escucho que llega un tipo y me pone un estetoscopio, y luego le dice a otro: ¡Basta por hoy, dénle dos Valium de 10 miligramos y agua!*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento Colchagua, VI Región: *(...) me aplicaron corriente en siete partes del cuerpo en forma simultánea: tobillos, muñecas, sienes, boca, testículos y frente. Perdí la conciencia y la recuperé en el lugar donde dormimos.*

Hombre, detenido en noviembre de 1973. Relato de su reclusión en el antiguo Hospital Naval de Punta Arenas (Palacio de las Sonrisas), a cargo del Ejército, XII Región: *Fui llevado nuevamente vendado y amarrado de las manos a Colón 636. Me aplicaron corriente eléctrica. Cuatro días después me llevan nuevamente a interrogatorio, me colocaron en la parrilla, me amarraron las manos y los pies al catre de fierro, me aplicaron corriente eléctrica en los testículos.*

Mujer, detenida en noviembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento Tucapel, IX Región: *Al llegar a estas dependencias me hicieron desnudar, acostarme en un escaño, me dio la impresión que era de esos que se ven en las plazas, donde me ataron un brazo y una pierna hacia arriba y la otra hacia abajo, después me pusieron un bloque de cemento en el vientre y me aplicaron electricidad vaginal, en los pezones y oídos, llenándome la boca con caca de animal, seguramente para que no se oyeran mis gritos y quejidos. Esto lo hicieron durante muchas horas, después me dejaron tirada, desnuda, yo andaba con la regla y así y todo también fui violada en tres oportunidades, no sé si sería una persona o diferentes. Esto es algo que recién ahora estoy contando (...) nunca se lo dije a mi familia (...).*

Hombre, detenido en noviembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento de Infantería Motorizada Buin, Región Metropolitana: *Somos llevados al Regimiento Buin, donde permanecemos por una semana (...) somos mantenidos en celdas subterráneas individuales de dimensiones muy pequeñas. En esa semana se nos tortura consistentemente y sin des-*

canso: somos interrogados a golpes de mano y pies, se nos amenaza con matarnos, con los ojos vendados se nos lleva a un lugar donde se nos coloca encima de una especie de cama metálica y allí se nos aplica corriente en los genitales, lengua, frente, codos. Este maltrato físico deja huellas hasta hoy.

Hombre, detenido en diciembre de 1973. Relato de su reclusión en el Cuartel General de Investigaciones (General Mackenna), Región Metropolitana: *Luego me sentaron en una silla y me pusieron electrodo, en la ingle y boca y para empezar me aplicaron un golpe de corriente. Luego me dijeron que hablara, yo les pregunté sobre qué. Más golpes e insultos, hasta me preguntaron por el Plan Z. Declaro que era primera vez en mi vida que escuchaba de ese plan. Así se los afirmé. Más toques eléctricos y golpes, en cabeza y hombros. Me preguntaron también por armas e insistían en Plan Z y me seguían golpeando y electrocutando. Finalmente, pensando que podría aliviar mi situación, les dije que era comunista. Me sacaron la venda y pude ver a un militar sentado a la mesa con un interruptor antiguo, a rostro descubierto, conectando directamente el enchufe por lo que deduje que se me aplicaban 220 voltios de la red. Se identificó como capitán y luego de insultarme, me calificó de tonto útil. Agregó que si me veía por ahí me haría fusilar igual que a los otros comunistas de la maestranza de San Bernardo. Después me llevaron nuevamente a la celda del sótano. Sangraba de la boca y tenía quebrado el hombro derecho.*

Hombre, detenido en diciembre de 1973. Relato de su reclusión en la 6ª Comisaría de Carabineros, Región Metropolitana: *Fui amarrado a una tabla y me pusieron electricidad en los testículos, pecho, pies. En mi desesperación, por los efectos de la corriente corté las correas y boté la máquina: al parecer un magneto. Por esta razón me metieron la pierna izquierda en un tambor con agua y le pusieron electricidad, lo cual me hizo perder el conocimiento. Cuando reaccioné estaba colgado de las muñecas y el teniente me golpeaba (...).*

Hombre, detenido en febrero de 1974. Relato de su reclusión en la Academia Naval de Guerra (Cuartel Silva Palma), V Región: *Se me hizo desnudar y ponerme bajo la ducha, mientras caía el agua me propinaban descargas eléctricas, las que en esas condiciones producían un efecto mayor que la electricidad en el cuerpo seco; mientras se me hacía esto no se me formuló pregunta alguna, sólo insultos y amenazas. Con una de las descargas eléctricas resbalé golpeándome la cabeza, semi inconsciente fui trasladado a otra pieza donde continuaron los maltratos, el empeño de estos sujetos se concentró en hacerme recobrar totalmente los sentidos con descargas eléctricas de menor intensidad. Vomitaba mucha sangre y no*

podía mantenerme en pie, me dejaron tendido en el suelo por un lapso de tiempo que no puedo precisar, al cabo del cual fui subido a una camioneta y trasladado al Hospital Naval, durante el trayecto sentía golpes de pies y manos y culatazos, también oía las amenazas de que se me aplicaría pentotal.

Hombre, detenido en abril de 1974. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA de Londres 38, Región Metropolitana: *(...) me hacen meterme en la tina llena de agua, no muy fría, tendido boca arriba siento unos tiritones fuertes en el cuerpo, siento un dolor fuerte en el cuerpo y parte del corazón, quedo sin conocimiento sólo por unos segundos, vuelvo a mi conocimiento, me repiten esto dos veces más, seguramente eran golpes de corriente. Luego me ponen boca abajo con un elemento, seguramente como un horcajo y algún mango, me lo colocaban en el cuello y me hundían la cabeza en el agua, cuando ya estaba muy desesperado y había tomado un poco de agua me quitaban el elemento, repitiendo varias veces lo mismo; en ese tipo de tortura no me preguntaban nada, me sacan de la tina y me sientan en el water. Desnudo y manos esposadas me pregunta una voz si conozco a algunas personas y que dónde se encuentran (...).*

Hombre, detenido en agosto de 1984. Relato de su reclusión en el Cuartel de la CNI en Valdivia, X Región: *Uno de los agentes se ofusca y dice en tono amenazante por última vez que colabore, como sigo negando, otro agente ordena que se me quite la ropa y que él se va a encargar de "operarme"; deben haber sido dos personas las que violentamente me desvistieron, sólo me dejan puestos los calcetines y soy llevado a viva fuerza a una litera (...) me amarran los pies separadamente a cada extremo de la litera, lo mismo ocurre con mis brazos y manos. Luego proceden a colocar en las partes más sensibles de mi cuerpo (genitales, tetillas, estómago, muslos y piernas), diversos aparatos que por tener los ojos tapados no pude ver ni saber de qué se trataban. Estos aparatos los fijan en mi cuerpo con scotch (...) uno de ellos avisa que todo está listo, sorpresivamente siento un fuerte dolor en todo mi cuerpo que me hace ver un montón de estrellitas y a la vez siento que me orino y me cago, doy un fuerte grito; de inmediato corren dentro de la pieza algunos agentes, uno de ellos grita "¡Tápenle la boca a ese desgraciado!", rápidamente se acerca un agente con un trapo de lana que pone en mi boca y lo sujeta. Inician nuevas descargas eléctricas sobre mi cuerpo y me piden que entregue nombres y direcciones de personas que supuestamente yo debía conocer. Sigo negando, ahora me piden que entregue un solo nombre y así se terminaría (...), dificultosamente les digo... que no tengo nada que ver con lo que se me acusa, por este motivo el agente que me interroga amenaza*

con aumentar las descargas eléctricas (...) en algunos momentos creía que me moría, porque ya no era capaz de soportar tanto castigo físico y psicológico (...).

Hombre, detenido en octubre de 1985. Relato de su reclusión en el Cuartel de la CNI de calle Borgoño, en Santiago, Región Metropolitana: *Llegué vendado. Me dieron golpes en costillas y estómago. Luego fui amarrado a una cama y me aplicaron corriente en varios sectores de mi cuerpo: pies, manos, pene y muslos. Después me examinó al parecer un médico, para certificar si tenía problemas con la electricidad. Al parecer no tuve problemas, pues me siguieron torturando. Además me informaron que habían matado a mi hermana, cosa que no era tal.*

Amenazas

De los testimonios de personas que sufrieron prisión política recogidos por esta Comisión, una proporción importante señaló haber sido víctimas de amenazas, las que eran recibidas cuando se encontraban en situaciones de radical vulnerabilidad.

Por amenaza se entiende la intimidación mediante la advertencia respecto de los graves males o peligros que se ciernen sobre la persona afectada o sobre terceros relacionados con la misma, en caso de no satisfacer los deseos de sus captores. Reunidos ciertos requisitos, la amenaza constituye un delito en sí, sancionado por el Código Penal chileno. La amenaza grave es considerada un método de tortura causante de agudo sufrimiento psicológico en el detenido.

Se considera como tortura, las amenazas de muerte, de desaparición forzada y de aplicación de algún otro tipo de tortura (por lo general física) en la persona del detenido o en familiares cercanos. La amenaza, como método de tortura, fue ampliamente utilizada durante todo el período que comprende el mandato de la Comisión. Se recurrió al amedrentamiento para mermar la fortaleza del interrogado, bien antes o durante el interrogatorio, llegando al extremo de detener al cónyuge y a los hijos, incluidos los menores de edad, para exhibirlos al detenido mientras se le advertía que serían torturados, muertos o desaparecidos.

Asimismo, se tomó conocimiento de casos en que los organismos de seguridad allanaron el domicilio del detenido y obtuvieron grabaciones o fotografías de sus familiares, las que fueron utilizadas para exponérselas al detenido y forzar su declaración. También se recibieron testimonios de detenciones de parientes cercanos a personas buscadas por los organismos de seguridad, con el objeto de presionarlas para que se entregaran.

Hombre, detenido en septiembre 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento Telecomunicaciones de Curicó, VII Región: *(...) se me mantuvo en oportunidades con los ojos tapados y en otras oportunidades encapuchado, presionándome para colaborar e inculpar a otras personas u organismos que en ese momento presentaban un problema para ellos, se me decía que si no hablaba mi familia sería detenida, recayendo problemas para mi esposa.*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Fuerte Müller de Infantería de Marina de Las Salinas, V Región: *Desnudo: fui golpeado de pies y manos por comandos de infantería. Fui golpeado con un machete. Se me aplicó corriente en todo el cuerpo, especialmente en los genitales, ano, etc. Estos infantes me gritaban que eran comandos entrenados en Panamá. Me desmayé dos veces, recibí muchos golpes en los oídos, quemaduras profundas en el ano. Se me gritó que no saldría de ahí con vida (...). Ya de mañana fui trasladado (arrastrado por el pelo) a una sala de reuniones donde se me expuso (semi desnudo) al grupo, sentándome en frente y mirándolos; cosa que no podía hacer bien ya que tenía ambos ojos como muy hinchados y sangraba de la cabeza y todo el cuerpo estaba golpeado. Se les dijo: "Aquí está vuestro jefe, así tratamos a estos perros" (...).*

Hombre, detenido en agosto de 1974. Relato de su reclusión en la Primera Comisaría de Carabineros de Calama, II Región: ...*Posteriormente fuimos llevados a Calama, encadenados y martirizándonos, como a los extremistas más peligrosos. Aquí en Calama (Primera Comisaría) nos recluyeron por tres días donde nos pegaban y nos amenazaban, cada vez que lo hacían, con que nos quedaban pocos días de vida puesto que nos iban a matar. ¡Veíamos pasar la muerte por todos lados!*

Mujer, detenida en enero de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *Escuché con horror cómo sabían cada uno de mis pasos, lo que los calificaba para tratarme de puta cuantas veces quisieron. Lloré bajo la venda de algodón, tuve mucho miedo; me decían a cada rato que había desaparecido sin dejar rastros y que no volvería a ver a mis dos hijos. Sabían sus nombres, los colegios donde iban, los horarios de entrada y salida. Yo no lo podía creer.*

Simulacro de fusilamiento

El simulacro de fusilamiento es el fingimiento o imitación de la ejecución de una persona mediante la descarga de fusiles de un pelotón

comisionado para tal efecto. En este caso, sin embargo, se incluyen simulacros de ejecución perpetrados con otras armas también, como metralletas, pistolas o revólveres. Estos simulacros inducen a la víctima a experimentar la inminencia de su muerte como un hecho real.

La Comisión recibió testimonios que refieren este método de tortura, utilizado desde el mismo 11 de septiembre de 1973 hasta el término del régimen militar, que fue de aplicación masiva y sistemática. Usualmente, el simulacro de fusilamiento iba acompañado de una puesta en escena que buscaba darle veracidad a la experiencia, impidiendo así que el detenido sospechara del carácter ficticio del procedimiento en curso. La víctima podía ser llevada desde su recinto de reclusión hasta un lugar apartado donde se le maniataba y vendaba o encapuchaba, para luego dar instrucciones al pelotón que en efecto disparaba. En algunos casos se utilizaron balas de salva, aunque en la mayoría de los casos, éstas eran reales. La diferencia consistía en que, en vez de apuntar al cuerpo, se disparaba al aire, a los costados o sobre cabeza de la víctima.

Como daño colateral de este método de tortura cabe mencionar lo ocurrido con las personas retenidas en sus celdas, barracones y habitaciones. Dado que sólo escuchaban los disparos, pensaban que la persona había muerto a causa del fusilamiento, impresión prolongada por la costumbre de no reintegrar de inmediato al presunto fusilado al sitio de su detención. El tránsito de otros detenidos hacia el simulacro de fusilamiento inducía, a los prisioneros rezagados a pensar que su turno de morir se aproximaba inexorablemente. Se conserva registro de prisioneros sometidos a más de un simulacro; sus víctimas siempre creyeron que en esa ocasión particular no había fingimiento.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Comisaría de Puerto Aysén, XI Región: *(...) fui llevado al paredón con los ojos vendados, una vez allí me dijeron que mirara por última vez y vi a mis demás compañeros en muy malas condiciones, encorvados y abatidos. Nuevamente me vendaron los ojos y me dijeron si quería algo más, les dije que sí, entonces habla rápido que tenemos poco tiempo me contestaron. Les dije: "voy a morir por mis ideas y no me arrepiento, sáquenme la venda que quiero morir como hombre"; gritaron "no se puede". Pasaron varios minutos, horas, no sé el tiempo. Escuché la voz de orden al pelotón y los disparos. Silencio profundo, luego unos pasos, silencio otra vez, no sabía dónde estaba. Traté de oler, no me atrevía a hablar, menos a tocar, estaba en estas divagaciones que tienen que haber sido en fracción de segundos, cuando escucho la voz seca del militar que me grita "¡te salvaste huevón, a la otra no te escapas!".*

Hombre, detenido en septiembre de 1974. Relato de su reclusión en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, XII Región: *Se cumplió con todo el rito de un fusilamiento. Levantada temprano, grillos en los pies y las manos, un sacerdote (creo que falso, por las averiguaciones que hice posteriormente), sus rezos y sus letanías, indicando los pocos minutos que me quedaban en este mundo terrenal y mi encuentro con Dios. Me insistía en que confesara mis pecados, siempre le manifesté lo mismo, no tengo nada de qué arrepentirme, a lo que me respondió en una oportunidad: "El Señor te quiere recibir con las puertas abiertas". Me senté en lo que seguramente era el tradicional banquillo. Vendado nada podía ver. Lo dramático lo pusieron con el silencio, allí sentí algunos tiritones. Se me pregunta por mi último deseo y le manifiesto primero que quiero ver a mis hijos y mi señora. Eso es imposible, te damos chance de otro. Bueno, le dije, que me fusilen sin vendas, a lo que respondió uno de ellos: "el perla nos quiere conocer". Allí sentí una corazonada que me decía que no sería el final. Silencio de nuevo, suena ese ruido típico de las pasadas de las balas de fusil y los disparos. Como nada siento en el cuerpo, nada me duele. Se acerca un militar y me pone la pistola en la sien, o puede ser también un dedo, y me dice, "te salvaste"..., en forma burlesca... "me toca a mí darte el tiro de gracia y debo decirte que te quedan menos de 30 segundos de vida". Un disparo en el oído me hace sentir de nuevo que estoy con vida. El militar dice finalmente: "se salvó este desgraciado, retórnenlo a su aislamiento".*

Hombre, detenido en julio de 1980. Relato de su traslado desde el Cuartel Borgoño a un recinto desconocido, Región Metropolitana: *El viaje duró aproximadamente una hora, quizás un poco más. Una persona les abrió una especie de portón, al final de un camino de tierra. Ahí me bajaron y me pusieron grilletes en los pies, me pasaron una picota y una pala, seguía vendado y me hicieron caminar un poco y me hicieron sacar la venda. Se pusieron todos detrás mío con linternas: era de noche; me hicieron bajar una pequeña ladera; se sentían graznidos de pájaros, no estoy seguro si eran gaviotas. El campo estaba muy embarrado. Me ofrecieron decir algo antes de que me mataran, contesté que no tenía nada más que decir. Entonces con la picota y la pala me hicieron cavar un hoyo de unos 50 centímetros de profundidad, un metro de ancho y dos metros de largo. Cada cierto tiempo me hacían parar y me ofrecían hablar para salvar mi vida; les contestaba siempre que no tenía nada que agregar. El terreno que picaba no era duro, era como pantanoso y estaba reblandecido por la lluvia. Al concluir el trabajo, me hicieron tenderme de lado en la fosa, sentí que alguien pasaba la bala de un fusil y lo puso en mi sien.*

"Corre el fusil para atrás mejor porque si no le van a saltar los sesos". Antes de meterme en la fosa, me habían sacado los grilletes de los tobillos, y me dijeron que me iban a amarrar con alambre (...). Después de un rato, me sacaron del hoyo, me pusieron esposas, grilletes y venda y a empujones me llevaron hasta el auto (...).

Humillaciones y vejámenes

Esta Comisión recibió abundantes testimonios de humillaciones y vejámenes. Éstos se aplicaron con mayor frecuencia durante los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado. Bajo estas denominaciones se agrupan los tratos y las coacciones hacia el detenido cuya única finalidad es menoscabar su dignidad como ser humano, herir su honor, su honra y su orgullo personal. Están destinados a causar daño psíquico o mental grave.

Prácticas como la ingestión forzada de desechos, no sólo provocaban un grave sufrimiento mental derivado del trato indigno de la condición de ser humano, sino que ocasionalmente, también generaban daños físicos originados en las infecciones y enfermedades contraídas a causa de la materia ingerida.

Los métodos de tortura descritos en este capítulo, implican formas de humillar o vejar a una persona. Sin embargo, se han incluido en este punto, las humillaciones o vejámenes no directamente asociados a otros métodos de tortura.

Las principales conductas que esta Comisión calificó como humillaciones y vejámenes, son las siguientes:

• Obligar a ingerir desechos orgánicos (excrementos, orina y vómitos, de humanos o animales), además de líquidos pestilentes, etc., por vía oral o nasal.

• Arrojar excrementos e inmundicias sobre el detenido.

• Obligar al detenido a besar la bota de un agente militar o policial.

• Obligar al detenido a arrastrarse por el suelo en medio de burlas y golpes.

• Obligar al detenido a pedir perdón, a renegar de sus ideas políticas, a manifestar lealtad o reconocer la superioridad de los agentes militares o policiales.

• Obligar al detenido a insultarse a sí mismo o a sus compañeros.

• Hacer correr al detenido con la vista vendada en rutas con obstáculos, para que tropiece y caiga al suelo.

• Obligar al detenido a entonar himnos o consignas políticas en medio de burlas.

• Insultos, groserías y burlas graves, constitutivos del delito de injuria.

• Cortar el pelo al rape del detenido y pasearlo por lugares públicos.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Tenencia de Contulmo, VIII Región: *(...) con fecha 13 de septiembre de 1973, siendo las siete y media de la mañana llegó a casa de mis padres una patrulla de Carabineros, quienes con mucha violencia irrumpieron encañonando a mi padre y hermanos con sus armas, inmovilizándoles. Enseguida entraron en mi pieza. Me ordenan poner mis manos en la nuca (...) yo estaba levantándome (...) sólo tenía puesto el pantalón. A continuación me sacaron a la calle descalzo y sin camisa (...) en ese recorrido se pasó a buscar a cuatro compañeros..., siendo todos conducidos a la Tenencia de Contulmo, ahí fue el comienzo del calvario. En la caballeriza habían unas argollas adosadas a la misma, de donde prácticamente me colgaron con las manos juntas quedando en puntillas. Estando en esta posición comenzaron a pegarme con las culatas de los fusiles. Me preguntaban por otros compañeros y como decía no saber lo que preguntaban, seguían golpeando. La verdad, no sé calcular el tiempo empleado en esta golpiza. Apareció el teniente (...) preguntando con groserías si había hablado. El cabo (...) responde que no he dicho nada. El teniente ordena traer excremento de las caballerizas y agua en una botella. Luego me pregunta sobre lo mismo y como respondo igual, me doblan hacia atrás el cuello y golpean mi estómago e introducen excremento en mi boca. Luego echan agua para que me trague todo el contenido (...). Así sucedió una, dos, tres, diez veces, no sé. Después me dejaron ahí, escuchando los gritos y lamentos de los otros detenidos.*

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento Chillán, VIII Región: *(...) me alimentaron con porotos y garbanzos con gusanos y con olor a fecas insoportables, pero con hambre tuve que comer.*

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la 4a Comisaría de Concepción, VIII Región: *En el interrogatorio se me hizo sentarme con los dedos de las manos sobre la mesa, extendidos, mientras se me apoyaba una metralleta en la sien. Se me dijo que no saldría vivo del recinto. Se me golpeó brutalmente en varias ocasiones. Alrededor de las 21 horas de ese día, nos hicieron formarnos a todos los que estábamos en la comisaría, unas 35 personas entre hombres y muje-*

res. Se nos obligó a cantar el Himno Nacional, a gritar "Vivan las Fuerzas Armadas" y al llevarnos a los calabozos se nos hizo pasar por el medio de dos filas de carabineros que nos golpeaban al pasar. Me golpearon posteriormente entre tres carabineros (...).

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Base Aérea El Bosque, Región Metropolitana: *(...) me sacan del gimnasio con la vista vendada para conducirme al interrogatorio donde tengo que desvestirme para posteriormente sentarme en una silla amarrado, donde me aplican corriente eléctrica en la cabeza, corazón y testículos, además después de finalizada la tortura el encargado pide que me pasen excremento por la cara amenazándome que el día siguiente será más dura si no me decido a hablar, amenaza con fusilarme y tomar detenida a mi familia.*

[...]

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán, Región del Biobío: *fui golpeado por alrededor de ocho carabineros, uno de ellos con un fierro me rompió la nariz y partes de la cara (cejas y labios), en el calabozo fuimos mojados con mangueras. Luego, en el trayecto a la cárcel, nos volvieron a pegar y cortar el pelo y barbas con cuchillo.*

[...]

Mujer, detenida en febrero de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *Se me obligaba a hacer mis necesidades con la puerta abierta mientras los guardias me miraban y se mofaban de mí, se me obligaba a sentarme en la taza del baño con restos de excrementos y orina y sin que me permitieran limpiar un poco la taza antes de sentarme o limpiarme yo cuando ya había hecho mis necesidades. Exigencia de controlar el organismo de tal modo que la orina y los excrementos debían salir del cuerpo a horarios fijados por ellos. En caso contrario, se amenazaba con que si no se controlaba el organismo, te obligarían a comer tus excrementos o a beber tu orina. Este tipo de amenazas aprendí rápidamente a creerlas, cuando me tocó presenciar esta situación con un preso que no logró controlar su diarrea. De forma inexplicable mi organismo se adaptó a esta exigencia (...).*

[...]

Hombre, detenido en mayo de 1976. Relato de su reclusión en su domicilio, con mención a su posterior traslado al recinto de la ex iglesia La Providencia, Antofagasta, II Región: *Y he de salir a la calle, fría, solitaria y callada. Me dirijo a la cabina, entre repentinas risotadas de mis acompañantes que me empujan sin suavidad y con manifiesto agrado a la parte trasera de la camioneta. "¡Miren al perla! ¿Te creís en la Fiscalía, viejo*

cagón? ¡Atrás no más, tendido en el suelo, güeón! ¡Y en la orillita, pa' que le hagai lugar a tus camarás¡ ¡y callaíto! ¡amárrenle bien las manos y tápenle la vista!... Estos jutres se creen la muerte... ¡La casita que tiene el upeliento! ¡Y la mujercita que tenís! ¿Dónde la conseguiste, siendo tan reviejo? ... ya la visitaremos otra noche, queda sola la palomita" (...).

Desnudamiento

Quitarse la ropa y permanecer desnudo han sido conductas reservadas al ámbito privado, dentro de un contexto de intimidad. Por eso, coaccionar a alguien a desvestirse, o bien quitarle las ropas a la fuerza, obligándole a permanecer desnudo en presencia de desconocidos con intenciones manifiestamente hostiles, es un modo de tortura que sume a la persona en un estado de extrema vulnerabilidad e indefensión. Súmese a ello que la persona así intimidada está privada de libertad y desnuda contra su voluntad mientras es sometida a interrogatorios irregulares; que en esas condiciones se impone el temor a ser víctima de afrentas sexuales y que el cuerpo desnudo solía ser expuesto a otras formas de padecimiento, como golpes o aplicación de electricidad.

La Comisión recibió numerosos testimonios de personas desnudadas violentamente, coaccionadas a desnudarse y obligadas a permanecer desnudas durante el interrogatorio. La práctica de forzar a los detenidos a desnudarse —a veces golpeando a personas ya maniatadas o rasgando con violencia las vestimentas— fue habitual entre los efectivos militares y policiales, llegando a constituir un procedimiento casi rutinario para los organismos de seguridad.

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento de Infantería N° 4 Cochrane, XII Región: *(...) inmediatamente me ordenaron desnudarme y me sacaron a un campo de entrenamiento militar con ocho infantes dando patadas y golpes apoyados por cinco perros que me mordían las piernas y cuando caía también me lastimaban los hombros.*

[...]

Mujer, detenida en febrero de 1975. Relato de su reclusión en el Cuartel Silva Palma de la Armada, en Valparaíso: *En los interrogatorios era desnudada y atada a una silla dándome golpes de puño en la cabeza, pecho y abdomen. Me aplicaron corriente en las sienes, pezones, lengua, genitales y tobillos. En una ocasión fui trasladada a un servicio de urgencia del Hospital Naval por fuertes dolores abdominales y estomacales,*

además de taquicardia. El último día pude ducharme para poder ser revisada por la Cruz Roja Internacional.

Mujer, detenida en mayo de 1975. Relato de su reclusión en el Cuartel de la DINA en Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *Al llegar al recinto me tiraron de la camioneta al suelo y luego me sometieron a interrogatorios con [se omite el nombre] quien me descalificó verbalmente. Luego me llevaron a las "casas Corvi" (cajones donde sólo se podía permanecer de pie). Siempre me mantuvieron con la vista vendada, manos vendadas y desnuda. Me aplicaron la parrilla eléctrica, fui víctima de tocaciones y abusos deshonestos, muchas golpizas y simulacro de fusilamiento en la punta de la piscina.*

Agresiones y violencia sexuales

La agresión sexual consiste en forzar a una persona mediante coacción física o psicológica, a realizar o padecer actos de carácter sexual. Las agresiones de este tipo se encuentran legalmente prohibidas y, reunidos ciertos requisitos, se identifican con distintas figuras delictivas por constituir un serio atentado contra la libertad de las personas, lesivo del sano desarrollo de su sexualidad y de su personalidad. En suma, cuando un detenido es violentado sexualmente por un agente del Estado o por un particular a su servicio, estas agresiones constituyen una forma de tortura porque causan en las víctimas un grave sufrimiento psicológico, generalmente acompañado de un dolor físico capaz de provocar secuelas.

Esta Comisión recibió numerosos testimonios de personas que, en su condición de prisioneros políticos, sufrieron agresiones sexuales. Muchas de las mujeres detenidas que padecieron tortura fueron víctimas de alguna modalidad de agresión sexual, en distintos grados. La Comisión también recibió testimonios de varones que fueron víctimas de algún tipo de agresión sexual. Consta también, la agresión sexual perpetrada contra menores de edad. Al final de este capítulo se incluye una descripción y análisis más profundo, sobre la violencia sexual contra las mujeres.

A continuación se enuncian los principales tipos de agresión sexual registrados en los testimonios recibidos por esta Comisión:

• Miles de personas refirieron haber sido víctimas de agresión verbal con contenido sexual; de amenazas de violación de su persona o de familiares suyos; de coacción para desnudarse con fines de excitación sexual del agente; de simulacro de violación; de haber sido obligadas a oír o presenciar la tortura sexual de otros detenidos o de familiares; de haber

sido fotografiados en posiciones obscenas, todo ello en un contexto de extrema vulnerabilidad.

• Otro número importante de personas denunciaron tocamientos; introducción de objetos en ano o vagina; violación en todas sus variantes (penetración oral, vaginal, anal); violaciones reiteradas, colectivas o sodomíticas; haber sido forzados a desarrollar actividades sexuales con otro detenido o un familiar. Se registran también casos que refieren haber sufrido la introducción de ratas, arañas u otros insectos en boca, ano o vagina. Constan testimonios de personas forzadas a tener sexo con perros especialmente adiestrados para este cometido. Por otra parte, importa consignar que la mayoría de las víctimas de agresiones y violencias sexuales refirieron graves y variadas secuelas. Es de interés señalar que gran parte de las víctimas, careció de apoyo especializado para atender estas secuelas, sobre todo durante los primeros años de la represión. Muchas personas que acudieron ante esta Comisión señalaron que nunca antes se habían atrevido a relatar estas experiencias.

Mujer, menor de edad, detenida en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes, V Región: *Me condujeron a una sala, al entrar sentí mucho olor a sangre (...) escuchaba individuos que hablaban bajo, uno de ellos me desató las manos y me ordenó que me desnudara, les dije que por favor no lo hicieran, pero luego en forma violenta me desvistieron, dejándome sólo la capucha puesta, me pusieron en una especie de camilla amarrada de manos y pies con las piernas abiertas, sentí una luz muy potente que casi me quemaba la piel. Escuché que estos individuos se reían, luego un hombre comenzó a darme pequeños golpes con su pene sobre mi cuerpo, me preguntó de que porte me gustaba, otro hombre escribía cosas sobre mi cuerpo con un lápiz de pasta. Luego vino el interrogatorio (...) en seguida ordenó que me pusieran corriente en los senos, vagina y rodillas (...). Luego de las descargas pararon un rato, mientras sentía que hablaban entre ellos. Nuevamente retomaron el interrogatorio, esta vez me dijeron que me habían conectado a la máquina de la verdad (...) por cada respuesta que daba sonaba un pito de esta máquina, por cuanto me decían que yo estaba mintiendo (...) el pito de ese aparato se transformó en un infierno (...) vinieron nuevamente los golpes y las descargas eléctricas, cuando casi estaba inconsciente me levantaron la capucha hasta la nariz, me pusieron un vaso en la boca haciéndome ingerir un líquido, no supe qué pasó conmigo hasta el día siguiente que me devolvieron al campo de prisioneros. En el campo fui recibida por el suboficial (...) el que al verme comentó que si se diera vuelta la tortilla no querría que esto le pasara a su hija, le*

pregunté qué me había pasado, pero enseguida llamó a las enfermeras militares (...) sentía dolor en la vagina y en todo mi cuerpo (...) estaba muy deteriorada sin poder defecar (...).

Mujer, detenida en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Estadio Nacional, Región Metropolitana: *Estando embarazada fui torturada, violada y manoseada por un grupo de efectivos militares.*

Mujer, detenida en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento Arica, La Serena, IV Región: *(...) embarazada de cinco meses, fui detenida y hecha prisionera. Estuve un mes y medio incomunicada en la Cárcel del Buen Pastor, y sometida en el Regimiento Arica a vejámenes y torturas, entre las cuales debo, como denuncia, mencionar: (...) instada a tener relaciones sexuales con la promesa de una pronta liberación; obligada a desvestirme, acariciada en los pechos y amenazada de recibir las visitas nocturnas del interrogador; golpes de electricidad en la espalda, vagina y ano; uñas de las manos y pies fueron arrancadas; golpeada en varias ocasiones con bastones de plástico y con culatas de rifles en el cuello; simulacro de fusilamiento, no me mataron pero debí escuchar como las balas silbaban a mi alrededor; obligada a tomar e ingerir medicinas; inyectada en la vena con pentotal, bajo la severa advertencia que sería hipnotizada como único medio de declarar la verdad; colocada en el suelo con las piernas abiertas, ratones y arañas fueron instaladas y dispuestos en la vagina y ano, sentía que era mordida, despertaba en mi propia sangre; se obligó a dos médicos prisioneros a sostener relaciones sexuales conmigo, ambos se negaron, los tres fuimos golpeados simultáneamente en forma antinatura; conducida a lugares donde era violada incontables y repetidas veces, ocasiones en que debía tragarme el semen de los victimarios, o era rociada con sus eyaculaciones en la cara o resto del cuerpo; obligada a comer excrementos mientras era golpeada y pateada en el cuello, cabeza y cintura; recibí innumerables golpes de electricidad (...).*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en la Base Aérea Maquehua, IX Región: *De manera especial me golpeaban los testículos con una especie de regla, lo que me provocaba unos dolores insoportables. Todo esto, siempre estando yo desnudo y vendado. Durante el proceso de tortura también me introdujeron un palo por el ano, producto de lo cual tuve desgarros que me provocaron hemorragias por varios días, tanto anales como por vía oral.*

Hombre, detenido en agosto de 1974. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA de Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *(...) me fue introducido un objeto contundente en el ano; me rompieron las fibras y muchas veces al defecar botaba sangre.*

Mujer, detenida en noviembre de 1974. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA Venda Sexy, Región Metropolitana: *(...) llegaron dos hombres y una mujer a buscarme. Yo corrí a la oficina del médico jefe para dejar una prueba de mi detención. En efecto, les pidió que se identificaran y ellos mostraron sus placas como agentes de la DINA. Me llevaron con mi delantal de servicio sin dejarme tiempo de tomar mis ropas. Me subieron a una camioneta de la DINA, me pusieron una venda sobre los ojos, me golpearon (...) me dejaron sola en una oficina sentada en un banquillo de poca altura, siempre con la venda en los ojos. Pasé largo tiempo en ese lugar. Luego me hicieron subir una escalera, llegamos a una pieza donde me pidieron que me desnudara. Había una persona que escribía a máquina mi identificación. Luego me instalaron electrodos en la cabeza y en las manos y me enviaron electricidad repetidas veces (...) vino un médico que me examinó ginecológicamente (...) violación, masturbación sobre mi cuerpo, me fotografiaron desnuda, todo esto interrumpido con descargas eléctricas.*

Presenciar torturas de otros

Esta Comisión conoció numerosos testimonios de personas que fueron forzadas a ver u oír las torturas infligidas a otras víctimas. Los organismos de seguridad adoptaron la práctica, agravante del método en sí, de forzar al detenido a presenciar la tortura de familiares directos como cónyuge, hijos, padres, etc., a fin de extraerles declaraciones o confesiones.

Este método permite que el detenido incorpore en su racionalidad elementos de proyección sobre lo que puede ocurrirle si no colabora, a modo de anticipación o reforzamiento de la conciencia de su condición de víctima, en estado de indefensión absoluta frente a la tortura. Los métodos de tortura más frecuentemente utilizados contra familiares fueron las agresiones sexuales, la aplicación de electricidad y los golpes. Constan además, casos de detenidos torturados simultáneamente junto a sus familiares.

Mujer, detenida en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la 4a Comisaría de Talca, VII Región: *Al entrar a la comisaría, casi al anochecer, escuché unos gritos desgarradores que provenían de algún lugar de adentro de la comisaría. El terror más profundo que puede sentir un ser humano me invadió al reconocer que los gritos eran de mi hermano (...).*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en la Base Naval de Talcahuano (El Morro), VIII Región: *Fui encerrado en una barraca donde muchas veces escuchaba y otras veía como violaban a*

algunas niñas universitarias o simplemente liceanas, lo cual me producía mucho trastorno, por la impotencia de no poder hacer nada, esto se repitió muchas veces durante el tiempo que estuve detenido.

Hombre, detenido en diciembre de 1973. Relato de su reclusión en la Academia Naval de Guerra (Cuartel Silva Palma), V Región: *Durante mi reclusión, en forma casi permanente, fui obligado a escuchar las torturas y el interrogatorio de mi padre. En intentos de intervenir contra las torturas de mi padre, fui golpeado por los guardias con puños y piernas en el suelo y contra las murallas.*

Mujer, detenida en septiembre de 1974. Relato de su reclusión en la casa de la DINA de José Domingo Cañas N° 1315, Región Metropolitana: *En José Domingo Cañas fui golpeada en diversas partes del cuerpo. Nuevamente fui manoseada y obligada a presenciar la tortura de mi esposo. Fui desnudada y amarrada a un catre metálico en el que fui golpeada. Estaba embarazada con 6 meses de gestación.*

Hombre, detenido en junio de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA de la ex iglesia Divina Providencia, Antofagasta, II Región: *Esa noche me llevaron a presenciar cómo interrogaban a otro compañero. Lo tenían tendido y amarrado a un somier de alambre y lo instaban a reconocerme, al no hacerlo éste, le aplicaban descargas eléctricas. Cansados de su negativa optaron por otra táctica que consistió en ponerme a mí en su lugar y al compañero de pie al lado del somier conectándonos a ambos con cables eléctricos. Fui devuelto a la celda, antes de lo cual me mojaron.*

Hombre, detenido en diciembre de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA de Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *(...) tras incitarnos injuriosamente a colaborar y ante mi mutismo me golpeó brutalmente haciendo uso de puños, pies y un objeto contundente durante varios minutos delante de mi madre y de mi esposa. Mi madre fue llevada aparte (luego fue liberada) y la golpiza continuó sobre mi esposa. Ofuscado por nuestro silencio (...) ordenó "¡a la parrilla!" (...) me sacaron a un patio donde me dejaron tendido mientras me hacían escuchar los gritos de mi compañera que torturaban en una pieza aledaña. Tras una media hora de mantenerme escuchando los tormentos de mi esposa, durante los cuales me intimaban para evitarle sufrimientos (...) me desnudaron a la fuerza, me introdujeron en una pieza con catres metálicos de dos pisos, me amarraron a uno de ellos, me conectaron cables y electrodos hechos con ganchos y llaves metálicas a los pies, las manos, narices, ojos, encías, ano, pene y testículos, y comenzaron a aplicar descargas eléctricas producidas por un dínamo a manivela. (...)*

Mujer, detenida en enero de 1979. Relato de su reclusión en la Comisaría de Vallenar, III Región: *(...) me llevaron a un patio, donde con golpes de pies y manos me amarraron a una silla, me pusieron frente de una sala de tortura donde me hicieron ver cómo torturaban de uno en uno a los cinco compañeros que detuvieron junto conmigo, mientras que ellos eran salvajemente torturados a mí me seguían golpeando brutalmente estando amarrada en la silla, me exigían que hablara porque si yo no hablaba íbamos a desaparecer de uno en uno, me insultaban de una manera que nadie se imagina, como yo no hablaba daban vuelta la silla donde yo estaba amarrada y aturdían al que estaban golpeando y disparaban un tiro al aire para que yo creyera que estaba muerto, y así sucesivamente ocurrió con todos los demás compañeros, mientras que yo seguía siendo golpeada brutalmente y amarrada a esa maldita silla.*

Ruleta rusa

La ruleta rusa es un temerario juego de azar que ritualiza la práctica del suicidio. Consiste en dispararse en la sien un revólver cargado (o que simula estarlo) con una sola bala, ignorando en qué lugar del tambor o nuez está alojada ésta. La eventualidad de morir en este juego, que el detenido practicaba contra su voluntad, constituye la esencia de este método de tortura. Pese a no haber sido empleado masivamente, la Comisión recibió testimonios sobre su aplicación.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Estadio Nacional, Región Metropolitana: *Fui obligado a jugar a la ruleta rusa, con una pistola apuntada en la sien.*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento de San Felipe Yungay, V Región: *De Carabineros me pasaron al Regimiento Yungay (...), en donde recibí golpes de puños, culatazos y jugaron a la ruleta rusa.*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el Cuartel del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, en Valdivia (Palacio de la Risa), X Región: *(...) repetidas veces gatillaron un revólver en mi sien diciendo que jugaban a la ruleta rusa y mis sesos iban a estallar (...).*

[...]

Hombre, detenido en mayo de 1980. Relato de su reclusión en el Cuartel de la CNI de Talca, VII Región: *(...) jugaban con armas de fuego (ruleta rusa), esto lo hicieron durante los días que estuvimos en el cuartel.*

Presenciar fusilamientos de otros detenidos

La Comisión recibió testimonios de prisioneros forzados a presenciar el fusilamiento de sus compañeros de prisión, muchas veces personas conocidas, amigos o colaboradores. No hace falta insistir en el sufrimiento causado por tales prácticas, que permitían al detenido vivenciar la radical inseguridad respecto a su propia suerte. En algunos recintos se practicó la modalidad agravante de arrojar sobre los detenidos, inmovilizados y tendidos en el suelo, los cuerpos agonizantes de quienes acababan de ser ejecutados. Cabe señalar que decenas de personas que brindaron su testimonio a esta Comisión han sido testigos en procesos de ejecutados políticos.

Mujer, detenida en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Estadio Nacional, Región Metropolitana: *(...) Nos sacaban a la cancha media hora diaria para que viéramos cómo mataban gente de verdad o simulacro, pero cada vez más cosas para que habláramos. ¿Qué tenía que decir? ¿Inventar?*

Hombre, detenido en octubre de 1973. Relato de su reclusión en el recinto militar de Cerro Chena, Región Metropolitana: *Aparte de todo lo sufrido hacia mi persona, también vi cómo mataban hombres y mujeres frente mío y los enterraban en los mismos lugares donde nos tenían (...).*

Confinamiento en condiciones infrahumanas

La prisión no es en sí misma un método de tortura. Condiciones carcelarias agravantes de la prisión como la incomunicación, tampoco pueden ser consideradas como un método de tortura *per se*, si bien implican una mayor vulneración de los derechos de la persona, aun en el caso de responder a un dictamen de la autoridad judicial competente en el marco de un debido proceso. Admitido lo anterior, debe precisarse que el confinamiento de una persona en una celda construida o ambientada con la expresa finalidad de provocar sufrimiento físico o psíquico, se considera como un método de tortura.

Esta Comisión conoció numerosos testimonios referentes a confinamientos de esta índole. Las principales características de las celdas o lugares en los cuales las personas afectadas fueron confinadas son las siguientes:

• Confinamiento en celdas en donde se privó al detenido de todo contacto con otra persona, por un período que podía prolongarse —en

algunos casos— hasta por meses, provocando afecciones psíquicas propias de la deprivación sensorial y social. Hay relatos de personas que fueron recluidas en celdas estrechas, sin iluminación, sin ventanas ni ningún otro sistema de ventilación y sin servicios higiénicos, forzadas por tanto a orinar y defecar en el mismo lugar, mientras se les privaba de agua y ocasionalmente, se les suministraban alimentos en estado de descomposición, si es que no se las mantenía lisa y llanamente en ayuno forzado.

• Confinamiento solitario en celdas de tamaño en extremo reducido, verdaderas jaulas que no permitían permanecer de pie ni sentado, obligando a la persona afectada a soportar posiciones forzadas durante el día y la noche por períodos prolongados.

• Confinamientos colectivos en celdas, en bodegas de barcos o en jaulas, debiendo permanecer las personas apiñadas unas sobre otras y sin lugar para hacer sus necesidades fisiológicas.

• De los primeros meses de la represión política también existen testimonios referentes a situaciones de confinamiento solitario o colectivo en celdas donde había animales e insectos, tales como roedores, arañas, baratas y otros.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Isla Quiriquina, VIII Región: *(...) nos desnudaron y nos pusieron en una jaula, al mismo estilo como transportan los leones de un circo, pero la diferencia era que la de nosotros estaba rodeada de alambres de púas, estábamos a exhibición (...).*

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Base Aérea Cerro Moreno, II Región: *(...) Siguieron las golpizas por largo rato y después de algunas horas, finalmente, cesaron de maltratarnos. Nos encerraron en una especie de jaula de alambre de púa, tirados en el suelo, desnudos y al aire libre. Era de madrugada, hacía mucho frío. Tiritábamos bajo la brisa helada del desierto. Al interior de esa jaula nos encontrábamos amontonados unos sobre otros, por lo que a cualquier intento para acomodarnos provocábamos el dolor de algún compañero. A uno de ellos le habían quebrado la clavícula. Desgraciadamente quedé en una posición incómoda, lo que ocasionó nuevos dolores.*

[...]

Mujer, detenida en febrero de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *(...) fui sometida a (...) aislamiento total en la torre de Villa Grimaldi, en una celda pequeña, sin ventilación, ni luz, sin puerta y con un orificio inferior por el que se entraba y salía, reptando.*

Privaciones deliberadas de medios de vida

Esta Comisión recibió numerosos testimonios que señalan que las condiciones de vida en los recintos de detención eran muy precarias, situación que se veía empeorada al ser habilitados como centros de reclusión lugares no concebidos con tal propósito. También se privó deliberadamente al detenido de medios básicos de vida como el abrigo mínimo, el agua y los alimentos. La situación podía incluir ausencia de servicios higiénicos. Cuando las privaciones de medios básicos de vida son prolongadas y provocan sufrimiento innecesario, perjudicando la salud de la persona, constituyen un método de tortura destinado a provocar el debilitamiento físico y moral de los detenidos, con el fin de castigar o disminuir la capacidad de resistencia de los mismos.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Comisaría de Chol-Chol, IX Región: *Dentro del calabozo estaba oscuro y había mal olor. La pieza era más o menos de dos por dos metros; estábamos unos sobre otros. También recuerdo que no dejaban por ningún motivo ir al baño, hacíamos nuestras necesidades allí mismo. Muchos vomitábamos del dolor y por el espantoso olor que había en ese lugar.*

Hombre, detenido en mayo de 1974. Relato de su reclusión en el Regimiento Arica, La Serena, IV Región: *Durante todo ese tiempo de detención (15 días en el regimiento) no pude cambiarme de ropa, ni bañarme, ni hacerme ningún tipo de aseo.*

Privación o interrupción del sueño

Dormir es una necesidad fisiológica con efectos reparadores que al no ser satisfecha de manera sistemática, produce alteraciones en los estados de ánimo y aun en la percepción de la realidad, así como un generalizado debilitamiento corporal. Impedir a un detenido conciliar el sueño o interrumpirlo deliberadamente en reiteradas oportunidades, durante uno o varios días, constituye un método de tortura, debido al daño físico y las perturbaciones psicológicas que ocasiona. De acuerdo con los testimonios allegados a la Comisión, estas prácticas adquirieron diversas formas de aplicación, habiendo sido las más recurrentes: mantener iluminado el recinto de detención con potentes focos, provocar ruidos molestos, golpear cada cierto tiempo al detenido.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Destacamento de Infantería de Marina N° 4 Cochrane, XII Región: *(...)*

De vuelta en el Regimiento Cochrane estuve una semana sin que se me permitiera dormir, sin alimento y sin agua para beber, además, con un soldado de punto fijo con bayoneta calada, con instrucciones de no dejarme dormir, apoyarme, sentarme o tenderme al piso. (...).

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en la Comisaría de Salamanca, IV Región: *Luego de mi detención fui trasladado a la comisaría de la zona y sometido a innumerables interrogatorios por alrededor de cuatro o cinco días. Estos interrogatorios eran, tengo la impresión, realizados por carabineros y todos ellos acompañados de golpes de manos, pies y diversos objetos, permitiéndome dormir algunas horas en calabozos llenos de agua y tan solo en ropa interior. Además, por mi condición de minusválido era objeto de burlas y maltrato físico y psíquico extremo.*

[...]

Hombre, detenido en noviembre de 1979. Relato de su reclusión en un recinto desconocido de la CNI, II Región: *Al ser descendido del vehículo de los efectivos de la CNI no pude saber donde me ingresaron por llevar mis ojos vendados. Al ingresar en dicho recinto, fui inmediatamente sometido a torturas constantes durante cinco días, siendo inclusive privado casi de dormir y sometido también a vejámenes.*

Asfixias

Otro método de tortura a que fue sometido un número significativo de personas es el intento de asfixia, que consistía en impedirles o dificultarles la respiración. Por este medio se buscaba causar sufrimiento físico y psicológico mediante la confrontación con la eventualidad de morir ahogado.

Las formas más recurrentes para provocar asfixia a los detenidos fueron:

• Sumergir la cabeza del detenido en agua hasta provocar su inminente asfixia por falta de aire, acción repetida todas las veces que los agentes estimaban necesario. Este método ha sido llamado *submarino* o *submarino húmedo*. Su aplicación precedió, acompañó y sucedió a los interrogatorios, según fuera el parecer de los efectivos policiales o militares, y se recurría a él indistintamente como forma de *ablandamiento* preliminar o como técnica para extraer información. Una modalidad todavía más severa de asfixia consistió en colocar a la víctima en posición inverti-

da dentro de un tambor con agua. Hay denuncias que indican que las inmersiones se efectuaban en agua mezclada con otro tipo de substancias que agravaban el sufrimiento.

• Colocar la cabeza del detenido dentro de una bolsa plástica amarrada firmemente al cuello para impedir el ingreso de aire, provocando así la asfixia una vez que se agotaba el oxígeno. Denominado *submarino seco*, este método fue empleado, según los casos registrados por esta Comisión, fundamentalmente en el tiempo inmediatamente posterior al golpe de Estado.

• Otras denuncias de tortura con efectos de asfixia refieren el suministro de grandes cantidades de agua por vía oral o nasal hasta llenar el estómago; la asfixia se producía durante el suministro continuo o prolongado de agua o bien al momento de llenarse el estómago.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Retén de Carabineros de Valdivia, X Región: *Me tuvieron por una semana más o menos con todo tipo de torturas donde tenían un pozo bastante profundo con agua y excrementos de animal y ahí me sumían de cabeza para abajo (...).*

Hombre, detenido en noviembre de 1973. Relato de su reclusión en el Estadio Regional de Concepción, a cargo del Ejército, VIII Región: *(...) siendo luego incomunicado por cinco días en el Estadio Regional, me pusieron una manguera de 3/4 por la boca y daban (el) agua (...).*

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Fuerte Borgoño, VIII Región: *(...) me pusieron algodón en ambos ojos, luego huincha adhesiva encima y un capuchón negro amarrado a la nuca, me ataron de pies y manos fuertemente y me hundían en un tambor de esos de aceite de 250 litros que contenía amonia, orina, excrementos y agua de mar, así me sumergían hasta que mi respiración no daba más, ni menos mis pulmones y la volvían a repetir una y otra vez, acompañados de golpes y preguntas, eso era lo que llamaban ellos en tortura el famoso submarino.*

Hombre, detenido en octubre de 1974. Relato de su reclusión en la Tenencia de Puerto Octay, X Región: *Allí me tuvieron botado más o menos hasta las 16 horas, de aquí me sacaron y me llevaron a una caballeriza, allí tres carabineros me colocaron de espalda a un tablón y luego procedieron a atormentarme con agua, uno de ellos me tapaba la boca con un trapo y el otro me echaba el agua por la nariz y el tercero me pisaba el estómago así hasta quedar inconsciente (...).*

Hombre, detenido en abril de 1975. Relato de su reclusión en el recinto de la DINA Villa Grimaldi, Región Metropolitana: *Aproximadamente a media noche fui sacado nuevamente de la celda y arrastrado a la*

sala de interrogatorio. Esta vez no se me aplicó electricidad. Se me ató a una silla y se me puso una bolsa de plástico en la cabeza que se me anudó con un cordón apretado al cuello. La bolsa contenía un poco de aire y un poco de aserrín de madera. Yo empecé a respirar el aire de la bolsa que en menos de un minuto se agotó. Las paredes de la bolsa se me adhirieron al rostro y en mi desesperación por inhalar aire ya inexistente empecé a tragar por nariz y boca el aserrín. Aquellas materias extrañas me penetraron hacia los pulmones y violentas contracciones musculares intentaron expulsarlas. El esfuerzo me provocó vómitos que se vaciaron en la bolsa. Ahora tragué mis propios vómitos unido al aserrín. Cuando los síntomas de asfixia se hicieron muy fuertes, retiraron la bolsa y me dejaron tranquilo por unos minutos. Luego me golpearon con correas de cuero y con puños en cara, brazos, tórax y muslos. La tortura de la bolsa, conocida como submarino seco, me la aplicaron por dos veces más durante esa noche.

Exposición a temperaturas extremas

Más allá de las incomodidades propias de hallarse privado de libertad, el hecho de exponer deliberadamente a una persona a temperaturas muy elevadas o muy bajas con la única finalidad de causar sufrimiento físico o mental, también es un método de tortura. Esta Comisión recogió varios testimonios de personas expuestas con premeditación a las inclemencias del tiempo por períodos prolongados o a temperaturas extremas, en el límite superior o inferior de lo tolerable por un ser humano saludable.

Hombre, detenido en septiembre de 1973. Relato de su reclusión en el Regimiento N° 14 de Aysén, XI Región: *(...) fui desnudado en la nieve, a un costado del recinto a la intemperie, con aplicación de corriente en varias partes del cuerpo, golpes de culata estando en el suelo. (...).*

Hombre, detenido en enero de 1974. Relato de su reclusión en el Campo de Prisioneros Chacabuco, II Región: *(...) de pie todo el día a pleno sol (40°C) y de noche los hacían correr para sentir el frío del desierto.*

[...]

Hombre, detenido en septiembre de 1974. Relato de su reclusión en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, XII Región: *Se me arrastró desnudo por la cancha de fútbol del Estadio Fiscal, a las seis de la mañana, con una escarcha y una temperatura que llegaban bajo los 10 grados de frío. Se me amarraba de pies y manos y dos aviáticos (miembros de la Fuerza Aérea) me arrastraban como yunta de bueyes, con la única diferencia que eran un poquito más rápidos.*

Violencia sexual contra las mujeres

Ha parecido necesario destacar separadamente la situación de violencia sexual que afectó a las mujeres detenidas, tomando en consideración las características de esa violencia, además de su significación moral y cultural en la sociedad chilena.

Durante siglos, la violación sexual y todas las formas de violencia sexual contra las mujeres eran consideradas como situaciones inevitables y casi normales en las guerras y conflictos políticos armados. Es más, la violación era una conducta más de agresión contra los enemigos que vulneraba su dignidad y su moral y de paso gratificaba las necesidades sexuales de los vencedores, por tanto carecía completamente de sanción. Este lado oscuro y miserable del conflicto no alcanzaba a empañar las victorias porque había pocas voces dispuestas a reconocer su existencia y a calificarlo como un crimen. Con dificultades, estas denuncias han ido creciendo, mostrando la gravedad de los hechos y sus consecuencias.

La violación y otras formas de violencia sexual están prohibidas por el derecho internacional humanitario, específicamente por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, de los que Chile es signatario. Estos contienen 19 disposiciones específicas relativas a la mujer, pero su alcance es limitado. En su conjunto, tienen como objetivo prestar una protección especial a las mujeres embarazadas, a las madres lactantes y a las madres en general, y presentar la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia sexual en tiempo de conflicto armado. Es importante agregar que la violencia sexual constituye una de las formas más graves de la violencia.

En 1998, la Corte Penal Internacional reconoció en uno de sus estatutos legales vinculantes, que la violación sexual podría constituirse en un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, en vez de considerarlo un simple crimen contra la dignidad de las personas, como tradicionalmente se ha establecido en el derecho internacional humanitario.

En ese contexto, la violación es un ataque contra la dignidad personal y constituye una tortura cuando:

• Es infligida, instigada o llevada a cabo con el consentimiento o la pasividad de un funcionario público u otra persona que actúa como representante oficial;

• Busca infligir dolores o sufrimientos para intimidar a la víctima, obtener información, denigrarla o castigarla por actos reales o supuestos atribuidos a ella o a miembros de su familia o para proporcionar satisfacción al victimario bajo condiciones de abuso y desprotección absoluta de la víctima.

Situaciones conocidas por la Comisión

Las entrevistas realizadas por esta Comisión no indagaron expresamente acerca de la violencia sexual ejercida contra las ex presas. Las situaciones que se registran fueron mencionadas espontáneamente por las declarantes. Es necesario señalar que la violación sexual es para muchas mujeres un hecho del cual les cuesta hablar y muchas veces prefieren no hacerlo.

La violencia sexual contra las mujeres durante el régimen militar constituye una de las formas más brutales de violencia, sin embargo es preciso subrayar que las mujeres fueron detenidas por sus ideas, sus acciones y participación política, no por su condición de tales. Sin embargo, la violencia ejercida sobre ellas utiliza su condición sexual, agravando el impacto sobre su integridad moral y psicológica.

Esta Comisión recibió el testimonio de 3.399 mujeres, correspondiendo al 12,5% de los declarantes. Más de la mitad de ellas estuvieron detenidas durante 1973. Casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades y 316 dijeron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido, por las consideraciones anteriores y porque existen numerosos testimonios de detenidos que señalan haber presenciado violaciones, cometidas en una gran cantidad de recintos de detención. La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado. Cabe señalar respecto e estas últimas que 229 mujeres que declararon ante esta Comisión fueron detenidas estando embarazadas y 11 de ellas dijeron haber sido violadas. Debido a las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.

Los testimonios hablan por sí solos.

Prisión y violencia sexual

Recibí golpes y corriente en la Comisaría (se omite). La tortura más severa fue en (un recinto de la Armada), allí sufrí el submarino, la escasa comida, los simulacros de fusilamientos todas las noches, las quemaduras con cigarros (...). En la Comisaría (se omite) sufrí violación con botellas. Lesiones genitales, golpes en la cabeza, que provocaron mi estadía por una semana en la enfermería del Fuerte, sin medicamentos. VIII Región, 1973.

[...]

Por violación de los torturadores quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí shock eléctricos, colgamientos, "pau-arara", "submarinos", simulacro de fusilamiento, quemadura con cigarros. Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano que estaban detenidos. También a ver y escuchar las torturas de mi hermano y padre. Me hicieron "el teléfono", me pusieron en la parrilla, me hicieron cortes con yatagán en mi estómago. Tenía 25 años. Estuve detenida hasta 1976. No tuve ningún proceso. Región Metropolitana, 1974.

Prisión y violencia sexual de menores de edad

Fui llevada a (un recinto del Ejército) y fui objeto de abuso sexual. Nos llevaron detenidas con mi hermana y una amiga. Yo fui la primera en ser interrogada. Me hicieron pasar a una pieza donde había tres milicos con su rostro tapado, tenían una bolsa negra en la cabeza, uno por uno me hacían preguntas, pero yo no sabía nada por lo tanto no podía responderle nada. Entonces uno de ellos se bajó los pantalones y sacó su pene y me obligó a que se lo tenía que enderezar con mi boca. Después vino el otro y el otro. En total fueron tres milicos que tuve que enderezárselo, el último se fue en mi boca, no sé quienes fueron o cómo eran porque estaban encapuchados. Lo único que sé es que mi vida nunca volvió o volverá a ser como antes, ya que en ese tiempo era solo una estudiante. Por lo ocurrido no pude continuar estudiando hasta ese momento (...) lo único que sé es que no puedo olvidar nada. Consta que estuvo detenida 12 días en la cárcel sin registrar proceso y egresó por falta de méritos. 14 años, VII Región, 1973.

Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían "chupones", me pusieron ratas. Creo que estuve en (recinto secreto de la DINA) me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo. Luego de su liberación fue expulsada del país, sola, sin su familia. 16 años, Región Metropolitana, 1975.

[...]

Muchas mujeres denunciaron situaciones semejantes en distintos momentos y distintas regiones. Los testimonios recogidos reiteran como la

violencia sexual formó parte del trato a las presas políticas, reduciéndose hacia el final las violaciones sexuales, no así las vejaciones y la discriminación abusiva.

Prisión y violencia sexual de mujeres embarazadas que fueron violadas durante su detención

Después de 30 años, sigo llorando. Cuando fui detenida estaba embarazada de 3 meses Estuve en la Comisaría de (se omite). El carabinero a cargo me amenazaba de que me iba a violar. En una carpa de campaña en el patio obligaron a un dirigente sindical a violarme y manosearme a vista de dos carabineros a cargo. Me amenazaron con sacarme las uñas de los pies (no lo hicieron, sí a otros compañeros). En (se omite) de (se omite) tuve un simulacro de fusilamiento... Estuve incomunicada en bancas días y noches. Vendada todo el tiempo. Era obligada a observar la tortura de otros y era amenazada de que me violarían nuevamente. En los interrogatorios me desnudaban, me manoseaban y me sentaron en la silla dental y me pusieron corriente en los pechos, garganta, vientre, piernas... Fui a dar al hospital en diciembre del 73. X Región, 1973.

Estaba embarazada de tres meses, fui detenida y llevada al Estadio Nacional. Allí recibí golpes, tuve un simulacro de fusilamiento. Fui obligada a estar en posturas forzadas sin moverme. (...) Fui obligada a presenciar torturas y violaciones a otras detenidas. Estando embarazada fui torturada y violada y manoseada por un grupo de efectivos militares. Región Metropolitana, 1973.

[...]

Fui detenida en 1973 en (se omite) y fui sometida a torturas. Tenía dos meses de embarazo. Fui violada por efectivos del Ejército. A consecuencias de ello se me produjo un aborto. Fui mantenida en arresto domiciliario durante dos meses. Quedé libre. IV Región, 1973.

Sufrí golpes y aplicación de corriente eléctrica en todo el cuerpo. Fui colgada de pies y manos y me taparon la boca con una toalla, en ese momento me encontraba embarazada (un mes). Fui, violada por distintos sujetos, mientras mis manos y pies se encontraban atados, me introducían en el agua, luego aplicando corriente eléctrica específicamente más en los órganos genitales, dedos y vientre. Además, sufrí agresión psicológica, amenazándome que matarían a mi hija de 9 meses que se encontraba en poder de ellos. Región Metropolitana, 1975.

Al momento de la detención me vendan los ojos (...) y fui trasladada a [un recinto de la DINA]. Uno de los hombres pidió trato especial para mí porque estaba destinada para otro lugar. Ese trato fue golpes en los oídos, y aplicación de electricidad. Me llevaron a Tejas Verdes: siempre encapuchada e incomunicada en una barraca (...) Para los interrogatorios éramos trasladados en un camión frigorífico, amarrados, encapuchados. Nos desnudaban y nos introducían en unas celdas a la espera. Las sesiones de tortura duraban alrededor de doce horas. Este procedimiento era a diario. Yo tenía tres meses de embarazo. Recibí golpes bajo el vientre, golpes con sacos mojados sobre las piernas, baldazos de agua estando amarrada a un poste, amarrada por horas con cuerdas que pasaban bajo mis piernas. Me hicieron simulacro de fusilamiento y violación. Me arrancaron las uñas de los dedos chicos de los pies y quemaduras en el cuerpo. Escuchaba torturas de otros presos y me hacían escuchar un casete con la grabación de quejidos de niños y me decían que eran mis hijos. Me hacían comer excrementos. En el (se omite) y producto de las torturas se me produjo un aborto espontáneo. Nunca recibí atención médica. V Región, 1974.

Prisión de mujeres violadas que quedaron embarazadas

Muchas mujeres que fueron violadas quedaron embarazadas. Muchas de ellas abortaron de manera espontánea o provocada. Otras tuvieron a esos hijos.

Estuve incomunicada, vendada y con capucha. Me dieron golpes y aplicación de electricidad. Me colgaron y violaron. Tuve una fractura de costilla y de los dedos de los pies. Me sacaron las uñas. Estuve en varios lugares. Creo que (un recinto de la DINA) y en otro lugar. En todas partes se repitió la tortura. Escuchaba gritos. Por la violación tuve un embarazo tubario. Región Metropolitana 1973.

Llegaron a mi oficina los militares y me detienen (...) me trasladan amarrada al regimiento, donde me interrogan acerca de mi militancia política y de mi familia que era de izquierda. (...) Fui trasladada al [se omite] y luego a la cárcel de [se omite] en octubre de 1973 y en enero de 1974 me devuelven definitivamente a la cárcel de [se omite]. En los trayectos de un recinto a otro fui golpeada por militares y violada. Quede embarazada y perdí el embarazo al 5° mes en el hospital de (se omite), en 1974, durante la detención. VIII región, 1974.

[...]

Prisión de mujeres embarazadas cuyos hijos nacieron en cautiverio

Las situaciones que afectaron a estas mujeres son diversas, dependiendo de la región, del período en que fueron detenidas y de las condiciones de privación de libertad. Hubo casos en que la prisión de la madre ocurrió durante su período de gestación y el parto se produjo mientras ella estaba en prisión. El hijo permaneció junto a ella durante el cautiverio.

Una mujer que estaba en el séptimo mes de embarazo fue detenida y llevada a un recinto de la DINA (1974). Dijo que fue violada constantemente. Su hija nació bajo custodia policial en el hospital Sótero del Río. Estuvo con ella en otro recinto de la DINA hasta los cinco meses de edad.

Otro caso es el de una mujer detenida en 1974, en un recinto de la DINA, tenía seis meses de embarazo. Dijo que fue sometida a golpes que rompieron su dentadura superior delantera. Se le propinaron golpes en los oídos y sufrió torturas psicológicas. Era golpeada cuando gritaba. Su hijo nació estando ella todavía detenida en otro recinto de la DINA y vivió con él en prisión durante cuatro meses.

Otra mujer dijo en su testimonio:

Fuimos secuestrados de nuestro hogar de madrugada, fuimos mantenidos en la (se omite) comisaría (de Carabineros) toda la noche, abusados verbal y físicamente, con golpes de pies, puños, parados al frío e interrogatorios con la vista vendada. Al día siguiente fui trasladada, fui sometida a más interrogatorios, golpes y aplicación de electricidad en pezones y vagina, fui violada por más de dos personas, estando embarazada de 4 meses y medio. Mi hija nació en la cárcel con una cesárea provocada por gendarmes, cuando fue cómodo para ellos. Región Metropolitana 1984.

VI. Recintos de Detención*

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura recibió miles de testimonios de personas, hombres y mujeres, que vivieron la prisión política y sufrieron la tortura a lo largo del país, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Los relatos entregados sobre lo vivido en esas circunstancias permitieron a la Comisión reunir antecedentes respecto de 1.132 recintos utilizados como lugares de detención en las trece regiones del país.

El gran número de testimonios recibidos por la Comisión permiten identificar algunos aspectos comunes en todo el país en cuanto a la manera

* Capítulo VI del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (extracto).

en que fueron detenidas las personas, a las condiciones en las que estuvieron privadas de libertad y las características de los interrogatorios y a las torturas a las que fueron sometidas. Fueron utilizados como lugares de detención e interrogatorio las más diversas unidades pertenecientes a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, cuarteles de las policías de Carabineros e Investigaciones, buques, intendencias, estadios, campos de prisioneros, cárceles y recintos secretos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

Prácticamente todos los que declararon ante esta Comisión dejaron constancia que fueron detenidos con extrema violencia. Algunos incluso frente a sus hijos, cualquiera fuera su edad, en la mitad de la noche, con gritos, golpes y amenazas de muerte sobre el detenido y sobre otros miembros de la familia, creándose una atmósfera de terror y angustia. En muchos casos la familia quedaba desolada y temiendo por la vida del familiar que era sacado de la casa en medio de golpes, puntapiés y amenazas. En algunos, especialmente en sectores rurales y poblados pequeños, los detenidos fueron expuestos a los habitantes de su comunidad para intimidar a los demás, obligándolos a presenciar, con impotencia, la violencia que se descargaba sobre los que estaban siendo detenidos. La mayoría de los detenidos fueron conducidos hacia los recintos de detención en medio de amenazas, golpes, amarrados y vendados o encapuchados, desconociendo cuál sería su destino.

Los declarantes describieron el itinerario que siguieron luego de ser detenidos, las condiciones en que se les privó de libertad y el tratamiento que sufrieron. Se refirieron especialmente a los interrogatorios y a las torturas a las que fueron sometidos. Durante el período en que funcionó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue difícil para los detenidos conocer la ubicación e identificación exacta de esos recintos, principalmente por las medidas adoptadas por sus captores para mantener el carácter secreto y clandestino de esos lugares. Así, muchos de estos, siguen siendo llamados *recintos desconocidos*, especialmente en regiones.

En relación a los períodos de funcionamiento de los recintos de detención, los testimonios recogidos por la Comisión permiten establecer de manera aproximada cuándo fue utilizado un determinado lugar. Se estableció un rango de fechas entre las cuales se recibieron testimonios de personas que estuvieron detenidas en un recinto. Los testimonios permiten identificar los períodos de mayor concentración de detenidos. En algunos casos, fue posible corroborar esta información con los informes emitidos por la Cruz Roja Internacional (CRI), después de visitar algunos lugares de detención.

En cuanto a las cifras de detenidos por recinto, estas corresponden al número de los que declararon ante la Comisión y no a la cifra total de los presos políticos que estuvieron en cada lugar. Junto a esto debe considerarse el hecho de que la mayoría de los detenidos transitaron por diversos lugares y no siempre mencionaron todos los recintos en los que estuvieron detenidos. Por lo tanto, las cifras son relativas y aproximadas y, casi siempre, menores al número total de los que estuvieron detenidos en cada recinto.

Como se ha señalado en otros capítulos del informe, la mayor cantidad de detenciones se produjeron en los días posteriores al golpe de Estado, con un compromiso masivo de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, lo que se aprecia en el personal que actuó, como en el empleo de sus recintos y de muchos otros recursos institucionales. Es así como en los primeros meses después del 11 de septiembre de 1973 fueron empleados como recintos de detención gran parte de las instalaciones militares y policiales del país. También fueron empleados, como recintos transitorios, una gran variedad de edificios públicos, intendencias, lugares de trabajo o estudios, como hospitales, industrias, escuelas, liceos o universidades; y recintos particulares, sobre todo en sectores rurales. Algunas personas estuvieron detenidas en ellos por horas o por unos pocos días y luego fueron trasladadas a otros lugares o liberadas.

Las personas detenidas entre 1973 y 1975 señalan que durante su privación de libertad fueron mantenidos bajo condiciones precarias. Si bien las condiciones particulares variaban, en general dormían en el suelo, sin colchón ni abrigo, privados de alimentos y agua, o con escasa alimentación, muchas veces incomible. Vivieron hacinados y en condiciones insalubres, sin acceso a baño, soportando constantes humillaciones y abusos de poder.

Desde septiembre del año 1973 y, en general, hasta fines del año 1976 se habilitaron varios campos de prisioneros en el país. Los detenidos eran enviados desde distintas regiones a esos lugares, permaneciendo por meses privados de libertad, casi sin contacto con sus familiares y muchos de ellos sin ser procesados.

Las personas de sectores rurales, pueblos o ciudades pequeñas, refieren detenciones por períodos breves. Muchos de ellos quedaron sometidos a controles de su libertad ambulatoria por períodos que a veces duraron años, teniendo que firmar diariamente en comisarías o cuarteles militares, incluso, en algunos casos, varias veces al día.

Durante los años 1974 y 1977, se observa una disminución significativa el número de las detenciones. Durante este período actuaron preferentemente Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Dirección de

Inteligencia Nacional (DINA). En algunos casos también actuó el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), el Comando Conjunto, el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), denominado por un período como Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Los detenidos permanecieron secuestrados en recintos desconocidos y la negación del hecho de su detención fue una práctica común. Muchos prisioneros desaparecieron desde esos lugares. En regiones, dichos organismos funcionaron al interior de algunos recintos militares y se mantuvieron allí por un tiempo.

Los detenidos por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no aparecían públicamente como detenidos. La vida cotidiana en esos lugares se caracterizaba por condiciones físicas insalubres y una constante presión psicológica sobre los prisioneros, manteniéndolos amarrados, vendados y en total incertidumbre respecto al desenlace de la irregular situación que los afectaba. Además, en todo momento estaban expuestos a interrogatorios brutales. Como se ha señalado en otros capítulos, los interrogatorios se realizaron casi siempre sometiendo a los prisioneros a múltiples torturas.

A partir de 1978, las detenciones fueron realizadas por Carabineros e Investigaciones, y los servicios de inteligencia en especial la Central Nacional de Inteligencia (CNI), y en menor medida otros como el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), e incluso por grupos no reconocidos oficialmente, como el Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA). Algunos detenidos eran encarcelados y sometidos a interminables procesos judiciales. Otros, especialmente personas ligadas al movimiento social, poblacional y estudiantil, fueron relegados administrativamente a distintos lugares del país después de períodos cortos de detención.

Durante la década de 1980, especialmente en las ciudades, se produjo un aumento de las detenciones. Éstas recayeron sobre los participantes en movilizaciones sociales o protestas nacionales, y sobre las organizaciones políticas que optaron por la vía armada.

Las cárceles fueron recintos en los que permanecieron personas procesadas o condenadas durante todo el régimen militar, aunque en los primeros años también mantuvieron numerosos detenidos por orden de fiscales militares sin existir un proceso en su contra o bajo acusaciones vagas y arbitrarias.

Se han seleccionado algunos recintos entre todos los que fueron identificados por la Comisión, para realizar una breve caracterización que incluye: su ubicación y dependencia, el período aproximado de su funcionamiento, y las condiciones de privación de libertad y el tratamiento de los prisioneros.

La selección de recintos en cada región se ordenó según los siguientes criterios:

a) La importancia del recinto. Se trata de aquellos que concentraron el mayor número de detenidos y de aquellos donde se realizaron los interrogatorios, centralizándose la información de inteligencia y donde se decidía el destino inmediato de los prisioneros.

b) La condición de recintos secretos o clandestinos de reclusión, donde se efectuaban interrogatorios y hubo una práctica sistemática tortura en contra de las personas detenidas. Corresponden a los organismos de inteligencia como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), Comando Conjunto, Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) o Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR).

c) Los que se destacaron por la aplicación de malos tratos y torturas especialmente crueles en contra de los prisioneros, hombres y mujeres.

d) El período de funcionamiento, de tal modo que fuera posible apreciar lo ocurrido durante todo el período incluido en el mandato de la Comisión.

La descripción de los recintos se presenta ordenada por región, antecedida de una breve introducción acerca de lo ocurrido en la región, los períodos de funcionamiento, los principales organismos involucrados y el itinerario más frecuente que siguieron los prisioneros desde el momento de su detención. Dichas descripciones se basan en los testimonios presentados por las víctimas. A su vez, la descripción de los métodos de tortura empleados en los recintos aluden a aquellas prácticas recurrentes descritas por los declarantes que permanecieron en ellos. Después respecto de cada región, se adjunta un listado de recintos claramente identificados por varios testimonios, que suman en total 802 lugares de detención. Se han excluido de dicho listado 330 recintos en que se estimó que, por el escaso número de testimonios que se referían a ellos, no eran significativos como para ser incluidos en la nómina.

I Región de Tarapacá

En la actual Primera Región, el mando fue asumido, el 11 de septiembre de 1973, por el Jefe de Zona en Estado de Emergencia designado para la entonces Provincia de Tarapacá, con excepción del departamento de Arica, que fue establecido como una Zona en Estado de Emergencia

aparte con una jefatura propia. Ambas designaciones fueron oficializadas mediante el Decreto Ley N° 4 de 11 de septiembre de 1973.

El mayor número de detenidos se concentró durante los años 1973 y 1974. Desde 1975 y hasta el año 1983 se observó una disminución importante de las detenciones en comparación con el período anterior, pero aumentaron en 1984.

Las detenciones en 1973 y 1974 fueron efectuadas por miembros del Ejército, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Rara vez actuaron en operativos conjuntos. Algunos testimonios mencionan la presencia de personal de civil en dichos operativos. Cualquiera fuese la institución que realizó la primera detención y el recinto al que fueron enviados inicialmente, los detenidos eran trasladados a diferentes lugares para ser interrogados, de preferencia a recintos militares, tales como el Regimiento Reforzado N° 4 Rancagua de Arica y el Regimiento de Telecomunicaciones N° 6 Tarapacá de Iquique. De este modo, durante su detención permanecían por horas, por días o por semanas en diferentes lugares.

Los datos señalan que durante el año 1974 la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) operó en la región trasladando a los detenidos, para interrogarlos, a diferentes recintos y también a sus cuarteles de Santiago, especialmente a Villa Grimaldi.

Durante los años ochenta, la detención de las personas la realizaban Carabineros, Investigaciones y la Central Nacional de Inteligencia (CNI). La mayoría de los detenidos fueron interrogados por la CNI.

Los testigos mencionaron ocho recintos secretos de detención y torturas correspondientes a la DINA y CNI. Entre ellos, el cuartel Habitación San Miguel de Azapa, que fue reconocido en 1984 mediante el Decreto Nº 594 del Ministerio del Interior, decreto en el cual se proporcionaba un listado de dependencias de la CNI utilizados como lugares de detención. Los demás recintos fueron identificados por los testimonios entregados a esta Comisión.

En cuanto al tratamiento a los prisioneros y las condiciones de privación de libertad, los testimonios recibidos dan cuenta de diversas situaciones de extrema violencia contra las personas, ocurridas desde el momento de la detención, durante los traslados, en los interrogatorios, así como durante el período de reclusión transitoria a la espera de ser procesados o puestos en libertad. La mayoría de las personas que concurrieron a la Comisión denunciaron haber sido torturadas en los interrogatorios. Numerosos declarantes indicaron, además, que fueron trasladados en grupos a zonas descampadas —en la pampa— para ser sometidos a maltratos, castigos físicos y trabajos forzados. Existen además denuncias que señalan que

durante los traslados interrumpían el viaje para maltratar y golpear a los prisioneros, sometiéndolos en varias ocasiones a simulacros de fusilamiento. De acuerdo a los testimonios recibidos, las prácticas de malos tratos y torturas en los recintos de Carabineros ocurrieron durante todo el período del régimen militar.

Es importante destacar que el control represivo en Iquique y Arica, y especialmente en esta última ciudad, estuvo en manos del Ejército, inclusive durante los años ochenta.

En la época en que emergieron con más fuerza las manifestaciones en contra del régimen militar, las protestas en las poblaciones eran reprimidas por contingente militar, que utilizaba además armamento y vehículos de guerra.

En la región hubo un campo de prisioneros políticos propiamente tal, el Campamento de Prisioneros de Pisagua. Fue uno de los campos de prisioneros más grandes del país, al que se enviaron detenidos de diversas regiones, especialmente de la región de Valparaíso y de la Metropolitana. Posteriormente fue utilizado como lugar de relegación. En 1973-1974 este campamento se caracterizó por la crueldad en el trato a los prisioneros, las constantes ejecuciones y el rigor en las condiciones de permanencia y supervivencia de las víctimas, agravadas por las características geográficas del lugar.

[...]

Recintos I Región

- Bat. Logístico N° 6 Pisagua, Iquique.
- Campamento de Prisioneros Pisagua.
- Camping Las Machas, Arica.
- Cárcel de Arica.
- Cárcel de Iquique.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Arica.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Iquique.
- Comis. de Carabineros Nº 1, Arica.
- Comis. de Carabineros Nº 1, Iquique.
- Comis. de Carabineros Nº 3, Arica.
- Comis. de Carabineros, Ofic. Victoria.
- Comis. de Carabineros, Pozo Almonte.
- Cuartel de Investigaciones, Arica.
- Cuartel de Investigaciones, Iquique.
- Prefectura de Carabineros, Arica.
- Prefectura de Carabineros, Iquique.
- Recinto CNI Av. Santa María 2936, Arica.
- Recinto CNI calle Azola, Arica.
- Recinto CNI, Iquique.
- Recinto CNI, San Miguel de Azapa.
- Recinto DINA Casa de la Risa calle Orella 100, Iquique.
- Recinto DINA en Arica.
- Recinto DINA industria abandonada frente a la ex Citroen (Nun & Germán).
- Regimiento de Caballería N° 1 Granaderos, Iquique.
- Regimiento de Infantería Nº 5 Carampangue, Iquique.
- Regimiento de Telecomunicaciones Nº 6 Tarapacá, Iquique.
- Regimiento Reforzado Nº 4 Rancagua, Arica.
- Retén de Carabineros Aduana / Aduana Vieja, Iquique.
- Retén de Carabineros, Alianza.
- Retén de Carabineros, Oasis de Pica.
- VI División del Ejército, Iquique.

II Región de Antofagasta

En 1973, la Segunda Región correspondía a la provincia de Antofagasta. Fue designado Jefe de Zona en Estado de Emergencia el comandante de la Primera División de Ejército. En el departamento de El Loa fue designado el comandante del Regimiento de Infantería N° 15 de Calama. Ambas designaciones fueron oficializadas mediante el Decreto Ley N° 4 de 11 de septiembre de 1973.

La mayoría de las detenciones fueron realizadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones. En las ciudades de Calama y Antofagasta algunas personas fueron detenidas por miembros del Ejército. La Fuerza Aérea practicó detenciones en Antofagasta. Desde el instante mismo de la detención, los prisioneros fueron maltratados y golpeados. Una vez detenidos, no se les dio a conocer el lugar del arresto y se les mantenía incomunicados. Durante la detención, eran trasladados frecuentemente a diversos recintos.

En Tocopilla los detenidos eran conducidos a la comisaría de Carabineros o la cárcel, lugares de reclusión transitoria, mientras se les investigaba. Desde ahí eran llevados a la cárcel o a algún regimiento de Antofagasta.

En Chuquicamata y Calama, los prisioneros y prisioneras eran llevados a una comisaría, al regimiento o a un recinto en la Empresa Nacional de Explosivos (ENAEX - Ex Dupont). Posteriormente eran trasladados a la cárcel de Calama o a algún recinto en Antofagasta, tal como el cuartel de Investigaciones, un recinto de SICAR (ex Iglesia Divina Providencia o Grupo de Instrucción de Carabineros), la Base Aérea Cerro Moreno o al Regimiento de Infantería. En Antofagasta, donde se centralizó la mayor cantidad de detenciones de la región, la Fiscalía Militar se encontraba en la 1ª División de Ejército. Sin embargo, las personas eran citadas, para ser interrogadas y detenidas, a las dependencias de la intendencia, donde eran liberadas o trasladadas a un recinto de detención. Cuando las personas de encontraban detenidas y eran requeridas por el fiscal, éste generalmente se desplazaba hacia los regimientos o a la Base Aérea.

Los detenidos en las cárceles de la zona y que eran investigados eran sometidos a interrogatorios en otros lugares, especialmente en recintos de las Fuerzas Armadas y posteriormente eran devueltos a la cárcel.

En la región se habilitaron dos campos de prisioneros: uno en la ex oficina salitrera Chacabuco, que recibió detenidos de todo el país, y otro en

Calama, en el Campamento Militar Conchi, donde el año 1978 se mantuvo prisioneros a un grupo de trabajadores de Codelco-Chuquicamata.

Durante la década de 1980 las detenciones las practicaban especialmente Carabineros e Investigaciones. En Antofagasta se registró la mayor cantidad de detenidos. Allí, actuaron Carabineros, SICAR, Investigaciones y la CNI.

En Calama y Chuquicamata no se registran recintos de la CNI. De acuerdo a los testimonios, se habrían utilizado los cuarteles de Investigaciones en esos lugares como recintos de detención.

[...]

Recintos II Región

- Base Aérea Cerro Moreno.
- Campamento de Prisioneros Chacabuco.
- Campamento Militar Conchi.
- Cárcel de Antofagasta.
- Cárcel de Calama.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Antofagasta.
- Cárcel de Tocopilla.
- Comisaría de Carabineros N° 1, Antofagasta . (Actual Comisaría de Carabineros Nº 2, Antofagasta).
- Comisaría de Carabineros Nº 2, Antofagasta. (Actual Comisaría de Carabineros Nº 3, Antofagasta).
- Comisaría de Carabineros, Calama.
- Comisaría de Carabineros, Chuquicamata.
- Comisaría de Carabineros, Tocopilla/ Fiscalía de Carabineros.
- Cuartel de Investigaciones, Antofagasta.
- Cuartel de Investigaciones, Calama.
- Cuartel de Investigaciones, Tocopilla.
- Dependencias Mineral Chuquicamata
- Destacamento Militar, San Pedro de Atacama.
- Empresa Nacional de Explosivos / ENAEX / Ex Dupont.
- Estadio Regional Sokol, Antofagasta.
- Fiscalía Militar/ Gobernación de Antofagasta / Intendencia.
- Grupo de Instrucción de Carabineros, Antofagasta.
- Prefectura de Carabineros, Calama Recinto CNI, calle Latorre 2.192, Antofagasta.
- Recinto DINA-CNI ex Iglesia Divina Providencia, Antofagasta.
- Regimiento de Infantería N° 15 de Calama (Actual Regimiento Reforzado Nº 1 Topater)/Fiscalía Militar y de Carabineros.
- Regimiento de Infantería Nº 7 Esmeralda, Antofagasta.
- Regimiento de Telecomunicaciones Nº1, Antofagasta (Actual Batallón Logístico).
- Retén de Carabineros Dupont, Calama.
- Retén de Carabineros, Baquedano (Actual Tenencia de Carabineros, Baquedano).
- Retén de Carabineros, Mantos Blancos.
- Retén de Carabineros, Mejillones.
- Subcomisaría de Carabineros, Pedro de Valdivia.
- Subcomisaría de Carabineros, Taltal.
- Subcomisaría Norte, Antofagasta (Actual Comisaría de Carabineros Nº 2, Antofagasta).
- Tenencia de Carabineros, María Elena.

III Región de Atacama

El comandante del regimiento de Copiapó asumió el mando político-militar como Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la provincia de Atacama, actual Tercera Región, de acuerdo al Decreto Ley N° 4 de 11 de septiembre de 1973. Se estableció allí que los departamentos de Huasco y Freirina quedaban bajo el mando del comandante del regimiento de La Serena, como Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la entonces provincia de Coquimbo.

En los primeros meses después del golpe de Estado, la mayoría de las detenciones en las localidades rurales y apartadas fueron realizadas por carabineros. Los detenidos permanecían varios días en recintos de la institución y luego eran trasladados a las ciudades, a otras comisarías, al regimiento de Copiapó o a la cárcel. Las detenciones en las ciudades fueron realizadas principalmente por el Ejército.

Los detenidos de la región calificados como peligrosos eran enviados al regimiento de Copiapó y posteriormente recluidos en cárceles. De acuerdo a los testimonios recibidos, muchas veces eran sacados de éstas y trasladados a lugares no especificados de la zona o al regimiento de Copiapó, para ser interrogados y sometidos a tortura.

Según los antecedentes entregados por las personas que concurrieron a la Comisión, parte de los detenidos llevados al regimiento de Copiapó fueron trasladados al predio agrícola del regimiento, ubicado en el límite urbano. Este predio colindaba con la Cárcel Vieja de Copiapó, recinto que había funcionado como tal hasta 1968, encontrándose ambos separados por un muro.

La DINA y el SIM operaron principalmente en el mismo regimiento. Bajo el control de la DINA, algunos prisioneros fueron trasladados a otros recintos militares en La Serena y a sus cuarteles secretos en Santiago, especialmente a Cuatro Álamos.

En la década de 1980 las detenciones fueron realizadas por Carabineros, Investigaciones y la CNI. Los detenidos por Carabineros, después de un tiempo breve, podían ser liberados o trasladados a Investigaciones y de allí a la CNI. Los detenidos por la CNI podían ser liberados o remitidos a la cárcel.

Numerosas personas que entregaron sus testimonios señalaron que fueron maltratadas, amenazadas y golpeadas al ser detenidas. Muchas indicaron que en los traslados iban amarradas y con los ojos vendados. La mayoría relató haber sufrido torturas en los recintos donde permanecieron privadas de libertad.

La mayoría de quienes declararon ante la Comisión en la Tercera Región indicaron haber pasado por el regimiento de Copiapó entre los años 1973 y 1974. Los que fueron detenidos después de 1980 permanecieron en las comisarías y en la cárcel. Muchas personas fueron relegadas a diferentes lugares de la región durante la década de 1980.

[...]

Recintos III Región

- Capitanía de Puerto, Chañaral.
- Cárcel de Chañaral.
- Cárcel de Copiapó.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Copiapó.
- Cárcel de Vallenar.
- Comisaría de Carabineros, Chañaral.
- Comisaría de Carabineros, Copiapó.
- Comisaría de Carabineros, El Salvador.
- Comisaría de Carabineros, Potrerillos.
- Comisaría de Carabineros, Vallenar.
- Cuartel de Investigaciones, Chañaral.
- Cuartel de Investigaciones, Copiapó.
- Recinto CNI calle San Román 1290, Copiapó.
- Recinto DINA Predio Agrícola de Regimiento Copiapó/ Cárcel Vieja de Copiapó.
- Regimiento de Infantería Motorizada Nº 23, Copiapó.
- Retén de Carabineros, El Salado.
- Retén de Carabineros, Incahuasi.
- Tenencia de Carabineros, Freirina.
- Tenencia de Carabineros, Huasco.
- Tenencia de Carabineros, Pueblo Hundido (Actual Comisaría de Carabineros, Diego de Almagro).

IV Región de Coquimbo

El 11 de septiembre de1973 se designó como Jefe de Zona en Estado de Emergencia para la provincia de Coquimbo, actual Cuarta Región, al comandante del Regimiento de Infantería N° 1 Arica de La Serena. En ese momento fueron incluidos los departamentos de Huasco y Freirina bajo ese mando.

Carabineros y miembros del Ejército realizaron la gran mayoría de las detenciones en toda la región. En menor medida lo hizo también Investigaciones, que actuó especialmente en La Serena y Coquimbo.

Desde los distintos recintos de Carabineros en los pueblos, sectores rurales, particularmente en los de los asentamientos campesinos y lugares apartados dentro de la región los detenidos, hombres y mujeres, fueron enviados a las comisarías de las ciudades más cercanas a saber: La Serena, Ovalle, Illapel. Desde allí, junto a los presos políticos de la ciudad eran trasladados al Regimiento Arica y a la cárcel de la ciudad de La Serena. Resaltó el gran número de testimonios sobre detenciones efectuadas en las

zonas campesinas con baja población, como Salamanca, Combarbalá, Andacollo, Vicuña, Canela y Los Vilos. La cárcel pública de la Serena fue, después del Regimiento de Infantería Nº 21 Arica de La Serena, el recinto que más detenidos sumó en la región. Durante 1973 y 1974, las cárceles de Illapel y Ovalle, de acuerdo a los testimonios, concentraron también un gran número de prisioneros. Los cuarteles de Investigaciones de Ovalle, Coquimbo y La Serena fueron utilizados como recintos de detención.

El Regimiento Arica fue identificado como el principal centro de interrogatorios y torturas de la región, en él funcionaba la Fiscalía Militar. Desde este lugar, los detenidos eran trasladados a otros recintos del país en Santiago y Valparaíso.

A pesar de que en la región no se reconoce oficialmente la existencia de recintos de la DINA, sin embargo, en los testimonios recibidos por la Comisión los detenidos denunciaron haber sido interrogados por agentes de ese servicio. Los antecedentes permiten afirmar que este organismo operó al interior del Regimiento Arica. Este recinto fue utilizado como lugar de tránsito para los presos políticos arrestados por la DINA en otras regiones durante su traslado a recintos de la DINA en Santiago.

Durante el período comprendido entre los años 1973 y 1977 consta en los testimonios recibidos, que los prisioneros políticos fueron trasladados de las cárceles a recintos del Ejército para ser interrogados. Esto sucedió especialmente con los presos de la Cárcel Pública y las prisioneras de la Cárcel el Buen Pastor de la ciudad de La Serena, quienes eran trasladados al Regimiento Arica.

A partir de 1977, los arrestos en la región fueron realizados por Carabineros, Investigaciones y la CNI, operando en conjunto. Los testimonios recibidos denunciaron que los prisioneros eran trasladados a la cárcel o conducidos a los cuarteles de la CNI en Coquimbo y La Serena.

En la región existieron tres recintos de la CNI. Uno sólo de ellos, ubicado en la calle Colo Colo, fue reconocido públicamente en 1984, cuando su dirección se publicó, entre otras, en el *Diario Oficial*, como parte del Decreto del Ministerio del Interior N° 594 (14 de junio de 1984).

Muchos de los detenidos por la CNI fueron liberados en zonas alejadas o fueron dejados en algún cuartel de Investigaciones, o en la cárcel. Las denuncias de los presos políticos demostraron que un gran número de prisioneros fueron transferidos a cuarteles de la CNI en la ciudad de Santiago, especialmente al Cuartel de Borgoño.

Según consta en los testimonios, desde el mismo momento de su detención y durante toda la dictadura militar los prisioneros fueron maltratados, golpeados y torturados en todos los recintos.

[...]

Recintos IV Región

- Cárcel de Combarbalá.
- Cárcel de Illapel.
- Cárcel de La Serena.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, La Serena.
- Cárcel de Ovalle.
- Cárcel de Vicuña.
- Comisaría de Carabineros Nº 3, Ovalle.
- Comisaría de Carabineros, Andacollo.
- Comisaría de Carabineros, Combarbalá.
- Comisaría de Carabineros, Coquimbo.
- Comisaría de Carabineros, Illapel.
- Comisaría de Carabineros, La Serena.
- Comisaría de Carabineros, Salamanca.
- Comisaría de Carabineros, Vicuña.
- Cuartel Central de Investigaciones, La Serena.
- Cuartel de Investigaciones, Coquimbo.
- Prefectura de Carabineros, La Serena.
- Recinto CNI Avda. El Estadio, La Serena.
- Recinto CNI calle Colo Colo 2001/ Casa de Piedra, La Serena.
- Recinto CNI calle El Panul, Coquimbo.
- Regimiento de Infantería Nº 21 Arica, La Serena/ Fiscalía Militar.
- Retén de Carabineros, El Tofo.
- Retén de Carabineros, Tulahuen.
- Subcomisaría de Carabineros, Los Vilos.
- Tenencia de Carabineros, Canela.
- Tenencia de Carabineros, Guayacán.
- Tenencia de Carabineros, Monte Patria.
- Tenencia de Carabineros, Paihuano.
- Tenencia de Carabineros, Peñuelas.
- Tenencia de Carabineros, Punitaqui.
- Tenencia de Carabineros, Tongoy.

V Región de Valparaíso

En 1973 la provincia de Valparaíso, que incluía la actual provincia de Quillota quedó al mando del comandante de la Primera Zona Naval, como Jefe de Zona en Estado de Emergencia. En la provincia de Aconcagua, actuales provincias de San Felipe y Los Andes, se nombró Jefe de Zona en Estado de Emergencia al comandante del Regimiento Yungay, con asiento en la ciudad de San Felipe. El Ejército asumió el control de la actual provincia de San Antonio, que dependía de Santiago, y materialmente también de Quillota, donde funcionaba la gobernación militar.

El Ejército tuvo a su cargo en especial las localidades en que estaban radicados sus principales regimientos o unidades: en San Felipe, el Regimiento Yungay; en Los Andes, el Regimiento Guardia Vieja; en Quillota, la Escuela de Caballería y el Regimiento Aconcagua; en San Antonio, el Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, todos los cuales fueron utilizados como recintos de detención.

La Armada utilizó como recintos de detención de prisioneros en Valparaíso, entre otros, la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma y algunos buques. Entre estos últimos han sido mencionados el Buque Escuela Esmeralda y el Buque Lebu, de la Compañía Sudamericana

de Vapores. A esas naves llegaron personas detenidas en operativos de la Armada o de Carabineros; también se trasladaron y mantuvieron detenidos en la Base Aeronaval del Belloto y la Escuela de Submarinos. Durante el año 1973, los presos políticos eran trasladados continuamente desde y hacia una nave u otro recinto para ser interrogados. A su vez, desde el buque Maipo se trasladaron detenidos al Campo de Prisioneros de Pisagua y desde el Andalién al Campo de Prisioneros de Chacabuco.

La Fuerza Aérea mantuvo prisioneros políticos en el Base Aérea de Quintero, principalmente entre 1973 y 1975.

En esta región el mayor número de prisioneros se concentró entre 1973 y 1974. Los testimonios dan cuenta del maltrato físico y empleo masivo de tortura en casi todos los recintos por los que transitaron los detenidos durante los primeros años después del golpe de Estado.

Prácticamente todas las unidades policiales mantuvieron presos políticos en la Quinta Región, entre 1973 y 1975. De hecho, en pueblos, localidades pequeñas y zonas rurales, Carabineros practicó la gran mayoría de las detenciones, muchas de ellas en operativos conjuntos con personal de las Fuerzas Armadas. A través de todo el período, los cuarteles de Carabineros fueron recintos de detención transitoria. En los primeros años, los detenidos eran transferidos a las unidades militares que centralizaban las detenciones, en la respectiva ciudad o provincia; los detenidos en zonas apartadas eran trasladados al cuartel de Carabineros más importante de la zona o a la cárcel. Durante los primeros años, desde el momento de su detención, los prisioneros eran continuamente maltratados, golpeados y torturados.

En los años 80, la mayor cantidad de detenciones las realizó Carabineros. En este período, los detenidos en general eran maltratados y golpeados al momento de la detención y mientras permanecían recluidos.

Durante los años inmediatos al golpe militar, los recintos de la Policía de Investigaciones de la Quinta Región fueron utilizados principalmente como lugares de detención transitoria, desde donde se trasladaba a los detenidos a recintos militares y navales. Durante la década de 1980, especialmente en Valparaíso, Investigaciones fue uno de los organismos que detuvieron al mayor número de personas y actuó en conjunto con la CNI.

En la Quinta Región hubo una serie de otros recintos, no militares, que fueron ocupados como lugares de detención por un corto período. Así sucedió con el Club de Tenis de Llo-Lleo, el Liceo Barros Luco y el Liceo N° 2 de Niñas, ambos de Valparaíso. Igualmente fueron utilizados transito-

riamente algunos recintos universitarios de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Santa María y el local de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) con sede en Valparaíso, así como también la Estación Puerto de Trenes, los estadios de Playa Ancha-Valparaíso, el Hospital Carlos van Buren y Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA). La mayoría de estos recintos funcionaron sólo durante el mes de septiembre de 1973. Los detenidos, hombres y mujeres, permanecían horas o días y posteriormente eran trasladados a los diversos recintos militares o dejados en libertad.

A éstos se agrega el Estadio de Valparaíso, que mantuvo el número más alto de prisioneros y funcionó hasta noviembre de 1973.

Entre los años 1973 y 1976, en esta región se habilitaron los Campamentos de Prisioneros de Ritoque y Puchuncaví-Melinka, como centros de detención masiva; concentraron prisioneros hombres, provenientes no sólo de la región sino de diversas zonas del país, especialmente de la Región Metropolitana.

Los campamentos recibieron, en su mayoría, a los prisioneros que habían sido detenidos por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en cuyos recintos ya habían sido víctima de torturas y tratos extremadamente crueles, inhumanos y degradantes.

Cuando los detenidos eran puestos a disposición de los tribunales militares pasaban a la cárcel y otras veces eran relegados, a distintas localidades del país, por disposición administrativa. Otros prisioneros políticos, fueron expulsados del país.

El mayor número de detenciones se concentra en los años 1973 y 1974, pero declina en los años posteriores. Un aumento significativo se registra a partir del año 1983 hasta 1988.

De acuerdo a los antecedentes recibidos, la DINA operó en algunos recintos militares. En el Regimiento de Tejas Verdes empezó a funcionar antes de la publicación del Decreto Ley Nº 521 que la creó oficialmente[1] en 1974. Se estableció además la existencia de varios recintos de la DINA utilizados entre 1974 y 1977: un recinto en la cuesta Zapata, una casa en El Quisco, en avenida Costanera, y las cabañas ubicadas en la playa norte en las Rocas de Santo Domingo. De acuerdo a los relatos, en esos recintos los detenidos permanecían incomunicados y con los ojos vendados todo el tiempo. Los sacaban de sus celdas para los interrogatorios y torturas.

Todas las cárceles de la Quinta Región recibieron prisioneros políticos. En Valparaíso, Quillota, Los Andes y San Felipe hubo presos políticos desde el año 1973 hasta el año 1989. Al interior de las cárceles de mujeres, administradas por la Congregación de Monjas del Buen Pastor, las prisioneras no eran torturadas; sin embargo, lo fueron previo a su ingreso o luego, en los interrogatorios practicados en otros recintos.

En las cárceles de la región, especialmente en las de Valparaíso, Quillota y San Felipe, en la década de 1980 hubo allanamientos y cambios frecuentes de un recinto carcelario a otro. Testimonios señalan que con autorización de Gendarmería, ingresaban a la cárcel, agentes de los servicios de inteligencia para interrogar y torturar a los detenidos. Desde el año 1983 se observó que por orden de las fiscalías militares, los prisioneros inmediatamente recluidos eran objeto de incomunicaciones que duraban 10 a 15 días y algunas hasta 40 días.

De los varios recintos de la CNI ubicados en la Quinta Región, sólo uno fue reconocido oficialmente, a través del Decreto Supremo Nº 594, del Ministerio del Interior, publicado el 14 de junio de 1984. Se trata de la Casa de Agua Santa de Viña del Mar. Sin embargo, los declarantes denunciaron la existencia de otros recintos. Las condiciones en que eran privados de libertad y trasladados y la forma en que permanecían recluidos hacen que las descripciones de los recintos de la CNI —en Estación Barón de Valparaíso, en calle Arlegui, en calle 12 Norte de Viña del Mar y en Los Andes—, contengan poca información relevante acerca de las características físicas del lugar, no así de las condiciones y tratamiento de los prisioneros en ellas.

De acuerdo a las declaraciones que recibió la Comisión, se pudo establecer que en la década de los ochenta, regularmente fueron Carabineros y sus organismos de inteligencia, Investigaciones y la CNI quienes arrestaban a las personas. Desde el mismo momento de la detención, los prisioneros eran amenazados, maltratados y golpeados. Dependiendo de la importancia política de la persona y de los hechos en los que era involucrada, eran traspasados a la CNI. Posteriormente eran presentados a los tribunales o dejados en libertad, abandonándolos en la noche en lugares deshabitados y apartados, como se dejó constancia en los testimonios.

La Comisión recibió antecedentes de 151 recintos en esta región a cargo de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones que incluyen naves, campos de prisioneros y otros recintos, utilizados como centros de detención. [...]

Recintos V Región

- Academia de Guerra Naval.
- Base Aérea de Quintero.
- Base Aeronaval El Belloto.
- Buque Andalién.
- Buque Lebu.
- Buque Maipo.
- Buque Escuela Esmeralda.
- Campamento de Prisioneros Isla Riesco, Colliguay.
- Campamento de Prisioneros Melinka, Puchuncaví.
- Campamento de Prisioneros Ritoque.
- Cárcel de La Ligua.
- Cárcel de Limache.
- Cárcel de Los Andes.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Quillota.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, San Felipe.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Valparaíso.
- Cárcel de Quillota.
- Cárcel de San Antonio.
- Cárcel de San Felipe.
- Cárcel de Valparaíso.
- Comisaría de Carabineros Cerro Alegre, Valparaíso.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Barrancas.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Playa Ancha.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Quillota.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, San Antonio.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Viña de Mar.
- Comisaría de Carabineros Nº 2, Valparaíso Central.
- Comisaría de Carabineros Nº 3 Valparaíso Norte, Cerro Barón.
- Comisaría de Carabineros Nº 3, Los Andes.
- Comisaría de Carabineros Nº 3, Viña del Mar.
- Comisaría de Carabineros Nº 4, Viña del Mar.
- Comisaría de Carabineros Nº 5, Casablanca
- Comisaría de Carabineros Nº 6 E. Lillo, Valparaíso.
- Comisaría de Carabineros, Algarrobo.
- Comisaría de Carabineros, Cabildo.
- Comisaría de Carabineros, Calle Larga.
- Comisaría de Carabineros, Cartagena.
- Comisaría de Carabineros, Catemu.
- Comisaría de Carabineros, Chincolco.
- Comisaría de Carabineros, Con Con.
- Comisaría de Carabineros, El Quisco.
- Comisaría de Carabineros, La Calera.
- Comisaría de Carabineros, La Ligua.
- Comisaría de Carabineros, La Matriz.
- Comisaría de Carabineros, Limache.
- Comisaría de Carabineros, Llay Llay.
- Comisaría de Carabineros, Los Nogales.
- Comisaría de Carabineros, Olmué.
- Comisaría de Carabineros, Papudo.
- Comisaría de Carabineros, Petorca.
- Comisaría de Carabineros, Puchuncaví.
- Comisaría de Carabineros, Putaendo.
- Comisaría de Carabineros, Quilpué.
- Comisaría de Carabineros, Quinteros.
- Comisaría de Carabineros, Rinconada.
- Comisaría de Carabineros, San Esteban.
- Comisaría de Carabineros, San Felipe.
- Comisaría de Carabineros, Santa María.
- Comisaría de Carabineros, Villa Alemana.
- Comisaría de Carabineros, Viña del Mar.
- Cuartel Almirante Silva Palma (actual Academia de Guerra Naval).
- Cuartel de Investigaciones Barrancas, San Antonio.
- Cuartel de Investigaciones, La Calera.
- Cuartel de Investigaciones, Limache.
- Cuartel de Investigaciones, Los Andes.
- Cuartel de Investigaciones, Quillota.
- Cuartel de Investigaciones, Quilpué.
- Cuartel de Investigaciones, San Felipe.
- Cuartel de Investigaciones, Valparaíso.
- Cuartel de Investigaciones, Viña del Mar.
- Destructor Transporte Orella.
- Escuela Barros Luco.
- Escuela de Caballería, Quillota.
- Estadio Valparaíso, Playa Ancha.
- Ex Escuela Naval (actual Escuela de Submarinos).
- Ex Retén abandonado, Las Dichas.
- Fiscalía Militar, Quillota / Gobernación.

- Fiscalía Naval / ex Intendencia, Valparaíso.
- Fuerte Papudo, Cerro Recreo.
- Fuerte Vergara del Destacamento de Infantería de Marina, Las Salinas (actual Destacamento Infantería de Marina Nº 2 Miller).
- Gobernación Marítima, Valparaíso.
- Liceo Nº 2 de Niñas, Valparaíso.
- Prefectura de Carabineros, San Felipe.
- Prefectura de Carabineros, Viña del Mar.
- Recinto CNI calle Agua Santa 980, Viña del Mar.
- Recinto CNI calle Alvarez, Viña del Mar.
- Recinto CNI calle Habana 476, Viña del Mar.
- Recinto DINA Cabañas en Rocas de Santo Domingo (ex SUMAR).
- Recinto Portuario entrada Molo Barcos, Valparaíso.
- Regimiento de Caballería Nº 4 Coraceros, Viña del Mar.
- Regimiento de Infantería de Montaña Nº 3 Yungay, San Felipe/ Fiscalía Militar.
- Regimiento de Infantería Nº 2 Maipo / Regimiento Playa Ancha/ Fiscalía Militar.
- Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes / Campamento de Prisioneros Nº 2 de la Escuela Militar de Ingenieros.
- Regimiento de Ingenieros Nº 2 Aconcagua, Quillota.
- Regimiento Guardia Vieja, Los Andes.
- Regimiento o Escuela de Alta Montaña, Los Andes.
- Tenencia de Carabineros, Saladillo.

VI Región del Libertador Bdo. O'Higgins

La Sexta Región comprende lo que hasta 1973 eran las provincias de O´Higgins y Colchagua. La entonces provincia de O'Higgins (actual provincia de Cachapoal) tuvo como Jefe de Zona en Estado de Emergencia al comandante del Regimiento de Infantería Membrillar de Rancagua, y la provincia de Colchagua (actuales provincias de Colchagua y Cardenal Caro) estuvo bajo el mando del comandante del Regimiento de Infantería Colchagua de San Fernando.

En esta región, la mayoría de las detenciones ocurrieron entre los años 1973 y 1974. Junto a los detenidos de las ciudades más grandes, Rancagua y San Fernando, destaca un gran número de personas que lo fueron en las localidades de Peumo, Marchigüe, Las Cabras, Pichidegua, Requínoa, Rengo y Santa Cruz, especialmente de sectores rurales.

Según los datos entregados por los declarantes, entre los años 1973 y 1974, los regimientos y las cárceles públicas fueron los lugares donde permaneció la mayor cantidad de detenidos. Entre 1975 y 1976, la totalidad de los recintos carcelarios de la Sexta Región fueron utilizados como lugares de reclusión permanente o transitorias. Desde 1977 hasta 1990 hubo presos políticos en las cárceles de Rancagua y San Fernando.

Los testimonios coinciden en denunciar que en esta región, entre los años 1973 y 1975, Carabineros realizó la mayoría de los arrestos, especial-

mente en las zonas rurales, de modo que las comisarías en las ciudades y las tenencias y retenes en las pequeñas localidades y poblados fueron los primeros recintos en que se mantuvo detenidos a los prisioneros. Las declaraciones también indican que Carabineros maltrató y golpeó a los detenidos. Desde los lugares mencionados los presos políticos eran trasladados a otros centros de interrogatorio y reclusión. Asimismo, los cuarteles de Investigaciones fueron también centros de reclusión de prisioneros políticos, no sólo durante 1973, cuando se concentraron la mayoría de las detenciones, sino que también desde 1974 y hasta 1990, en que, si bien hubo menos personas detenidas, mantuvieron esa calidad de manera permanente y regular.

Varias veces, entre 1974 y 1977, desde los recintos mencionados, especialmente desde el Cuartel de Investigaciones de Rancagua, los detenidos fueron trasladados a recintos de la DINA de Santiago. Desde 1977 hasta 1990, se les trasladaba a recintos de la CNI de la Región Metropolitana.

Consta de los testimonios que en la región existieron a lo menos dos recintos de la DINA, sobre los cuales existen pocos antecedentes. Los denunciantes declararon que entre 1974 y 1977 la DINA también operó en los recintos militares, especialmente en los Regimientos Membrillar y Colchagua.

Es importante notar que a partir del año 1974 se constató una considerable reducción de las detenciones, especialmente en los sectores rurales. Luego, en la década del 80, particularmente en los años 1984, 1986 y 1988, se observó un aumento de los arrestos en los sectores urbanos.

En los años ochenta las detenciones fueron realizadas por Carabineros, la Policía de Investigaciones y la CNI, que operaban a veces en conjunto, especialmente con Investigaciones. Cuando detenían Carabineros o Investigaciones, normalmente los prisioneros eran trasladados a una cárcel; ocasionalmente algunos fueron entregados a la CNI de Rancagua.

Cuando actuaba la CNI, los detenidos eran trasladados a otros recintos de la misma institución de Santiago o Talca, o iban a la cárcel para ser procesados; en caso contrario, a los prisioneros los dejaban en libertad en una zona rural despoblada. Los detenidos por la DINA o la CNI eran conducidos con la vista vendada y permanecían así durante toda la detención. Esto dificultó la posibilidad de que los detenidos pudieran reconocer el lugar donde habían estado.

Proporcionalmente, los recintos que concentraron el mayor número de prisioneros políticos de la región fueron los regimientos de Rancagua y de San Fernando, así como las cárceles de estas mismas ciudades.

Los testimonios concuerdan en que los detenidos de los pueblos pequeños y de las zonas rurales, después de permanecer privados de libertad en las tenencias y retenes locales, fueron trasladados a una comisaría, a un cuartel militar o directamente a la cárcel de la ciudad cercana más importante. Quedó constancia en las denuncias ante la Comisión de que estas cárceles fueron las que más detenidos mantuvieron durante toda la dictadura militar.

La cárcel de Rancagua fue el recinto que registró la mayor cantidad de detenidos de la Sexta Región, porque en los primeros meses del régimen militar había prisioneros políticos traídos de distintos lugares del país, especialmente de Santiago. En estos recintos fueron sometidos a un régimen carcelario estricto y discriminatorio, con severos castigos. Desde las cárceles, los detenidos eran continuamente trasladados a las fiscalías militares para ser interrogados.

De acuerdo a los antecedentes presentados ante la Comisión, fue posible establecer que la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) y el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) fueron los otros organismos que operaron en la Sexta Región; funcionaron indistintamente al interior de las comisarías de San Fernando y de Rancagua y algunas veces operaron en conjunto con la CNI.

A partir de los testimonios recibidos se identificaron y reunieron antecedentes de 70 recintos de reclusión y tortura de la Sexta Región. A continuación se describen algunos de ellos.

Recintos VI Región

- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Rancagua.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, San Fernando.
- Cárcel de Rancagua.
- Cárcel de Rengo.
- Cárcel de San Fernando.
- Cárcel de San Vicente de Tagua Tagua.
- Cárcel de Santa Cruz.
- Comisaría de Carabineros N° 4, Rengo.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, San Fernando.
- Comisaría de Carabineros, Chepica.
- Comisaría de Carabineros, Chimbarongo.
- Comisaría de Carabineros, Graneros.
- Comisaría de Carabineros, Las Cabras.
- Comisaría de Carabineros, Machalí.
- Comisaría de Carabineros, Nancagua.
- Comisaría de Carabineros, Palmilla.
- Comisaría de Carabineros, Paredones.
- Comisaría de Carabineros, Peumo.
- Comisaría de Carabineros, Pichidegua.
- Comisaría de Carabineros, Rancagua.
- Comisaría de Carabineros, Requinoa.
- Comisaría de Carabineros, San Francisco de Mostazal.
- Comisaría de Carabineros, San Vicente de Tagua Tagua.
- Comisaría de Carabineros, Santa Cruz.
- Cuartel de Investigaciones, Rancagua.

- Cuartel de Investigaciones, San Fernando.
- Cuartel de Investigaciones, Santa Cruz.
- Fiscalía Militar, Rancagua / Ex Intendencia Provincial.
- Recinto CNI calle Diego de Almagro.
- Regimiento de Infantería de Montaña Membrillar, Rancagua (Actual Regimiento Reforzado Nº 22, Lautaro)
- Regimiento de Infantería Nº 19 Colchagua, San Fernando / Fiscalía Militar.
- Retén de Carabineros Rapel, Navidad.
- Retén de Carabineros, Caletones.
- Retén de Carabineros, Codegua.
- Retén de Carabineros, Coinco.
- Retén de Carabineros, Coya.
- Retén de Carabineros, La Estrella.
- Retén de Carabineros, Litueche.
- Retén de Carabineros, Lo Miranda.
- Retén de Carabineros, Lolol.
- Retén de Carabineros, Malloa.
- Retén de Carabineros, Navidad.
- Retén de Carabineros, Olivar.
- Retén de Carabineros, San Pedro.
- Retén de Carabineros, Zúñiga.
- Tenencia de Carabineros, Marchigue.
- Tenencia de Carabineros, Peralillo.
- Tenencia de Carabineros, Pichilemu.

VII Región del Maule

En 1973, la actual Séptima Región estaba formada por las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule. Fueron designados como jefes de Zona en Estado de Emergencia para cada una de las provincias, los comandantes de los regimientos respectivos.

Las detenciones fueron realizadas inicialmente por personal del Ejército en conjunto con la Policía de Investigaciones. A su vez, el Ejército y Carabineros realizaron operativos conjuntos en sectores rurales. Las personas detenidas eran conducidas a los retenes o comisarías, desde donde eran trasladados a los recintos habilitados por el Ejército. Los declarantes mencionan la presencia de civiles de la zona en los procedimientos de arresto de numerosas personas.

De acuerdo a las declaraciones de los ex presos políticos que concurrieron a la Comisión, los detenidos eran conducidos a recintos militares, retenes, comisarías, cuarteles de investigaciones y cárceles, luego eran trasladados a otros lugares para someterlos a interrogatorios. La mayoría de los prisioneros transitaban por varios recintos antes de ser condenados a relegación, sometidos a proceso o puestos en libertad.

Los regimientos de la región fueron habilitados como centros de detención masiva. La Escuela de Artillería de Linares fue el principal centro de interrogación y torturas de la región, por ahí pasó el mayor número

de prisioneros políticos durante el tiempo que fue utilizada para estos efectos. Funcionaba allí también la Fiscalía Militar de Linares.

Las Gobernaciones se constituyeron en lugar de detención de los prisioneros, desde donde se les derivaba a otros recintos después de haber sido sometidos a interrogatorios y torturas. Así ocurrió en Constitución, donde una cantidad importante de detenidos estuvo en ese lugar en septiembre de 1973. Los cuarteles de Investigaciones también fueron utilizados como recintos de detención de prisioneros políticos. Asimismo, prácticamente todos los recintos carcelarios de ciudades y pueblos fueron utilizados como lugares de reclusión permanente o de tránsito.

En la Séptima Región hubo recintos de la DINA y de la CNI que funcionaron como centros de interrogatorios y torturas. Es importante notar que no todos los recintos utilizados por estos organismos fueron posibles de identificar debido, principalmente, a las condiciones en que los prisioneros eran conducidos y permanecían en estos lugares.

De acuerdo a los testimonios recibidos en la Comisión, en el año 1975 la DINA interrogó a prisioneros en el Regimiento de Infantería N° 16 de Talca, y entre los años 1980 y 1981 la CNI interrogó en la Escuela de Artillería de Linares. Se estableció que la DINA utilizó un recinto conocido como Casa de Parral, a cargo de la Brigada de Inteligencia Regional (BIR), ubicada en la calle Ignacio Carrera Pinto N° 262, en la ciudad de Parral. También durante los años 1975 y 1976 se mencionaron, por ejemplo, los siguientes locales: Recinto Rodeo de Talca, Fundo Puente Maule, La Hacienda y Casa Patronal en San Javier. Los prisioneros a cargo de la DINA fueron, en su mayoría, trasladados a Santiago, generalmente a Villa Grimaldi, Cuatro Álamos y Tres Álamos.

Un solo recinto de la CNI fue reconocido oficialmente en el año 1984 mediante el Decreto Supremo Nº 594, el que fue también utilizado como centro de torturas por la DINA los años 1975 y 1976. Sin embargo, en los testimonios de los ex prisioneros de la Séptima Región se hizo referencia a varios otros. Entre ellos se mencionaron una casa en Cauquenes, otra casa en Linares, un recinto que denominaron *El Triángulo*, en la ciudad de Talca, y el molino San Carlos en la ciudad de Curicó.

Hubo testimonios que coincidieron en señalar que algunos detenidos por la DINA o la CNI fueron trasladados a la Colonia Dignidad. Ex detenidos la mencionan como centro de detención y tortura.

[...]

Recintos VII Región

- Cárcel de Cauquenes.
- Cárcel de Chanco.
- Cárcel de Constitución.
- Cárcel de Curicó.
- Cárcel de Linares.
- Cárcel de Molina.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Constitución.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Curicó.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Linares.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Talca.
- Cárcel de Parral.
- Cárcel de San Javier.
- Cárcel de Talca.
- Colonia Dignidad.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Constitución.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Linares.
- Comisaría de Carabineros Nº 3, Talca.
- Comisaría de Carabineros Nº 4, Talca.
- Comisaría de Carabineros, Cauquenes.
- Comisaría de Carabineros, Chanco.
- Comisaría de Carabineros, Curepto.
- Comisaría de Carabineros, Curicó.
- Comisaría de Carabineros, Licantén.
- Comisaría de Carabineros, Linares.
- Comisaría de Carabineros, Molina.
- Comisaría de Carabineros, Panimávida.
- Comisaría de Carabineros, Parral.
- Comisaría de Carabineros, Sagrada Familia.
- Comisaría de Carabineros, San Clemente.
- Comisaría de Carabineros, San Javier.
- Cuartel de Investigaciones, Cauquenes.
- Cuartel de Investigaciones, Constitución.
- Cuartel de Investigaciones, Curicó.
- Cuartel de Investigaciones, Linares.
- Cuartel de Investigaciones, Molina.
- Cuartel de Investigaciones, Parral.
- Cuartel de Investigaciones, San Javier.
- Cuartel de Investigaciones, Talca.
- Escuela de Artillería, Linares.
- Gobernación de Constitución.
- Recinto CNI Cerro Putagán, Linares.
- Recinto CNI Cerro Quilipin, Linares.
- Recinto CNI en calle Dos Sur 1.403, Talca.
- Recinto CNI Piscicultura, Curicó.
- Recinto DINA Rodeo, Talca.
- Recinto DINA calle Ignacio Carrera Pinto 262, Parral.
- Recinto DINA-CNI calle 4 Oriente 470, Talca.
- Regimiento de Infantería Nº 13 Andalién, Cauquenes.
- Regimiento de Infantería Nº 16, Talca (Ex Regimiento Chorrillos).
- Regimiento de Telecomunicaciones Nº 3, Curicó/ Fiscalía Militar.
- Retén de Carabineros Abate Molina, Talca.
- Retén de Carabineros Barrio Norte, Talca.
- Retén de Carabineros Cancha Rayada, Talca.
- Retén de Carabineros Plaza Arturo Prat, Talca.
- Retén de Carabineros, Camarico.
- Retén de Carabineros, Catillo.
- Retén de Carabineros, Colbún.
- Retén de Carabineros, Duao.
- Retén de Carabineros, Empedrado.
- Retén de Carabineros, Hualañé.
- Retén de Carabineros, Longaví.
- Retén de Carabineros, Maule.
- Retén de Carabineros, Melozal.
- Retén de Carabineros, Paso Nevado.
- Retén de Carabineros, Putú.
- Retén de Carabineros, Romeral.
- Retén de Carabineros, Yerbas Buenas.
- Tenencia de Carabineros, Cumpeo.
- Tenencia de Carabineros, Pelarco.
- Tenencia de Carabineros, Retiro.
- Tenencia de Carabineros, Villa Alegre.

VIII Región del Bío Bío

El 11 de septiembre de 1973 fueron designados los Jefes de Zona de Estado de Emergencia, mediante el Decreto Ley Nº 4. Fue designado Jefe de Zona en Estado de Emergencia de la provincia de Ñuble el comandante del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 9 de Chillán. Las provincias de Concepción y Arauco estuvieron a cargo del comandante de la III División del Ejército, salvo los departamentos de Talcahuano y Tomé, que estuvieron bajo la responsabilidad del comandante de la Zona Naval. En la provincia del Bío Bío asumió el comandante del Regimiento de Infantería Reforzada Nº 3 de Los Ángeles.

Especialmente en los años 1973 y 1974, Carabineros fue el organismo que operó en la detención de campesinos, muchos de ellos dirigentes de asentamientos y activos participantes de la reforma agraria. Según las denuncias, la mayoría fueron detenidos en sus casas durante operativos policiales y militares, realizados con gran violencia, frente a sus familias, inclusive frente a sus hijos pequeños. Los declarantes denunciaron haber recibido brutales golpizas al momento de su detención, antes de ser trasladados a las comisarías locales. Durante el trayecto hacia las comisarías la violencia proseguía. Los testimonios recibidos dan cuenta de que en los recintos de Carabineros el maltrato físico y la tortura era el tratamiento habitual para los prisioneros.

Los testimonios recibidos describen la participación de civiles organizados en 1973, especialmente en las zonas rurales de la región, los que actuaron en coordinación con las fuerzas militares y de Carabineros. Los declarantes mencionaron que había civiles que intervenían en las detenciones, interrogatorios y torturas en los lugares.

Los testigos establecieron que, en general, los recintos rurales de Carabineros fueron utilizados como primer lugar de detención y como recintos de tránsito hacia otros centros de reclusión. Desde los retenes y tenencias eran trasladados a comisarías ubicadas en centros urbanos; entre ellas, la 1ª Comisaría de Los Ángeles y muy especialmente la 4ª Comisaría de Concepción, la que concentró la mayor cantidad de detenidos en la región. Ésta última recibió personas que habían sido detenidas por distintas instituciones, de todas las provincias.

Desde estas comisarías, durante 1973 a 1977, los detenidos eran conducidos a centros de reclusión masivos, como el Estadio Regional de Concepción, la isla Quiriquina, la Cárcel de Concepción. Muchos de ellos fueron llevados a la Base Naval de Talcahuano, según constó en los testimonios.

Los regimientos fueron habilitados como recintos de reclusión masiva, de interrogatorios y torturas durante el año 1973. En Chillán fue el Regimiento de Infantería de Montaña Nº 9 *Chillán*; en Los Ángeles, el Regimiento de Infantería Reforzada Nº 3 (actual Regimiento de Infantería Nº 17 de Los Ángeles); en Concepción fueron varios los regimientos utilizados, pero fue la Base Naval de Talcahuano, a cargo de la Armada, el recinto que concentró la mayor cantidad de detenidos.

El regimiento de Los Ángeles ha sido señalado por los testimonios como uno de los lugares de la región en donde se aplicaron las más brutales e intensas torturas a prisioneros. También numerosos testigos coincidieron en denunciar torturas en los recintos militares o de la Armada en Chillán, Concepción y Talcahuano.

Según constató la Comisión, era frecuente el traslado de prisioneros entre recintos de la región. En los dos primeros años después del golpe militar, como consta en los testimonios, lo habitual era que los prisioneros pasaran por varios centros de detención, interrogatorios y torturas antes de ser procesados, liberados o condenados a prisión.

Las denuncias de los prisioneros políticos permitieron establecer que en Chillán existió un flujo permanente entre cuartel de Investigaciones, la cárcel, el regimiento, el fundo Quilmo a cargo del Ejército. En Los Ángeles el tránsito fue establecido entre el Liceo de Hombres, el Gimnasio IANSA y el regimiento. Muchos de los prisioneros en Chillán y Los Ángeles fueron trasladados a los centros de Concepción. Y desde el Estadio Regional un grupo fue conducido hasta el Campo de Prisioneros de Chacabuco en la Segunda Región, y desde ahí, posteriormente, al Campamento de Prisioneros de Puchuncaví, en la Quinta Región.

En Concepción el itinerario más frecuente fue desde los retenes a la 4ª Comisaría, a los regimientos, a la Base Naval de Talcahuano, al fuerte Borgoño, a la isla Quiriquina, el Estadio Regional y la Cárcel Pública.

Igualmente los detenidos denunciaron que fue frecuente, en los primeros años de la dictadura, que en reiteradas oportunidades los militares sacaran prisioneros de las cárceles, como ocurrió en las de Chillán, Los Ángeles y otras de ciudades más pequeñas, para llevarlos a interrogatorios. En Concepción esto no fue tan habitual.

Los testimonios recibidos establecieron que los campos de prisioneros en la Octava Región se constituyeron en las ciudades de Chillán, Los Ángeles y Concepción inmediatamente después de ocurrido el golpe de Estado. Funcionaron en 1973 y 1974, con cierta continuidad los años siguientes pero con menos cantidad de detenidos. En todos ellos la tortura fue aplicada de manera sistemática.

Los testimonios recibidos por esta comisión establecieron que en los años 1973 y 1974 los recintos de la Policía de Investigaciones de varias

ciudades de la región fueron utilizados como recintos de interrogatorios y torturas y como lugar de tránsito de prisioneros que posteriormente eran conducidos a otros centros de reclusión. En todos estos lugares se registraron torturas a los detenidos.

En los testimonios se denunció la existencia de recintos secretos. Asimismo, un número importante de víctimas testificó haber sido detenidas por la DINA y conducidas a la Base Naval de Talcahuano durante los años 1975 y 1976, donde fueron sometidas a torturas.

En el caso de CNI, son varios los recintos mencionados, con mayor o menor precisión, en distintas ciudades de la región. Sólo uno de estos recintos, ubicado en Concepción, fue reconocido oficialmente por las autoridades militares de la época como lugar de detención en el Decreto Supremo Nº 594, en junio de 1984. En este caso existieron también personas que aseguran que fueron conducidas a la Base Naval de Talcahuano por personal de la CNI luego de detenerlas. En este recinto permanecieron un breve período, sometidos a interrogatorios y torturas. Luego, fueron trasladados a otros recintos.

En general, al igual que en otras regiones, los recintos utilizados por la CNI para torturar e interrogar a los detenidos no fueron reconocidos oficialmente. Para los detenidos muchas veces no fueron fáciles de identificar claramente, pues durante todo el tiempo permanecieron con los ojos vendados y sometidos a situaciones extremas. Es por esta razón que, aunque se mencionan varios recintos de la CNI en la región, algunos de ellos no tienen suficientes elementos de identificación. Por ejemplo: recinto en calle Exeter con San Martín, en Concepción, adonde varios prisioneros del año 80 señalaron que fueron llevados y torturados en el subterráneo del inmueble. Se menciona una casa particular en la localidad de San Nicolás, cercana a Chillán, que fue utilizada en 1984, según los testimonios; o *Casa de la Risa*, cerca del Sanatorio Alemán en Concepción, en la que algunos declarantes habrían estado en 1981.

De acuerdo a los antecedentes entregados a la Comisión, se observa un importante aumento del tránsito de los prisioneros en los años 80, desde comisarías y cuarteles de Investigaciones, especialmente en Chillán y Concepción, hacia recintos de la CNI y desde estos últimos a comisarías, fiscalías y cárceles. Varios testimonios de detenidos por la CNI en Chillán dan cuenta de que fueron más tarde trasladados a otros lugares en Concepción y así también se denunció que algunos detenidos fueron traslados a más de un recinto de la CNI. Aunque en todos los casos de personas en poder de la CNI, su detención no era reconocida. El reconocimiento de la detención se hacía cuando eran llevados a lugares públicos de detención.

Recintos VIII Región

- Base Naval, Talcahuano / Base El Morro, Talcahuano/ Fiscalía Naval.
- Campamento Prisioneros Estadio Regional, Concepción.
- Campamento Prisioneros Isla Quiriquina, Escuela de Grumetes, Fuerte Rondizzoni.
- Cárcel de Bulnes.
- Cárcel de Chillán.
- Cárcel de Concepción / Cárcel El Manzano.
- Cárcel de Coronel.
- Cárcel de Lebu.
- Cárcel de Los Ángeles.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Chillán.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Concepción.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Los Ángeles.
- Cárcel de Mulchén.
- Cárcel de Quirihue.
- Cárcel de San Carlos.
- Cárcel de Talcahuano.
- Cárcel de Tomé.
- Cárcel de Yumbel.
- Cárcel de Yungay.
- Comisaría de Carabineros Centenario, Los Ángeles.
- Comisaría de Carabineros La Higuera, Talcahuano.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Los Ángeles.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Tome.
- Comisaría de Carabineros Nº 2, Chillán.
- Comisaría de Carabineros Nº 2, Mulchén.
- Comisaría de Carabineros Nº 3, Bulnes.
- Comisaría de Carabineros Nº 3, Nacimiento.
- Comisaría de Carabineros Nº 4 Armando Alarcón del Canto, Talcahuano.
- Comisaría de Carabineros Nº 4, Concepción (actual Comisaría de Carabineros Nº 1).
- Comisaría de Carabineros Nº 4, Curanilahue.
- Comisaría de Carabineros Nº 5, Concepción (actual Comisaría de Carabineros Nº 2).
- Comisaría de Carabineros Nº 5, Yumbel.
- Comisaría de Carabineros Nº 6, Chillán Viejo.
- Comisaría de Carabineros O'Higgins, Talcahuano.
- Comisaría de Carabineros, Arauco.
- Comisaría de Carabineros, Cañete.
- Comisaría de Carabineros, Chiguayante.
- Comisaría de Carabineros, Coelemu.
- Comisaría de Carabineros, Contulmo.
- Comisaría de Carabineros, Coronel.
- Comisaría de Carabineros, El Carmen.
- Comisaría de Carabineros, Florida.
- Comisaría de Carabineros, Hualpencillo.
- Comisaría de Carabineros, Lebu.
- Comisaría de Carabineros, Los Álamos.
- Comisaría de Carabineros, Los Ángeles.
- Comisaría de Carabineros, Lota.
- Comisaría de Carabineros, Lota Bajo.
- Comisaría de Carabineros, Penco.
- Comisaría de Carabineros, Quirihue.
- Comisaría de Carabineros, San Carlos.
- Comisaría de Carabineros, San Rosendo.
- Comisaría de Carabineros, Yungay.
- Comisaría de Carabineros, Concepción.
- Cuartel de Investigaciones, Chillán.
- Cuartel de Investigaciones, Concepción.
- Cuartel de Investigaciones, Lebu.
- Cuartel de Investigaciones, Los Ángeles.
- Cuartel de Investigaciones, Lota.
- Cuartel de Investigaciones, San Carlos.
- Cuartel de Investigaciones, Talcahuano.
- Cuartel de Investigaciones, Tomé.
- Destacamento de Infantería de Marina Fuerte Borgoño.
- Gimnasio IANSA, Los Ángeles.
- III División del Ejército, Concepción.
- Liceo de Hombres, Los Ángeles.
- Prefectura de Carabineros, Concepción.
- Recinto CNI calle O'Higgins 239, Concepción.
- Recinto CNI calle Pedro de Valdivia. 710 / Cuartel Bahamondes / Casa de la Música / Casa de la Risa.
- Recinto CNI Chillán.

- Recinto CNI Concepción (dirección desconocida).
- Recinto CNI Inmueble frente a Playa Blanca, Coronel.
- Recinto Militar Fundo Quilmo, Chillán.
- Regimiento de Artillería Nº 3 Silva Renard, Concepción.
- Regimiento de Infantería de Montaña Nº 9, Chillan/ Fiscalía Militar.
- Regimiento de Infantería Reforzada N° 3, Los Ángeles / Actual Regimiento de Infantería Nº 17.
- Regimiento Guías / Batallón Logístico, Concepción.
- Regimiento Reforzado Nº 7 Chacabuco, Concepción.
- Retén de Carabineros Antiguala, Los Ángeles.
- Retén de Carabineros Las Canteras, Los Ángeles.
- Retén de Carabineros Lo Rojas, Coronel.
- Retén de Carabineros Población Zañartu, Chillán.
- Retén de Carabineros Santa Bárbara.
- Retén de Carabineros Schleyer.
- Retén de Carabineros Villa Mora, Coronel (actual Tenencia de Carabineros Villa Mora, Coronel).
- Retén de Carabineros, Antuco.
- Retén de Carabineros, Cabrero.
- Retén de Carabineros, Cobquecura.
- Retén de Carabineros, España.
- Retén de Carabineros, Ninhue.
- Retén de Carabineros, Ñipas.
- Retén de Carabineros, Pemuco.
- Retén de Carabineros, Pinto.
- Reten de Carabineros, Portezuelo.
- Retén de Carabineros, Quilaco.
- Retén de Carabineros, Quillón.
- Retén de Carabineros, Salto del Laja.
- Retén de Carabineros, San Ignacio.
- Retén de Carabineros, Tres Esquinas.
- Subcomisaría de Carabineros Arenal, Talcahuano.
- Subcomisaría de Carabineros Nº 4 Armando Alarcón del Canto, Talcahuano.
- Subcomisaría de Carabineros, Huambalí.
- Subcomisaría de Carabineros, Schwager.
- Tenencia de Carabineros, Coihueco.
- Tenencia de Carabineros, El Abanico.
- Tenencia de Carabineros, Hualqui.
- Tenencia de Carabineros, Huepil.
- Tenencia de Carabineros, Laja.
- Tenencia de Carabineros, Lirquén.
- Tenencia de Carabineros, Monte Águila.
- Tenencia de Carabineros, Negrete.
- Tenencia de Carabineros, San Pedro de la Paz.

IX Región de la Araucanía

De acuerdo al Decreto Ley N° 4 de 11 de septiembre de 1973, la actual región de la Araucanía fue dividida en cuatro zonas en estado de emergencia. Es así como fueron nombrados oficiales militares como jefes de zona de estado de emergencia para la provincia de Malleco, exceptuando el departamento de Angol; para el departamento de Angol, para la provincia de Cautín, exceptuando el departamento de Temuco, y para el departamento de Temuco.

Consta, a partir de los datos recabados por la Comisión, que las detenciones comenzaron en las primeras horas del día 11 de septiembre de 1973. La mayor cantidad de testimonios de la región corresponden a septiembre, octubre y noviembre de 1973. Un gran número de personas fue detenido en operativos conjuntos de Carabineros y Ejército o Fuerza Aérea, especialmente en las zonas rurales.

Los funcionarios públicos de Temuco con cargos de confianza del gobierno del Presidente Salvador Allende fueron requeridos por bando a presentarse ante las autoridades militares. La información fue difundida reiteradamente a través de los medios de comunicación. Muchos de ellos se presentaron y otros fueron arrestados desde sus domicilios o lugares de trabajo.

Los regimientos fueron habilitados como recintos de detención masiva, de interrogatorios y de torturas durante el año 1973. En Temuco, fue el Regimiento de Infantería N°8, Tucapel; en Traiguen, el Regimiento de Artillería N° 4 Miraflores; en Angol el Regimiento de Caballería N° 3 Húsares; en Lautaro el Regimiento La Concepción (actual Regimiento Andino Lautaro), entre otros.

En la provincia de Cautín las personas recluidas en la cárcel de Temuco eran conducidas hasta el Regimiento Tucapel para ser interrogadas. A los prisioneros los sacaban del recinto carcelario los efectivos del Ejército, sin mediar orden alguna. Posteriormente este procedimiento se regularizó y debían exhibir una orden de la Fiscalía Militar cada vez que era retirado un detenido. El traslado de prisioneros desde las cárceles a los regimientos para interrogatorios y torturas también fue práctica común en otras ciudades, como Angol, Traiguén, Lautaro y Victoria.

En las zonas rurales los arrestos los realizaba generalmente Carabineros. Las detenciones ocurrían en las casas, que eran allanadas, a veces causando serios destrozos en los bienes de los detenidos. Numerosos declarantes señalaron que en esos operativos participaron civiles de la zona. De acuerdo a los testimonios recibidos, en algunas zonas rurales, las personas detenidas fueron trasladadas, en helicópteros de la Fuerza Aérea, a una comisaría o directamente a la Base Aérea Maquehue, en Temuco, al Regimiento Tucapel o a otros centros de detención de la región.

Los testimonios recibidos por la Comisión permiten observar que la tortura se aplicó desde el primer momento y en muchos de los recintos de detención de la región. En algunos se denunció que incluso se permitió actuar a civiles.

Los prisioneros estuvieron detenidos generalmente en más de un recinto. Hay testimonios de personas que fueron trasladadas a más de diez recintos de reclusión.

Los retenes y tenencias de Carabineros de los pueblos y sectores rurales de la región fueron utilizados para mantener a personas detenidas y someterlas a interrogatorios y torturas. En estos recintos se recluía por no más de diez días a las personas. Servían también como lugar de tránsito, ya

que desde ellos los detenidos eran conducidos a las comisarías, regimientos o cárceles de las principales ciudades de la región.

Asimismo, consta que en las ciudades de Angol, Collipulli, Lautaro, Victoria, Villarrica y Temuco se mantuvo personas detenidas en los recintos de la Policía de Investigaciones, principalmente en los años 1973 y 1974 y de manera esporádica durante todo el período investigado.

Por otra parte, no se consignaron recintos exclusivos de la DINA en esta región. Sin embargo, sí existen numerosos testimonios que dan cuenta de la actuación de personal de la DINA en el interior del Regimiento Húsares de Angol y en el Cuartel de Investigaciones de Temuco. En el primer caso los declarantes afirmaron que se trataba de personal de ese organismo que venía desde Santiago para participar en los interrogatorios y torturas. Un número considerable de testigos denunciaron haber sido trasladados a los recintos secretos que la DINA disponía en Santiago, como Cuatro Álamos y Villa Grimaldi. Después eran trasladarlos a recintos habilitados para mantener detenidos en virtud de los estados de excepción a lugares como Tres Álamos, Puchuncaví o Ritoque.

De igual modo, consta que la CNI también actuó en algunos recintos en la década del ochenta. Existen antecedentes fidedignos de que la CNI operó en el Cuartel de Investigaciones, interrogando y torturando a los detenidos. Sin embargo, también contó para estos fines con un cuartel ubicado en la ciudad de Temuco en calle Miraflores 724.

[...]

Recintos IX Región

- Base Aérea Maquehue.
- Batallón Logístico de Victoria / Batallón de Transporte N° 4.
- Cárcel de Angol.
- Cárcel de Collipulli.
- Cárcel de Curacautín.
- Cárcel de Lautaro.
- Cárcel de Loncoche.
- Cárcel de Mujeres Buen Pastor, Temuco.
- Cárcel de Nueva Imperial.
- Cárcel de Temuco.
- Cárcel de Traiguén.
- Cárcel de Victoria.
- Comisaría de Carabineros N° 1, Angol.
- Comisaría de Carabineros N° 2, Temuco.
- Comisaría de Carabineros N° 5, Pitrufquén.
- Comisaría de Carabineros, Collipulli.
- Comisaría de Carabineros, Curacautín.
- Comisaría de Carabineros, Curarrehue.
- Comisaría de Carabineros, Freire.
- Comisaría de Carabineros, Galvarino.
- Comisaría de Carabineros, Lautaro.
- Comisaría de Carabineros, Loncoche.
- Comisaría de Carabineros, Lumaco.
- Comisaría de Carabineros, Nueva Imperial.
- Comisaría de Carabineros, Perquenco.
- Comisaría de Carabineros, Pucón.
- Comisaría de Carabineros, Traiguén.
- Comisaría de Carabineros, Victoria.
- Comisaría de Carabineros, Villarrica.
- Cuartel de Investigaciones, Angol.
- Cuartel de Investigaciones, Collipulli.

- Cuartel de Investigaciones, Lautaro.
- Cuartel de Investigaciones, Temuco.
- Cuartel de Investigaciones, Victoria.
- Cuartel de Investigaciones, Villarrica.
- Prefectura de Carabineros, Cautín.
- Recinto CNI calle Miraflores al llegar a Caupolicán, Temuco.
- Regimiento de Artillería Nº 4 Miraflores, Traiguén/ Fiscalía Militar.
- Regimiento de Caballería N° 3 Húsares, Angol/ Fiscalía Militar.
- Regimiento de Infantería N° 8 Tucapel, Temuco / Fiscalía Militar y de Carabineros.
- Regimiento La Concepción / Regimiento Andino, Lautaro.
- Retén de Carabineros Santa Rosa, Temuco.
- Retén de Carabineros, Catripulli.
- Retén de Carabineros, Chol Chol.
- Retén de Carabineros, Coilaco.
- Retén de Carabineros, Las Quilas.
- Retén de Carabineros, Llaima.
- Retén de Carabineros, Los Sauces.
- Retén de Carabineros, Mininco.
- Retén de Carabineros, Pillanlelbún.
- Retén de Carabineros, Puerto Domínguez.
- Retén de Carabineros, Purén.
- Retén de Carabineros, Quepe.
- Retén de Carabineros, Sierra Nevada.
- Retén de Carabineros, Toltén.
- Retén de Carabineros, Travolhue.
- Tenencia de Carabineros, Capitán Pastene.
- Tenencia de Carabineros, Carahue.
- Tenencia de Carabineros, Cunco.
- Tenencia de Carabineros, Ercilla.
- Tenencia de Carabineros, Gorbea.
- Tenencia de Carabineros, Lonquimay.
- Tenencia de Carabineros, Los Laureles.
- Tenencia de Carabineros, Padre las Casas.
- Tenencia de Carabineros, Puerto Saavedra.
- Tenencia de Carabineros, Vilcún.

X Región de Los Lagos

En 1973 fue designado un general de brigada como Jefe de Zona en Estado de Emergencia en la provincia de Valdivia de acuerdo al Decreto Ley N° 4 de 11 de septiembre de 1973. El mismo decreto designó a un teniente coronel para la provincia de Osorno y un coronel de Aviación para las provincias de Llanquihue y Chiloé.

Las detenciones fueron realizadas principalmente por efectivos del Ejército y Carabineros, aunque en algunos casos actuaron efectivos de la Fuerza Aérea. En los sectores rurales se denunció la participación de civiles en los hechos represivos.

Desde septiembre de 1973 se habilitaron dos campos de prisioneros en recintos deportivos, uno en la ciudad de Valdivia y otro en la ciudad de Osorno, bajo la custodia y responsabilidad de personal del Ejército. En estos recintos los prisioneros fueron interrogados y torturados. En la ciudad de Osorno se utilizaron dos lugares de propiedad de empresarios de la zona, para mantener a cierto número de prisioneros políticos aislados e incomunicados, los que fueron interrogados y torturados en la Fiscalía Militar de Osorno.

Las fiscalías militares fueron utilizadas como recintos de interrogatorio entre 1973 y 1976. Numerosos detenidos fueron torturados en la Fiscalía Militar de Valdivia, ubicada al interior del Regimiento Cazadores. En Puerto Montt la Fiscalía Militar se encontraba ubicada en el edificio de la intendencia regional, donde también funcionaba la gobernación. Fue utilizada como recinto de interrogatorios y los prisioneros que estuvieron en ese lugar fueron brutalmente torturados.

En 1973 era común que los prisioneros fueran sacados del recinto donde estaban recluidos y llevados a los centros de interrogatorios. Así ocurrió con prisioneros que se encontraban en la cárcel de Osorno, los que fueron interrogados y torturados en la Fiscalía Militar ubicada en el hospital base de esa ciudad. En todas las cárceles de la región hubo presos políticos. El mayor número se concentró en las cárceles de Valdivia, Osorno y Puerto Montt entre los años 1973 y 1975.

En 1973, en diversos sectores precordilleranos, se instalaron campamentos militares, en los que se detuvo a numerosos campesinos y trabajadores, quienes denunciaron haber sido sometidos a torturas. Entre ellos, el Complejo Maderero Panguipulli, fue ocupado militarmente desde septiembre de 1973 hasta finalizado el primer trimestre de 1974, limitando incluso los desplazamientos de los habitantes del lugar a sus propias casas.

Según lo constatado por la Comisión, en la mayoría de los recintos de Carabineros de la región hubo prisioneros, quienes fueron maltratados y torturados. Los detenidos eran trasladados desde los retenes de la precordillera a los pueblos y luego a las ciudades, hasta los distintos centros de interrogatorio de la región.

El Centro de Instrucción de Cañal Bajo, en Osorno, fue utilizado el año 1975 por efectivos de la DINA, quienes luego de interrogar y torturar a los prisioneros, los trasladaron hasta la ciudad de Santiago, al centro de torturas de Villa Grimaldi y Cuatro Álamos.

La CNI tuvo recintos en la ciudad de Valdivia. Sin embargo, hubo testimonios que dieron cuenta de que personal de la CNI actuó en los recintos de Investigaciones y/o de Carabineros en las ciudades de Puerto Montt y Osorno. En la década de 1980, muchos prisioneros pasaron por recintos de la CNI antes de ser conducidos a la cárcel. Pero es importante notar que, una vez ingresados al recinto penal, no volvían a sacarlos de allí para interrogarlos y torturarlos.

[...]

Recintos X Región

- Aeródromo El Tepual, Puerto Montt.
- Anexo Cárcel de Osorno / Supermercado COOPRESUR.
- Base Aérea La Chamiza, Puerto Montt.
- Base Naval, Puerto Montt.
- Campamento de Prisioneros Valdivia / Gimnasio Banco del Estado / actual Gimnasio CENDYR.
- Campamento Militar Lago Maihue / Arquilhue.
- Campamento Militar Liquiñe.
- Campamento Militar Puerto Fuy / Pirihueico.
- Cárcel de Ancud.
- Cárcel de Castro / Cárcel de Ten Ten.
- Cárcel de La Unión.
- Cárcel de Osorno.
- Cárcel de Puerto Montt / Cárcel de Chin Chin.
- Cárcel de Río Bueno.
- Cárcel de Río Negro.
- Cárcel de Valdivia / Cárcel de Isla Teja.
- Casa de Administración Fundo Releco.
- Centro de Instrucción Militar de Cañal Bajo, Osorno.
- Comisaría de Carabineros N° 1, Ancud.
- Comisaría de Carabineros N° 2 Guillermo Gallardo, Puerto Montt.
- Comisaría de Carabineros N° 2, Los Lagos.
- Comisaría de Carabineros N° 2, Río Negro.
- Comisaría de Carabineros N° 3, Achao.
- Comisaría de Carabineros N° 3, Rahue Bajo.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Osorno / Fiscalía de Carabineros.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Valdivia / Fiscalía de Carabineros.
- Comisaría de Carabineros, Castro.
- Comisaría de Carabineros, Chaitén.
- Comisaría de Carabineros, Futrono.
- Comisaría de Carabineros, La Unión.
- Comisaría de Carabineros, Llanquihue.
- Comisaría de Carabineros, Panguipulli.
- Comisaría de Carabineros, Puerto Varas.
- Comisaría de Carabineros, Río Bueno.
- Comisaría de Carabineros, San José de la Mariquina.
- Cuartel de Investigaciones, Ancud.
- Cuartel de Investigaciones, Castro.
- Cuartel de Investigaciones, La Unión.
- Cuartel de Investigaciones, Osorno.
- Cuartel de Investigaciones, Puerto Montt.
- Cuartel de Investigaciones, Puerto Varas.
- Cuartel de Investigaciones, Valdivia.
- Estadio Español, Osorno.
- Fiscalía Militar Puerto Montt / Gobernación / Intendencia.
- Gimnasio Municipal, Panguipulli.
- Gobernación Marítima, Castro.
- Industria de Cecinas FELCO.
- IV División del Ejército / Guarnición Militar, Valdivia.
- Recinto CNI calle Pérez Rosales 764, Valdivia.
- Recinto ex Hospital Base de Osorno / Fiscalía Militar.
- Recinto SIM calle Picarte 1451, Valdivia / Palacio de la Risa.
- Regimiento de Infantería N° 12 Sangra, Puerto Montt.
- Regimiento de Ingenieros N° 4 Arauco, Osorno.
- Regimiento de Telecomunicaciones N° 4 Membrillar / Regimiento Caballería Blindada N° 2 Cazadores (Fiscalía Militar) / Regimiento de Artillería N° 2 Maturana, Valdivia.
- Retén Aduana Angelmó, Puerto Montt.
- Retén de Carabineros José Gil de Castro, Valdivia.
- Retén de Carabineros, Cancura.
- Retén de Carabineros, Cascadas.
- Retén de Carabineros, Chaulinec.
- Retén de Carabineros, Chonchi.
- Retén de Carabineros, Choshuenco.
- Retén de Carabineros, Colegual.

- Retén de Carabineros, Collico.
- Retén de Carabineros, Corral.
- Retén de Carabineros, Crucero.
- Retén de Carabineros, Entre Lagos.
- Retén de Carabineros, Frutillar Alto.
- Retén de Carabineros, Huellelhue.
- Retén de Carabineros, Isla Teja.
- Retén de Carabineros, Las Animas.
- Retén de Carabineros, Liquiñe.
- Retén de Carabineros, Llifén.
- Retén de Carabineros, Los Muermos.
- Retén de Carabineros, Máfil.
- Retén de Carabineros, Malalhue.
- Retén de Carabineros, Neltume.
- Reten de Carabineros, Ovejería.
- Retén de Carabineros, Pichipelluco.
- Retén de Carabineros, Puerto Octay.
- Retén de Carabineros, Pullinque.
- Retén de Carabineros, Quellón.
- Retén de Carabineros, Quemchi.
- Retén de Carabineros, Rahue Alto.
- Reten de Carabineros, Riachuelo.
- Retén de Carabineros, Riñihue.
- Retén de Carabineros, San Pablo.
- Retén de Carabineros, Vivanco.
- Subcomisaría de Carabineros, Lanco.
- Tenencia de Carabineros, Chacao.
- Tenencia de Carabineros, Fresia.
- Tenencia de Carabineros, Lago Ranco.
- Tenencia de Carabineros, Los Jazmines.
- Tenencia de Carabineros, Paillaco.
- Tenencia de Carabineros, Purranque.

XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

En la entonces provincia de Aysén asumió como Jefe de Zona en Estado de Emergencia el comandante militar de la región.

Desde el mismo 11 de septiembre de 1973 se realizaron operativos conjuntos de carabineros y militares en toda la zona con la finalidad de tomar el control político y coordinar las operaciones futuras en la zona. El mando superior fue asumido por efectivos del Ejército, a cargo de las ciudades de Coyhaique y Cochrane. Carabineros tuvo una presencia más activa en Puerto Aysén y en localidades más pequeñas, como Puyuhuapi, Chile Chico y Puerto Cisnes, entre otras.

Desde ese momento y durante 1973, según consta en los testimonios, en muchos sitios alejados, en zonas rurales y cordilleranas fronterizas con Argentina, en asentamientos y en empresas mineras se efectuaron detenciones y trasladaron a los prisioneros a retenes de los poblados más cercanos. Desde ahí, en embarcaciones de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), los llevaron hasta Puerto Aysén, donde permanecieron algunas horas o días en la comisaría de esta ciudad, para ser conducidos posteriormente hasta Coyhaique, ya sea a la comisaría, al Regimiento Nº 14 o a la cárcel. Fue frecuente en el año 1973, especialmente en el mes de octubre, la actuación de personal del Ejército al interior de los recintos de Carabineros.

En la región, dos son los recintos pertenecientes al Ejército a donde fueron llevados los detenidos: el Regimiento Reforzado Nº 14 en Coyhaique y el Campo Militar de Adiestramiento Las Bandurrias, a 15 kilómetros de esa ciudad. Este último fue utilizado por varios meses como campo de prisioneros.

A la gran mayoría de los dirigentes políticos y activistas de importancia los llevaron al campo de prisioneros Las Bandurrias, donde permanecieron hasta marzo de 1974. Durante este tiempo, varios prisioneros fueron sometidos a consejos de guerra. En 1973, los presos eran trasladados desde este lugar hasta el Regimiento Aysén para someterlos a interrogatorios bajo torturas.

Dos son los recintos carcelarios utilizados en la región, en Aysén y Coyhaique. Este último fue el que registró el mayor número de detenidos.

Con relación a la actuación de la CNI en la región, los testimonios recepcionados por la Comisión no se refirieron a recintos específicos de este organismo, pese a haber sido reconocida su existencia en el año 1984 por el Decreto Supremo Nº 594 del Ministerio del Interior. Al respecto habría que señalar que varios detenidos por la Policía de Investigaciones o por Carabineros de Coyhaique denunciaron haber sido seguidos y controlados, luego de su libertad, por agentes de la CNI en la ciudad de Coyhaique.

Es importante señalar la relevancia del número de detenciones efectuadas en la región si se considera que no se trata de una población numerosa. Hay que agregar que se aplicó tortura en todos los recintos y durante todo el período de la dictadura. Al igual como ocurría en la mayoría de las regiones del país, lo común fue que los detenidos pasaran por más de un recinto de detención durante todo el tiempo que permanecían recluidos.

[...]

Recintos XI Región

- Campamento de Prisioneros de Las Bandurrias, Actual Regimiento Bulnes.
- Cárcel de Aysén.
- Cárcel de Coyhaique.
- Casa-habitación en Obispo Michelatto con Carrera, CNI.
- Comisaría de Carabineros, Chile Chico.
- Comisaría de Carabineros, Coyhaique.
- Comisaría de Carabineros, Puerto Aguirre.
- Comisaría de Carabineros, Puerto Aysén.
- Cuartel de Investigaciones, Coyhaique.
- Regimiento Reforzado Nº 14, Aysén/ Fiscalía Militar.
- Retén de Carabineros Raúl Marín Balmaceda, Bajo Palena.
- Retén de Carabineros, Puerto Cisnes.

XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

En esta región, el mando superior fue asumido por todas las ramas de las Fuerzas Armadas, las que se encontraban subordinadas a una estructura militar única en el país, que se denominó Región Militar Austral, cuya comandancia era común con la V División del Ejército. La Junta Provincial Militar, de carácter regional, contaba con la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y terminó sus funciones el 20 de septiembre de 1973, mediante el Decreto Nº 42, dictado por ella misma. Se designó un general de división como Jefe de Zona en Estado de Emergencia para la entonces provincia de Magallanes, mediante el Decreto Ley N° 4. En dicha norma se especificaba que todas las fuerzas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile e Investigaciones que se encontraran o llegaran al territorio jurisdiccional de estas zonas de emergencia se debían poner bajo la autoridad del jefe respectivo.

Las actividades de inteligencia de todas las ramas de las Fuerzas Armadas en la región fueron coordinadas bajo una estructura única, denominada Servicio de Inteligencia de la Región Militar Austral (SIRMA). Consecuente con esa estructura regional, las Fuerzas Armadas actuaron en operativos conjuntos, efectuando detenciones de hombres, mujeres y menores de edad. Los dirigentes políticos y sociales y los representantes gubernamentales fueron llamados por bandos militares a presentarse ante las autoridades, siendo detenidos en ese momento, en sus lugares de trabajo o en sus hogares.

Los presos políticos de la región estuvieron en distintos recintos de las Fuerzas Armadas, los que funcionaron en su mayoría entre 1973 y 1977, tanto en la ciudad de Punta Arenas como en otras ciudades. El mayor número de detenidos se concentró durante 1973 y 1974. Quienes declararon dijeron que estuvieron detenidos en varios recintos y que eran trasladados para ser sometidos a interrogatorios, en camiones militares, aviones y barcazas. Indicaron que en todos los trayectos fueron hostigados y maltratados. Los interrogatorios estaban a cargo del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y actuaban también servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea y la Marina. Fueron utilizados como recintos de interrogatorios y torturas algunos inmuebles de las Fuerzas Armadas o de particulares habilitados especialmente para estos efectos. La casi totalidad de los prisioneros, hombres y mujeres pasó por esos recintos durante los años 1973 y 1974.

La cárcel de Punta Arenas, el Estadio Fiscal y el campamento de prisioneros de isla Dawson fueron recintos de reclusión en los años 1973 y 1974. La cárcel fue el único recinto que mantuvo prisioneros políticos durante todo el período del régimen militar.

El principal campo de prisioneros de la región se ubicó en isla Dawson, lugar de reclusión de altos dirigentes del gobierno del Presidente Salvador Allende y también de numerosos prisioneros políticos de la región, principalmente de Punta Arenas. Otros recintos utilizados masivamente como lugar de reclusión en esta ciudad fueron el Estadio Fiscal, el Destacamento de Infantería Marina N° 4 Cochrane y el Regimiento Motorizado N° 10 Pudeto. Estos recintos permanecieron en funcionamiento entre 1973 y 1974.

En 1973 los recintos de Carabineros y de Investigaciones fueron el primer lugar de detención o de tránsito hacia centros de detención o recintos militares. Así ocurrió también entre los años 1974 y 1977. A partir de esa fecha, y especialmente en la década de 1980, fueron éstos, junto a la cárcel, los recintos de detención más frecuentes y el tránsito se realizaba desde los cuarteles de la policía civil y de Carabineros hacia el recinto penitenciario.

En 1984, a raíz de las protestas nacionales y de movilizaciones sociales de oposición al régimen militar, desde el *puntarenazo* realizado en la Plaza de Armas de Punta Arenas en una visita del general Pinochet, se registró un alza importante de detenciones, especialmente de dirigentes políticos y sociales opositores. Ellos, luego de permanecer en recintos de Carabineros y de Investigaciones, fueron sometidos a procesos y recluidos en la cárcel de Punta Arenas.

No se registraron recintos de detención vinculados a la DINA en la región, pero sí existió en la década de 1980 un recinto de la CNI. La existencia de un único recinto de la CNI en la región fue reconocida públicamente en 1984, cuando su dirección fue publicada en el *Diario Oficial* (Decreto Supremo N° 594 del Ministerio del Interior del 14 de junio de 1984). Por otra parte, algunos declarantes detenidos el año 1977 dieron cuenta de haber sido trasladados a un recinto desconocido, una bodega en un sector rural cercano a la ciudad de Punta Arenas, luego de haber sido detenidos por civiles; otros denunciaron que a fines de la década de 1970, luego de ser detenidos por personal de la CNI, fueron trasladados al cuartel de Investigaciones de Punta Arenas.

Todos los testimonios recopilados por la Comisión, de hombres y mujeres, denunciaron que en la Duodécima Región desde el primer momento se recurrió a torturas en contra de los prisioneros, con extrema dureza, especialmente en el año 1973.

Recintos XII Región

- Antiguo Hospital Naval, Punta Arenas / Palacio de las Sonrisas.
- Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR).
- Base Aérea Bahía Catalina / Grupo 6 de la FACH.
- Batallón de Telecomunicaciones Nº 5. Patagonia, Punta Arenas.
- Campamento de Prisioneros isla Dawson.
- Cárcel de Puerto Natales.
- Cárcel de Punta Arenas.
- Casa de Interrogación, cerro Sombrero.
- Casa del Deportista, Punta Arenas.
- Comisaría de Carabineros, Porvenir.
- Comisaría de Carabineros, Puerto Natales.
- Comisaría de Carabineros, Punta Arenas.
- Cuartel de Investigaciones, Punta Arenas.
- Destacamento de Infantería de Marina Nº 4 Cochrane, Punta Arenas.
- Estadio Fiscal de Punta Arenas.
- Fundo Los Roblecitos, Punta Arenas.
- Grupo 12 FACH, Punta Arenas.
- Recinto CNI calle Kusma Slavic Nº 920, Punta Arenas.
- Regimiento Blindado Nº 5 General René Schneider (Ojo Bueno), Punta Arenas (Actual Regimiento de Caballería Blindada N° 6 Dragones).
- Regimiento de Infantería Motorizada Nº 10 Pudeto, Punta Arenas.
- Regimiento de Infantería Nº 11. Caupolicán, Tierra del Fuego, Porvenir.
- Regimiento de Lanceros, Puerto Natales.
- Retén de Carabineros, cerro Sombrero.
- Sede de Cruz Roja, Puerto Natales.

Región Metropolitana

Al momento del golpe de Estado, la provincia de Santiago, actual Región Metropolitana, concentraba cerca de un tercio de la población de Chile. La ciudad de Santiago, capital del país, era sede de gobierno y centro político y administrativo del Estado. De acuerdo al Decreto Ley Nº 4 de 11 de septiembre de 1973, se designó a un general de Ejército como Jefe de Zona en Estado de Emergencia para la provincia.

Desde el 11 de septiembre de 1973, prácticamente en todos los recintos pertenecientes a las Fuerzas Armadas hubo detenidos políticos. Se utilizaron regimientos, escuelas de formación militar y de especialidades, hospitales institucionales y recintos bajo la custodia de alguna rama de las Fuerzas Armadas. Los testimonios recibidos por esta Comisión establecieron que el tiempo que los prisioneros permanecieron en ellos fue, en general, breve. Por lo común eran trasladados a otros lugares dentro de la región o fuera de ella. Finalmente eran liberados o procesados.

Las detenciones las realizaba personal del Ejército, de la Armada, de Carabineros y de la Fuerza Aérea, en algunas ocasiones en operativos conjuntos. El mayor número de detenidos se concentró entre 1973 y 1974.

En las zonas rurales las detenciones fueron responsabilidad de Carabineros. Después de 1975 disminuyó el número de detenidos, pero aumentó nuevamente a partir de 1980.

Desde el año 1974, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas participaron en las detenciones a través de sus servicios de inteligencia: Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA, o DIFA cuando pasó a llamarse Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea) y el Comando Conjunto, integrado también por efectivos de la Armada, de Carabineros e Investigaciones.

El Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile (SICAR-DICAR) y la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) fueron responsables de un cierto número de detenciones durante diferentes etapas del período.

La Policía de Investigaciones tuvo responsabilidades en la detención de personas durante todo el período. En ocasiones actuaron en asociación con otros grupos de inteligencia. La reacción ante el atentado que costó la vida al coronel Roger Vergara, en 1980, fue la organización de un comando antisubversivo, que estuvo integrado por la Brigada de Homicidios y de Inteligencia Policial de Investigaciones, además del OS-7 de Carabineros y la Brigada Metropolitana de la CNI, comandado por un general de Ejército. El grupo se autodenominó *Comando de Vengadores de Mártires* (COVEMA).

Algunos declarantes señalaron que debieron permanecer en el mismo lugar donde fueron detenidos, lugares de trabajo, universidades, hospitales. Posteriormente estas personas fueron trasladadas al Estadio Nacional o al Estadio Chile, recintos que fueron habilitados como campos de prisioneros.

Por distintas razones, muchos prisioneros fueron enviados al Regimiento de Tejas Verdes, en San Antonio. A su vez, ministros del gobierno de la Unidad Popular, autoridades y dirigentes políticos detenidos fueron trasladados a la isla Dawson, en la Duodécima Región. A otros prisioneros los enviaron a Chacabuco y a Pisagua.

Las cárceles que recibieron el mayor número de detenidos fueron las de Melipilla, San Miguel, Santo Domingo, la Cárcel Pública de Santiago, la Penitenciaría y el Centro de Orientación Femenina (COF).

Después de 1974 las detenciones fueron cada vez más selectivas. La mayoría de las aprehensiones las realizaban los organismos de inteligencia, especialmente la DINA. A las personas detenidas las llevaban a los cuarte-

les secretos de la DINA, donde eran interrogadas. Mientras permanecían en esos lugares, la detención no era reconocida por las autoridades de gobierno. Según se desprende de las declaraciones de las víctimas ante esta Comisión, lo más común era que los prisioneros fueran trasladados entre recintos de los mismos servicios.

Entre 1977 y 1990, tanto las detenciones selectivas como las que se practicaban con ocasión de protestas nacionales y manifestaciones públicas fueron realizadas por Carabineros y sus organismos de inteligencia, por Investigaciones de Chile y la CNI. Los detenidos eran llevados a los cuarteles respectivos donde eran interrogados y torturados. Carabineros solía llevar a los detenidos a un recinto ubicado en la calle Dieciocho; la CNI, al Cuartel Borgoño y a una casa en la calle República.

Los declarantes coincidieron en señalar que muchas veces los detenidos eran puestos a disposición de los tribunales militares o civiles y enviados a las cárceles, donde permanecían incomunicados por largos períodos. Las personas liberadas cuyas detenciones no habían sido reconocidas, eran abandonadas en sitios apartados y deshabitados. Los testigos enfatizaron que, a raíz de la publicación del Decreto Supremo Nº 594 de 1984, que reconoció oficialmente algunos recintos de detención que anteriormente se habían mantenido secretos, los arrestos efectuados por la CNI empezaron a ser reconocidos antes de liberar a las víctimas o de ponerlas a disposición de algún tribunal.

Durante la década de 1980, los presos políticos eran trasladados entre los recintos carcelarios. Desde el año 1983, se observó que, por orden de las fiscalías militares, los prisioneros, una vez recluidos, eran objeto de largas incomunicaciones. Algunos testigos declararon haber permanecido incomunicados períodos que superaron los 30 días.

Los declarantes, sin hacer diferencias respecto del año en que estuvieron detenidos, señalaron que fueron maltratados, golpeados y amenazados desde el momento de la detención y que fueron torturados durante los interrogatorios.

La Comisión recibió antecedentes de 221 recintos de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, campos de prisioneros y otros lugares utilizados como centros de detención en la Región Metropolitana. A modo de ejemplo, se presenta una reseña de algunos de ellos.

[...]

Recintos Región Metropolitana

- Academia de Guerra Aérea (AGA).
- Academia de Guerra del Ejército.
- Academia Politécnica Aeronáutica (APA).
- Anexo Cárcel Capitán Yaber.
- Anexo Cárcel Capuchinos.
- Arsenales de Guerra.
- Base Aérea el Bosque / Escuela de Aviación Capitán Avalos.
- Batallón Blindado Nº 2 / Batallón de Independencia.
- Bodega de Vino Quebrada Honda, Curacaví.
- Brigada de Homicidios de Investigaciones, General Mackenna.
- Campamento de Prisioneras, Pirque.
- Campamento de Prisioneros, Cuatro Álamos.
- Campamento de Prisioneros, Estadio Chile.
- Campamento de Prisioneros, Estadio Nacional.
- Campamento de Prisioneros, Tres Álamos.
- Cárcel Buen Pastor de Mujeres / Centro de Orientación Femenina (COF), Santiago.
- Cárcel de Buin.
- Cárcel de Colina.
- Cárcel de Médicos, Agustinas Nº 632 (Ex Escuela de Servicio Social Universidad de Chile).
- Cárcel de Melipilla.
- Cárcel de Menores Blas Cañas / Centro de Reinserción Abierto Manuel Rodríguez.
- Cárcel de Menores, Puente Alto.
- Cárcel de Puente Alto.
- Cárcel de San Bernardo.
- Cárcel de San Miguel.
- Cárcel de Santiago.
- Cárcel de Santo Domingo.
- Cárcel de Talagante.
- Casa de la Cultura de Barrancas (actual Municipalidad de Pudahuel).
- Comisaría de Carabineros Nº 6.
- Comisaría de Carabineros N° 10, San Miguel.
- Comisaría de Carabineros Nº 1, Santiago.
- Comisaría de Carabineros Nº 11, Estación Central (actual Comisaría de Carabineros Nº 21, Estación Central).
- Comisaría de Carabineros Nº 12, San Miguel.
- Comisaría de Carabineros Nº 13, Los Guindos (actual Comisaría de Carabineros Nº 18, Los Guindos).
- Comisaría de Carabineros Nº 14, Providencia (actual Comisaría de Carabineros Nº 19, Providencia).
- Comisaría de Carabineros Nº 15, Buin.
- Comisaría de Carabineros Nº 16, La Reina.
- Comisaría de Carabineros Nº 2, Santiago.
- Comisaría de Carabineros Nº 20, Puente Alto.
- Comisaría de Carabineros Nº 21, José María Caro (actual Comisaría de Carabineros Nº 11, José María Caro).
- Comisaría de Carabineros Nº 22, Quinta Normal.
- Comisaría de Carabineros Nº 23, Talagante.
- Comisaría de Carabineros Nº 24, Las Tranqueras (actual Comisaría de Carabineros Nº 17, Las Condes).
- Comisaría de Carabineros Nº 25, Maipú.
- Comisaría de Carabineros Nº 26, Lo Prado (actual Comisaría de Carabineros Nº 44, Lo Prado).
- Comisaría de Carabineros Nº 26, Pudahuel.
- Comisaría de Carabineros Nº 3, Santiago.
- Comisaría de Carabineros Nº 36, La Florida.
- Comisaría de Carabineros Nº 4, Melipilla (actual Comisaría de Carabineros Nº 24, Melipilla).
- Comisaría de Carabineros Nº 4, Santiago.
- Comisaría de Carabineros Nº 41, La Pintana.
- Comisaría de Carabineros Nº 47, Los Domínicos.
- Comisaría de Carabineros Nº 49, Quilicura.
- Comisaría de Carabineros Nº 5, Recoleta (actual Comisaría de Carabineros Nº 6, Recoleta).

- Comisaría de Carabineros Nº 50, San Joaquín.
- Comisaría de Carabineros Nº 6, San Bernardo (actual Comisaría de Carabineros Nº 14, San Bernardo).
- Comisaría de Carabineros Nº 6, San Francisco (actualmente no existe).
- Comisaría de Carabineros Nº 7, Renca.
- Comisaría de Carabineros Nº 8, Colina.
- Comisaría de Carabineros Nº 9, Independencia.
- Comisaría de Carabineros, Avenida España.
- Comisaría de Carabineros, calle General Mackenna ex Cuartel San Pablo.
- Comisaría de Carabineros, calle Gran Avenida.
- Comisaría de Carabineros, El Mirador, camino a Melipilla.
- Comisaría de Carabineros, Herrera (actualmente no existe).
- Comisaría de Carabineros, Lo Espejo.
- Comisaría de Carabineros, Paradero 14, La Florida.
- Comisaría de Carabineros, Salvador Gutiérrez con W. Martínez.
- Comisaría de Carabineros, Villa Macul.
- Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros Nº 28.
- Comisaría de Menores Masculina Nº 34.
- Comisaría de Mujeres Nº 38, Santiago.
- Comisaría de Radio Patrullas Nº 30, Independencia.
- Comisaría Judicial Nº 6.
- Comisaría Judicial Nº 8.
- Complejo Químico Militar del Ejército, Talagante / Polvorín de Talagante (actual FAMAE).
- Cuartel de Investigaciones, Buin.
- Cuartel de Investigaciones, calle Zañartu.
- Cuartel de Investigaciones, José María Caro (actual Brigada de Investigación Criminal, José María Caro).
- Cuartel de Investigaciones, La Cisterna (actual Brigada de Investigación Criminal, La Cisterna).
- Cuartel de Investigaciones, La Florida.
- Cuartel de Investigaciones, Macul.
- Cuartel de Investigaciones, Maipú.
- Cuartel de Investigaciones, Ñuñoa.
- Cuartel de Investigaciones, Paradero 12, Gran Avenida.
- Cuartel de Investigaciones, Puente Alto.
- Cuartel de Investigaciones, Quinta Normal.
- Cuartel de Investigaciones, Renca.
- Cuartel de Investigaciones, San Bernardo.
- Cuartel de Investigaciones, San Miguel.
- Cuartel de Investigaciones, Talagante.
- Dirección General de Investigaciones.
- Escuela de Carabineros.
- Escuela de Paracaidismo de Colina.
- Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales, Peldehue.
- Escuela de Suboficiales de Carabineros.
- Escuela de Suboficiales del Ejército.
- Escuela de Telecomunicaciones, Quinta Normal.
- Escuela Militar, Bernardo O'Higgins.
- Estadio Maestranza San Eugenio.
- Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE).
- Hangar de Cerrillos / Grupo 10 de la Fuerza Aérea / Grupo 7 de la Fuerza Aérea, Cerrillos.
- Maestranza, calle Salesianos.
- Media Luna, Maipú.
- Ministerio de Defensa, subterráneo y otras dependencias.
- Parque Cerrillos, FISA (ocupado por Regimiento de Montaña Nº 18 Guardia Vieja).
- Penitenciaría de Santiago (actualmente CDP Santiago Sur).
- Polvorín del Ejército, Batuco.
- Prefectura Sur de Investigaciones.
- Recinto CNI calle Loyola 5800.
- Recinto CNI, Avenida República 517.
- Recinto CNI, calle Rancagua con José Miguel Infante.
- Recinto CNI, Cuartel Central Borgoño.
- Recinto Comando Conjunto / DICOMCAR, calle Dieciocho (La Firma).
- Recinto Comando Conjunto, Nido 18.
- Recinto Comando Conjunto, Nido 20.
- Recinto DINA, calle Belgrado Nº 11.
- Recinto DINA, calle Irán 3.037 / Venda Sexy / La Discothéque.

- Recinto DINA, calle Venecia 1.722.
- Recinto DINA, Clínica Santa Lucía.
- Recinto DINA, José Domingo Cañas Nº 1.367.
- Recinto DINA, Londres 38.
- Recinto DINA, Villa Grimaldi.
- Recinto Naval, Quinta Normal.
- Recinto SICAR, Subterráneo Plaza de la Constitución.
- Recinto SIFA Avenida Apoquindo 3.182 / Casa Amarilla.
- Regimiento de Artillería Nº 1, Tacna.
- Regimiento de Artillería Antiaérea FACH, Colina (Remo Cero).
- Regimiento de Infantería Motorizada Nº 1, Buin.
- Regimiento de Infantería, San Bernardo, Escuela Infantería / Cuartel N° 2 Cerro Chena.
- Regimiento de Telecomunicaciones, Peñalolén.
- Regimiento Ferrocarrileros, Puente Alto (actual Regimiento de Ingenieros de Montaña Nº 2).
- Reten de Carabineros, El Paico.
- Retén de Carabineros, Cerrillos.
- Retén de Carabineros, Cerro Blanco.
- Retén de Carabineros, Peñaflor.
- Retén de Carabineros, Pirque
- Subcomisaría de Carabineros, Bernal del Mercado.
- Subcomisaría de Carabineros, San Cristóbal.
- Subcomisaría de Carabineros Eneas Gonel, Conchalí.
- Subcomisaría de Carabineros Vista Alegre, Cerrillos.
- Subcomisaría de Carabineros, Lo Lillo.
- Subcomisaría de Carabineros, Paine.
- Subcomisaría de Carabineros, San José de Maipo.
- Subcomisaría de Carabineros, Teniente Hernán Merino Correa.
- Tenencia de Carabineros Alessandri, Maipú.
- Tenencia de Carabineros Central Rapel.
- Tenencia de Carabineros Nueva España, Población San Gregorio.
- Tenencia de Carabineros, El Monte.
- Tenencia de Carabineros, La Castrina.
- Tenencia de Carabineros, Malloco.
- Tenencia de Carabineros, Roosevelt.
- Tenencia de Carabineros, Santa Adriana.
- Tenencia de Carabineros, Alhué.
- Tenencia de Carabineros, Cerro Navia (actual Comisaría de Carabineros Nº 45, Cerro Navia).
- Tenencia de Carabineros, Curacaví.
- Tenencia de Carabineros, Isla de Maipo.
- Tenencia de Carabineros, La Victoria.
- Tenencia de Carabineros, María Pinto.
- Tenencia de Carabineros, Til Til.

VII. Perfil de las víctimas*

En este capítulo se da a conocer quiénes eran y quiénes son las personas que fueron objeto de la prisión política y la tortura durante el régimen militar. Para ello, se elaboró un perfil general de los concurrentes a esta Comisión, así como una descripción específica de conformidad con los períodos diferenciados en el capítulo relativo a Prisión Política y Tortura, Período a Período. Esta descripción corresponde al total de casos calificados.

Los datos con que se trabajó para la construcción del perfil provienen de la información consignada en la Ficha de Antecedentes que cada declarante completó; de las entrevistas personales que se hicieron; y de la

* Capítulo VII del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (extracto).

documentación complementaria entregada para la calificación de los casos. La metodología de trabajo empleada para el análisis cuantitativo puede resumirse en la siguiente secuencia: primero, definición de las variables y categorización de acuerdo a los datos disponibles; segundo, codificación de los datos correspondientes a 27.255 fichas (equivalentes a un 100% del universo de los casos calificados por esta Comisión); tercero, determinación de variables relevantes para el propósito de este capítulo, y construcción de tablas y gráficos por categoría y por períodos. Cabe señalar que, para efectos estadísticos, se trabajó con la información referida a la primera detención de cada declarante, independiente de si experimentó más de una.

El perfil de las víctimas que aquí se construye tiene un carácter meramente descriptivo. Es decir, no establece correlaciones estadísticas entre las variables recogidas; más bien, se empeña en diferenciarlas y describir cómo éstas se comportan en torno a la prisión política y la tortura. Esto último se debe al carácter "exploratorio" que tiene un trabajo de esta naturaleza y a los propósitos que lo motivaron. En ese sentido, todas las deducciones y correlaciones posibles, propias de la estadística inferencial, escapan a las posibilidades de este capítulo y al alcance restringido de esta Comisión, si bien constituyen materia legítima para investigaciones y reflexiones futuras.

[...]

Las variables que estructuran tanto el Perfil General de las Víctimas, como el Perfil de las Víctimas Según Período son el sexo, la edad al momento de la detención, la edad actual, la actividad laboral, la filiación política declarada y la participación en organizaciones sociales declarada.

Importa consignar que tanto la filiación política como la participación en organizaciones emergieron espontáneamente de los testimonios de varios concurrentes, pues no fue información requerida por los entrevistadores ni, tampoco, por la Ficha de Antecedentes.

[...]

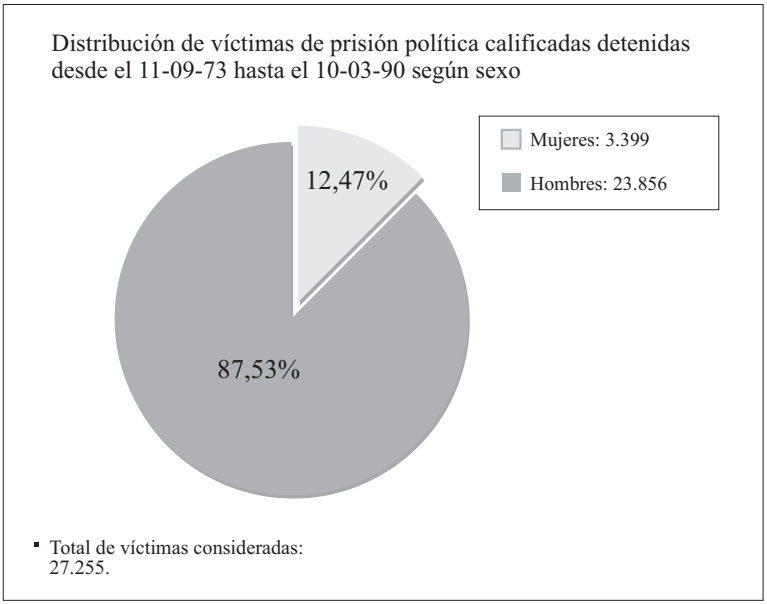
Perfil general de las víctimas

La construcción descriptiva del perfil general de las víctimas que sufrieron prisión política y tortura durante el régimen militar no responde a otra inquietud que delinear estadísticamente el comportamiento que las variables señaladas tuvieron en el "universo" afectado y, por tanto, ayudar a establecer un mapa que permita conocer y reconocer el pasado de las víctimas. Asimismo, el perfil general adquiere gran relevancia al momento

de diferenciar los distintos períodos que en este mismo documento se han establecido. No es sino a través de la comparación con un patrón general de comportamiento (un perfil general), que es posible establecer diferencias en el perfil de las víctimas entre un período y otro.

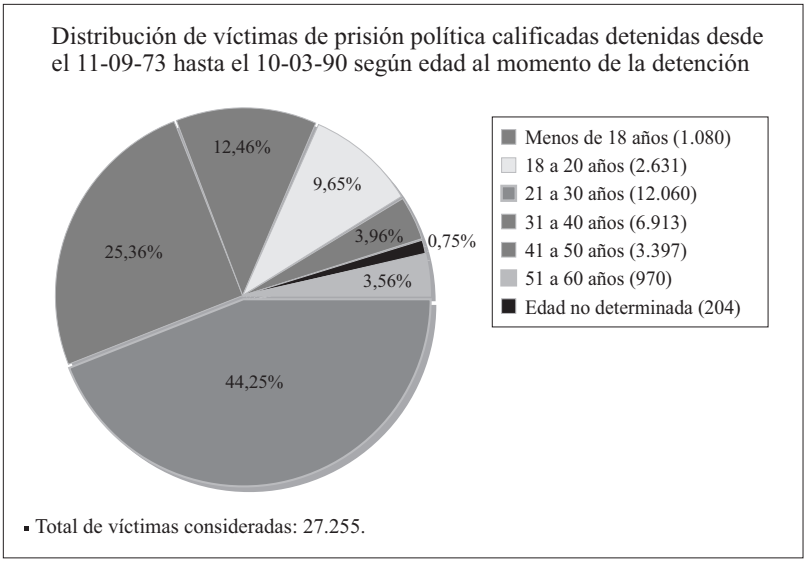
Sexo

Del total de casos calificados (27.255) por esta Comisión, el 87,5% (23.856) son hombres y el 12,5% (3.399) mujeres.



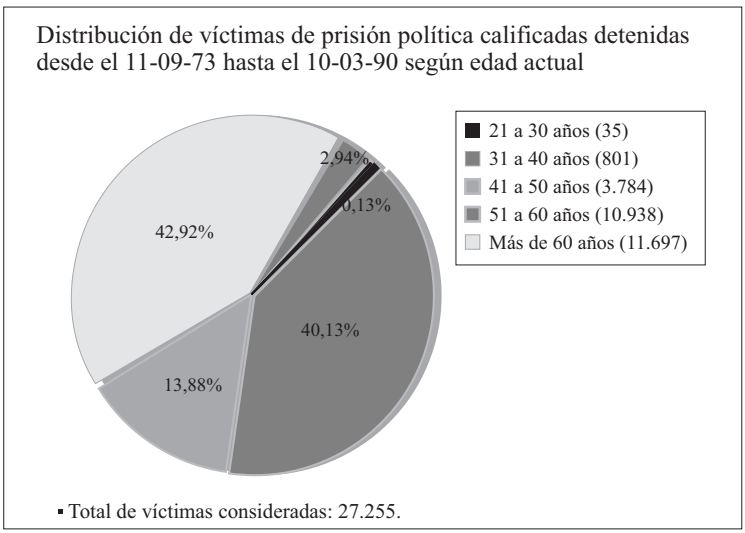
Edad al momento de la detención

Según los datos obtenidos y como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el 44,2% (12.060) tenía entre 21 y 30 años al momento de la detención, es decir, se ubicaban en el segmento que hoy día se denomina, adulto joven. Un 25,4% (6.913) tenía entre 31 y 40 años, un 12,5% (3.397) tenía entre 41 y 50 años. Los jóvenes entre 18 y 21 años de edad a la época, alcanzaban al 9,7% (2.639) y los menores de 18 años representaban el 4% (1.080).Los mayores de 50 era el 4,3% (1.174).



Edad actual

Coherente con la edad que tenían cuando fueron detenidos, el grueso de las víctimas tiene actualmente más de 51 años, como puede observarse en el gráfico anterior. Como puede observarse, el 40,1% (10.938) se ubica entre los 51 y 60 años, en la actualidad, mientras que un 42,9% (11.697) tiene más de 60 años. Por otra parte, un 13,9% (3.784) corresponde a personas que hoy día tienen entre 41 y 50 años, y un 3,1% (836) a menores de 40 años.

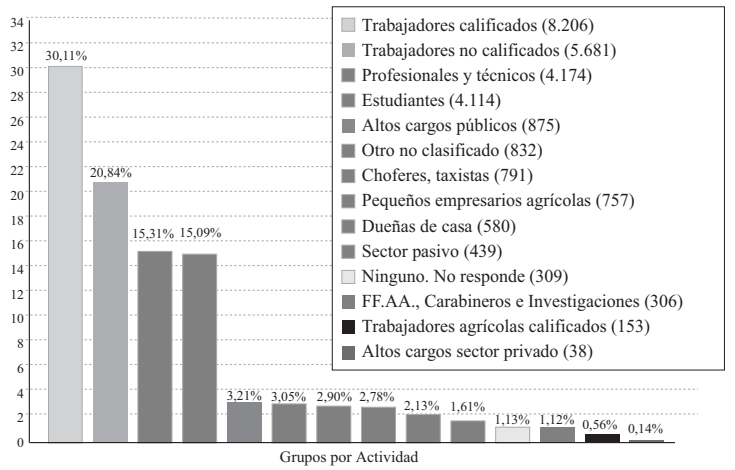


Actividad laboral al momento de la detención

El conocimiento relativo a la actividad laboral de los declarantes, permite hacerse una idea general de la posición ocupada por estas personas en la sociedad chilena al momento de su detención.

Del universo de casos calificados por esta Comisión, un 30,1% (8.206) declaró que al momento de ser detenidos tenía una actividad laboral como trabajador calificado, incluyéndose en esta categoría aquellas personas que se desempeñaban como empleados, oficinistas, comerciantes, trabajadores de servicios públicos e industrias. El 20,8% (5.681) corresponde a trabajadores sin calificación que se desempeñaban en actividades como: comercio, construcción, servicios e industrias. Los que declararon ser profesionales/técnicos y estudiantes, representan algo más de un 15,3% cada uno (4.174 y 4.114 respectivamente). Las víctimas que desempeñaban altos cargos públicos como parlamentarios, autoridades de gobierno, directivos de empresas del área social, ascienden a un 3,21% (875), mientras que aquellas con altos cargos en el sector privado, representan sólo un 0,14% (38). Por otra parte, aproximadamente un 1,1% (306) corresponde a personas que manifestaron pertenecer a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. El sector pasivo, que incluye los que se declararon cesantes y jubilados, representa el 1,6% (439).

Distribución de víctimas de prisión política calificadas detenidas desde 11-09-73 al 10-03-90 según actividad laboral al momento de la detención



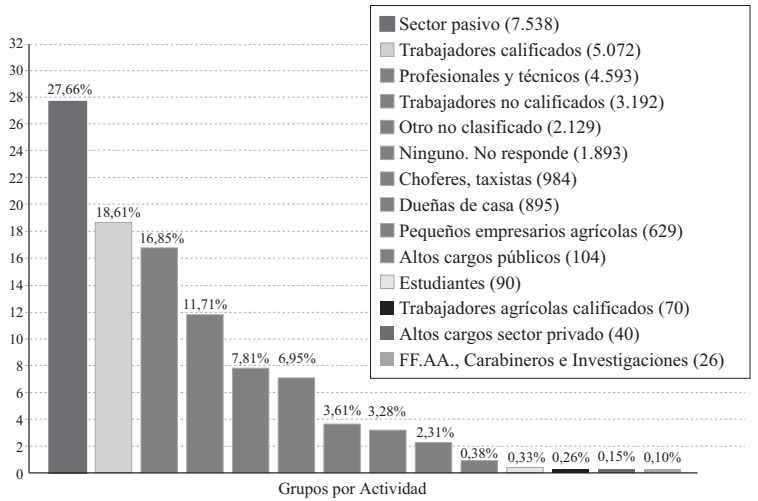
▪ Total considerado: 27.255 víctimas.

Actividad laboral actual

En su mayoría, los sujetos víctimas de prisión política y de tortura tienen hoy día más de 50 años y, tal como se aprecia en el gráfico siguiente, un número importante 27,6% (7.538) de ellos están jubilados o cesantes, es decir, se trata de personas que pueden encontrarse en situaciones de precariedad económica o vulnerabilidad social.

Cabe señalar, también, que del universo de casos acreditados, un 9% (2.558) corresponde a personas que a la fecha de constituirse esta Comisión ya habían fallecido, y que, por tanto, fueron registradas y acreditadas a partir del testimonio de sus familiares.

Distribución de víctimas de prisión política calificadas detenidas desde 11-09-73 al 10-03-90 según actividad laboral actual



▪ Total considerado: 27.255 víctimas.

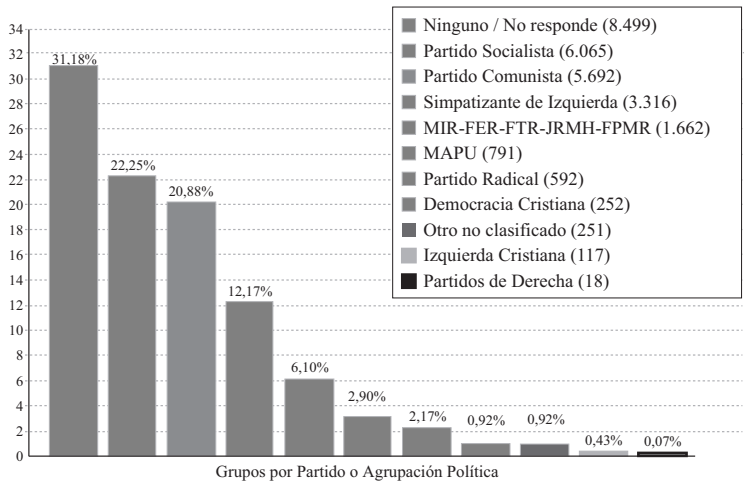
Filiación política al momento de la detención

Distribución de detenidos según militancia política

Si bien la Ficha de Antecedentes no incluía directamente preguntas respecto a la filiación política, en la entrevista personal aproximadamente un 69% de las víctimas manifestaron espontáneamente su adhesión política

y los cargos que desempeñaban al interior de sus partidos. La distribución de los casos calificados, según la militancia en los partidos de la época, es la siguiente:

Distribución de víctimas de prisión política calificadas detenidas desde 11-09-73 al 10-03-90 según militancia política al momento de la detención



▪ Total de víctimas consideradas: 27.255.

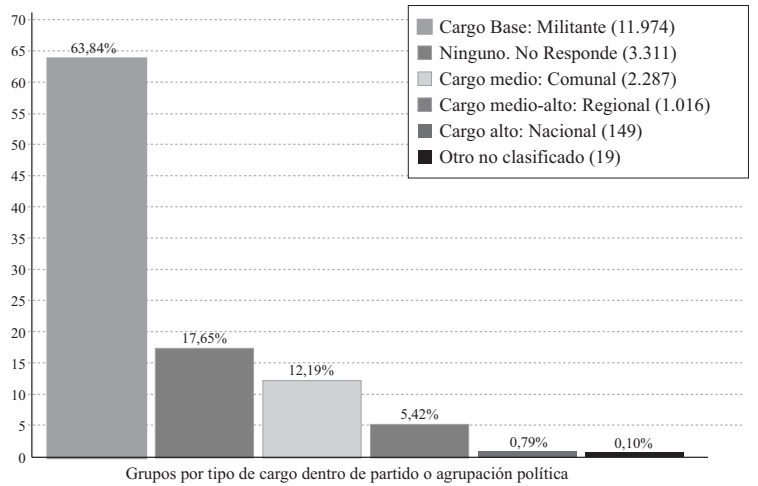
Como puede observarse, la mayoría corresponde a personas que declararon pertenecer a los partidos eje de la Unidad Popular. En efecto, un 22,2% (6.065) declara haber militado en el Partido Socialista y otro 20,9% (5.692), en el Partido Comunista. Hay un 12,2% (3.316) que se declara "simpatizante de izquierda" y un 6,1% (1.662), perteneciente a grupos de oposición armada como el MIR, FER, FPMR, entre otros. Por otra parte, los partidos Democracia Cristiana e Izquierda Cristiana son los que tienen más baja representación en el universo de casos acreditados, con un 0,9% (252) y 0,4% (117) respectivamente. Cabe destacar que un pequeño número de personas (18) declararon haber sido militantes de partidos de derecha.

Distribución de detenidos que declararon militancia, según cargo desempeñado

Respecto del nivel de participación en sus partidos, expresado en el tipo de cargo que las personas que declararon militancia desempeñaban al

interior de los mismos, se observa que el 63,8% (11.974) corresponde a militantes de base, mientras que sólo un 0,8% (149) ejercía cargos de responsabilidad a nivel nacional. Por otra parte, un 12,1% (2.287) de las personas manifestó haber estado ejerciendo cargos de responsabilidad a nivel comunal y un 5,4% (1.016) a nivel regional.

Distribución de víctimas de prisión política calificadas detenidas desde 11-09-73 al 10-03-90 que declararon militancia política según cargo desempeñado



▪ Total de víctimas consideradas: 18.756.

Participación en organizaciones al momento de la detención

Distribución de detenidos según participación en organizaciones

En el transcurso de la entrevista personal, aproximadamente un 41% de las personas declaró de forma espontánea haber tenido participación en alguna de las múltiples organizaciones sociales, gremiales y territoriales que existían durante el Gobierno de la Unidad Popular, o bien, que se crearon durante el período del régimen militar. Para su análisis, estas organizaciones fueron agrupadas en las siguientes categorías:

Organizaciones gremiales: incluye los sindicatos, las asociaciones, federaciones, confederaciones, gremios profesionales y técnicos, gremios de oficio, Central Unica de Trabajadores (CUT), organizaciones estudiantiles y comités de empresas del área social.

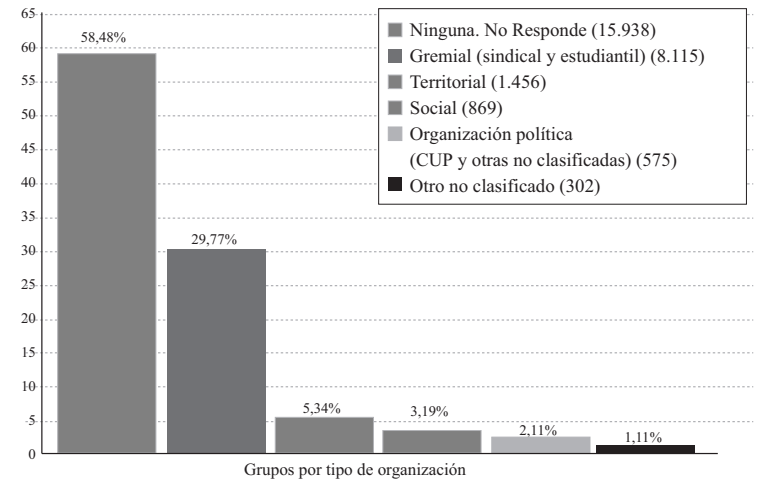
Organizaciones territoriales: agrupa las juntas de vecinos, juntas de abastecimientos y precios (JAP) y los llamados "cordones industriales."

Organizaciones sociales: incluye las organizaciones de iglesia, culturales, de derechos humanos, centros de madres, centros de padres y apoderados, organizaciones solidarias, de mujeres, deportivas, indígenas y juveniles.

Organizaciones políticas: se refiere básicamente a los comités de la Unidad Popular (CUP) y otros no clasificados.

Del total de casos calificados, casi el 58,5% (15.938) no se refirió a su participación en organizaciones, lo que no significa, cabe insistir, que no haya estado vinculado a alguna de ellas, sino a que ese tema no surgió espontáneamente en el curso de la entrevista personal. Un 29,8% (8.115) señaló haber participado en organizaciones gremiales; 5,3% (1.458), en organizaciones territoriales; y 3,1% (869) en organizaciones sociales. Sólo el 2,1% (575) declaró haber pertenecido a organizaciones políticas.

Distribución de víctimas de prisión política calificadas detenidas desde 11-09-73 al 10-03-90 según su participación en organizaciones al momento de la detención



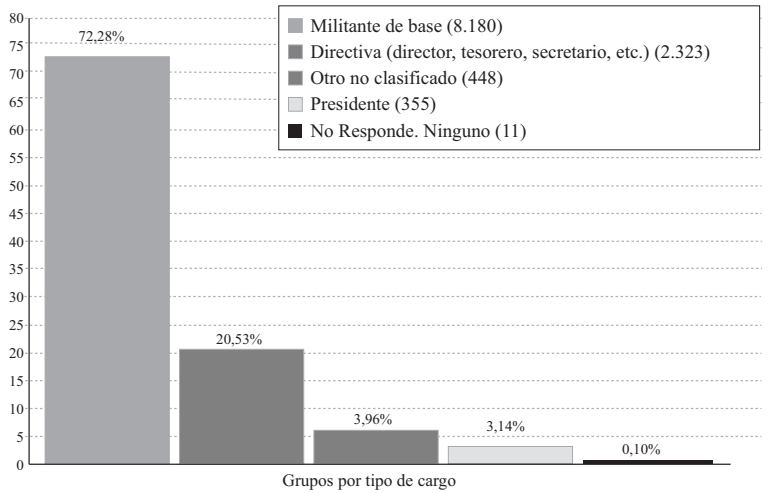
▪ Total de víctimas consideradas: 27.255.

Distribución de detenidos que declararon participación en organizaciones, según cargo desempeñado

Entre quienes declararon pertenencia a alguna organización, poco más del 72,3% (8.180), eran militantes de base y en calidad de tales,

formaban parte de alguna comisión de trabajo o desempeñaban ciertas tareas específicas. Aproximadamente el 20,5% (2.323) declaró haber tenido un cargo de responsabilidad dentro de su organización, como director, tesorero, secretario y el 3,1% (355) señaló haber sido presidente de la organización, al momento de su detención.

Distribución de víctimas de prisión política desde 11-09-73 al 10-03-90 que declararon participación en organizaciones según cargo desempeñado



- Total de víctimas consideradas: 11.317.

Síntesis

De la información aquí analizada es posible conocer las características comunes que representan a la gran mayoría de las víctimas calificadas por esta Comisión. De acuerdo a lo señalado, el grueso de ellas eran hombres jóvenes, entre los 21 y 30 años, que al momento de la detención se desempeñaban en actividades propias del trabajo calificado.

Entre aquellos que declararon filiación política, la mayoría corresponde a militantes de base de los partidos socialista y comunista. Y entre quienes manifestaron haber pertenecido a alguna organización, la mayoría dijo haber pertenecido a alguna de tipo gremial, en calidad de miembro de base.

Por otra parte, si se considera que cerca del 58% (15.771) de las víctimas tenían menos de 30 años al momento de la detención, cabe suponer que las consecuencias de la tortura y la prisión política mermaron el logro de las tareas y desafíos inscritos en dicha etapa del ciclo vital, a saber, el proyecto de vida familiar y laboral, junto con la reafirmación de la identidad social. En ese sentido, y considerando que las consecuencias de la prisión y de la tortura de cualquier tipo afectan y tienen iguales consecuencias en las personas que las experimentan, no es pertinente hacer distinciones de grado entre diferentes grupos etáreos, sino para precisar la etapa del desarrollo en que se inscriben.

Otro aspecto relevante dice relación con que algunas de estas personas sufrieron más de una detención. Si bien, como se estableció al comienzo del capítulo, los datos que aquí se han presentado corresponden a la primera detención, y que el grueso de las víctimas —83,6% (22.782)— fue detenida una sola vez, un 12,4% (3.380) de los casos calificados fueron detenidos en dos oportunidades y el resto, entre 3 y 9. También cabe destacar que las víctimas no fueron mantenidas en un solo recinto durante el período de tiempo que duró su detención. Es así como un 29% (7.897) estuvo en dos lugares durante su detención, aproximadamente un 21,8% (5.939) en tres, y casi un 19,5% (5.325) estuvo sólo en uno. De hecho, el promedio de recintos por detención es 2,9, es decir, cada víctima fue trasladada, en promedio, tres veces mientras estuvo detenida.

Perfil de las víctimas según períodos

Tal y como se pueden delinear las principales variables que describen el Perfil General de las Víctimas, también se pueden trazar distinciones a partir de los tres períodos que fueron definidos por la Comisión. Si bien ese ejercicio no pretende establecer correlaciones o diferencias "estadísticamente significativas" entre las variables y sus respectivos períodos, sí permite darle una identidad común a las personas que sufrieron tortura y prisión en las diversas etapas del régimen militar.

Del total de casos calificados por esta Comisión, el 67,4% (18.364) fueron detenidos y torturados entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 (primer período). Dicha cifra permite distinguir que más de la mitad de los declarantes ante esta Comisión fueron apresados en los días y en los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Sólo el 19,3% (5.266) de las víctimas sufrió detención y tortura entre el 1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1977 (segun-

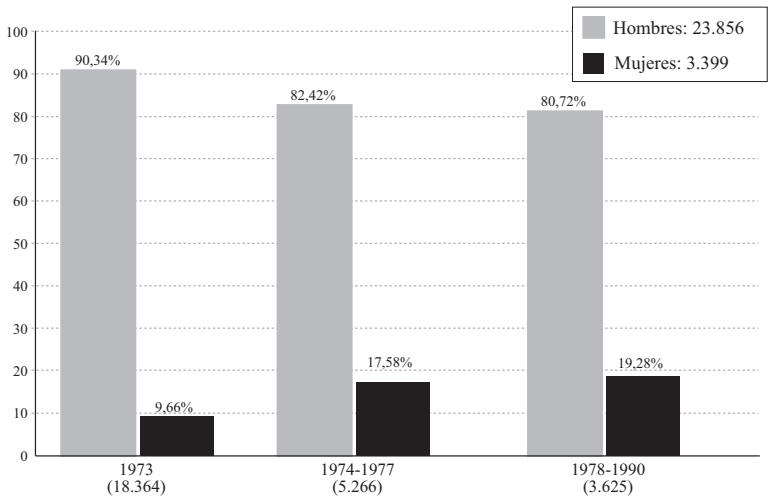
do período), y 13,3% (3.625) entre el 1 de enero de 1978 y el 11 de marzo de 1990 (tercer período).

De acuerdo a esos números y a las diferencias que ostentan, se vuelve pertinente precisar que, en lo sucesivo, cada una de las variables que se expongan serán descritas a partir del universo de víctimas de cada período y, por tanto, no corresponde comparar los períodos a partir de las cifras, sino más bien de los porcentajes que ellas representan.

Sexo

La distribución de los declarantes por sexo indica 87,5% de hombres y un 12,5% de mujeres en el Perfil General. El siguiente gráfico muestra la proporción que se alcanza para ambos sexos en cada período.

Distribución de víctimas de prisión política calificadas, por períodos según sexo



▪ Total de víctimas consideradas: 27.255.

A nivel general, se puede apreciar que las víctimas fueron mayoritariamente hombres a lo largo de los tres períodos diferenciados. Sin embargo, salta a la vista que el porcentaje de víctimas mujeres tuvo un sistemático crecimiento entre el primer período y el tercero, pues en el primero de ellos la proporción indica que, del total de víctimas, 90,3% son hombres y

9,7%, mujeres. En cambio, en el último período (entre el 1 de enero de 1978 y el 11 de marzo de 1990), el porcentaje de víctimas hombres alcanza a 80,7%, mientras que el de mujeres se duplica y llega a 19,3%.

Edad al momento de la detención

La distribución de las víctimas según los grupos etáreos definidos fue representativa del perfil general en cada uno de los períodos, y se mantuvo constante durante todo el régimen militar [...] Siempre el mayor porcentaje de víctimas [entre 51% y 63%] estuvo entre los 21 y los 30 años. Asimismo, el segundo porcentaje más alto siempre [entre 27% y 18%] estuvo entre los 31 y los 40 años*.

Actividad laboral al momento de la detención

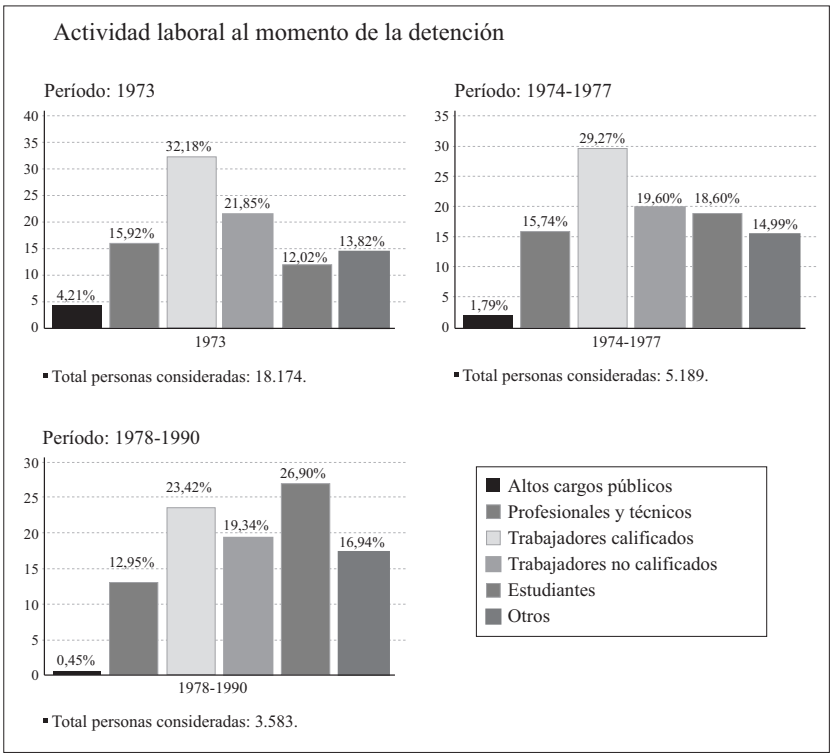
En cuanto a la actividad laboral de las víctimas al momento de la detención, también se pueden indicar algunos aspectos que permanecieron constantes y otros que se modificaron en el transcurso del tiempo. Para ello se consideraron aquellas categorías que en el Perfil general aparecen con los mayores porcentajes de víctimas, estos son: Trabajadores calificados, Trabajadores no calificados, Profesionales y técnicos; y Estudiantes. Se incluyó también, la categoría “Altos cargos públicos” para representar las modificaciones que la acción represiva tuvo respecto de estas personas. Las demás categorías que aparecen en el gráfico “Actividad laboral” en el Perfil General fueron agrupadas bajo la categoría de “Otros” porque los porcentajes de cada uno de ellas eran muy bajos.

Como puede observarse en la secuencia de gráficos que se presenta, durante el primer y segundo período, el mayor número de víctimas declaró que su actividad laboral era la de trabajador calificado. En ambos casos el porcentaje bordea el 30%, es decir, de cada cien víctimas, 30 eran trabajadores calificados (empleados, oficinistas, etc), bajando a un 23,4% en el tercer período.

Un factor que se mantuvo constante en los tres períodos, fue el porcentaje de víctimas que declararon ser trabajadores no calificados al momento de la detención. En todos los casos, y tal como queda al descubierto en el perfil general, aproximadamente 20 de cada cien víctimas correspondían a este grupo.

---

* Sólo se incluyen víctimas con fecha de detención y de nacimiento conocidas.



Por otra parte, cabe señalar que las mayores variaciones se describen en el porcentaje de víctimas que se encontraban estudiando al momento de la detención. En el primer período un 12% (2.185) declaró haber sido estudiante, en el segundo un 18,6% (965) y en el tercero, un 26,9% (964), es decir, si en el primer período de cada cien víctimas 12 eran estudiantes, en el tercero por cada cien, 27 eran estudiantes. Así, mientras el porcentaje de trabajadores no calificados se mantuvo y el de trabajadores calificados experimenta una pequeña reducción, el número de estudiantes fue creciendo en forma sistemática en relación con el universo de víctimas de cada período.

Por último, en cuanto a las víctimas que declararon desempeñarse en altos cargos públicos al momento de la detención, estas alcanzan un 4,2% (766) en el primer período, es decir, 4 de cada cien detenidos entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 eran personas con altas responsabilidades en el servicio público. Este porcentaje sufrió modificaciones a lo largo del tiempo, puesto que hacia el tercer período sólo un 0,4% (16) de las víctimas declaró haber estado en altos cargos públicos al momento de la detención. Esto significa que para el último período de cada 200 víctimas, sólo una tenía cargos de esa jerarquía.

Filiación política al momento de la detención

Distribución de detenidos según militancia política

Del total de casos calificados para cada uno de los períodos, alrededor del 30% de las víctimas señaló no haber tenido militancia política o, sencillamente, no se refirió al tema. En ese sentido, la distribución en este caso se hace a partir del 70% restante. De ese 70% hay un factor que se mantiene constante durante los tres períodos y dice relación con que el grueso de las víctimas declara haber tenido militancia política en alguno de los partidos eje de la Unidad Popular, es decir, el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS). Los partidos calificados como marxistas fueron proscritos por el DL 77*, No obstante, continuaron existiendo clandestinamente y sufrieron cambios importantes en su composición. Hubo revisiones profundas de sus proyectos y de su línea política durante los años del régimen militar, especialmente durante la década de 1980. Debido a ello, la militancia en tal o cual partido es un dato relativo y contingente, que requeriría de contextualizaciones, asunto que excede el propósito de este Informe. Todos los otros partidos políticos fueron disueltos en marzo de 1977.

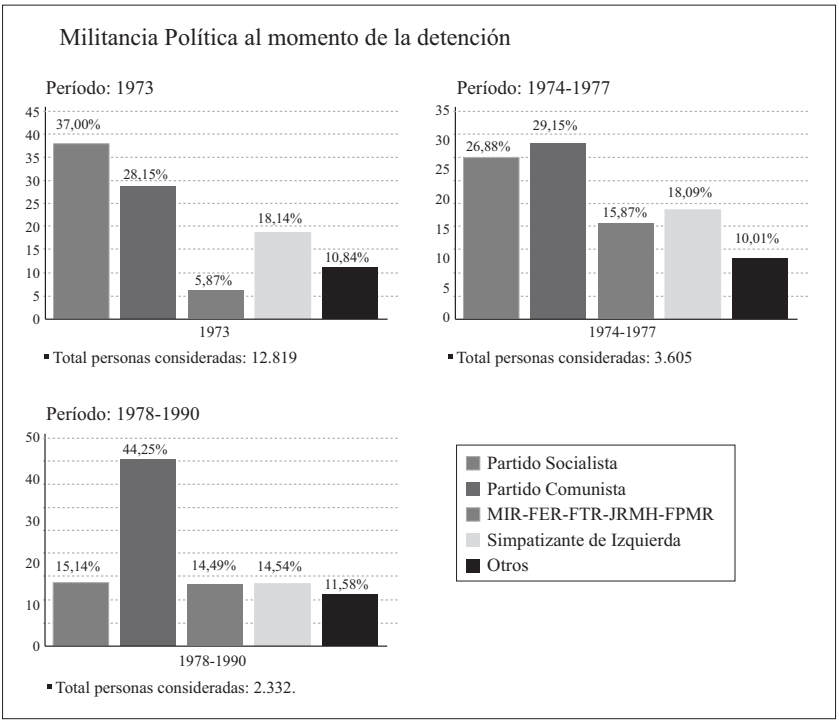
Como se puede constatar en los siguientes gráficos**, un aspecto que sí se modifica con el correr de los años se refiere a la proporción de víctimas que declaran haber militado en uno u otro de los partidos de izquierda: en el primer período definido por esta Comisión, el porcentaje de víctimas que declaró haber sido militante del Partido Socialista alcanza el 37% (4.743), mientras que el 28,1% (3.609) señaló haber sido militante del Partido Comunista; en el tercer período, en cambio, el 44,3% (1.032) de las víctimas declaró haber sido militante del Partido Comunista, y sólo el 15,1% (353) señaló haber sido miembro del Partido Socialista.

Asimismo, durante el primer período sólo un 5,9% (752) de las víctimas declara haber sido militante de movimientos de oposición armada, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR; el Frente de Estu-

---

* DL N° 77 "Declara ilícitos y disueltos los partidos políticos que señala", publicado en el *Diario Oficial* N° 28.675, de 13 de octubre de 1973. Por este decreto se prohibió y se declararon asociaciones ilícitas a los partidos que formaban la Unidad Popular: "los Partidos Comunista, Socialista, Unión Socialista Popular, Movimiento de Acción Popular Unitario, Radical, Izquierda Cristiana, Acción Popular Independiente" y a todas las organizaciones que sustentaran "la doctrina marxista". El DL establecía que el delito existía "por el sólo hecho de organizarse, promoverse o inducirse a su organización" y prohibía toda acción de propaganda, de palabra, por escrito, estableciendo su penalidad (arts. 2° y 3°).

** En este caso, la categoría "otros" reúne a: MAPU, Partido Radical, DC, Izquierda Cristiana y partidos de derecha.



diantes Revolucionarios, FER; el Frente de Trabajadores Revolucionarios, FTR. En el segundo período, en cambio, el porcentaje para estos grupos alcanza al 15,9% (572) de las víctimas, es decir, se triplica el porcentaje de personas que se reconocen como militantes de estos partidos y movimientos políticos.

Distribución de detenidos que declararon militancia política, según cargo desempeñado

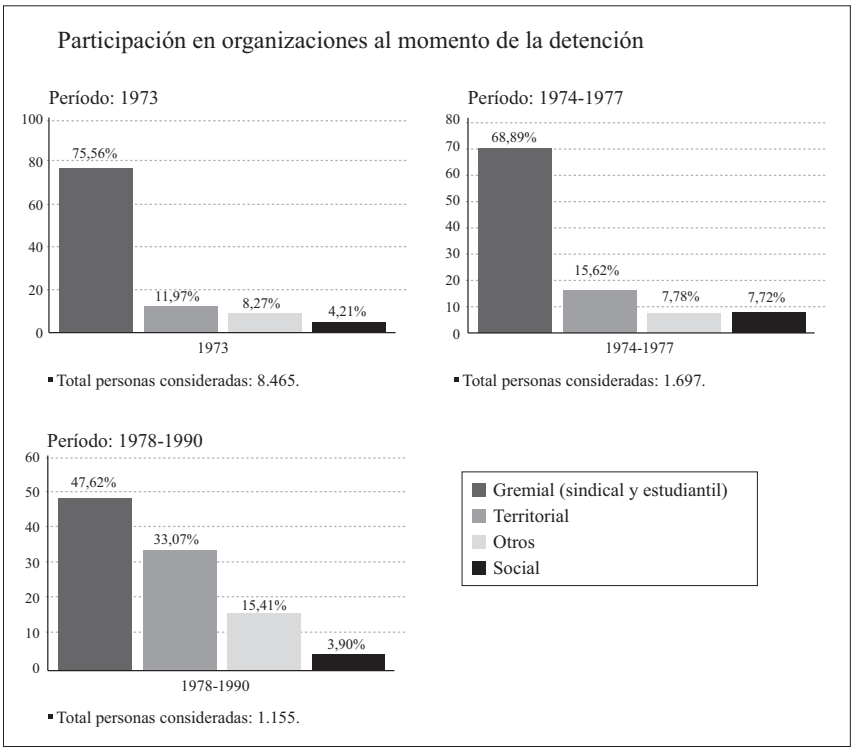
En los tres períodos, el porcentaje más alto de víctimas declaró haber sido militante de base al interior de su partido: en el primer período, 62,4%; en el segundo, 66,8%, y en el tercero, 70,2%.

Participación en organizaciones

Distribución de detenidos según participación en organizaciones

En todos los períodos, no más del 41,5% de los declarantes señaló espontáneamente haber participado en organizaciones de distinto tipo. De

ese porcentaje, la mayoría declaró haber estado vinculado al mundo gremial, es decir, al sindicato de algún organismo, servicio o empresa del estado, o a un movimiento estudiantil. En el primer período, 75,6% (6.396) de las víctimas declaró participación gremial; en el segundo, 68,9% (1.169), y en el tercero, 47,6% (550).



Como se puede observar, hacia el tercer período la participación en organizaciones de orden social crece exponencialmente: si en el primer período sólo un 4,2% (356) de las víctimas participaban en este tipo de organizaciones, en el tercero un 33,1% (382) de ellas lo hacía; en otras palabras, si en un comienzo sólo cuatro de cada cien participaban, hacia el final 33 de cada cien se declaraban miembros.

Distribución de detenidos que declararon participación en organizaciones, según cargo desempeñado

Por último, y con respecto a los cargos que las víctimas que declararon participación social en organizaciones dicen haber tenido, sólo se pue-

de constatar que durante los tres períodos no hubo mayores variaciones. En efecto, durante todo el régimen militar al menos el 68% de los declarantes señala haber sido miembro o participante de alguna comisión, el 27% señala haber participado de la directiva de la organización o en algún cargo de responsabilidad, y el 5% haber sido presidente de alguna.

[...]

VIII. Consecuencias de la prisión política y la tortura*

El impacto de la detención

La declaración de estado de guerra interna definió como enemigos a los partidarios del gobierno de la Unidad Popular y a los miembros de los partidos políticos de la izquierda chilena. Las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron rápidamente el control del país. Personeros del gobierno derrocado, dirigentes políticos, sociales y sindicales, profesores universitarios y otras personas de relevancia pública asociadas al gobierno depuesto fueron conminados a presentarse ante las nuevas autoridades. Las escuelas, las universidades, las oficinas, las fábricas, los asentamientos de la reforma agraria y los hogares de miles de familias fueron allanados para buscar armas. Miles de personas fueron arrestadas y recluidas en recintos deportivos, oficinas públicas, regimientos, barcos, recintos policiales y otros lugares que fueron habilitados para que funcionaran como centros de detención.

Las características de estas detenciones causaron un gran impacto en los afectados y en quienes presenciaron estas situaciones. El maltrato verbal a personas desarmadas fue un hecho generalizado. El despliegue desproporcionado de fuerza producía una profunda sensación de indefensión, de vulnerabilidad, desamparo e incertidumbre por tales actos. El desconcierto y el temor se amplificaban al constatar que no había instancia alguna para reclamar por el atropello y la arbitrariedad, ni siquiera para obtener la restitución o el resarcimiento de los enseres, maquinarias e instrumentos de trabajo destruidos.

En los meses posteriores al golpe militar, los detenidos se multiplicaban y los frecuentes traslados de prisioneros dificultaban el trabajo de sus familiares empeñados en seguirles el rastro para proteger sus vidas. Las autoridades informaban de las detenciones como hechos consumados y legítimos ante los cuales no había instancias de apelación. La información

* Capítulo VIII del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (extracto).

oficial justificaba las acciones represivas como un costo inevitable en procura de la salvación de la patria, buscaba el respaldo y la adhesión de la ciudadanía.

Muchas personas permanecieron inicialmente detenidas por días, semanas o meses, sin cargos, esperando con angustia el desenlace de su incierta situación. Un número significativo de ellas fueron torturadas antes de ser liberadas. Otras, torturadas también, permanecieron recluidas durante meses en cárceles y otros recintos a lo largo del país, sin que nunca se les iniciara proceso alguno; inclusive, muchos presos, después de que fueran puestos a disposición de las fiscalías militares, eran trasladados por períodos de meses y aún de años a recintos carcelarios, sin habérseles instruido ningún proceso en el intertanto.

Los miles de detenidos sometidos a consejos de guerra sólo representan una parte del total de personas que sufrieron prisión política. Los cargos imputados variaban desde delitos escasamente comprobables hasta la amplificación de supuestas conspiraciones. Éstas se basaban en situaciones lícitas hasta el 11 de septiembre de 1973, como la militancia política en partidos de izquierda. Las acusaciones calificaban a los detenidos como agitadores peligrosos y como una amenaza para la patria, y en muchos casos se les atribuía la comisión de innumerables delitos. En algunos lugares estas inculpaciones recibieron abundante publicidad en la prensa local, sin que los afectados pudieran defenderse de la estigmatización pública. A la privación de libertad se agregó la agresión a su honra y dignidad. En reiteradas oportunidades ciudadanos corrientes, padres y madres de familia, fueron denigrados por el sólo hecho de haber sido detenidos, y además se les calificaba como extremistas, como delincuentes subversivos, como un peligro para la sociedad, causando menoscabo, de paso, a sus familiares.

Según lo relatado por quienes concurrieron ante esta Comisión, la sorpresa ante la brutalidad que debieron padecer intensificó el impacto de la situación, especialmente en el caso de los que fueron detenidos en 1973. La mayoría señaló que, al ser liberados, casi no se refirieron a lo que se vieron forzados a padecer, ni siquiera en el ámbito de sus relaciones más cercanas. Algunos relataron que debieron padecer o presenciar interrogatorios, torturas y malos tratos de todo tipo, y que experimentaron hambre, frío y hacinamiento. A consecuencia del horror vivido, incluso a una distancia de décadas, cuando declararon ante esta Comisión, les resultó difícil recordar y poner palabras a sus emociones y miedos.

Sin embargo, en ese tiempo, las historias circulaban de boca en boca, difundiendo rumores de torturas, de fusilamientos, de detenidos que eran trasladados y cuyo rastro se desvanecía. La brutalidad sin precedentes

que surgía de los relatos los hacía inverosímiles para muchos y no era posible, en la época en que ocurrieron, verificar si se trataba de hechos ciertos. Los medios de comunicación informaban escuetamente de los resultados de los consejos de guerra y de las ejecuciones y no era fácil dimensionar lo que sucedía efectivamente. La falta de información, acompañada de rumores alarmantes, intensificaba el miedo entre quienes se juzgaba que estaban bajo amenaza. Su percepción de vulnerabilidad, desprotección y desamparo ante la arbitrariedad y la injusticia era creciente. El silencio generalizado sobre lo vivido alimentaba el miedo. La indefensión de quienes habían sido autoridades políticas, ministros de Estado, rectores y profesores de universidades, diputados, senadores, dirigentes sindicales, amplificaba la sensación de desprotección legal. Los derechos reconocidos hasta entonces no estaban garantizados. Para muchos, el mundo que los rodeaba se tornó inseguro y amenazante, y se intensificó la angustia por su propia vida, por la vida de sus familiares, de sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo o de filiación política.

La mayoría de los detenidos no tuvo defensa ni recibió apoyo de ningún organismo de derechos humanos. Si bien el Comité Pro Paz empezó a prestar asistencia desde octubre de 1973 en Santiago, y hubo ayuda de obispos, pastores y profesionales en distintas ciudades del país, la magnitud de la situación superó con creces la posibilidad de que pudieran prestar auxilio al gran número de personas que lo requerían. La defensa legal de personas procesadas en consejos de guerra, la ubicación de detenidos cuya aprehensión no era reconocida, el entierro de personas que habían sido ejecutadas, así como el apoyo para que algunas personas cuyas vidas corrían peligro pudieran salir del país, dieron origen a las líneas de trabajo del Comité Pro Paz (1973-1975) y, luego, de la Vicaría de la Solidaridad. Muchas personas también requirieron atención médica y psicológica, la que se incorporó posteriormente a la asistencia solidaria en Santiago. Sin embargo, todo se hacía insuficiente ante el gran número de personas detenidas y torturadas en todo el país.

Los organismos de derechos humanos documentaron las situaciones de quienes acudieron a solicitar ayuda y las acciones realizadas en su favor. Esta información permitió, entre otras cosas, establecer un perfil de las personas atendidas y de las situaciones que las apremiaban, aunque no hubiese claridad acerca del universo de quienes fueron afectados. No existe información sobre el número de detenidos de todo el período. Cuando esta Comisión inició su trabajo, se disponía de estimaciones efectuadas sobre la base de distintas fuentes, tales como los recursos legales presentados en los tribunales, informaciones de prensa, información oficial del propio régi-

men militar, denuncias ante los organismos internacionales y registros de los organismos de derechos humanos de la época, incluida la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Posteriormente, las agrupaciones de ex presos políticos hicieron catastros locales y regionales. Aunque carentes de precisión, esas cifras tentativas invariablemente describían un fenómeno de grandes proporciones.

En todo el país, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura recibió testimonios de personas que relataban lo que les sucedió cuando fueron detenidas por agentes del Estado y fueron acusadas de delitos políticos, entre 1973 y 1990. Para la mayoría habían pasado casi treinta años, pero el dolor, la humillación y el miedo ante las brutalidades padecidas aún no se habían extinguido. Tampoco la angustia por haber presenciado el sufrimiento de personas queridas o de otros seres humanos sometidos, como ellos mismos, a las peores atrocidades. Para otros, la evocación de lo sucedido décadas atrás implicaba exponerse al dolor y la vergüenza. Por estas razones, a muchos les costó tomar la decisión de declarar ante la Comisión. Casi todos consideraban que la prisión y la tortura habían tenido efectos devastadores en sus vidas. A los trastornos de su salud física y mental se sumaba la perturbación de sus relaciones sociales, afectivas y sexuales, que llegó a deteriorar, a menudo, los vínculos con sus familiares y sus parejas, lo que había causado, en muchos casos, rupturas insalvables.

La inmensa mayoría perdió el trabajo, los medios de subsistencia, las condiciones mínimas para poder sobrevivir e, incluso, la vivienda. De improviso, la vida se les volvió extremadamente adversa. Al encontrarse denigrados, excluidos y acosados, muchos decidieron partir al exilio. Quienes se quedaron, debieron sobrellevar la estigmatización y la persecución en sus lugares de residencia. Algunos fueron detenidos varias veces y debieron mudarse a otras ciudades. Otros, al permanecer en sus pueblos, tuvieron que convivir con sus torturadores, algunos de los cuales siguieron desempeñando funciones públicas. En estas condiciones, resultó muy arduo retomar el curso de sus vidas. Hay quienes lograron sobreponerse a la situación, pero otros, abrumados por los abusos cometidos contra sus personas y sus secuelas, no pudieron sobreponerse y salir adelante. Los testimonios aluden a la pérdida irreparable de las posibilidades de progreso y bienestar que muchas personas tenían a su alcance, en virtud de su formación, de su esfuerzo y de la posición que habían alcanzado. Para muchos, el futuro estaba lleno de expectativas y sueños; en especial para aquellos que provenían de familias de trabajadores y campesinos, que esperaban que sus

condiciones de vida mejorasen progresivamente. Habían accedido a la educación superior, a capacitación profesional y a mejores condiciones salariales y laborales. Esperaban lograr ascensos en el trabajo, terminar los estudios, tener una profesión, mejorar su calidad de vida, dar mejores oportunidades de formación y estudio a sus hijos, tener una vejez digna.

El quiebre de la democracia no solamente afectó a quienes fueron detenidos y torturados por razones políticas. Afectó también a la integración social, a las posibilidades de trabajo, de participación de amplios sectores. Con la proscripción de los partidos políticos de la Unidad Popular y la persecución a numerosas organizaciones sindicales y sociales, quienes formaban parte de ellas perdieron los referentes institucionales, sociales y, en muchos casos, los referentes ideológicos que habían orientado el sentido de sus vidas en el marco de experiencias colectivas. Por otra parte, desintegradas o debilitadas sus redes de apoyo, se hizo inviable su inserción social y laboral con las condiciones anteriores y se frustraron sus expectativas de futuro. Esto marcó, para la mayoría de quienes fueron detenidos en 1973, el colapso de sus proyectos.

Concurrir a prestar testimonio ante la Comisión implicó revivir emociones intensas de miedo, humillación y desolación, ligadas indisociablemente al impacto traumático de la detención y la tortura, que incidió en la familia, en la relación de pareja y especialmente en los hijos. Para muchos, ese sufrimiento nunca fue totalmente "cosa del pasado", tal como señalaron ante esta Comisión, que percibió que el testimonio reflotaría situaciones sumergidas a lo largo de los años transcurridos. No pocos habían logrado recuperar la "normalidad" de la vida cotidiana y excluir todo lo que pudiera perturbarla. Pero las huellas traumáticas eran evocadas por estímulos cotidianos que surgían de imágenes, sonidos, voces, incluso del llanto de los propios hijos, de fechas o recuerdos que desplomaban las precarias defensas erigidas. Por eso, la decisión de concurrir ante esta Comisión y dar su testimonio, fue difícil para muchos.

Las personas que enviaron su testimonio desde el país de exilio donde reconstruyeron sus vidas lo hicieron no sin dificultades; otras se acercaron en nombre de sus padres o de sus esposos fallecidos. En la reconstrucción personal de cada historia solía quedar de manifiesto la dimensión irreparable del trastorno sufrido. Pero el acto de recordar sacó también a la luz las fortalezas de quienes lograron sobreponerse a las condiciones más adversas y concedió valor a los gestos y a las acciones de apoyo recibidos en los momentos más duros, tanto en Chile como en el extranjero. Los testimonios citados en este Informe representan la emer-

gencia a la luz pública de algunas situaciones que hasta ahora en gran parte permanecieron desconocidas.

Es pertinente consignar que esta Comisión recibió el testimonio de 35.868 personas, quienes concurrieron voluntariamente a declarar durante un plazo de seis meses y calificó a un total de 27.255. Aun cuando esta cifra no es un censo de las víctimas y su representatividad estadística resulte imprecisable, el número de concurrentes da cuenta de lo ocurrido en el país y no difiere de la información recogida en numerosas querellas por torturas presentadas en los tribunales del país, especialmente durante la década de 1980. Quienes prestaron testimonio se refirieron directamente a las consecuencias de su detención, pero, de paso, también reflejaron situaciones que afectaron a muchas otras personas. Por cada detenido y torturado había una familia, un grupo de amigos, una red social que se resintió con el conocimiento de lo ocurrido, y que experimentaron y contagiaron el temor y la inseguridad.

Las consecuencias en las víctimas

Se violaron los derechos humanos de los detenidos al someterlos a las condiciones de prisión política y de tortura que han sido descritas en otros capítulos de este Informe. De acuerdo con el testimonio de los miles de personas que declararon a lo largo de todo el país, esa experiencia representó una fractura o un quiebre vital que atravesó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas directas y de sus familiares; en muchos casos, las huellas de esa experiencia traumática les acompañan hasta el presente. La descripción y los análisis de los efectos de la prisión política y la tortura han sido elaborados a partir de los testimonios en conocimiento por esta Comisión, cuya concordancia permite identificar algunas características generales. Para comprender el significado y el impacto emocional de esa experiencia, es preciso identificar algunos elementos del contexto político que definieron y agravaron ese impacto, según los testimonios recibidos:

• Para la mayoría de las víctimas que fueron objeto de represión, el primer impacto fue descubrir que la agresión, la tortura y el riesgo de muerte provenían de los agentes del Estado.

• Un segundo aspecto fue la indefensión y el desamparo ante el poder armado y coactivo del Estado, más aún cuando la mayoría de los chilenos, por tradición histórica, tenía una noción de sus derechos y sus garantías, y una cierta expectativa en las funciones protectoras y de defensa

de las autoridades y de la policía. Esta experiencia violentó un aprendizaje social internalizado acerca de la seguridad y confianza en las instituciones y autoridades, y potenció la angustia de las víctimas ante la total indefensión en la que se encontraban. Aunque, por cierto, los grados de confianza eran variables, no formaba parte de las expectativas de la gente común que la agresión brutal y la tortura provinieran de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

• En esta situación desmedrada, los afectados recurrieron a las iglesias y a los organismos de derechos humanos, entidades que asumieron la defensa de los perseguidos y exigieron a las autoridades el respeto de los derechos humanos, lo que permitió modificar, en parte, ese contexto de indefensión absoluta.

• Las torturas se aplicaban casi siempre, en lugares donde el detenido se encontraba incomunicado o en recintos secretos de detención, sin límites de tiempo ni restricciones en los procedimientos, y sin que las autoridades reconocieran esas prácticas, pese a que ellas eran empleadas a escala nacional por agentes del Estado o personas a su servicio.

• En muchos casos se negaba la detención del prisionero, sin que los abogados o aquellos contados jueces que lo intentaron, pudiesen intervenir en favor del detenido. Era precisamente en ese período de incomunicación, que podía durar semanas o meses, cuando el detenido sentía que estaba expuesto a la muerte.

• La inminencia de la muerte produjo el colapso de las estructuras defensivas normales y la angustia se apoderó de los detenidos de manera permanente. De ahí que éstos reiteren el hecho de haber quedado *traumatizados*.

La tortura operó como una herramienta de control político mediante el sufrimiento. Independientemente de la participación directa o indirecta en hechos que pudieran ser constitutivos de delito, la tortura fue un recurso del poder durante todo el período del régimen militar. Buscaba amedrentar, someter, obtener información, destruir su capacidad de resistencia moral, física, psicológica y política para oponerse al régimen gobernante. Para *ablandar* a las personas —según la jerga de los torturadores—, se recurrió a distintos métodos de tortura, ya descritos en capítulos anteriores. Baste recordar que las víctimas fueron humilladas, amenazadas y golpeadas; expuestas al frío extremo, al calor y al sol hasta provocar la deshidratación; a la sed, al hambre, a la privación de luz, a posiciones forzadas, al colgamiento por largas horas, al impedimento de conciliar el sueño; sumergidas en aguas servidas hasta el límite de la asfixia; sometidas a descargas eléctricas en las partes sensibles del cuerpo; vejadas sexualmente, cuando no

violadas por personas y animales, u obligadas a presenciar la violación y la tortura de seres queridos.

Al socavar sus recursos morales, psicológicos y físicos, al agredir su cuerpo en un ambiente aislado y en la más total indefensión, se pretendía forzar al prisionero a *hablar* y *delatar*, configurando una *confesión*. Intentando evitar la tortura, muchos se autoinculparon de variados delitos e involucraron a otros. Considerado y tratado como un *enemigo*, el objetivo principal era aniquilarlo, llevando al sujeto al horror de una experiencia límite y a la destrucción de sus lealtades. Por todo ello, la tortura afectó al sentimiento de dignidad e integridad personal de las víctimas. [...]

IX: Propuestas de reparación*

[...]

Medidas recomendadas

Las medidas recomendadas por la Comisión se agrupan en tres grandes categorías: medidas de reparación individuales que van en directo beneficio de las víctimas; medidas simbólicas y colectivas, y medidas institucionales.

Medidas de reparación individuales

Éstas se proponen para las personas cuyo nombre ha sido incluido en el listado de víctimas que contiene este Informe y que se hace público por la obligación de transparencia que impone la posibilidad de acceder a los beneficios que luego se sugieren.

Sin embargo, considerando que las personas que presentaron su testimonio a esta Comisión sólo se enterarán de su calificación mediante la publicación de su nombre en el presente Informe, se propone que se abra un plazo para que las personas que presentaron sus antecedentes y no fueron reconocidas por la Comisión en calidad de víctimas de prisión política y tortura, soliciten a la instancia que se determine, la reconsideración o apelación de dicha decisión aportando nuevos antecedentes que permitan reevaluarlos.

Las medidas de reparación individuales persiguen ser signos concretos de la voluntad de reparación de parte del Estado, al restituir a las personas en sus derechos o compensando los perjuicios sufridos por ellas.

* Capítulo IX del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (extracto).

Para tal efecto, se propone un conjunto de medidas que intentan responder integralmente a las necesidades de esas personas, considerando las consecuencias de la prisión política y la tortura, y el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos.

Las medidas propuestas a continuación incluyen los ámbitos jurídico, económico, de salud, de educación y de vivienda.

Medidas de reparación en el ámbito jurídico

Estas medidas persiguen el restablecimiento de los derechos conculcados como consecuencia de procesos judiciales, muchos de los cuales carecieron de las garantías mínimas del debido proceso, como se ha señalado en los capítulos anteriores del Informe, basados sólo en declaraciones extrajudiciales obtenidas bajo tortura o en evaluaciones parciales de medios de prueba. Si bien la Comisión no puede pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los imputados en dichos procesos, por carecer de facultades jurisdiccionales, sí es posible señalar que dichos procesos carecen de valor, de acuerdo a las exigencias mínimas que impone un juicio imparcial y justo, particularmente aquellos que fueron seguidos por la Justicia Militar y sus consejos de guerra.

Considerando que no es posible revisar los numerosos procesos judiciales, pero que es posible revertir las consecuencias perniciosas que dichos procesos aún tienen en los derechos de las víctimas, esta Comisión recomienda:

• La eliminación de los antecedentes prontuariales de las personas calificadas por procesos que hayan sido objeto del pronunciamiento de la Comisión, y restitución de derechos civiles y políticos que deriven de penas accesorias dictadas en procesos respecto de los cuales la Comisión se haya pronunciado. Esto debería realizarse a través de una gestión que requiera sólo de la presentación de la solicitud de la persona afectada ante el organismo competente, a quien se le informará luego de la conclusión de la gestión.

• La revisión de todas las órdenes de arresto o de arraigo que estuvieren pendientes respecto de personas calificadas por la Comisión en relación a procesos cerrados, y dejarlas sin efecto, oficiando a los órganos policiales respectivos. A la vez se propone la exigencia de poner término a órdenes de detención, arraigo u otras medidas cautelares, al sobreseer o archivar procesos judiciales, y la obligación de oficiar de ello a la policía, estableciendo la responsabilidad funcionaria por la omisión, de forma de

asegurar que no existan restricciones a la libertad de las personas por procesos cerrados.

• Apoyar las iniciativas que se han impulsado en materia de reconocimiento de la nacionalidad a los hijos de chilenos nacidos en el exterior.

• Otorgar la posibilidad a los hijos y nietos de víctimas reconocidas por el presente Informe de ser eximidos del servicio militar, cuando así lo requieran, asimilándolos a lo señalado en la ley 19.123 para los hijos y nietos de víctimas de otras violaciones a los derechos humanos.

Medidas de reparación en el ámbito económico

Como forma de compensar el daño causado a las víctimas por actos de agentes del Estado, la Comisión sugiere una pensión indemnizatoria no inferior a los beneficios económicos reconocidos a las víctimas de otras violaciones a los derechos humanos por la Ley 19.123 y sus modificaciones posteriores. Se recomienda como fecha de inicio del pago el día 11 de mayo de 2004, fecha de la conclusión del plazo de presentación de antecedentes a la Comisión.

Las características de la pensión indemnizatoria propuesta son las siguientes:

• Una pensión de por vida a las personas reconocidas por la Comisión como víctimas, que sea transmisible, en forma vitalicia y en un porcentaje no inferior al 75%, al cónyuge, o a convivientes con quienes hubieran tenido hijos, sea que las víctimas directas hayan fallecido con anterioridad o con posterioridad a la entrega de su testimonio a la Comisión.

• En caso de haber fallecido la víctima directa y de no existir viuda o ex conviviente con hijos, se propone el pago de un porcentaje de la pensión indemnizatoria a los hijos de la víctima que sean menores de 25 años o declarados inválidos, hasta el cumplimiento de la edad señalada o de por vida, respectivamente.

• Se propone una categoría especial, distinta de las personas que fueron objeto directo e inmediato de la prisión política, que comprende a los hijos nacidos en cautiverio y a quienes fueron detenidos con sus padres y eran menores de edad a la fecha de esa detención. La Comisión recomienda el pago de una indemnización por una sola vez equivalente a lo que se establece en la modificación reciente a la Ley 19.123.

La Comisión propone un monto de reparación económica común para todas las víctimas, sin considerar la duración de la prisión o la intensi-

dad de las torturas. La masividad de los hechos conocidos por ella y el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrieron hacen prácticamente imposible generar el conocimiento empírico necesario para justificar una reparación diferenciada. Se ha evaluado considerar la duración del período de privación de libertad, pero dicho criterio generaría una diferencia injusta con aquellas personas que permanecieron sólo algunos días o meses detenidas, habiendo sufrido intensas torturas en dicho período, especialmente en los primeros meses después del golpe de Estado, y que representan la mayor proporción de víctimas; o con aquellas personas detenidas por la DINA. Además, la comprobación exacta de la duración de la privación de libertad es muy difícil de establecer con certeza, lo que hace imposible aplicar este criterio.

Tampoco es posible proponer una reparación diferenciada en función de las secuelas que la tortura ha tenido para cada víctima, pues el tiempo transcurrido impide determinar con precisión la relación de causalidad directa en un número tan grande de casos. Si bien podría hacerse en aquellos casos más documentados, se generaría una discriminación en contra de aquellos que no recibieron cuidados profesionales inmediatamente después de recuperar su libertad, que, por lo general, se trata de aquellos más pobres o con menos acceso a redes de protección.

En consecuencia, debido al carácter masivo de los casos de prisión política y tortura conocidos por esta Comisión, la diferente extensión de los períodos de privación de libertad, las variadas formas de tortura y la dificultad de reunir medios que permitan verificar para cada persona la magnitud del daño sufrido, aquí se propone no hacer distinciones en cuanto al monto de la reparación económica, pues se carece de datos que permitan justificar una reparación diferenciada. La Comisión ha podido formarse la convicción moral de la prisión política y tortura sufrida por todas las personas que han sido reconocidas como víctimas. Este es un dato sólido tras la propuesta de reparación común.

Medidas de reparación en el ámbito de la salud

La mayoría de las personas que acudieron a prestar testimonio a esta Comisión manifestaron que las torturas sufridas dejaron secuelas en su salud física y psicológica que las acompañan hasta el día de hoy. Señalaron, además, que en la mayoría de los casos han carecido de tratamiento oportuno.

Como se señaló en el capítulo de las Consecuencias de la Prisión Política, las víctimas de torturas recordaron haber sufrido varios tipos de

secuelas interrelacionadas. Señalaron que después de la tortura muchas se deprimieron y se enfermaron. Una gran proporción manifestó que no han podido superar esas afecciones. Las consecuencias psicológicas, que van desde cuadros reactivos inmediatos a consecuencias de largo plazo, fueron reiteradas por la inmensa mayoría de los declarantes, quienes señalaron, además, que el impacto que tuvo en ellos alcanzó también a sus grupos familiares.

Ello explica que una de las necesidades más intensamente mencionadas por las víctimas y por las organizaciones de derechos humanos recibidas por la Comisión fue acceso a la salud. El Ministerio de Salud ha desarrollado, desde 1991 el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), que ha tenido la misión de acoger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La aprobación reciente de la ley que institucionaliza el PRAIS garantizará la atención de estas víctimas durante todo el tiempo que lo requieran.

Un número significativo de víctimas dijeron estar inscritas en el PRAIS, pero que no han podido acceder a sus servicios, especialmente en programas de salud mental, porque carece de recursos para atenderlas.

Como se señala en la reciente modificación de la Ley 19.123, es necesario que el Ministerio de Salud disponga de recursos para la operación del Programa de Reparación y Atención de Salud, PRAIS, a fin de poder brindar atención médica reparadora, integral y gratuita, tanto física y como mental, en los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud o que estén adscritos a él, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por esta Comisión y a sus familiares directos.

Medidas de reparación en el ámbito educacional

Muchas personas no pudieron continuar sus estudios luego de recuperar su libertad, ya sea por haber sido excluidas de los planteles educacionales, por haberse afectado seriamente su fuente de ingresos o por el gran impacto que la tortura provocó en ellas. Por otra parte, son muchos los testimonios recibidos por esta Comisión de personas que señalan que, a raíz de estos hechos, sus hijos no pudieron completar su educación de acuerdo a las expectativas que tenían, especialmente por las graves consecuencias en la vida laboral de las víctimas, que les habían impedido financiar dichos estudios. Considerando estos hechos, se recomienda:

• El desarrollo de un programa que permita finalizar los estudios básicos, medios o universitarios que cursaban en el momento de su deten-

ción, para aquellas víctimas que acrediten que, con motivo de su detención, debieron interrumpirlos.

• El otorgamiento de becas de estudio para los hijos de víctimas directas en condiciones similares a las medidas de reparación que en este sentido han sido aprobadas por ley para los hijos de otras víctimas a violaciones a los derechos humanos.

Medidas de reparación en el ámbito de la vivienda

Una de las consecuencias de la prisión política y tortura constatadas por la Comisión es el fuerte impacto que estos atropellos tuvieron sobre la vida laboral de las víctimas, implicando una merma muy significativa en sus ingresos y en su desarrollo socioeconómico. Ello ha significado que muchas personas se encuentren en situaciones de carencia y pobreza. Con el fin de asegurar ciertas condiciones mínimas de subsistencia la Comisión estima importante facilitar el acceso a la vivienda de quienes se encuentran en tal condición. Por esto se propone:

• Otorgar una bonificación especial a aquellas víctimas que no hayan accedido a una vivienda a través del subsidio estatal, carezcan de ella y estén en situación de precariedad habitacional.

Medidas de reparación simbólicas y colectivas

Estas medidas están dirigidas a la reparación moral y de la dignidad personal de las víctimas, a su reconocimiento como tales por el resto de la sociedad y al refuerzo del compromiso de la comunidad nacional en el respeto y la intangibilidad de los derechos humanos. Ellas suponen reconocer el hecho de que la reparación no sólo atinge a las víctimas individualmente consideradas o de que se trata de un deber exclusivo de los órganos del Estado hacia ellas, sino que es algo que compromete a toda la sociedad. Tienen por objeto asegurar que hechos como los expuestos en este Informe no se repitan y colaborar al esfuerzo por lograr una convivencia entre los chilenos basada en el respeto de la dignidad de cada persona.

Lo relatado en este Informe, con todo su dolor e injusticia, es algo que no se puede y no se debe olvidar. Las víctimas y sus testimonios obligan a recordarlo. No obstante, a pesar de lo terrible que fue, puede ser una oportunidad de aprendizaje de cómo vivir en sociedad. Reconocer lo sucedido permite fortalecer el compromiso social acerca de no aceptar, en ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto, el uso de la tortura, que

violenta la dignidad humana no solamente de la víctima sino también del victimario, como una práctica que inflige daños físicos y psicológicos intolerables, que generan secuelas de largo plazo que afectan a las personas y sus familias, pero también a la convivencia social. Ha sido motivo de reflexión en la Comisión el impacto en las personas y en las familias de quienes se vieron involucrados en estos hechos como perpetradores, cuya degradación es una secuela social grave. La sociedad no puede tolerar la práctica de la tortura ni le puede exigir a sus agentes policiales o militares realizarla.

Ésta es también una oportunidad para el encuentro de la comunidad nacional, en que todas las personas sean reconocidas como tales, en su dignidad y derechos. Por ello, ocupa un lugar primordial dentro de las medidas que se proponen no sólo el reencuentro de la actual generación de chilenos, sino también de las futuras generaciones, a través de la difusión, promoción y educación en derechos humanos.

Las medidas propuestas se agrupan en cuatro subcategorías: garantías de no repetición y medidas de prevención; gestos simbólicos de reconocimiento y encuentro; reconocimiento de la memoria, y difusión, promoción y educación en derechos humanos.

Garantías de no repetición y medidas de prevención

Estas medidas comprenden modificaciones a la legislación nacional, mediante la incorporación de normas de derecho internacional de derechos humanos que aspiran a garantizar que no se repitan violaciones a estos derechos. Se busca establecer garantías jurídicas que refuercen y formalicen en las instituciones el compromiso de no repetición de los dolorosos hechos relatados y de respeto a la dignidad de las personas. Tales garantías se refieren tanto a situaciones como las descritas en este Informe como a cualquier otro tipo de violaciones de los derechos básicos.

No puede volver a repetirse una situación en que se emplee el derecho y se dicten normas que permitan privar de libertad a personas bajo condiciones inaceptables, sin garantías del debido proceso, o que faciliten el uso de la tortura gracias a largos períodos de incomunicación, a la aceptación del valor probatorio de confesiones extrajudiciales, o al juzgamiento por tribunales que carecían de la independencia para adoptar medidas de efectiva protección a las personas detenidas. Por ello es muy importante establecer con claridad principios, normas y mecanismos jurídicos de protección de los derechos, recogidos de la experiencia nacional e internacional, como las que se presentan a continuación:

1. Ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas e incorporación de este delito a la legislación nacional.

2. Ratificación de la Convención sobre Tribunal Penal Internacional y su incorporación a la legislación nacional.

3. Ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad.

4. Sometimiento de los Tribunales Militares de tiempo de guerra a la Superintendencia de la Corte Suprema y revisión del Código de Justicia Militar, a fin de asegurar la existencia de garantías del debido proceso en los procedimientos de tiempo de paz y de guerra, la limitación de la competencia a delitos estrictamente militares y cometidos por militares, así como su concordancia con los principios establecidos en la Reforma Procesal Penal adoptada por el país. Se recomienda revisar ese cuerpo normativo a fin de suprimir cualquier norma que pudiera amparar o permitir la perpetración de violaciones a los derechos humanos y reforzar en él el respeto de tales derechos. Asimismo, garantizar la práctica de diligencias en recintos militares por parte de jueces y fiscales ordinarios.

5. Dictación de una ley que establezca los derechos y deberes de las personas privadas de libertad, que tipifique las faltas y delitos, y las sanciones correspondientes, así como procedimientos para determinarlos que aseguren imparcialidad, para asegurar que las personas legítimamente privadas de libertad no puedan ser sometidas a apremios o a torturas y que existan recursos efectivos en caso de que ello ocurra.

6. Revisar la normativa relativa a procedimientos policiales y al procedimiento penal a fin de excluir cualquier posibilidad de aplicación de torturas. Tiene especial relevancia en esta materia la posibilidad de verificación del estado de salud de los detenidos y el nulo valor probatorio que el nuevo Código Procesal Penal reconoce a las declaraciones extrajudiciales, principio que debe mantenerse y ampliarse al procedimiento militar.

7. Revisión de la normativa constitucional y legal sobre estados de excepción constitucional, a fin de regular en forma restrictiva la posibilidad de incomunicación administrativa de los detenidos, permitiéndose siempre la visita de médicos y abogados a los detenidos, y la procedencia del recurso de amparo, con el objeto de verificar que las condiciones de privación de libertad ordenadas en virtud de dichos estados sean acordes con las exigencias de respeto al derecho a la integridad física y psíquica de las personas.

Gestos simbólicos de reconocimiento y encuentro

Uno de los aspectos más dolorosos consignados en los relatos de las personas entrevistadas por la Comisión es la falta de reconocimiento de

parte de la sociedad de lo que les ocurrió, de su marginación e invisibilidad. La sociedad debe reconocer lo sucedido para poder aprender, y ello debe traducirse en gestos concretos hacia quienes sufrieron en carne propia la prisión política y la tortura.

Por eso se propone:

1. El reconocimiento público por parte de las instituciones del Estado, así como de todo aquel que comprometió su responsabilidad o se sienta interpelado por los hechos descritos en este Informe, de lo ocurrido; de su compromiso de no repetición y de promover el respeto a los derechos de todas las personas.

2. El establecimiento de una fecha de conmemoración del compromiso con el respeto a los derechos humanos, como una forma de renovarlo continuamente.

3. La entrega a todas las personas reconocidas por la Comisión como víctimas de prisión política y tortura de un ejemplar de este Informe.

Reconocimiento de la memoria

Para reforzar el aprendizaje colectivo de la experiencia y ayudar a mantener el compromiso de respeto de los derechos de las personas, se propone una serie de medidas similares a las adoptadas por otros países:

1. Declaración de los principales centros de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política. Para ello se propone evaluar lugares con las características de ser identificados por las víctimas como representativos de lo ocurrido, ubicados en diferentes regiones y que puedan servir al propósito de reconocimiento de lo sucedido y compromiso con el respeto de la dignidad de las personas.

Sin perjuicio de lo anterior, se propone la erección de un monumento recordatorio en un lugar céntrico de Santiago, como capital del país, que simbolice este compromiso.

2. Creación de un fondo concursable permanente para proyectos de investigación en materias de respeto a los derechos humanos.

3. Creación de un fondo editorial para publicación de testimonios y obras literarias que permitan reconocer lo sucedido, y de otro fondo para otras obras de arte con la misma finalidad; ambos con una duración limitada en el tiempo.

Difusión, promoción y educación en derechos humanos

Las medidas que se proponen para la difusión, promoción y educación en derechos humanos son las siguientes:

1. Difusión del presente Informe, incluyendo su distribución y la de su Síntesis a escuelas, universidades, bibliotecas públicas, consulados en el exterior y otras entidades, y el desarrollo de una página de internet que lo contenga.

2. Educación en derechos humanos al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

La Comisión ha conocido de las medidas puestas en práctica en los últimos años por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública relativas a la enseñanza de los derechos humanos en la formación de su personal, según fue informado por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ejército de Chile y la Armada de Chile. Dichas experiencias son disímiles unas de otras, pero reflejan una preocupación por parte de dichas instituciones que la Comisión estima muy importante destacar, como acciones concretas que ayudan a fortalecer el compromiso de respeto de los derechos de las personas y de no repetición de los hechos constatados. Por ello, se valoran estas iniciativas y se propone su continuación y permanente revisión, de forma de asegurar elevados niveles de reflexión moral en torno a la necesidad de respetar los derechos humanos.

3. Educación en derechos humanos en los diferentes niveles de enseñanza.

Los conceptos de democracia y de derechos humanos están indisolublemente unidos. La teoría y la experiencia histórica demuestran que sólo en un Estado de Derecho democrático es posible que los derechos humanos sean respetados; así como sólo puede calificarse a una sociedad de democrática cuando en ella se respetan tales derechos. Y esto no se refiere únicamente a su vigencia jurídica, sino a su realización efectiva en la vida cotidiana.

Hoy existe un sólido consenso mundial sobre la necesidad y la importancia de educar para los derechos humanos y la vida en democracia y que éstos deben ir unidos en un mismo proceso que vele por la formación ciudadana de quienes se encuentran en el sistema educacional. Esta educación consiste en el proceso a través del cual se promueve el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento.

También existe consenso sobre la responsabilidad que tienen los Estados en garantizar que todos sus habitantes reciban esta educación. Las libertades fundamentales, los derechos humanos y los principios y normas de la democracia sólo pueden observarse y protegerse si se conocen.

Dicha educación debiera potenciar en los estudiantes el desarrollo de capacidades reflexivas, de argumentación y debate público; el juicio crítico; los valores ciudadanos, como honestidad y convivencia democrática; la autonomía y respeto por la libertad; el desarrollo de la capacidad de discernimiento; el conocimiento de sí mismos, de los otros, de las instituciones políticas, del Estado y de la vida en sociedad, y el reconocimiento y valoración de la diversidad, entre otras competencias ciudadanas.

Esta educación debe contribuir a enaltecer el respeto de los derechos humanos; promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad ante ésta, así como de propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.

Esto debiera permear no solamente los contenidos específicos planteados en las asignaturas del curriculum escolar, sino también atravesar todos los espacios y relaciones sociales en la escuela, pasar por el currículo oficial al llamado currículo *oculto*, entendiendo por éste último los valores, las relaciones y prácticas sociales en la escuela. Para ello es importante incorporar hechos de la historia reciente a las actividades educacionales que permitan reforzar el aprendizaje sobre el compromiso por el respeto a la dignidad de las personas y la intangibilidad de los derechos humanos, así como contar con materiales y metodología de enseñanza que permitan a los alumnos el aprendizaje de estas materias.

La formación universitaria también debiera incorporar estas materias a sus currículas, en especial, aunque en forma no exclusiva, en la formación de profesores. Éstos requerirán no sólo el conocimiento de ellas, sino también el entrenamiento en metodologías apropiadas para enseñarlas y para ser modelos de ciudadanía para sus alumnos.

Medidas institucionales

Creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos

• Con el objeto de cautelar y promover el respeto a los derechos de las personas, y asegurar la materialización de éstas y de nuevas medidas de promoción de esos derechos, la Comisión estima fundamental apoyar la iniciativa del Presidente de la República de crear un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Dicho Instituto debiera ser el organismo público que ayude a la sociedad chilena a reflexionar y profundizar en las lecciones del pasado, a impulsar iniciativas que ayuden a ir construyendo una convivencia respetuosa de los derechos de las personas, y a estar alerta frente a

eventuales situaciones de discriminación o de violaciones de estos derechos. También debiera ayudar a continuar la labor destinada a conocer la verdad sobre las violaciones pasadas y obtener justicia respecto de ellas. Debiera también promover el estudio y el desarrollo de buenas prácticas en materia de difusión y promoción de los derechos humanos, así como de resolución pacífica de controversias. Finalmente, debiera hacer el seguimiento de la materialización de las medidas propuestas por esta Comisión.

Resguardo y confidencialidad de la información recibida

• La información recopilada por la Comisión, a través de los testimonios de las personas, como a través de las indagaciones que ésta hizo para la calificación de ellos, es parte del patrimonio cultural de la nación y debe ser sometida a medidas de resguardo. Por ello se recomienda que, al terminar su actividad, el acervo documental reunido a lo largo de su vigencia sea entregado en su conjunto al Instituto Nacional de Derechos Humanos que se cree o, en su defecto, al organismo encargado por ley de la conservación del patrimonio documental de la nación chilena. Dicha entidad estatal conservadora deberá tomar las medidas de protección contra toda sustracción y destrucción.

Este archivo comprende todos los documentos en papel, como computacionales y audiovisuales que provienen de la sede central y de las sedes regionales. Comporta por un lado, los expedientes personales constituidos por la Comisión con los antecedentes de las víctimas, por otro lado, los documentos generados por la Comisión en el marco de su actividad.

• Puesto que los expedientes personales constituyen una información de carácter nominativo y, como tal, reservada, con el fin de proteger la vida privada y el honor de las personas, la Comisión recomienda aplicar un plazo especial para la comunicación al público de estos expedientes personales. Para ello puede considerarse el rango de tiempo que ha seguido la práctica archivística mundial en este tipo de materias, de 30 años. Ello incluye tanto los expedientes físicos como el archivo electrónico elaborado a partir de éstos. Este plazo se aplicará a partir de la fecha de entrega del Informe de la Comisión. Por su parte, las personas que hayan sido calificadas o sus descendientes, en caso de fallecimiento, podrán solicitar copia de los documentos que adjuntaron a sus presentaciones.

• Se recomienda que los comisionados y las personas que prestaron servicios para la Comisión queden eximidas de toda obligación legal que implique revelar la información relativa a los testimonios recibidos.

* * *

B. RESPUESTAS INSTITUCIONALES

EJÉRCITO DE CHILE: EL FIN DE UNA VISIÓN*

General Juan Emilio Cheyre

Se ha cerrado recientemente el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE). Con la misma fecha se ha creado y dado paso a la Agrupación de Seguridad Militar, unidad eminentemente especializada, reducida en dotación de personal y preparada para cumplir misiones distintas a las que efectuaba en el pasado, particularmente hasta 1990, como producto de la situación nacional e internacional de fines del siglo XX.

La creación de esta nueva unidad obedece también a una legislación reciente que busca dotar al Estado de un órgano de Inteligencia con capacidad para producir los insumos necesarios para las resoluciones del nivel político, y con el cual debemos interactuar.

No constituye un mero cambio de denominación, de rostros o de lugar de trabajo. Una función como la Inteligencia y la Seguridad Militar, dada su creciente complejidad y su aporte a las decisiones en el ámbito castrense, necesita de contenido real y no de tratamientos cosméticos. De ahí que este cierre deba ser interpretado como parte de un proceso general, progresivo y previsto por la planificación de modernización institucional, para los tiempos que se viven en la actual realidad nacional e internacional.

Éstas son las que nos indican los nuevos paradigmas a seguir. Sin embargo, en estricto rigor, este cambio no es la esencia novedosa; el tema es más profundo, y el cese del BIE es sólo un hecho —desde luego importante— inserto dentro de un conjunto mayor y más relevante de planificadas acciones.

En efecto, el Ejército de Chile viene adoptando, desde hace ya varios años, decisiones tendentes a abandonar una concepción centrada en una óptica propia de la Guerra Fría. Una visión —por cierto generalizada en los diferentes actores sociales nacionales y organizaciones en todo el mundo— que llevó a la radicalización del conflicto y a la imposición de una lógica de confrontación, que llegó a aceptar como legítimos todos los procedimientos y medios de lucha como métodos para obtener o mantener el poder.

Una visión que condujo a la comprensión de la política desde una perspectiva que consideraba enemigos a los que eran sólo adversarios y a

---

General Juan Emilio Cheyre Espinosa. Comandante en Jefe del Ejército.

* Columna de opinión publicada en el diario *La Tercera* del 5 de noviembre de 2004. Texto completo.

la reducción del respeto a las personas, su dignidad y sus derechos. Una visión, en fin, que se constituyó en un sello distintivo de nuestras relaciones políticas, sociales y económicas, y que se mantuvo imperante entre nosotros los chilenos, durante muchos años, como la propia Guerra Fría que la inspiraba.

Como consecuencia de la situación descrita el Ejército de Chile no pudo sustraerse a la vorágine inapelable de esa visión y de los acontecimientos que ella, a escala mundial, precipitó, convirtiéndose en uno de los protagonistas principales de los mismos en este, nuestro país.

Actuó —en ese contexto— con la absoluta certeza que su proceder era justo y que defendía el bien común general y a la mayoría de los ciudadanos. Se podrá disentir totalmente de esta afirmación, es lícito, pero no es igualmente lícito olvidar ni la lógica de la confrontación que imperaba en ese momento ni el comportamiento consecuente que ella indujo en los chilenos de entonces.

¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética.

Por ello mis palabras no deben entenderse como una morigeración de lo ocurrido, sino como un esfuerzo más en la búsqueda de la verdad pues, ya lo he dicho antes, la verdad libera y trae paz a los espíritus; pero debe ser una verdad completa y entendida siempre en el contexto histórico en que ocurrieron los hechos.

En nuestro caso, unas circunstancias excepcionales, anormales y de odiosidad muy amplias que nos dividieron, y profundamente. Se trata, sin embargo, de una época y de una manera de existir, como pueblo y como Nación, que se ha dejado atrás.

Por ello, como Comandante en Jefe del Ejército, he volcado una parte importante de mi cometido a adecuar a la institución a la realidad de un Chile que aspira al desarrollo, la cooperación y la paz internacionales; a la realidad de un país —el nuestro— que hace suyos los principios y valores de la democracia como sistema político y del respeto a la dignidad del ser humano como el elemento vital para una sana convivencia nacional e internacional.

En esa perspectiva —como ya lo advertí— el cierre del BIE no es un hecho aislado. Concluye un proceso de cambios graduales y sucesivos entre los que destacan la nueva arquitectura del Ejército —que se sustenta en considerar a nuestros vecinos como verdaderos socios y amigos con proyectos comunes—; un proceso educativo de revalorización de los derechos humanos, una atenta revisión y reformulación de nuestra reglamenta-

ción y procedimientos y un reposicionamiento en la sociedad —a la cual nos debemos y servimos— buscando una mayor cercanía que nos haga ser percibidos como una institución de todos los chilenos.

El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación.

Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse.

Expresión de esta línea de conducta ha sido nuestra concurrencia a la Mesa de Diálogo y el esfuerzo de recopilación de información útil y conducente para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, así como su remisión a los tribunales, únicos encargados de establecer la verdad jurídica y aplicar la legislación vigente.

Y al mismo estilo de conducta ha correspondido, más recientemente, nuestro decidido compromiso y colaboración con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y/o Tortura, cuyo contenido y conclusiones asumiremos con la misma serenidad y responsabilidad con que hemos actuado hasta ahora.

Puedo afirmar pues, al ofrecer esta sintetizada cuenta del proceso de cambios que el Ejército ha venido efectuando que la institución a mi mando ha transitado desde una organización, una lógica y un actuar, que eran propios de la Guerra Fría, hacia aquella que Chile hoy nos demanda.

Me parece que con el proceso que ha vivido la institución y el país, las lecciones aprendidas por todos y la superación de las divisiones mediante la verdad y la justicia, nos encaminamos hacia un futuro promisorio que, recogiendo estas experiencias, le dé a Chile la suficiente fortaleza y cohesión de su sociedad para enfrentar un mundo complejo, competitivo y con heterogéneas amenazas.

Creo, sin embargo, que todavía podemos avanzar mucho en el perfeccionamiento de la sociedad democrática a la cual aspiramos todos los chilenos y que una de las formas de procurar ese avance es la superación de prejuicios y desconfianzas que, también en el pasado, llevaron o al ostracismo de las Fuerzas Armadas en los cuarteles o a un protagonismo de

éstas impropio de la condición militar. Esa dicotomía —como expresé en otra oportunidad— puede ser resuelta con grandeza por los chilenos.

El justo medio entre estas dos desviaciones sería el paradigma virtuoso que, como sociedad, encontraríamos para establecer los límites entre el aislacionismo ciego, auto excluyente, y el tutelaje castrense. Se trata, sin embargo, de un justo medio que no nos corresponde a los militares encontrar sino a la ciudadanía toda por intermedio de sus instituciones.

Nuestra tarea en esa dirección, quizá aún incompleta, se debe limitar al tránsito institucional desde visiones del pasado, como aquella determinada por la Guerra Fría, hacia otras contemporáneas y concordantes con el Chile hoy. Una tarea a la que seguiremos dedicando nuestros mejores y más honestos esfuerzos como militares y como chilenos.

Santiago, 3 de noviembre de 2004.

* * *

DECLARACIÓN PÚBLICA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, ARTURO HERRERA*

(13 de noviembre de 2004)

1. El país ha ido reconociendo progresivamente su verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante un período prolongado de tiempo, en que se hizo evidente la profunda división y antagonismo interno, del cual surgieron tantos sufrimientos. Para alcanzar este grado de verdad se han sumado muchos esfuerzos de grupos humanos de alta jerarquía moral y reconocimiento público, como así también el esfuerzo sistemático y permanente de los Tribunales de Justicia.

2. En los contenidos de esa verdad se señalan prácticas institucionales y conductas de integrantes de esta Policía, que constituyeron graves crímenes contra los derechos fundamentales que se derivan de la dignidad humana. No obstante, también es preciso reconocer que, tal como se señaló en la ceremonia: "La Policía Civil se reencuentra con su historia" (25/09/2004), parte de la familia policial también fue víctima de la persecución y la tortura cumpliendo su deber.

3. Es válido señalar que nuestra Institución no concurrió con su pequeña fuerza, ni con sus armas ni hombres, al quiebre de la democracia chilena. Como todas las reparticiones públicas, la Policía de Investigaciones de Chile debió acatar las condiciones impuestas hace 31 años. En ese contexto, no fuimos ajenos a actos que causaron daño, dolor y sufrimientos extremos a muchas personas, contradiciendo la ética y la deontología policial, así como las misiones que la Constitución Política y la Ley encargan a esta Institución, por lo que representan la más grave afrenta a su historia y vocación de servicio público.

4. En virtud de lo expresado, como Director General considero necesario asumir dichas verdades de la historia social de nuestro país y, consecuentemente, solicito el perdón de todos los compatriotas.

5. Una vez que la Policía de Investigaciones de Chile pudo hacerse responsable de sí misma, diseñó e implementó un proceso modernizador en el cual uno de sus pilares fundamentales ha sido el paradigma del respeto de los derechos humanos.

6. Es por ello que, en la última década, hemos puesto especial preocupación en el desarrollo de una doctrina policial garante de un Estado Democrático de Derecho y respetuosa de la dignidad de toda persona. De

---

* Texto completo. www.investigaciones.cl

la misma forma, hemos procurado dignificar nuestro rol de servidores públicos. Nuestra modernización institucional se ha hecho eco de esta máxima, fortaleciendo un régimen de gestión esencialmente transparente, vinculándonos a la comunidad que servimos y a la cual nos debemos.

7. El Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura representa una enseñanza y, por lo mismo, debe ser asumida reflexivamente, con valor y humildad. Por tal motivo, esta Policía ratifica su compromiso ante todos los chilenos de seguir promoviendo e impulsando una formación destinada a prevenir que no vuelva a ser ocupada de esa forma, bajo pretexto alguno.

8. Hemos sido parte del sufrimiento y, por lo mismo, también hemos aprendido. Aquí radica, entonces, el deseo de reencuentro y reconciliación para proteger nuestro futuro común, con el fin de no repetir los errores del pasado que tanto dolor han causado a la patria.

Santiago, 13 de noviembre de 2004.

* * *

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA ARMADA DE CHILE*

(30 de noviembre de 2004)

1. La Armada de Chile en general acoge con generosidad y cristiana humildad el Informe de la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política, basándose principalmente en la competencia profesional, experiencia y calidad moral de los miembros de la citada Comisión. Valoramos el esfuerzo realizado en busca de la verdad.

2. Aceptamos como verdaderos todos los testimonios, aun cuando dada la naturaleza de la Comisión no es posible exigirle la rigurosidad propia de un proceso judicial; ni tampoco la Armada posee archivos con informaciones que permitan ratificar o desmentir las denuncias registradas. Toda la información requerida que obra en nuestro poder fue entregada a la Comisión; lo propio hemos hecho con los tribunales de justicia.

3. No obstante, independientemente de las observaciones procesales que pudiera merecer el Informe, su lectura es impactante y conmovedora, y nadie podría desconocer que en Chile se violaron gravemente los Derechos Humanos y la dignidad de muchas personas inocentes, por parte de Agentes del Estado. En este contexto, algunos miembros de la Armada, desviándose de la recta doctrina, también participaron en estos luctuosos hechos, particularmente durante los primeros meses inmediatamente posteriores al 11 de Septiembre de 1973.

4. Al respecto, la Institución deja expresa constancia que jamás ha validado y ni siquiera insinuado la aplicación de tortura. La violación de los Derechos Humanos nunca ha sido una política Institucional. No obstante, a la luz de los testimonios recogidos por la Comisión, no podemos sino reconocer que en la cadena jerárquica de quienes estaban encargados de los procesos de interrogación, hubo personas y mandos que cometieron, autorizaron o simplemente permitieron que en los recintos de detención a su cargo ocurrieran tan lamentables hechos. Tales responsabilidades en lo ético y lo penal son estrictamente individuales. En todo caso, la Armada a corto andar enmendó rumbos y eliminó estas prácticas contrarias a su ser íntimo.

5. Por otra parte, la Institución se hace un deber en expresar que lamentamos profundamente la violación de los Derechos Humanos y de la dignidad de las personas, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, pero particularmente delicado es que ellas hayan ocurrido a bordo del B.E. ”Esmeralda”, que es todo un símbolo para Chile entero. Fue desafortunado

---

* Texto completo. www. Armada.cl

que ese buque haya sido utilizado como centro de detención, aun cuando hubiese sido sólo por dos semanas. Peor todavía que se hubiese constituido a bordo una unidad especial para interrogar bajo tortura a los detenidos. Al respecto, estamos disponibles para hacer lo que esté a nuestro alcance, como un gesto de desagravio y reconciliación.

6. Sin duda que no hay ningún contexto que justifique la violación a los Derechos Humanos. Sin embargo, si verdaderamente queremos entender por qué ocurrió en Chile esta suerte de locura colectiva, no podemos abstraernos del clima de polarización y odio que se había generado desde antes de 1973. Es la única forma de prevenir que estos hechos se repitan. Ese contexto, está luminosamente explicado en el Informe elaborado por la Comisión Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), en su capítulo I "Marco Político", páginas 33 al 53.

7. Por último, la Armada de Chile se conduele profundamente y solidariza con espíritu cristiano con todas aquellas personas que fueron torturadas y humilladas, y que tantas y tan graves consecuencias han tenido en su vida futura. Deseamos fervientemente que esta dolorosa verdad que ha revelado el Informe de la Comisión, contribuya no sólo a evitar que situaciones semejantes vuelvan a repetirse, sino también a superar definitivamente las heridas y no a reavivar rencores y nuevas odiosidades, llamado explícito de Su Excelencia el Presidente de la República, que esperamos sea acogido por todos los chilenos.

Valparaíso, 30 de noviembre del 2004.

* * *

COMUNICADO OFICIAL DE CARABINEROS DE CHILE*

(30 de noviembre de 2004)

En conocimiento del Informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que recoge el testimonio de miles de personas que a lo largo del país fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y con la transparencia que Carabineros de Chile procede ante la ciudadanía, cumple con su deber ético y moral de declarar lo siguiente:

1. Carabineros de Chile valora el trabajo realizado por la Comisión, con la cual colaboró entregando toda la información y antecedentes que tenía, siempre que le fue solicitada.

2. La Institución considera que el contexto histórico de la década del 70, en que el país sufría graves alteraciones sociales y políticas, llevó al conjunto de la sociedad chilena a un clima de confrontación y violencia.

3. Hoy, después de 30 años y con la perspectiva que da el tiempo, Carabineros se hace cargo de su historia y estima que las acciones de represión política, prisión y tortura, descritas en el Informe, nunca debieron realizarse porque son contrarias a su esencia y misión.

4. Con lo anterior, Carabineros repudia que personal de sus filas tuviese participación en casos de violaciones a los derechos humanos, donde se cuentan personas que ejercían el mando jerárquico y que tuvieron responsabilidad por acción u omisión.

5. La Institución adhiere el sentir de las víctimas de prisión política y torturas y al de sus familias y comparte, una vez más, el sentimiento generalizado de la sociedad chilena de condena a estos dolorosos hechos. Carabineros reitera su compromiso de caminar con firmeza a un deseable reencuentro nacional, bajo el imperio de la solidaridad, la verdad y la paz social.

6. Carabineros ha vivido su propio y distintivo proceso de normalización de su rol tradicional a partir del año 1990, cuando se reestableció el régimen democrático en Chile y es así como hoy, diariamente, actúa de cara a la comunidad.

7. Finalmente, Carabineros de Chile, declara que los esfuerzos que realiza en la formación y conducta de su personal corresponden a la profunda convicción moral de legar a sus futuras generaciones una Institución respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.

* * *

* Texto completo. www.carabinerosdechile.cl

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE*

(1 de diciembre de 2004)

La declaración de S.E. el Sr. Presidente de la República, junto con el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, constituyen un paso fundamental y decisivo en el largo y doloroso proceso de Reconciliación Nacional, emprendido con altura de miras por nuestro país. En relación a lo anterior, se informa lo siguiente:

1. La Fuerza Aérea de Chile, hace ya más de una década, reconoció la existencia y lamentó las violaciones a los Derechos Humanos que se informaron en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, manifestando que hechos de esa naturaleza nunca debían volver a repetirse, determinando así, tempranamente, lo que sería el proceso de reflexión institucional respecto de este doloroso episodio de la historia nacional.

El Alto Mando de la época, advirtió la importancia de asumir esta responsabilidad, aún en momentos difíciles, entregando oportunamente al país un mensaje orientado en la perspectiva del reencuentro de todos los chilenos.

Con posterioridad y en la búsqueda de la reconciliación nacional, la Fuerza Aérea, participó y suscribió, el acuerdo de la Mesa de Diálogo, en el sentido de rechazar y condenar las graves violaciones a los Derechos Humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar.

2. La Fuerza Aérea de Chile valora el trabajo efectuado por la Comisión Valech, toda vez que constituye un avance significativo en el proceso de la reconciliación nacional.

Asimismo, lamenta y se conduele profundamente que compatriotas hayan sido privados de su libertad ilegítimamente y sufrido torturas, condenando con fuerza las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, porque nada puede justificarlas.

Estamos conscientes que el dolor de las víctimas y el sufrimiento de sus familias no podemos borrarlo, pues las huellas provocadas por hechos de esta naturaleza persisten, se traspasan a la sociedad y provocan heridas y divisiones en el sentir nacional. Con todo, podemos asegurar que al interior de la Institución, se han tomado todas las medidas para que estos actos nunca vuelvan a repetirse.

3. Los hechos mencionados en el informe ocurrieron en un marco de convulsión, de polarización y de escenarios confusos asociados a la

---

* Texto completo. www.lanacion.cl

guerra fría, que afectaron a la sociedad en su conjunto, dividiéndola ideológicamente en sectores irreconciliables y sobre los cuales cada chileno puede tener su opinión.

En ese contexto, el informe que motiva esta declaración atribuye a personal de la Fuerza Aérea la comisión de actos de privación ilegítima de libertad y torturas, ocurridos principalmente en un primer período. El documento contempla un número significativo de casos e involucra a unidades de la Institución.

El contenido del informe de la Comisión compromete a la Fuerza Aérea, en consideración a la extensión de las situaciones que describe, como también por la tardanza de algunos niveles de mando en la adopción de medidas destinadas a reafirmar la vigencia de los derechos fundamentales de la persona.

Lo expresado anteriormente no se inscribe en la tradición histórica de la Institución y tampoco en la aplicación de la recta doctrina. Prueba de ello es que la mayoría de los integrantes de la Institución siempre estuvo dedicada a sus labores profesionales habituales.

En la Fuerza Aérea las responsabilidades corresponden siempre a los mandos, quienes tienen la obligación moral y legal de velar para que la Institución no se aparte nunca de la finalidad para la cual fue creada.

El Alto Mando de la Fuerza Aérea asume esta dolorosa verdad y reitera su compromiso para que actos de esta naturaleza nunca vuelvan a repetirse.

4. Nuestra Institución ha efectuado gestos concretos, en su ámbito de acción, para contribuir a la reconciliación de la sociedad chilena.

En el campo educacional, se han reformulado los planes y programas de estudios en las Escuelas y Academias formadoras de Oficiales y Suboficiales, con el propósito de reforzar la formación valórica, la enseñanza del Derecho Internacional Humanitario y el respeto a los Derechos Humanos.

Se ha cooperado y se continuará cooperando con la justicia para contribuir a la búsqueda de la verdad, propósito que hemos hecho nuestro.

Con ese mismo espíritu, la Fuerza Aérea desarrolló un proceso al interior de sus filas, destinado a reunificar a la familia aérea. Ha sido nuestra decisión acercar a todos aquellos que fueron separados en ese período, volviendo a reconocerlos como nuestros camaradas. Se les restituyeron sus derechos y se les abrieron las puertas de nuestras Unidades. Nos hemos comprometido con nuestra propia reconciliación, con grandeza y generosidad de todos, esperanzados en que nunca más ocurran situaciones como las que se vivieron.

Honores negados a Camaradas les fueron restituidos, siempre bajo el mismo espíritu: unidad interna y reconciliación para mirar todos juntos el futuro de nuestra Institución y de nuestra patria.

Tenemos la esperanza que la condena por parte de la Fuerza Aérea de los hechos descritos en el informe y los actos concretos que hemos materializado, contribuyan a la unidad nacional.

Finalmente el Alto Mando ha tenido una especial preocupación por mantener unida a la Institución y velar por que sea respetada y querida por todos los chilenos, por su profesionalismo, responsabilidad social, y por el desarrollo de los valores de honor, respeto al derecho y a la dignidad de las personas.

Santiago, 01 de diciembre de 2004.

* * *

DISCURSO*

General Juan Emilio Cheyre

A. Objeto y marco del seminario

El tema "Ejército y DD.HH.: compromiso para el siglo XXI" es la propuesta que nos ha convocado. Constituye nuestro aporte al llamado de S.E. el Pdte. de la República formulado a los diferentes sectores, al dirigirse al país el pasado 28 de noviembre. Este seminario nace también de la necesidad de generar instancias de reflexión —en un plano académico de confianza mutua y de verdad— en la sociedad toda.

De allí nuestros agradecimientos a quienes han expuesto por su presencia, pero sobre todo por los planteamientos efectuados. El mundo ha cambiado, Chile ha cambiado; ha evolucionado la importancia que los Estados dan a los DD.HH., como lo expuso el ministro Ravinet, y, a su vez, se sitúan en un ámbito jurídico especial, como lo manifestara el ministro Bates y el Presidente del Senado Hernán Larraín, quien enfatizó las responsabilidades de todos y, por tanto, la obligación de cada uno a asumir su parte con valentía.

Asimismo, en nuestro país predominan ampliamente visiones que, como fuera expuesto por Ricardo Núñez, Jorge Burgos y Andrés Allamand, han transitado desde posiciones confrontacionales y rupturistas hacia escenarios donde todos los sectores —independientemente de sus diferencias— aspiran a una sociedad democrática, estable, no confrontacional, desarrollada con equidad, tolerante, donde haya espacios para cada chilena y chileno, y donde la cohesión social —entendida ésta como la unidad en la diversidad, sin fragmentación— nos permita construir el Chile que todos anhelamos.

En esta evolución, que exige una posición propia del siglo XXI en el tema de los DD.HH., esta jornada resulta un antecedente más, que se suma a otras vinculadas con la materia. En síntesis, el marco descrito hace aparecer como un imperativo de futuro explicitar nuestro compromiso con su tratamiento y enseñanza.

General Juan Emilio Cheyre Espinosa. Comandante en Jefe del Ejército.

* Discurso de clausura del seminario "Ejército y Derechos Humanos: Compromiso para el siglo XX", organizado por el Ejército de Chile y que se efectuó el 7 de diciembre de 2004 en la Escuela Militar, Santiago. Texto completo.

B. Estado de la cuestión que fundamenta el compromiso

¿Es acaso el Ejército el único comprometido con este asunto tan sensible para la sociedad chilena? Sin duda, no. Pero no se trata de encontrar compañía ni socios entre los cuales se pudieran disolver las responsabilidades que como institución nos compete. Nuestro compromiso radica en una interrogante que nos hemos venido planteando desde hace varios años.

Ésta es: ¿Cómo es que en una institución, cuya principal definición profesional está signada por su específica y exclusiva maestría de ser la administradora racional de la fuerza legítima del Estado, se pudo excusar o ignorar que una parte de sus miembros violara la dignidad de las personas a las cuales se buscaba neutralizar? Y debo consignar que en esta interrogante la palabra clave es la racionalidad de la administración de la fuerza.

¿Cómo es que sin que exista una sola línea en nuestra reglamentación y enseñanzas que tolere tratos inhumanos se dio esta conducta en algunos militares? Es cierto, es doloroso plantearse estas interrogantes en que su sólo enunciado da cuenta que teniendo una base doctrinaria y moral sólida ella no impidió los abusos de autoridad, los vejámenes y otras acciones delictivas y éticamente reprochables de algunos de sus efectivos.

Pero hay otra cuestión que nos parece fundamental aclarar. Tengo la convicción profesional y moral que al propio Ejército le es conveniente no dilatar el análisis, que en este seminario concluye, para llegar a definiciones de nuestro futuro actuar en la temática que se ha desarrollado esta mañana.

En el sentido anterior, y por una cuestión directamente relacionada con el honor militar, nadie podría relevarnos en la reflexión sobre nuestras propias conductas o inconductas. Ello nace de una sincera aspiración de hacer una tarea que más que una "purificación de la memoria", garantice hacia el futuro que los actos que todos condenamos no vuelvan jamás a repetirse, y bajo ninguna circunstancia. De las causas —aunque importantes— no nos corresponde hacernos cargo, pero sí de algunos de sus efectos.

¡Y esta revisión de aquellos efectos nadie la puede realizar en subsidio nuestro! Estoy convencido que es posible encontrar explicaciones —y serias— a la ocurrencia de tales actos dentro del conjunto de la sociedad chilena, de la época que se vivía, del entorno mundial y también, cabe decirlo, la constatación que parece existir en el ser humano una inclinación perversa a la desviación de las conductas buenas, que sólo intensos procesos de sociabilización, la ley y la práctica prolongada pueden llevar a superar como sociedad.

Con todo, no hemos encontrado nunca una justificación ética a los actos que tan alta condena social llevan los cometidos en contra de personas. Es más, creo que los que aún se mantienen en posiciones personales de negación de tales delitos, que los minimizan o los justifican, debido a la situación previa —la que sin duda es parte, e importante, del drama vivido— están en un error que el tiempo se encargará de aclararles. Lo mismo puede decirse de aquellos que confunden las instituciones fundamentales de la República con otras de carácter y fines transitorios y sin las responsabilidades sociales de las primeras.

Lo que distingue a éstas es precisamente su permanencia siguiendo los destinos del Estado, para cuyo bien han sido creadas. Existe una historia de la cual se hace cargo un comandante en jefe del Ejército, cuando asume, que no se limita a su período constitucional de mando. Este enlace con el pretérito es el que permite revisar y obtener lecciones cuando hechos del pasado resultan censurables.

Este mismo eslabón que une el hoy con el ayer en lo histórico y en lo emocional, es el que nos permite conmemorar todas nuestras heroicas epopeyas; es el que cimienta nuestro orgullo institucional, es el que hace, de nuestra larga historia, una experiencia única en la región, de temprana fortaleza republicana, de continuidad democrática de la cual el Ejército ha sido parte sustancial.

Las acciones realizadas no están destinadas a encontrar reciprocidad inmediata en la ciudadanía o en otras instituciones. Otros pueden hacerlo, los militares jamás. No es una visión de ingenuo idealismo; se trata que a una institución básica de la República sólo la rige el recto proceder y no cálculos o fórmulas de tipo alguno. En ese sentido aunque la relación Ejército-sociedad podría describirse como un espejo reflector, donde hay un reflejo constante de una sobre la otra, las responsabilidades del Ejército hacia la sociedad son mayores.

Y esto por una razón esencial: el monopolio de las armas para la defensa y la seguridad nacionales imponen el criterio que los que poseen tal exclusividad no pueden gozar —voluntariamente aceptado— de las mismas libertades y no pueden actuar lícitamente en contra de quienes concedieron tan ventajoso privilegio. Otro aspecto que estimo necesario reafirmar es el que concierne a la "responsabilidad institucional" en los hechos que el país conoce.

Algunos, por error, han deducido, e insisten con simpleza, que se estaría reconociendo que hubo una "doctrina institucional" de violación a los DD.HH.; ¡la que jamás existió! He recordado recientemente que el Ejército de Chile no sólo asume las faltas y delitos cometidos por personal

de su directa dependencia, sino que ha cooperado con los tribunales de justicia en la búsqueda de la verdad.

Si quienes, como queda claro de lo que he dicho, al cometer delitos se marginaron del código ético de un militar ¿qué sentido tiene afirmar, como lo he hecho, que el Ejército de Chile asume las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado? Por cierto no para eximir a los que faltaron a sus deberes y son personalmente responsables por ello.

Tampoco puede entenderse como la confesión de una culpabilidad colectiva. No existe principio moral alguno que permita diluir las culpas individuales en el anonimato colectivo, ni siquiera en el supuesto caso en que hubiese un sentimiento o estado de ánimo común imperando en ese colectivo. El Ejército, como institución, no puede reemplazar ni en la culpa ni en la penalización de ella a quienes, apartándose de su doctrina y reglamentos, cometieron delitos o faltas.

Jurídicamente no cabe la posibilidad de juzgar al Ejército como institución y mucho menos de penalizarlo o castigarlo. Las culpas, repito, son individuales y corresponde a los tribunales esclarecer las responsabilidades de autores e instigadores y dictar las penas correspondientes de acuerdo al orden legal vigente. Todo lo anterior es claro; sin embargo, hay otra faceta que es un deber abordar. El Ejército ha llegado a la convicción que existen irrefutables evidencias de que en la comisión de esos delitos se empleó patrimonio institucional, de lo cual importa, de algún modo, una suerte de compromiso o de inacción de mandos en el proceso.

Y así, prácticas erradas no fueron detectadas o rechazadas, lo que llevó a una desidia y pasividad respecto de ellas, que vulneraban nuestra doctrina. En estos casos se quebraron, entre otros principios rectores, la línea de mando, el control de todo y en todo por éstos y la organización militar jerárquica, que son nuestra forma tradicional del mando y de la obediencia.

También el Ejército destinó a organismos extra institucionales (DINA/CNI) —desde su creación hasta su término— a personal de Oficiales y Cuadro Permanente. Ellos no estuvieron sujetos en ese período al control de la institución. Me parece que el Ejército podría haberse precavido de no exponer a su personal, por tan prolongado tiempo, en actividades propias de entidades cuyos fines, métodos y medios le eran ajenos.

Es por ello que el Ejército no puede sino asumir la responsabilidad de sus decisiones institucionales de 1973, y años posteriores, así como de todas sus consecuencias, incluidas aquellas que se tradujeron en hechos punibles y moralmente inaceptables, realizados por algunos de sus miembros. ¡Y esta sí es una responsabilidad ética que no puede esquivarse!

Estamos convencidos de que, sin perjuicio de las poderosas razones que tuvieron quienes fueron protagonistas de los acontecimientos que llevaron a la intervención militar de 1973 —que se inspiró en la certeza de la absoluta legitimidad y justicia en los fines—, se trata de procesos que los chilenos de hoy no queremos se vuelvan a repetir nunca más.

C. Nuestro compromiso en DD.HH. para el presente siglo

Efectuadas las consideraciones precedentes, que permiten —sin duda no en forma exhaustiva pero sí suficiente— definir el marco conceptual que tiene que regir la definición del compromiso del Ejército en DD.HH. para el presente siglo, pasaré a formalizarlo. El Ejército de Chile ha procurado avanzar en esa dirección en el ámbito de sus competencias y ha efectuado un proceso de reestructuración de sus programas educativos tendente a revalorizar los Derechos Humanos y la revisión y reformulación de su reglamentación y procedimientos con el objetivo de fortalecer la capacidad de cada uno de sus miembros en estas materias, como muy bien lo ha explicado Miguel Luis Amunátegui.

Resumo. Se estructuró la enseñanza de los DD.HH. durante toda la carrera a través de objetivos transversales, lo cual se encuentra plasmado en tres Cuadernos y las definiciones de mallas y currículos en las asignaturas de Ética, Derecho, Filosofía, Bases Conceptuales de la Profesión Militar, Organización y Personal, Ciencia Política e Historia Militar. Todo lo anterior se encuentra vigente y en plena ejecución.

Es parte de nuestro compromiso ¡y está cumplido! No obstante, queremos ir más allá. Como parte de este mismo proceso, he dispuesto además una revisión de nuestras Ordenanzas. Éstas son la regla moral en la que deben basarse todas las conductas de los miembros de la institución, militares y civiles que la componen, y establecen la doctrina ética permanente de la cual se derivan los reglamentos y cualquier otro documento que norme asuntos disciplinarios y conductuales.

Dichas normas habían sido derogadas en 1926 al entrar en vigencia el Código de Justicia Militar. Desde esa fecha el Ejército se ha guiado por una doctrina contenida en forma dispersa en otros cuerpos legales y reglamentarios. Era necesario, dada la evolución que en la sociedad chilena han tenido los temas valóricos frente a la diversidad cultural que hoy se observa, redactar unas Ordenanzas que, recogiendo los principios tradicionales en que se ha fundamentado desde siempre el quehacer profesional y privado de los militares, incorpore, a su vez, nuevos paradigmas, que ahora han adquirido un mayor valor en el colectivo nacional.

El respeto irrestricto al valor de la dignidad humana, en cualquiera circunstancia, estará reflejado transversalmente en todas sus disposiciones. Para su redacción se ha tenido la cooperación de especialistas en temas éticos y militares; una vez finalizado el trabajo, en septiembre del próximo año, compartiremos su contenido y será protocolizado por las autoridades que correspondan.

Lo expresado constituye nuestro compromiso con los DD.HH. para el siglo XXI. Una parte, ya efectuada, otra en desarrollo: la redacción de las Ordenanzas Generales.

D. Supuestos básicos que el Ejército considera necesarios para que el compromiso sea viable

Lo detallado, nuestro compromiso, no es una tarea menor. La hemos asumido con la seriedad que amerita. Continuaremos trabajando junto a todos los sectores sociales y autoridades vinculadas para que esas Ordenanzas constituyan el verdadero código de ética y de comportamiento del personal del Ejército, en la realidad del siglo XXI. ¡Es un asunto de honor! Sin embargo, de nada serviría esa norma si la sociedad no asume también su compromiso con el Ejército.

Lo primero, estimo, es encontrar una respuesta que nos lleve a no claudicar ante el fatalismo que reina en la mente de compatriotas que dejan al tiempo —excelente cura ante la incapacidad humana— la solución plena de las divisiones que nos atan a un pasado, que unos fijan en 1973 y otros mucho antes de esa fecha.

No podemos esperar que toda la verdad, que todas las causas y que todos los juicios vean la luz, aunque sea en la forma de un débil consenso ciudadano, para avanzar con decisión en mejorar lo que debe ser mejorado ahora y, en la medida de lo humano, para siempre. Es decir, el respeto de todos los chilenos, especialmente los que gozamos del privilegio único del porte y uso legítimo de las armas para la defensa nacional, a la dignidad de la persona humana; dignidad que hoy hemos aceptado, sin excepción, no fue respetada.

Lo segundo, y considerando que es legítimo y necesario el debate acerca de elucidar quiénes fueron los primeros o con mayores responsabilidades en violar tales derechos y cuál fue el origen del quiebre institucional en Chile, es aceptar que tal disquisición no puede retenernos, ni al Ejército ni a la sociedad. Queremos avanzar, necesitamos avanzar. Verdad y justicia son necesarias.

Pero la reconciliación también lo es. Deseo ser más explícito, no se trata de impunidad, punto final o borrar el pasado. Mi pregunta es: ¿estamos todos comprometidos en ello? ¿No habrá poderes que podrían asumir tareas que les son indelegables? ¿No seguirán existiendo grupos que tras sus propios objetivos, muchos legítimos, están obstaculizando un proyecto de futuro? ¿Estarán los medios de comunicación social más interesados con mostrarnos el Chile de hoy y sus potencialidades, o darán énfasis a una interminable recreación de aquello que nos dividió, aunque sin duda debe ser debidamente contextualizado, jamás negándolo?

En este mismo sentido es lamentable el actual vilipendio a las personas de parte de ciertos medios. Hay algunos que estigmatizan produciendo un daño imposible de revertir. Debe haber muchas otras interrogantes. No se miren éstas como recriminaciones o demandas. Creo que es vital formularlas para avanzar y no dejar al tiempo —que sin duda es factor importante— toda la carga de aquello que nosotros, los hombres y mujeres de hoy, tenemos que responder, ahora.

Lo tercero es expresar algo a lo que me obligan dos circunstancias, aunque resulte difícil asimilar por quienes en esta sala tienen sensibilidades —que merecen todo nuestro respeto— debido a pasados sufrimientos. La primera, que muchos no tuvieron que experimentar la dura experiencia de apartarse de la recta doctrina; la segunda que, asimismo, conozco a algunos que se vieron impedidos de hacerlo.

No obstante censurar su actuar, no puedo olvidar que ellos —igual que tantos otros— soñaron con vivir su vocación en una realidad diferente. Sin duda no es eximente, pero el comprobar las frustraciones de proyectos de vida truncados, el peso de las conciencias, el dolor de las familias, la pérdida de la fe y de la ilusión, me lleva a exponerla ante esta audiencia.

La institución ha asumido como un asunto de humanidad la situación de su personal sometido desde años a procesos por DD.HH. Esta expresión se da en dos vertientes. Una ha sido la censura, crítica y reproche público que hemos hecho en cuanto a aquellos que actuaron fuera de la legalidad y de la norma ético-profesional en la que fueron formados. Para este personal ha sido muy doloroso que la institución a la que servían les comunique, en múltiples formas, que rechaza sus conductas.

Hoy lo vuelvo a hacer, por última vez, ante este auditorio y en forma más explícita. Exhorto a ese personal a contribuir, con toda la verdad que pudiesen poseer, en los procesos de los que forman parte, conducente a establecer el paradero o destino y la data de muerte de personas desaparecidas, que permita acreditar qué pasó con aquellos compatriotas de los cuales desconocemos precisamente aquello que brinda tranquilidad a

sus deudos, libera las conciencias de quienes fueron responsables de sus muertes —que me parece incuestionable, dado el largo tiempo transcurrido— y lleve a los tribunales a aplicar la legislación vigente.

Sin embargo, este problema irresuelto tiene otro cariz que nos impide abandonar a su sola suerte a todos estos ex camaradas de armas que hoy sufren prisión, sometimiento a procesos o que nos les ha sido aplicada la prescripción y la amnistía; como han sido los recientes y trascendentes fallos judiciales en tal sentido. Este no abandono, enmarcado en las leyes vigentes —en todo lo debido y en nada de lo indebido—, es para un soldado una cuestión de principios, no de complicidad o absolución.

¡No podemos renunciar a esta actitud! Si, como he sustentado y aclarado precedentemente, hay responsabilidades institucionales en estas violaciones a los DD.HH., una conducta distinta a la asumida sería inconsistente con nuestro discurso. Nos resulta frustrante, en consecuencia, que las aspiraciones que como institución comprometida con el futuro de Chile teníamos respecto a la situación de este personal, en lo sustantivo, no se realice con tiempos más acordes a la justicia moderna; al contrario, empeore bajo el nuevo escenario que se ha establecido y que no logremos como sociedad, una vez determinados los ilícitos y sus responsables, darles —a quienes lo ameriten— la oportunidad de rehacer sus vidas, en libertad.

Una visión serenadora de todos los espíritus es lo que más conviene a Chile; ella debería prevalecer sobre la perdurabilidad de un rencor que ha probado ser estéril para la convivencia de los pueblos. La anterior situación me lleva a preguntarme hasta qué punto todos nosotros somos capaces de compartir la visión de futuro a la cual hemos sido convocados por el Primer Mandatario.

¿Es la verdad que nos ha sido proporcionada —y aceptamos que ella sólo puede ser una aproximación parcial— la última jornada de una legítima búsqueda de satisfacción de reparación moral, o vendrán otras? Me parece que estas vulnerabilidades restan fuerza al proyecto —con las legítimas diferencias políticas en su definición y medios— del país que queremos y donde el Ejército sirve a todos y no actúa en beneficio o en perjuicio de ningún sector dado, pero donde no es, como pudiera suponerse, un "espectador" pasivo, silente o indiferente al devenir de la patria.

Un cuarto punto, y final, en estas consideraciones o premisas, que me he permitido plantear como tareas a asumir por la sociedad para afirmar y hacer viable nuestro compromiso para el siglo XXI es el siguiente. Al recibirme del cargo de Cdte. en Jefe del Ejército, en marzo de 2002, seguí la vieja tradición al proponerme ser el continuador de la obra realizada por mi distinguido predecesor; profundizar sin apartarme del lineamiento y orientación ya dirigido a un claro objetivo.

Ese no era ni es otro que asegurarle a Chile el bien o servicio que nos demanda la sociedad a los militares: seguridad y defensa nacionales. Ello mediante un ejército eficiente, adecuado a una nueva realidad internacional, en pleno proceso de modernización, cercano y solidario con la sociedad, de la cual forma parte; participativo en el desarrollo en áreas de gran importancia.

¡Creo poder afirmar lo hemos logrado! Somos un ejército querido y respetado. Ha sido una tarea de toda la institución y que supera en mucho a mi período de mando. Yo respondo y responderé mientras tenga el honor de comandar esta institución señera para la patria. ¡Ella debe ser juzgada en toda la dimensión histórica de sus servicios a la libertad y grandeza de Chile!

Deseamos que se valore en toda su dimensión algo que parece tan sencillo, eso que hemos consolidado: un ejército de todos los chilenos; profesional, vocacional; orgullosos de sus tradiciones; responsable de su pasado —con sus luces y sus sombras—; comprometido con su futuro; con capacidad de cumplir la función defensa a cabalidad, neutral en lo político.

Señoras y señores: Muchas veces me preguntan o me interpelan ¿cuál es el objetivo del CJE? Para algunos, nuestros pasos, pareciera se dirigen a supuestos propósitos no vinculados con el quehacer del Ejército; para otros, ellos no se orientan a la demanda de solución inmediata de los problemas judiciales que aquejan a personal, y no faltan quienes, incluso, piensan que es un navegar que no lleva a buen puerto o que el derrotero no tiene un destino claro.

Desde el fondo de mi corazón de soldado reafirmo que todo mi actuar como Comandante en Jefe del Ejército se orienta a un solo fin, ya explicitado pero que encierra dos objetivos: El primero, mantener ese Ejército con el cual ya cuenta Chile.

Para ello es suficiente nuestro quehacer en el marco de la legislación vigente y con el apoyo de las autoridades de la Defensa Nacional. También es vital el estímulo y compromiso que emana de la sociedad hacia el Ejército.

El segundo, hacer lo nuestro para cerrar las heridas; cerrarlas en lo que a nosotros compete, lo cual está hecho, y contribuir a la reconciliación y la plena recuperación de nuestro ser nacional. Pero aquí está el punto, esta tarea no podemos hacerla solos. No es labor propia ni del personal a mi mando.

Ello no me excluye de algo que he asumido con fe, ilusión, pasión y pleno apego al deber ser. Seguiré contribuyendo a ese proceso en lo que me compete, no importando los costos que ello demande. ¡Es el único

camino para quien es cabeza del Ejército! Sin embargo, con la misma fuerza, creo que la sociedad y sus representantes deberían asumir la tarea a la cual Chile nos convoca. No pretendo siquiera sugerir cómo hacerlo, ya que, no es mi misión.

Lo que sí invoco, con fuerza: ¡fortalezcamos lo que como sociedad hemos construido! Eso que muy pocos países han logrado; que no es otra cosa que la base para dar el salto que nos lleve a la superación del pasado sin negarlo, pero tampoco sin dejarlo a la sola acción del tiempo y su devenir. Con la esperanza que nuestro compromiso explicitado hoy día como Ejército, contribuya a ello, los invito a que vuestra presencia en esta Escuela Militar, en una jornada como la de hoy, sea el símbolo de la unión entre civiles y militares en un proyecto país del cual nosotros no nos restaremos, y estamos seguros ustedes tampoco lo harán.

Termino reafirmando: el Ejército de Chile será fiel a su tradición de honor militar, hoy y siempre. ¡Ese es nuestro objetivo!

¡Para hacerlo viable pedimos a nuestros compatriotas nos cooperen en el camino asumido!

Muchas gracias.

* * *

DECLARACIÓN DE LA CORTE SUPREMA*

(9 de diciembre de 2004)

En Santiago, a nueve de diciembre de dos mil cuatro, reunida esta Corte Suprema en Tribunal Pleno extraordinario, presidida por su titular don Marcos Libedinsky Tschorne y con asistencia de los Ministros Sres. Alvarez García, Ortiz, Benquis, Gálvez, Chaigneau, Rodríguez Ariztía, Cury, Pérez, Yurac, Marín, Medina, Kokisch, Juica, Segura, Señorita Morales y Sres. Oyarzún y Rodríguez Espoz, habiendo tomado conocimiento del Informe de la Comisión Nacional sobre "Prisión Política y Tortura", acordó formular la siguiente declaración:

1. El señalado informe, fundándose en los antecedentes testimoniales que refiere haber recibido la Comisión, llega a la conclusión que a partir del 11 de Septiembre de 1973 y hasta las postrimerías de la década de mil novecientos ochenta, fueron sistemáticamente víctimas de torturas en este país cerca 28.000 personas, por parte de agentes del Estado y que un sesenta por ciento de la totalidad de esos excesos se perpetraron en los primeros meses que siguieron a septiembre de 1973;

2. Que enfrentados a esta situación, los miembros actuales de esta Corte Suprema, sin perjuicio de que en su carácter de jueces de derecho y en el desempeño de su función jurisdiccional, en su oportunidad, si correspondiere, puedan adquirir sus propias convicciones de orden jurídico respecto de tales hechos, consideran que no es posible sustraerse de la gravedad de esos sucesos y sus dolorosas secuelas y dejan constancia pública de su consternación ante dichas situaciones, que se suman a otras que el Poder Judicial ha podido conocer, juzgar y sancionar en estos últimos años;

3. Que muy distinto es el parecer de la Corte sobre los reproches genéricos que se vierten en el mismo informe en relación con el Poder Judicial, en especial, cuando se afirma que en el periodo más crítico, inmediatamente posterior al 11 de septiembre de 1973, habría existido de parte de los tribunales o de los ministros de la Corte Suprema de la época, una suerte de connivencia con quienes cometieron los excesos y violaciones que se han conocido. Esto importa un grave cargo, que carece de sustento objetivo en el propio informe y que no es posible aceptar, ya que no existen antecedentes fidedignos ni es verosímil sostener que distinguidos magistrados se hayan podido concertar con terceros para permitir detenciones ilegitimas, torturas, secuestros y muertes;

---

* Texto completo. www.poderjudicial.cl

4. Que es sabido que al Poder Judicial le ha cabido un papel relevante en el curso de nuestra historia republicana, como pilar de la institucionalidad y del Estado de Derecho, en cumplimiento de su función conservadora en la protección de los derechos y garantías constitucionales. Pero, en rigor y cierto es, que durante gran parte del periodo que estuvo suspendida la vigencia de la institucionalidad en el país, a partir de Septiembre de 1973, los jueces y los tribunales superiores se vieron, en gran medida, impedidos de cumplir a cabalidad con esa función;

5. Que, en efecto, como lo reconoce el propio Informe y lo señalara también en su oportunidad el emitido en 1990 por la Comisión "Verdad y Reconciliación", la esfera de acción normal de los tribunales se vio entrabada y restringida por la aplicación de los estados de excepción que se decretaron en el país. Se ha dicho antes y lo reiteramos una vez más, que frente a las repetidas denuncias de detenciones ilegales, desapariciones de personas, etc., los juzgados y las Cortes no contaron con la cooperación efectiva de los organismos o autoridades correspondientes y en la generalidad de los casos se ocultó información o no se proporcionaron los antecedentes fidedignos que se requerían para el debido ejercicio de la función jurisdiccional, lo que al correr de los años, ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con la constitución de la llamada "Mesa de Diálogo", que dio cuenta de lo que habría acontecido realmente con numerosas víctimas cuyos restos se habrían diseminado o lanzado al mar.

6. Que si bien en una perspectiva histórica distinta, es dable sostener que los tribunales pudieron tratar de llevar a cabo una acción más eficaz en la protección de los derechos individuales, no es menos cierto que las limitaciones de hecho y de derecho a que se vio sometido el pleno ejercicio de la función conservadora en aquella época, obligan a reconocer también que probablemente ello no habría tenido resultados significativos, tal como lo demuestra la experiencia universal sobre la real eficiencia del recurso de amparo en los casos de quiebres absolutos del orden institucional;

7. Que la Corte Suprema no puede sino comprender y lamentar los sufrimientos que han relatado las personas entrevistadas por la Comisión designada para identificar a las víctimas de prisión política y torturas y proponer fórmulas de reparación. Al mismo tiempo, este tribunal reafirma la disposición y voluntad de sus integrantes de seguir cumpliendo en la mejor forma posible todas sus funciones jurisdiccionales y conservadoras de los derechos fundamentales de los individuos y hace explícito el compromiso permanente de continuar aplicando sus mejores esfuerzos al servicio de la comunidad, en el marco de sus atribuciones;

8. Que con la dolorosa experiencia relatada por tantas personas, el país y el Poder Judicial tienen hoy una visión distinta del pasado reciente en la materia y que se ha recogido igualmente del ejercicio de la labor jurisdiccional después de reestablecida la institucionalidad democrática, y que, como lección invaluable, han hecho más valedera que nunca la idea de que, "sin Libertad, no hay Derecho, ni Justicia ni Paz".

Désele a esta declaración la publicidad necesaria para su difusión.

* * *

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE CHILE *

(14 de diciembre de 2004)

El Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, con el acuerdo unánime de sus integrantes, ha estimado necesario hacer las consideraciones que siguen en torno al Informe entregado recientemente al país por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech).

1. La Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile valora el trabajo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en cuanto constata que en un período de la historia de nuestro país un sector importante de chilenos sufrió graves violaciones de sus derechos fundamentales, que se tradujeron —como ya lo señaló el informe de la Comisión Rettig— no sólo en ejecuciones sin juicio previo o sin garantías procesales, desaparición forzada de personas y exilio, sino además —como ahora se concluye en la Comisión Valech—, en graves torturas y tratos inhumanos y degradantes a miles de compatriotas.

2. En lo que dice relación con las actuaciones de jueces, aludidas en dicho informe, cabe precisar que cierto número de ellos tuvieron una acción digna de reconocimiento en defensa de los derechos de las personas —reconocido por lo demás públicamente—, que puso en riesgo, dado el contexto histórico en que se vivía, no sólo su carrera funcionaria sino también su integridad, la de su familia y seres cercanos, sin perjuicio que en otros casos no pudieron, a pesar de su esfuerzo, obtener ninguna información útil para resolver la causa que conocían. No obstante, resulta necesario puntualizar que respecto de los demás magistrados que debieron intervenir —pudiendo hacerlo— en causas en que se denunciaron violaciones a los derechos humanos, su actuación, enmarcada en el ámbito de la información oficial de la época, resultó insuficiente, la que debió ser eficaz para impedir y sancionar los excesos que se cometieron en ese ámbito, considerando que otros jueces realizaron indagaciones sobre la base de antecedentes o información no oficial que fue entregada en los procesos que les tocó sustanciar, es evidente que no se concedió a los hechos denunciados la gravedad que tenían y no se les prestó la atención ético-jurídica que merecían. Así las cosas, la actuación de los jueces es preciso analizarla caso a caso.

---

* Texto completo. www.elmostrador.cl

3. Que la experiencia pasada, útil para los magistrados de hoy, permite tener conciencia acerca de la necesidad de, por una parte, fortalecer la independencia del juez, en todos los ámbitos, en el momento de ejercer la función jurisdiccional, y, por otro lado, utilizar con firmeza las facultades que la constitución y las leyes nos entregan, en especial las facultades conservadoras. Éstas, junto a los demás instrumentos jurídicos puestos a nuestra disposición, nos permitirán velar por el irrestricto respeto de las garantías fundamentales de las personas y ejercer un control oportuno y riguroso de la actuación estatal frente a los individuos.

4. La opinión anterior se emite por este directorio en cuanto cabeza de una asociación gremial formada por mujeres y hombres de derecho que no pueden sino analizar, estudiar y recoger las enseñanzas que dejan los hechos que se han dado a conocer, en especial porque quienes estamos facultados para administrar justicia, en nombre de todos y cada uno de los miembros de este país, tenemos la obligación de velar por el correcto desempeño de nuestras funciones, aún en períodos tan difíciles como los que se analizan.

5. Queremos, también, enfatizar que tenemos la mayor consideración y respeto por todas las apreciaciones que se han conocido, institucionales y personales, porque nos parece que ellas contribuyen al mayor entendimiento entre los chilenos, y porque, como también lo hace el informe que las motiva, servirán para cimentar una sociedad estructurada sobre los valores preeminentes de justicia, libertad, verdad, pluralismo y solidaridad, únicos que pueden garantizar en toda circunstancia la dignidad del hombre.

6. Sin perjuicio de todo lo expresado, es necesario dejar constancia ante la comunidad nacional que los miembros de nuestro gremio, jueces que integran el Poder Judicial de Chile, no tenían, en su gran mayoría, el carácter de tales cuando se produjeron los acontecimientos a que se refiere el informe, ni menos formaban parte de los tribunales superiores de la época, pero no por eso dejamos de sentirnos afectados por lo ocurrido, y por esta razón en la hora actual manifestamos al país que estamos absolutamente comprometidos con el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, de todos y cada uno de los integrantes de nuestra patria.

7. También hemos de dejar constancia que esta es una declaración genérica y valórica, que hacemos por un imperativo que asumimos como ineludible del que no nos podemos sustraer como hijos de esta patria, que a la sazón de los hechos cuestionados teníamos conciencia de lo que ocurría. Sin perjuicio de que, en cada caso, y por vía de los procedimientos jurisdiccionales correspondientes se establezca la verdad procesal y la responsabilidad individual pertinente, con el debido respeto a los derechos de acción y defensa jurídica. □

IMPACTO DE LAS IDEOLOGÍAS EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX*

El 7 de diciembre de 2004 se llevó a efecto el seminario "Ejército y Derechos Humanos: Compromiso para el siglo XXI", por iniciativa del Ejército de Chile. El seminario, que se realizó en la Escuela Militar, en Santiago, contó con la participación de destacados panelistas, así como con la asistencia de autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de organizaciones del mundo civil y militar. La clausura del seminario estuvo a cargo del Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, cuyo discurso se incluye en esta edición en el documento "Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y respuestas institucionales".

En las páginas que siguen se reproducen las ponencias del senador socialista Ricardo Núñez y del abogado y miembro del partido Renovación Nacional, Andrés Allamand, presentadas durante el foro "El impacto de las ideologías en el respeto de los derechos humanos en el siglo XX" que tuvo lugar en el marco del seminario.

* Véanse en esta misma edición un extracto del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como respuestas al mismo de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de orden, y de instituciones de la judicatura.

Para acceder a otros documentos y artículos publicados en *Estudios Públicos* sobre el tema de los derechos humanos e historia política de Chile, dirigirse a www.cepchile.cl

PONENCIA EN FORO
"EL IMPACTO DE LAS IDEOLOGÍAS EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX"*

Ricardo Núñez

Con satisfacción he aceptado la invitación con que me honrara el Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre, a participar en este importante seminario. Saludo a quienes han tenido la responsabilidad de organizarlo y espero que el esfuerzo realizado contribuya a fortalecer las relaciones cívico-militares en nuestro país.

Éste se realiza en un momento particularmente relevante para la historia patria. El documento recientemente entregado a la opinión pública por el señor Comandante en Jefe del Ejército, denominado "Ejército de Chile: Fin de una Visión", así como el Informe sobre la Prisión Política y Tortura, elaborado por una comisión encabezada por Monseñor Valech y que el Presidente Ricardo Lagos puso a conocimiento del país a través de una emotiva alocución televisiva**, nos pone ante la obligación de transparentar nuestra conciencia, hacer más diáfano el debate político y académico y retomar con fuerza nuestra historia para iluminar con decisión nuestro futuro.

Se me ha pedido que exponga acerca del impacto de las ideologías en relación al respeto de los derechos humanos durante el siglo pasado. Permítanme hacer previamente dos precisiones: el siglo que nos preocupa en realidad se extiende desde la Primera Guerra Mundial en 1914 y la caída del comunismo en 1989. Es lo que el historiador Eric Hobsbawm, denomina el "siglo corto" y es, a juicio de muchos, el más cruel y mortífero de toda la historia de la humanidad.

El concepto ideología, a su vez, posee entre los cientistas sociales diversas acepciones. Para mí, ellas son construcciones paradigmáticas que el hombre pretende materializar en una realidad concreta y que prefiguran un futuro ideal. Durante el siglo XX, los intereses y las pretensiones hege-

---

* Texto completo de la exposición del senador y miembro del Partido Socialista, Ricardo Núñez Muñoz, en el foro sobre el impacto que tuvieron las ideologías en el respeto de los derechos humanos en el siglo XX, en el marco del seminario "Ejército y Derechos Humanos, Compromiso para el Siglo XXI" organizado por el Ejército de Chile en la Escuela Militar, Santiago, el 7 de diciembre de 2004. (N. del E.)

** Tanto el documento "Ejército de Chile: Fin de una Visión", como extractos del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (conocido también como Informe Valech), y el texto de la alocución del Presidente Lagos (que corresponde al Prólogo del Informe), se reproducen en esta edición en el documento "Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y respuestas institucionales". (N. del E.)

mónicas de las grandes potencias se disputaron campos de influencias en todos los ámbitos. No existió espacio —ni en la esfera política, económica o cultural— donde ellas no intentaran establecer sus "marcas" —como lo hiciera en el pasado el imperio romano— para asegurar así su zona de influencia, su espacio vital, su área de acción donde pudieran campear sin límite alguno. En 1914, las luchas por conquistar dichos espacios condujeron al mundo a la Primera Guerra Mundial.

Los imperios existentes a la época se confrontaron en una guerra brutal que culminaría con la destrucción del Imperio Austro-Húngaro, la firma de Tratado de Versalles y la Revolución Rusa. Tanto Inglaterra, como Francia y en menor medida Italia, y la potencia emergente de Estados Unidos, se constituyeron en los ejes vertebradores de un mundo donde el poder de uno se equilibró, de manera crecientemente inestable, con el poder del otro.

Poder y contra-poder fue la fórmula que vivió el mundo durante esa primera parte del siglo XX. Mientras se reponía de las heridas de la guerra y hacía frente a las indemnizaciones que debió pagar a los países vencedores, Alemania se rearmaba lentamente para una nueva contienda bélica. América Latina, por su parte, al igual que Asia y África, jugaba un rol secundario. Era un testigo pasivo de un nuevo mundo, sin que en su configuración tuviera participación, salvo de manera marginal. Tras un breve interregno —en general positivo para la causa democrática— el mundo nuevamente se encaminó a la guerra. Esta vez, ella abarcó prácticamente todos los continentes.

Pocos pudieron marginarse de sus consecuencias. Nuestro país tampoco pudo escapar a la dramática lógica a la que se encaminó la humanidad. Se desató así la Segunda Guerra Mundial. Ella costó la vida a más de 52 millones de seres humanos y pérdidas materiales incalculables. Europa quedó destruida política y materialmente. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini fueron aplastadas por las fuerzas aliadas. Japón se rindió bajo el impacto atroz y cruel de la bomba atómica. El mundo vio erigirse una cortina de hierro que habría de dividirlo hasta finales del siglo. Estados Unidos y la Unión Soviética se transformaron en las dos grandes superpotencias vencedoras.

Ellas dominarían el escenario mundial sin contrapeso. Se repartirían extensas zonas de dominio e influencia. Del equilibrio inestable de la preguerra se pasó al equilibrio atómico. De un mundo multipolar se pasó a uno bipolar. Sin declararse jamás formalmente, se desencadenó otra guerra: la "Guerra Fría". La humanidad se dividió entre buenos y malos; entre capitalistas y comunistas; entre la civilización judeo-cristiana y la civiliza-

ción atea y materialista; entre los aliados de Estados Unidos y los de la Unión Soviética. De esta perversa lógica nadie pudo excluirse. Ni siquiera nuestro país. La Guerra Fría se instaló en casa con el último disparo de la contienda mundial.

Nos marcó a fuego y en medio de ella la historia patria se estremeció de manera dramática con los acontecimientos desencadenados a partir del 11 de septiembre de 1973. En medio de este proceso histórico, ¿qué papel jugaron las ideologías? ¿Cuáles fueron las motivaciones últimas que animaron a los actores de este período aciago? Responder estas interrogantes es difícil. Debemos tener presente que todas las acciones emprendidas por los países e imperios existentes en esta época, se recubrieron de justificaciones ideológicas o exhibieron sus pretensiones hegemónicas a partir de consideraciones ideales.

Permítanme hacer una brevísima descripción de aquellas que más significación alcanzaron durante este período. Después de la Primera Guerra Mundial, los principios inspiradores de la Revolución francesa y la irrupción que bajo su influjo hicieran los movimientos liberales, se constituyeron en factor esencial para la universalización de los principios básicos de la democracia. El racionalismo positivista, propio del liberalismo, tuvo la virtud de dotar a la institucionalidad política de un fuerte contenido laico en el cual prevaleciera un armónico equilibrio entre los poderes del Estado.

Derechos fundamentales como el de reunión, de asociación, de elegir y ser elegido a través del voto popular, se expandieron por todo el mundo occidental. Se consolidaron los partidos políticos en tanto intermediarios de la sociedad y el Estado. En el ámbito internacional se constituyó la Sociedad de las Naciones, como una organización destinada a resolver y alejar la guerra de la vida de los pueblos.

Este alentador proceso se vio afectado por la violenta irrupción de totalitarismos como los encabezados por Hitler, Mussolini y Stalin. A pesar del encandilamiento que éstos ejercieran en algunos sectores de nuestra vida política y de la breve dictadura del General Ibáñez, Chile se mantuvo dentro de los límites propios de la democracia. El movimiento socialista, por su parte, vivió un vigoroso proceso de expansión por los más diversos rincones del mundo.

El pensamiento del filósofo alemán Carlos Marx impregnó fuertemente las luchas sociales y políticas del movimiento obrero y de otros sectores populares, afectados por la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. La miseria, la marginalidad y la explotación del trabajo asalariado coadyuvaron al despliegue de las ideas socialistas. Éstas, sin embargo, desde sus inicios, vivieron un proceso de división que culminó en el

establecimiento de dos grandes corrientes. Una inspirada en la revolución rusa y en el fundador del Estado soviético, Vladimir Ilich Lenin, y otra que se inspiró en pensadores europeos como Friedrich Ebert, Eduard Bernstein y Kaustky. Mientras Lenin propiciaba la instauración de una ideología estatal inspirada en una específica interpretación de las ideas de Marx; los otros, bajo similar inspiración, entendieron que los valores y principios de la democracia no eran incompatibles con la construcción del socialismo.

Para el primero, el socialismo se entendía como un dogma de Estado y para los otros como un proceso de organización de la sociedad y la economía donde la igualdad no debía sacrificar la libertad. Para Lenin los valores de la democracia eran un medio y para los otros un fin en sí mismo. En la experiencia chilena, el movimiento socialista tuvo desde principios de siglo dos grandes corrientes. Una expresada por el Partido Comunista y otra por el Partido Socialista. Mientras el Partido Comunista tendió a seguir estrictamente el denominado modelo soviético; el Partido Socialista buscó constituirse en un gran movimiento nacional y popular, tal como lo expresaran sus fundadores, entre otros, Óscar Schnake, el Comodoro del Aire Marmaduque Grove, Eugenio Matte Hurtado y el que fuera rector de la Universidad de Chile, don Eugenio González Rojas.

Este último, en sus ácidas polémicas contra el estalinismo, sostuvo, en 1947, que el socialismo era esencialmente humanista y que "ningún fin puede obtenerse a través de medios que lo niegan: la educación de los trabajadores para el ejercicio de la libertad tiene que hacerse en un ambiente de libertad". Durante el transcurso del siglo XX, surgió otra corriente ideológica que marcó fuertemente su devenir. El nacionalsocialismo y el fascismo emergieron como respuesta al desarrollo de las ideas liberales y socialistas que vivía Europa.

Sus fuentes de inspiración fueron la exacerbación de los elementos culturales de carácter nacionalista, la convicción en la superioridad de una raza por sobre otras y en el entendido que la conducción política del Estado debía estar en manos del más fuerte. Nutridas de la pobreza de ciertas capas sociales y de una visión autoritaria que impregnaba a su elite política, ambas corrientes se expandieron por diversos países europeos y de América Latina, en particular, luego de la Gran Depresión de la economía mundial del año 1929.

En Chile, el Movimiento Nacional Socialista liderado por González von Marées, en la década del 30 y 40, y el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, fundado a principios de los 70, fueron su máxima expresión. Las ideas conservadoras, mientras tanto, mantuvieron durante gran parte del siglo una fuerte presencia. La Iglesia católica y especialmente la institu-

ción papal fueron su principal baluarte. Bajo el papado de León XIII y la Encíclica Rerum Novarum, se inició un proceso de cambio de las ideas del tradicionalismo conservador.

La Iglesia aceptó que la pobreza y la marginalidad, en la que habían devenido enormes masas de seres humanos, tenían sus causas en la manera cómo se organizaba la economía, la sociedad y el Estado. Sus enseñanzas tuvieron un fuerte impacto. En Chile, un grupo de jóvenes, conmovidos por la miseria y la desigualdad, en la que vivían vastos sectores de chilenos, se separan del Partido Conservador y fundan bajo la inspiración de dicha Encíclica, la Falange Nacional, la que daría paso, en la década del 50, a la Democracia Cristiana. Ésta asumiría las enseñanzas del Papa Juan XXIII, de la Encíclica Pacem in Terris, del Concilio Vaticano II, y la influencia del pensador francés Jacques Maritain.

En esta apretada síntesis, nos queda por revisar una última ideología. En el contexto de la guerra fría y frente al avance de las ideas fundadas en la Revolución Soviética, la instauración de la República Popular China y la consolidación del campo socialista en Europa del Este, las potencias occidentales y los Estados Unidos no podían quedar impávidos. Las guerras de Corea y Vietnam acrecentaron el denominado "peligro comunista".

La Doctrina de la Seguridad Nacional, incubada en los centros académicos del Pentágono y la CIA, fue la respuesta a ese inmenso desafío. Según ésta, todos los países que no formaban parte de la zona de influencia soviética corrían el peligro de ser objeto de subversión interna, orquestada desde Moscú. Los países subdesarrollados, en especial, se encontrarían inermes e incapaces de enfrentarla. Por tanto, no quedaba otra alternativa. Era menester hacerle frente, aunque para ello fuera necesario el uso de la violencia y eventualmente promover la intervención de las Fuerzas Armadas de esos países.

En el fondo, esta concepción sostenía que ante un peligro de tal envergadura, la democracia, la libertad y los derechos humanos podían ser conculcados. Los golpes de Estado que terminaron con las democracias en países como Argentina, Uruguay y Chile, y otros más lejanos como el Congo Belga, Filipinas e Indonesia, se explican bajo esta doctrina. Entre tanto, ¿qué pasaba en el campo de los derechos humanos? Como está dicho, el mundo del siglo XX, no sólo sufrió los horrores de dos guerras mundiales, sino que debió enfrentar la emergencia de doctrinas totalitarias y la confrontación ideológica a que nos arrastró la Guerra Fría. En este cuadro es interesante constatar que, a pesar de aquello, la sensatez y la humanidad de los pueblos no fueron aplastadas.

Los derechos fundamentales del hombre dieron un paso sustantivo en la perspectiva de hacer de ellos la base sobre la cual ha de erigirse un mundo más humanizado que lo aleje definitivamente de la barbarie y la destrucción. La naciente Organización de las Naciones Unidas alcanzó un éxito sin precedentes. Junto al proceso de descolonización, bajo su amparo se proclamó, el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Su Preámbulo es una pieza magistral. Según éste, todos los seres humanos nacen libres e iguales, independientemente de su condición, sexo, raza, religión u opinión política. Los derechos humanos se establecieron así, como un atributo esencial de la dignidad humana. Independientemente de los obstáculos puestos por los Estados Unidos y por la propia Unión Soviética, la mayor parte de los países se conjugaron en torno a una sola voluntad: hacer posible que estos derechos se internalizaran en la conciencia civilizada de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por ello, ese mismo año la Asamblea General de la ONU pidió a todos sus miembros distribuirla y difundirla por doquier.

Fruto de esta trascendental declaración, se reconocieron como valor universal, derechos fundamentales tales como la igualdad ante la ley; la libertad de asociación, reunión y expresión; el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En fin, y como sostén de todos ellos, el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. La humanidad había avanzado así, hacia un estadio superior en su desarrollo civilizatorio.

Señoras y señores:

Al concluir, no puedo dejar de hacer una reflexión que nos incumbe directamente como chilenos: estos derechos, tan caros para la humanidad, no fueron debidamente aquilatados por todos nosotros, actores de hechos y acontecimientos acaecidos a fines del 60 y principios del 70. Permítaseme hacer una afirmación dolorosa. Ninguna fuerza política había internalizado profundamente los valores de los Derechos Humanos. Ellos no estaban en el currículum de nuestras principales instituciones educativas. No formaban parte de nuestro acervo cultural.

Esto permitió que la sobre-ideologización, la polarización política, la pérdida de la convivencia cívica, las visiones totalizantes de la vida, se convirtieran en el sustrato que posibilitó que, en 1973, se clausurara nuestra democracia a través del golpe de Estado que encabezaran las Fuerzas Armadas y de Orden y que terminó con la vida del Presidente Salvador Allende y La Moneda bombardeada.

Muchos nos hemos preguntado: ¿estaba la sociedad chilena en condiciones de evitar el golpe de Estado? Está claro que la vida política se había degradado a un extremo inimaginable. Que quienes tenían posibilidad de impedirlo no lo hicieron o no tuvieron la fuerza para hacerlo. Soy de los que creo que no hubo voluntad suficiente. Que la vida en sociedad se había hecho malsana. Que la confrontación ideológica expresada en consignas como "avanzar sin transar" y "Yakarta viene", reflejaba una profunda odiosidad de la cual nos ha sido difícil despojarnos. Desde nuestra perspectiva, qué duda cabe, hicimos una lectura equivocada de la situación.

No entendimos el rol de la ideología de un sector importante de la sociedad, que no estaba en condiciones de aceptar la radicalización de la "vía chilena al socialismo"; que no quería seguirnos en nuestra propuesta de cambio; que deseaba seguridad, por sobre el salto histórico que pretendíamos. La prudencia y la apertura a otras fuerzas políticas a la que llamaba Salvador Allende, no fue escuchada por nosotros. El golpe de Estado se hizo, desgraciadamente, inevitable. Nuestra frágil democracia, muy autoritaria y disciplinada, amante más del orden que de la libertad, se derrumbó.

Sus consecuencias aun las vivimos: la prisión política, la tortura, la desaparición forzada de personas y la represión, fueron una práctica institucional del Estado que ha quedado demostrada fehacientemente por el Informe de la Comisión Rettig, las conclusiones de la Mesa de Diálogo y el reciente informe de la Comisión Valech. Determinar la responsabilidad intelectual y material sobre estos lamentables hechos, debe seguir siendo tarea de los Tribunales de Justicia.

El Presidente de la República ha dicho: "el quiebre de la democracia y de las bases de nuestra convivencia se produjo en medio de tormentas políticas e ideológicas que no fuimos capaces de controlar. La ruptura de la institucionalidad y la instauración de la arbitrariedad y el terror fueron la consecuencia de esos errores colectivos".

Por su parte, el Comandante en Jefe del Ejército, don Juan Emilio Cheyre, ha señalado: "¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es única e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética". Tal como lo expresé hace unos días en una carta pública dirigida al general Cheyre y que cito textual: "yo fui uno de los muchos chilenos detenidos y torturados después del golpe militar. Y aunque la violación a los Derechos Humanos tiene una enorme repercusión en la vida personal de quien la sufre y deja un dolor que no disminuye, debo decirle que su declaración acerca de la responsabi-

lidad del Ejército en estos hechos es un gran paso. Tremendamente positivo, desde todo punto de vista". El reconocimiento sincero de estos acontecimientos, la verdad sobre los mismos y la acción reparadora de la justicia, permitirán reconocernos en una misma comunidad nacional, restañar las heridas y reconciliar los espíritus. Esto implica entre otras cosas, entender que los Derechos Humanos son el patrimonio básico que debe inspirar a todas las corrientes políticas y el diálogo de civilizaciones en el siglo XXI y en cuyo marco todos, sin ambages, deben condenar el terrorismo venga de donde venga, cualquiera sea su fundamento ideológico o religioso.

Ello supone instituciones armadas que recuperen definitivamente su ascendiente sobre el conjunto de la sociedad chilena. La hora actual nos obliga a pensar en conjunto el futuro de Chile. A fortalecer su democracia. A ampliar las fronteras de la libertad. A fomentar el respeto mutuo y la tolerancia. A terminar con la exclusión social, la pobreza y las discriminaciones.

A que asumamos que Chile es un país plural y que en su diversidad debemos construir un destino común. El Ejército de Chile, nacido en los albores de nuestra Independencia, es una institución permanente de la patria y representa los valores más caros de nuestra vida republicana. En él queremos reconocernos, sin distinción, todos los chilenos independientemente de su signo político, ideológico o religioso.

Estamos en esa senda. Se requiere no desviarnos del camino.

Muchas gracias.

* * *

PONENCIA EN PANEL: "EL IMPACTO DE LAS IDEOLOGÍAS EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX" *

Andrés Allamand

Quiero comenzar por agradecer la invitación a participar en este importante seminario, que sin duda será otro paso importante en la tarea que el Ejército se ha impuesto al incorporar en su doctrina el firme respeto a los derechos individuales.

El éxito de tal incorporación, que es un cambio cultural mayor, depende críticamente, desde mi punto de vista, de dos factores: primero, de la forma en que se aprecie el impacto de las ideologías en el siglo que dejamos atrás, ya que éstas influyeron en la forma en que el Ejército apreció el tema de los derechos humanos, y segundo, de la manera en que se resuelvan las situaciones que afectan hoy al Ejército, ya que el actual escenario político y judicial influirá en el éxito y la fluidez del proceso.

¿Qué agregar a lo que ya se ha señalado acerca del impacto de las ideologías? Solamente insistir en un punto: que el conflicto fundamental del siglo XX fue el antagonismo entre la democracia y las diversas formas de autoritarismos y/o totalitarismos, hoy en retirada. Las ideologías que se apartaron, despreciaron o aspiraron a sustituir la democracia tienen en común dos rasgos: el desprecio por el derecho y la apelación a la fuerza. Y quizás un tercero: la utopía de creer que la fuerza separada del derecho es controlable. Sin embargo, la historia se encarga de demostrar una y otra vez, que la fuerza termina autonomizándose, desbordando los frágiles marcos en que —ante la ausencia del derecho— se la pretende encasillar. La fuerza apartada de la ley es un animal indomesticable que obnubila y deshumaniza a quienes la poseen. ¿Por qué deshumaniza? Porque lo único que garantiza una vida propiamente humana, no azotada por la violencia, es la existencia de una comunidad política, en que sólo el poder legítimo se vale de la fuerza.

Cuando la comunidad política se fractura, es la fuerza la que pasa a dominar al poder político. De allí la necesidad de cuidar todos los elementos que conforman una comunidad política, teniendo siempre a la vista su

---

* Texto completo de la exposición del abogado y miembro del partido Renovación Nacional, Andrés Allamand, en el foro sobre el impacto que tuvieron las ideologías en el respeto de los derechos humanos en el siglo XX, que tuvo lugar en el marco del seminario "Ejército y Derechos Humanos, Compromiso para el Siglo XXI", organizado por el Ejército de Chile en la Escuela Militar, Santiago, el 7 de diciembre de 2004. (N. del E.)

fragilidad endémica. Detrás de todo conflicto social violento, detrás de todo abuso a la integridad humana siempre se divisa una comunidad política —local, nacional o incluso supranacional— que no fue adecuadamente cuidada y protegida.

Considerando mis muchas coincidencias con quienes me han antecedido, y a fin de no reiterar innecesariamente conceptos, pretendo ocuparme de aspectos que son más coyunturales, pero que, en mi opinión, no pueden dejar de abordarse, desde un punto de vista académico.

El Ejército después del Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura

En este punto debo comenzar realzando la importancia del Informe sobre Prisión Política y Tortura. Era un paso doloroso, pero necesario. Habla de enfrentar la verdad. En segundo lugar, hay que dejar constancia que el país entero ha condenado frontalmente la tortura. Más aún, ha quedado en claro que el contexto histórico no justifica la violación de los derechos humanos. En tercer término, hay que destacar también la sabia orientación que el Presidente Lagos le ha dado al Informe.

Él ha dicho que el propósito de éste es "sanar las heridas, no reabrirlas". Pero ¿qué falta para sanar las heridas y no reabrirlas? ¿Cuántas personas, en esta sala y fuera de ella, están fundadamente preocupadas de que el país esté caminando a una reapertura de las heridas que debemos sanar? En mi opinión, el compromiso con el respeto a los derechos individuales y el rechazo a toda ideología que se aparte de tal matriz es lo que al Ejército le corresponde hacer. Pero hay otros elementos que deben provenir de la sociedad —de sus autoridades, organismos y ciudadanos— para ayudar a que el proceso culmine como el país necesita.

Estos elementos son a lo menos cuatro:

1. *Que la verdad sea completa*.

El Presidente Lagos, al dar a conocer el Informe sobre Prisión Política y Tortura, se preguntó: "¿Cómo explicar tanto horror? ¿Qué pudo producir conductas como las que allí aparecen? No tengo respuesta frente a ello". Esas fueron sus palabras. ¿Puede quedar en el aire esa pregunta? No, no puede.

Primero, porque si el país resuelve ignorar los hechos que generaron el horror siempre quedará expuesto a repetirlos. Y segundo, porque todos sabemos cuáles causas generaron el horror y no hay ninguna razón para no

expresarlas en forma clara. El horror no apareció de la noche a la mañana. Se fue gestando a la par del socavamiento de la democracia chilena, de la validación de la violencia política, del irresponsable entusiasmo revolucionario por la vía armada, de la alimentación sistemática del odio de clases, del pesado influjo de la "guerra fría", en fin, de la "borrachera ideológica" que asesinó la tolerancia entre nosotros.

Y cuando se fracturó la comunidad política —proceso en el cual ninguna responsabilidad tuvieron las Fuerzas Armadas— ellas se vieron obligadas a actuar, pero lo hicieron con una violencia prolongada e injustificable. Este proceso constituyó la tragedia de Chile. Hace unos días el Obispo Valech decía que "debemos preguntarnos qué responsabilidad tenemos todos en lo que pasó en Chile". Pues bien, debemos hacerlo sin miedo. Habrá responsabilidades directas e indirectas, remotas y cercanas, principales y accesorias, por acción u omisión, penales, legales, políticas y morales.

Hay que diferenciarlas para evitar aquello de que como todos fuimos responsables nadie fue responsable y, también, para romper con el círculo vicioso de las justificaciones recíprocas. ¿En qué consiste el círculo vicioso? Desde una vereda, algunos dirigentes que proclamaban su adhesión a la vía violenta y amenazaban con la dictadura del proletariado, se escudan ahora en que todo eso fue una exageración retórica y que no tuvieron ninguna responsabilidad en los volcánicos procesos políticos que ellos mismos desataron.

¿Y qué ocurre en la vereda del frente? Digámoslo también claramente. Algunos partidarios del gobierno militar y algunos antiguos mandos de las FF.AA. argumentan que se vieron envueltos en una situación para la cual no estaban preparados, que las violaciones a los derechos humanos eran inevitables y que, por ende, tampoco tienen responsabilidades en lo sucedido. Luego de 30 años el país sigue entrampado en un juego infecundo y simétrico de exculpaciones que se expresa así: "Como yo no tuve culpa en lo que ocurrió antes, estoy eximido de lo que pasó después. Como fui víctima de lo que pasó después, estoy eximido de lo que pasó antes". Ambas premisas son falsas. El problema es que desde esa bruma emerge un interesado aprovechamiento político.

Yo nunca participé en el gobierno militar; es más, viví algunos momentos amargos cuando hace años planteaba que debían reconocerse y repararse las violaciones a los derechos humanos y que había que depurar la Constitución de 1980 de injertos autoritarios que inevitablemente mantendrían en el campo de la política contingente a las FF.AA.

Por lo mismo creo tener alguna autoridad para rechazar la estigmatización política y la descalificación moral de todos aquellos que, con distintas intensidades y en diferentes posiciones, apoyaron y trabajaron en el gobierno militar, partiendo por quienes integraban las Fuerzas Armadas. Además, la vida y la historia se tejen a partir de paradojas y claroscuros. Y, en tal sentido, nadie debiera olvidar que el Ejército de 1978, el mismo que a algunos presentan como una horda inhumana y desquiciada, no sólo es el de Maipú, Yungay y La Concepción, sino también aquel que con inferioridad de medios pero gran coraje, impidió ese mismo año 1978 una agresión externa inminente.

Este tema no es menor: la verdad mutilada no ayudará a reconstituir la comunidad política, no le abrirá camino a la reconciliación, no facilitará el pleno reencuentro del Ejército con la sociedad y tampoco facilitará la adopción de sus nuevos códigos de conducta.

2. *Que se adopte una nueva aproximación al tema de las responsabilidades políticas.*

Desde la cátedra universitaria se enseña que hay dos maneras de entender la responsabilidad. Una es la responsabilidad que se exige. La otra es la responsabilidad que se asume. La responsabilidad que se exige es un concepto jurídico, supone que alguien ha sido dañado y tiene derecho a reclamar de su agresor una reparación.

Pero, tal noción, trasladada al campo político, es del todo inoperante para avanzar en la reconciliación. La responsabilidad como exigencia es la médula del círculo vicioso en que nos encontramos. Los adversarios del gobierno militar demandan que todos quienes participaron en éste se reconozcan responsables por lo ocurrido en materia de derechos humanos.

A su vez, los partidarios del gobierno militar responden que quienes deben asumir su responsabilidad son aquellos que provocaron las condiciones en las cuales se produjeron las violaciones a los derechos humanos. Estos últimos retrucan diciendo que la demanda que se les formula tiene por objeto únicamente justificar lo ocurrido. La respuesta no tarda un segundo: quienes sembraron los vientos no pueden quejarse de las tempestades. ¡Esa argumentación no lleva a ninguna parte! Lo que corresponde es que cada sector piense en la responsabilidad, no como una exigencia que le formula un contradictor, sino como un deber ser, exista o no alguien con título legítimo para reclamarla.

La responsabilidad que se asume —en contraposición a la responsabilidad que se exige— es un acto voluntario, unilateral, veraz y autocrítico. La responsabilidad que se asume es propiamente política y se distingue del

perdón en cuanto es éste un acto personal y de carácter eminentemente moral y, por lo tanto, no exigible. Nadie puede ser obligado a perdonar y el perdón que se pide por obligación carece de todo significado.

Asumir la responsabilidad engrandecería a la clase dirigente, transparentando lo que es evidente para la inmensa mayoría de Chile. La ciudadanía no ignora que la Unidad Popular llevó al país al borde del abismo, ni ignora que las autoridades del gobierno militar no evitaron las violaciones a los derechos humanos; no ignora que los Tribunales se apoyaron en formalismos para no brindar la protección que les fue requerida, ni que la prensa fue tímida para denunciar los abusos.

Lo que ayudaría a la reconciliación es que los protagonistas de los últimos 30 años (40 dirán algunos) asuman sus responsabilidades no como un juego de contraprestaciones y coartadas recíprocas, sino como un acto de franqueza y de reconstitución de los vínculos de la comunidad política que es Chile. Que cada cual deje de sermonear al adversario respecto de lo que éste debe o no debe hacer y simplemente cumpla con su deber.

3. *Que se entienda bien el significado de "El fin de una visión" y las responsabilidades institucionales.* El documento "El fin de una visión" es una cabal expresión de la responsabilidad que se asume*. Una gran mayoría del país lo ha aplaudido, pero muchos partidarios del gobierno militar lo han criticado, aduciendo que fue un error o una demostración de debilidad, y que la declaración debió ser "negociada". Pues bien, todas esos razonamientos se inspiran en la lógica de la responsabilidad que se exige y no captan el valor intrínseco de la responsabilidad que se asume.

Además, "El fin de una visión" era indispensable simplemente porque la tesis de que las violaciones a los derechos humanos fueron el resultado de "excesos individuales" era inaceptable y absurda. Era intelectualmente inaceptable porque es inverosímil que se trate de excesos individuales cuando las prácticas duran años y en ella se comprometen numerosas personas y recursos institucionales. Era conceptualmente absurda porque choca de frente con el jamás cuestionado carácter profesional, jerárquico y disciplinado de las FF.AA. Hace mucho tiempo que debió abandonarse esa tesis.

Es un grave error para cualquier institución argumentar eludiendo la verdad. Y el costo en prestigio que pagan las instituciones por hacerlo es enorme. Por otro lado, la tesis de los "excesos individuales" ignoraba la

* El texto de "El Ejército: Fin de una Visión" aparece reproducido en esta edición en el documento "Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, y Respuestas Institucionales". (N. del E.)

evidente responsabilidad de los mandos involucrados. Bajo tal tesis nadie era responsable de lo ocurrido, pero sería completamente erróneo saltar al extremo opuesto y sostener que todos los miembros de las Fuerzas Armadas tuvieron responsabilidad en lo ocurrido.

Yo estoy seguro que la inmensa mayoría nada tuvo que ver con esas prácticas y durante todo el régimen militar asumió con abnegación sus tareas profesionales y/o desempeñó cargos desde donde contribuyó a la modernización del país. Ellos no tienen ninguna responsabilidad por lo ocurrido y así el país debe reconocerlo.

Por último, el reconocimiento ahora de su responsabilidad institucional ¿supone que antes las FF.AA. hayan incorporado a su doctrina tales prácticas aberrantes? Categóricamente no. Hacer suya una doctrina exige validarla hacia adentro y hacia fuera. Y ni una ni otra cosa jamás ocurrió en nuestro país.

Lo que pasó fue que algunos altos mandos se apartaron de la doctrina y arrastraron a subordinados que no quisieron, no supieron o no pudieron oponerse.

4. *Que se avance en la verdad y se salga del pantano jurídico.* No podría terminar estas reflexiones sin una breve alusión a los aspectos judiciales que hoy afectan a las FF.AA. Asumo desde ya, que sólo abordar el tema me acarreará la acusación de querer favorecer la impunidad. Basta ver el calibre de las descalificaciones que recibe a diario la Sra. Presidenta del Consejo del Estado por defender la aplicabilidad de la llamada "amnistía impropia". Me interesa destacar que la clase dirigente ha ido asumiendo con fatalismo que nada puede o debe hacer en esta materia y que la solución (de haber alguna) tendrá que emanar algún día, desde los estrados judiciales.

De este modo la dirigencia vuelve a fracasar: antes no fue capaz de impedir la tragedia y ahora tampoco es capaz de arbitrar los medios para salir de ella, para "sanar las heridas". Así, se aferra a vías judiciales para resolver problemas que obviamente tienen marcadas aristas políticas. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Simplemente lo opuesto. Nada ejemplifica mejor lo expuesto que la bizantina tesis del secuestro permanente. El propio Presidente de la Corte Suprema ha señalado que la fórmula adoptada es contraria el sentido común. No sólo eso. Vulnera el debido proceso decretar que no es al Estado al que le corresponde probar que un delito permaneció en el tiempo, sino que a los inculpados corresponde probar que ello no ocurrió. Las cosas claras, la Corte Suprema puede en definitiva resolver aplicar o no la amnistía, pero lo que no puede hacer es valerse de un

pretexto para no hacer ni una ni otra cosa. Permítanme una predicción: con la tesis del "secuestro permanente" al Poder Judicial le pasará lo mismo que a las FF.AA. con la tesis de los "excesos individuales". Por ser sólo una ficción sin sustancia, deberá abandonarla y entonces pagará el costo de haberla adoptado.

Además, la actual situación es, en la perspectiva de obtener la información que pueda faltar sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, lo más contraindicado. No hay incentivo para ello y todas las fórmulas legislativas que los Presidentes Aylwin, Frei e incluso Lagos han intentado para avanzar por un camino de verdad, reparación y justicia, no han prosperado simplemente por el bloqueo parlamentario. ¿Y cuál es el resultado de todo ello? Mantener a las actuales FF.AA. como rehenes del pasado, lo que no es razonable cuando éstas han demostrado que no aspiran a olvidarlo sino que, al revés, han aprendido de él.

Palabras finales

El país está entrando a una nueva etapa. El compromiso del Ejército con los derechos humanos es uno de los elementos más importantes para terminar de reconstituir la comunidad política fracturada hace más de tres décadas. Es un proceso de envergadura mayor. A ese proceso también ayudará el conjunto de reformas constitucionales recientemente acordadas, que terminan con instancias y mecanismos que involucraban a las FF.AA. en la contingencia política.

El Ejército y la sociedad están dejando atrás una etapa de dolorosa excepcionalidad, en que hubo duros enfrentamientos entre aquél y parte de ésta. Es obvio, pero Chile tiene sólo un Ejército y una sociedad. El único destino de ambos es la fusión. A mí nunca me ha convencido aquello del "mundo civil" y el "mundo militar" como esferas separadas. Un país con un Ejército aislado es, por definición, vulnerable e impredecible.

El asunto es que la civilidad y la clase dirigente pueden ayudar o entorpecer tal proceso. El General Prats, cuya memoria ha hecho bien el Ejército en reivindicar, alguna vez aludió al "sordo rencor" que se incubó durante años al interior de las FF.AA., gatillado por la incomprensión de los civiles acerca de sus angustias y legítimas inquietudes. Chile no debiera reiterar ese error.

Muchas gracias. □